



Estudios
socioambientales

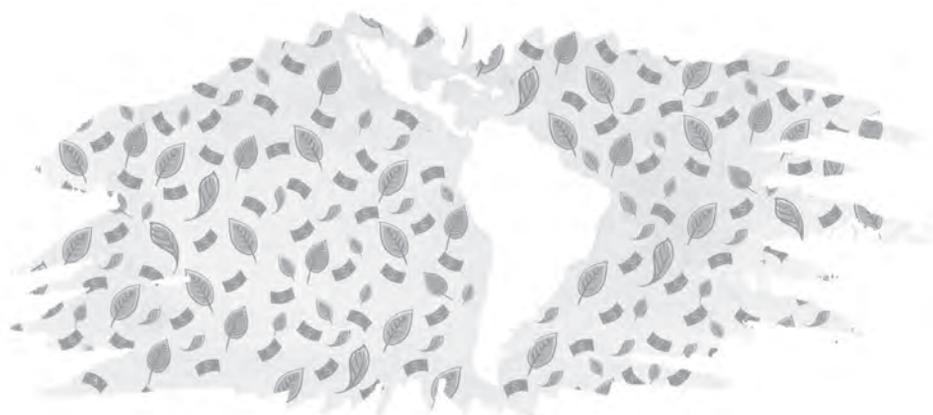


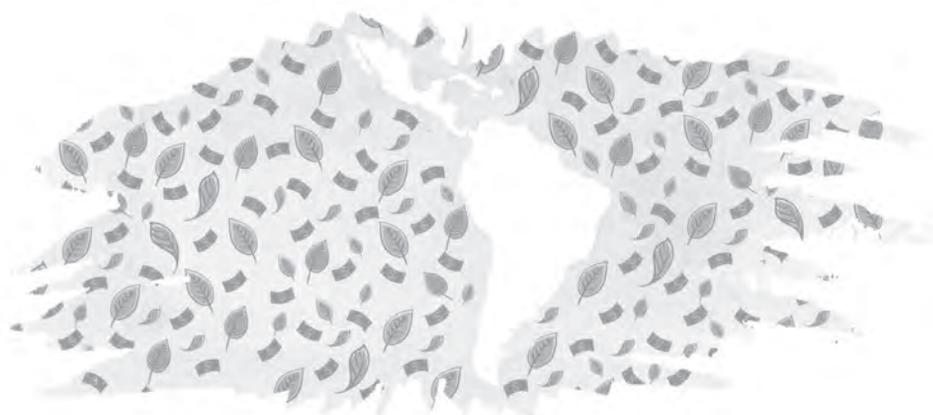
NATURALEZA *y* NEOLIBERALISMO

en América Latina



Leticia Durand
Anja Nygren
Anne Cristina de la Vega-Leinert
Coordinadoras





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. Enrique Graue Wiechers
Rector

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General

Dra. Guadalupe Valencia García
Coordinadora de Humanidades

Dr. Fernando Lozano Ascencio
Director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM)

COMITÉ EDITORIAL

CRIM

Dr. Fernando Lozano Ascencio
PRESIDENTE

Dra. Sonia Frías Martínez
Secretaria Académica del CRIM

Dr. Guillermo Aníbal Peimbert Frías
Secretario Técnico del CRIM
SECRETARIO

Dr. Fernando Garcés Poó
Jefe del Departamento de Publicaciones del CRIM

Dra. Luciana Gandini
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

Dra. Verónica Vázquez García
*Profesora-investigadora del Programa de Postgrado en Desarrollo Rural,
Colegio de Postgraduados*

Dra. Elsa María Cross y Anzaldúa
Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

Lic. José Luis Güemes Díaz
Jefe de la Oficina Jurídica del campus Morelos de la UNAM

NATURALEZA *y* NEOLIBERALISMO
en **América Latina**

NATURALEZA *y* NEOLIBERALISMO *en* América Latina

Leticia Durand
Anja Nygren
Anne Cristina de la Vega-Leinert
Coordinadoras



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

Cuernavaca, 2020

Catalogación en la publicación UNAM. Dirección General de Bibliotecas

Nombres: Durand, Leticia, editor. | Nygren, Anja, editor. | Vega-Leinert, Cristina de la, editor.

Título: Naturaleza y neoliberalismo en América Latina / Leticia Durand, Anja Nygren, Anne Cristina de la Vega-Leinert, coordinadoras.

Descripción: Primera edición. | Cuernavaca : Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, 2020.

Identificadores: LIBRUNAM 2077542 (impreso) | LIBRUNAM 2057967 (libro electrónico) | ISBN 9786073029605 (impreso) | ISBN 9786073022231 (libro electrónico).

Temas: Naturaleza - Aspectos sociales - América Latina. | Neoliberalismo - Aspectos ambientales - América Latina.

Clasificación: LCC GF514.N375 2020 | DDC 304.2098—dc23

Este libro fue sometido a un proceso de dictaminación por pares académicos externos al CRIM, de acuerdo con las normas establecidas en el Reglamento Editorial del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México

Diseño de forros: Jael Araceli González Pérez

Primera edición: 30 de marzo de 2020

D.R. © 2020 Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, 04510, Ciudad de México

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias
Av. Universidad s/n, Circuito 2, colonia Chamilpa
62210, Cuernavaca, Morelos
www.crim.unam.mx

ISBN: 978-607-30-2960-5

Esta edición y sus características son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales

Impreso y hecho en México

Contenido

Introducción	9
Naturaleza y neoliberalismo en América Latina	
<i>Leticia Durand</i>	
<i>Anja Nygren</i>	
<i>Anne Cristina de la Vega-Leinert</i>	
1 Neoliberalización de la naturaleza a través del programa de Pago por Servicios Ambientales en México	
Diversidad de efectos y multiplicidad de visiones	33
<i>Fernanda Figueroa</i>	
<i>Angela Caro-Borrero</i>	
2 ¿Es REDD+ un instrumento de neoliberalización? Experiencias desde Chiapas y Yucatán en el sur de México	81
<i>Tim Trench</i>	
<i>Antoine Libert Amico</i>	
3 ¿Pueden los pagos por servicios ambientales frenar la deforestación en la frontera agrícola de Nicaragua?	
Un análisis desde los sistemas agrarios	127
<i>Gert Van Hecken</i>	
<i>Pierre Merlet</i>	
<i>Mara Lindtner</i>	
<i>Johan Bastiaensen</i>	
4 Clúster minero global: instauración de horizontes de coerción y resistencias en sociedades locales mexicanas	165
<i>Claudio Garibay Orozco</i>	

5	El <i>boom</i> del bioetanol y (re)concentración de la tierra en la costa norte peruana: luchas agrarias en un contexto neoliberal	215
	<i>Laura Tejada</i> <i>Stephan Rist</i>	
6	Sistemas productivos campesinos y la integración al mercado en un mundo neoliberal: estudios de caso del delta del Mekong (Vietnam) y Veracruz (México)	249
	<i>Anne Cristina de la Vega-Leinert</i> <i>Beatriz Rodríguez-Labajos</i> <i>Peter Clausing</i>	
7	Neoliberalismo y el sesgo antiagropecuario en El Salvador El caso de la cadena de marañón orgánico	297
	<i>Karla Melissa Guzmán</i>	
8	La <i>finis terrae</i> en la economía mundo: un análisis de los imaginarios territoriales y sus tensiones en la Patagonia chilena	325
	<i>Juan Carlos Rodríguez Torrent</i>	
9	Residentes de las favelas: entre represión, violencia y política	385
	<i>Saila-Maria Saaristo</i>	
10	Gobernanza neoliberal de riesgos y vulnerabilidad en <i>acuajes</i> urbanos en México	423
	<i>Anja Nygren</i>	
11	Consumir y resistir: los mercados alternativos de alimentos en la Ciudad de México	467
	<i>Joaliné Pardo Núñez</i> <i>Leticia Durand</i>	
12	Entre sueño y pesadilla: salir de la dependencia en un contexto neoliberal. Un paralelo tentativo entre el Bajo Aguán hondureño y la ciudad de Detroit, Michigan	505
	<i>Hélène Roux</i>	
	Acerca de los autores	549

Introducción

Naturaleza y neoliberalismo en América Latina

Leticia Durand

Universidad Nacional Autónoma de México

Anja Nygren

Universidad de Helsinki

Anne Cristina de la Vega-Leinert

Universidad de Greifswald

El neoliberalismo como concepto analítico

Actualmente, en las ciencias sociales existe gran interés por entender lo que Noel Castree (2008a) llama la “neoliberalización de la naturaleza”, es decir, la forma en que el neoliberalismo rige y transforma las interacciones humanas con la naturaleza. América Latina alberga el 40 % de la biodiversidad mundial, posee más de un cuarto de los bosques de la Tierra, la tercera parte de las reservas de agua dulce del mundo y en su territorio restan importantes reservas minerales de petróleo, gas, hierro, cobre y oro (Bovarnick, Alpizar y Schnell 2010). Además del hecho de ser una “superpotencia en biodiversidad” (Bovarnick, Alpizar y Schnell 2010, 3), el análisis de la relación entre el neoliberalismo y la naturaleza en América Latina es particularmente importante debido a que, durante los últimos veinte años, el neoliberalismo ha apuntalado una transformación radical de las economías y las sociedades latinoamericanas y, por lo tanto, de los entornos “naturales” y de las políticas ambientales (Martin 2005; Perreault y Martin 2005).

El neoliberalismo no es un concepto fácil de definir, puesto que conforma un conjunto complejo de ideologías, representaciones, normas y prácticas propagadas por actores muy diversos y organizados en múltiples escalas (McCarthy

y Prudham 2004; Perreault y Martin, 2005; Ferguson 2010). Sin embargo, de manera muy general, es posible decir que, como una vertiente de la economía política, el neoliberalismo supone que el bienestar humano puede incrementarse mediante el impulso de la capacidad emprendedora de los individuos, ya que observa al mercado como el mejor mecanismo para la distribución de los bienes y servicios requeridos para cumplir las necesidades de las personas en el mundo (McCarthy y Prudham 2004; Castree 2008a).

El Estado, desde la perspectiva neoliberal, es una entidad poco confiable para promover el desarrollo económico, entonces se procura retraer (*roll-back*) sus funciones para facilitar el libre mercado y abrir nuevos espacios de inversión (Perreault y Martin 2005; Liverman y Vilas 2006). Este proceso no siempre equivale a disminuir el tamaño o la función del Estado, pero sí a su reconfiguración y reinstitucionalización (Bridge 2014; Perreault 2014). En términos prácticos, el neoliberalismo incluye procesos como la *privatización* de bienes de propiedad social o de servicios antes proveídos por el Estado; la *comodificación* o asignación de precios a objetos o fenómenos que estaban fuera del intercambio comercial; la *desregulación* o disminución de la presencia del Estado en numerosas áreas de la vida social; la *rerregulación* o la adaptación de las políticas públicas para facilitar la creación de mecanismos de regulación voluntaria basados en el mercado, y finalmente, el *respaldo* o fomento a empresas privadas o grupos organizados de la sociedad civil para proveer servicios que el Estado ya no presta o para compensar su ausencia (Castree 2008a; Bridge 2014).

El término *neoliberalismo* se ha vuelto muy común, y el uso más habitual está ligado a su comprensión como una fuerza externa que transforma, altera y, con frecuencia, destruye los sitios donde actúa (Martin 2005); sin embargo, es necesario considerar que el neoliberalismo está lejos de ser una condición estable y homogénea, pues existe variación en cómo es pensado, en las estrategias que se usan para impulsar sus agendas y en las relaciones que se tejen entre los actores implicados, así que es importante distinguir entre el neoliberalismo y la neoliberalización (Martin 2005; Perreault y Martin 2005; Castree 2008a).

Al observar la forma en que los fenómenos biofísicos se incorporan al pensamiento y las prácticas políticas neoliberales, nos encontramos con que existen múltiples expresiones, así como diversas tendencias y efectos (Heynen y

Robbins 2005; Castree 2008a, 2008b). Es decir, el neoliberalismo se materializa de forma muy distinta en diferentes espacios y contextos y, por lo tanto, no es solo una fuerza que destruye, sino que construye también nuevos discursos y nuevos procesos político-económicos, sociales y culturales (Martin 2005). Así, un asunto es la idea del neoliberalismo como doctrina económica y otro, sus diversas expresiones en la escala espacio-temporal, a las que Castree (2008a, 137) sugiere referirnos como *procesos de neoliberalización*.

Considerar estas particularidades nos ayuda a evitar argumentos y discusiones muy generales o simplistas y, al mismo tiempo, a superar la parálisis que produce la idea de un proyecto neoliberal monolítico y poderoso, donde los actores son simples víctimas incapaces de resistir (Castree 2008a; Perreault 2014). Es importante considerar que, aun bajo el influjo del neoliberalismo, los procesos y los actores locales desempeñan un papel muy relevante en la articulación del nuevo contexto sociopolítico (Martin 2005; Boelens et al. 2016).

Lo anterior nos lleva a otro punto importante en la comprensión del neoliberalismo: aunque muchos de sus adeptos lo observan como un proyecto apolítico —pues ven en el mercado un mecanismo neutral de distribución—, la colocación de bienes y males entre actores que difieren en su posición de clase, en sus recursos, en su capacidad de agencia y también en sus necesidades y deseos es, sin duda, un acto político, pues reconfigura las relaciones y nexos a través de los cuales el poder y la autoridad son concebidos y ejercidos (Castree 2008a; Larson y Soto 2008).

Aunque el ambiente ha sido en general un elemento relativamente poco analizado en la reflexión teórica del neoliberalismo, en los últimos años varias investigaciones se han enfocado en entender cómo la dinámica política, económica y social derivada de los procesos de neoliberalización se vinculan intrínsecamente con el medio ambiente (Castree 2008a; Perreault 2014). El neoliberalismo tiene profundas consecuencias en la forma en que nos acercamos y hacemos uso del mundo natural, puesto que muchos sectores económicos dependen directamente de la naturaleza y sus recursos, y debido a que una menor injerencia del Estado en los temas ambientales reduce la regulación ambiental. Al mismo tiempo, la privatización y la mercantilización de la naturaleza crean nuevos espacios de inversión y acumulación de capital, así como

nuevas funciones para el Estado y la sociedad civil, que facilitan, regulan, resisten o evitan sus consecuencias (Castree 2008a; Bridge 2014; Büscher 2014).

Naturaleza y neoliberalismo

Para Escalante Gonzalbo (2018), el neoliberalismo es mucho más que un proyecto económico. El neoliberalismo y su doctrina, centrada en la libertad económica, el individuo, la competencia y la acumulación de capital, se infiltran en todos los ámbitos de la vida social para crear una versión neoliberal de casi todo: la educación, la vida privada, el trabajo, etcétera (Escalante Gonzalbo 2018). Pero ¿de qué manera observa el neoliberalismo a la naturaleza? ¿Cuál es la versión neoliberal del mundo natural?

Para Philippe Descola (2001), existen varios modos de identificación, esto es, formas de trazar las fronteras entre lo propio y lo ajeno, entre lo humano y aquello que no lo es. La cultura occidental se caracteriza por una forma de identificación a la que denomina naturalismo, cuyo rasgo central es la creencia de que la naturaleza existe; es decir, consideramos que hay entidades que deben su presencia en el mundo a efectos ajenos a la voluntad humana (Descola 2001). Además de su independencia de lo social, en el imaginario de Occidente la naturaleza es una entidad objetiva que podemos conocer e intervenir a través de la ciencia y la razón; situación que la transforma en un ámbito sujeto a lo social, a la voluntad y a la capacidad humana para transformarla (Pálsson 2001).

Desde el siglo XVIII y hasta hace unas cuantas décadas, la naturaleza era vista como algo externo a la humanidad, disponible para ser usado y explotado, con excepción de algunas pocas áreas que eran excluidas del desarrollo en forma de parques naturales y reservas para la conservación (Hopwood, Mellor y O'Brien 2005). El deterioro ambiental era considerado un problema local, y la confianza en el conocimiento y la tecnología hacían pensar que todos los problemas y obstáculos, incluso aquellos planteados por los límites físicos de la naturaleza, podrían ser resueltos (Hopwood, Mellor y O'Brien 2005; Gómez Baggethun y De Groot 2007). Sin embargo, para las décadas de 1960 y 1970, problemas ambientales, como la deforestación tropical, la contaminación del

agua y el aire y la crisis del petróleo, promovieron el surgimiento del movimiento ambientalista y evidenciaron el fracaso de un sistema económico que ignoraba sus costos ambientales (Gómez Baggethun y De Groot 2007; Krichauff 2012; Durand 2014). Académicos de distintas disciplinas comenzaron a pensar que era necesario superar la visión de la naturaleza esencialmente como proveedora de bienes o materias primas, para fomentar una apreciación que tome en cuenta todos aquellos beneficios que derivan del buen funcionamiento de los ecosistemas, tales como la captura de carbono atmosférico, la provisión de agua o el mantenimiento de la biodiversidad, aspectos fundamentales para la vida humana (Costanza y Daly 1992; Costanza et al. 1997; Gómez Baggethun y De Groot 2007; Gómez Baggethun et al. 2010; McAfee y Shapiro 2010). De aquí surge la idea de los *servicios ambientales*, concepto que equipara la relación sociedad-naturaleza con una transacción mercantil donde existen proveedores (naturaleza) y clientes (sociedad; Sullivan 2009, 2012).

Hacia la década de 1990, “con la expansión del modelo neoliberal, los economistas desarrollaron y refinaron métodos para diferenciar los servicios ecosistémicos, calcular su valor monetario e integrarlos al mercado” (Durand 2014, 190). Así, transformaron a la naturaleza, sus bienes y servicios en capital natural, esto es, un conjunto de recursos y procesos biofísicos que generan flujos de recursos naturales y servicios ambientales útiles para incrementar el bienestar humano (Costanza y Daly 1992; Costanza et al. 1997). La traducción del discurso ambiental a la terminología de la economía y su integración a la narrativa neoliberal abren la posibilidad de crear nuevas mercancías y asignarles un precio o valor económico para incorporarlas al mercado (Sullivan 2009, 2012; Gómez Baggethun et al. 2010).

La economía neoliberal reconoce la necesidad de desarrollar estrategias para evitar la erosión del capital natural, y la propuesta central es hacerlo a través de esquemas de libre mercado que internalizan los costos con el establecimiento de cuotas para la contaminación, el uso y la conservación del capital natural, que pueden ser utilizadas, ahorradas o comerciadas (Liverman y Vilas 2006). Hoy en día, el instrumento líder en el ramo es el pago por servicios ambientales (PSA), donde los beneficiarios de servicios como la captura de carbono, el mantenimiento de hábitats para la biodiversidad o la

protección de las funciones hidrológicas, compensan su obtención a través de pagos a los proveedores (Gómez Baggethun et al. 2010; Sullivan 2012). Además, se ha producido un nuevo campo de inversión, el de los llamados *negocios verdes*, donde encontramos al ecoturismo, la bioprospección, la producción de alimentos orgánicos y otros productos certificados, que prometen conciliar al capitalismo con la preservación de la naturaleza, a la vez que observan a la crisis ambiental no como una deficiencia del funcionamiento del capitalismo, sino como una nueva oportunidad para la producción y acumulación de capital financiero (McCarthy y Prudham 2004; Castree 2008a; Sullivan 2012; Durand 2017).

Para los economistas del siglo XVIII, la naturaleza era la fuente de riqueza material, pues de ella provenían todos aquellos elementos o recursos con algún valor de uso. Hoy en día, la economía neoclásica ha desacoplado la articulación entre naturaleza y bienestar, al considerar que la naturaleza y sus recursos pueden ser sustituidos por capital manufacturado: la tierra puede ser sustituida por invernaderos o por tierra más allá de las fronteras nacionales; el germoplasma, por semillas híbridas o variedades genéticamente modificadas; la energía fósil, por energía solar o eólica, y la contaminación, por sumideros de carbono. Lo anterior significa que el valor de la naturaleza no se encuentra ya en el uso directo que podemos darle, sino en el valor de cambio de fracciones de ella, sean tangibles o intangibles. Es decir, el valor de los recursos naturales y las funciones y servicios ambientales se tasan en términos estrictamente monetarios (Gómez Baggethun y De Groot 2007; Gómez Baggethun et al. 2010; Arsel y Büscher 2012).

En el neoliberalismo, la naturaleza es un nuevo ámbito de acumulación y sus diferentes componentes y elementos se poseen, acumulan e intercambian en diversos circuitos comerciales. Al igual que otros capitales, se asume que el capital natural puede ser mejor administrado y conservado si se constituye en propiedad privada y si las prácticas de uso y conservación son rentables para quienes las implementan (Lemos y Agrawal 2006; Liverman y Vilas 2006; Büscher et al. 2012; Durand 2017; Escalante Gonzalbo 2018).

Las políticas neoliberales en América Latina

El neoliberalismo como paradigma económico tiene su origen a mediados del siglo xx con el trabajo de algunos teóricos ligados a la escuela de Chicago, quienes se oponían a la intervención del Estado en la economía. Estas ideas se transforman en política pública durante la década de 1980, luego de la recesión de 1973, cuando el estado de bienestar entra en crisis y los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan impulsan, desde sus poderosas naciones, la doctrina neoliberal (Perreault y Martin 2005; Liverman y Vilas 2006; Escalante Gonzalbo 2018).

En América Latina, los primeros países que transitaron hacia el neoliberalismo fueron Chile y Argentina, donde las dictaduras de Augusto Pinochet (1973-1990) y Jorge Rafael Videla (1976-1983) anticiparon, bajo la influencia de Estados Unidos e Inglaterra, la apertura comercial y la desregulación financiera (Guillén s. f.; Perreault y Martin 2005). Sin embargo, el giro general del continente hacia el neoliberalismo se produjo a finales de los ochenta, con la crisis de la deuda producto del fracaso del modelo de sustitución de importaciones adoptado en Latinoamérica para contrarrestar los efectos de la Gran Depresión económica de 1929. El modelo de sustitución de importaciones pretendió reducir la vulnerabilidad de las economías latinoamericanas a los vaivenes de la economía internacional a partir del fortalecimiento del crecimiento interno, la industrialización y favoreciendo el comercio y la industria nacional a través de cuotas, impuestos y subsidios (Perreault y Martin 2005; Guillén 2013).

Algunas economías latinoamericanas mostraron altas tasas de crecimiento económico con el modelo de sustitución de importaciones, como Venezuela, que entre 1950 y 1980 incrementó su renta per cápita en 60 %, o Brasil, que durante el mismo periodo logró un aumento de 240 %. En promedio, para 1966, el producto interno bruto (PIB) per cápita del continente creció 5.49 dólares (Martínez Rangel y Soto Reyes Garmendia 2012). El crecimiento latinoamericano se tradujo en oportunidades de empleo, mejores salarios y en la esperanza de superar la pobreza, aunque amplias porciones de la población, sobre todo migrantes rurales que no lograron insertarse en el sector moderno

e industrializado, se mantuvieron al margen de este progreso. Los procesos de industrialización en el continente dependieron en gran parte de las importaciones de tecnología y del capital externo; con ello generaron un proceso de endeudamiento continuo que se agravó por las altas tasas de interés, los elevados precios del petróleo y la apreciación del dólar estadounidense. En un inicio, la crisis de la deuda trató de ser contrarrestada con un mayor control estatal de la economía y el endeudamiento externo; sin embargo, este “ajuste ortodoxo” provocó un estancamiento económico (Guillén 2013). En 1982, México se declara incapaz de solventar los pagos de su deuda internacional, seguido por otros países como Argentina y Brasil (Guillén s. f.; Perreault y Martin 2005; Fraile 2009; Martínez Rangel y Soto Reyes Garmendia 2012). Esta situación generó una gran desconfianza hacia la región por parte de los bancos e inversionistas privados, que se negaron a otorgar financiamientos; entonces, los Gobiernos debieron recurrir a los préstamos del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) para intentar reparar sus economías (Perreault y Martin 2005). No obstante, el BM y el FMI condicionaron sus préstamos a una serie de reformas estructurales; por lo tanto, la región abandonó su política basada en la intervención del Estado y la sustitución de importaciones, para orientar su economía hacia el neoliberalismo (Perreault y Martin 2005; Fraile 2009).

Hacia finales de la década de 1980, la llamada *década perdida de América Latina*, la situación económica en la región era caótica y las deficiencias en la administración por parte de los diferentes Estados se hicieron evidentes. De acuerdo con los economistas de países industrializados, los organismos financieros internacionales y las élites internas de América Latina, el continente necesitaba adoptar una serie de medidas de política económica conocidas como Consenso de Washington. Estas procuraban lograr el crecimiento y la estabilidad económica disminuyendo subsidios y eliminando empresas paraestatales a fin de reordenar el gasto público, creando derechos de propiedad claros para asegurar el crecimiento de un sector privado fuerte y promoviendo la liberalización financiera y comercial para atraer la inversión extranjera directa, entre otras medidas. Se esperaba, de acuerdo con los planteamientos de la economía neoclásica, que la inserción del continente en la globalización y el ingreso de

capitales privados fomentara el crecimiento económico para lograr superar la crisis de la deuda y disminuir tanto la pobreza como la inequidad en la región (Guillén s. f.; Martínez Rangel y Soto Reyes Garmendia 2012; Guillén 2013).

A mediados de la década de 1990, América Latina había alcanzado un nivel elevado de liberalización comercial y privatización (Fraile 2009). Así, por ejemplo, las tarifas arancelarias promedio se redujeron de 46 % en 1985 a solo 12 % en 1995, y la proporción de empresas paraestatales descendió de 20 a 9 %. Tan solo en México, fueron vendidas más de mil compañías del Estado, que incluyeron rubros como teléfonos (servicio), aerolíneas, acero, azúcar y bancos; mientras tanto, otras fueron desmanteladas, especialmente aquellas vinculadas con la agroindustria y que subsidiaban la producción de alimentos como maíz y café (Meyer 1993; Appendini 2001; Liverman y Vilas 2006; Katz 2015). De esta forma, los países del continente reorientaron sus economías hacia el exterior para conseguir, mediante exportaciones, las divisas necesarias para generar crecimiento económico y solventar sus deudas, con lo que transitaron hacia la globalización neoliberal. En los países de América del Sur esto implicó un regreso a la explotación y exportación de materias primas, al tiempo que México, Centroamérica y el Caribe se transformaron en centros de exportación hacia Estados Unidos impulsando el desarrollo de maquiladoras (Guillén s. f.).

Con la renegociación de la deuda externa, la inversión extranjera directa y los flujos de capital extranjero se reanudaron en América Latina y las economías lograron crecer de nuevo, pero pronto se produjo la sobrevaluación de las monedas y se generó un nuevo ciclo de endeudamiento externo. En esos años, la mayoría de los países de la región experimentaron crisis económicas agudas, como México en 1994, Brasil en 1999 y Argentina en 2001 (Guillén s. f.; Sader 2008).

La aplicación del Consenso de Washington y del modelo neoliberal en América Latina se caracterizó por una preocupación profunda por lograr un crecimiento acelerado y mantener la estabilidad macroeconómica; sin embargo, se olvidó la importancia del crecimiento con equidad y no lograron construirse instituciones capaces de impulsar y distribuir los beneficios del crecimiento. Esto acentuó más la brecha entre ricos y pobres, y agravó la pobreza

y la desigualdad social en el continente (Guillén s. f.; Martínez Rangel y Soto Reyes Garmendia 2012). El índice de Gini¹ para Latinoamérica hoy en día es de 51.6, cifra superior al promedio global (39.5) y del doble de las economías más desarrolladas. Colombia, Bolivia, Honduras y Brasil son algunos de los países más desiguales del mundo, y en América Latina en general el 20% de la población más rica es casi 20 veces más acaudalada que el 20% más pobre (Katz 2015).

Neoliberalismo y naturaleza en América Latina

Durante las décadas de 1960 y 1970, cuando la crisis ambiental comienza a mostrar sus primeros síntomas, se consideraba que los efectos ambientales negativos o las externalidades del sistema económico podrían ser reguladas por el Estado a través de normas, multas y demandas judiciales que obligaran a los empresarios y productores a reducir sus impactos ambientales. Sin embargo, los incentivos para mejorar la conducta ambiental, más allá de los laxos estándares impuestos por los Gobiernos, no fueron suficientes y comenzó a considerarse la necesidad de internalizar los costos de la producción (Liverman y Vilas 2006).

Como explicamos, el enfoque neoliberal para la gestión ambiental asume que los recursos de propiedad privada pueden ser mejor manejados que aquellos que carecen de derechos de propiedad, que pertenecen al Estado o que son de propiedad colectiva. Así, se asignan derechos de propiedad a elementos y recursos como el agua, la biodiversidad o la atmósfera, a fin de que puedan ser valorados económicamente e incorporados como mercancías (*commodities*) al intercambio comercial. Mientras, los costos del deterioro se internalizan a través del principio de “el que contamina paga”, donde existen cuotas de

¹ El coeficiente de Gini mide la concentración del ingreso o desigualdad entre personas en una región determinada. Toma valores de 0 a 1, donde 0 corresponde a la distribución equitativa entre todos los individuos y 1 indica que un solo individuo posee todo el ingreso. El índice de Gini es el valor del coeficiente multiplicado por 100.

uso que deben ser pagadas, pero que pueden también ingresar al mercado o ser comerciadas (Lemos y Agrawal 2006; Liverman y Vilas 2006).

En una amplia revisión de la literatura disponible, Liverman y Vilas (2006) hallan escasa evidencia de que el ambiente en América Latina pueda ser preservado de mejor manera bajo esquemas neoliberales de gestión ambiental; sin embargo, el modelo neoliberal y sus mecanismos de mercado dominan hoy en día la política ambiental en la mayor parte de los países latinoamericanos gracias al apoyo firme del sector privado, que encuentra en él enormes oportunidades para hacer crecer su capital y su poder (De Castro, Hogenboom y Baud 2015).

Además, la gobernanza ambiental neoliberal no cuestiona ni amenaza los intereses de las élites políticas y económicas de la región, pues discute los problemas de pobreza, sostenibilidad y conservación desde la perspectiva de la regulación voluntaria basada en el mercado y, al mismo tiempo, satisface la agenda ambiental de las grandes organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales y aquellas con relevancia nacional (Gómez Baggethun et al. 2009; Sullivan 2009, 2012; De Castro, Hogenboom y Baud 2015).

En un principio, los procesos de privatización se limitaron a las empresas y servicios públicos que pertenecían a los Estados, pero poco a poco se fueron extendiendo hacia los recursos naturales propiedad de comunidades locales, pequeños propietarios o recursos considerados como bienes comunes, en un proceso que David Harvey denomina acumulación por desposesión (Harvey 2004, 63; Seoane 2006). Esta situación ha dado lugar a numerosos, muy frecuentes e intensos conflictos socioambientales en todo el continente, los cuales han derivado en movimientos sociales de gran relevancia, ya que se enfrentan al despojo de los recursos y al deterioro de bosques, tierras, aguas, aire y alimentos (Bebbington y Bury 2013; Perreault 2013; Boelens et al. 2016).

Actualmente, se sugiere que en América Latina vivimos el enfrentamiento entre dos modelos opuestos de desarrollo: el neodesarrollo o neoextractivismo, que apuesta por la explotación intensiva de materias primas, estrategias de mercado y soluciones institucionales para alcanzar prácticas sustentables, y el llamado posneoliberalismo, muy vinculado a la idea del *buen vivir*, que busca una mayor autonomía para la región, en algunos casos con la

persistencia del modelo económico capitalista, y en otros, a través de modelos económicos alternativos, como el decrecimiento, la economía solidaria o la gestión comunitaria de los recursos (Escobar 2010; De Castro, Hogenboom y Baud 2015; Katz 2015; Gudynas 2016).

Buscando aportar elementos para una comprensión general de la relación entre el neoliberalismo y la naturaleza en América Latina, este libro pretende explorar los vínculos del modelo económico neoliberal con la transformación socioambiental, así como las racionalidades y prácticas políticas de la gobernanza neoliberal en torno a los asuntos ambientales y los conflictos y luchas sociales que surgen alrededor de los recursos naturales y la gobernanza ambiental. Nos interesa documentar cómo el neoliberalismo ha modificado los esquemas de uso, acceso, control y gobernanza de los recursos naturales, privilegiando ciertas estrategias y actores, y transformado las relaciones de las comunidades y grupos sociales con su entorno, mientras estos se incorporan, negocian y resisten las influencias de la ola neoliberal en sus formas de vivir y en sus anhelos.

Sobre la estructura de la obra

El conjunto de trabajos que se presentan en este libro ilustra la riqueza y la complejidad de las transformaciones socioambientales estrechamente vinculadas con el giro hacia el neoliberalismo ocurrido en América Latina desde la década de 1980. Los textos nos muestran una gran variedad de cambios político-económicos, ecológicos y socioculturales ligados a diferentes niveles espaciotemporales en una amplia variedad de regiones y países de América Latina, lo que permite observar la forma en que las dinámicas de neoliberalización de la naturaleza se consolidan en sitios tan distintos como las favelas de Río de Janeiro en Brasil, la Patagonia chilena, la costa de Perú o el trópico mexicano, entre otras.

Los primeros tres capítulos se ocupan de analizar las estrategias neoliberales de conservación de la biodiversidad que intentan incentivarla otorgando beneficios directos o pagos a los pobladores de comunidades rurales por

conservar. Estos textos se ocupan específicamente de los esquemas de pagos por servicios ambientales (PSA) y de su versión más refinada, REDD+.

Figueroa y Caro-Borrero exploran cómo las personas en México entienden y experimentan los programas de PSA que se aplican en sus bosques, y muestran que estos programas han generado mejoras en términos económicos, sociales y ambientales en comunidades caracterizadas por un alto grado de pobreza. Sin embargo, los pagos no han logrado contrarrestar la asimetría existente en el acceso a los recursos naturales, a la información y a los beneficios de los programas, así como tampoco ayudan a solucionar la escasa participación comunitaria en el manejo ambiental. Aún más preocupante es que los PSA inducen un cambio en la percepción que los residentes locales tienen de los ecosistemas y su conservación hacia una visión predominantemente utilitaria y mercantil, lo que contribuye a la erosión progresiva de los valores comunitarios vinculados a los recursos naturales.

Trench y Libert Amico, a partir de un extenso trabajo de campo realizado en los estados de Yucatán y Chiapas en el sureste de México, exploran la manera en que los contextos locales, más específicamente las estructuras agrarias, los esquemas de gobernanza y las relaciones de poder, contribuyen a transformar una iniciativa global como REDD+, que intenta integrar los servicios ambientales al mercado para disminuir la deforestación y degradación, en variantes locales que no siempre resultan en la privatización y mercantilización de los bosques. En este caso, una serie de incentivos implementados para generar un mercado de bonos de carbono se convierte, en el contexto particular del sureste mexicano, en subsidios federales que se incorporan a relaciones clientelares y fortalecen el papel del Estado, que se coloca por encima de los mercados internacionales. Los autores nos invitan a alejarnos de visiones dualistas para observar los matices en la interacción entre el neoliberalismo y el Estado mexicano.

Van Hecken y sus colaboradores nos presentan un análisis detallado sobre los PSA, promovidos como un prometedor instrumento de conservación, y su relación con las prácticas productivas y las dinámicas territoriales de la frontera agrícola alrededor de la reserva biológica de Indio-Maíz en Nicaragua. Los autores explican que, aunque la producción ganadera predomina en

la zona, existen varios sistemas de producción que se desarrollan simultáneamente y son influenciados por las características estructurales del entorno. En este sentido, los PSA pueden orientar el cambio de perspectivas y de racionalidades, pero no logran crear suficientes incentivos para contrarrestar la racionalidad económica y social dominante, basada en la colonización de la selva y su conversión al uso agrícola.

El acaparamiento de las tierras y otros recursos naturales es otra consecuencia de la neoliberalización de la naturaleza en América Latina, donde se han implementado modelos de desarrollo orientados hacia el extractivismo y la agroindustria intensiva. Este fenómeno ha generado un fuerte debate sobre la (re)concentración de la tierra y el acceso y control de múltiples recursos naturales en el continente (Bebbington y Bury 2013; Borrás et al. 2013; Edelman, Oya y Borrás 2013). En este sentido, el texto de Garibay analiza la forma de operación de las corporaciones mineras transnacionales, que se organizan en lo que llama *clúster minero global* a fin de controlar y someter territorios a sus intereses comerciales. Al mismo tiempo, estudia cómo generan discursos que los dirimen de las afectaciones sociales y ambientales de la megaminería. De forma muy detallada, Garibay Orozco explica la manera en que las compañías mineras, agrupadas en un consejo internacional, despliegan un sistema de inteligencia estratégica e instauran horizontes de coerción sobre comunidades y pueblos para operar sus minas sin resistencia social. A través del análisis de la operación del clúster minero en México, Garibay Orozco nos muestra cómo se concretan los procesos de desposesión del territorio y los recursos, además de la violencia y las catástrofes ambientales y sociales implicadas en la megaminería en la República Mexicana.

Por su parte, Tejada y Rist analizan el acaparamiento de grandes superficies de tierras en el Perú, para mostrarnos que durante los últimos años, y a raíz de su inserción en el neoliberalismo, el sector agroindustrial peruano ha configurado una poderosa alianza con el Estado mediante la adopción de nuevas tecnologías y de su colaboración con capital multinacional, con lo que han orientado las políticas económicas hacia el modelo extractivista. En su estudio detallado del valle de Chira, examinan las luchas agrarias contra el acaparamiento de las tierras bajo la perspectiva de la teoría de la *gran transformación*

de Karl Polanyi (1944) y del *triple movimiento* de Nancy Fraser (2013); además, analizan la reacción de la población afectada por el acaparamiento de sus recursos. El texto nos muestra que los campesinos resisten y prefieren organizarse en cooperativas para mantener, a través de la solidaridad, un cierto nivel de autodeterminación y participación en los mercados globales de productos orgánicos y comercio justo, que involucrarse en los mercados agroindustriales promovidos por la alianza del Estado y el empresariado nacional, que son quienes les arrebatan sus tierras.

Sobre esta misma temática, Rodríguez Torrent, en su estudio sobre la Patagonia chilena, analiza el fenómeno del *acaparamiento verde* (*green grabbing*) a partir de narrativas y discursos (Fairhead, Leach y Scoones 2012; Edelman, Oya y Borrás 2013; Büscher 2014). Argumenta que nuevos actores, como los llamados *neorrurales*, las comunidades *neohippies* y el sector del turismo de aventura y el ecoturismo, participan en la “revalorización” de espacios previamente considerados como marginados, y promueven su progresiva mercantilización a través de la construcción de imaginarios, narrativas e identidades en torno a una naturaleza prístina y a nuevos tipos de “colonos”, como los aventureros o los inconformes que intentan huir del mundo capitalista. Estas mismas narrativas permiten crear nuevos centros (*resorts*) ecoturísticos de lujo y áreas naturales privadas que constituyen *enclosures*, o encapsulamientos, derivados de los procesos de apropiación, privatización y acaparamiento del territorio y el paisaje.

El tercer tema importante en este libro son los cambios agrarios promovidos por las políticas neoliberales, los cuales presionan hacia el abandono de la agricultura campesina tradicional y la pequeña agricultura comercial e impulsan a los grandes consorcios agroindustriales, restando importancia a la autosuficiencia alimentaria bajo el credo del libre comercio. El capítulo escrito por De la Vega-Leinert y colaboradores compara estudios de caso en México y Vietnam, e identifica similitudes en los procesos de integración de las comunidades campesinas y de pequeños productores a las cadenas agrícolas globales. Del mismo modo, el estudio de caso de Guzmán en El Salvador ilustra cómo algunas comunidades campesinas anteriormente enfocadas a la producción para el autoconsumo y el mercado local se reorientan hacia la agricultura comercial

de exportación. El desarrollo de nuevas cadenas de valor para el mercado convencional —como las frutas tropicales en Vietnam, la certificación orgánica del café en México y del marañón en El Salvador— si bien ha generado nuevas fuentes de ingresos para las comunidades productoras, presenta obstáculos significativos que limitan fuertemente la capacidad de los productores para aprovechar los beneficios potenciales de los mercados alternativos o de calidad.

El cuarto tema crucial en esta obra es la gobernanza ambiental neoliberal en las zonas urbanas de América Latina. En este sentido, el capítulo de Saaristo nos presenta un análisis sobre la segregación urbana en Río de Janeiro, Brasil, y describe los mecanismos que dan lugar a la marginación de la población de las favelas y cómo estas personas desarrollan estrategias para resistir su situación de subordinación. Saaristo explica que los procesos de urbanización en la América Latina neoliberal responden a la comodificación del espacio urbano y a la producción de plusvalía, la cual relega a un segundo plano las necesidades y derechos de sus habitantes.

El estudio de Nygren sobre la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, expone que en las estrategias de gobernanza para inundaciones se han transformado desde las medidas de control tecnocéntricas basadas en la construcción de diques y muros de contención, hacia estrategias de resiliencia que promueven la adaptación cultural para saber convivir con el agua. El análisis examina la gobernanza neoliberal como un “arte de gobernar”, desde la perspectiva teórica de Michel Foucault (2003, 2007), y explica que las estrategias predominantes de gobernanza urbana en Villahermosa constituyen formas híbridas donde la cogobernanza pública-privada y la autogestión ciudadana se mezclan con los legados del control estatal y las relaciones clientelares. A partir de un análisis detallado de tres diferentes áreas socioeconómicas de la ciudad, el estudio nos enseña cómo la planificación y la política urbana aumentan la segregación social, empujando a ciertos grupos sociales a ocupar espacios de por sí inhabitables, mientras facilitan que otros grupos logren controlar los espacios privilegiados de la ciudad.

El trabajo de Pardo Núñez y Durand se ocupa de las redes alternativas de alimentos agroecológicos, locales y de comercio que han surgido en la Ciudad de México, las cuales buscan revitalizar el papel de los pequeños campesinos

y de la agroecología a través de tianguis o mercados semanales en donde los productores interactúan directamente con los consumidores, y así eliminan a los intermediarios. La literatura especializada da cuenta de una intensa discusión sobre si las redes alternativas de alimentación constituyen espacios de resistencia o de reproducción de las prácticas neoliberales y, en este sentido, las autoras se ocupan de cuatro iniciativas de tianguis en la Ciudad de México y exploran su origen, propuestas y prácticas, analizando si estas tienden más a cooperar con o a resistir los procesos de neoliberalización de la naturaleza (Gutham 2008; Holt-Giménez 2010, 2011). El texto explora los objetivos sociales, ambientales y económicos de los tianguis, así como sus bases sociales, orientaciones políticas y propuestas para trascender el espacio del tianguis y ampliar los impactos de su causa.

Finalmente, para el caso de Honduras, Roux relata cómo la llegada de la palma africana a la región del Aguán se vincula a una historia de despojo de las comunidades campesinas, debido tanto a políticas gubernamentales y la presión de las grandes compañías transnacionales como al endeudamiento y la falta de margen de maniobra de las cooperativas de productores. La industrialización de la agricultura amenaza la seguridad alimentaria del Aguán, y es este mismo proceso, aunque en sentido inverso, el que convierte a la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, en un desierto alimentario. Para Roux, el giro neoliberal sacrifica las viejas ciudades del capitalismo industrial, pero se extiende hacia nuevos ámbitos donde la naturaleza es mercantilizada y expuesta a un extractivismo desenfrenado.

Algunas conclusiones sobre el conjunto de trabajos

Los capítulos que conforman este libro ilustran la variedad y complejidad de las transformaciones socioecológicas derivadas del giro hacia el neoliberalismo que se produjo en América Latina a partir de 1980, y nos ofrecen algunas pautas para comprender los rasgos y las implicaciones de los procesos de neoliberalización de la naturaleza en nuestro continente.

Un punto importante es que, a la luz de lo expuesto, parece necesario abandonar los acercamientos que dividen de forma tajante los ámbitos de lo natural y lo social. Los textos muestran cómo los espacios y elementos naturales son constantemente redefinidos en los procesos de neoliberalización. De esta forma, espacios antes olvidados por el desarrollo, como la Patagonia, hoy adquieren valor para la acumulación de capital a partir de la transformación de la naturaleza prístina en una nueva mercancía. De igual modo, constatamos que para ciudades como Río de Janeiro y Villahermosa, los espacios considerados riesgosos o marginales no lo son debido a sus atributos físicos, como su ubicación o condiciones hidrológicas, sino a las políticas públicas que se implementan y a los intereses que estas favorecen. Los estudios presentados en este libro nos invitan a distanciarnos de las dicotomías convencionales, como naturaleza/cultura, rural/urbano, tradicional/moderno o global/local, y abogan por la necesidad de desarrollar miradas que nos permitan comprender la interacción, las contradicciones y la codependencia de los procesos de neoliberalización de la naturaleza.

Al mismo tiempo, los estudios de caso demuestran que la interacción entre neoliberalismo y naturaleza produce nuevos actores y nuevos roles para las personas, grupos sociales, espacios y territorios. Con la implementación de esquemas de PSA y REDD+, los bosques adquieren la nueva vocación de producir carbono y sus habitantes se transforman en agentes de conservación. Del mismo modo, las formas tradicionales de producción campesina se debilitan y, sin desaparecer por completo, son presionadas para transitar hacia la producción de *commodities* para los mercados internacional, convencional, *gourmet* u orgánico. En este proceso, los habitantes rurales se vinculan con ONG, agencias multilaterales y empresas en una dinámica que, alentada por el Estado, los obliga a mirar siempre más allá de sus localidades. Esta integración a los mercados internacionales puede, en efecto, generar nuevas fuentes de ingreso para las comunidades campesinas, pero también implica una creciente dependencia hacia el mercado y la economía monetarizada, de manera que las enfrenta al riesgo de pérdida de agrobiodiversidad y seguridad alimentaria.

El desarrollo de nuevas tecnologías y el interés incesante por la producción y circulación de capital despojan a las comunidades de sus territorios y los

subordinan a la intención de lucro de poderosos actores nacionales e internacionales, por ejemplo, las compañías mineras, que ahora extraen minerales de zonas antes consideradas agotadas de recursos, o la agroindustria, capaz de introducir costosas obras de riego para hacer productivas tierras áridas. Los costos ecológicos y sociales que estas experiencias suponen nos hacen dudar de la prevalencia de soluciones *win-win* —gana-gana— en los procesos de neoliberalización de la naturaleza, donde el mercado y sus reglas intrínsecas, se supone, producirán resultados positivos tanto para el medio ambiente como para todos los actores y sectores sociales. Al mismo tiempo, estas situaciones muestran bien cómo el Estado más que desaparecer, reconfigura su función y se constituye, en muchos casos, en un aliado del capital privado y, por acción u omisión, colabora con los procesos de acumulación por desposesión.

Otro punto relevante, y que varios de los capítulos aquí incluidos señalan, es que los procesos de neoliberalización de la naturaleza no suceden sin resistencia. Los campesinos, consumidores, habitantes de zonas vulnerables y afectados ambientales desarrollan formas de rebeldía hacia la desposesión, el incremento de su vulnerabilidad y frente a los imaginarios neoliberales que demeritan sus capacidades, hacen caso omiso de las condiciones estructurales de injusticia que enfrentan y pretenden responsabilizarlos tanto de sí mismos como de su entorno. Estas estrategias incluyen la oposición frontal, como el cierre de minas o las manifestaciones públicas, pero también formas de reclamo más sutiles y cotidianas, como la creación de espacios independientes de comercialización, la reelaboración de sus identidades, la organización local y el uso ventajoso —no así comprometido— de los instrumentos de gestión ambiental neoliberal.

Los trabajos que se compilan en este libro nos permiten decir que, para América Latina, los procesos de neoliberalización de la naturaleza parecen siempre incompletos e imperfectos, procesos donde los mecanismos de mercado generan, en ocasiones, mejoras económicas para las comunidades, que, sin embargo, no logran contrarrestar la desigualdades iniciales ni tampoco transformar de manera determinante los sistemas tradicionales de producción; o donde la generación de nuevos mercados crea subsidios que nada tienen que ver con la oferta y demanda de servicios o productos; donde las formas de

resistencia constituyen a la vez nuevas oportunidades de comercialización, o donde la planificación urbana genera mayor segregación y riesgo en las ciudades. En conjunto, los capítulos nos hablan de procesos y dinámicas en marcha, pero también de temas que necesitan ser mejor explorados y analizados, entre ellos: el carácter híbrido de los procesos de neoliberalización de la naturaleza, el papel cambiante del Estado, la distribución tanto de costos como de beneficios y el carácter y potencia de las formas de resistencia, tenues o evidentes, que se desprenden de toda esta dinámica.

Finalmente, no podemos dejar de resaltar la relevancia de una tarea de introspección y reflexión personal sobre nuestro papel como académicos pero también como consumidores, electores, empleados, empleadores, profesores, padres, madres, turistas, vecinos y tantos otros papeles que nos toca desempeñar en el mantenimiento y la reproducción de las dinámicas de explotación, deterioro y exclusión presentadas en este libro, y en la labor, tal vez más relevante, de (re)construir, diseñar, difundir y apoyar utopías y caminos alternativos a nuestra condición actual.

Referencias bibliográficas

- Appendini, K. 2001. *De la milpa a los tortibonos: la restructuración de la política alimentaria en México*. México: El Colegio de México; United Nations Research Institute for Social Development.
- Arsel, M. y B. Büsher. 2012. "Nature™ Inc: Changes and Continuities in Neoliberal Conservation and Market-based Environmental Policy". *Development and Change* 43(1): 53-78.
- Bebbington, A. y J. Bury, eds. 2014. *Subterranean Struggles: New Dynamics of Mining, Oil and Gas in Latin America*. Austin: University of Texas Press.
- Boelens, R., J. Hoogesteger, E. Swyngedouw, J. Vos y P. Wester. 2016. "Hydro-social Territories: A Political Ecology Perspective". *Water International* 41 (1): 1-14.

- Borras, S., J. Franco, S. Gómez, C. Kay y M. Spoor. 2012. "Land Grabbing in Latin America and the Caribbean". *The Journal of Peasant Studies* 39 (3-4): 845-872.
- Bovarnick, A., F. Alpizar y C. Schnell, eds. 2010. *The Importance of Biodiversity and Ecosystems in Economic Growth and Equity in Latin America and the Caribbean: An Economic Valuation of Ecosystems*. Nueva York: United Nations Development Program.
- Bridge, G. 2014. "Resource Geographies II: The Resource-State Nexus" *Progress in Human Geography* 38 (1): 118-130.
- Büscher, B. 2014. "Selling Success: Constructing Value in Conservation and Development" *World Development* 57: 79-90.
- Castree, N. 2008a. "Neoliberalising Nature: The Logics of Deregulation and Reregulation" *Environment and Planning A* 40: 131-153.
- Castree, N. 2008b. "Neoliberalising Nature: Processes, Effects, and Evaluations" *Environment and Planning A* 40: 153-173.
- Castro, F. de, B. Hogenboom y M. Baud. 2015. "Gobernanza ambiental en América Latina en la encrucijada. Moviéndose entre múltiples imágenes, interacciones e instituciones". En *Gobernanza ambiental en América Latina*, coordinado por F. de Castro, B. Hogenboom y M. Baud. Buenos Aires: Clacso y Engov.
- Costanza, R. y D. Herman. 1992. "Natural Capital and Sustainable Development" *Conservation Biology* 6 (1): 37-46.
- Costanza, R., R. d'Arge, R. de Groot, S. Farber, M. Grasso, B. Hannon, K. Limburg, S. Naeem, R. O'Neill, J. Paruelo, R. G. Raskin, P. Sutton y M. van den Belt. 1997. "The Value of the World's Ecosystem Services and Natural Capital" *Nature* 182: 253-260.
- Durand, L. 2014. "¿Todos ganan? Neoliberalismo, naturaleza y conservación en México". *Sociológica* 29 (82): 183-223.
- Durand, L. 2017. *Naturalezas desiguales. Discursos sobre la conservación de la biodiversidad en México*. Cuernavaca: CRIM-UNAM.
- Edelman, M., C. Oya y S. M. Borras. 2013. "Global Land Grabs, Historical Processes, Theoretical and Methodological Implications and Current Trajectories". *Third World Quarterly* 34 (9): 1517-1531.

- Escalante Gonzalbo, F. 2018. *Historia mínima del neoliberalismo*. México: El Colegio de México.
- Escobar, A. 2010. "Latin America at a Crossroad". *Cultural Studies* 24 (1): 1-65.
- Fairhead, J., M. Leach e I. Scoones. 2012. "Green Grabbing: A New Appropriation of Nature". *The Journal of Peasants Studies* 39 (2): 237-261.
- Ferguson, J. 2010. "The Uses of Neoliberalism". *Antipode* 41 (S1): 166-184.
- Foucault, M. 2003. "Governmentality". En *The Essential Foucault: Selections from Essential Works of Foucault 1954-1984*, editado por Paul Rabinow y N. Rose, 229-245. Londres: New Press.
- Foucault, M. 2007. *Security, Territory, Population*. Londres: Palgrave.
- Frailé, L. 2009. "La experiencia neoliberal en América Latina. Políticas sociales y laborales desde el decenio de 1980". *Revista Internacional de Trabajo* 128 (3): 235-255.
- Fraser, N. 2013. "A Triple Movement". *New Left Review* 81: 119-132. <http://bev.berkeley.edu/ipe/Triple%20Movement-NLR31505.pdf>.
- Holt-Giménez, E. y A. Shattuck. 2011. "Food Crises, Food Regimes and Food Movements: Rumbblings of Reform or Transformation?". *Journal of Peasant Studies* 38 (1): 109-144.
- Holt-Giménez, E., A. Shattuck, M. Altieri, H. Herren y S. Gliessman. 2012. "We already Grow enough Food for 10 Billion People... and Still Can't End Hunger". *Journal of Sustainable Agriculture* 36 (6): 595-598.
- Gómez Baggethun, E. y R. de Groot. 2007. "Capital natural y funciones de los ecosistemas: explorando las bases ecológicas de la economía". *Ecosistemas* 16 (3): 4-14.
- Gómez Baggethun, E., R. de Groot, P. Lomas y C. Montes. 2010. "The History of Ecosystem Services in Economic Theory and Practice: From Early Notions to Markets and Payment Schemes". *Ecological Economics* 69: 1209-1218.
- Guillén, A. s/f. "Modelos de desarrollo y estrategias alternativas en América Latina". Manuscrito sin publicar.
- Guillén, A. 2013. "América Latina: neoliberalismo, políticas macroeconómicas y proyectos nacionales de desarrollo". Ponencia presentada en el Seminario Internacional para la Elaboración de la Versión Final del Plan Nacional

- para el Buen Vivir de Ecuador 2013-2017. Quito, Ecuador, 22-25 de abril de 2013.
- Gudynas, E. 2016. "Beyond Varieties of Development: Disputes and Alternatives". *Third World Quarterly* 37 (4): 721-732.
- Guthman, J. 2008. "Bringing Good Food to Others: Investigating the Subjects of Alternative Food Practice". *Cultural Geographies*, núm. 15, 431-447.
- Harvey, D. 2004. "The 'New' Imperialism: Accumulation by Dispossession". *Socialist Register* 40: 63-87.
- Heynen, N. y P. Robbins. 2005. "The Neoliberalization of Nature: Governance, Privatization, Enclosure and Valuation". *Capitalism Nature Socialism* 16: 5-8.
- Hopwood, B., M. Mellor y G. O'Brien. 2005. "Sustainable Development: Mapping Different Approaches". *Sustainable Development* 13: 28-52.
- Katz, C. 2015. "Dualities of Latin America". *Latin American Perspectives* 42 (4): 10-42.
- Kricheff, D. 2012. "Market Environmentalism and the Re-animation of Nature". *Radical Anthropology* 1: 17-25.
- Larson, A. M. y F. Soto. 2008. "Decentralization of Natural Resource Governance Regimes". *Annual Review of Environment and Resources* 33: 213-39.
- Lemos, M. C. y A. Agrawal. 2006. "Environmental Governance". *Annual Review of Environment and Resources* 31: 297-325.
- Liverman, D. M. y S. Vilas. 2006. "Neoliberalism and the Environment in Latin America." *Annual Review of Environment and Resources* 31: 327-363.
- Martin, P. M. 2005. "Comparative Topographies of Neoliberalism in Mexico". *Environment and Planning A* 37 (2): 203-220.
- McAfee, K. y E. N. Shapiro. 2010. "Payments for Ecosystem Services in Mexico: Nature, Neoliberalism, Social Movements, and the State". *Annals of the Association of American Geographers* 100 (3): 579-599.
- McCarthy, J. y S. Prudham. 2004. "Neoliberal Nature and the Nature of Neoliberalism". *Geoforum* 35 (3): 275-283.
- Martínez Rangel, R. y E. Soto Reyes Garmendia. 2012. "El Consenso de Washington: la instauración de las políticas neoliberales en América Latina". *Política y Cultura* 37: 35-64.

- Meyer, L. 1993. "El presidencialismo. Del populismo al neoliberalismo". *Revista Mexicana de Sociología* 55 (2): 57-81.
- Perreault, T. 2013. "Dispossession by Accumulation? Mining, Water, and the Nature of Enclosure on the Bolivian Altiplano". *Antipode* 45 (5): 1050-1069.
- Perreault, T. 2014. "What Kind of Governance for What Kind of Equity? Towards a Theorization of Justice in Water Governance". *Water International* 39 (2): 233-245.
- Perreault, T. y P. Martin. 2005. "Geographies of Neoliberalism in America Latina". *Environment and Planning A* 37 (2): 191-201.
- Polanyi, K. 1944. *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press.
- Sader, E. 2008. *Posneoliberalismo en América Latina*. Buenos Aires: Instituto de Estudios y Formación de la CTA; Clacso.
- Seoane, J. 2006. "Movimientos sociales y recursos naturales en América Latina: resistencias al neoliberalismo: configuración de alternativas". *Sociedade e Estado* 21 (1): 85-107.
- Sullivan, S. 2009. "Green Capitalism, and the Cultural Poverty of Constructing Nature as Service Provider". *Radical Anthropology* 3: 18-26.
- Sullivan, S. 2012. "Banking Nature? The Spectacular Financialisation of Environmental Conservation". *Antipode* 45 (1): 198-217.

Neoliberalización de la naturaleza a través del programa de Pago por Servicios Ambientales en México: diversidad de efectos y multiplicidad de visiones

Fernanda Figueroa

Angela Caro-Borrero

Universidad Nacional Autónoma de México

Introducción¹

En México, desde la década de 1980, el modelo económico se orientó hacia el neoliberalismo, vertiente de la economía política que busca que el Estado retraiga sus funciones reguladoras para facilitar el libre mercado y abrir nuevos espacios de inversión (Castree 2008a). Se presupone que el Estado es incapaz de promover el desarrollo económico debido a su ineficiencia. En México, como en otros países, el viraje hacia el neoliberalismo se tradujo en el surgimiento de nuevas redes de actores (instituciones gubernamentales, organismos internacionales de financiamiento, empresas privadas y organizaciones

¹ Agradecemos a las comunidades, ejidos y pequeños propietarios que compartieron con nosotros sus ideas y reflexiones. La Comisión Nacional Forestal (Conafor) financió la evaluación externa gracias a la cual se obtuvieron los datos que se analizan aquí. El Programa Universitario de Estudios sobre Sustentabilidad–Universidad Nacional Autónoma de México (antes PUMA) brindó apoyo logístico. Agradecemos a todo el equipo coordinador y de campo de dicho proyecto porque lo hizo posible. La recopilación de información en campo y su sistematización la realizaron Lucía Almeida Leñero, Dulce Ma. Espinosa de la Mora, Linda García Arias, Georgina Vences Ruiz, Angela Caro-Borrero y Gabriel Torales.

no gubernamentales [ONG]) alineados bajo los mismos principios ideológicos, y que han facilitado y promovido procesos de privatización de bienes de propiedad social, la mercantilización de bienes y servicios que no estaban integrados al mercado y la adaptación de políticas públicas para facilitar la privatización y la ampliación de los mercados (Igoe y Brokington 2007; Castree 2008a; Durand 2014).

Actualmente, la política ambiental mexicana, particularmente la dirigida a la conservación de los ecosistemas, está profundamente influida por este enfoque. Las instituciones ambientales mexicanas se encuentran estrechamente vinculadas con complejas redes de actores globales involucradas en la conservación neoliberal —por ejemplo, con instituciones multilaterales de financiamiento, grandes ONG internacionales de conservación y corporaciones transnacionales— a través de flujos de financiamiento y directrices sobre las estrategias para lograr conservar los espacios naturales (Sardon y Faust 2006; Büscher et al. 2012). Estos conglomerados promueven lo que ellos mismos llaman soluciones “gana-gana”, por medio de estrategias que, en teoría, simultáneamente promueven el desarrollo de la población local, conservan la naturaleza y ofrecen oportunidades para la inversión (Igoe y Brokington 2007). Finalmente, se han creado fondos y fideicomisos privados, así como productos financieros para la conservación de la naturaleza (Igoe y Brokington 2007; Wilshusen 2010; Durand 2014). Una de las consecuencias de estas transformaciones es que el Estado ha cedido parte de la gestión ambiental a nuevos actores (ONG y empresas), quienes han ganado importancia en la toma de decisiones sobre la política pública y financian diversos programas de conservación, reforestación y restauración de ecosistemas (Sardon y Faust 2006; Durand 2014).

Los mecanismos que se han creado en el contexto de la conservación neoliberal buscan regular la relación entre las comunidades rurales y su entorno a través del mercado. Para ello, impulsan intervenciones de desarrollo para que los dueños de los recursos realicen actividades económicas que no impliquen el uso directo de dichos recursos. Así, estos dejan de ser la base directa de la subsistencia, bajo el supuesto de que es necesario alejar capital y trabajo de actividades que “degradan los ecosistemas” (Ferraro 2001).

De esta forma, se impulsan proyectos de pago por servicios ambientales (PSA), bioprospección o ecoturismo, en contraposición, por ejemplo, con las actividades agropecuarias y forestales que se caracterizan de forma generalizada como amenazas para la conservación. Se busca que las actividades alternativas constituyan incentivos monetarios directos derivados de la conservación para los dueños de los recursos, a fin de que los campesinos comercialicen los servicios ambientales² (SA) y se transformen en empresarios rurales. El supuesto que subyace a esta estrategia es que solo se puede conservar la naturaleza si se le asigna un valor de mercado y si su conservación reditúa ganancias directas a los dueños de los recursos (Büscher et al. 2012; Durand 2014). Por lo tanto, estas estrategias requieren la mercantilización de la naturaleza y de los elementos de libre acceso que la conforman (oxígeno atmosférico, paisajes, genes o agua; Castree 2008a, 2008b).

Existe evidencia de que las estrategias neoliberales para la conservación han tenido efectos sociales negativos en distintos contextos geográficos (Igoe y Brockington 2007); sin embargo, también se argumenta que estas estrategias se expresan de formas distintas en función del contexto en que se desenvuelven. En este sentido, Castree (2008a) sugiere que las ideas y los planteamientos neoliberales difieren de sus expresiones concretas, es decir, de su implementación en terreno, por lo que les llama procesos de neoliberalización. Wilshusen (2010), por ejemplo, muestra que los cambios producidos por los procesos de neoliberalización pueden tener resultados mixtos, tanto social como ambientalmente, por lo que es necesario evitar hacer generalizaciones sobre sus efectos. Desde una perspectiva más amplia, Norman Long (2007) explica que los proyectos derivados de las intervenciones de desarrollo se transforman localmente a través de complejos procesos sociopolíticos.

Uno de los mecanismos de mercado más populares ha sido el programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA). En México, este instrumento se convirtió, entre 2003 y 2015, en la principal estrategia del Gobierno para contrarrestar la deforestación. Su principal objetivo es “impulsar el reconocimiento

² También llamados servicios ecosistémicos.

del valor de los servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas forestales, agroforestales y recursos naturales, además de apoyar la creación de mercados de estos servicios” y, adicionalmente, mejorar las condiciones de vida de las comunidades forestales (Pagiola, Arcenas y Platais 2005). A la luz de las ideas sobre los procesos de neoliberalización de la naturaleza, es necesario cuestionar de qué manera se expresa localmente el PSA y qué tipo de procesos socioambientales induce; además, se requiere analizar la forma en que este instrumento se transforma frente a las diferentes realidades socioambientales en las que se desarrolla. Este capítulo examina el funcionamiento del programa en México y las perspectivas locales sobre su operación, a través de dos ejes principales: la reconfiguración de actores sociales involucrados en la regulación ambiental y la forma en la que se insertan los beneficiarios del PSA en esta estructura, por un lado, y la reconfiguración de la relación de los dueños de los bosques con su entorno, por el otro. El texto se desarrolla en cinco secciones. En primer lugar, se exponen brevemente los métodos utilizados; posteriormente, se aborda el funcionamiento general del PSA y las principales críticas que se han desarrollado sobre este mecanismo; a continuación, se aborda el funcionamiento del PSA en México, seguido del análisis de las perspectivas locales sobre la operación del programa, para finalizar con una breve discusión de los resultados.

Métodos

Este análisis parte de los datos obtenidos durante el trabajo de campo en una evaluación sobre el funcionamiento del PSA a escala nacional; esta se realizó con base en la aplicación, entre febrero y mayo de 2012, de 154 encuestas a beneficiarios del PSA de 31 comunidades y ejidos,³ y a 48 beneficiarios de

³ Los ejidos y las comunidades agrarias son las figuras de tenencia social de la tierra en México. Los primeros fueron dotaciones de tierras realizadas a través de la Reforma Agraria durante buena parte del siglo XX, como resultado de la Revolución mexicana. Las segundas son restituciones de tierras a comunidades indígenas que podían comprobar

TABLA 1
 Número de predios apoyados por el psa y encuestas aplicadas,
 correspondientes a 37 municipios en 9 estados de la República Mexicana

Estado	Propiedad privada		Ejidos y comunidades agrarias	
	Número de predios	Número de encuestas	Número de predios	Número de encuestas
Baja California	2	2	0	0
Chiapas	1	1	3	20
Estado de México	0	0	7	32
Oaxaca	0	0	4	19
Querétaro	2	2	3	19
Sonora	8	8	0	0
Tabasco	3	3	6	20
Veracruz	28	28	2	9
Yucatán	4	4	6	35
Total	48	48	31	154

Fuente: Elaboración propia.

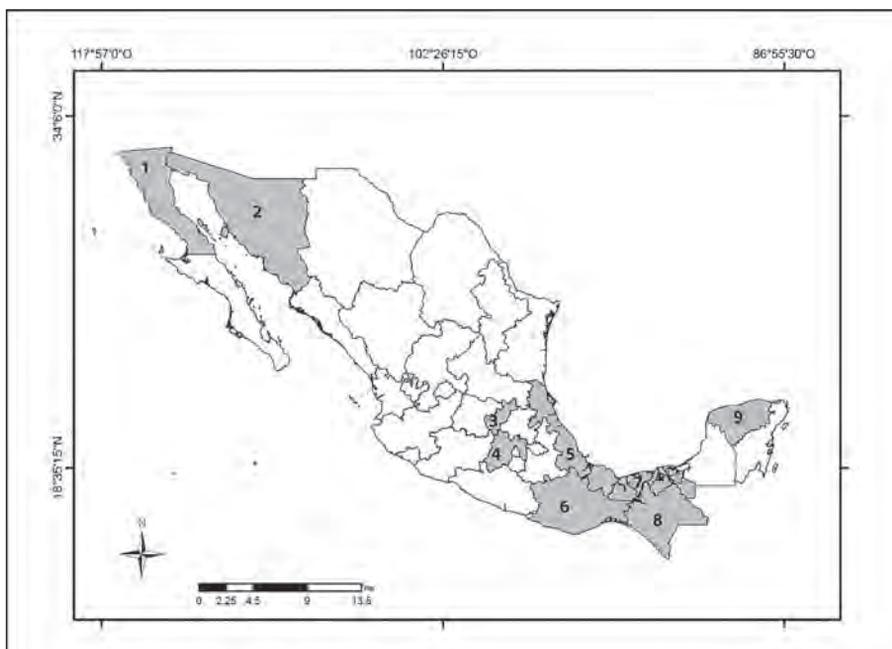
propiedad privada de igual número de predios,⁴ todos ellos elegidos aleatoriamente y distribuidos en nueve estados de la república: Baja California, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán (tabla 1; figura 1).⁵

su ocupación ancestral. Las reformas neoliberales de principios de la década de 1990 permitieron a los ejidos un esquema opcional de manejo individual-privado sobre las tierras parceladas, lo que llevó a un abanico de situaciones diversas que conforman híbridos de tenencia social y privada (Pérez-Castañeda y MacKinlay 2015).

⁴ Los predios privados pueden corresponder a arreglos híbridos (privado-social), como las asociaciones y agrupaciones. Es común que varios pequeños propietarios se organicen para alcanzar la superficie mínima requerida para participar en el programa y que tomen decisiones comunes en figuras similares a las asambleas, que son los espacios de toma de decisión en ejidos y comunidades agrarias.

⁵ Las encuestas se realizaron como parte de la evaluación complementaria del ejercicio de los programas Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos S-110 y Pago por Servicios Ambientales Derivados de la Biodiversidad S-136. Ejercicio fiscal 2010 (PUMA-UNAM 2012), en el que participaron diversos académicos y estudiantes de diferentes grados de la Universidad Nacional Autónoma de México.

FIGURA 1
Ubicación de los estados de la República Mexicana
en los que se aplicaron las encuestas



Nota: 1. Baja California, 2. Sonora, 3. Querétaro, 4. Estado de México, 5. Veracruz, 6. Oaxaca, 7. Tabasco, 8. Chiapas, 9. Yucatán.

Fuente: Elaborado por Verónica Aguilar Zamora.

Al margen de la aplicación de las encuestas, se registraron por escrito los comentarios y aclaraciones que realizaban los beneficiarios sobre la conservación de los bosques, las actividades productivas, la organización, la vida comunitaria y el funcionamiento del PSA.⁶ La información se transcribió textualmente en el programa Microsoft Word y se analizó con el programa Atlas. ti (v.1.0.45[185]), con base en un árbol de códigos diseñado con los temas

⁶ En el registro de testimonios participaron Dulce Ma. Espinosa de la Mora, Angela Caro-Borrero, Lucía Almeida-Leñero, Gabriel Torales, Georgina Vences Ruiz y Linda García-Arias.

abordados en este estudio. Si bien no se trató de un esfuerzo sistemático de recolección de datos, los testimonios recabados reflejan una gran heterogeneidad y riqueza que no es posible detectar a través de las respuestas a preguntas cerradas propias de las encuestas. Dicha heterogeneidad se evidenció aun cuando la diversidad de posiciones frente al programa puede estar subrepresentada, debido a la selección de los encuestados: varios predios de propiedad social, dadas las limitaciones de tiempo y financiamiento del proyecto, fueron elegidos mediante el apoyo y la guía del técnico forestal de los predios o por las autoridades comunales y ejidales.⁷ Los detalles sobre la muestra y los análisis cuantitativos de los datos derivados de las encuestas se pueden consultar en Almeida-Leñero et al. (2014, 2017) y Figueroa et al. (2016). En el reporte de los testimonios se omiten el nombre de los entrevistados y el de las comunidades y ejidos a los que pertenecen para salvaguardar su anonimato.

El programa de Pago por Servicios Ambientales

El PSA fue definido por Wunder (2008) como una transacción voluntaria entre al menos un *vendedor* y un *comprador*, ambos bien definidos, de un servicio ambiental (SA; captura de carbono, agua, biodiversidad, etc.), que también debe estar bien delimitado. Cuando el SA no se puede definir fácilmente, se presupone que un determinado uso del suelo favorece su provisión; por ejemplo, la conservación en pie de un bosque se traduce directamente en una mayor provisión de agua, en comparación con otros usos del suelo, como la agricultura. Este instrumento ha ganado gran popularidad a escala global, en

⁷ La toma de decisiones en las comunidades y ejidos en México se realiza a través de la asamblea general, que constituye el espacio legal designado para la negociación, discusión y decisión sobre la vida comunitaria, así como acerca de la distribución de la tierra y el uso de los bienes comunes. En la asamblea solo tienen voto quienes cuentan con derecho legal a la tierra (comuneros/ejidatarios). La asamblea elige a las autoridades comunales/ejidales cada tres años, las cuales incluyen a un presidente (comisariado), un tesorero y un secretario de bienes comunales/ejidales. Estas autoridades son quienes representan legalmente a la comunidad.

particular en los países en vías de desarrollo, como una estrategia de política pública para conciliar los objetivos de desarrollo social y la conservación de los recursos naturales.

La idea de pagar por el cuidado de los bosques y, por lo tanto, de mantener la provisión de SA ha resultado muy atractiva en el ámbito de la economía ambiental, a pesar de que la lógica del pensamiento neoliberal ha sido profundamente cuestionada. Esta popularidad deriva de que se presenta como un enfoque que integra la conservación de la naturaleza y el desarrollo social bajo el supuesto de que ambos objetivos son compatibles y su relación carece de contradicciones, lo que subestima la enorme complejidad que caracteriza a ambos ámbitos (Büscher et al. 2012; Gómez-Baggethun y Muradian 2015).

Cabe recordar que previo a los procesos de descentralización y neoliberalización, el esquema de gobernanza ambiental en el sector forestal se caracterizó por el control centralizado del Estado, el cual ha sido el principal interlocutor para las comunidades forestales, ya fuese en contextos de conservación estricta o de aprovechamiento forestal. En varios episodios a lo largo de la historia de México, los bosques fueron concesionados a empresas privadas, con lo que diversas comunidades fueron excluidas del aprovechamiento y control de sus propios bosques. En menor medida, hubo episodios en los que se impulsó la forestería comunitaria, como en la década de 1980, cuando diversos movimientos sociales lograron terminar con el sistema de concesiones privadas y se impulsó el desarrollo de las empresas forestales comunitarias (Merino-Pérez y Segura-Warnholtz 2007; Boyer 2015). Hacia el final del siglo xx se reduce el apoyo, de por sí magro, al desarrollo de las empresas forestales comunitarias y se empiezan a desarrollar los mecanismos económico-ambientales, entre ellos, el PSA.

El PSA es un esquema promovido y diseñado originalmente por organismos internacionales e instituciones multilaterales de financiamiento, como el Banco Mundial (BM), con el apoyo de grandes ONG internacionales dedicadas a la conservación. Este conglomerado global de actores delineó las características que debería tener el esquema (Shapiro-Garza 2013), que en diversos países se traduciría en modificaciones a las leyes e instituciones nacionales para su funcionamiento. Estas configuraciones nacionales varían entre sí, pero usualmente

en ellas se ha dado la confluencia entre el Estado, ONG nacionales, empresas privadas y, en pocos casos, los usuarios de los servicios (Corbera, Kosoy y Martínez 2007). Así, el PSA establece un nuevo esquema de gobernanza ambiental en las comunidades forestales, al incluir nuevos actores con un gran poder de decisión y al transformar las relaciones sociales involucradas en la toma de decisiones, interacciones que comprometen a los beneficiarios a manejar parte de su territorio en función de una serie de lineamientos generales sobre los que tienen poca posibilidad de influencia (Hejnowicz et al. 2014). Lo anterior significa que, si bien se han involucrado más actores, las comunidades locales no necesariamente incrementaron su peso en la toma de decisiones ni su capacidad de gestionar sus recursos forestales. En este sentido, de acuerdo con O'Neill (2001), las soluciones de mercado, como el PSA, son mecanismos para definir y defender una distribución particular del poder social.

El PSA se diseña e implementa de forma tal que las comunidades forestales se insertan de manera desventajosa en el programa. Con ello nos referimos al poco peso que tienen estas en los procesos de toma de decisiones en los que intervienen actores sociales con influencia global y nacional, y en los que se definen desde la forma en la que opera el programa, hasta los lineamientos de manejo de los bosques, incluida la manera de calcular los montos que se les paga a las comunidades y sus obligaciones. Estos elementos se configuran como procesos de exclusión (Parkins y Mitchell 2005; Peterson 2011). Aunque las comunidades forestales tienen poco poder de negociación real, participan en el programa de manera voluntaria, en buena medida, por sus altos niveles de marginación social (Kosoy y Corbera 2010; Gómez-Baggethun y Muradian 2015; Figueroa et al. 2016). Además, como otros programas de política pública, el PSA puede favorecer o profundizar las inequidades existentes en las comunidades forestales, donde prevalecen asimetrías en el acceso a la información y en el reparto de beneficios (Cinner et al. 2012; Caro-Borrero et al. 2015a; Perevotchikova y Rojo-Negrete 2015; Almeida et al. 2017). En términos generales, estas inequidades no son consideradas en el diseño y la aplicación del programa, el cual parte de un concepto utilitario de justicia social (Kolinjivadi et al. 2015) que presupone que la acumulación de capital se traduce automáticamente en justicia social, sin considerar las inequidades

prexistentes en diversos ámbitos, así como la diversidad de perspectivas, historias de vida, posiciones sociales y oportunidades emergentes.

En este esquema, los dueños y poseedores de los bosques se convierten en *proveedores de servicios*. Esta transformación modifica políticamente su posición frente a otros actores (Corbera 2012), pues dejan de ser considerados como los legítimos propietarios de los recursos para ser simplemente proveedores de servicios, lo que debilita su control sobre los primeros; por ejemplo, al ser proveedores de servicios, sus acciones y decisiones estarán delimitadas por la obligatoriedad de proveer dichos servicios, y no guiadas por sus propios criterios y valoraciones, como podrían ser las formas tradicionales de manejo de recursos.

En la mayoría de los esquemas que se desarrollan en América Latina, las condiciones planteadas por Wunder (2008) no se cumplen, pues aún no se han desarrollado mercados de servicios; en cambio, funcionan como un sistema de incentivos o recompensas (Corbera et al. 2007; Muradian et al. 2010). A menudo, los mecanismos de PSA se caracterizan por la intervención del Gobierno como comprador, en algunos casos con el acompañamiento directo de ONG, que juegan un papel importante como intermediarios en la movilización de recursos (Corbera, Kosoy y Martínez 2007). Aun cuando el esquema no funcione todavía como un mercado abierto de servicios, como veremos más adelante, los beneficiarios se ven inmersos en una lógica de mercado que se va diseminando a través del diseño y las reglas de operación del programa, pero también por medio de los discursos movilizados por este, asociados a una comprensión particular de los bosques y de sus dueños en su papel de proveedores.

Este punto se asocia con la resignificación de la relación de las comunidades forestales con su entorno. Los partidarios de estos mecanismos plantean que estos son capaces de modificar el comportamiento de los dueños de las tierras al transformar su relación con los bosques mediante una nueva “valoración”. Se pretende que esto ocurra a través de la integración de los costos y beneficios de la conservación al mercado (*i. e.* internalizar las externalidades) mediante la valoración económica de los bienes públicos o de propiedad común. A través de estos mecanismos, también se espera una transformación en la conducta de los usuarios de los servicios (por ejemplo, los habitantes de las ciudades), quienes usualmente no asumen ningún costo por estos beneficios

(Engel, Pagrola y Wunder 2008). Sin embargo, esta explicación ignora, por un lado, la enorme y compleja red de actores, las asimetrías de poder y la distribución desigual de costos y beneficios implicados en los esquemas de conservación neoliberal, en particular en el PSA (Corbera, Kosoy y Martínez 2007; Büscher et al. 2012), y por el otro, las implicaciones de estas nuevas formas de valoración de los bosques (Kosoy y Corbera 2010).

La movilización de discursos sobre el significado y valor de los bosques, y sobre cómo debe de ser su relación con las comunidades forestales se articula en parte a través de los procesos de capacitación y talleres, que reconfiguran los elementos y funciones de los ecosistemas como bienes de mercado. En estos discursos también se resignifica la relación productiva de las comunidades forestales con los bosques, pues se concibe como contraria a los objetivos del programa; se plantea así la exclusión de otros usos del bosque, al tiempo que se caracterizan negativamente las actividades productivas desarrolladas en él (Büscher et al. 2012; Kolinjivadi et al. 2015).

Esta nueva valoración tiene como objeto la mercantilización de componentes particulares de estos ecosistemas, lo que se expresa en los discursos movilizados por el programa, que junto a la operación del PSA pueden transformar la relación entre las comunidades forestales y sus bosques, reduciéndolos únicamente al valor de mercado de ciertos atributos o elementos, con lo que se erosionan otras formas de valoración (Kosoy y Corbera 2010). Incluso algunas comunidades forestales se han opuesto a la aplicación del PSA porque representa la mercantilización de sus sistemas de vida y la venta de su patrimonio (Gómez-Baggethun y Muradian 2015). El proceso de mercantilización de los bosques también puede afectar negativamente los mecanismos de acción colectiva y las motivaciones para participar en el trabajo voluntario de manejo y conservación de los bosques (Muradian 2013; Muradian y Cárdenas 2015).

El programa de Pago por Servicios Ambientales en México

En México, más del 50 % de las superficies forestales están en manos de ejidos y comunidades agrarias, de manera que existen cerca de treinta mil comunidades

forestales, en las que viven casi doce millones de personas frecuentemente en condiciones de pobreza (Merino y Martínez 2014). Este es el contexto general en el que se implementa el PSA, cuyo desarrollo es el resultado del creciente apoyo de agencias internacionales, como el BM, para promover mecanismos de mercado relacionados con la conservación. Debido a la extensión de las áreas forestales y a la densidad de población rural, el PSA mexicano ha sido uno de los más grandes en el mundo, y las solicitudes de ingreso siempre rebasan la disponibilidad de recursos financieros (Alix-García, Shapiro y Sims 2010). Los fondos que sostienen al programa son fundamentalmente federales, junto con aportaciones del Global Environmental Facility (GEF) del BM, pero también han participado grandes consumidores de agua, como algunas empresas transnacionales. En el periodo 2003-2011, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) asignó 6 012 millones de pesos para el programa de PSA, destinados a 5 085 proyectos de conservación, en una superficie de 3 113 000 ha. Adicionalmente, se apoyaron 760 proyectos locales de conservación (2004-2009), con una inversión de 85 millones de pesos, que beneficiaron a más de 5 800 ejidos, comunidades y pequeños propietarios en todo el país (Conafor 2011).

El pago por hectárea para el PSA es de entre 382 y 1 100 pesos anuales. Estos pagos difieren en función del tipo de ecosistema, con lo que se busca compensar los costos de oportunidad asociados a la conservación. Aun cuando estos montos son insuficientes⁸ para tener un impacto significativo en las condiciones de vida de las comunidades forestales y los propietarios privados, y muchas veces no cubren los costos de oportunidad, la demanda para ingresar al programa ha crecido incesantemente (Shapiro-Garza 2013).

Los mecanismos que se establecieron inicialmente fueron el programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH), a partir de 2003, y el programa para “Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales por Captura de Carbono y los Derivados de la Biodiversidad y para Fomentar el Establecimiento y Mejoramiento de Sistemas Agroforestales” (PSA-Cabsa), desde el

⁸ Los ingresos de las familias rurales en 2013, en promedio, fueron de 3 693.42 pesos mensuales, tomando en consideración todas las fuentes de ingreso (trabajo asalariado, remesas, programas gubernamentales, renta de tierras, etc.; Coneval 2013).

año 2004. En 2006, los dos programas se fusionaron en uno solo, denominado Servicios Ambientales, que ahora forma parte del paquete de programas de ProÁrbol. Actualmente, y después de una serie de modificaciones, el programa cuenta con cinco categorías de pago por servicios: hidrológicos, biodiversidad, sistemas agroforestales, captura de carbono y elaboración de proyectos. A través del tiempo, estos programas han evolucionado y se han transformado por influencia del diseño institucional del Gobierno mexicano, por intereses políticos particulares y por la influencia, en sus inicios, de movimientos sociales como “El campo no aguanta más”. De este modo, el programa se ha distanciado del esquema original planteado por el BM (Shapiro-Garza 2013).

Debido a la reconfiguración que se generó en el esquema del PSA en México, uno de los objetivos no previstos del diseño original, pero establecido en el programa mexicano, fue el de reducir los niveles de pobreza de las comunidades marginadas, por lo que se les da prioridad para participar (Shapiro-Garza 2013; DOF 2014). A cambio del incentivo económico, los beneficiarios se comprometen a realizar las actividades estipuladas dentro del “Programa de mejores prácticas de manejo” (PMPM) o “Guía de mejores prácticas de manejo” (GMPM), como actualmente se le conoce. Este documento prescribe una serie de actividades de vigilancia, monitoreo y acciones de manejo en los predios (Conafor 2015). Parte de las obligaciones a las que están sujetos involucra la contratación de un técnico forestal que desempeñe la función de intermediario entre ellos y la institución, e idealmente guía y acompaña a los beneficiarios, desde los trámites iniciales como postulantes al programa hasta la ejecución de la GMPM y la elaboración de los informes periódicos para la renovación.

Si bien la Conafor sostiene que dicha asesoría técnica lleva al fortalecimiento de las capacidades técnicas y organizativas de las comunidades forestales, lo cierto es que una de las consecuencias de los cambios en la legislación forestal en la década de 1990 fue que los técnicos dejaron de formar parte de la estructura gubernamental y ahora funcionan en un mercado libre y poco regulado, en el que las comunidades forestales les pagan por sus servicios como profesionistas independientes. Esto ha limitado fuertemente el acompañamiento,

la formación de capacidades y la calidad de los servicios técnicos, particularmente en las comunidades con menos recursos (Taylor y Zabin 2000).

Actualmente, del monto anual que reciben las comunidades y propietarios privados por participar en el programa, entre 30 y 50 % (dependiendo del tipo de bosque y, por lo tanto, del pago por hectárea) está etiquetado para usarse exclusivamente en las actividades prescritas por el propio programa (Conafor 2015). Esto significa que, además de la inversión en trabajo que realizan, deben invertir en estas actividades parte de la retribución por la provisión de SA.

Las perspectivas locales sobre el PSA y los procesos de neoliberalización

Iniciaremos esta sección con una caracterización muy general de los predios incluidos en el estudio. Casi 50 % de los sitios apoyados por el PSA a nivel nacional están en condiciones de alta marginación. Del total de predios visitados, alrededor de 20 % corresponde a zonas indígenas, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), aunque casi 70 % de los entrevistados dijo que se considera a sí mismo indígena. Las zonas en las que se aplicaron las encuestas cuentan en general con un bajo acceso a servicios, por ejemplo, los educativos; lo que se traduce en que solo 66 % de los beneficiarios consultados había concluido la educación primaria. Por su parte, la edad promedio de los beneficiarios entrevistados era de 51 años, lo que refleja el envejecimiento de los dueños de los bosques en México, que obedece en parte a la emigración de los jóvenes por falta de oportunidades económicas y por el poco acceso a derechos de propiedad de la tierra (Merino-Pérez 2012).

En cuanto a los rasgos productivos, en prácticamente todos los predios visitados la principal actividad productiva es la agricultura, aunque en aquellos con condiciones adecuadas también encontramos actividades agroforestales, que incluyen el cultivo de café bajo sombra (Chiapas, Oaxaca y Veracruz). En cinco estados los entrevistados mencionaron la ganadería como actividad importante (Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tabasco, Yucatán), mientras que las

actividades forestales comerciales estaban presentes también en otros cinco estados (Chiapas, Estado de México, Querétaro, Veracruz y Yucatán). La piscicultura y la pesca dulceacuícola se encontraron en Estado de México y Oaxaca, mientras que la pesca marítima se mencionó en Tabasco y Yucatán. La apicultura solo se mencionó en el estado de Yucatán, y en muy pocos casos se hizo referencia al trabajo asalariado como fuente alternativa de ingresos.

Encontramos, por otro lado, a partir de los testimonios de los propios entrevistados, algunos rasgos en común sobre lo que perciben como sus problemas y preocupaciones más relevantes. En los predios que se ubican dentro de áreas protegidas hay coincidencia sobre las dificultades económicas enfrentadas por la población por la restricción en el acceso y uso de los recursos que se establece en estas zonas (Chiapas, Tabasco). En otros estados, los entrevistados también expusieron su preocupación por las condiciones de vida, como la carencia de escuelas y centros de salud (Chiapas), la necesidad de emigrar en busca de trabajo asalariado por la crisis agrícola (Veracruz, Oaxaca) o limitaciones productivas asociadas a las condiciones climáticas (Sonora, Tabasco, Yucatán). A su vez, también mencionaron procesos en los que son afectados por actores externos más poderosos y frente a los que se encuentran en una situación de desventaja en cuanto a la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos naturales, por ejemplo, la presencia de una mina de mercurio que afecta los cuerpos de agua (Querétaro), la contaminación por actividades de extracción petrolera (Tabasco), la operación de transnacionales ligadas a la comercialización de café y el alto nivel de intermediarismo y conflictos con ingenios azucareros, que afectan la viabilidad económica de los productores (Veracruz y Tabasco), así como conflictos con grandes productores de soya transgénica que afectan la exportación de miel (Yucatán). Finalmente, en Baja California se mencionó la preocupación por la violencia ligada al crimen organizado y al narcotráfico, mientras que en otros dos estados se mencionó a la tala clandestina, ligada también a la operación del crimen organizado y a la corrupción de autoridades estatales (Estado de México, Querétaro). Estos elementos brindan un panorama muy general sobre algunos factores que afectan las condiciones de vida de los beneficiarios del PSA, así como del tipo de procesos que se desarrollan en sus contextos socioecológicos.

Inserción desventajosa en el diseño y operación del programa

La configuración de actores involucrados en el PSA descrita en secciones anteriores coloca a las comunidades forestales en una posición subordinada con la que tienen poca influencia en el diseño y la implementación del programa. Esta subordinación se expresa, entre otros fenómenos, en su poca posibilidad de incidir en la toma de decisiones, en la forma en que se entablan las relaciones con otros actores involucrados y en la distribución de costos y beneficios.

Posibilidades de incidir: participación social y acceso a la información

Los beneficiarios se insertan en el programa a través de su relación con la Conafor y con el asesor técnico forestal, quien, como vimos, opera como un profesionista independiente. La liberalización de los servicios técnicos, es decir, su conversión en servicios privados, no necesariamente ha modificado las relaciones históricas, verticales y autoritarias, entre la institución, los asesores y las comunidades forestales. Por ejemplo, algunas de estas interacciones se caracterizan por dinámicas de discriminación:

Cuando vamos a las instituciones, nos tratan de indios, y merecemos un respeto, nosotros cumplimos con metas y reforestación (Entrevistado del Estado de México).

El desempeño del programa y las consecuencias que tiene sobre las comunidades dependen en buena medida de la relación que el técnico establezca con ellas. En algunos casos, los beneficiarios expresan que los técnicos no desarrollan un acompañamiento cercano a la comunidad sobre la operación del programa y el manejo de los bosques; también señalan procesos de exclusión asociados con el lenguaje utilizado, que suele ser español y con un alto contenido técnico:

El técnico no habla maya, con trabajo hablamos con él, nos escribe cosas, pero casi no le entendemos (Entrevistado de Yucatán).

En cambio, en otras comunidades se han generado relaciones de confianza y apoyo con el técnico, quien establece una interacción más horizontal con los beneficiarios, a quienes incluso apoya en sus procesos organizativos o en proyectos de desarrollo económico. Algunos de ellos, por ejemplo, buscan un acercamiento no excluyente por las diferencias de lenguaje:

El técnico lleva a un traductor de maya que nos explica en nuestro idioma lo que él nos dice y la información de los talleres (Entrevistado de Yucatán).

Otra expresión de la inserción desventajosa de los beneficiarios en el programa es inherente al diseño, pues siempre requieren ayuda de un intermediario (el técnico forestal), quien idealmente acompaña a las comunidades y pequeños propietarios en el proceso de ingreso y ejecución del programa. Esto se debe a que los procesos son complejos y poco accesibles para los beneficiarios:

Se nos dificultó al tratar de entender los escritos, las obligaciones, son demasiadas. Necesitamos de la ayuda de Conafor [...] investigar con quién se hacía, viajar y hacer trámites (Entrevistado del Estado de México).

El programa propone que eventualmente los dueños de los bosques se inserten en transacciones mercantiles en las que se comercializan SA, lo que conlleva a riesgos derivados de las fuertes asimetrías de poder entre los actores que potencialmente estarían involucrados. Muy probablemente, las comunidades forestales estarían en desventaja frente al Gobierno, ONG conservacionistas y empresas, aunque son posibles otras configuraciones. Uno de los problemas para la inserción de las comunidades forestales en estos esquemas, y en general para su participación en el programa, son las fuertes limitaciones en el acceso a la información, la cual constituye una base fundamental de la equidad (Corbera, Kosoy y Martínez 2007; Almeida et al. 2017).

Las comunidades forestales básicamente acceden a la información sobre el programa a través de su relación con la institución (Conafor) y con los técnicos forestales. Mediante talleres, se busca que los beneficiarios del programa se apropien del concepto de SA y de la idea de venderlos como mecanismo para conservar los bosques. Encontramos una gran carencia de información sobre cómo está estructurado el programa, sobre su operación y los actores involucrados, así como una gran heterogeneidad en la forma en que los individuos han integrado los conceptos sobre los SA en sus propios discursos y la forma en la que se relaciona este nuevo marco conceptual con sus propias formas de observar el funcionamiento de sus bosques y sus actividades productivas. Por ejemplo, en algunos casos los beneficiarios se han aprendido el discurso sin poder comprenderlo y sin conocer el funcionamiento del programa y de la institución:

Aunque podemos repetir la información, no sabemos decir qué significa o qué es, no sabemos bien por qué, no sabemos qué cosa es Conafor (Entrevistado de Yucatán).

Mientras tanto, otros conciben los servicios ambientales como los productos que tradicionalmente comercializan gracias a sus actividades económicas:

Mi predio no proporciona ningún servicio ambiental ahora; tal vez con el tiempo, cuando crezcan los árboles, se podrán cortar, pero eso no me va a tocar a mí (Entrevistado de Veracruz).

La Coca-Cola nos compra limones, y queremos que alguna otra compañía nos apoye para sembrar árboles (Entrevistado de Yucatán).

Otros beneficiarios vinculan el buen estado de sus bosques con beneficios para la propia comunidad asociados a los medios de subsistencia, como la producción de oxígeno y agua, un ambiente limpio, pasturas para el ganado,

presencia de fauna, buen estado de las tierras, madera para construcción, entre muchos otros:

El oxígeno, el ramoneo para las vacas y otros animales que comen en el cerro, limpieza, la madera para las casas [...] limpieza del medio ambiente (Entrevistado de Querétaro).

La vegetación, parcelas sanas, no acabar con lo que tenemos en las montañas, animales, oxígeno, agua, aire, sombra, el clima, buena tierra para sembrar, la polinización de las flores para los apicultores y, en general, porque se beneficia a todos (Entrevistado de Veracruz).

Y hay quienes identifican un buen estado de sus bosques con SA para otras comunidades o regiones:

Agua, como la que va a Jalpan [otra comunidad] (Entrevistado de Querétaro).

Mi predio es parte de los pulmones de Baja California y de la sierra de Juárez (Entrevistado de Baja California).

También hay algunas voces críticas sobre la uniformidad del contenido de los talleres y la capacitación, debido a que no se incorpora la variedad de condiciones ambientales en las que opera el programa y las diferencias que deben existir, por lo tanto, en las prácticas de conservación o manejo. Se trata de muy pocos casos en los que los beneficiarios posicionan su propio conocimiento sobre el funcionamiento de los bosques frente al impartido en los talleres:

Nos dan teoría para que la estudiemos, pero una cosa son los estudios y otra lo que realmente se puede hacer con el predio, que en muchos casos no compagina [...] sí he aprendido algo, pero hay que aplicarlo de acuerdo al razonamiento de la zona; por ejemplo, nosotros nos hemos basado en nuestra experiencia

para reforestar, y no [en] la teoría del centro del país (Entrevistado de Baja California).

El acceso a la información está mediado por el hecho de que los talleres se imparten en español y frecuentemente se utiliza lenguaje técnico y en formatos poco accesibles para las comunidades rurales, lo que puede constituir una forma de exclusión, si se considera que muchos de los beneficiarios son hablantes de lengua indígena monolingües o hablan español con dificultad, de forma que participan en algo que no logran comprender del todo:

Que haya más continuidad, más pláticas, y en idioma chontal, para que se facilite (Entrevistado de Tabasco).

Que nos hablen en nuestro idioma, que se hagan películas y sea más visual la información que nos dan (Entrevistado de Oaxaca).

Finalmente, los talleres suelen impartirse en las cabeceras municipales —esto es, la ciudad más importante de cada municipio—, en donde se realiza la mayor parte de las interacciones con las instituciones gubernamentales; sin embargo, muchas de las comunidades forestales se encuentran en sitios remotos, por lo que las limitaciones de recursos económicos y las carencias en infraestructura vial dificultan la asistencia a los talleres y, en general, cualquier gestión relacionada con programas gubernamentales:

Batallan los compañeros por el dinero. Teníamos que cooperar para sacar el plano del terreno, para que llegara el comisariado a vueltear [ir y venir], por los viajes que él hacía para Villaflores a Conafor (Entrevistado de Chiapas).

En el grupo de cafetaleros [...] tuvimos problemas respecto a los gastos que tuvimos que hacer en viajes a Xalapa, en copias y demás requerimientos, además de que tuvimos que agruparnos para conseguir los apoyos (Entrevistado de Veracruz).

Otra de las expresiones de la inserción desventajosa de las comunidades forestales es su poca posibilidad de incidir en el programa. Shapiro-Garza (2013) describe cómo, en un principio, el diseño del programa fue influido por el movimiento social “El campo no aguanta más”; sin embargo, después de ese proceso, las comunidades forestales en realidad han tenido poco peso en el diseño general y en las subsecuentes transformaciones del programa, particularmente en su forma de operación.

En la mayoría de las comunidades forestales, y en algunos casos de la propiedad privada, se han desarrollado mecanismos para la participación social en la toma de decisiones sobre el territorio, pero tienen pocas posibilidades cuando se trata de incidir en los lineamientos de los programas gubernamentales. Esto se traduce, en el caso del PSA, en que comúnmente tienen poca influencia en las prescripciones sobre el manejo del bosque y sus recursos, lo que puede erosionar los arreglos institucionales locales de toma de decisiones y las posibilidades de negociar con actores externos en el futuro.

Una de las formas en las que se limita la participación en el PSA es la prescripción de actividades de manejo plasmada en el “Programa de mejores prácticas de manejo” (PMPM). Este documento contiene un conjunto de actividades obligatorias a realizar en los bosques, así como un conjunto de actividades “deseables”. Las primeras son inamovibles, mientras que las segundas están sujetas a negociaciones entre el técnico y los beneficiarios, de manera que en conjunto eligen las que se llevarán a cabo; sin embargo, aquí también encontramos una gran heterogeneidad de experiencias, por ejemplo, casos en los que efectivamente los beneficiarios pueden negociar algunas de las actividades a realizar en los predios apoyados, así como otros en los que los beneficiarios no tienen ninguna influencia en la toma de decisiones sobre sus tierras, con lo que pierden control sobre parte de su territorio:

No participamos en las decisiones sobre el área apoyada, sino solo acatamos lo que nos designa el programa (Entrevistado de Oaxaca).

Estaríamos más involucrados para cumplir con las normas de la Conafor, para dar sugerencias. Las normas están restringidas y queremos entender por qué las restricciones (Entrevistado del Estado de México).

Estos testimonios sugieren una gran variación en el acceso a la información y en el acompañamiento técnico. En algunos casos, las comunidades se insertan en el programa con claras deficiencias en el acceso y manejo de la información, mientras que, en otros, esta desventaja es claramente menor, cuando los beneficiarios pueden acercarse de otro modo a la información, en sus propios términos, lo que les permite tener una postura crítica frente a ella. De cualquier modo, hay límites más bien generalizados en cuanto a las posibilidades de los beneficiarios para negociar el diseño y los lineamientos del programa.

Distribución de costos y beneficios

El complejo entramado de actores a través del cual se construyen los mecanismos económico-ambientales, como el PSA, hace necesario preguntarnos acerca de la distribución de costos y beneficios, particularmente sobre la forma en la que el costo de la conservación se concentra en los dueños de los bosques. Los proponentes de estos esquemas sostienen que las compensaciones otorgadas a los beneficiarios permitirán elevar la calidad de vida de las comunidades forestales, pero los pagos son reducidos, sobre todo si se considera el valor económico (incommensurable) que en realidad tienen las funciones ecosistémicas de los bosques.

El impacto de los pagos en el bienestar de los habitantes de las zonas forestales es heterogéneo y varía en función de numerosos factores, como el monto, la forma en que se distribuyen los ingresos, el costo de oportunidad y el nivel de marginación de las comunidades y los propietarios privados que participan en el programa. La percepción generalizada en las comunidades incluidas en el estudio es que los pagos del programa son bajos, especialmente

cuando se comparan con las ganancias de muchas de las actividades productivas agropecuarias y forestales:

El apoyo es muy limitado [...] y vender [la tierra] deja mucho más, sea para urbanizar o sembrar (Entrevistado de Veracruz).

Además, las reglas de operación del programa exigen que entre 30 y 50 % del monto total otorgado se invierta en las obras de conservación prescritas en el PMPM:

La directiva entiende que el dinero que les dan es para los trabajos, pero la gente creía que el dinero era para repartirse entre ellos (Entrevistado de Yucatán).

El dinero es para el bosque y poco, cuando el apoyo económico sea realmente importante, habrá algo para la familia (Entrevistado del Estado de México).

El resultado es que ni es un pago por provisión de servicios, ni una compensación o reconocimiento por un buen manejo de los bosques. La insuficiencia del pago hace que, en algunos casos, incluso no se cubra el costo de las obras de conservación prescritas:

Si se termina el pago, tenemos que seguir haciéndolas [las actividades del programa] para terminar el trabajo; por la extensión del área, el pago no es suficiente (Entrevistado de Oaxaca).

Usamos como veinticinco litros de gasolina [para la lancha] y dos horas de viaje, cuatro horas en total, para vigilar las tierras todo el día [...] parece que no se trata de lo que se gana (Entrevistado de Tabasco).

Algunos beneficiarios también se quejan de la disyuntiva que se da entre realizar sus actividades productivas y las actividades prescritas por el programa, lo que representa un esfuerzo que no se compensa con los ingresos derivados del PSA:

Se trabaja más a partir del PSA porque tienen que cumplir con los trabajos y obligaciones de Conafor, además de los trabajos en la parcela (Entrevistado de Querétaro).

Por otro lado, algunos beneficiarios han sido afectados negativamente por la operación del programa, pues, contra su voluntad, han tenido que abandonar actividades productivas:

Ya no tenemos terrenos para donde ampliarnos y tenemos el compromiso de no sembrar (Entrevistado de Tabasco).

La gente estaba acostumbrada a cultivar, y al suspenderlo lo sintió mucho la gente (Entrevistado de Chiapas).

Encontramos voces de disentimiento, pues algunos observan que existe una relación desigual entre los dueños del bosque y otros actores involucrados, quienes se benefician de la provisión de servicios:

Se sacrifica a la gente que vive en el monte y las industrias son las que más ganan (Entrevistado de Chiapas).

Sin embargo, por los altos niveles de pobreza en muchas de las comunidades forestales en México, los ingresos del PSA han tenido un impacto positivo en la economía de las familias. Por ejemplo, en algunas comunidades que dependen casi exclusivamente de los subsidios gubernamentales, incluido el PSA, se considera el apoyo como un factor positivo para reducir la necesidad de migrar:

Solicitamos el programa para que la gente no tenga que migrar para buscar trabajo, también para detener la tala clandestina (Entrevistado de Oaxaca).

Para algunas comunidades cuya principal fuente de ingresos no son los subsidios, el financiamiento obtenido a través del PSA ha significado una

mejora en sus ingresos, la cual además les ha permitido financiar actividades de conservación que les interesan y que realizaban antes del ingreso al programa, como la vigilancia, las brigadas contra incendios, el saneamiento o la reforestación:

De abril a junio la pesca es mala, y ahí es cuando el programa nos ayuda, porque de eso nos mantenemos (Entrevistado de Yucatán).

Ya no estamos pensando de dónde sacar el dinero para hacer las obras (Entrevistado de Veracruz).

Por otro lado, parte del dinero destinado a las obras de conservación establecidas en el programa es asignado al pago de jornales, lo que tiene un efecto positivo porque se traduce en la generación de empleos temporales; sin embargo, el alcance de estos beneficios depende de su distribución, pues se pueden destinar todos los jornales a un grupo determinado de ejidatarios o comuneros, a todos los comuneros, a los hijos de estos que no tienen derechos agrarios y son avecindados, o a contratar personal externo.

Algunos del ejido creían que no les beneficiaba porque dejaron de sembrar, pero después se dieron cuenta de que les beneficiaba a sus hijos [por el pago de jornales] (Entrevistado de Chiapas).

El dinero restante comúnmente se reparte de forma equitativa entre los beneficiarios; sin embargo, al igual que con lo destinado a las obras de conservación, esto no siempre es así, de forma que el impacto económico varía en función de la manera en que se distribuyen estos fondos:

Dan mucho a unos y poquito a otros (Entrevistado de Querétaro).

En otros casos, este mismo monto, o parte de él, se invierte en obras de beneficio comunitario, como mejoras en la escuela, el centro médico, los medios de transporte y comunicación, el equipamiento para labores contra incendios,

entre otros. Cuando esto ocurre, los beneficios del programa se distribuyen más ampliamente entre la población, ya que no favorece únicamente a quienes tienen derechos agrarios, sino a toda la comunidad.

Aprovechamos el recurso para comprar una camioneta para bienes comunales, computadoras para la escuela, radio banda civil para brigadistas y dimos un apoyo para el palacio municipal (Entrevistado de Oaxaca).

Otro elemento que influye en el alcance de los beneficios económicos para los predios de propiedad común es la transparencia y rendición de cuentas. Esta se suele dar a través de informes verbales o escritos en la asamblea general, y la distribución de los beneficios es producto de acuerdos entre todos los ejidatarios o comuneros; sin embargo, en algunas comunidades se observa falta de transparencia:

Por el mal manejo del comisario no pude opinar, solo sé que una parte [del dinero] se usó para el monte, y el resto desconozco para qué (Entrevistado del Estado de México).

La comunidad no ha sido informada del uso del dinero y hay conflictos entre los ejidatarios y el comisariado. El comisariado ha cambiado las reglas: no permite trabajar a los que no son ejidatarios, quiere contratar gente concaac [seris, grupo étnico], le pedimos corte de caja [informe financiero] y no lo hizo. No toma en cuenta la opinión de los ejidatarios. Maneja el dinero sin informar cómo, y no trabaja (Entrevistado de Querétaro).

Finalmente, en los testimonios también se detectó la percepción de que la participación en el programa se ha traducido en ciertos beneficios no monetarios, como el cuidado de sus predios, el acercamiento entre generaciones, una mayor participación de las mujeres y los jóvenes, así como cohesión comunitaria.

Transformación de la relación con los bosques

En México, la relación de las comunidades forestales con los bosques está asociada con una larga y compleja historia, que pasa por constituirse como refugio para las comunidades indígenas durante la Colonia o como fuente de madera para la primera industrialización durante el porfiriato, por la Reforma Agraria y el reparto de tierras posrevolucionarios, así como varios episodios en los que las comunidades forestales han sido alienadas de sus propios bosques, gracias a las concesiones a empresas privadas y a una inestabilidad legal que ha generado incertidumbre sobre la explotación y el acceso a los recursos forestales (Boyer 2015). Además, las comunidades forestales mantienen diversas concepciones sobre sus bosques, producto de una alta diversidad cultural alimentada por la presencia de varios grupos indígenas y campesinos. Las relaciones entre la gente y los bosques configuran los modos de vida y las maneras de apropiación, e influyen en las formas de organización local y en las relaciones que se han establecido con actores externos, al mismo tiempo que son influidas por las intervenciones externas, como los programas gubernamentales productivos, de conservación o de desarrollo.

Suponer que la visión comercial de los bosques es un elemento reciente, inducido por el PSA, sería erróneo; no obstante, el PSA parte de la incorporación al mercado de funciones de los bosques, traducidas en beneficios tangibles e intangibles que antes no constituían una mercancía. El programa y los discursos que se movilizan a través de él, en algunos casos, influyen en las valoraciones que la población hace del bosque, de sus tierras y de sus propias actividades económicas; en otras, se mezclan las visiones locales con lo aprendido en los talleres y en la capacitación, y finalmente, en otros casos, los beneficiarios pueden observar con mirada crítica los contenidos de la capacitación y la asesoría técnica.

Reconfiguración de elementos naturales como bienes de mercado

De acuerdo con la visión neoliberal de la conservación, los beneficiarios de programas como el PSA pueden insertarse exitosamente en el mercado de SA

si cuentan con la capacitación que les brinde las facultades técnicas necesarias y la información suficiente sobre las transacciones en las que se verán involucrados; no obstante, antes que nada, el programa requiere que los beneficiarios adopten el concepto de SA y conozcan la lógica de cómo se producen, así como los principios bajo los que opera el programa. Se propone que, a través de la capacitación y de la propia comercialización de SA, los dueños de los bosques los “valorarán adecuadamente”. Se presupone que, si comprenden los SA, su importancia y las posibilidades de beneficiarse económicamente de ellos, también los concebirán de forma distinta, es decir, bajo la lógica del mercado de la conservación. En el arreglo institucional se concibe que el papel de la institución y de los técnicos forestales en la capacitación y el acompañamiento es esencial, y que estos cambios esperados se darán a través de los talleres y la asesoría técnica que brindan los técnicos forestales.

Los talleres se enfocan fundamentalmente en que los beneficiarios puedan incorporar a su discurso el concepto de SA, el cual implica que los beneficios intangibles y tangibles derivados del funcionamiento de los ecosistemas se transforman en bienes sujetos de mercado. Por otro lado, se hace hincapié en que la conservación estricta y los lineamientos de manejo que prescribe el programa son los que generan la mayor cantidad de SA, por lo que los usos productivos suelen ser estigmatizados. Finalmente, se enfatiza la necesidad de que ellos mismos busquen compradores potenciales de dichos servicios y que establezcan transacciones comerciales con ellos.

La influencia del PSA puede observarse en la incorporación de la valoración construida por la institución: el programa no considera el uso productivo del bosque, sino que parte de la conservación estricta (Perevochtchikova 2014) combinada con la mercantilización, lo que provoca una alienación de las comunidades respecto a sus bosques. Esto significa reducir las posibilidades de desarrollar formas productivas sustentables de manejo de los bosques (Merino y Martínez 2014), y a la vez se mantiene un incentivo monetario para conservar, que no necesariamente se mantendrá a largo plazo. Estos rasgos pueden incidir en las motivaciones para conservar y en las distintas concepciones de la conservación que se expresan a lo largo y ancho del país.

Reconfiguración de las propias prácticas y de lo que es bueno para el bosque

La transformación de la concepción del bosque viene acompañada muchas veces de la construcción de juicios negativos hacia las formas de producción local, hacia sí mismos y hacia su propio conocimiento:

No hacemos lo que nosotros creemos [...] porque con esto [el programa] logramos despertar sobre qué es conservar y qué no es conservar (Entrevistado de Oaxaca).

[...] nos gustaría recibir el taller para saber más y poder entender cómo tratar los animales, las plantas, porque nadie sabe nada (Entrevistado de Yucatán).

Nos explicaron que eso ayuda a tener más agua, para enseñarle a nuestro hijo, construir, no destruir (Entrevistado del Estado de México).

Sin embargo, otros han asumido plenamente el papel de proveedores de servicios comercializables y tienen la intención de buscar compradores con quienes establecer relaciones de mercado. Más aun, ahora ven la conservación del bosque como una actividad vinculada a dichas transacciones:

El árbol no tiene precio pero el cafetal sí; si se pone precio al bosque, lo conservas (Entrevistado de Oaxaca).

[...] pensamos buscar un apoyo con Pronatura [ONG conservacionista mexicana] y la Coca-Cola para reforestar (Entrevistado de Yucatán).

Vamos a buscar platicar con las comunidades cercanas y empresas como Corona, Bimbo y Coca-Cola para poder seguir conservando (Entrevistado de Oaxaca).

Como otra cara de la misma moneda, a veces conciben que el estado “adecuado” de sus bosques es el establecido por los lineamientos de la Conafor:

Para que se conserve el bosque hay que darle mantenimiento, si no, el bosque se ve viejo, descuidado [...] trabajamos para eso (Entrevistado del Estado de México).

[Deben] *estar bien trabajados, reforestados, con mejoras, chaponeos, tinas ciegas y brechas; con zanjas trinchera para el suelo y el agua; limpio, arbolado, bien trabajado, cuidado, acondicionados* (Entrevistado del Estado de México).

También se ha generado la percepción negativa sobre usos de suelo distintos del bosque conservado, que incluso han llevado al abandono de la producción de alimentos, cuando en realidad diferentes configuraciones del paisaje generan distintas gamas de servicios ambientales:

Dejar de sembrar milpa en mi parcela es como servicio ambiental (Entrevistado de Veracruz).

Además, por falta de información, en algunas comunidades se han dejado de realizar actividades productivas completamente compatibles con la conservación, incluso necesarias para el bosque, como el caso de la apicultura:

Dejamos de trabajar la apicultura en el predio inscrito en el PSA (Entrevistado de Yucatán).

En algunas comunidades se percibe la amenaza de coerción, que influye directamente sobre los medios de vida y sobre la relación de la gente con su entorno:

El nivel de vida ha empeorado porque ya no podemos sembrar maíz por la amenaza de Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente] de que nos va a quitar el programa (Entrevistado de Chiapas).

En este contexto, destaca la situación de los beneficiarios que, además, viven dentro de áreas naturales protegidas (ANP), donde ya existían fuertes

restricciones al uso productivo de las tierras y los bosques. Aunque el apoyo económico derivado del PSA puede considerarse como un alivio en relación con las consecuencias económicas derivadas de dichas restricciones, para algunos beneficiarios es insuficiente y se trata de una presión adicional para conservar:

Ya no podemos desarrollarnos más, por ejemplo, criar ganado, hacer milpa; por eso muchos quieren que les compren las tierras [...] sentimos que estamos solo para cuidar (Entrevistado de Chiapas).

También hay casos en los que se expresa claramente la tensión entre las visiones inducidas por el programa y las de las comunidades forestales, pues algunos beneficiarios cuestionan los lineamientos de conservación del programa, los cuales no reconocen ni incorporan el conocimiento y manejo tradicional de las comunidades, la diversidad de condiciones ambientales en los bosques en los que operan ni las condiciones económicas de la población:

Que las instituciones molesten menos, porque la gente sabe lo que tiene que hacer para conservar [...] que evalúen con más detenimiento los impactos de la conservación, escuchando las opiniones y puntos de vista de los beneficiarios. Están mejores las áreas donde tenemos manejo que las que tenemos de conservación que no se toca. Por esas políticas nos están echando a perder el bosque (Entrevistado del Estado de México).

Si visitaran los predios, se darían cuenta que con una limpia se puede sacar más madera sin talar, pero como deben esperar el estudio de impacto, la madera en lugar de ayudar, perjudica. En la zona de manejo hay menos incendios (Entrevistado del Estado de México).

Estas tensiones se asocian con el hecho de que el programa tiene limitaciones al prescribir el mismo conjunto de actividades para todo el país, sin considerar la diversidad de contextos ecológicos en los que se desarrolla. Por otro lado, algunas de las acciones que se indican pueden tener efectos

contraproducentes para el funcionamiento de los ecosistemas. Se ha documentado que las zanjas-trincheras (excavaciones rectangulares en el suelo, con el objeto de aumentar la infiltración de agua) se traducen en pérdida de una gran cantidad de suelo por erosión y, en muchas ocasiones, fragmentan el sistema radicular de los árboles (Cotler et al. 2015). Por otro lado, las presas de gavión, que se construyen a lo largo de los cursos de agua con el fin de controlar inundaciones, fragmentan los ecosistemas acuáticos, con efectos en la dinámica de nutrientes y en la estructura y funcionamiento de las comunidades biológicas (Mazari-Hiriart et al. 2014; Caro-Borrero et al. 2015b).

Las tensiones que existen entre la conservación promovida por el PSA y las actividades productivas también pueden observarse a partir de las intenciones a futuro que tienen las comunidades sobre las tierras que ahora están sujetas al programa. La conservación estricta no es problemática en los casos de tierras de bajo potencial productivo:

[En ausencia del programa, en esas tierras] *no se estaría haciendo nada, por tratarse de una tierra árida y no de labor, se dejaría como está* (Entrevistado del Estado de México).

Porque en esa área no se puede hacer otra cosa más que conservar, la siembra no se da (Entrevistado de Chiapas).

En otros casos, los beneficiarios expresaron su intención de conservar con o sin PSA, debido a que tienen un interés en ello que no está necesariamente ligado al programa:

Cuando termine el programa vamos a dedicar el área para conservar [...] para dejarle algo a nuestros hijos, para que no sufran como nosotros hemos sufrido (Entrevistado de Chiapas).

Finalmente, también se expresan intenciones de utilizar esas tierras para alguna actividad productiva, pues muchos de ellos no se pueden dar el lujo de mantener intacto el bosque:

[Sembraríamos] *para poder vivir nosotros mismos, porque ¿de dónde vamos a buscar trabajo, si estamos acostumbrados a trabajar el machete?* (Entrevistado de Chiapas).

Si el programa nos sigue apoyando, seguimos conservando; pero sí sembraríamos maíz, frijol o café [...] este es nuestro patrimonio y de ahí comemos (Entrevistado de Veracruz).

También fue común que los beneficiarios expresaran la intención de integrar la conservación del bosque con actividades productivas; para ellos, conservar y trabajar el bosque no son mutuamente excluyentes:

Se conservaría usando para madera, ganado y ramas para arreglos, porque hay que darle uso; se usaría y vendería la madera, por necesidad, por la necesidad económica del futuro, hay que conservarlo (Entrevistado del Estado de México).

Pensamos hacer aprovechamiento forestal ahí, porque tenemos palma y acahuales, y vamos a poder sobrevivir, además tenemos la bodega y el vivero, y podemos sembrar y comer de ahí (Entrevistado de Chiapas).

Las interacciones entre la visión institucional y tradicional de los bosques y su significado también se reflejan en las motivaciones para participar en el programa, las cuales pueden ser muy diversas. Algunas comunidades forestales, de acuerdo con los entrevistados, estaban interesadas en la conservación y ven el PSA como un apoyo para facilitar las actividades para lograrlo, o bien los esfuerzos de conservación se han traducido en cambios en los bosques que les interesa mantener:

Platicamos del cuidado de nuestros bosques. Fue nuestra iniciativa, porque si nos acabamos el bosque, no vamos a tener nada. Tenemos esa mirada (Entrevistado de Oaxaca).

Teníamos el interés de conservar porque veíamos que estaban destruyendo el monte, las aves y la fauna silvestre, pero no teníamos el capital ni las herramientas para cuidar (Entrevistado de Yucatán).

Antes no había cuidado, la gente quemaba sin lástima los cerros; ahora ya se están recuperando, ahora le llamamos la atención a la gente que desmonta, ya lo prohibimos. Conafor nos está asesorando sobre el control de incendios (Entrevistado de Chiapas).

Cuando llegamos, hace veinticinco años, habían muchos animales, y fuimos destruyendo la montaña y los animales se fueron lejos. Y ahora no queremos destruir más, para ver más aves y tigres, y nos interesa que nos apoyen para cuidar, para que nuestros hijos conozcan al tigre y al pavón, el jabalí y el tepezcuintle. Ahorita ya vemos que vienen los animales otra vez (Entrevistado de Chiapas).

Para muchos beneficiarios, tanto la conservación como las actividades productivas son motivos relevantes para participar en el programa, pues se vincula la conservación de los bosques con sus modos de vida a través del mantenimiento de condiciones necesarias para la producción y la prevención de desastres:

Si se acaban los manglares, se acaba la pesca y los pescadores también (Entrevistado de Yucatán).

Nuestra idea es tener árboles para protegernos del río cuando crece y hace daños (Entrevistado de Veracruz).

Reconfiguración de la organización social
para el bosque y el trabajo voluntario

La organización social y la toma de decisiones sobre el manejo del territorio en las comunidades forestales tiene como base la asamblea general, en la que

participan todos los ejidatarios y comuneros. En prácticamente todas las comunidades visitadas, los beneficiarios reconocen la existencia de reglas internas sobre el manejo del territorio y, en menor medida, de sanciones asociadas a estas normas:

La comunidad levanta actas de que no se puede talar. Se pide permiso para uso doméstico, para casas (Entrevistado de Chiapas).

En muchos casos, el incumplimiento de las reglas genera sanciones que, de acuerdo con los testimonios, pueden ser económicas, pago con trabajo o incluso, como último recurso, el desconocimiento de los derechos como ejidatario o comunero, o con la remisión del infractor a las autoridades ambientales. Sin embargo, en algunos casos, aun cuando existen sistemas de reglas y sanciones, su efecto se ve limitado por la corrupción:

Sí existen [reglas], pero no se cumplen por las extorsiones de la autoridad (Entrevistado del Estado de México).

Se cuenta con un ordenamiento territorial, pero no se cumple porque la gente no respeta linderos ni la protección del área de reserva (Entrevistado del Estado de México).

Por otra parte, a pesar de que existe el espacio de la asamblea para la toma de decisiones colectiva, llegar a acuerdos sobre el manejo del territorio puede ser un proceso complejo, lo que debe ser tomado en consideración como un elemento relevante en el manejo de los recursos comunes:

El excomisariado propuso que se hiciera un reglamento sobre el manejo del territorio para que la gente cumpliera más con el cuidado, pero la gente no aceptó [...] la gente del pueblo es algo conflictiva [...] cada quien con lo que tiene (Entrevistado de Veracruz).

La mayoría de las comunidades forestales contaba con grupos organizados para el cuidado y manejo de sus bosques desde antes de su ingreso en el

programa (Figueroa et al. 2016). El engranaje del PSA se apoya en esta organización, y la mayoría de las comunidades percibe que el funcionamiento de estos grupos se fortaleció a partir de la operación del programa:

Ahora que recibimos el apoyo, hacemos con más gusto las vigilancias que siempre hemos hecho [...] ahora estamos más juntos que antes, casi no hacíamos asambleas o nos reuníamos tanto, veíamos al bosque como un mal negocio (Entrevistado de Yucatán).

Sin embargo, este fortalecimiento muchas veces está sustentado en el pago de jornales contemplados como parte del apoyo para realizar las actividades relacionadas con la operación del programa. Con ello se corre el riesgo de que los comuneros y ejidatarios, que antes participaban voluntariamente en actividades de beneficio común a través de los *tequios* o faenas —como se les llama en México—, ahora esperen ser remunerados, con lo que se puede socavar el fundamento de la acción colectiva:

Antes de recibir estos apoyos, la gente trabajaba bien, y ahora solo esperan el recurso y ya no trabajan (Entrevistado de Oaxaca).

Estos testimonios sugieren que si bien se pueden fortalecer los grupos organizados favoreciendo ciertas actividades relacionadas con el programa e incluso otras de interés para las comunidades, al mismo tiempo, los pagos directos pueden erosionar las formas de organización y trabajo comunitario y voluntario que existen en muchas comunidades rurales de México.

En el caso de los predios privados, en México son comunes los arreglos híbridos entre el funcionamiento de la propiedad común y la pequeña propiedad. Por ejemplo, entre los cafetaleros de Veracruz, quienes son pequeños propietarios privados pero pertenecen a asociaciones, se mantienen arreglos institucionales similares a los del manejo de la propiedad común, que incluyen la toma de decisiones en asambleas donde se formulan reglamentos sobre el uso de los recursos naturales:

Nos reunimos entre vecinos, lo platicamos y nos ponemos de acuerdo, como en el caso de la prohibición de talar y cazar [...] entre los vecinos tenemos un modelo de trabajo similar, si no, se quedan afuera de la asociación (Entrevistado de Veracruz).

También en algunos casos los pequeños propietarios necesitan organizarse en una asociación para poder sumar sus superficies individuales y así lograr el área mínima susceptible de ser apoyada. Esto implica que requieren desarrollar las actividades del PSA de forma colectiva, con lo que se ha favorecido una organización social que antes no tenían:

Ahora, con mis vecinos, hago las revisiones y los monitoreos del predio, el programa nos ha beneficiado de esta manera (Entrevistado de Baja California).

En otros casos sí encontramos un funcionamiento pleno como propiedad privada, en el que las decisiones son individuales y no existen acciones colectivas para el manejo de los recursos forestales:

Somos propiedad privada y cada quien se encarga de tomar sus propias decisiones (Entrevistado de Veracruz).

En ninguno de los predios se ha creado una organización que represente a los predios vecinos, pues esto se hace de forma personal [...] no han llegado a algún acuerdo (Entrevistado de Yucatán).

Discusión y reflexiones finales

Históricamente, la política ambiental en México ha sido de carácter restrictivo, con un predominio de mecanismos de comando y control. La política forestal siguió durante muchos años estos mismos lineamientos, con concesiones a empresas privadas y públicas, vedas en distintas regiones del país y enormes dificultades para desarrollar actividades forestales maderables por parte de las

comunidades rurales (Merino 2012), al tiempo que se fomentaban actividades agropecuarias en zonas que no contaban con la vocación para ello. Aunado a lo anterior, en muchas de las superficies forestales mejor conservadas se establecieron áreas naturales protegidas (Mas y Pérez-Vega 2005). Durante un breve periodo en la década de 1980, al revocarse las concesiones privadas de los bosques, se impulsó a las empresas forestales comunitarias mediante apoyo técnico, seguimiento y formación de capacidades, y muchas de ellas se convirtieron en ejemplos internacionales de viabilidad económica y ambiental del manejo común de los bosques. No obstante, este apoyo se redujo sustancialmente, de forma que en la actualidad no se han generado condiciones adecuadas para que las comunidades forestales desarrollen, con apoyo gubernamental, un manejo forestal sustentable con el que puedan vivir de sus bosques (Merino Pérez 2012), lo que ha agravado las condiciones de pobreza y aislamiento, y ha contribuido a acentuar las relaciones asimétricas entre las comunidades forestales y el resto de la sociedad.

Como lo muestra este trabajo, la neoliberalización a través del PSA no necesariamente se ha traducido en una mejor inserción de las comunidades forestales en el conglomerado de actores e intereses que lo conforman. En su gran mayoría no cuentan con suficiente información, condición necesaria para los procesos de participación en la toma de decisiones y como instrumento de negociación. Además, pueden incidir poco en los términos en los que se desarrolla el programa y en las acciones que se impulsan en sus territorios. A partir de esta reflexión, la idea de que son soluciones gana-gana es problemática, aunque encontramos una gran heterogeneidad de situaciones.

La imposibilidad de participar y negociar las opciones de manejo de su propio territorio conlleva el riesgo de perder control sobre este. En dicho esquema de gobernanza se concibe a las comunidades locales como agentes pasivos, receptores del programa y, lejos de buscar transformar las condiciones estructurales que han mantenido a estas poblaciones en la marginación, incluso agravan las asimetrías al introducir nuevos actores nacionales y globales (Büscher et al. 2012), y al transformar las relaciones sociales, tanto hacia dentro de las comunidades como las de ellas con agentes externos.

Existe un riesgo real de que estos vínculos entre los dueños de los bosques y terceros, en condiciones de desigualdad, se traduzcan no solo en la mercantilización de la naturaleza y sus diversos elementos, sino de la apropiación de estos por parte de actores más poderosos, lo que provocaría procesos de despojo (Gómez-Baggethun y Muradian 2015), como ya ocurría en una comunidad en Veracruz, donde gracias a los esquemas de fondos concurrentes del PSA —en los que participa el Gobierno a través de Conafor—, un fideicomiso regional y la iniciativa privada, la comunidad perdió el acceso al agua en una negociación desventajosa por falta de información:

Le dieron una concesión de agua a la Coca-Cola, quien pagó cien mil pesos a Fidecoagua, y ahora tenemos que comprar agua de garrafón, mientras que la Coca-Cola está usando el agua y se la está acabando (Entrevistado de Veracruz).

A partir del surgimiento de un mercado libre de servicios técnicos y la reducción del apoyo al desarrollo de la forestería comunitaria, las condiciones para el apoyo a la formación de capacidades para que las comunidades forestales se inserten de una manera menos desventajosa y manejen adecuadamente sus recursos se deterioraron (Taylor y Zabin 2000). Aun cuando las comunidades son las que contratan a los técnicos forestales, en muchos casos se establece una relación asimétrica entre ambas partes, pues de los técnicos depende el ingreso y la permanencia en el programa, lo que les ha dado un enorme poder sobre las comunidades. Estos profesionistas además tienen la tarea de la capacitación y el acompañamiento que en muchos casos, como se mostró en este trabajo, se configuran como espacios de exclusión; sin embargo, también encontramos situaciones en las que se han dado procesos de colaboración y sinergias positivas entre las comunidades y sus técnicos, las cuales dan lugar a mejoras en el manejo de los bosques, en el desarrollo de proyectos productivos y en el fortalecimiento de las comunidades.

La distribución de costos y beneficios derivados de la operación del programa está claramente sesgada para favorecer a actores más poderosos, lo que concentra el costo de la conservación en las comunidades forestales. No

obstante, los testimonios analizados muestran que, para muchos beneficiarios, el PSA ha generado mejoras, en términos tanto económicos como sociales y ambientales; en otros casos se observan efectos negativos, lo que implica que los resultados son heterogéneos a lo largo y ancho del país, como se plantea a partir del concepto de neoliberalización (Castree 2008a; Durand 2014). Así, mientras que en algunas comunidades se agravan las inequidades internas o se erosionan valores y prácticas tradicionales de manejo y conservación, en otras cuentan con la agencia y la capacidad organizativa de aprovechar las ventajas que representa el PSA, y con ello lograr sus propios objetivos de conservación y desarrollo. El propio programa, por lo tanto, se cristaliza localmente de muy diversas maneras, dependiendo de los contextos locales y de la forma en que se desarrollan las relaciones sociales al interior de las comunidades y entre estas y los demás actores involucrados.

Relación con los bosques, actividades productivas y acción colectiva

La segmentación y mercantilización de los ecosistemas y sus funciones pueden inducir cambios en las visiones locales sobre los bosques como un todo, sobre las actividades productivas y quienes las realizan, y sobre las motivaciones para conservar o manejar sustentablemente los bosques (Kosoy y Corbera 2010; Muradian 2013; Muradian y Gómez-Baggethun 2013). Aun cuando encontramos diversas visiones sobre los bosques y la conservación, también se detectaron casos en los que existe una clara influencia del discurso del programa en las visiones expresadas por los beneficiarios, quienes denotan la necesidad de retribución directa para conservar, así como la segmentación de los bosques en elementos mercantilizables. En este sentido, el programa tiene la capacidad de influir en las representaciones de los campesinos de su entorno, que son complejas y multidimensionales, y que se traducen en formas particulares de apropiación (Kolinjivadi et al. 2015; Midler et al. 2015).

De acuerdo con Büscher et al. (2012), la reconfiguración de cuáles son las prácticas adecuadas es uno de los riesgos de la conservación neoliberal. Como resultado, el bosque se deja de ver como base del sustento y como

herencia (patrimonio material e inmaterial) de la propia comunidad, lo que resulta útil para que las comunidades forestales dejen de desarrollar actividades económicas basadas en el uso directo de sus recursos naturales (Ferraro 2001; Büscher et al. 2012). El programa tiene un impacto al proscribir y estigmatizar las actividades productivas primarias, pues parece común la noción de los propios beneficiarios acerca de que ellos mismos carecen de conocimientos y son incapaces de manejar sus propios bosques, por un lado, y por otro, de que la conservación debe ser remunerada. Esto puede tener consecuencias negativas sobre las concepciones tradicionales de manejo y cooperación, lo que se vuelve particularmente relevante, considerando que algunas de las actividades de manejo prescritas por el programa pueden tener un efecto ecológico adverso, como lo han mostrado algunos autores (Cotler 2015).

En muchos casos, el deterioro de los recursos naturales no responde a la falta de reglas, sino a la ruptura de estas, que se puede dar a través de las nuevas formas de gobernanza que no reconocen las reglas locales desarrolladas para el manejo de los recursos comunes (Duraiappah et al. 2014). En estos escenarios, las estructuras de organización y acción colectiva se debilitan por la introducción de los pagos y la posible captura de las rentas derivadas del programa por grupos de poder al interior de las comunidades, lo que a su vez agrava las inequidades preexistentes. Existe evidencia de los efectos contraproducentes que tiene el pago directo de jornales, pues pone en riesgo los lazos de confianza cuando las tareas que están en juego tienen un importante componente de obligación moral o contribución al bien común (Muradian 2013). Por otra parte, los propios pagos, particularmente en comunidades bien organizadas y fortalecidas, han generado procesos positivos, como evitar la migración, facilitar procesos de conservación que ellos mismos han decidido, consolidar sus procesos organizativos o lograr beneficios generalizados para el bienestar común.

De forma más general, cabe preguntarse, ¿por qué estas herramientas se centran en cambiar las actitudes y valoraciones de las comunidades forestales hacia los bosques sin atender las condiciones estructurales que fomentan la deforestación? Si el objetivo principal del PSA es detener la pérdida de bosques, debería considerarse la abundante evidencia existente sobre los factores

socioeconómicos y políticos asociados a la dinámica de la cobertura vegetal y a los procesos de cambio en el uso del suelo (Lambin et al. 2001; Geist y Lambin 2002; Carr, Suter y Barbieri 2004), que difícilmente se resuelven con compensaciones diseñadas con una lógica de corto plazo y no inciden directamente sobre muchas de las causas que siguen sin resolverse.

Además, se reconoce que el manejo sustentable de los bosques de propiedad común está fuertemente influido por la organización social de las comunidades forestales, que se basa en la participación activa de sus miembros en el diseño de sistemas de regulación local para el acceso y uso de los recursos (Ostrom y Nagendra 2006; Midler et al. 2015; Ostrom 2015). Entonces, ¿por qué no se promueven mecanismos contruidos de forma democrática para favorecer el control y uso sustentable de los bosques por parte de las comunidades locales? Esta pregunta es particularmente pertinente en el escenario mexicano, donde se cuenta con la experiencia exitosa de las empresas forestales comunitarias, que se convirtieron en un paradigma de sustentabilidad a escala internacional, pero que posteriormente dejaron de ser apoyadas (Merino y Segura Warholtz 2007).

El PSA constituye un mecanismo básicamente asimétrico, que no implica cambios de fondo en el manejo de los ecosistemas a nivel nacional. Los costos de la conservación, en este caso, son asumidos de forma desproporcionada por los dueños de los bosques, mientras que sus beneficios se distribuyen más ampliamente (Cinner et al. 2012; Kolinjivadi et al. 2015). El programa busca transformar las actitudes y valoraciones sobre los bosques a escala local, sin considerar la enorme complejidad asociada a los procesos de pérdida de bosques y la influencia del contexto socioeconómico y de las condiciones estructurales que generan (Carr et al. 2004). En este sentido, ¿no sería deseable que este programa se transformara para dar cabida al apoyo decidido para el manejo comunitario de los bosques, al apoyo para la transformación y comercialización de los recursos forestales junto con la conservación; que tomara en consideración la heterogeneidad socioambiental del país, y que permitiera la construcción conjunta de estrategias con las comunidades forestales? Si no se favorece el uso sustentable de los recursos naturales como base para la

subsistencia, es poco realista pensar en su permanencia a futuro, considerando las condiciones económicas de la mayor parte de las comunidades forestales.

Referencias bibliográficas

- Alix-Garcia, J. M., E. N. Shapiro, K. R. E. Sims. 2010. "The Environmental Effectiveness of Payments for Ecosystem Services in Mexico: Preliminary Lessons for REDD". Borrador. Wisconsin: Department of Agriculture and Applied Economic. <https://www.aae.wisc.edu/events/papers/DevEcon/2010/alix-garcia.05.06.pdf>.
- Almeida-Leñero, L., D. Revollo-Fernández, A. Caro-Borrero, I. Ruiz-Mallén, E. Corbera, M. Mazari-Hiriart y F. Figueroa. 2017. "Not the Same for Everyone: Community Views of Mexico's Payment for Environmental Services Programmes". *Environmental Conservation* 44 (3): 201-211. DOI: 10.1017/S0376892916000564.
- Almeida-Leñero, L., D. Revollo-Fernández, A. Caro-Borrero, F. Figueroa, D. M. Espinosa, G. Cruz y M. Mazari-Hiriart. 2014. "El pago por servicios ambientales en México 2010: una evaluación multidisciplinaria". En *Pago por servicios ambientales en México. Un acercamiento para su estudio*, coordinado por M. Perevochtchikiva, 155-178. México: El Colegio de México.
- Boyer, C. R. 2015. "Political Landscapes. Forests, Conservation, and Community in Mexico". Durham: Duke University Press.
- Büscher, B., S. Sullivan, K. Neves, J. Igoe y D. Brockington. 2012. "Towards a Synthesized Critique of Neoliberal Biodiversity Conservation". *Capitalism, Nature, Society* 23 (2): 4-30.
- Caro-Borrero, A., K. Esteve Corbera, C. Neitzel y L. Almeida. 2015a. "'We are the City Lungs': Payments for Ecosystem Services in the Outskirts of Mexico City". *Land Use Policy* 43: 138-148.
- Caro-Borrero, A., J. Carmona-Jiménez, T. González-Martínez y M. Mazari-Hiriart. 2015b. "Hydrological Evaluation of a Peri-urban Stream and its Impact on Ecosystem Services Potential". *Global Ecology and Conservation* 3: 628-644.

- Carr, D. L., L. Suter y A. Barbieri. 2004. "Proximate Population Factors and Deforestation in Tropical Agricultural Frontiers". *Population and Environment* 25 (6): 585-612.
- Castree, N. 2008a. "Neoliberalising Nature: The Logics of Deregulation and Reregulation". *Environment and Planning A* 40: 131-152.
- . 2008b. "Neoliberalising Nature: Processes, Effects, and Evaluations". *Environment and Planning A* 40: 153-173.
- Cinner, J. E., T. McClanahan, A. MacNeil, N. Graham, T. Daw, A. Mukminin, D. A. Feary, A. L. Rabearisoa, A. Wamukota, N. Jiddawi, S. J. Campbell, A. A. Baird, F. A. Januchowski-Hartley, S. Hamed, R. Lahari, T. Morove y J. Kuange. 2012. "Co-management of Coral Reef Social-ecological Systems". *PNAS* 109 (14): 5219-5222.
- Conafor (Comisión Nacional Forestal). 2011. "El programa de Pago por Servicios Ambientales". México: Conafor. <http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/7/2308Programa%20de%20Pago%20por%20Servicios%20Ambientales.pdf>.
- . 2015. "Programa Anual de Trabajo 2015, Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque". México: Conafor.
- Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). 2013. "Características productivas de los hogares rurales en México". México: Coneval. http://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/Caract_Prod_hogares_rurales.pdf.
- Corbera, E. 2012. "Problematizing REDD+ as an Experiment in Payments for Ecosystem Services". *Current Opinion in Environmental Sustainability* 4 (6): 612-619.
- Corbera, E., N. Kosoy y M. Martínez-Tuna. 2007. "Equity Implications of Marketing Ecosystem Services in Protected Areas and Rural Communities: Case Studies from Meso-America". *Global Environmental Change* 17: 365-380.
- Cotler, H., S. Cram, S. Martínez-Trinidad y V. Bunge. 2015. "Evaluación de prácticas de conservación de suelos forestales en México: caso de las zanjas trinchera". *Investigaciones Geográficas* 1 (1): 6-18.

- Cruz, A. 2016. "Más comunidades oaxaqueñas entran al mercado de bonos de carbono". *La Crónica de Hoy*, 15 de agosto de 2016, 1. <http://www.cronica.com.mx/notas/2016/976984.html>.
- DOF (*Diario Oficial de la Federación*). 2014. "Reglas de operación del Programa Nacional Forestal 2014", 31 de diciembre de 2013. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328575&fecha=31/12/2013.
- Durand, L. 2014. "¿Todos ganan? Neoliberalismo, naturaleza y conservación en México". *Sociológica* 29 (82): 183-223.
- Duraiappah, A. K., S. Tanyi Asah, E. S. Brondizio, N. Kosoy, P. O'Farrel, A. Priew-Richard, S. Subramanian y S. M. Kazuhiko Takeuchi. 2014. "Managing the Mismatches to Provide Ecosystem Services for Human Well-Being: A Conceptual Framework for Understanding the New Commons". *Current Opinion in Environmental Sustainability* 7: 94-100.
- Engel, S., S. Pagiola y S. Wunder. 2008. "Designing Payments for Environmental Services in Theory and Practice: An Overview of the Issues". *Ecological Economics* 65 (4): 663-674.
- Ferraro, P. J. 2001. "Global Habitat Protection: Limitations of Development Interventions and a Role for Conservation Performance Payments". *Conservation Biology* 15: 990-1000.
- Figueroa, F., A. Caro-Borrero, D. Revollo-Fernández, L. Merino, L. Almeida-Leñero, L. Paré, D. M. Espinosa y M. Mazari-Hiriart. 2016. "I Like to Conserve the Forest, but I Like the Cash' Socioeconomic Factors Influencing the Motivation to Be Engaged in the Mexican Payment for Ecosystem Services Programme". *Journal of Forest Economics* 22: 36-51.
- Geist, H. y E. Lambin. 2002. "Proximate Causes and Underlying Driving Forces of Tropical Deforestation". *BioScience* 52 (2): 143-150.
- Gómez-Baggethun, E. y R. Muradian. 2015. "In Market We Trust? Setting the Boundaries of Market-based Instruments in Ecosystem Services Governance". *Ecological Economics* 117: 217-224.
- Hejnowicz, A. P., D. G. Raffaelli, M. A. Rudd, P. C. L. White. 2014. "Evaluating the Outcomes of Payments for Ecosystem Services Programmes Using a Capital Asset Framework". *Ecosystem Services* 9: 83-97.

- Igoe, J. y D. Brockington. 2007. "Neoliberal Conservation: A Brief Introduction". *Conservation and Society* 5 (4): 432-449.
- Kolinjavadi, V., G. Gamboa, J. Adamowski y N. Kosoy. 2015. "Capabilities as Justice: Analysing the Acceptability of Payments for Ecosystem Services (PES) through 'Social Multi-criteria Evaluation'". *Ecological Economics* 118: 99-113.
- Kosoy, N. y E. Corbera. 2010. "Payments for Ecosystem Services as Commodity Fetishism". *Ecological Economics* 69: 1228-1236.
- Lambin, E. F., B. L. Turner, H. J. Geist, S. B. Agbola, A. Angelsen, J. W. Bruce, O. T. Coomes, R. Dirzo, G. Fischer, C. Folke, P. S. George, K. Homewood, J. Ibernón, R. Leemans, X. Li, E. F. Moran, M. Mortimore, P. S. Ramakrishnan, J. F. Richards, H. Skanes, W. Steffen, G. D. Stone, U. Svedin, T. A. Veldkamp, C. Vogel y J. Xu. 2001. "The Causes of Land-Use and Land-Cover Change: Moving beyond the Myths". *Global Environmental Change* 11 (4): 261-269.
- Lemos, M. C. y A. Agrawal. 2006. "Environmental Governance". *Annual Review of Environment and Resources* 31: 297-325.
- Mas, J. F. y B. A. Pérez-Vega. 2005. "La representatividad del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sinanp)". *Gaceta Ecológica* 74: 5-14.
- Mazari-Hiriart, M., G. Pérez-Ortiz, M. T. Orta-Ledesma, F. Armas-Vargas, M. A. Tapia, Rosa Solano-Ortiz, Miguel A. Silva, Isaura Yañez-Noguez, Yolanda López-Vidal, Carlos Díaz-Ávalos. 2014. "Final Opportunity to Rehabilitate an Urban River as a Water Source for Mexico City". *PlosOne* 9 (7). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0102081>.
- Merino-Pérez, L. 2012. "Las condiciones de las comunidades forestales mexicanas y la política pública. Recuento de desencuentros". En *La naturaleza en contexto. Hacia una ecología política mexicana*, coordinado por Leticia Durand, Fernanda Figueroa y Mauricio Guzmán, 33-63. México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM; El Colegio de San Luis.
- Merino-Pérez, L. y A. E. Martínez. 2014. *A vuelo de pájaro. Encuesta sobre las condiciones de las comunidades con bosques templados en México*. México:

- Conabio. https://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/versiones_digitales/Vuelo_Pajaro.pdf.
- Merino Pérez, L. y G. Segura Warnholtz. 2007. “Las políticas forestales y de conservación y sus impactos en las comunidades forestales en México”. En *Los bosques comunitarios de México. Manejo sustentable de paisajes forestales*, editado por D. B. Bray, L. Merino Pérez y D. Barry, 21-49. México: Semarnat; INE; Instituto de Geografía-UNAM; CCMSS; Florida International University.
- Midler, E., U. Pascual, A. G. Drucker, U. Narluch y J. L. Soto. 2015. “Unraveling the Effects of Payments for Ecosystem Services on Motivations for Collective Actions”. *Ecological Economics* 120: 394-405.
- Muradian, R. 2013. “Payments for Ecosystem Services as Incentives for Collective Action”. *Society and Natural Resources* 26 (10): 1155-1169.
- Muradian, R., E. Corbera, U. Pascual, N. Kosoy y P. H. May. 2010. “Reconciling Theory and Practice: An Alternative Conceptual Framework for Understanding Payments for Environmental Services”. *Ecological Economics* 69 (6): 1202-1208.
- Muradian, R. y E. Gómez-Baggethun. 2013. “The Institutional Dimension of ‘Market-Based Instruments’ for Governing Ecosystem Services: Introduction to the Special Issue”. *Society & Natural Resources* 26 (10): 1113-1121.
- Muradian, R. y J. C. Cárdenas. 2015. “From Market Failures to Collective Action Dilemmas: Reforming Environmental Governance Challenges in Latin America”. *Ecological Economics* 120: 358-365.
- O’Neill, J. 2001. “Property, Care, and Environment”. *Environment and Planning C: Government and Policy* 19 (5): 695-711.
- Ostrom, E. 2015. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Ostrom, E. y H. Nagendra. 2006. “Insights on Linking Forests, Trees, and People from the Air, on the Ground, and in the Laboratory”. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 103 (51): 19224-19231.
- Pagiola, S., A. Arcenas y G. Platais. 2005. “Can Payments for Environmental Services Help Reduce Poverty? An Exploration of the Issues and Evidence to Date from Latin America”. *World Development* 33: 237-253.

- Parkins, J. R. y R. E. Mitchell. 2005. "Public Participation as Public Debate: A Deliberative Turn in Natural Resource Management". *Society & Natural Resources* 18: 529-540.
- Perevochtchikova, M. 2014. "Introducción". En *Pago por servicios ambientales en México: un acercamiento para su estudio*, coordinado por M. Perevochtchikova, 9-13. México: El Colegio de México.
- Perevochtchikova, M. e I. A. Rojo-Negrete. 2015. "The Perceptions about Payments Schemes for Ecosystem Services: Study Case of the San Miguel and Santo Tomás Ajusco Community, Mexico". *Ecosystem Services* 14: 27-36.
- Pérez-Castañeda, J. C. y H. Mackinlay. 2015. "¿Existe aún la propiedad social agraria en México?". *Polis* 11: 45-82.
- Peterson, N. D. 2011. "Excluding to Include: (Non)Participation in Mexican Natural Resource". *Agriculture and Human Values* 28: 99-107.
- PUMA-UNAM (Programa Universitario de Medio Ambiente-Universidad Nacional Autónoma de México). 2012. "Evaluación complementaria del ejercicio de los programas Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos S-110 y Pago por Servicios Ambientales derivados de la Biodiversidad S-136. Ejercicio fiscal 2010". México: PUMA-UNAM.
- Shapiro-Garza, E. 2013. "Contesting the Market-based Nature of Mexico's National Payments for Ecosystem Services Programs: Four Sites of Articulation and Hybridization". *Geoforum* 46: 5-15.
- Smardon, R. C. y B. B. Faust. 2006. "Introduction: International Policy in the Biosphere Reserves of Mexico's Yucatan Peninsula". *Landscape and Urban Planning* 74: 160-192.
- Taylor, P. L. y C. Zabin. 2000. "Neoliberal Reform and Sustainable Forest Management in Quintana Roo, Mexico: Rethinking the Institutional Framework of the Forestry Pilot Plan". *Agriculture and Human Values* 17: 1-16.
- West, P., J. Igoe y D. Brockington. 2006. "Parks and Peoples: The Social Impact of Protected Areas". *Annual Review of Anthropology* 35: 251-277.
- Wilshusen, P. R. 2010. "The Receiving End of Reform. Everyday Responses to Neoliberalisation in Southeastern Mexico". *Antipode* 42 (3): 767-799.
- Wunder, S. 2008. "Necessary Conditions for Ecosystem Service Payments, Economics and Conservations in the Tropics: A Strategic Dialogue". *Conservation Biology* 21 (1): 48-58.

¿Es REDD+ un instrumento de neoliberalización? Experiencias desde Chiapas y Yucatán en el sur de México*

Tim Trench

Universidad Autónoma Chapingo

Antoine Libert Amico

Programa Mexicano del Carbono

Introducción

El proyecto Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal, mejor conocido como REDD, es un mecanismo internacional que busca mitigar los efectos del cambio climático a través de pagos que estimulen la conservación de los bosques, para incrementar la retención o captura de carbono y “evitar” las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de áreas forestales. REDD se origina en 2005, cuando un grupo de países tropicales presentó una primera versión de este mecanismo en la Conferencia de las Partes (COP-11) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La propuesta se formalizó en la COP de Bali en 2007 y se detalló en reuniones posteriores de la CMNUCC (Angelsen et al. 2013). En 2010, durante la COP-16 —celebrada en Cancún, México— se añadieron a la iniciativa objetivos de conservación y mejoras de las reservas de carbono de los bosques y su manejo sostenible, lo que dio origen a REDD+.

* Agradecemos los comentarios y sugerencias de Leticia Durand sobre una primera versión de este texto y las observaciones de un dictaminador anónimo sobre una segunda versión.

A primera vista, REDD+ parece un mecanismo eminentemente neoliberal (Büscher et al. 2012, 22), pues mercantiliza los bosques o —mejor dicho— un aspecto de ellos, al otorgar un precio al dióxido de carbono e incorporarlo al mercado. Además, el mecanismo facilitaría que las industrias (del Norte) que compran bonos de carbono sigan contaminando (*offsetting*) y transfieran la responsabilidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a otros espacios (del Sur).

El vínculo de REDD+ con los procesos de “neoliberalización de la naturaleza” ha producido que este mecanismo sea, desde su inicio, controvertido. Astuti y McGregor afirman, por ejemplo, que REDD+ busca “remodelar la forma en que valoramos, gobernamos e interactuamos con los bosques” (2015, 21; traducción propia) y observan, para el caso de Indonesia, la evolución de una nueva *episteme* a través de la “carbonización” de los bosques (2015, 34). Otros interpretan REDD+ como un mecanismo colonial para cercar (*enclose*) tierras (Cabello y Gilbertson 2012), mientras que las aproximaciones críticas de movimientos campesinos y ambientalistas señalan los riesgos de la iniciativa vinculados a la desposesión, enajenación y pérdida de control de los bosques (Larson et al. 2013; Sarmiento, Barletti y Larson 2017; Osborne et al. 2014; Barletti y Larson 2017).

Larson et al. (2016) han expresado la preocupación de que REDD+ acentúe las desigualdades de género presentes en las comunidades forestales, pues muchas veces las mujeres son excluidas de este instrumento y sus (posibles) beneficios (ver también IWGIA 2014). Para otros, REDD+ es poco realista, demasiado técnico y complejo, y constituye más bien una distracción, ya que, por ejemplo, las emisiones generadas por la deforestación y la degradación de los bosques no son tan significativas comparadas con aquellas producidas por el sector energético (Federici et al. 2015; Libert Amico 2017). Además, el financiamiento esperado para REDD+ aún no ha llegado, lo que constituye un motivo de frustración para las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros actores que esperaban financiar procesos de desarrollo bajo en emisiones ya encauzados.

Finalmente, algunos más opinan que REDD+ se ha politizado en todos sus niveles, desde las negociaciones internacionales hasta su implementación a

nivel subnacional, ya que cumple con funciones diferentes a las originalmente planteadas (Quintana Solorzano 2014).

A pesar de las críticas, los proponentes de REDD+ consideran que el programa constituye una oportunidad para promover cambios positivos y modificar las reglas del juego: “nuevos incentivos económicos, nueva información, cada vez más preocupación pública sobre cambio climático, nuevos actores y nuevas coaliciones en torno a la política pública, todos tienen el potencial de generar un cambio transformador” (Brockhaus y Angelsen 2011, 15). REDD+ ha sido identificado como “el experimento más grande de Pagos de Servicios Ambientales en el mundo” (Corbera 2012, 616) y, desde esta perspectiva, REDD+ y los fondos correspondientes ofrecen un espacio importante para la innovación y la transformación ante obstáculos estructurales como la visión sectorial y la falta de coordinación interinstitucional dentro del Gobierno en torno a temas ambientales (Rantala, Hajjar y Skutsch 2014; Libert y Trench 2016).

Es necesario mencionar que este hipotético mecanismo financiero sigue en construcción (Angelsen et al. 2018). A nivel global, REDD+ ha sufrido varias modificaciones, producto de negociaciones internacionales y de la presión de actores no gubernamentales (por ejemplo, la integración de “salvaguardas” o medidas para prevenir potenciales impactos negativos del proyecto), de manera que las acciones preparativas siguieron diferentes cauces institucionales en cada país, con resultados distintos en los territorios llamados piloto (Astuti y McGregor 2015).

Desde un principio, México fue de los países más comprometidos con la implementación de REDD+, al optar por una visión muy amplia del mecanismo y considerarlo como una estrategia integral de desarrollo rural sustentable. La *Estrategia Nacional REDD+*, publicada en agosto de 2017, busca explícitamente “promover el fortalecimiento de las estructuras de gobernanza local [e impulsar] mecanismos de gobernanza con perspectiva de género y con pleno respeto de usos y costumbres para la planeación territorial participativa” (Conafor 2017, 73-74). Con el financiamiento del Forest Carbon Partnership Fund (FCPF) del Banco Mundial, el país busca cumplir con las condiciones

definidas por las instancias internacionales que monitorean los preparativos para la plena implementación del mecanismo.

En México, las actividades preparativas se denominaron “acciones tempranas REDD+”, y se llevaron a cabo en áreas delimitadas de cinco estados del país (Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Jalisco); mientras, se establecen los arreglos institucionales, modelos de gobernanza, sistemas de monitoreo y la arquitectura financiera internacional que permitirá operar el mercado de carbono que sustentará a REDD+ a nivel nacional en el futuro (Stickler et al. 2018).

Sin embargo, a pesar de estas aspiraciones, hasta la fecha la principal expresión gubernamental del mecanismo —los Programas Especiales en Áreas de Acción Temprana REDD+ (Peaat-REDD+)— se operaron primordialmente como una extensión del programa preexistente de Pago por Servicios Ambientales (PSA) de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). La Conafor efectivamente injertó las acciones tempranas de REDD+ en los programas especiales regionales ya establecidos en cinco estados y en el existente programa de PSA (Deschamps, Zavariz y Zúñiga 2015; McDermott e Ituarte-Lima 2016). Para entender el devenir de REDD+ en México, es importante comprender la trayectoria del programa de PSA, ya que este último estableció el principio de pagos en efectivo a comunidades forestales por conservar sus bosques y fomentó nuevas redes de relaciones que adquirieron algunos rasgos de subsidio federal: un “Procampo forestal”,¹ como nos dijo el director de una ONG en la selva Lacandona (Chiapas).

Apuntes metodológicos

El presente capítulo se basa en nuestra experiencia en el proyecto de investigación “Gobernanza multinivel y gestión del carbono a nivel de paisaje”, del Centro para la Investigación Forestal Internacional (Cifor). Como parte

¹ Procampo es un pago anual por hectárea que otorgaba el Gobierno federal para apoyar la producción de maíz (posteriormente rebautizado Proagro).

del “Estudio comparativo global sobre REDD+” realizado por Cifor desde 2009. El estudio se llevó a cabo en Indonesia, México, Perú, Tanzania y Vietnam (Ravikumar et al. 2015; Larson et al. 2018), y se enfocó a analizar la participación en los procesos de toma de decisiones sobre el cambio de uso de suelo. Para esto, se empleó el concepto de gobernanza multinivel, entendido como los procesos y arreglos de toma de decisiones y política pública que rebasan las fronteras establecidas entre niveles de gobierno y sectores de la sociedad, cruzando las fronteras de lo público y lo privado y del Estado y la sociedad (Emerson, Habatchi y Balogh 2012).

La investigación de Cifor en México implicó la realización de 152 entrevistas en 10 sitios sujetos a cambio de uso de suelo en los estados de Chiapas y Yucatán,² en estas se abordaron cuestiones como los determinantes de la deforestación y degradación de los bosques, los incentivos para la revegetación o conservación de la cobertura forestal, los actores que participan (y los que no) en la toma de decisiones en la gestión territorial, así como los mecanismos de distribución de beneficios existentes y potenciales en los territorios. Los sitios seleccionados mostraban diferentes tendencias en el uso del suelo: cuatro de ellos exhibían aumentos en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI; debido a la deforestación impulsada por la expansión de la agricultura comercial o la ganadería) y seis mostraban decrementos en las emisiones por la implementación de proyectos de PSA, medidas de conservación, proyectos encaminados al desarrollo bajo en emisiones e incluso por abandono de áreas rurales.³ Aunque REDD+ todavía se encuentra en una fase piloto y se mantiene

² En Chiapas, estos “sitios de cambio de uso de suelo” fueron los municipios de Maravilla Tenejapa, Benemérito de las Américas y Mapastepec, además de la reserva de la biosfera Selva el Ocote y las laderas interiores de la Sierra Madre (polígono definido por la Alianza México REDD+). En Yucatán, los sitios de cambio de uso de suelo fueron la reserva privada El Zapotal (y su entorno), los municipios de Tizimín y Tekax, y las reservas estatales Bocas de Dzilam y Biocultural del Puuc.

³ Estas tendencias no fueron corroboradas de manera independiente, sino que su identificación se apoyaba en entrevistas con informantes clave y fuentes secundarias. Para más información sobre la metodología, ver Trench et al. (2018).

MAPA 1
Ubicación de Chiapas y Yucatán en México



Fuente: Trench et al. (2018).

desvinculado del mercado, la información recabada da pautas para entender cómo acciones tipo REDD+ se desarrollan *in situ* (Trench et al. 2018).

De los cinco estados en México con áreas de acción temprana REDD+ de la Conafor, Chiapas y Yucatán ofrecen algunos puntos de comparación interesantes en los procesos preparativos para REDD+, tanto en términos ambientales como económicos, demográficos y políticos (mapa 1). Aunque Chiapas y Yucatán no son considerados generalmente como estados forestales en el ámbito nacional (por la poca actividad forestal comercial que desarrollan), ambos tienen coberturas forestales por arriba del promedio nacional, además de tasas de deforestación mayores a la cifra nacional (tabla 1). Chiapas, con más del 18 % de su superficie decretada como área protegida,⁴ posee una

⁴ En Chiapas, las áreas naturales protegidas federales cubren una superficie de 1 168 883 ha, casi 16 % de la superficie de la entidad. Agregando las 167 000 ha de áreas protegidas

TABLA 1
Chiapas y Yucatán: bosques, selvas y tenencia

Características	México	Chiapas	Yucatán
Superficie total ('000 ha)	196437.00	7361.00	3953.00
(% del territorio nacional)	100.00	3.74	2.02
Bosques y selvas ('000 ha)	66040.00	3817.00	2813.00
(% de superficie total) ¹	34.00	51.00	71.00
Propiedad social ('000 ha)	100142.00	4356.00	2225.00
(% de superficie total)	51.00	59.00	56.00
Porcentaje de bosques y selvas en propiedad social	60.00	67.00	64.00
Dominio pleno (% de propiedad social)	3.50	0.40	3.60
Superficie de uso común (% de propiedad social)	50.00	26.00	69.00
Tasa anual de deforestación 2010-2017 (porcentaje) ¹	0.39	0.52	0.66

¹ Calculado con base en una superficie perdida >30% de dosel, tomando el promedio de los últimos 8 años.

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2013); RAN (2017); Madrid et al. (2009); Hansen et al. (2017).

mayor diversidad de ecosistemas y tipos de bosques y selvas, en tanto Yucatán cuenta principalmente con selvas bajas caducifolias. En relación con la tenencia de la tierra, los dos estados muestran perfiles similares, pero Chiapas es una entidad más poblada, más rural y más pobre, mientras que Yucatán presenta una mayor proporción de población indígena (en Yucatán, 65 % se identifica como maya yucateco; en Chiapas, 36 % de la población pertenece a 12 pueblos indígenas; tabla 2).

estatales, el porcentaje llega a más de 18 %. En Yucatán, el porcentaje de la superficie estatal en área protegida es alrededor del 7 por ciento.

TABLA 2
Chiapas y Yucatán: características socioeconómicas

Características	México	Chiapas	Yucatán
Población total 2015 (%)	119530753.00	5217908.00 4.40	2097175.00 1.80
Población urbana 2015 (%)	77.80*	49.00	84.00
Población rural 2015 (%)	22.20*	51.00	16.00
Índice de marginación 2010	16.83	31.50	19.62
Población indígena	25694928.00	1883665.00	1371552.00
Porcentaje del total	21.50	36.10	65.40
Densidad de la población personas/km ²	61.00	71.00	53.00

* Porcentaje establecido por el INEGI hasta el 2010.

Fuentes: Elaboración propia con base en INEGI (2010, 2015a, 2015b).

Estas características distintivas derivan en giros diferenciados en las estrategias REDD+. En Chiapas, en las últimas décadas, la política ambiental ha enfatizado la conservación de la biodiversidad y el establecimiento de áreas naturales protegidas federales. En Yucatán, en cambio, la preocupación se ha centrado en preservar la calidad del agua y su suministro a las ciudades (de ahí el énfasis en las cuencas y la subvención de los servicios hidrológicos por medio del programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos o PSA-H), así como en la protección de vegetación costera (donde están ubicadas la mayor parte de las áreas naturales protegidas estatales y federales). Esto era evidente en las diferentes características de las acciones tempranas REDD+ en ambos estados. La selva Lacandona en Chiapas ha sido la región con más financiamiento, ya que ocupa más de la mitad de todos los fondos dedicados a las áreas de acción temprana REDD+ entre 2010 y 2014 (Deschamps, Zavariz y Zúñiga 2015, 22). Además, en el caso de la selva Lacandona, el 75 % de los recursos fueron dedicados a una versión aumentada de PSA con poco capital destinado a actividades productivas. En cambio, Yucatán recibió la fracción

más reducida (< 5 %) de los recursos invertidos en los cinco estados con acciones tempranas REDD+.⁵

En este capítulo, centrado en los casos de Chiapas y Yucatán, planteamos una pregunta que no fue considerada explícitamente en el proyecto de investigación de Cifor: ¿es REDD+ un instrumento de neoliberalización? Esta es una pregunta relevante, dado que México fue de los primeros países en asumir los mandatos del Consenso de Washington en la década de 1980, y se argumenta que el proceso de neoliberalización de la economía mexicana persiste hoy en día (Villafuerte 2015). Para actualizar estos debates, nos interesa explorar en qué medida los fondos adicionales otorgados y prometidos por REDD+ han reconfigurado o se han articulado con el proyecto neoliberal en México. Argumentamos que, en nuestros casos de estudio en el sur del país, REDD+ constituye un nuevo espacio o campo político donde diferentes definiciones sobre el mecanismo compiten, a veces alterando el equilibrio de poder entre niveles y sectores en un contexto condicionado por coyunturas políticas internacionales, nacionales y subnacionales. Siguiendo a Agudo Sanchiz (2015), consideramos que las políticas son en gran medida producto de la intermediación y la traducción, por lo que, en el ámbito rural mexicano, que aún conserva estructuras agrarias y de intermediación política con rasgos preneoliberales, los factores contextuales muchas veces resultan determinantes para definir la forma en que las políticas neoliberales “tocan terreno”.

Del neoliberalismo a la neoliberalización

Aunque el término *neoliberalismo* se acuñó hace ochenta años, no fue sino hasta la década de 1960 que comenzó a tener presencia en discusiones sobre política pública. A partir de 1970, sus principios fueron integrados, poco a poco,

⁵ Esto no fue el caso del Programa Especial Península de Yucatán (PEPY), en donde solo el 35 % de los recursos se dedicaron a PSA, mientras que el dinero restante se empleó para silvicultura comunitaria (22 %), sistemas productores innovadores (20 %) y restauración y reforestación (9%; Deschamps, Zavariz y Zúñiga 2015).

en diferentes Gobiernos.⁶ En 1982, el Fondo Monetario Internacional (FMI) abandonó su enfoque keynesiano (que otorgaba un papel central al desarrollo de infraestructura por parte del Estado para dinamizar la economía) y abrazó el neoliberalismo, aplicando sus políticas de “ajuste estructural” a las economías del Sur global y posteriormente a los países del este de Europa tras la desintegración de la Unión Soviética. Sin duda, el neoliberalismo, a través de las acciones del Banco Mundial y del FMI, se ha vuelto cada vez más presente y ha constituido la nueva *ortodoxia* en el pensamiento político-económico del siglo XXI.

Como proyecto económico y político, el neoliberalismo está asociado con la liberalización de comercio (particularmente a nivel internacional), la privatización de empresas del Estado y la introducción de prácticas y mecanismos de gestión y administración propias del sector privado orientadas a desdibujar la distinción entre las esferas pública y privada (Ferguson 2009, 172). El neoliberalismo se basa en la creencia de que la mejor manera de promover el bienestar humano “consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo, dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, fuertes mercados libres y libertad de comercio” (Harvey 2005, 2; traducción propia).

Es difícil encontrar una definición que sea universalmente aceptada de *neoliberalismo* debido, en parte, a que este es un término empleado más por sus críticos que por sus proponentes (Ferguson 2009; Castree 2010a). Como comenta Ferguson (2009, 171), el neoliberalismo, como sinónimo vago de capitalismo, puede convertirse en una entidad que lo explica todo, como una fuerza motriz primordial y causa universal, lo que suele producir análisis vacíos.

Para los fines del presente texto, retomamos las siete características del neoliberalismo que identifica Castree (2010a; 2010b; 2011) al debatir la relación entre el neoliberalismo y el entorno biofísico. Estas son:

⁶ El economista Milton Friedman y su equipo de investigación en la Universidad de Chicago son vistos como los autores intelectuales del neoliberalismo en esta época. Este grupo asesoró directamente al régimen del general Pinochet en Chile, mientras que Friedman fungió como consejero para Ronald Reagan en los Estados Unidos y para Margaret Thatcher en el Reino Unido.

- a) *Privatización*. Entes y servicios públicos manejados por el Estado, comunalmente o sin propiedad explícita son transferidos a empresas privadas que operan bajo la lógica de la rentabilidad para sustentar sus operaciones. La privatización se distingue de la descentralización en tanto que esta busca expandir el dominio público, mientras la privatización lo reduce (Ribot 2007).
- b) *Mercantilización*. La integración de bienes comunes o gestionados colectivamente a los flujos de la oferta y la demanda, que determinan su valor monetario.
- c) *Desregulación*. Es el retiro del Estado o su adelgazamiento bajo la idea de que la no intervención en el mercado produce formas más eficientes de gestión.
- d) *Reregulación* (amigable con el mercado). Es una reconfiguración de políticas gubernamentales para favorecer la mercantilización y privatización.
- e) *Uso de mecanismos de mercado* dentro del sector gubernamental (por ejemplo, para la gestión de servicios públicos).
- f) *Promoción de mecanismos colaterales* (*flanking mechanisms*) dentro de la sociedad civil, donde el Estado facilita que actores privados llenen el vacío dejado por su retiro en dominios sociales y ambientales.
- g) *Creación de individuos y comunidades autosuficientes* por medio de la promoción de una ética centrada en las libertades individuales y una limitada dependencia en servicios públicos (Castree 2010a, 1728).

Desde luego, cada uno de estos rasgos representa (y merece) una discusión propia. La privatización y la mercantilización, por ejemplo, tienen muchos matices; sin embargo, apuntarlos nos ayuda a especificar a qué rasgo o dimensión de estas características neoliberales nos referimos: ¿hablamos de la liberalización de mercados, de la externalización o subcontratación (*outsourcing*) de funciones gubernamentales o de las nuevas formas de gobernanza? Estos aspectos no siempre se dan al mismo tiempo y pueden tener consecuencias diversas en contextos específicos. A pesar de su discurso en contra del Estado, el neoliberalismo no siempre ha significado un decremento en sus funciones o alcance, sino que implica más bien su reconfiguración y reinstitucionalización

(Perreault y Martin 2005, 193; Castree 2010a). En medio de la retórica neoliberal de privatización y desregulación, Hirsh (2001) identifica una “nueva fase de la penetración del Estado en la sociedad”. En el contexto específico de México, Snyder (2001) ha descrito un proceso de *rerregulación* después de la primera ola de reformas neoliberales con que el Estado buscaba extender su autoridad (de nuevo) aprovechando los vacíos dejados por su retiro inicial de diferentes áreas de incidencia de la política “pública”.

Dado que el neoliberalismo nunca llega a manifestarse en forma pura o a ser hegemónico por completo (Hewitt de Alcántara 2009; Brenner, Peek y Theodore 2010; Castree 2011), es importante prestar atención a los procesos de hibridación de diferentes elementos, reflejo de las contingencias y de lo que es políticamente posible en una coyuntura específica (Klein 2007). Cada proceso de neoliberalización es históricamente específico, pues ocurre en condiciones (geo)políticas y económicas distintas, y como reacción a arreglos institucionales previos, fracasos regulatorios y luchas políticas particulares. En México, por ejemplo, el neoliberalismo fue implementado por el mismo partido político que llevaba décadas consolidando un Estado corporativista a través la cooptación de los sindicatos y del sector agrario. Estos legados no se borran rápidamente con la aplicación de políticas neoliberales, sino que se convierten en parte de una mezcla que emerge de la aceptación, la negociación y el rechazo: “políticas y prácticas neoliberales se cruzan con varias [políticas y prácticas] no neoliberales ya existentes” (Castree 2010a, 1729).

De esta forma, es importante la distinción que diversos autores hacen entre neoliberalismo y neoliberalización (Perreault y Martin 2005; Brenner, Peek y Theodore 2010; Castree 2011). Si *neoliberalismo* hace referencia a la teoría, la ideología y el dogma, *neoliberalización* dirige nuestra atención hacia los *procesos* de implementación de políticas y programas que emanan de cambios estructurales neoliberales:

Aunque los principios centrales del neoliberalismo quedan claros, resulta más complicado trazar los procesos a través de los cuales, lugares, economías y sociedades se vuelven *neoliberalizados*. Pero el análisis del neoliberalismo-en-la-

práctica ayuda a entender las contradicciones inherentes al proyecto neoliberal (Perreault y Martin 2005, 193; traducción propia, cursivas en original).

La neoliberalización de la naturaleza

El neoliberalismo mantiene una relación compleja con procesos de transformación ambiental, con la gobernanza de los recursos naturales y con las luchas ambientalistas (Perreault y Martin 2005; Castree 2010a). Desde el siglo XIX, Marx señaló los efectos nocivos para el ambiente de la agricultura capitalista (y la silvicultura); Polanyi (1944) avisó sobre las tensiones inevitables entre las relaciones mercantiles y la reproducción social (y ambiental). Inspirado en estos pensadores, James O'Connor (1988), desde un enfoque de marxismo ecológico, desarrolló su conocida noción de la “segunda contradicción del capitalismo”, donde afirma que, debido a la búsqueda incesante de utilidades, el sistema capitalista daña las condiciones necesarias para su propia reproducción y eventualmente se autodestruye.⁷

El neoliberalismo —la cara dominante del capitalismo tardío— promueve estrategias como la privatización, la mercantilización, la desregulación

⁷ O'Connor (1988) explica esta afirmación recurriendo al concepto marxista de *subproducción*, pero aplicándolo de una forma novedosa. La idea es que en la medida en que el capitalismo va dominando y apropiándose cada vez más de la naturaleza en busca de nuevos mercados y mayores utilidades, inevitablemente degrada este mismo entorno natural (con el agotamiento de suelos, deforestación, contaminación, etc.), el cual requiere que el capital mismo invierta recursos en la restauración de esta naturaleza para asegurar las condiciones mínimas para la reproducción del propio capital. Estos costos toman la forma de inversiones en fertilizantes químicos, reforestación o en sistemas de salud pública, por ejemplo, y cada vez más capital se dedica a reproducir las condiciones de producción; por eso se denomina *subproducción*, pues señala que mucho capital ya no se dedica a actividades productivas, sino al mantenimiento, y así produce su propia naturaleza, una *segunda naturaleza* (O'Connor 1988, 23). Para una excelente discusión acerca de estos tres pensadores (Marx, Polanyi y O'Connor) y su relevancia para las discusiones actuales sobre la neoliberalización de la naturaleza, ver Castree (2010b).

y prácticas de gobernanza “amigables” con el mercado, que desafían las normas ambientales y transfieren responsabilidades, por lo que ha sido ampliamente relacionado con la degradación del ambiente (Parr 2013; Klein 2014; Tetreault 2015). Además, el actual modelo neoliberal orienta la producción rural hacia la exportación y permite concesiones a empresas que disuelven los sistemas locales de protección (Harvey 2005, 175). La neoliberalización implica la incorporación de cada vez más elementos, dimensiones y escalas de la naturaleza a los mercados (desde las patentes de organismos vivos hasta los bonos de carbono), de manera que “[en] aquellas áreas en las que no existe mercado (como la tierra, el agua, la educación, la atención sanitaria, la seguridad social o la contaminación medioambiental), este debe ser creado, cuando sea necesario, mediante la acción estatal” (Harvey 2005, 2; traducción propia).

Los modelos neoliberales generalmente proponen que las contradicciones ecológicas del capitalismo pueden ser resueltas con las mismas estrategias o procesos que las producen, es decir, que el mercado puede resolver los problemas que él mismo ha creado (Büscher et al. 2012, 12); por lo que varios autores señalan las íntimas conexiones entre el sistema neoliberal y las políticas y estrategias de conservación actuales, en particular, con los nuevos mercados para servicios ambientales o ecosistémicos (captura de carbono, conservación de biodiversidad, emisiones evitadas, etc.) que se espera abatan los problemas de degradación ambiental (Igoe y Brockington 2007; Brockington, Duffy e Igoe 2008; Büscher et al. 2012; Durand 2014).

Programas de pagos por servicios ambientales (PSA) y procesos de neoliberalización

El PSA implica pagar a propietarios de tierras —individuos, comunidades o Estados— por plantar o preservar bosques que brindan servicios ecosistémicos, como captura de carbono, biodiversidad, conservación de suelos, entre otros. Indudablemente, la propuesta de PSA se basa en varias suposiciones de corte neoliberal: que es posible calcular y asignar un valor monetario a los servicios ambientales, que estos pueden ser medidos y ofertados al mercado,

que existe una demanda correspondiente y que la transferencia de dinero de compradores a vendedores frenará la deforestación y degradación (McAfee y Shapiro 2010, 582).⁸ Según sus promotores, los PSA ofrecen la posibilidad de “ganar-ganar-ganar”, con beneficios para la naturaleza (conservación), para las comunidades forestales (reducción de pobreza) y para el sector privado (*offset* de emisiones; McAfee y Shapiro 2010; Corbera 2012; Durand 2014; Van Hecken et al. 2015). No obstante, autores más críticos sostienen que los PSA “son un elemento importante del programa global para extender el neoliberalismo como una racionalidad y modo de acumulación de capital particulares” (Fletcher y Büscher 2017, 224).

Aunque uno de los supuestos del PSA es que los servicios ambientales se oferten por medio de bonos en el mercado nacional e internacional, la demanda se ha manifestado lentamente, y a la fecha muchos de estos proyectos han sido financiados por Gobiernos, agencias multilaterales y ONG (Hamrick

⁸ A nivel operativo, existen algunos problemas relacionados con la implementación del PSA (que son relevantes para el caso de REDD+). En primer lugar, como elemento común a todos los proyectos, persisten cuestiones técnicas asociadas a la complejidad ecológica, las incertidumbres científicas y las dificultades del monitoreo (McAfee 2012, 28). Diferentes metodologías y escalas en la medición de los almacenes de carbono pueden dar resultados distintos y llevar a conflictos e inequidad en la distribución de los beneficios (monetarios y otros) generados por conservar o mejorar servicios ambientales. También existen retos relacionados con las diferentes dinámicas del uso del suelo y las causas de deforestación y degradación de bosques en cada lugar de implementación, y la posibilidad de la fuga o transferencia de la deforestación a otros sitios no incluidos en el programa de PSA. Además está la cuestión de asegurar la *adicionalidad*, que se refiere a la necesidad de asegurar que los PSA están cambiando trayectorias en el uso de los recursos naturales al pagar por prácticas de conservación que no hubieran ocurrido sin el programa, “evitando” así la deforestación. Como en todos los programas gubernamentales, pueden existir incentivos perversos, corrupción e inequidad (McAfee 2012; Alix-García, Shapiro y Sims 2012). Los incentivos perversos pueden surgir cuando, por ejemplo, los PSA promueven que los dueños de la tierra amenacen con atentar contra el bosque si no siguen recibiendo los pagos en el futuro (Alix-García, Shapiro y Sims 2012; Ezzine-de Blas et al. 2016; Almeida-Leñero et al. 2017).

y Gallant 2017).⁹ Paralelamente, en los debates sobre la comodificación de la naturaleza existen importantes matices. Por ejemplo, Hahn et al. (2015) identifican seis grados de comodificación en su estudio sobre instrumentos económicos para servicios ecosistémicos. Estos autores consideran que solo dos de seis características de la comodificación realmente representan un proceso de “neoliberalización de la naturaleza”, y argumentan que estos instrumentos no están obligados a apoyarse en mercados o avalúos monetarios. Otros han argumentado que hay que prestar más atención a la agencia de los actores locales para entender cómo la *gubernamentalidad* neoliberal no logra concretarse tal y como se ha teorizado en el caso de programas de PSA (Van Hecken et al. 2018).

En el trabajo de campo nos encontramos con diversas percepciones de campesinos y poseedores de terrenos forestales sobre el PSA y REDD+. Varios nos explicaron que inicialmente no querían entrar al proyecto de PSA porque temían perder el control sobre sus tierras y que el Gobierno se apoderara de ellas. Otros entendían los PSA como una renta, es decir, pensaban que el Gobierno arrendaría las áreas forestales durante el periodo que duran los pagos y después regresaría los terrenos a sus dueños. Otros más consideraban los PSA como un nuevo subsidio, parte del pacto social entre el Gobierno federal y los campesinos, mientras que para otros, REDD+ era un ejemplo de justicia (ambiental), ya que han sido los “países ricos del Norte” los causantes del cambio climático; por lo tanto, es correcto que estos paguen a los pobres del sur de México para conservar sus selvas.¹⁰

McAfee y Shapiro (2010) y Shapiro (2013) han demostrado cómo, en el caso del programa nacional de PSA en México, compitieron diferentes agendas

⁹ La compra-venta de bonos de carbono se ha estancado desde la crisis económica de 2009, y actualmente alrededor de la mitad de los *offsets* ofertados en el mercado internacional no se venden (Hamrick y Gallant 2017). El precio por tonelada de CO₂ se desplomó en 2008 y de nuevo en 2012, aunque últimamente se está recuperando (<https://www.investing.com/commodities/carbon-emissions-historical-data>).

¹⁰ Cabe destacar que a ningún entrevistado le preocupaba su futura participación en un mercado de servicios ambientales; es decir, a nivel local, este aspecto se ignoraba o no se consideraba importante.

para orientar el programa, y distintos actores en varios niveles ganaron influencia e impusieron su sello en el diseño y reglas de operación del programa. Estas dinámicas son precisamente las que determinan hasta qué grado un mecanismo como REDD+ fortalece lógicas y prácticas neoliberales en las áreas donde se ha piloteado.

El campo político que contextualiza la implementación de REDD+ en México

Entre otras cosas, REDD+ es un proyecto de gobernanza porque es un instrumento que busca alinear a un grupo de actores diversos en torno a objetivos precisos, con herramientas y formas de conocimiento ambiental, social y económico particulares (Thompson, Baruch y Carr 2011). Para participar en el mecanismo internacional REDD+, la CMNUCC pide básicamente tres acciones a los países interesados: reformas legislativas en materia forestal, una línea base (inventario forestal) que permita la medición futura de cambios en las emisiones y una estrategia nacional para REDD+ debidamente consultada. Estos requisitos han implicado transformaciones a los esquemas existentes de gobernanza en cada país implementador. En esta sección destacamos cómo las particularidades nacionales y regionales han condicionado la implementación de las acciones tempranas REDD+ (anteriormente PSA) en México.

Los terrenos forestales y la Reforma Agraria en México

México tiene una historia de gobernanza centralizada de los recursos naturales reflejada en el artículo 27 de la Constitución, que renacionalizó los recursos naturales del país después de las concesiones que se otorgaron a empresas extranjeras sobre bosques, minerales y petróleo durante la dictadura liberal de Porfirio Díaz (1876–1911). El artículo 27 también creó las condiciones para el reparto agrario. Al dotar y restituir más de la mitad de la superficie del país entre 1915 y 1992 a miles de ejidos y comunidades agrarias, alrededor de 60%

de los bosques y selvas fueron entregados a estos núcleos agrarios, en su mayor parte habitados por campesinos y pueblos indígenas que, en muchos casos, los manejan con procesos colectivos de toma de decisiones (Madrid et al. 2009; Merino y Martínez 2014).

El destino de los bosques y selvas en la política de reparto de tierras fue un tema polémico desde el principio¹¹ y, a lo largo del siglo xx, el marco legal y las políticas forestales en México han oscilado entre dos extremos. Durante largos periodos, las concesiones forestales y una política de vedas y sanciones retiraron el control local de los bosques, pero, en otros momentos (en la década de 1930 y nuevamente en la de 1980), el Gobierno federal transfirió poderes sobre los bosques a ejidos y comunidades con cobertura forestal (Chapela 2017). Es por esto que Boyer (2015) se refiere a los bosques de México como “paisajes políticos”, pues estos han sido y son espacios en disputa donde la relación entre los habitantes y sus bosques es mediada por múltiples leyes, estudios técnicos, permisos y otras formas de supervisión. Este es el escenario sobre el cual se despliega la implementación de REDD+.

Las reformas al artículo 27 de la Constitución efectuadas en 1992 buscaron liberar el mercado de tierras de propiedad social; sin embargo, las reformas no han logrado todos sus objetivos. Según datos oficiales del Registro Agrario Nacional (RAN), para 2017 solo 3.5 % de la propiedad social del país se había privatizado (pasando de ejido a *dominio pleno*). Para el caso de Chiapas, esta cifra es muy baja (0.4 %), y para Yucatán es casi igual al porcentaje nacional (3.6%; tabla 1),¹² aunque reconocemos que estas cifras no reflejan el mercado informal de tierra que ha producido una privatización *de facto* en ejidos de muchas regiones del país.¹³ De manera general, podemos decir que,

¹¹ Una tendencia más conservacionista, representada por Miguel Ángel de Quevedo (1862-1946), abogaba en contra de la entrega de los terrenos forestales a los nuevos núcleos agrarios. La postura de este pionero forestal derivó en un eventual conflicto con el presidente Cárdenas y su despido del Departamento Forestal en 1938 (Wakild 2006).

¹² Ver también Kashwan (2017, 158-161).

¹³ Pérez Castañeda y Mackinlay (2015) argumentan que el ejido y la comunidad agraria son hoy en día una modalidad de propiedad privada. En términos productivos, esto tal vez sea

a pesar de su modesta contribución al producto interno bruto (PIB), el sector social conserva una importante función social, territorial y ambiental, sobre todo en el sur del país.

En el contexto de los programas de PSA y REDD+, el papel de los ejidos y comunidades que representan el nivel local de la gobernanza de los recursos naturales es fundamental (Lozano 2012). Si bien el único propietario de los bosques en México es *la Nación*, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) establece que todas las “áreas forestales permanentes” dentro de un ejido deben ser de uso común y gestionadas por la asamblea ejidal, donde participan todos aquellos con derecho a tierra¹⁴ (los avocindados y poseionarios pueden tener tierra, pero no cuentan con derecho de voto en las asambleas ejidales). En el caso de PSA, los ejidos incorporados al programa reciben pagos anuales durante los cinco años que dura el contrato con Conafor, por medio de transferencias bancarias a una cuenta manejada por la autoridad agraria del ejido. Por lo general, la asamblea distribuye el dinero en partes iguales entre los ejidatarios o comuneros. A diferencia de la mayoría de los programas gubernamentales, Conafor no individualiza la entrega de recursos económicos del PSA, sino que reconoce al ejido como persona moral cuyos bosques de “uso común” son beneficiados por el programa.

Aunque el reconocimiento legal de las áreas de uso común —reforzado en el contexto de PSA y REDD+ por los pagos realizados a las autoridades agrarias— pareciera ir en contra de la lógica neoliberal y sus tendencias privatizadoras, habría que admitir que las reglas del PSA se imponen sobre el uso y la gestión de los bosques. Al contar con requisitos como la realización de un ordenamiento territorial comunitario, actividades de vigilancia del área de bosque y apoyos para la elaboración o modificación de reglamentos internos ejidales o estatutos comunales, el PSA puede llevar a un *endurecimiento* de los reglamentos en torno al acceso y uso de las áreas de uso común. Por ejemplo,

cierto, pero puesto que la mayor parte de los bosques y selvas en propiedad social son de uso común, en muchos casos sigue existiendo una gestión colectiva en torno al recurso.

¹⁴ LGDFS, art. 7 (III). Aunque en la práctica, no todos los bosques en propiedad social se encuentran designados como “uso común” y no todas las zonas de uso común son bosques.

al prohibir la caza y la extracción de leña, madera y plantas, esta intervención estatal podría trastocar los medios de vida de los miembros más marginados de los ejidos, quienes carecen de derechos formales sobre las áreas de uso común, entre ellos mujeres, jóvenes, vecindados y poseionarios.

Aunque exista relativa claridad en la tenencia de la propiedad social en México (en comparación con la situación en otros países), perduran poblados *irregulares*, disputas por deslindes y conflictos internos en las comunidades. A pesar del reconocimiento de la importancia de la certeza jurídica para el éxito de REDD+, sus acciones tempranas no han abordado los problemas de rezago agrario¹⁵ seriamente, y varios de los actores entrevistados, entre ellos participantes en proyectos REDD+ y miembros de ONG, expresaron su preocupación por la cuestión agraria en el contexto de REDD+, señalando que el Gobierno había obviado el tema, mientras que este se convierte en una “bomba de tiempo”.

En nuestro trabajo de campo encontramos muchos ejidos con experiencias exitosas en la gestión y vigilancia de sus selvas y bosques, condición básica para el éxito de los programas de PSA y REDD+; sin embargo, reconocemos que estos ejidos contaban generalmente con características que favorecerían sus capacidades de manejo forestal, como una importante superficie forestal (con bajo potencial agrícola) y una asamblea funcional (en términos de números de titulares, prácticas incluyentes y legitimidad) que permitía la toma colectiva de decisiones (Merino y Martínez 2014).

Estructuras de intermediación política

La implementación de REDD+ en México ha tenido que lidiar con otros legados e inercias políticas que han sido difíciles de erradicar (Hernández 2008). Durante más de setenta años en el poder, el Partido Revolucionario Institucional

¹⁵ Aunque la certeza jurídica en la tenencia de la tierra se incluye como una de las salvaguardas en la *Estrategia Nacional REDD+*: “Certidumbre y respeto a los derechos de propiedad de los habitantes y dueños de la tierra y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales” (Conafor 2017, 71).

(PRI) creó una maquinaria populista-corporativista que centralizó el poder en el Gobierno federal y dio lugar a una élite política a través de estructuras partidarias. Aunque el PRI perdió las elecciones presidenciales en el 2000, las formas de ejercicio del poder y la cultura política han cambiado con lentitud, así que con el regreso del PRI en el 2012, algunos de nuestros entrevistados refirieron retrocesos en la democratización del país (Trench et al. 2018).

Entendemos al corporativismo esencialmente como un “sistema de representaciones de intereses”, donde grupos organizados se constituyen en portadores de los intereses de ciertos sectores de la población y son reconocidos como tales por el Estado (Kashwan 2017, 14). Aunque generalmente el corporativismo se presenta como algo negativo y sintomático de un déficit democrático (Hernández 2008), Kashwan presenta el caso del corporativismo mexicano —desde una perspectiva comparativa— como indicador del relativo éxito de las movilizaciones de base, al haber obligado a las élites políticas a invertir en arreglos costosos de establecer y mantener (2017, 14). Para fines de nuestra discusión, es importante reconocer cómo estas estructuras aceptadas de intermediación han determinado algunas pautas en la implementación de REDD+, particularmente en el caso de las relaciones entre algunas asociaciones regionales de silvicultores y la Conafor.

Otros rasgos relevantes del sistema político mexicano para entender la implementación de casi cualquier política pública incluyen al clientelismo, el caciquismo (a nivel regional) y el centralismo del Gobierno federal. Esencialmente, el clientelismo se refiere al “intercambio de bienes y servicios por apoyo político y votos” (Schröter 2010, 142). Esta práctica refleja y sostiene una cultura política donde todo es transacción, donde las organizaciones “se alinean” al recibir apoyos del Gobierno, subsidios o puestos políticos. El caciquismo se inserta en esta misma lógica y se refiere al ejercicio del poder informal, personal y arbitrario que prospera donde existen vacíos de poder u obstáculos para contactar directamente a representantes del Gobierno (Solís Sánchez 2016). Sin entrar en detalle, estos aspectos de las estructuras de intermediación política limitan el pleno ejercicio de la ciudadanía, pues crean otras capas y formas de ejercer poder que obstaculizan de alguna forma un proceso democrático más amplio. Al mismo tiempo, la persistencia del centralismo, expresado de

forma más nítida en el control del presupuesto y en el diseño vertical de las políticas públicas, desafía las ambiciones expresadas en la Estrategia Nacional REDD+ para mejorar la gobernanza local y la colaboración intersectorial.

Estas particularidades de la transición democrática en México¹⁶ y sus expresiones regionales han sido relevantes para la implementación de REDD+; mientras que las lógicas clientelares y corporativistas siguen dando forma a relaciones aún muy desiguales entre intermediarios y clientes, entre Estado y organizaciones rurales.¹⁷ A pesar de los espacios de interacción creados por REDD+ entre diferentes niveles o sectores de gobierno y una gama de nuevos actores (no gubernamentales), las viejas formas de gobernar y relacionarse perduran. En este contexto, crear nuevas formas de participación y colaboración ha sido un reto.

¹⁶ Los indicadores de gobernanza del Banco Mundial sugieren que, en ciertas áreas, el Gobierno en México, yendo en contra de las tendencias generales en América Latina, está reduciendo su rendición de cuentas y es menos efectivo en el control de la corrupción; además, en las últimas dos décadas el indicador del “Estado de derecho” se ha encontrado continuamente por debajo del promedio del continente (www.govindicators.org).

¹⁷ Un ejemplo de esto sería la apropiación de la marca REDD+ por parte del entonces gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, en el marco de la COP-16 de Cancún en diciembre 2010. Beneficiando específicamente a los comuneros de la Comunidad Zona Lacandona (unos bienes comunales de aproximadamente 450 000 ha, ubicados en la selva Lacandona, Chiapas), este programa unilateral no contaba con un estudio técnico o diseño de monitoreo, a la vez que estaba desvinculado tanto del mercado como del proceso nacional de preparación para REDD+. Reflejo de una larga tradición de relaciones clientelares entre el Gobierno del estado de Chiapas y esta comunidad agraria, dicha iniciativa aislada respondía a contingencias políticas de la administración estatal. Además, al gobernador le permitió proyectar una imagen ambientalista fuera del estado. El pago de dos mil pesos mensuales a cada uno de los casi 1 700 comuneros solo sirvió para motivar fuertes críticas de parte de sectores de la sociedad civil y desacreditar al programa REDD+ en el estado. No fue hasta 2014 que la Conafor volvió a emplear el término REDD+ en Chiapas.

Descentralización y gobernanza neoliberal

La descentralización implica la transferencia de poderes desde el Gobierno central hacia niveles más bajos dentro de la jerarquía político-administrativa y territorial (Agrawal y Ribot 1999). Acompañada de procesos de desregulación del Estado y colaboraciones entre Gobierno y sociedad, la descentralización es un amplio concepto paraguas que puede llegar a incluir acciones diversas, como la desconcentración, entendida como descentralización administrativa, donde los poderes son transferidos hacia niveles inferiores de gobierno que rinden cuentas a sus superiores (Ribot 2002), y la devolución, que incluye la transferencia de atribuciones a Gobiernos e instituciones locales (Larson y Soto 2008).

Al ser una federación con tendencias centralistas, la historia de control nacional sobre las tierras y recursos naturales remite a una limitada descentralización en México. Los niveles subnacionales de gobierno (estados y municipios) cuentan con poderes limitados y generalmente dependen del Gobierno federal para el diseño y la elaboración de los programas que ejecutan (y los fondos con los cuales operar).

En el contexto neoliberal de la reestructuración del Estado mexicano, algunos sectores del Gobierno vivieron procesos de descentralización o privatización (p. ej. educación, salud, transporte, comunicaciones, explotación del subsuelo, etc.). En el sector ambiental, las reformas crearon “organismos desconcentrados” dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), incluidas la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Conafor. Al ser representantes locales del Gobierno federal, estos órganos son ejemplos de desconcentración más que de descentralización de atribuciones a otros niveles de gobierno (Trench et al. 2018). Tal como veremos más adelante, el financiamiento internacional de la gestión ambiental en México derivó incluso en una recentralización de poderes y atribuciones en el Gobierno federal.

Con relación a la privatización, un ejemplo relevante se encuentra en las transformaciones del extensionismo rural en México. Si bien alguna vez fue promovido por la colaboración entre institutos públicos de asistencia técnica

e investigación, el extensionismo vivió un proceso de *outsourcing* hacia la prestación de servicios profesionales por parte de privados (Rendón et al. 2015) que operan en un mercado de flexibilidad laboral (si bien su éxito profesional aún depende en gran medida de las redes sociales tejidas con funcionarios de gobierno). Para el sector forestal, esto comenzó con la ley forestal de 1992.

A la par de la desconcentración de poderes y el fin de la asistencia técnica pública al sector rural, el limitado proceso de descentralización en México incluye la creación de espacios de coordinación intersectorial y participación ciudadana. La participación local en la toma de decisiones ha sido fomentada por nuevas legislaciones que decretan espacios como los consejos de desarrollo sustentable a nivel municipal, los comités de cuenca y los consejos asesores de las áreas naturales protegidas (Trench et al. 2018). En el marco de las reformas legislativas del cambio climático, el Gobierno decretó nuevos espacios de coordinación interinstitucional que, si bien han sido formalizados, operan de manera incipiente (Carrillo Fuentes y Velasco Ramírez 2016). Por ejemplo, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático tiene la misión de implementar la Ley General de Cambio Climático (LGCC) coordinando sectores y alineando políticas con el fin de mitigar el cambio climático, donde incluyen la implementación de REDD+. Sin embargo, muchos de los funcionarios de gobierno y representantes de ONG entrevistados se mostraron escépticos sobre el alcance de este espacio (y otros parecidos a nivel estatal), opinando que estos comités funcionan como espacios protocolarios, donde tomarse la fotografía con personajes influyentes pareciera ser el objetivo más importante.

En Chiapas y Yucatán, los consejos técnicos consultivos REDD+ han sido los espacios más destacados de participación de la sociedad civil. Estos espacios fueron establecidos a nivel nacional y estatal a partir de 2010, para apoyar en lo técnico a la preparación e implementación de REDD+. Estos consejos no son vinculantes y no cuentan con presupuesto. Esto ha significado dificultades en la representación de sectores marginados y también, en el caso de los consejos estatales, una sobredependencia de las secretarías de Medio Ambiente estatales, instancias que en la práctica determinan en gran medida la dinámica de los consejos. En Chiapas, el Consejo Técnico Consultivo REDD+ ha servido como un importante espacio de coordinación para las preparaciones de la

estrategia, pero la participación se ha limitado al Gobierno del estado y a ONG ambientalistas, con pocos representantes federales y una representación casi nula de las organizaciones rurales. Además, el lenguaje técnico especializado que domina las sesiones del consejo ha provocado que el espacio sea menos accesible para otros posibles interesados.

De esta manera, la construcción de nuevos esquemas de gobernanza en el contexto de REDD+, a través de consejos y agentes territoriales, ha sido un reto por diversas razones, entre ellas las viejas formas de gobernar que persisten, así como culturas sectoriales y presupuestos erráticos que inhiben la colaboración. Sin embargo, más allá de las deficiencias institucionales, también existen intereses comerciales poderosos cuyas agendas son difíciles de armonizar con la Estrategia Nacional REDD+ (Ravikumar et al. 2018).

Apropiación nacional de directrices internacionales: el programa PSA en México

México ha sido pionero en la implementación de PSA en Latinoamérica. El primer programa nacional, dirigido desde la Conafor, se implementó en 2003 e inicialmente se limitó al pago por servicios hidrológicos (PSA-H). Más adelante, el programa se amplió para incluir la captura de carbono y la conservación de la biodiversidad. Los diseñadores del programa en México, entre ellos el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, proyectaban un periodo de cinco años para la transición desde un tipo de subsidio federal a un mercado formal de oferta y demanda de servicios ambientales. No obstante, las cosas no se desarrollaron así. Por un lado, una tradición de control centralizado de los recursos naturales por parte del Estado se reflejó en la renuencia de la Conafor a seguir las recomendaciones de las agencias internacionales, como pagos graduados según el riesgo de deforestación de cada predio¹⁸ (percibido

¹⁸ Según Cameron (2015, 16), el *riesgo de deforestación* es solo un criterio entre los muchos considerados por la Conafor y representa menos del 10% en la ponderación final. Ezzine-de-Blas et al. (2016) afirman que en el 2010 la Conafor empleaba 26 criterios para

como políticamente “complejo”) y pagos individualizados a los ejidatarios. Así, Conafor seguía pagando una cantidad uniforme por hectárea y, de alguna forma, afirmó la legitimidad de la propiedad social al realizar los pagos a las autoridades agrarias para su distribución interna (McAfee y Shapiro 2010).

A la vez, contingencias políticas también influenciaron la evolución del PSA en el país. Desde sus orígenes, el programa fue renegociado bajo presión del movimiento “El Campo No Aguanta Más”, lo que derivó en un incremento en los pagos por hectárea, limitaciones para la participación de la propiedad privada y la inclusión de paisajes productivos, como cafetales bajo sombra (McAfee y Shapiro 2010). A inicios del sexenio del presidente Felipe Calderón, en 2006, un préstamo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) casi permitió cuadruplicar la superficie apoyada por el programa. A pesar de esto, la Conafor siguió resistiendo las presiones de introducir bonos al mercado, y el objetivo de aliviar la pobreza ganó terreno sobre las metas ambientales. Posteriormente, el Banco Mundial recomendó que no se incluyeran actividades de agroforestería en los PSA, y de nuevo la Conafor se negó (McAfee y Shapiro 2010). En 2008, al renovar los contratos de PSA existentes por cinco años adicionales, la Conafor afirmó el estatus de “subsidio federal” del programa nacional de PSA (Shapiro 2013, 13).

En 2010 se implementaron los primeros programas especiales de la Conafor, enfocados a regiones de alta prioridad en cinco estados. Los programas especiales buscaban asegurar una atención más integral a regiones forestales prioritarias, reclutando técnicos locales para la implementación de acciones orientadas a generar un desarrollo rural bajo en emisiones. Estos programas se convirtieron posteriormente en las acciones tempranas REDD+, ejecutadas en cinco estados del país mediante importantes inversiones, mayores PSA por hectárea y otros programas forestales complementarios (Deschamps, Zavariz y Zúñigar 2015; Trench et al. 2018).

El objetivo final del proceso REDD+ es el “pago por resultados”, y depende de un acuerdo de la CMNUCC propuesto para 2020. Mientras tanto, México

decidir cuáles predios recibían PSA, lo que refleja la diversidad de demandas incorporadas al programa.

está por implementar la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE), financiada por el Fondo de Carbono del Forest Partnership Facility (FCPF). Esta propuesta dista del mecanismo internacional REDD+, ya que no considera almacenes de carbono ni bonos para el mercado, sino únicamente el pago por resultados por deforestación evitada por la implementación de estrategias de desarrollo bajas en emisiones.

Las iniciativas anteriores, que siguen las pautas de acuerdos y directrices internacionales, ocurren en un contexto de severos recortes al presupuesto federal, en particular al sector ambiental, debido a las políticas de “austeridad” implementadas a partir de la disminución de los precios del petróleo en 2015. Tras aumentos importantes en el presupuesto de la Conafor durante el sexenio del presidente Calderón (2006-2012), especialmente en el rubro de PSA, el sector forestal sufrió una reducción de casi 50% de su presupuesto entre 2015 y 2017, lo que afectó particularmente los programas de silvicultura comunitaria y PSA (CCMSS 2015; Trench et al. 2018).¹⁹

Actores “empoderados” en torno a REDD+

La implementación de REDD+ ha estado acompañada por una cantidad importante de ONG de diferentes tipos, quienes han llenado los “vacíos técnicos”, de conocimiento y de personal del propio Gobierno; en los términos de Castree (2010a), han fungido como *flanking mechanisms*. A la vez, la implementación de REDD+ ha dado cabida a otros actores forestales ya existentes, como los prestadores de servicios técnicos forestales (PSTF) y las asociaciones regionales de silvicultores (ARS) presentes en las áreas de acción temprana REDD+.

¹⁹ Esto significó el cierre de la Gerencia de Proyectos y Mercados Forestales de Carbono y un menor enfoque en el manejo forestal comunitario, dada la desaparición de los programas que atendían esta área, como el Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional Forestal (Profos) y el denominado Desarrollo Comunitario Forestal de los Estados del Sur (Decofos).

Muchas ONG locales trabajaron en el proyecto paraguas de la Alianza México-REDD+, una coalición de ONG estadounidenses, y en menor grado mexicanas, financiada por USAID. Esta alianza fue un actor notable en la implementación de acciones tempranas REDD+ en los cinco estados seleccionados por Conafor y en otras entidades como Oaxaca y Chihuahua. La Alianza México-REDD+ financió múltiples consultorías relacionadas con REDD+, desde estudios de deforestación hasta capacitaciones y evaluaciones, y tuvo un papel determinante en la consolidación de la Estrategia Nacional REDD+, en el establecimiento de niveles de referencia para las emisiones y en la construcción de fondos regionales de cambio climático.²⁰ También aportó al desarrollo de los planes de inversión en algunas regiones para la siguiente fase de REDD+ en México, denominada Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE).

Otro actor que tomó protagonismo en el marco del aumento de programas y recursos para bosques y selvas en el sector social es el PSTF, obteniendo importantes contratos y ejerciendo un poder considerable en las comunidades, mientras rinden cuentas solo ante Conafor. Varios entrevistados expresaron su desconfianza hacia este actor, pues señalan la falta de transparencia en torno a sus actividades y las oportunidades para la corrupción.²¹ Una evaluación del Programa Especial de la Selva Lacandona²² señala que “un aparente reparto territorial entre agencias técnicas [...] conlleva a configurar proyectos de desarrollo acorde con el perfil técnico de cada agencia”, y no con la planeación participativa (Devhint 2015, 26). Así, el PSTF figura como una especie de *agente libre*, quien interpreta, promueve e implementa los programas de Conafor según su propia visión, y que tiene incentivos limitados para participar en

²⁰ Alianza M-REDD invirtió 33 millones de dólares durante un periodo de cinco años (2012-2017). Ver <http://www.alianza-mredd.org/>.

²¹ Según Ezzine-de-Blas et al. (2016), este intermediario técnico busca minimizar los costos de transacción y evitar riesgos e incertidumbres, y toma así el camino más fácil para maximizar sus propias ganancias, a veces a costa de los intereses de los propietarios de los bosques.

²² El nombre completo del programa fue Programa Especial para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona (PESL).

nuevos espacios de gobernanza o promover la planeación participativa.²³ Tampoco existen garantías de que el técnico aplicará la política y los programas con una visión holística, tal como propone REDD+, y tomando en cuenta las actividades agropecuarias en el quehacer forestal. En cambio, en las comunidades forestales es común que el PSTF se perciba como una figura de autoridad e influencia, con una relación privilegiada con el Gobierno (Conafor) y con los conocimientos para “bajar” (gestionar) los fondos.

Un tercer actor de relevancia para REDD+ son las asociaciones regionales de silvicultores (ARS), organizaciones surgidas a partir de cambios en la legislación forestal en 2003 y promovidas por la Conafor como contraparte social de las Unidades de Manejo Forestal (Umafor). En los hechos, la historia de estas asociaciones de silvicultores está marcada por relaciones clientelares y políticas partidarias (Merino et al. 2008). Otras asociaciones han sido creadas por los PSTF con el fin de aumentar las posibilidades de recibir financiamiento, pues los ejidos miembros de una ARS reciben más puntos en las evaluaciones de la Conafor. En estos casos, las ARS pueden quedar a expensas del PSTF; sin embargo, algunas ARS de corte más independiente se han apropiado de la figura para ganar visibilidad frente a la Conafor en busca de acceder a recursos. En Chiapas existe una nueva asociación civil, Bosques y Gobernanza A. C., fundada en 2015, que aglutina seis asociaciones de silvicultores en busca de mayor voz e influencia en sus negociaciones con el Gobierno, mediante la organización de foros y congresos sobre el tema de bosques y cambio climático, y exigiendo acciones en torno a la tala ilegal y la legalización de predios irregulares. Las ARS tuvieron un papel central en el proceso inicial de REDD+, particularmente en la consulta nacional de la Estrategia Nacional REDD+, en donde fungieron como un público privilegiado al ser el único sector de la población rural que recibió talleres informativos sobre REDD+.²⁴

²³ Por ejemplo, el instrumento de planeación participativa a nivel ejidal, el Programa Predial de Desarrollo Integral de Mediano Plazo, o P-Predial.

²⁴ Cabe agregar que estos talleres solo tuvieron lugar si el PSTF de la ARS correspondiente gestionó los fondos de la Conafor para llevar a cabo los eventos que formaban parte de la consulta nacional de la Estrategia Nacional REDD+ en 2014-2015.

El efecto de todo esto es la materialización de un campo de interacción poblado por diversos actores que buscan plasmar sus intereses en el proceso REDD+ a nivel nacional, subnacional y de cada proyecto. Las discusiones y acciones en torno a REDD+ han consolidado una nueva comunidad epistémica de ONG y consultores, donde temas como el financiamiento de REDD+, las salvaguardas y el monitoreo son cada vez más complejos y, para muchos, difíciles de entender. A la vez, los contratos y convenios son de corto plazo y las coaliciones que surgen en torno a ciertos problemas o acciones territoriales tienden a disolverse cuando el financiamiento se termina —según un entrevistado, prevalece un ambiente de “oportunismo”.

A pesar de los esfuerzos formales para armonizar las acciones gubernamentales en las áreas de acción temprana REDD+, otros actores trabajan en los márgenes, siguiendo agendas distintas y aprovechando las oportunidades que se les presentan. En la selva Lacandona se observaba la reconstrucción de relaciones clientelares y corporativistas a través de los programas e inversiones de Conafor (Rodríguez 2018). Este es, en efecto, un escenario en donde muchos actores no rinden cuentas frente la sociedad, sino que compiten entre sí para implementar agendas cuyos orígenes muchas veces se encuentran lejos de ellos. Pareciera que la inestabilidad, las indefiniciones (en torno al financiamiento y la implementación de REDD+) y las constantes evaluaciones ya son parte del paquete.

REDD+ como instrumento de neoliberalización en México

Ahora bien, considerando de nuevo las siete características del neoliberalismo propuestas por Castree (2010a, b 2011), podemos discernir hasta qué punto REDD+ actúa como un agente de neoliberalización en los casos presentados:

- a) *Privatización.*— Una característica que va a contracorriente en el escenario neoliberal es la supervivencia de la propiedad social en México y en particular la existencia de bosques y selvas de uso común. Los núcleos agrarios en Chiapas y Yucatán siguen siendo dueños de dos tercios de los

bosques. Entonces, estos recursos no se han privatizado en términos estrictos, pero sí se han convertido en moneda de cambio en las negociaciones con agentes externos interesados en la conservación de los bosques. Además, los nuevos esquemas de gobernanza y monitoreo introducidos en las acciones tempranas REDD+ han restringido —en menor o mayor grado— el acceso a los bosques y sus recursos en las áreas bajo PSA. Así, aunque no hay privatización formal, puede haber nuevas medidas de exclusión o un endurecimiento en los reglamentos ejidales para cumplir con los términos de los contratos firmados con la Conafor.

Sin duda, el futuro del sector de propiedad social es incierto y existen opiniones muy variadas al respecto. En los ejidos y comunidades con importantes superficies forestales, muchas veces ubicadas cerca o dentro de áreas naturales protegidas, REDD+ podría tener un efecto positivo en la gobernanza local, con la revaloración de los bosques, inversiones en infraestructura, capacitación y proyectos productivos bajos en emisiones. No obstante, fuera de estas regiones, los núcleos agrarios se encuentran vulnerables frente a la competencia de agroempresas, crédito caro y precios volubles para sus productos, lo que dificulta la conservación de sus bosques. La otra cara de la privatización es la desposesión. Sin duda, el mercado informal de tierras está creando concentraciones, pero la propiedad social puede actuar como limitante en esta dinámica. La nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece, en su artículo 131, que los beneficios derivados del manejo forestal (incluida la mejora de los servicios ambientales, como la captura de carbono) corresponden al dueño o poseedor del predio; sin embargo, persisten rezagos e incertidumbres que dejan vulnerable a la propiedad social frente la amenaza de desposesión.

- b) *Mercantilización.*— La evolución del programa nacional de PSA en México demuestra que en uno de los países más “neoliberales” del mundo (Hewitt de Alcántara 2009; Shapiro 2013) puede haber procesos de resistencia que limitan la forma en que la neoliberalización mercantiliza la naturaleza a partir de instrumentos como el PSA y REDD+. Las organizaciones sociales lograron diluir los intentos de introducir mecanismos de mercado al

programa y restar control del nivel federal (Shapiro 2013). Además, en contra de recomendaciones del Banco Mundial, el programa terminó enfocándose más en el combate a la pobreza que en el riesgo de deforestación, que ha sido un criterio cada vez menos importante en la definición de las áreas elegibles para PSA (Cameron 2015; Ezzine-de-Blas et al. 2016). Por esto, Shapiro (2013) argumenta que el resultado es un programa *híbrido*, producto de diferentes puntos de articulación entre distintos actores con intereses desiguales. Las transferencias de dinero hacia los ejidos y comunidades, más que seguir una lógica neoliberal y mercantil, reflejan un uso de los recursos monetarios con fines políticos, populistas y corporativistas, y el programa de PSA se percibe como un subsidio más. De ahí que muchos entrevistados no tuvieran claro cómo la Conafor iba a lograr la transición de una estrategia REDD+ subsidiada y dirigida a núcleos agrarios (hasta la fecha) hacia un eventual esquema de pagos por resultados, sujeto a monitoreo, reporte y verificación, así como a los precios fluctuantes de los bonos de carbono en el mercado internacional.

- c) *Retiro del Estado o desregulación.*— México siguió en gran medida las recetas neoliberales, y muchas instituciones públicas sectoriales fueron desmanteladas durante las décadas de 1980 y 1990. Las “reformas estructurales” efectuadas en diversos sectores por el gobierno del presidente Peña Nieto (2012-2018) señalan que este proceso ha continuado; sin embargo, a pesar de recientes recortes al sector ambiental, es interesante notar una tendencia contraria. En la mayoría de los países de Latinoamérica, los departamentos y ministerios encargados de cuestiones ambientales han visto un aumento exponencial en sus recursos y, por ende, en su participación directa o indirecta en la gestión ambiental (Miller 2007). De esta manera, los aumentos en el presupuesto de la Conafor entre 2001 y 2015 para el manejo del programa REDD+ y la intensificación de ciertos tipos de “gobernanza” (más leyes, actores, monitoreo y espacios de interacción) podrían leerse como contrarias al dogma neoliberal. Por su parte, los PSTF representan un modelo de extensionismo producto de la privatización de los servicios públicos de asistencia técnica y asesoría al campo. Los PSTF son consultores independientes, producto de la flexibilización laboral; sin

embargo, por sus fuertes lazos directos con el personal de Conafor (lazos que inciden en sus posibilidades de ser aprobados para el financiamiento público), los PSTF representan más una penetración del Estado en las cuestiones forestales que un retiro.

- d) *Rerregulación (amigable con el mercado).*— REDD+ es, en teoría, un excelente ejemplo de esta tendencia neoliberal. La preparación para la implementación de REDD+ en México ha significado ajustar los marcos jurídicos a diferentes niveles, constituir nuevos espacios y capas de gobernanza, crear sistemas de salvaguarda y generar cuantiosos estudios, planes y estrategias. El efecto acumulativo ha sido una rerregulación del sector forestal con base en exigencias (y fondos) internacionales; sin embargo, si bien las comunidades forestales denuncian que la sobrerregulación del sector constituye un obstáculo al acceso a los programas, la capacidad de implementar estas regulaciones y vigilar su cumplimiento ha sido limitada.
- e) *El uso de mecanismos de mercado dentro del sector gubernamental.*— Como hemos visto en el inciso a), en el caso de la política forestal en México observamos ciertas renuencias e inercias respecto a la incorporación de mecanismos de mercado dentro de las políticas gubernamentales. Esto tiene que ver con una tradición centralizada (y nacionalista) y los límites puestos por lo que es “políticamente posible” en una coyuntura particular. El mercado de REDD+ aún no se vislumbra: hasta la fecha, las acciones tempranas REDD+ han sido financiadas por préstamos de la banca internacional y donativos, y la siguiente fase para pilotear REDD+ —la Iniciativa de Reducción de Emisiones— contempla un esquema que invierte en actividades bajas en emisiones, para posibilitar una distribución de beneficios más allá de los propietarios (Skutsch Balderas y Carrillo Fuentes 2017).
- f) *La promoción de mecanismos colaterales (flanking mechanisms) dentro de la sociedad civil.*— En la gobernanza ambiental en México observamos un doble proceso en donde el Estado cede lugar a otros actores, desde PSTF hasta ONG, quienes hacen parte del trabajo que antes hacía el Estado (diagnosticar, promover, operar y monitorear programas), pero a la vez construye nuevas regulaciones. Pero para diseñar y redactar estas nuevas regulaciones,

el Gobierno ha hecho uso de consultores, quienes, como consecuencia, han extendido su autoridad. Entonces, un primer grupo de actores de la sociedad civil —ONG ambientalistas internacionales y algunas nacionales— cumplen el papel de *mecanismos colaterales*, en cierta medida reproduciendo las ortodoxias neoliberales de la política ambiental en nuevos campos de interacción. A la vez, otras ONG nacionales y organizaciones rurales usan su capacidad de movilizar las bases para perseguir cambios desde nuevas plataformas de participación, como los consejos técnicos consultivos REDD+. Algunas de estas organizaciones de segundo nivel, en particular las de las comunidades forestales, han entendido REDD+ como una oportunidad para empoderarse y han logrado colocarse en espacios de influencia a diferentes niveles, incluso en lo internacional. Sin embargo, otros actores territoriales a nivel de los estados, como las cooperativas de café en el caso de la Sierra Madre de Chiapas o comunidades forestales no organizadas, no han tenido participación en las estrategias subnacionales hasta la fecha. De tal suerte, existen “ganadores” y “perdedores” en este sentido.

- g) *La creación de individuos y comunidades “autosuficientes”*.— Como hemos visto, los programas que han acompañado a los PSA, especialmente en las acciones tempranas REDD+, han buscado fortalecer la gobernanza local en torno a los bosques en propiedad social. Esto pareciera ir en contra de las pautas de la neoliberalización, con su énfasis en la individualización, pero según Castree, la creación de comunidades autosuficientes es parte del retiro del Estado; es una estrategia que busca reducir la dependencia en sus servicios y subsidios. Sin embargo, surge otra contradicción: la condición permanente de crisis experimentada por la mayor parte del campo mexicano ha fomentado cada vez más la dependencia de los subsidios federales (tanto sociales como productivos) y de las remesas enviadas por migrantes. La falta de autosuficiencia también es resultado de las políticas neoliberales dirigidas hacia el campo.

En este sentido, observamos que la implementación de REDD+ en México cumple solo de manera parcial con las características del neoliberalismo prescritas por Castree. Aunque este es, sin lugar a duda, un proyecto neoliberal en

su concepción, su implementación en el México actual vislumbra una serie de contradicciones entre el modelo conceptual del neoliberalismo y la práctica política nacional. La traducción de políticas internacionales en programas nacionales crea una hibridación compleja y particular; el ejemplo de REDD+ en dos estados del sur de México invita a reconocer las particularidades locales frente a paradigmas globales.

Quizá el marco de análisis del neoliberalismo no es apropiado para entender los procesos que están ocurriendo en la coyuntura actual. Algunos autores incluso hablan del inicio de una nueva fase posneoliberal del capitalismo global, que surge a partir de las fuertes intervenciones estatales realizadas para salvar el sistema financiero en 2007-2008 (Jackson, Kim y Comaroff 2011; Robinson 2015). Los aumentos en el populismo y proteccionismo, cuyos ejemplos más contundentes recaen en el *brexit* y en Trump, han alimentado las visiones de un capitalismo posneoliberal (Scoones et al. 2017). A su vez, existen tensiones internas que se manifiestan cuando los mismos recortes presupuestales y las políticas de austeridad no permiten que el Estado mantenga su autoridad, lo que lleva al abandono de ciertos programas (incluido, irónicamente, el cierre del departamento de Conafor dedicado a carbono forestal y proyectos en el 2015). De esta manera, queda el desafío de reconocer el complejo panorama socioambiental mexicano, donde actores diversos con intereses propios enarbolan estrategias particulares de adaptación. México, siempre al pendiente de los debates internacionales sobre cambio climático —que han sido una fuente principal de ingresos para sus operaciones, particularmente en el marco de los recientes recortes presupuestales—, ha sabido moldear sus experiencias internas para presentar una imagen de liderazgo en el escenario internacional respecto a la implementación de REDD+.

Conclusiones

Entonces, podemos decir que REDD+ es, de hecho, conceptualmente neoliberal; sin embargo, en México el proyecto se articuló con particularidades nacionales que incidieron en su implementación: *a*) la mayoría de los bosques

y selvas del país se encuentran bajo la jurisdicción de núcleos agrarios con prácticas de gestión colectiva de los espacios de “uso común”, herencia de la primera reforma agraria en el continente americano; *b*) las estructuras corporativistas y formas clientelares de mediación política en México —otra herencia del proceso de institucionalización de la Revolución mexicana— incidieron en los modos de operar y participar en este y otros programas gubernamentales; *c*) la particular forma de desconcentración administrativa (más que descentralización) en el país permitió una centralización del manejo de programas internacionales, como PSA y REDD+, contraponiendo tendencias autoritarias a las formas de gobernanza neoliberal que plantean los financiadores internacionales del proyecto, y *d*) actores diversos con intereses divergentes buscaron plasmar su agenda particular en el proyecto, lo que derivó en reconfiguraciones y redistribuciones de poder a través del proceso. Muchos de estos actores compiten por recursos limitados e inciertos, de origen federal e internacional, para seguir dentro del “juego” de REDD+, el cual puede forjar posturas de corto plazo, oportunistas y competitivas. Aunque las acciones tempranas REDD+ todavía no han reflejado el *mercantilismo* neoliberal, es muy palpable la cuestión *gerencial* en torno a la implementación de REDD+ al considerar la plétora de estrategias, metodologías, planes de inversión, fomento de buenas prácticas y todo el bagaje de terminología asociada.

Es particularmente interesante ver cómo el Estado ha generado condiciones para adaptar a nivel nacional una propuesta internacional, favoreciendo ciertas pautas y formas de hacer política. Si bien mencionamos que Conafor injertó REDD+ sobre su programa previo de PSA, también se puede decir que, de alguna manera, esta institución federal (dedicada inicialmente a la gestión de la producción maderable) se “injertó” a sí misma sobre los trabajos de mitigación y adaptación al cambio climático (procesos complejos que incluyen temas variados, como reducción de emisiones, producción sustentable y reducción de riesgos) en México. Aquello que era considerado en un inicio como incentivo para la integración al mercado fue convertido en subsidio federal e integrado así a un quehacer político que reproduce prácticas clientelares de compra de votos y lealtades.

Si bien partimos de debatir si el proceso REDD+ es o no neoliberal (en su alusión al adelgazamiento del Estado y mayor poder otorgado al mercado), observamos que las formas de implementación (traducción) de REDD+ en México pueden llevar a un proceso contrario: al fortalecimiento del Estado y la consolidación de su papel por encima de los mercados internacionales. Esto nos lleva a vislumbrar un análisis que oscila entre dos polos: el neoliberalismo por una parte y, por otra, un nuevo tipo de populismo autoritario del Estado. Si bien es tentador caer en uno de los polos opuestos, este análisis invita a observar los matices expresados en este proceso, más allá del binomio neoliberalismo–autoritarismo, para lograr percibir las formas en que estos procesos se complementan, chocan y combinan en el ámbito local, así como observar sus impactos en los ecosistemas y las comunidades.

Referencias bibliográficas

- Agrawal, A. y J. C. Ribot. 1999. "Accountability in Decentralization: A Framework with South Asian and West African Cases". *Journal of Developing Areas* 33: 473-502.
- Agudo Sanchíz, Alejandro. 2015. *La etnografía de la administración de la pobreza*. México: Universidad Iberoamericana.
- Alix-García, J. M., E. N. Shapiro y K. R. E. Sims. 2012. "Forest Conservation and Slippage: Evidence from México's National Payment for Environmental Services Program". *Land Economics* 88 (4): 613-638.
- Almeida-Leñero, L., D. Revollo-Fernández, A. Caro-Borrero, I. Ruiz-Mallén, E. Corbera, M. Mazari-Hiriart y F. Figueroa. 2017. "Not the Same for Everyone: Community Views of Mexico's Payment for Environmental Services Programmes". *Environmental Conservation* 44 (3): 201-211. <https://doi.org/10.1017/S0376892916000564>.
- Angelsen, A., C. Martius, V. de Sy, A. E. Duchelle, A. M. Larson y T. T. Pham, eds. 2018. *Transforming REDD+: Lessons and New Directions*. Bogor: Center for International Forestry Research.

- Angelsen, A., M. Brockhaus, W. D. Sunderlin y L. V. Verchot, eds. 2013. *Análisis de REDD+. Retos y opciones*. Bogor: Center for International Forestry Research. http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BAngelsen1303.pdf.
- Astuti, R. y A. McGregor. 2015. "Governing Carbon, Transforming Forest Politics: A Case Study of Indonesia's REDD+ Task Force". *Asia Pacific Viewpoint* 56 (1): 21-36.
- Brenner, N., J. Peck y N. Theodore. 2010. "After Neoliberalization?". *Globalizations* 7 (3): 327-345.
- Brockhaus, M. y A. Angelsen. 2011. "Seeing REDD+ through 4Is: A Political Economy Framework". En *Analysing REDD+: Challenges and choices*, editado por A. Angelsen, M. Brockhaus, W. D. Sunderlin y L. V. Verchot. Bogor: Center for International Forestry Research.
- Brockington, D., R. Duffy y J. Igoe. 2008. *Nature Unbound: Conservation, Capitalism and the Future of Protected Areas*. Londres: Earthscan.
- Büscher, B., S. Sullivan, K. Neves, J. Igoe y D. Brockington. 2012. "Towards a Synthesized Critique of Neoliberal Biodiversity Conservation". *Capitalism, Nature, Socialism* 23 (2): 4-30.
- Cabello, J. y T. Gilbertson. 2012. "A Colonial Mechanism to Enclose Lands: A Critical Review of Two REDD+-Focused Special Issues". *Ephemera: Theory & Politics in Organization* 12 (2). <http://www.ephemerajournal.org/contribution/colonial-mechanism-enclose-lands-critical-review-two-redd-focused-special-issues>.
- Cameron, B. 2015. "Forests, Farms, and the Future of the Lacandon Jungle: Payments for Environmental Services in Mexico 2007-2014". *Innovations for Successful Societies*. Princeton: Princeton University Press. <http://successfulsocieties.princeton.edu/>.
- Carrillo Fuentes, J. y A. V. Ramírez. 2016. "Estudio legal: facultades y responsabilidades de manejo forestal y del suelo en REDD+ en México". Documento Occasional 150. Bogor: Center for International Forestry Research.
- Castree, N. 2010a. "Neoliberalism and the Biophysical Environment 1: What Neoliberalism Is, and what Difference Nature Makes to It". *Geography Compass* 4 (12): 1725-1733.

- Castree, N. 2010b. "Neoliberalism and the Biophysical Environment 2: Theorising the Neoliberalization of Nature". *Geography Compass* 4 (12): 1734-1746.
- . 2011. "Neoliberalism and the Biophysical Environment 3: Putting Theory into Practice". *Geography Compass* 5 (1): 35-49.
- CCMSS (Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible). 2016. "Presupuesto forestal 2016. ¿Nuevos riesgos para los bosques?". Nota informativa 43. <http://www.ccmss.org.mx/acervo/nota-informativa-43-presupuesto-forestal-2016-nuevos-riesgos-para-los-bosques/>.
- Chapela, G. 2017. "Reforma a la Ley Forestal: una amenaza a la vista". *La Jornada Ecológica*, núm. 212, 3-4.
- Comaroff, J. 2011. "The End of Neoliberalism?: What Is Left of the Left". *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 637 (1): 141-147. <https://doi.org/10.1177/0002716211406846>.
- Conafor (Consejo Nacional Forestal). 2015. *Modelo de intervención en las áreas de acción temprana REDD+*. Zapopan: Conafor.
- . *Estrategia Nacional para REDD+ 2017-2030*. Zapopan: Conafor.
- Corbera, E. 2012. "Problematizing REDD+ as an Experiment in Payments for Ecosystem Services". *Current Opinion in Environmental Sustainability* 4 (6): 612-619.
- Devhint Research & Consulting. 2015. "Consultoría para la identificación de lecciones aprendidas del desarrollo e implementación de políticas públicas que promueven el desarrollo rural sustentable a través del manejo integral del territorio: caso del Programa Especial para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona (PESL)". Informe no publicado, borrador.
- Deschamps, P., B. Zavariz e I. Zúñiga. 2015. *Revisión de la implementación de REDD+ en México: análisis de los programas especiales en áreas de acción temprana REDD+*. México: Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
- Durand, L. 2014. "¿Todos ganan? Neoliberalismo, naturaleza y conservación en México". *Sociológica* 29 (82): 183-223.

- Emerson K., T. Nabatchi y S. Balogh. 2012. "An Integrative Framework for Collaborative Governance". *Journal of Public Administration Research and Theory* 22 (1): 1-29.
- Ezzine-de-Blas, D., C. Dutilly, J. A. Lara-Pulido, G. Le Velly, A. Guevara-Sanginés. 2016. "Payments for Environmental Services in a Policymix: Spatial and Temporal Articulation in Mexico". *PLOS ONE* 11 (4): 1-15.
- Federici, S., F. N. Tubiello, M. Salvatore, H. Jacobs y J. Schmidhuber. 2015. "New Estimates of CO₂ Forest Emissions and Removals: 1990-2015". *Forest Ecology and Management*, núm. 352, 89-98.
- Ferguson, J. 2009. "The Uses of Neoliberalism". *Antipode* 4 (1): 166-184.
- Fletcher, R. y B. Büscher. 2017. "The PES Conceit: Revisiting the Relationship between Payments for Environmental Services and Neoliberal Conservation". *Ecological Economics* 132: 224-231.
- Hahn, T., C. McDermott, C. Ituarte-Lima, M. Schultz, T. Green and M. Tuven dal. 2015. "Purposes and Degrees of Commodification: Economic Instruments for Biodiversity and Ecosystem Services Need not Rely on Markets or Monetary Valuation." *Ecosystem Services* 16: 74-82.
- Hamrick, K. y M. Gallant. 2017. *Unlocking Potential: State of the Voluntary Carbon Markets 2017*. Washington, D. C.: Forest Trends; Ecosystem Marketplace.
- Harvey, D. 2005. *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Hernández, M. 2008. "La democracia mexicana, presa de una cultura política con rasgos autoritarios". *Revista Mexicana de Sociología* 70 (2): 261-303.
- Hewitt de Alcántara, C. 2009. "Renovación de ideas sobre el campo mexicano en época de crisis". Conferencia magistral en el Séptimo Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, San Cristóbal de Las Casas, 19 de agosto. http://amerac.org/wp-content/uploads/2015/11/renovacion_ideas.pdf.
- Hirsh, J. 2001. *El Estado nacional de competencia. Estado, democracia y política en el capitalismo global*. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

- Igoe, J. y D. Brockington. 2007. "Neoliberal Conservation: A Brief Introduction". *Conservation and Society* 5 (4): 432-449.
- Kashwan, P. 2017. *Democracy in the Woods: Environmental Conservation and Social Justice in India, Tanzania, and Mexico*. Nueva York: Oxford University Press.
- Klein, N. 2014. *This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate*. Nueva York: Simon & Schuster.
- . 2007. *The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism*. Toronto: Knopf.
- Larson, A. B., T. Dokken, A. E. Duchelle, S. Atmadja, I. A. P. Resosudarmo, P. Cronkleton, M. Cromberg, W. D. Sunderlin, A. Awono y G. Selaya. 2016. "Gender Gaps in REDD+: Women's Participation is not Enough". En *Gender and Forests: Climate Change, Tenure, Value Chains and Emerging Issues*, editado por C. J. Pierce Colfer, B. Sijapati Basnett, M. Elias, 68-88. Londres: Cifor; Routledge.
- Larson, A. M. y F. Soto. 2008. "Decentralization of Natural Resource Governance Regimes". *Annual Review of Environment and Resources* 33: 4.1-4.27.
- Larson, A. M., A. Libert Amico, C. Martius, A. Ravikumar, J. G. Tovar, L. F. Kowler, R. Myers, D. Rodriguez-Ward, A. Sanders, T. Trench, A. L. Yang y P. R. Deschamps. 2018. "Can Multilevel Governance Transform Business-as-usual Trajectories Driving Deforestation? Lessons for REDD+ and Beyond". Cifor Infobrief, núm. 235. Bogor: Cifor. DOI: 10.17528/cifor/007043.
- Libert Amico, A. 2017. "La preparación ante un futuro incierto. Respuestas al cambio climático en la Sierra Madre de Chiapas, México". Tesis de doctorado en Desarrollo Rural, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
- Libert Amico, A. y T. Trench. 2016. "Bosques y suelos en el contexto de REDD+: entre gobierno y gobernanza en México". *Terra Latinoamericana* 34: 113-124.
- IWGIA (Grupo de Trabajo Internacional sobre Asuntos Indígenas). 2014. *Mujeres indígenas y REDD+: hacerse escuchar*. Copenhague: IWGIA; Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP).

- Lozano, I. 2012. "Ejididos y comunidades: ¿cuarto nivel de gobierno?". Documento de trabajo núm. 268. México: Centro de Investigación y Docencia Económicas.
- Madrid, L., J. Núñez, G. Quiroz y Y. Rodríguez. 2009. "La propiedad social forestal en México". *Investigación Ambiental* 2: 179-186.
- McAfee, K. 2012. "Nature in the Market-world: Ecosystem Services and Inequality". *Development* 55 (1): 25-33.
- McAfee, K. y E. N. Shapiro. 2010. "Payments for Ecosystem Services in Mexico: Nature, Neoliberalism, Social Movements and the State". *Annals of the Association of American Geographers* 100 (3): 579-59.
- McDermott, C. L. y C. Ituarte-Lima. 2016. "Safeguarding What and for Whom? The Role of Institutional Fit in Shaping REDD+ in Mexico". *Ecology and Society* 21 (1): 9.
- Merino-Pérez, L., G. Ortiz y A. García. 2008. "Estudio exploratorio de las asociaciones regionales de silvicultores en el contexto de las unidades de manejo forestal". México: CCMSS.
- Merino-Pérez, L. y A. E. Martínez. 2014. *A vuelo de pájaro. Encuesta sobre las condiciones de las comunidades con bosques templados en México*. México: Conabio. https://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/versiones_digitales/Vuelo_Pajaro.pdf.
- Miller, S. W. 2007. *An Environmental History of Latin America*. Nueva York: Cambridge University Press.
- O'Connor, J. 1988. "Capitalism, Nature, Socialism: A Theoretical Introduction". *Capitalism, Nature, Socialism* 1 (1): 11-38.
- Parr, A. 2013. *The Wrath of Capital*. Nueva York: Columbia University Press.
- Pérez Castañeda, J. C. y H. Mackinlay. 2015. "¿Existe aún la propiedad social agraria en México?". *Polis* 11 (1): 45-82.
- Perreault, T. y P. Martin. 2005. "Geographies of Neoliberalism in Latin America". *Environment and Planning A* 37: 191-201.
- Polanyi, K. 2001 (1944). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press.

- Quintana Solórzano, F. 2014. “Los bosques en la estrategia global de lucha contra el cambio climático”. *Análisis*, núm. 3. <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/10801-20140618.pdf>.
- Rantala, S., R. Hajjar y M. Skutsch. 2014. “Multilevel Governance for Forests and Climate Change: Learning from Southern Mexico”. *Forests* 5: 3147-3168.
- Ravikumar, A., M. Kijazi, A. M. Larson y L. Kowler. 2015. *Project Guide and Methods Training Manual*. Bogor: Cifor.
- Ravikumar, A., A. M. Larson, R. Myers y T. Trench. 2018. “Inter-sectoral and Multilevel Coordination Alone Do not Reduce Deforestation and Advance Environmental Justice: Why Bold Contestation Works When Collaboration Fails”. *Environment and Planning C: Politics and Space* 36 (8): 1437–1457. DOI: 10.1177/2399654418794025.
- Rendón Medel, R., E. Roldán Suárez, B. Hernández Hernández, P. Cadena Íñiguez. 2015. “Los procesos de extensión rural en México”. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas* 6 (1): 151-161.
- Ribot, J. C. 2002. *Democratic Decentralization of Natural Resources: Institutionalizing Popular Participation*. Washington D. C.: World Resources Institute.
- . 2007. “Representation, Citizenship and the Public Domain in Democratic Decentralization”. *Development* 50: 43-49.
- Robinson, W. 2015. *América Latina y el capitalismo global: una perspectiva crítica de la globalización*. México: Siglo XXI.
- Rodríguez, O. 2018. “Prácticas políticas en la interfaz social del desarrollo forestal en el contexto de cambio climático: un estudio de caso en la selva Lacandona, Chiapas, México”. Tesis de maestría en Desarrollo Rural Regional, Universidad Autónoma Chapingo-Chiapas.
- Scoones, I., M. Edelman, S. M. Borrás Jr., R. Hall, W. Wolford, B. White. 2017. “Emancipatory Rural Politics: Confronting Authoritarian Populism”. *The Journal of Peasant Studies* 4 (1): 1-20. <http://dx.doi.org/10.1080/03066150.2017.1339693>.
- Schröter, B. 2010. “Clientelismo político: ¿existe el fantasma y cómo se viste?”. *Revista Mexicana de Sociología* 72 (1): 141-175.

- Shapiro-Garza, E. 2013. "Contesting the Market-based Nature of México's National Payments for Ecosystem Services: Four Sites of Articulation and Hybridization". *Geoforum* 46: 5-15.
- Skutsch, M., A. Balderas Torres y J. C. Carrillo Fuentes. 2017. "Policy for Pro-poor Distribution of REDD+ Benefits in Mexico: How the Legal and Technical Challenges are Being Addressed". *Forest Policy and Economics* 75: 58-66.
- Snyder, R. 2001. *Politics after Neoliberalism: Reregulation in Mexico*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Solís Sánchez, I. 2016. "El caciquismo en México: la otra cara de la democracia mexicana. El caso del caciquismo urbano en el Estado de México". *Estudios políticos* 37: 167-192.
- Stickler, C., A. Duchelle, J. P. Ardila, D. Nepstad, O. David, C. Chan, J. G. Rojas, R. Vargas, T. Bezerra, L. Pritchard, J. Simmonds, J. Durbin, G. Simonet, S. Peteru, M. Komalasari, M. DiGiano y M. Warren. 2018. *The State of Jurisdictional Sustainability. Synthesis for Practitioners and Policymakers*. Bogor: Cifor; Earth Innovation Institute; GCF-Task Force. <https://earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability/>.
- Tetreault, D. 2015. "Social Environmental Mining Conflicts in Mexico". *Latin American Perspectives* 42 (5): 48-66.
- Thompson, M. C., M. Baruah y E. C. Carr. 2011. "Seeing REDD+ as a Project of Environmental Governance". *Environmental Science & Policy* 14: 100-110.
- Trench, T., A. M. Larson, A. Libert Amico y A. Ravikumar. 2018. "Análisis de la gobernanza multinivel en México: lecciones para REDD+ de un estudio sobre cambio de uso del suelo y distribución de beneficios en Chiapas y Yucatán". Documentos de trabajo 243. Bogor: Cifor. http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP243Trench.pdf.
- Van Hecken, G., V. Kolinjivadi, C. Windey, P. McElwee, E. Shapiro-Garza, F. Huybrechs y J. Bastiaensen. 2018. "Silencing Agency in Payments for Ecosystem Services (PES) by Essentializing a Neoliberal 'Monster' into Being: A Response to Fletcher & Büscher's 'PES Conceit'". *Ecological Economics* 144: 314-318.

- Van Hecken, G., J. Bastiaensen y C. Windey. 2015. "Towards a Power-sensitive and Socially-informed Analysis of Payments for Ecosystem Services (PES): Addressing the Gaps in the Current Debate". *Ecological Economics* 20: 117-125.
- Villafuerte Solís, D. 2015. "Crisis rural, pobreza y hambre en Chiapas". *LimnaraR. Estudios Sociales y Humanísticos* XIII (1): 13-28.
- Wakild, E. 2006. "'It Is to Preserve Life, to Work for the Trees': The Steward of Mexico's Forests, Miguel Angel de Quevedo, 1862-1948". *Forest History Today* (primavera-verano): 4-14. https://www.academia.edu/1256255/It_Is_to_Preserve_Life_to_Work_for_the_Trees_The_Steward_of_Mexicos_Forests_Miguel_Angel_de_Quevedo_1862-1948.

¿Pueden los pagos por servicios ambientales frenar la deforestación en la frontera agrícola de Nicaragua? Un análisis desde los sistemas agrarios*

Gert Van Hecken

Pierre Merlet

Universidad de Amberes, Universidad Centroamericana

Mara Lindtner

Universidad de los Recursos Naturales y las Ciencias de la Vida

Johan Bastiaensen

Universidad de Amberes, Universidad Centroamericana

Introducción

Los pagos condicionados para incentivar a los pequeños productores a adoptar prácticas favorables para el medio ambiente resultan ser una idea muy atractiva, como lo demuestra la vertiginosa cantidad de proyectos piloto y artículos académicos sobre pagos por servicios ambientales (PSA; Schomers y Matzdorf 2013; Wunder 2015). Especialmente en contextos agrarios, los pagos directos se consideran más eficientes y efectivos que los enfoques alternativos “indirectos” o “impositores” (Ferraro y Kiss 2002; Wunder 2005). Puesto que los participantes suelen ser productores pobres de los países en vías de desarrollo,

* Este texto es una versión adaptada de un artículo publicado en inglés por los mismos autores en la revista *Ecological Economics* en 2017 “Can financial incentives change farmers’ motivations? An agrarian system approach to development pathways at the Nicaraguan agricultural frontier”. *Ecological Economics*. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.12.030>.

también se tiende a considerar que los esquemas de PSA son atractivos escenarios donde todos ganan, ya que se mitiga la pobreza y al mismo tiempo se conserva la naturaleza (Pagiola, Arcenas y Platais 2005; Muradian et al. 2013). La evidencia empírica demuestra, sin embargo, que las supuestas ventajas de los PSA no son universales. Una creciente cantidad de estudios subraya que los resultados de los esquemas de PSA son impredecibles, y sus consecuencias sociales y ambientales son ambiguas (Pattanayak, Wunder y Ferraro 2010; Adhikari y Agrawal 2013). Esas constataciones se reflejan asimismo en un corpus de literatura crítica que advierte sobre los efectos sociales y ecológicos potencialmente perjudiciales de las intervenciones emanadas de visiones del mundo excesivamente simplistas, apolíticas y técnico-económicas, como pueden ser los proyectos de PSA (McAfee 1999; Kosoy y Corbera 2010; Büscher 2014; Van Hecken, Bastiaensen y Windey 2015a).

La episteme que sustenta buena parte de la propuesta de los PSA se basa en nociones tecnocráticas de las relaciones entre seres humanos y medio ambiente, como sistemas manejables que pueden alterarse de modo predecible, en consonancia con el argumento de que las motivaciones de los actores se basan en una racionalidad económica universal (Van Hecken y Bastiaensen 2010a). Sin embargo, estudios recientes sugieren que los incentivos no financieros (p. ej., asistencia técnica agrícola, intercambio de información o presión social) pueden ser motivaciones más potentes que los pagos para conducir a cambios en patrones de uso de suelo, y que los esquemas de pagos no necesariamente mejoran la eficiencia económica y la sostenibilidad de las acciones de conservación a largo plazo (Van Hecken y Bastiaensen 2010b; Hayes 2012; Narloch, Pascual y Drucker 2012; Rode, Gómez-Baggethun y Krause 2014). Los efectos que tienen los pagos sobre el comportamiento ambiental dependen de diversos factores, entre ellos las características de los acuerdos de pago, las nociones locales de justicia y el arraigo psicológico, cultural y social del comportamiento deseado (Gneezy y Rustichini 2000; Van Hecken, Bastiaensen y Vásquez 2012; Muradian et al. 2013; Martin et al. 2014; Ezzine-de-Blas et al. 2019). De modo inevitable, los pagos interactúan entonces con las motivaciones intrínsecas y con las prácticas y lógicas históricamente

institucionalizadas, menoscabando (excluyendo) o reforzando (atrayendo) comportamientos y actitudes beneficiosas para el medio ambiente (Rode, Gómez-Baggethum y Krause 2014).

Gradualmente, emerge evidencia empírica acerca de las interacciones entre incentivos monetarios y no monetarios (con los correspondientes arreglos institucionales), así como sobre su efecto sostenido en la gobernanza de los ecosistemas (Rode, Gómez-Baggethum y Krause 2014; Ezzine-de-Blas et al. 2019). La investigación existente se basa principalmente en la economía experimental (Cárdenas, Stranlund y Willis 2000; Bowles 2008; Narloch, Pascual y Drucker 2012; Kits, Adamowicz y Boxall 2014), y si bien esos planteamientos generan información valiosa sobre la dinámica de los procesos de toma de decisión, tienen el gran inconveniente de asumir que el comportamiento de las personas en experimentos artificiales y simplificados refleja de manera fiel su comportamiento en las interacciones mucho más complejas, variadas y repetidas del mundo real. Puesto que el argumento de la atracción o el desplazamiento de las motivaciones se basa precisamente en la posibilidad de un cambio en las percepciones y motivaciones —por lo tanto, en preferencias y opciones inestables— *a lo largo del tiempo y a través de arreglos institucionales*, entonces, la validez externa de esos planteamientos puede estar en duda.¹

La investigación actual sobre el desplazamiento de las motivaciones se basa en marcos conceptuales tales como la teoría de la autodeterminación (Ezzine-de-Blas et al. 2018), la cual vincula los procesos psicológicos internos a los incentivos externos y asume así que determinados motivos individuales resultan en determinadas acciones. Si bien esas teorías reconocen que las motivaciones se construyen socialmente y, por lo tanto, ofrecen ideas interesantes sobre la influencia de los contextos institucionales en las *motivaciones*

¹ Henrich, Heine y Norenzayan (2010, 29) han argumentado de manera convincente que se ha hecho demasiada investigación experimental con gente de los países occidentales —educados, industrializados, ricos y democráticos [países WEIRD, por sus siglas en inglés]—, mientras que la mayoría de la gente vive en contextos culturales e institucionales muy diferentes; por lo tanto, hacer generalizaciones a partir de los resultados de tales investigaciones resulta particularmente problemático.

individuales, implícitamente suponen un accionar autónomo, irrestricto y uniforme de los seres humanos en su capacidad de convertir las motivaciones en determinadas *acciones o resultados materiales*. Así, esas teorías pasan por alto en gran medida los efectos desiguales de las restricciones estructurales o institucionales sobre el actuar individual. La comprensión de la forma según la cual diferentes estructuras de incentivos influyen de manera distinta sobre la conducta de los individuos exige, por tanto, poner atención a las desigualdades sociales, a las diferencias en el *margen de maniobra* de dichos individuos y a la diversidad de sus medios de subsistencia (Cleaver 2005; Milne y Adams 2012); precisamente porque las diversas posiciones a partir de las cuales los actores se involucran en procesos decisorios no solamente afectan sus motivaciones, sino también el alcance de sus acciones (Cote y Nightingale 2012). Todas las sociedades y las comunidades son grupos heterogéneos compuestos de actores con intereses diferentes y estrategias diversas, a veces opuestas, en lo que atañe a los recursos (Li 1996; Hall et al. 2014). Debido a esto, es crucial entender que las instituciones producen significados divergentes y, asimismo, variados factores propiciatorios o restrictivos para los diferentes actores (Leach, Mearns y Scoones 1999).

A fin de entender cómo reacciona la gente ante la introducción de nuevos marcos institucionales, necesitamos trasladar nuestro análisis del nivel individual a *la relación dinámica y recursiva* entre el nivel micro (las decisiones individuales concernientes al cambio de uso de la tierra) y el nivel intermedio (la dinámica colectiva socioinstitucional en territorios específicos). Por lo tanto, entender los efectos del desplazamiento de las motivaciones, de la sostenibilidad del comportamiento “proambiental” y de las acciones humanas socialmente situadas significa que debemos adoptar un enfoque histórico y socialmente informado ante la dinámica socioambiental emergente en determinados contextos territoriales.

En la misma línea de la literatura reciente (Leach, Scoones y Stirling 2010; Bastiaensen et al. 2015; Fazey et al. 2015), este capítulo adopta un enfoque de *rutas de desarrollo*, pero va más allá del uso metafórico actual de ese concepto, pues desarrolla un planteamiento más operativo de las rutas rurales territoriales. Exploramos en qué medida el uso de un enfoque de *sistema*

agrario (Dufumier 1996; Mazoyer y Roudart 2006; Cochet 2012) puede ayudarnos a analizar esas rutas. Mediante una evaluación empírica de un proyecto de PSA en Nicaragua, este enfoque permite una comprensión más significativa e integral de las interacciones dinámicas y reflexivas entre la estructura institucional y el actuar individual. En la segunda sección discutimos la base epistemológica y las implicaciones metodológicas del enfoque de sistema agrario, y demostramos que este permite relacionar reflexivamente diferentes tipos de *estrategias de vida individuales* de los productores con un colectivo más amplio de rutas de desarrollo. En la parte que sigue aplicamos este instrumento conceptual-metodológico para evaluar la dinámica territorial en la frontera agrícola de Nicaragua. Por último, en la sección cuarta mostramos que este enfoque nos permite reflexionar sobre las implicaciones de los PSA y de otras intervenciones de conservación y desarrollo en las motivaciones de los productores y sus prácticas de uso de tierras.

Desentrañar las complejidades socioambientales en territorios rurales mediante el concepto de *sistema agrario*

Rutas de desarrollo y estrategias de vida

Los territorios rurales son sistemas complejos y dinámicos resultantes de la interacción de procesos naturales y humanos, lo que da lugar al establecimiento de determinados paisajes físicos moldeados por las acciones, percepciones, ideas y aspiraciones de la gente (Setten 2004; Rizzo et al. 2013); no obstante, al mismo tiempo, las condiciones ecológicas que caracterizan a dichos paisajes físicos los limitan. Los elementos humanos y naturales están entonces interrelacionados y coevolucionan en interacción (Folke et al. 2005) con el conocimiento científico acerca de esta *realidad natural-humana*, e inevitablemente están influenciados por determinados marcos sociopolíticos y culturales a través de los cuales intentamos entender o hallar sentido a lo que percibimos como “realidad” (Leach, Scoones y Stirling 2010). Así pues, no tiene sentido analizar lo social y lo natural como si fueran subsistemas separados, precisamente porque

las dinámicas del sistema solo existen en su interacción (Hukkinen 2014; Van Hecken, Bastiaensen y Windey 2015b). Más aun, los territorios rurales han sido coproducidos por la actividad humana, de manera que son *ecosistemas cultivados* (Mazoyer y Roudart 2006), cuyo estado presente depende de trayectorias históricas y decisiones determinantes en momentos críticos del pasado (Liu et al. 2007). Por tanto, la reconstrucción histórica y multidimensional de los sistemas socioambientales tiene que recibir la atención debida, puesto que ayuda a entender su situación actual y evita hacer evaluaciones estáticas instantáneas de la realidad (Leach, Scoones y Stirling 2010).

Desde esta perspectiva, las interacciones entre seres humanos ocurren en condiciones históricas y agroecológicas específicas, y conducen al surgimiento de determinadas rutas de desarrollo en torno a proyectos de movilización social que se ajustan y hacen viables trayectorias individuales específicas (Scoones y Wolmer 2002; Bastiaensen et al. 2015). Una *ruta de desarrollo* surge a raíz de la creación y mantenimiento de un conjunto de ideas compartidas, junto a regularidades o patrones de estrategias de vida que se cumplen entre determinados grupos sociales (De Haan y Zoomers 2005, 42; Bastiaensen et al. 2015). Refleja ideas sobre “el modo correcto de hacer las cosas”, percepciones configuradas por la historia y la cultura (Cleverly 2012) circulan en redes sociales y suscitan determinadas reglas de juego, lo cual conduce a determinados patrones relacionales. Todo esto influye en el actuar y en las capacidades de los individuos, y propicia o limita la implementación de determinadas trayectorias específicas en cuanto a las estrategias de vida (Bastiaensen et al. 2015).

En particular, las rutas colectivas de desarrollo territorial determinarán las modalidades de acceso de los actores a los recursos. Aquí entendemos *acceso* como la “capacidad de beneficiarse de algo” (Ribot y Peluso 2003, 153), y se refiere a los mecanismos socioinstitucionales que gobiernan las posibilidades de tener y usar los recursos, así como a las condiciones que determinan las oportunidades para sacarle provecho a dicho uso. En ese proceso de lograr y mantener el acceso habrá ganadores (actores que logran involucrar a otros en sus propios puntos de vista mediante poder, recursos y beneficios) y perdedores

(aquellos que tienen menos voz y menos poder, cuyas opiniones se escuchan menos y que obtienen menos beneficios).

No obstante, ninguna de estas rutas es inmutable: se abren y cierran en forma dinámica e impredecible. En efecto, pese a la presencia de un limitado actuar restringido, situado (y diferenciado), los hogares e individuos constantemente están interpretando, probando y desarrollando ideas; desafiando y renegociando las reglas del juego, y manteniendo o cambiando sus redes sociales. Mediante sus éxitos y fracasos, co-construyen continuamente los territorios humanos a los que pertenecen, e influyen en los procesos que definen las rutas de esos territorios. Al hacerlo, se dan cuenta de su potencial para cambiar las rutas de desarrollo y abren oportunidades para implementar futuras estrategias de vida. Desde una perspectiva de intervención concreta que busca la conservación de los recursos naturales y una vía para el desarrollo, esto significa que necesitamos entender críticamente qué actores obtienen cuáles beneficios del surgimiento de determinadas rutas de desarrollo (dominantes, subalternas e incluso imaginarias), y a partir de ese entendimiento, hacer aportes críticos a los debates en que participan los actores respecto a incentivos específicos u otro tipo de intervenciones.

El concepto de *sistema agrario*

Un enfoque teórico-metodológico muy útil para desentrañar las complejidades multiescala de las realidades rurales y sus dinámicas de cambio, enfocado concretamente en las prácticas y motivaciones del productor a diferentes escalas, es el concepto de *sistema agrario*, desarrollado dentro del enfoque de la agricultura comparada (Dufumier 1996; Mazoyer y Roudart 2006; Cochet 2011, 2012). A diferencia de otros estudios agronómicos más tradicionales que tienden a limitar su enfoque al ámbito de la finca, este planteamiento afirma que el análisis de la dinámica rural debe comenzar en el nivel del paisaje (Rizzo et al. 2013), puesto que esa es la escala en la que se despliega la suma de las consecuencias de las prácticas agrícolas implementadas por los productores. Sin embargo, los elementos constitutivos de un paisaje determinado

no deben analizarse por separado, precisamente porque los resultados de las interacciones en los niveles inferiores configuran la evolución de la totalidad del territorio en una dirección específica (Cholley 1946).

Si bien el concepto de *sistema agrario* se ha descrito de diversas maneras,² seguimos a Cochet (2012) cuando afirma que:

[...] el sistema agrario abarca primero que nada el modo de explotación de un espacio geográfico determinado. Este modo de explotación incluye: (1) las características de uno o varios agro-ecosistemas; (2) un *modus operandi*, que a su vez se caracteriza por el patrimonio técnico de los agricultores (herramientas, conocimientos, prácticas, saberes que han evolucionado con el tiempo); (3) el modo en que los humanos han transformado el ambiente al paso del tiempo; (4) el paisaje resultante; (5) las relaciones entre los distintos agro-ecosistemas que componen el ambiente; (6) los mecanismos de renovación de la fertilidad del suelo. El sistema agrario incluye asimismo las relaciones sociales de producción y comercio que han conducido a su implementación y desarrollo (particularmente las condiciones que influyen en el acceso a recursos) así como las condiciones que influyen en la distribución del valor añadido resultante. Ello incluye una limitada cantidad de sistemas de producción, los mecanismos por los que se diferencian esos sistemas, y sus respectivas trayectorias. Finalmente, incluye también las características de la especialización y de la división social del trabajo, dentro de cada sector, y las condiciones económicas, sociales y políticas —particularmente los sistemas de establecimiento de precios relativos— que influyen en la integración de los productores a los mercados globales (Cochet 2012, 130).

Una de las principales premisas de este planteamiento es que en cada momento de la historia, *los productores siempre tienen buenas razones para hacer lo que hacen* (Cochet, Devienne y Dufumier 2007). Así, para analizar territorios rurales, no solo es crucial identificar las prácticas del productor, sino también entender cuáles son las motivaciones de fondo de esas acciones. En

² Para tener un panorama más amplio de esas conceptualizaciones, nos referimos a Jouve (1988) y Cochet (2012).

ese planteamiento se argumenta que las acciones de los productores no están motivadas únicamente por una racionalidad económica (maximización de la producción, ingreso o ganancia, gestión de riesgos, creación intergeneracional de capital, etc.) y que dichas acciones tampoco se pueden explicar inequívocamente con meras referencias a la cultura o las tradiciones. El accionar de los productores está más bien configurado por un conjunto híbrido y cambiante de factores cognitivos (p. ej., conocimientos, cosmovisiones), materiales (p. ej., disponibilidad de recursos naturales, especies animales, variedades botánicas, fertilidad del suelo) y sociales (p. ej., instituciones, estructuras de poder, relaciones sociales; Cochet 2011). La conducta humana, pues, suele ser racional (en diferentes maneras) pero no siempre consciente, intencional o estratégica, sino que está profundamente arraigada en hábitos “basados en una larga experiencia en cuanto a lo que parece funcionar” (Hiedanpää y Bromley 2014, 182). Esto coincide con nuestra conceptualización de los territorios que evolucionan debido a la interacción entre las rutas colectivas de desarrollo y las trayectorias individuales.

Como punto de entrada para desentrañar las complejidades de los territorios rurales, el enfoque de sistema agrario se basa en el concepto de *sistema de producción*. Este concepto representa el ámbito de la finca donde se ejecutan las prácticas agrícolas, y por tanto, es un elemento clave para entender la dinámica más amplia de los sistemas agrarios (Brossier 1987; Cochet 2012). Al igual que los paisajes físicos emergentes, los sistemas de producción son más que una simple suma de prácticas agrícolas, pues están insertos en contextos sociales, ambientales y técnicos interrelacionados que, en conjunto, configuran tales actividades, a la vez que las retroalimentan. Así, las prácticas agrícolas se pueden conceptualizar como el resultado material de complejos sistemas de interacción históricamente moldeados en contextos sociopolíticos específicos, e ilustran la interrelación de los humanos con la naturaleza en territorios rurales concretos.

La combinación de diferentes sistemas de producción se cristaliza en un sistema agrario. De ese modo:

[El] enfoque de la agricultura comparada permite agrandar o achicar el nivel de análisis, y moverse repetidamente de una escala de análisis a otra [...]: desde

la parcela o el rebaño donde esas prácticas pueden observarse, a la unidad de producción o empresa agrícola donde se integran diferentes sistemas de cultivo y de ganadería, a la región o país donde el concepto de sistema agrario puede aplicarse (Cochet 2012, 133).

Sin embargo, el proceso de bajar el nivel de análisis no debe verse como una descomposición unidireccional de fenómenos complejos en procesos independientes de menor escala y más manejables, más bien es un instrumento mental que debe ayudarnos a comprender mejor una realidad compleja, y siempre debe ir acompañado de un proceso de alejamiento que sitúa las prácticas agrícolas concretas en una realidad más amplia, sobrepasando el ámbito de la parcela o la finca; es decir, en el amplio contexto socioinstitucional, geográfico y cultural del que forman parte. El análisis de esas interacciones no solo nos ayuda a identificar *qué es* lo que hacen los productores, sino también a deducir las razones o motivaciones que impulsan ciertas acciones, y las consecuencias agregadas que tienen en términos de la dinámica territorial (Cochet y Devienne 2006; Cochet 2012). De esta forma, nos remite a lo que los productores pueden hacer y lo que están motivados a hacer. Esta continua alternancia analítica entre las escalas es una de las principales fortalezas de este planteamiento, aun cuando su aplicación en la práctica resulta todo un desafío.

Componentes metodológicos

A fin de analizar la dinámica de un sistema agrario, el enfoque de la agricultura comparada ha desarrollado el paquete metodológico llamado *diagnóstico agrario* (Apollin y Eberhardt 1999; Cochet 2011). Este diagnóstico se basa en un proceso de inmersión prolongada en el terreno y usa una combinación de métodos, entre ellos transectos paisajísticos, observaciones participantes y entrevistas semiestructuradas y abiertas. Consta de tres etapas: un análisis del paisaje, un análisis histórico y un análisis técnico-económico. Esas etapas no suceden de manera lineal ni son independientes entre sí; se implementan

de manera iterativa y estimulan al investigador a trasladarse continuamente entre una y otra.

El *análisis del paisaje* intenta identificar patrones físicos y humanos en el paisaje, para mapear espacios geográficos coherentes que se caracterizan por prácticas similares de gestión y uso de los recursos naturales. Este análisis permite al investigador descubrir la relación entre las prácticas agrícolas y las condiciones biofísicas. El *análisis histórico*, a su vez, pretende identificar y evaluar las trayectorias que han seguido los distintos tipos de productores en cuanto a sus cambios de sistemas de producción. Mediante entrevistas a fondo con los productores que más tiempo han vivido en la región, expone los procesos de diferenciación social y técnica en relación con cambios socioinstitucionales más amplios (p. ej., cambios en políticas públicas, relaciones de precios, procesos de demografía y migración). Por último, el *análisis técnico-económico* permite una comprensión más profunda de los sistemas de producción vigentes —en términos de prácticas agrícolas y sus resultados económicos— y de cómo esas prácticas configuran y son configuradas por las condiciones agroecológicas cambiantes en las cuáles se encuentran inmersas.

Así, el enfoque de sistema agrario sitúa las prácticas actuales observadas en un patrón histórico de cambio y, por tanto, nos ayuda a evaluar cómo han evolucionado esas prácticas en el tiempo, las condiciones que han suscitado ciertos cambios y cuáles modificaciones pueden esperarse en el futuro (Cochet, Devienne y Dufumier 2007; Cochet 2011). Una limitación importante de este enfoque es que el paquete metodológico todavía está muy orientado al análisis de los aspectos técnicos y económicos que subyacen en las decisiones y en los procesos de diferenciación social, con lo que desatiende parcialmente la contextualización de las creencias, necesidades, aspiraciones, relaciones de poder e instituciones. Además, tiende a naturalizar las trayectorias pasadas como si fueran lógicas o inevitables, cuando en realidad son resultado de opciones históricas impregnadas de poder y de relaciones de cooperación o conflicto entre grupos sociales. En nuestro estudio de caso mostramos que los resultados del diagnóstico pueden alimentar un proceso analítico más amplio al incorporar otros métodos que deben permitirnos hacer una reflexión más completa sobre los factores sociales y relacionales que influyen en las dinámicas rurales.

Pagando a los productores en la frontera agrícola de Nicaragua

En nuestro estudio de caso, para ilustrar el potencial del enfoque de sistema agrario, presentamos las dinámicas relacionadas con las prácticas de los productores en la zona de amortiguamiento de la reserva biológica Indio-Maíz en Nicaragua, de modo particular en la comunidad de Manola,³ que linda con la reserva y está situada en el departamento de Río San Juan, cerca de la frontera con Costa Rica. La reserva se estableció en 1990 y es una de las mayores áreas protegidas de Nicaragua, con una superficie de 264 000 ha. Forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano y es el hogar de una variedad de especies en peligro de extinción (Marena 2015). Si bien según la ley es una área estrictamente protegida, en la que no se permiten actividades humanas, la compleja dinámica sociopolítica y económica nacional y local ha ocasionado un proceso constante de avance de la frontera agrícola, desde la zona establecida como de amortiguamiento hacia la zona núcleo de la reserva. Debido a una larga historia de inmigración y desarrollo de la ganadería extensiva, la zona se ha convertido en uno de los frentes agrícolas pioneros más activos del país (Nygren 2004).

Alarmado por las perjudiciales consecuencias ecológicas de la deforestación en esa zona, la respuesta del Gobierno de Nicaragua se ha restringido principalmente a establecer por ley la reserva, y posteriormente, a intentar estabilizar a la población en la zona de amortiguamiento mediante la legalización de los derechos de propiedad de los colonos (Nygren 2000; Larson 2010, 59). Sin embargo, debido a su ubicación remota y a la limitada voluntad y capacidad del Estado para detener las invasiones en la reserva, durante la década de 1990 aumentó en la región la presencia de actores no estatales que implementaron proyectos cuyo objetivo era contribuir a disminuir la deforestación, y asumieron de esta forma un papel cada vez más activo en la defensa de los bosques tropicales de Río San Juan (Nygren 2000). Si bien la línea inicial de la mayoría de los proyectos estaba orientada en gran medida por enfoques “conservacionistas [que] parecían totalmente insensibles a las realidades de las necesidades

³ Con el objetivo de proteger la identidad de los informantes que participaron en este estudio, hemos cambiado los nombres de todos los actores y comunidades.

de supervivencia de los campesinos [...], a finales de la década de 1990, sin embargo, las organizaciones conservacionistas parecían entender que los campesinos tenían que tener beneficios claros a fin de que apoyaran sus proyectos” (Larson 2010, 60). Las intervenciones de estos actores han ayudado sin duda a que, hoy en día, la reserva Indio-Maíz sea la segunda área boscosa más grande del país y una de las mejor preservadas a nivel centroamericano.

Una de las organizaciones que ha adoptado cierto enfoque “campesinista” en sus estrategias de intervención es Conservación con Desarrollo. Esta organización no gubernamental (ONG) ambientalista se fundó en 1990 y está territorialmente arraigada en la región de Río San Juan. Su objetivo es contribuir a la disminución del deterioro ambiental por medio de proyectos orientados hacia el desarrollo comunitario y la concientización. Desde su creación, esta ONG ha experimentado con distintos tipos de intervenciones, que van desde proyectos basados en la educación ambiental y la diversificación agrícola hasta la promoción de actividades alternativas para la generación de ingresos, tales como el ecoturismo. Sin embargo, queda la preocupación de que sus intervenciones parecen haber ofrecido alternativas de supervivencia muy limitadas para la población local y, por tanto, han tenido una incidencia muy reducida en las dinámicas que causan los altos niveles de deforestación dentro y cerca de la reserva Indio-Maíz.

Descripción del proyecto

En 2006, Conservación con Desarrollo lanzó un programa de PSA que nace en un contexto muy particular, caracterizado por la declaración de una veda forestal por parte del Gobierno, que hizo más difícil la extracción descontrolada de madera en la zona.⁴ Al mismo tiempo, se implementaba un gran proyecto de desarrollo y conservación en la zona, financiado por la cooperación danesa, en el cual participó Conservación con Desarrollo. Dicho proyecto promovía la

⁴ La veda forestal sigue vigente, y aunque ha hecho más difícil la venta de madera extraída de la zona, no ha implicado un cambio relevante en el nivel de deforestación.

diversificación productiva de las fincas en la zona de amortiguamiento (en particular a través de la producción de cacao) con el objetivo de crear alternativas económicas para los productores. Lo que se buscaba era que los productores lograran obtener un ingreso económico lo suficientemente alto para no tener la necesidad de vender madera o migrar hacia la reserva (lo que además se volvía más problemático dada la existencia de la veda forestal), y preservar de esta manera las áreas boscosas, tanto en la zona núcleo como dentro de las fincas en la zona de amortiguamiento. Sin embargo, Conservación con Desarrollo se percató rápidamente de que los esfuerzos por promover la diversificación productiva no lograban generar un aumento del ingreso suficiente para influir en las dinámicas de deforestación y migración de campesinos pobres hacia la reserva. La ONG empezó entonces a buscar nuevas estrategias de intervención, siempre con el objetivo de mejorar el ingreso de los productores de la zona. Es ahí que nace el programa de PSA de Conservación con Desarrollo, codiseñado con una ONG conservacionista europea.

En este programa se les paga a los productores en la zona de amortiguamiento de Indio-Maíz por proteger partes de los bosques que todavía quedan en sus fincas. El objetivo principal es que esos pagos creen un valor monetario para los bosques en pie y generen un ingreso adicional que inhiba la migración de los campesinos hacia la reserva. Solo son elegibles para firmar un contrato de cinco años bajo este esquema aquellas familias campesinas que tienen sus derechos de propiedad reconocidos legalmente por el Estado y que están dispuestas a inscribir una área forestal de diez hectáreas como mínimo. La máxima cantidad de bosques elegibles por cada hogar es de cien hectáreas. Los agricultores reciben un pago anual de 28.5 dólares por hectárea de bosque protegido. No están obligados a poner todas sus áreas boscosas en conservación, son libres de elegir las parcelas forestales que desean incluir y solo se les exige que dejen “intactos” los bosques en las áreas bajo contrato. Los participantes también son responsables de impedir que otros habitantes extraigan madera o leña y que entren en las áreas para cazar. La ONG conservacionista europea que codiseñó el programa asegura, por su parte, la recolección de fondos para su implementación mediante la venta al público de certificados de protección forestal.

En la fase piloto (2006-2009) se firmaron trece contratos que cubren un total de 280 ha de bosque. En 2010, una evaluación intermedia concluyó que el programa carecía de una visión a largo plazo y cuestionó la disposición de los agricultores para proteger los bosques una vez que terminasen los pagos. Por consiguiente, en 2012 se inició una segunda fase de cinco años que preveía cubrir, para el 2016, una área forestal total de 2000 ha, que incluye unos setenta hogares. El nuevo esquema de contrato para esta segunda fase exige, además de la conservación de áreas boscosas dentro de las fincas, que los campesinos diseñen planes de gestión sostenible de estas (p. ej., basados en sistemas agroforestales, ecoturismo o producción de cacao o de raicilla)⁵ y que usen los pagos para implementar esos planes. La idea es que esto permita *comprar tiempo para los bosques porque les estamos poniendo un valor económico, y al mismo tiempo se ayuda a los agricultores a implementar prácticas sostenibles de uso del suelo que generen alternativas de ingreso a largo plazo* (entrevista con el coordinador del proyecto 2014). Esto debería disminuir la presión sobre los bosques una vez que los pagos terminen. A fin de apoyar a los agricultores, Conservación con Desarrollo brinda asesoramiento técnico y organiza talleres colectivos sobre producción agroecológica y sostenible. Al momento de nuestra investigación (2014-2015), solo catorce familias participaban en esta segunda fase con una área forestal de 468 ha en total. Según nuestras entrevistas con el personal de Conservación con Desarrollo, esto se debe tanto a restricciones presupuestarias para conseguir los fondos desde la ONG europea como a una falta de demanda de parte de los productores para insertarse en el programa. La tabla 1 muestra las características de los hogares participantes.

Transcurridos tres años de la segunda fase del programa y enfrentando escasas perspectivas de financiamiento a futuro, la ONG ha iniciado una serie de procesos de reflexión sobre la efectividad y las posibles consecuencias imprevistas a largo plazo de su intervención. Una de las principales preocupaciones que expresaron los representantes de la organización es que la tan esperada adopción de prácticas sostenibles parece estar ausente en la realidad,

⁵ *Carapichea ipeacuanha*. De esta planta se extrae la emetina, sustancia usada en la industria farmacéutica.

TABLA 1

Características de la tierra en fincas que participan en el esquema PSA (n = 14), zona de amortiguamiento de la reserva biológica Indio-Maíz, Nicaragua

	Área total (ha)	Área forestal bajo contrato (ha)	Área forestal no contratada (ha)	Área de cultivo (ha)	Área de pastura (ha)
Total	796.5	468.3	57.8	105.5	164.9
Promedio	56.9	33.5	4.1	7.5	11.8
Desviación estándar	53.3	28.9	9.2	6.9	15.2

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del proyecto.

o no ha logrado generar los ingresos alternativos esperados. E incluso más preocupante es que algunos participantes parecen estar usando los pagos del proyecto para invertir en actividades ganaderas, y menoscaban con ello los objetivos a largo plazo de la intervención. El personal del proyecto teme que los incentivos financieros que entregan a los agricultores no logren promover un comportamiento ecologista, y que incluso puedan generar efectos nocivos a largo plazo, especialmente cuando cesen los pagos a los agricultores. Como argumentamos arriba, construir alternativas significativas que puedan cambiar las prácticas de uso del suelo de los agricultores locales exige una comprensión más profunda del contexto histórico, sociocultural y económico del territorio local, así como de sus cambiantes rutas de desarrollo, que hemos evaluado mediante un diagnóstico agrario.

Métodos de investigación en el terreno

El diagnóstico agrario se enfocó en una comunidad del proyecto PSA situada en los márgenes de la reserva Indio-Maíz. Fue conducido por la tercera autora y consistió en una estancia permanente de investigación en el terreno, que duró 4.5 meses (abril-agosto 2014). Se entrevistó a 66 personas (productores o familiares), algunas de ellas en varias ocasiones. Además, se hicieron 8 transectos

paisajísticos y 38 visitas a fincas, a fin de obtener un panorama detallado del paisaje y, más específicamente, de los sistemas de producción y las prácticas de uso del suelo. Se hicieron grupos focales con los habitantes que han vivido más tiempo en la región para conocer la historia del área de estudio. Por último, la observación participante y algunas conversaciones informales permitieron precisar y profundizar en varios elementos.

Además, entre noviembre de 2013 y junio de 2015, los primeros tres autores realizaron un proceso de investigación más específica sobre la intervención de PSA en varias ocasiones, desde una perspectiva de investigación-acción, o sea, participando activamente en los procesos de reflexión crítica implementados por Conservación con Desarrollo sobre su propia intervención. A su vez, efectuaron varias entrevistas y grupos focales con personal del proyecto, organizaron talleres con participantes y personal del proyecto y condujeron diez entrevistas cualitativas en las fincas con productores participantes del proyecto.

Evaluación de la dinámica agraria y la deforestación en Río San Juan

La ruta ganadera, una ruta de desarrollo dominante⁶

Si bien en Río San Juan la extracción de productos maderables y no maderables comenzó hace más de un siglo (Larson 2001), el proceso de colonización agropecuaria de la región se aceleró mucho hace unos sesenta años, cuando el dictador Somoza y sus allegados se apropiaron de grandes extensiones de tierra para la ganadería (Rabella 1995). Este proceso fue acompañado por políticas estatales y acuerdos multilaterales para promover las exportaciones de carne (principalmente a Estados Unidos), los cuales incluían, por ejemplo, la construcción de caminos e infraestructura de procesamiento (Bermúdez

⁶ Esta parte del texto se basa, en primer lugar, en la información histórica generada a través del diagnóstico agrario realizado en la zona de estudio. Dicha información fue confirmada y complementada por datos existentes en la literatura que analiza la misma área.

et al. 2015). Además, varias empresas privadas, atraídas por la presencia de especies maderables muy valiosas en los bosques de Río San Juan, obtuvieron concesiones para la extracción de madera (Nygren 2004). En la década de 1950, el Gobierno de Nicaragua concebía esta región como una de las válvulas de escape del creciente descontento social causado por el aumento de la concentración de tierras en la región del Pacífico a manos de grandes terratenientes orientados a la exportación, quienes producían algodón y criaban ganado (Larson 2010). Ello dio como resultado que el Gobierno iniciara un proceso de colonización agrícola dirigida en las zonas boscosas del país consideradas como tierras nacionales (o sea, sin dueño privado), proceso que se amplió con la migración espontánea de campesinos pobres hacia esas mismas zonas en busca de tierras disponibles (Larson 2010). Era a través de las “mejoras” realizadas en esas tierras (o sea, deforestar y poner la tierra a producir) que se constituían y fortalecían derechos de propiedad privados individuales sobre dichas áreas (Maldidier 2004; Bastiaensen, D’Exelt y Famerée 2006). Esto ocasionó un proceso de migración masiva que gradualmente convirtió a las áreas forestales en tierras agrícolas (y legalmente a las tierras nacionales en propiedad privada; Nygren 2000; Larson 2010).

La colonización de los bosques primarios se detuvo temporalmente durante el conflicto interno de la década de 1980, cuando muchos campesinos huyeron a Costa Rica o fueron evacuados por el Gobierno a zonas de reasentamiento (Nygren 2000; Larson 2010). Tras los acuerdos de paz de 1990, pese a que existían regulaciones muy estrictas sobre el uso de la tierra en la zona de amortiguamiento de la reserva recién creada, la deforestación se aceleró mucho cuando los antiguos propietarios regresaron a reclamar sus tierras. Además, el nuevo Gobierno compensó a los soldados desmovilizados otorgándoles parcelas de tierra en esa misma región (Nygren 2000). También llegaron a la zona cientos de nuevos migrantes procedentes de regiones ganaderas más establecidas. Entre 1989 y 1995 se formaron en la zona de amortiguamiento por lo menos diecisiete nuevas comunidades con más de 1 500 familias (Larson 2010). Durante ese mismo periodo se reasumieron las políticas gubernamentales de promoción de exportaciones de productos provenientes de la ganadería, que incluían enormes inversiones en actividades de procesamiento

de lácteos. Esto condujo a una alza en los precios de la leche y sus derivados (esencialmente el queso), mientras que los precios de la carne alcanzaron máximos históricos, debido a una mayor demanda internacional y a la conexión comercial de la producción ganadera nicaragüense con la producción cárnica mexicana para Estados Unidos (Bastiaensen et al. 2013). Al mismo tiempo, debido a la llegada de un fabricante alemán de chocolate, la producción de cacao para la exportación condujo a una expansión y transformación de la infraestructura de acopio y procesamiento de cacao, lo que generó el crecimiento de la demanda y los precios locales para este cultivo tradicional que estaba relativamente abandonado.

Todavía hoy llegan nuevos colonos a la zona. Por lo general, vienen de áreas de “vieja frontera”, o sea, zonas invadidas por los pastizales, donde la ganadería extensiva es la principal actividad productiva (Larson 2010). Muchas veces tienden a repetir el patrón de sus padres o abuelos, quienes convirtieron los bosques en pastizales a fin de mejorar sus medios de vida. Muchos campesinos son, de hecho, parte de un proceso de migración en cascada, donde después de haber convertido sus fincas en pastizales, si no logran establecer una gran finca ganadera económicamente sostenible, venden sus tierras a ganaderos más adinerados y migran más adelante hacia los frentes pioneros más recientes. Esto da lugar a un efecto dominó en el que la propiedad de la tierra se concentra cada vez más en manos de unos pocos ganaderos adinerados, que reemplazan una ola inicial de productores de menor escala (Nygren 2000; Mالدیدیر 2004). Estos últimos son cada vez más atraídos y repelidos hacia adentro de la frontera agrícola, con lo que se consolida una ruta de desarrollo ganadero socialmente excluyente y ambientalmente destructiva.

Dinámicas de cambio agrario en Manola

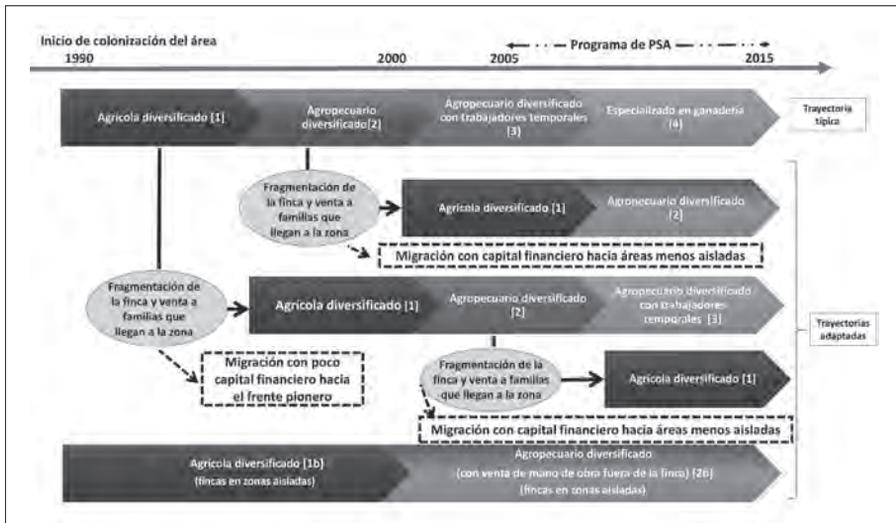
Nuestro diagnóstico de las dinámicas anteriores en Manola, una comunidad que consta de unas ochenta familias, nos permite un mayor entendimiento de los principales procesos implicados en el avance de esta frontera ganadera. Nuestro análisis revela que las primeras fincas en Manola se establecieron en la

década de 1990, con la llegada de familias pioneras que típicamente se apropiaban de extensiones de tierras forestales nacionales⁷ de entre 50 y 140 hectáreas. Para los campesinos pobres, talar los bosques es una manera de obtener tierras fértiles, pues no cuentan con más recurso que su mano de obra. De hecho, dada la escasa disponibilidad de capital y la abundancia de tierras, las prácticas de tala y quema maximizan la rentabilidad de la mano de obra, a la vez que aseguran la autosuficiencia alimentaria (Maldidier 2004); sin embargo, una vez que la tierra se ha cultivado durante unos tres años, la fertilidad del suelo decae en pocos años, mientras que aumenta la competencia de las plantas adventicias, lo cual ocasiona que disminuyan los rendimientos de los cultivos. Puesto que restaurar la fertilidad del suelo requeriría un largo periodo de barbecho o rebrote forestal (de quince a veinte años), las áreas de cultivo usualmente se convierten en pastizales, a la vez que se talan nuevos tramos forestales para convertirlos en zonas de cultivo bajo la técnica de roza-quema, y de ese modo se expande la superficie agrícola de la finca.

Estas dinámicas típicas del uso de la tierra modifican gradualmente los sistemas de producción y los patrones relacionados de uso de suelo en las fincas, como se muestra en forma estilizada en las figuras 1 y 2. Estas muestran que una vez que los primeros colonos (sistema de producción *agrícola diversificado*) logran acumular el capital suficiente a base de trabajos ocasionales asalariados no agrícolas y de la migración estacional a Costa Rica (principalmente durante la cosecha de café), por lo general empiezan a invertir en ganado a fin de explotar sus áreas de pastizales, lo que conduce al sistema de producción *agropecuario diversificado*. Puesto que el rebaño sigue aumentando con el tiempo y exige más horas de trabajo, los agricultores abandonan progresivamente los cultivos que demandan más trabajo (p. ej., el arroz) y convierten más tierras forestales en pastizales, pero siempre transitan por una fase agrícola entre el bosque y el pasto (sistemas de producción *agropecuario diversificado*

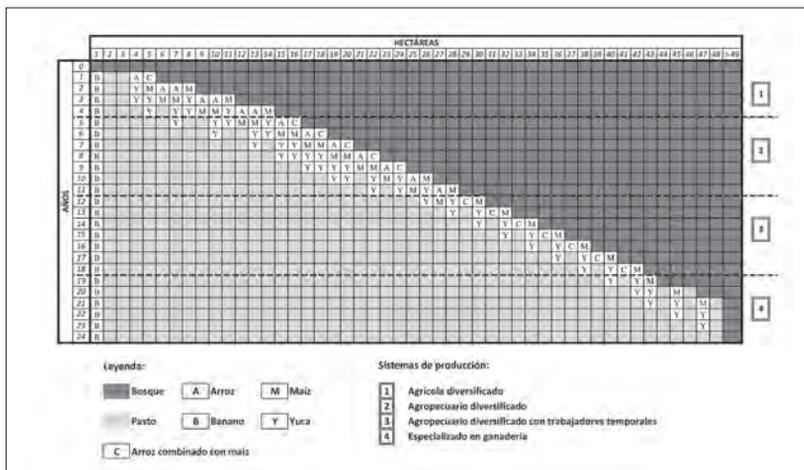
⁷ En ese entonces, la tierra forestal en esa zona se consideraba exenta de derechos. Cualquier actor podía apoderarse de cualquier tramo que no fuese propiedad privada y asegurarse derechos *de facto* mediante la tala de los bordes del área, la construcción de una vivienda y la tala de algunos tramos forestales para fines agrícolas.

FIGURA 1
Evolución de los sistemas de producción en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Indio-Maíz, Nicaragua 1990-2015



Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 2
Evolución de los sistemas de producción y cambios en el uso de la tierra a nivel de finca en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Indio-Maíz, Nicaragua 1990-2015



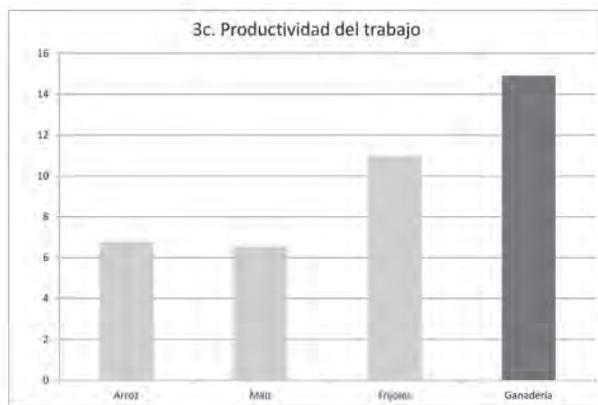
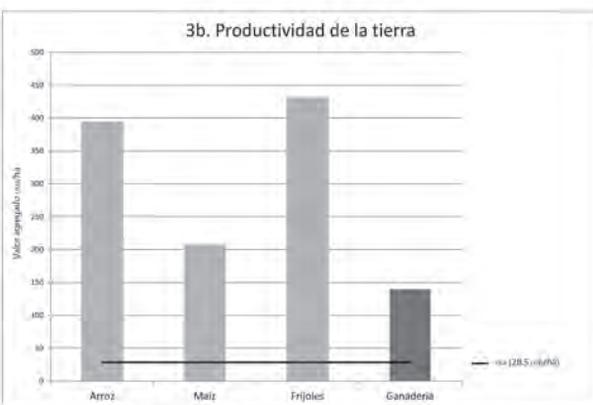
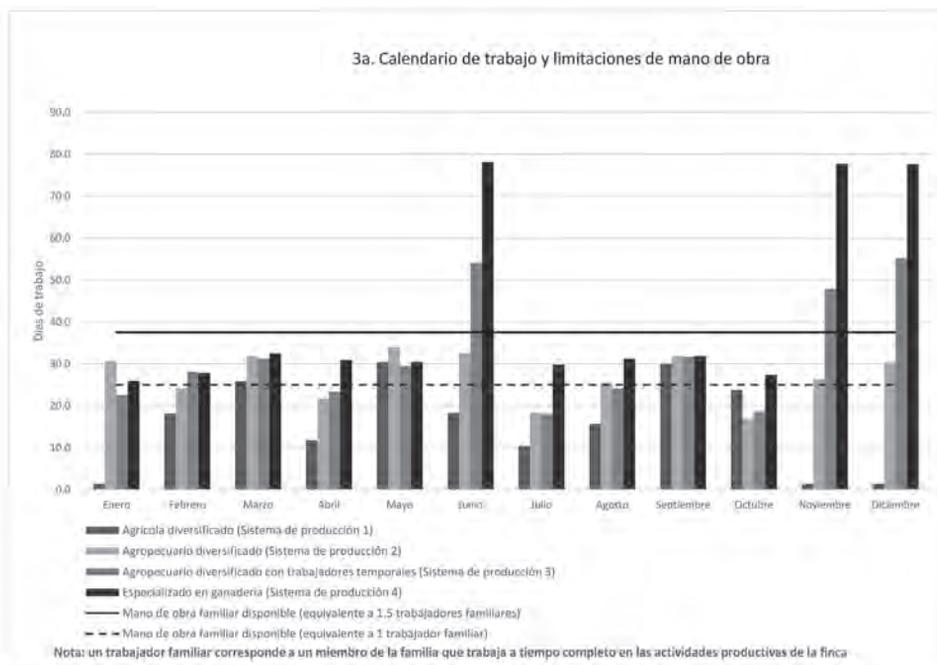
Fuente: Elaboración propia.

con trabajadores temporales y especializado en ganadería). Siguiendo esta lógica, nuestras entrevistas revelan claramente que los agricultores perciben los bosques como reservas estratégicas de tierra para una futura producción agrícola y ganadera, posiblemente tras heredarlas a sus hijos. Aparte de la extracción maderera para combustible y para la construcción, reportan pocos beneficios extraídos de los bosques. Por lo tanto, aunque la mayoría de las fincas en la zona de Manola presentan todavía grandes tramos boscosos (un aproximado de 50% del área total), probablemente se mantendrá la tendencia a especializarse en la producción ganadera, por lo que las zonas forestales presentes aún en las fincas seguirán convirtiéndose en zonas de pastoreo, y cuando ya no exista reserva boscosa dentro de las fincas, podría volver a ser necesario buscar más tierras en las zonas aledañas. Esta dinámica se ha observado también en zonas vecinas previamente colonizadas (Larson 2010; Vérant 2013).

Las motivaciones de los agricultores para continuar con esta especialización ganadera surgen de una combinación de factores. Primero, nuestro análisis técnico-económico muestra que la relativa abundancia de tierras forestales “ociosas” y la falta de recursos financieros hacen que la mano de obra sea el principal factor limitante de la producción. La figura 3a muestra la demanda mensual de mano de obra de cada uno de los principales sistemas de producción, junto con la mano de obra familiar disponible en la finca.⁸ Ahí claramente se observa que, para la mayoría de los sistemas de producción, las necesidades de mano de obra son casi equivalentes o incluso sobrepasan su disponibilidad en la finca. La figura también muestra que la implementación de sistemas de producción ganadera implica contratar trabajadores temporales que se encarguen sobre todo del mantenimiento de los pastos. El limitado acceso de los agricultores a recursos financieros reduce su capacidad para contratar mano de obra fuera de la familia. Nuestros cálculos demuestran también que, dadas las actuales condiciones de precios, la producción ganadera, incluso cuando representa el menor rendimiento por unidad de tierra, es la que ofrece las mayores utilidades por unidad de trabajo (figuras 3b y 3c). Además, el

⁸ El gráfico muestra los dos niveles equivalentes más comunes de mano de obra disponible en el área.

FIGURA 3
Productividad del trabajo y de la tierra y restricciones en cuanto a fuerza de trabajo para los sistemas de producción en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Indio-Maíz, Nicaragua



Fuente: Elaboración propia.

ganado es fácil de transportar, ya que se mueve caminando, y constituye entonces un medio de ahorro que se puede movilizar fácilmente, especialmente en regiones donde los mercados son distantes y de difícil acceso (Maldidier 2004). Por ello, los agricultores tienden a preferir sistemas de producción orientados a la producción ganadera; sin embargo, al mismo tiempo, la escasa mano de obra familiar y las restricciones de acceso a recursos financieros para contratar mano de obra externa para el mantenimiento de pastos limitan el ritmo de conversión del uso de la tierra, lo que explica por qué todavía se observa una relativa abundancia de tramos boscosos en las fincas.

Segundo, puesto que algunos agricultores pueden ascender en la escala social al convertirse en ganaderos (sistemas de producción 3 y 4) y que no se divisan actualmente alternativas viables, la transformación de las tierras en pastizales para desarrollo ganadero se percibe —también desde el punto de vista de los pequeños productores— como el “paisaje moral” deseable (Setten 2004), pues ofrece una ruta promisorio para salir de la pobreza. Pese a que aumenta la conciencia local acerca de los nocivos efectos ecológicos de la deforestación, las ideas de *progreso* y *desarrollo* se relacionan con la conquista de los bosques “salvajes e improductivos”, para transformarlos en tierras productivas y, a fin de cuentas, convertirlos en pastos (Larson 2010; Van Hecken, Bastiaensen y Huybrechs 2015). Según las percepciones locales, el desmonte de los bosques es una ardua faena que resulta en mejoras por las que se debe compensar a los productores cuando su tierra se vende o se expropia, aun cuando esa tierra pertenezca a una área protegida. Asimismo, ser ganadero en el contexto de la Nicaragua rural también concuerda con determinados puntos de vista acerca de las identidades y los roles sociales preferidos. Los grandes ganaderos tienen amplias redes sociales y mantienen posiciones de poder en una sociedad en la que siguen prevaleciendo en gran medida las relaciones de clientelismo verticales.

Si bien la anterior descripción estilizada de la evolución típica de los sistemas de producción en la zona pudiera dar la impresión de que estos se desarrollan de manera homogénea y unidireccional, en la práctica los cambios ocurren a ritmos diferentes y en formas complejas, en función de otras diferencias más específicas entre los productores. Eso implica que si se tomara una fotografía

instantánea en un determinado momento, se vería que en la zona coexisten diversos sistemas de producción, incluidos los cuatro sistemas presentados en la figura 3.⁹ Por ejemplo, nuestro diagnóstico revela que un elemento crucial en el ritmo de desarrollo de una finca es su grado de aislamiento geográfico y su relación con la disponibilidad de mano de obra (ver trayectorias adaptadas en figura 1). Las familias que llegaron después del periodo inicial de colonización se vieron obligadas a apropiarse de tierras en las zonas más aisladas, donde el acceso a la infraestructura es difícil (p. ej., mercados, escuelas). Esta condición a menudo ha impulsado a parte de la familia (usualmente la esposa e hijos) a migrar al centro urbano de la municipalidad, lo que aumenta los gastos del hogar y reduce aún más la disponibilidad de mano de obra en la finca. Esto, a su vez, implica una restricción en el potencial de crecimiento de la finca (en términos del tamaño del hato y del área de cultivo), y ello usualmente implica también una desaceleración en la tasa de conversión de los bosques en tierras agrícolas o pastizales (ver trayectoria adaptada en parte baja de la figura 1).

Otros factores importantes que conducen a bifurcaciones en la trayectoria típica de cambio tienen que ver con las diferencias en los recursos financieros disponibles para los agricultores, con impactos inesperados (p. ej., problemas de salud que ocasionan gastos médicos y se solventan con la venta de ganado) y situaciones de conflicto (generalmente conflictos por tierras). Tales sucesos o limitaciones suelen constituir un grave obstáculo para el proceso de capitalización y, en los casos más serios, pueden incluso resultar en la venta de la finca (trayectorias adaptadas en la figura 1). Puesto que en las zonas de frontera agrícola ubicadas más al este la tierra es más barata (Lindtner 2014), los productores pueden vender su propiedad y migrar hacia el oriente, y de ese modo logran duplicar o triplicar el tamaño de su finca. Actualmente, esa es la trayectoria que suelen seguir los productores jóvenes en Manola, quienes tras heredar una parcela que consideran muy pequeña para establecer un sistema agrícola financieramente sostenible, deciden venderla y avanzar más adentro en la

⁹ En este artículo presentamos únicamente las principales trayectorias históricas. El análisis original ofrece una descripción más detallada de otras trayectorias presentes en el área (ver Lindtner 2014).

frontera agrícola; luego venden su tierra a los productores locales que buscan más tierras o a los recién llegados originarios de otras regiones que poseen capital suficiente para comprar varias fincas a la vez y, de ese modo, pueden adoptar un sistema orientado hacia la especialización ganadera.

¿Los incentivos financieros para la protección forestal pueden alterar la ruta dominante?

Los resultados de nuestro diagnóstico muestran la existencia dentro de la zona de estudio de varios tipos de sistemas de producción en evolución que simultáneamente configuran y son configurados por otros procesos de mayor escala, y juntos se cristalizan en la ruta ganadera dominante que podemos observar en una escala territorial más amplia. Asimismo, nuestro análisis sugiere que las motivaciones de los productores para emprender cambios de uso de suelo no son meramente un atributo individual. Dichas motivaciones están socialmente instituidas en una ruta de desarrollo que genera determinadas oportunidades y restricciones, así como hábitos e ideas orientadoras sobre lo que *funciona* (o no funciona). A la vez, las acciones resultantes de estas motivaciones moldean estas rutas de desarrollo.

Partiendo de estos conocimientos empíricos, exploramos ahora la cuestión clave referente a si la introducción de incentivos financieros para la protección forestal, orientada a promover planes agrícolas sostenibles, tiene probabilidades de alterar de forma duradera las motivaciones y las acciones proambientales de los productores dentro de esta ruta ganadera dominante.

A tres años de iniciada la segunda fase del proyecto de PSA, observamos que hasta ahora todos los participantes han mantenido en pie los bosques bajo contrato. Esto puede dar la impresión de que el proyecto ha sido exitoso en cuanto a promover la protección de las áreas forestales en la finca; sin embargo, una evaluación del proyecto de PSA contrastada con los resultados de nuestro diagnóstico nos previene de formular conclusiones apresuradas. Si bien estamos conscientes de que el desempeño de los PSA no necesariamente depende de una cobertura completa de los costos de oportunidad de otros usos de la

tierra económicamente más atractivos (Kosoy et al. 2007; Muradian et al. 2010), nuestros resultados muestran que el pago del proyecto es particularmente bajo, pues cubre solo un 20 % del ingreso anual por hectárea que ofrece la alternativa de los pastos, y menos del 7 % del ingreso generado por cultivos básicos, como frijol o arroz (figura 3b). Así pues, desde una perspectiva meramente económica, es poco probable que el pago actual por servicios ambientales sea suficientemente elevado para desencadenar cambios en los patrones de uso de suelo dominantes. Esto se confirma también en nuestras entrevistas, donde los participantes típicamente reportan que:

la cantidad que me pagan en realidad es insignificante. Yo agradezco, pero siento que le estamos haciendo un favor [a la ONG]. Producir frijol o maíz obviamente me daría ingresos mucho más altos. Si quieren convencernos de inscribir nuestros bosques en un proyecto futuro, definitivamente van a tener que pagarnos más (entrevista a productor, 2014).

De forma más general, Hiedanpää y Bromley (2014, 182) afirman que esta falta de impacto de los PSA no debería sorprendernos, puesto que:

La conducta humana está profundamente habituada —y por buenas razones— debido a su larga experiencia con lo que parece funcionar (Quellette y Wood 1998). Solo al enfrentar una duda desconcertante o una sorpresa se detienen las personas a reevaluar lo que están haciendo —y por qué lo están haciendo— (Bromley 2006). Esta cuestión de la habituación profunda es fundamental para cualquier suposición de que mediante los PSA las personas dispersas en áreas remotas pueden desprenderse fácilmente de esquemas de toda la vida —y quizás de varias generaciones de predecesores—, de conductas habituales relacionadas con su entorno natural.

A la luz de este tipo de afirmaciones, parece un tanto desconcertante que los productores hayan participado en este proyecto. Al respecto, algunos agricultores hablan de la importancia de los bosques para la provisión de agua, lo que los estimula a proteger áreas boscosas estratégicamente situadas en la

finca. Asimismo, la creciente presencia de proyectos dedicados a la conservación ambiental ha generado nuevos discursos, adoptados por la localidad, que enfatizan la importancia de los bosques para la provisión de bienes globales, tales como aire limpio y biodiversidad. Algunos de nuestros entrevistados declararon que *una comunidad sin bosques sería fea y desagradable para vivir en ella*, y menoscabaría el potencial para seguir desarrollando proyectos de ecoturismo.

Si bien las razones aducidas ciertamente merecen alguna credibilidad, nuestro análisis de los sistemas agrarios nos permite ir más allá de esos discursos comunes y ayudar a explicar por qué, aunque con el PSA se hayan conservado las áreas boscosas bajo contrato, hasta ahora el proyecto no ha implicado cambios más significativos en las prácticas agrícolas. Nos permite, además, entender que las porciones boscosas que permanecen no son elementos independientes e inconexos, sino que forman parte integral de sistemas de producción más amplios que evolucionan dentro de trayectorias históricas específicas.

Ya hemos señalado que el ritmo actual de deforestación en el área está limitado principalmente por restricciones de mano de obra y de capital. Entonces, puesto que los participantes tenían libertad de elegir cuáles y cuántas porciones de bosque inscribir en el contrato de cinco años, no debería sorprendernos que una buena parte de ellos hayan dejado fuera del contrato algunas parcelas forestales (típicamente las aledañas a las áreas de producción actuales; ver tabla 1). Los agricultores podrían continuar sus prácticas agrícolas habituales a la vez que “protegen” temporalmente los bosques, que en todo caso no iban a “molestar”, al menos no en un futuro cercano (Hartshorn et al. 2005, para resultados similares en Costa Rica). En otras palabras, la adicionalidad¹⁰ del proyecto es muy dudosa, puesto que los agricultores optan por inscribir aquellas parcelas forestales que en el corto plazo tienen un costo de oportunidad cercano a cero. Este resultado quedó confirmado en casi todas nuestras entrevistas, pues los agricultores típicamente declararon que:

¹⁰ La adicionalidad ambiental de un proyecto de conservación de bosque se refiere al hecho de que el nivel de *conservación del bosque después de la implementación del proyecto es superior a lo que se hubiese conservado de no realizarse el proyecto.*

Yo de todos modos iba a proteger esos bosques. Llevo protegiéndolos desde hace veinte años [...] ¿De veras piensa usted que el poquito dinero que me ofrecen es la razón por la que estoy protegiendo esos bosques? Si mañana me dicen [la ONG] que el proyecto se terminó, los bosques van a seguir estando aquí, igual que han estado siempre (entrevista a agricultor, 2014).

Por lo tanto, es poco probable que tal intervención genere grandes cambios de comportamiento. De hecho, al informar cómo han estado usando los pagos del proyecto, los entrevistados mencionan prácticas que concuerdan mucho con sus estrategias convencionales de producción. Las familias más enfocadas a la producción de granos básicos usaron los pagos para solventar diversas necesidades primarias, tales como comprar medicamentos o comida (azúcar, arroz, maíz o frijol). Solo unas pocas familias han podido usar los pagos para experimentar con actividades alternativas, por ejemplo, el cultivo de rai-cilla. Los productores que ya se estaban especializando en la ganadería han empleado el dinero principalmente para invertir en actividades relacionadas con el ganado, como cercas, mejoras y ampliación de los pastizales o compra de más ganado. En ese sentido, los pagos sirvieron para superar algunas de las restricciones de recursos financieros más sentidas, y ayudaron a los agricultores en su afán de fomentar la especialización ganadera. Esos resultados llevaron a la ONG a cuestionarse sus suposiciones técnicas iniciales acerca de la necesidad y las posibilidades de intensificar la producción a fin de aliviar la presión sobre los bosques remanentes. Dichas suposiciones se basaban en ideas, quizás muy simplistas, que atribuyen la deforestación a la falta de conocimientos técnicos de los productores (Larson 2010) y no a un análisis informado de los múltiples factores y motivaciones que explican *por qué los agricultores hacen lo que hacen*.

En suma, nuestro estudio sugiere que el proyecto PSA por sí mismo no basta para interrumpir prácticas que han evolucionado históricamente, que forman parte de una lógica particular de producción y de determinados contextos socioculturales. En vez de lograr abrir rutas alternativas de desarrollo para los productores, en algunos casos los pagos, de manera muy paradójica, han reforzado la ruta dominante ganadera, liberando algunas limitaciones en cuanto a recursos financieros y acelerando incluso el ritmo de transformación

del bosque en pastizales. En efecto, la intervención no desafió los factores condicionantes de la ruta actual, que genera una fuerte racionalidad económica y social para continuar expandiendo la producción ganadera extensiva basada en hábitos y visiones culturales asociadas (el paisaje moral, el estatus social de los ganaderos, entre otros).

Los hábitos y las motivaciones no son meras reacciones irreflexivas y automáticas, tampoco son solo una cuestión de prácticas culturales heredadas; son circunstanciales o están determinadas conjuntamente por las características estructurales del entorno (Vatn y Vedeld 2012; Hiedanpää y Bromley 2014); se generan y se sostienen en las realidades percibidas en las cuales actúan. Lógicamente, esto implica que para instituir nuevos hábitos ambientales “tiene que cambiar el agente y el entorno de las decisiones” (Hiedanpää y Bromley 2014, 183-184). Por tanto, no se puede suponer que ofrecer pagos temporales basta para cambiar de forma duradera hábitos y racionalidades estructuralmente arraigados. Tampoco debemos suponer que el desafío se reduce a encontrar los precios “correctos” de intercambio para que el mecanismo de los PSA pueda funcionar.

Los pagos pueden ofrecer a lo sumo una orientación para cambiar las perspectivas y racionalidades, y si van acompañados de cambios estructurales más amplios, pueden llegar a ser parte de una dinámica de cambios que redefina nuevos rumbos para las rutas emergentes. Solo si los pagos se articulan debidamente dentro de enfoques integrales más amplios, que atiendan las múltiples causas de la deforestación en diferentes escalas, podrían apoyar procesos de cambio en las percepciones cognitivas y en las motivaciones agrícolas, y reforzar o atraer (*crowd-in*) nuevas motivaciones y hábitos mentales orientados hacia una cultura renovada de lo que es y representa el bosque (Geist y Lambin 2002; Vatn y Vedeld 2012; Hiedanpää y Bromley 2014). Esto requiere transformaciones socioinstitucionales que propicien la creación de nuevas rutas con oportunidades y restricciones redefinidas, y que incluyan cambios en los precios relativos mediante la rerregulación de las cadenas globales de valor y de las políticas fiscales nacionales, así como iniciativas más locales relacionadas con la promoción de estrategias alternativas basadas, por ejemplo, en ecoturismo comunitario o en producción de cacao.

Conclusión

Las dinámicas territoriales son más que la mera suma de procesos decisorios individuales que se implementan en fincas independientes; más bien son resultado de reglas, normas, estructuras sociales, culturas y cosmovisiones históricamente construidas que caracterizan a sociedades rurales más amplias, y que se apoyan en determinadas políticas macroeconómicas con sus correspondientes mercados y estructuras de precios. En este capítulo hemos argumentado que la investigación sobre el impacto a largo plazo de las políticas de intervención en el comportamiento humano debería asimismo reconocer que la motivación humana se construye socialmente (Vatn y Vedeld 2012). Ello no niega la existencia de la acción estratégica, sino que sugiere, en cambio, que las acciones y motivaciones de los individuos son a la vez restringidas y propiciadas por las rutas de desarrollo más amplias en las cuales están inmersas. Entender esta interacción dinámica entre la agencia y la estructura significa que debemos sobrepasar las consideraciones puramente biofísicas o económicas de los problemas humano-ambientales, a fin de abarcar las dimensiones más amplias y a menudo no reconocidas de las intervenciones y políticas que corresponden con elementos socioinstitucionales, políticos y de creación de conocimiento (German, Ramisch y Verma 2010).

Hemos demostrado que el enfoque del sistema agrario es un instrumento metodológico-conceptual muy útil para descubrir y evaluar el surgimiento de determinadas rutas de desarrollo en diferentes escalas espacio-temporales. Creemos que este enfoque permite hacer evaluaciones mejor informadas sobre las razones y motivaciones por las cuales *los agricultores hacen lo que hacen*. También permite reflexiones más profundas y sistémicas sobre el impacto de las intervenciones que intentan influir de manera duradera en esas motivaciones y hábitos. Así pues, se espera que nos ayude a no incurrir en soluciones simplistas tipo panacea, y que oriente nuestra atención a las particularidades y diversidad del territorio social local, así como hacia los factores socioinstitucionales más amplios que subyacen en determinadas interacciones humano-ambientales.

Referencias bibliográficas

- Adhikari, B. y A. Agrawal. 2013. "Understanding the Social and Ecological Outcomes of PES Projects: A Review and an Analysis". *Conservation and Society* 11 (x): 359-374.
- Apollin, F. y C. Eberhardt. 1999. *Análisis y diagnóstico de los sistemas de producción en el medio rural: guía metodológica*. Quito: Camaren; Cicda; Ruralter.
- Bastiaensen, J., B. D'Exelle y C. Famerée. 2006. "Political Arenas Around Access to Land: A Diagnosis of Property Rights Practices in the Nicaraguan Interior". Discussion Paper 2006:08. Amberes: Institute of Development Policy and Management (IOB); University of Antwerp.
- Bastiaensen, J., P. Marchetti, R. Mendoza y F. Pérez. 2013. "After the Nicaraguan Non-payment Crisis: Alternatives to Microfinance Narcissism". *Development and Change* 44 (4): 861-885.
- Bastiaensen, J., P. Merlet, M. Craps, T. de Herdt, S. Flores, F. Huybrechs, R. Mendoza, G. Steel y G. Van Hecken. 2015. "Making Sense of Territorial Pathways to Rural Development: A Proposal for a Normative and Analytical Framework". Discussion Paper 2015:04. Amberes: Institute of Development Policy and Management (IOB); University of Antwerp.
- Bermúdez, M., S. Flores, M. Romero, J. Bastiaensen, P. Merlet, F. Huybrechs, G. Van Hecken y J. Ramírez. 2015. "¿Es posible financiar la ganadería en la frontera agrícola de Nicaragua de manera sostenible?". Policy brief. Managua: Instituto Nitlapan; IOB; ADA.
- Bowles, S. 2008. "Policies Designed for Self-interested Citizens may Undermine 'the Moral Sentiments': Evidence from Economic Experiments". *Science* 320 (5883): 1605-1609.
- Brossier, J. 1987. "Système et système de production. Note sur les concepts". *Cahiers des Sciences Humaines* 23: 377-390.
- Büscher, B. 2014. "Selling Success: Constructing Value in Conservation and Development". *World Development* 57: 79-90.
- Cardenas, J. C., J. Stranlund y C. Willis. 2000. "Local Environmental Control and Institutional Crowding-Out". *World Development* 28 (10): 1719-1733.

- Cholley, A. 1946. "Problèmes de structure agraire et d'économie rurale". *Annales de Géographie* 55 (298): 81-101.
- Cleaver, F. 2005. "The Inequality of Social Capital and the Reproduction of Chronic Poverty". *World Development* 33 (6): 893-906.
- . 2012. *Development through Bricolage: Rethinking Institutions for Natural Resource Management*. Abingdon: Oxon; Routledge.
- Cochet, H. 2011. *L'agriculture comparée*. Paris: Quae Editions.
- . 2012. "The système agraire concept in francophone peasant studies". *Geoforum* 43 (1): 128-136.
- Cochet, H. y S. Devienne. 2006. "Fonctionnement et performances économiques des systèmes de production agricole: une démarche à l'échelle régionale". *Cahiers agricultures* 15 (6): 578-583.
- Cochet, H., S. Devienne y M. Dufumier. 2007. "L'agriculture comparée, une discipline de synthèse?". *Économie rurale*, núm. 297-298, 99-112.
- Cote, M. y A. J. Nightingale. 2012. "Resilience Thinking Meets Social Theory: Situating Social Change in Socio-Ecological Systems (SES) Research". *Progress in Human Geography* 36 (4): 475-489.
- Dufumier, M. 1996. *Les projets de développement agricole: manuel d'expertise*. Paris: Karthala Editions.
- Ezzine-de-Blas, D., E. Corbera y R. Lapeyre. 2019. "Payments for Environmental Services and Motivation Crowding: Towards a Conceptual Framework". *Ecological Economics* 156: 434-443. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.07.026>.
- Fazey, I., R. M. Wise, C. Lyon, C. Câmpeanu, P. Moug y T. E. Davies. 2015. "Past and Future Adaptation Pathways". *Climate and Development* 8 (1): 26-44.
- Ferraro, P. J. y A. Kiss. 2002. "Direct Payments for Biodiversity Conservation". *Science* 298 (5599): 1718-1719.
- Folke, C., T. Hahn, P. Olsson y J. Norberg. 2005. "Adaptive Governance of Social-Ecological Systems". *Annual Review of Environment and Resources* 3: 441-473.
- Geist, H. J. y E. F. Lambin. 2002. "Proximate Causes and Underlying Driving Forces of Tropical Deforestation". *BioScience* 52 (2): 143-150.

- German, L., J. J. Ramisch y R. Verma, coords. 2010. *Beyond the Biophysical Knowledge, Culture, and Power in Agriculture and Natural Resource Management*. Nueva York: Springer.
- Gneezy, U. y A. Rustichini. 2000. "Pay Enough or Don't Pay at All". *Quarterly Journal of Economics* 115 (3): 791-810.
- Haan, L. de y A. Zoomers. 2005. "Exploring the Frontier of Livelihoods Research". *Development and Change* 36 (1): 27-47.
- Hall, K., F. Cleaver, T. Franks y F. Maganga. 2014. "Capturing Critical Institutionalism: A Synthesis of Key Themes and Debates". *European Journal of Development Research* 26 (1): 71-86.
- Hartshorn, G., P. Ferraro, B. Spergel y E. Sills. 2005. "Evaluation of the World Bank-GEF Ecomarkets Project in Costa Rica". Durham: North Carolina State University.
- Hayes, T. 2012. "Payment for Ecosystem Services, Sustained Behavioural Change, and Adaptive Management: Peasant Perspectives in the Colombian Andes". *Environmental Conservation* 39 (2): 144-153.
- Henrich, J., S. J. Heine y A. Norenzayan. 2010. "Most People are not WEIRD". *Nature* 466 (7302): 29.
- Hiedanpää, J. y D. W. Bromley. 2014. "Payments for Ecosystem Services: Durable Habits, Dubious Nudges, and Doubtful Efficacy". *Journal of Institutional Economics* 10 (2): 175-195.
- Hukkinen, J. I. 2014. "Model of the Social-Ecological System Depends on Model of the Mind: Contrasting Information-processing and Embodied Views of Cognition". *Ecological Economics* 99: 100-109.
- Jouve, P. 1988. "Quelques réflexions sur la spécificité et l'identification des systèmes agraires". *Les Cahiers de la Recherche Développement* 20: 5-16.
- Kits, G. J., W. L. Adamowicz y P. C. Boxall. 2014. "Do Conservation Auctions Crowd Out Voluntary Environmentally Friendly Activities?". *Ecological Economics* 105: 118-123.
- Kosoy, N. y E. Corbera. 2010. "Payments for Ecosystem Services as Commodity Fetishism". *Ecological Economics* 69 (6): 1228-1236.
- Kosoy, N., Martinez-Tuna, M., Muradian, R. y Martinez-Alier, J. 2007. "Payments for Environmental Services in Watersheds: Insights from a

- Comparative Study of Three Cases in Central America”. *Ecological Economics* 61: 446-455.
- Larson, A. 2001. “Rainforest Conservation and Grassroots Development: If ever the Twain Shall Meet? Peasant Colonists and Forest Conversion in the Nicaraguan Rainforest”. Tesis de doctorado. Universidad de California.
- _____. 2010. “The ‘Demonization’ of Rainforest Migrants, or: What Conservation Means to Poor Colonist Farmers”. En *Beyond the Biophysical. Knowledge, Culture, and Power in Agriculture and Natural Resource Management*, coordinado por L. German, J. J. Ramisch y R. Verma, 49-71. Nueva York: Springer.
- Leach, M., R. Mearns e I. Scoones. 1999. “Environmental Entitlements: Dynamics and Institutions in Community-based Natural Resource Management”. *World Development* 27 (2): 225-247.
- Leach, M., I. Scoones y A. Stirling. 2010. *Dynamic Sustainabilities. Technology, Environment, Social Justice*. Londres; Washington, D. C.: Earthscan.
- Li, T. M. 1996. “Images of Community: Discourse and Strategy in Property Relations”. *Development and Change* 27 (3): 501-527.
- Lindtner, M. 2014. “La influencia de pagos por servicios ambientales sobre las decisiones de uso de tierra de los productores agropecuarios en la frontera agrícola nicaragüense: el caso de las comunidades a lo largo del río Manola en río San Juan”. Tesis de maestría. SupAgro.
- Liu, J., T. Dietz, S. R. Carpenter, M. Alberti, C. Folke, E. Moran, A. N. Pell, P. Deadman, T. Kratz, J. Lubchenco, E. Ostrom, Z. Ouyang, W. Provencher, C. L. Redman, S. H. Schneider y W. Taylor. 2007. “Complexity of Coupled Human and Natural Systems”. *Science* 317 (5844): 1513-1516.
- Maldidier, C. 2004. “Agricultural Pioneer Fronts, the Crest of a Far-reaching Wave. The Social and Spatial Dimension of Lowland Colonization in Nicaragua”. En *Beyond Tropical Deforestation. From Tropical Deforestation to Forest Cover Dynamics and Forest Development*, coordinado por D. Babin, 185-192. Montpellier: Unesco; Cirad.
- Marena (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales). 2015. *Reserva de Biosfera del Sureste de Nicaragua*. Managua: Gobierno de la República de Nicaragua.

- Martin, A., Gross-Camp, N., Kebede, B., McGuire, S. y Munyarukaza, J. 2014. "Whose Environmental Justice? Exploring Local and Global Perspectives in a Payments for Ecosystem Services Scheme in Rwanda". *Geoforum* 54: 167-177.
- Mazoyer, M. y L. Roudart. 2006. "A History of World Agriculture: From the Neolithic Age to Current Crisis". Nueva York: Monthly Review Press.
- McAfee, K. 1999. "Selling Nature to Save it? Biodiversity and Green Developmentalism". *Environment and Planning D: Society and Space* 17 (2): 133-154.
- Milne, S. y W. M. Adams. 2012. "Market Masquerades: Uncovering the Politics of Community-level Payments for Environmental Services in Cambodia". *Development and Change* 43: 133-158.
- Muradian, R., E. Corbera, U. Pascual, N. Kosoy y P. May. 2010. "Reconciling Theory and Practice: An Alternative Conceptual Framework for Understanding Payments for Environmental Services". *Ecological Economics* 69 (6): 1202-1208.
- Muradian, R., M. Arsel, L. Pellegrini, F. Adaman, B. Aguilar, B. Agarwal, E. Corbera, D. Ezzine de Blas, J. Farley, G. Froger, E. Garcia-Frapolli, E. Gómez-Baggethun, J. Gowdy, N. Kosoy, J. F. Le Coq, P. Leroy, P. May, P. Méral, P. Mibielli, R. Norgaard, B. Ozkaynak, U. Pascual, W. Pengue, M. Perez, D. Pesche, R. Pirard, J. Ramos-Martin, L. Rival, F. Saenz, G. Van Hecken, A. Vatn, B. Vira y K. Urama. 2013. "Payments for Ecosystem Services and the Fatal Attraction of Win-win Solutions". *Conservation Letters* 6 (4): 274-279.
- Narloch, U., U. Pascual y A. Drucker. 2012. "Collective Action Dynamics under External Rewards: Experimental Insights from Andean Farming Communities". *World Development* 40: 2096-2107.
- Nygren, A. 2000. "Development Discourses and Peasant-Forest Relations: Natural Resource Utilization as a Social Process". *Development and Change* 31 (1): 11-34.
- . 2004. "Contested Lands and Incompatible Images: The Political Ecology of Struggles Over Resources in Nicaragua's Indio-Maíz Reserve". *Society and Natural Resources* 17: 189-205.

- Pagiola, S., A. Arcenas y G. Platais. 2005. "Can Payments for Environmental Services Help Reduce Poverty? An Exploration of the Issues and the Evidence to Date". *World Development* 33 (2): 237-253.
- Pattanayak, S. K., S. Wunder y P. J. Ferraro. 2010. "Show Me the Money: Do Payments Supply Environmental Services in Developing Countries?". *Review of Environmental Economics and Policy* 4 (2): 254-274.
- Rabella, J. 1995. *Aproximación a la historia de Río San Juan*. Managua: Solidaridad Internacional.
- Ribot, J. C. y N. L. Peluso. 2003. "A Theory of Access". *Rural Sociology* 68 (2): 153-181.
- Rizzo, D., E. Marraccini, S. Lardon, H. Rapey, M. Debolini, M. Benoit y C. Thenail. 2013. "Farming Systems Designing Landscapes: Land Management Units at the Interface Between Agronomy and Geography". *Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography* 113 (2): 71-86.
- Rode, J., E. Gómez-Baggethun y T. Krause. 2014. "Motivation Crowding by Economic Incentives in Conservation Policy: A Review of the Empirical Evidence". *Ecological Economics* 109: 80-92.
- Schomers, S. y B. Matzdorf. 2013. "Payments for Ecosystem Services: A Review and Comparison of Developing and Industrialized Countries". *Ecosystem Services* 6: 16-30.
- Scoones, I. y W. Wolmer. 2002. *Pathways of Change in Africa. Crops, Livestock and Livelihoods in Mali, Ethiopia and Zimbabwe*. Oxford: James Currey.
- Setten, G. 2004. "The Habitus, the Rule and the Moral Landscape". *Cultural Geographies* 11 (4): 389-415.
- Van Hecken, G. y J. Bastiaensen. 2010a. "Payments for Ecosystem Services in Nicaragua: Do Market-based Approaches Work?". *Development and Change* 41: 421-444.
- . 2010b. "Payments for Ecosystem Services: Justified or Not? A Political View". *Environmental Science & Policy* 13 (8): 785-792.
- Van Hecken, G., J. Bastiaensen y W. F. Vásquez. 2012. "The Viability of Local Payments for Watershed Services: Empirical Evidence from Matiguás, Nicaragua". *Ecological Economics* 74: 169-176.

- Van Hecken, G., J. Bastiaensen y C. Windey. 2015a. "The Frontiers of the Debate on Payments for Ecosystem Services. A Proposal for Innovative Future Research". Discussion Paper 2015:05. Amberes: Institute of Development Policy and Management (IOB); Universidad de Amberes.
- . 2015b. "Towards a Power-sensitive and Socially-informed Analysis of Payments for Ecosystem Services (PES): Addressing the Gaps in the Current Debate". *Ecological Economics* 120: 117-125.
- Van Hecken, G., J. Bastiaensen y F. Huybrechs. 2015c. "What's in a Name? Epistemic Perspectives and Payments for Ecosystem Services Policies in Nicaragua". *Geoforum* 63: 55-66.
- Vatn, A. y P. Vedeld. 2012. "Fit, Interplay, and Scale: A Diagnosis". *Ecology and Society* 17 (4): 12.
- Vérant, S. 2013. "Analyse-diagnostic de l'agriculture familiale dans un contexte de développement d'une grande entreprise agro-industrielle. Municipalité de El Castillo, Nicaragua". Tesis de maestría. Agro Paris Tech.
- Wunder, S. 2005. "Payments for Environmental Services: Some Nuts and Bolts". Cifor Occasional Paper núm. 42. Jakarta: Cifor.
- . 2015. "Revisiting the Concept of Payments for Environmental Services". *Ecological Economics* 117: 234-243.

Clúster minero global: instauración de horizontes de coerción y resistencias en sociedades locales mexicanas*

Claudio Garibay Orozco

Universidad Nacional Autónoma de México

Introducción

La ruda competencia entre corporaciones mineras globales por los cada vez más escasos yacimientos ricos en minerales no ha sido motivo para inhibir su voluntad de cooperar entre ellas al momento de enfrentar la crítica por la destrucción territorial y social que provocan sus emplazamientos megamineros. En los últimos veinticinco años, las corporaciones mineras han logrado construir una amplia y poderosa coalición al interior de la industria minera, que les ha permitido desarrollar nuevas formas discursivas orientadas a legitimar su actividad en la esfera pública; también han erigido eficaces figuras organizativas dirigidas a influir en espacios internacionales, nacionales y regionales, y especialmente han elaborado protocolos de actuación para intervenir, desposeer y dominar sociedades locales. Esta coalición corporativa es un poder político relevante en el actual mundo global, capaz de insertar sus intereses en la agenda

* Investigación realizada en el marco del proyecto PAPIIT-UNAM IN303517. Agradezco el apoyo de Gabriela Cuevas, Ricardo Hernández y Gustavo Camacho para este trabajo. También a Joan Martínez-Alier y Beatriz Rodríguez Labajos por facilitarme el ambiente académico que permitió el desarrollo del argumento aquí expuesto.

de los países dominantes y de los organismos internacionales, públicos y privados, que definen el rumbo de la economía y la política mundiales.

En este estudio, para efectos analíticos, llamaré *clúster minero global* (CMG) a esta coalición política de corporaciones mineras transnacionales, organizada con la intención de mantener abiertos los territorios del mundo a sus intereses y contrarrestar las críticas que señalan afectaciones sociales y ambientales por parte de su práctica megaminera. Argumentaré que el International Council of Mining & Minerals (ICMM, fundado en 2001) ha sido el inicial centro organizador del CMG, el mismo que articuló la política mundial de legitimación pública de la industria minera mediante el lanzamiento de la llamada Global Mining Initiative (GMI; Iniciativa Minera Global) en la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo, en 2002. Esta iniciativa dio al clúster un fundamento filosófico, un discurso público y un plan de acción para articular los intereses convergentes de las corporaciones mineras miembros en un bloque político mundial unificado.

Al día de hoy, el CMG —en su calidad de *sujeto político global*— trabaja en dos tareas generales: primero, desarrolla una *inteligencia estratégica* orientada a fortalecer su influencia sobre la clase política y las instituciones de los Estados nacionales, a la vez que elabora protocolos y técnicas para instaurar *horizontes de coerción* sobre comunidades y comarcas¹ con la finalidad de que sus

¹ Con el término *comarca* pretendo referirme a un ámbito territorial mayor que una comunidad pero menor que un país e incluso que una región. Quiero dar a entender por *comarca* una región relativamente pequeña con una suerte de gobierno local —o varios contiguos—, cuya jurisdicción son varios poblamientos que comparten una densidad de relaciones sociales cercanas e interpersonales expresadas cotidianamente en prácticas y tradiciones colectivas más o menos comunes. Un término equivalente podría ser *microrregión*, pero me desagrada, pues el prefijo *micro* puede leerse también como insignificante, además de ser un término vacío de referencia a relaciones sociales. Por otra parte, el uso de *región* no expresa con fuerza el ámbito local, es un comodín territorial demasiado laxo para ser útil. Tampoco quiero entrar a elaborar una discusión conceptual sobre el término *comarca*, simplemente quiero destacar los mecanismos conforme a los cuales las corporaciones mineras globales capturan las formas de organización social e institucional de los espacios sociales inmediatos que devienen ocupando y viviendo en un horizonte territorial de algunas decenas de kilómetros cuadrados. Por otra parte, el

emplazamientos operen sin resistencia social; segundo, elabora un *nuevo discurso público mundial* —contenido en el enunciado *minería sustentable*— orientado a representar al CMG como productor de *bondad social*, a la vez que legitima la intervención cotidiana de sus agentes en el control de la vida social de comunidades y comarcas.

Para ilustrar el argumento, recorro a la operación del clúster en el territorio mexicano, pero la reflexión puede extenderse a países de América Latina y más allá, pues en el ámbito mundial se registran escenarios que ejemplifican la dominación minera y los conflictos locales que genera, tal como lo exponen el proyecto Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (EJOLT 2014), los informes del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL 2014) y, en México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA 2016).

Este análisis pretende contribuir a la literatura en torno a temas cruciales, como el papel de los discursos globales en la organización de espacios locales (Bridge y McManus 2000), el contraste crítico del discurso minero de “responsabilidad social” frente al conflicto local (Halboom 2012; Frederiksen 2013; Quastel 2014), el tema de la *acumulación por desposesión* (Harvey 2004) y argumentos para la concepción y práctica de la *justicia ambiental* (Urquidi y Walter 2011; Martínez-Alier et al. 2014).

La nueva geografía minera y el surgimiento del clúster minero global

Algunos estudios señalan cierta tendencia al agotamiento de las vetas mineras mundiales a la par de una creciente demanda de metales industriales y preciosos en la economía global. Afirman que la extracción de metales se comportará de forma similar a la curva de Hubbert para el petróleo, de modo que las

argumento planteado en este capítulo no requiere desplegar una analítica y aplicación del concepto *comarca*; con la sola idea de un lugar llamado Comala, sometido al cacique llamado Pedro Páramo, es más que suficiente para enmarcar los linderos de mi argumento.

existencias actuales en los yacimientos de metales baratos están llegando a su cénit, y estas sufrirán un rápido descenso en los años subsecuentes (Valero y Torres 2008; Jackson 2009). Más allá de las variaciones especulativas, este escenario provocaría un aumento tendencial del precio de los metales y llevaría a fiebres de inversión, debido a las altas ganancias en el negocio minero. Con ello, la característica geológica del agotamiento de minerales resulta relevante, puesto que los yacimientos concentrados en vetas de *alta ley de corte mineral* decrecen en número y calidad, y lo que queda son abundantes pero pobres yacimientos de *baja ley de corte*, donde los metales se encuentran microscópicamente dispersos en vastos volúmenes de material estéril;² es decir, en una disposición geológica que la minería subterránea tradicional es incapaz de explotar de manera rentable. Para responder al reto de la escasez y la alta demanda de minerales, la industria minera mundial ha tenido que *evolucionar* en tres sentidos:

1) Los emprendimientos de gambusinos, las empresas familiares y las compañías regionales son absorbidas o desplazadas por corporaciones globales de accionistas (Higgins y Burrell 2010; Delos 2014). Mediante esta modificación organizacional, las empresas han concentrado poder tecnológico, económico y político bajo un mismo mando, y han ampliado su capacidad de acción hacia yacimientos promisorios en cualquier país o región del mundo. El

² En la terminología minera se entiende por *ley de corte mineral* (*cut-off*) aquella concentración de metal en un yacimiento que es igual al costo de producción; es decir, a la cantidad de mineral que una vez extraído no da pérdidas ni ganancias. Las leyes superiores a la ley de corte darán ganancias y se considerarán como mineral económicamente explotable; en cambio, leyes inferiores a la ley de corte darán pérdidas. Originalmente, por su peso, los metales se encuentran flotando en el magma terrestre. El agua, al entrar en contacto con el magma, se eleva a la superficie por entre grietas de la corteza terrestre, arrastrando consigo partículas metálicas. Terminado el proceso hidrotermal, las partículas metálicas quedan sedimentadas en la grieta. Si la grieta que liberó la presión fue ancha, el sedimento queda en un espacio acotado y da lugar a vetas o filones; en cambio, si la presión se liberó por miríadas de pequeñas grietas, el metal queda disperso dando lugar a yacimientos de baja ley. Por *material estéril* se entiende a aquel que no contiene suficiente concentración de metales para ser económicamente explotable.

predominio de la organización corporativa ha sido causa y efecto del desarrollo de mercados financieros especializados en la industria extractiva, especialmente la Bolsa de Valores de Toronto, que ha captado y suministrado capitales para la construcción de infraestructuras mineras a escala global, en competencia con la tradicional Bolsa de Londres (Tetreault 2013). Estos mercados financieros también han impulsado una amplia red de intereses vinculados: fabricantes de maquinaria especializada, servicios técnicos especializados, centros de investigación y agencias gubernamentales de regulación y promoción minera. Todos ellos son grupos de interés beneficiarios de la expansión de la minería corporativa. Así, en muchos países, la apertura del sector minero debida a las reformas neoliberales de finales del siglo xx fortalecería la transformación de las empresas mineras en corporaciones globales (Bridge 2004; Bridge 2009; Muradian, Walter y Martinez-Alier 2012).

2) La tecnología ha evolucionado hacia la megaminería de *tajo a cielo abierto*, la cual permite —a un costo social y ambiental muy alto— la explotación rentable de los yacimientos pobres mediante la instalación de gigantescos aparatos industriales capaces de remover, triturar, cernir y lixiviar millones de toneladas de material a cambio de minúsculas pero valiosas cantidades de metal. La tecnología también evolucionó hacia la *megaminería subterránea* para explotar los escasos filones de vetas concentradas. Es frecuente que ambas técnicas sean usadas en forma combinada o sucesiva, según la disposición del mineral en el subsuelo. De forma similar a lo que ocurre con la industria petrolera, que busca superar su agotamiento mediante la explotación de yacimientos en aguas profundas o tierras bituminosas —lo que implica altos costos energéticos y ambientales—, la industria minera obtiene los metales mediante la pulverización extensiva de territorios. Así, para obtener la misma cantidad de metal que antaño, esta industria ha multiplicado exponencialmente el gasto de agua y energía, así como la superficie de territorio afectado (Mudd 2007).

3) Las corporaciones mineras —a pesar de la ruda competencia comercial entre ellas— han edificado un *campo social unificado*, integrado por una red mundial de corporaciones y asociaciones vinculadas. Su objetivo ha sido erigirse como un *sujeto político global* capaz de operar en múltiples escalas para mantener los territorios de países o regiones del mundo abiertos a la explotación minera

corporativa y para legitimar su negocio ante la radical destrucción de paisajes sociales y patrimonios ambientales derivada de la evolución tecnológica hacia la megaminería. A este *campo social unificado* lo he denominado —a falta de mejor nombre— *clúster minero global* (CMG).

Estas tres adaptaciones han dado forma a una nueva geografía minera del siglo XXI, caracterizada por la presencia del interés minero en cualquier territorio en el mundo con yacimientos pobres. Se observan nuevos procesos de ocupación territorial donde: *a)* las minas subterráneas en producción son reconvertidas en minas de *tajo a cielo abierto*; *b)* las regiones mineras abandonadas debido a su baja ley son reactivadas conforme a la nueva tecnología; *c)* las comarcas sin historia minera se abren para la explotación, y *d)* se abren yacimientos de difícil acceso ubicados en regiones de alta montaña, polares y subacuáticas. Por tanto, el impacto territorial inherente a la tecnología megaminería y la oposición que sus emplazamientos genera en sociedades locales ha sido el contexto y el imperativo para que esta industria se organice en defensa de su interés como *sujeto político global*.

Pierre Bourdieu (1984) define el *campo social* como un espacio social relativamente autónomo, de acción social e influencia, donde confluyen relaciones sociales determinadas. Un campo social funcionaría como un mercado competitivo donde sus participantes disputan ventajas y posiciones, a la par que se comprometen con las reglas estructuradas de este; es decir, con la actualización continua de valores, normas, jerarquías y disposiciones (*habitus*) del campo.

En tal sentido, el campo social minero estaría compuesto por una red mundial de corporaciones mineras y proveedores de maquinaria y servicios técnicos, pero también bufetes, asesores, asociaciones, profesionales, ideólogos, centros de investigación, políticos y demás asociaciones e individuos que compiten por ganar ventajas, a la vez que se comprometen con los intereses, valores y reglas generales de la red y se autoidentifican con ella. Por esta razón, es posible analizarlos como una suerte de *comunidad* —en el sentido laxo del término— que se reproduce en el tiempo; de modo que esta puede ser tratada como un *sujeto-objeto etnográfico*, sin importar que sus individuos sean culturalmente diversos y estén geográficamente dispersos. Ahora bien, el término

políticamente unificado se refiere en específico a que el campo social minero ha logrado, a pesar de los intereses competitivos de sus miembros, congregar en estructuras centralizadas la representación de los intereses estratégicos de la red en el planeta y difundir un robusto discurso ideológico global. En suma, un amplio conjunto de participantes del sector minero se ha constituido en un sujeto público mundial que *habla* en bloque, hacia el exterior del campo, a favor de dar legitimidad pública a las acciones e impactos de las corporaciones mineras; por ello, cuando hablamos del CMG, le reconocemos la facultad de acción propia de un sujeto que, como tal, es capaz de adelantar sus intereses y desplegar estrategias.

De este modo, la primera estrategia del CMG consistiría en alinear a los Gobiernos nacionales y provinciales a su favor, además de facilitar la instauración exitosa de *horizontes de coerción* (Lomnitz 2005) sobre las comunidades locales y comarcas donde operan. La segunda, en claro ocultamiento de la anterior, estaría orientada a promover un discurso público centrado en el enunciado *minería sustentable*, que pretende representar a las corporaciones mineras como productoras mundiales de *bondad social*; ambas destinadas a lograr —en el contexto de la nueva geografía minera— ciclos exitosos de acumulación de capital en entornos de colisión de sus intereses contra derechos históricos de propietarios y contra las formas de vida de comunidades y comarcas locales. Es decir, se trata de una minería que, debido a su gigantismo tecnológico, a sus necesidades territoriales y a su impacto en el paisaje, requiere necesariamente desposeer tierras, remover usos culturales, desarraigar poblaciones y subordinar la vida social local al negocio minero durante el efímero periodo histórico de dos o tres décadas en que agotan el yacimiento y dejan el lugar destruido e inhabitable bajo el parámetro de la ocupación cultural precedente.

La Iniciativa Minera Global

La constitución del clúster como bloque ideológico unificado se puede rastrear desde 1999, cuando nueve grandes corporaciones mineras y metalúrgicas se reunieron en Melbourne para confrontar la mala reputación mundial de

la industria, debida a escándalos de contaminación y violencia. Fue entonces cuando el grupo lanzó la llamada Global Mining Initiative a la esfera pública. Su promotor, sir Robert Wilson —director de la corporación Río Tinto—, argumentó lo siguiente:

Derivado de las deficiencias ambientales y sociales del pasado, la industria minera ahora enfrenta un gran reto. Hay una percepción, en un número creciente de personas, a menudo tácita, de que la industria mundial de minería y metales es incompatible con el desarrollo sostenible [...] Esta es una percepción que debemos enfrentar. Si se descontrolara, provocaría legislaciones y distorsiones en los mercados, de manera que en última instancia se dañaría nuestro negocio y el desarrollo de las economías por igual, y produciría inesperadas consecuencias ambientales y sociales. Creo firmemente que a menos que los principales actores de la industria global de minerales y metales puedan presentar un caso convincente de que sus actividades se llevan a cabo en consonancia con los principios del desarrollo sostenible, entonces su futuro a largo plazo estará en peligro. Debemos ser capaces de explicar nuestro papel a una generación que toma el desarrollo sostenible como un valor dado. Presentar nuestro caso no será fácil por varias razones. Una es que la industria minera lleva mucho de equipaje. Nadie puede negar un pasado de daños al medio ambiente ni la existencia de ejemplos modernos de mala práctica. Otra razón es que la naturaleza fragmentada de nuestra industria y la gran competencia que existe entre los productores no ha facilitado a la industria ocuparse estratégicamente de esta amenaza tan amplia y compleja para sus actividades. A nivel nacional y de producto, existen asociaciones de la industria que hacen un buen trabajo, pero la industria no está organizada para analizar y responder adecuadamente a un desafío tan amplio y profundamente arraigado a su futuro. Esta preocupación que expreso es compartida por otras personalidades de la industria. Algunos de nosotros hemos hablado sobre el tema y hemos acordado no permitir que el futuro de nuestra industria se decida por ausencia. Por tanto, lanzamos un nuevo proyecto para abordar estas cuestiones bajo el nombre de Iniciativa Minera Global (Wilson 1999; traducción propia).

Los gigantes corporativos apoyaron la GMI, de modo que su primera tarea fue la creación del International Council of Mining and Metals (ICMM) en 2001 para, de forma mancomunada, ejercer influencia política mundial.³ El ingreso de los poderosos gigantes corporativos fortaleció a la organización, a la que también se adhirieron decenas de asociaciones que agrupan centenas de compañías mineras, de modo que actualmente reúne a 22 corporaciones mineras mundiales y 32 asociaciones nacionales, continentales y por *commodity* (oro, acero, etc.). Esto significa que 1 500 empresas mineras asociadas operan más de 1 200 minas en 70 países, además de miles de proyectos en exploración (ICMM 2016a).

En conjunto, los miembros del ICMM controlan un alto porcentaje de la producción mundial de metales: cobre (52 %), platino (44 %), hierro (42.5 %), oro (26.8 %) y níquel (28 %), y emplean aproximadamente 800 000 de los 2.5 millones de trabajadores en la minería formal (ICMM 2016a). No obstante, el ICMM aspira a formar una coalición minera total, por lo que actualmente el reclutamiento avanza hacia Rusia (ICMM 2016b) y especialmente hacia China,

³ Entre las corporaciones relevantes están African Rainbow Minerals, Anglo American, Anglo Gold Ashanti, Antofagasta Minerals, Areva Mines, Barrick, BHP Billiton, Codelco, Freeport-McMoRan, Glencore, Goldcorp, Gold Fields, Hydro, JX Nippon, Lonmin, Mitsubishi Materials, MMG, Newmont, Polyus Gold, Río Tinto, South 32, Sumitomo Metal Mining, Teck. Entre las asociaciones están la Cámara Asomineros Andi-Colombia, Cási Institute, Chamber of Mines of South Africa, Chamber of Mines of the Philippines, Chamber of Mines of Zambia, Cobalt Development Institute, Consejo Minero de Chile A. G., Eurometaux, Euromines, European Precious Metals Federation, Federation of Indian Mineral Industries, Ghana Chamber of Mines, Instituto de Seguridad Minera-Perú, International Aluminium Institute, International Copper Association, International Iron Metallurgical Association, International Lead Association, International Manganese Institute, International Molybdenum Association, International Wrought Copper Council, International Zinc Association, ITRI, Japan Mining Industry Association, Minerals Council of Australia, Mining Association of Canada, Mining Industry Associations of Southern Africa (MIASA), National Mining Association-USA, Nickel Institute, Prospectors and Developers Association of Canada, Sociedad Nacional de Minería-Chile, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía-Perú, World Coal Association, World Gold Council, Zircon Industry Association.

donde, en el contexto del China Mining Congress de 2012, presentó las traducciones al chino de sus documentos clave y se entrevistó con el Gobierno central de China (ICMM 2016c). En este sentido, Sethi (2005) argumenta que antes del ICMM y del despliegue de la GMI, las corporaciones mineras fallaron en organizarse a sí mismas de manera efectiva a nivel global, en favor de lo que él llama una “industry-based codes in serving public interest”. En nuestra visión, es con la fundación del ICMM que emerge el CMG como sujeto político a escala global.

La segunda tarea fue la elaboración del fundamento teórico de la GMI. Esta labor fue contratada con el International Institute for Environment and Development (IIED) con sede en Londres. El IIED explica su identidad en su página web:

Somos una organización independiente de investigación de políticas activa en los cinco continentes a través de una extensa red de socios. Fundada en 1971 por la economista Bárbara Ward, quien forjó el concepto y la causa del desarrollo sostenible [...] El IIED es una de las organizaciones ambientales y de desarrollo internacionales más influyentes en el campo de la investigación de políticas [...] Nosotros construimos puentes entre la política y la práctica, las comunidades ricas y pobres, el Gobierno y el sector privado, y entre los diversos grupos de interés [...] forjamos alianzas con individuos y organizaciones que van desde los habitantes de favelas a las instituciones globales; ayudamos a fortalecer la voz de los marginados en la toma de decisiones y a garantizar que la política nacional e internacional refleje las agendas de las comunidades y países más pobres. Algunos de nuestros socios son personas que trabajan en otras organizaciones no gubernamentales [ONG], Gobiernos, instituciones académicas, grupos de poblaciones indígenas, institutos globales y organismos multilaterales, como la ONU [...] Nosotros también desempeñamos un papel activo en las redes internacionales, como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IIED 2014; traducción propia).

El IIED organizó un amplio equipo multinacional compuesto por científicos sociales, ambientalistas y expertos en casos locales. En el año 2002

presentó el documento final titulado “Abriendo brechas. Minería, minerales y desarrollo sustentable (MMDS)”.⁴ Este texto presenta un perfil de la minería mundial y describe su relevancia económico-estratégica para el mundo moderno, señala la controversia generada por la minería en relación con la sustentabilidad ambiental y social, además de analizar las causas generadoras de conflictos entre compañías mineras y comunidades a la luz de casos sucedidos en diferentes países y regiones del mundo. Entre otras cosas, el estudio criticó que las compañías mineras han cometido errores en la adquisición de tierras, descuidos en la reubicación de asentamientos, indolencia ante eventos de contaminación, indiferencia hacia afectaciones de salud, mezquindad en las compensaciones a la población local.

La conclusión y lección a que les llevó su análisis es que si las compañías hubieran estudiado los contextos locales y nacionales —y operado con menor impacto ambiental y mayor vínculo con la población local—, los conflictos pudieron haberse evitado o, por lo menos, se pudo mitigar su virulencia. Tácitamente, recomendó a las corporaciones abandonar conductas indolentes; explícitamente, les invitó a actuar con conocimiento de la complejidad legal, social, cultural y política del lugar donde buscan instalar sus emplazamientos mineros. Pero la recomendación relevante fue que el CMG debía desarrollar una política de intervención activa en la vida social de comunidades y comarcas con la divisa del *desarrollo sustentable*.

El reporte llamó al cuidado del ambiente y a la conversión de las corporaciones mineras en promotoras de todos los derechos sociales y culturales que fuese menester proteger (compensaciones justas, ambiente sustentable, derecho a la consulta, equidad de género, salud). También llamó a la responsabilidad empresarial de combatir la pobreza y promover proyectos de *desarrollo de la comunidad* para incorporar a las comunidades afectadas al próspero mundo

⁴ En el reporte *Abriendo brechas...* participaron realmente tres organizaciones: International Institute for Environment and Development (IIED; www.iied.org); Environmental Resources Management (ERM; www.erm.com/en/) y World Business Council for Sustainable Development (WBCSD; www.wbcd.org/home.aspx). En este artículo, cuando nos referimos al IIED extendemos la autoría a las otras organizaciones.

del desarrollo sustentable. De manera especial, se convoca a las corporaciones mineras a crear espacios de negociación donde intervengan todos los involucrados: líderes comunitarios, agentes de gobierno, ONG y demás implicados para planificar iniciativas, armonizar ideas y resolver conflictos. Incluso recomiendan evitar la soberbia e intervenir de forma indirecta, discreta y humilde, a fin de evitar animadversión local o suplantar el papel del Gobierno.

Entre la abundancia de derechos por reconocer a las comunidades que el IIED menciona a sus financiadores, se desliza la “subversiva idea” de que los Gobiernos (las mineras no se mencionan) deben reconocer el derecho de las comunidades a oponerse a los emplazamientos mineros; sin embargo, la idea es una tímida frase solitaria, perdida en un texto de más de cuatrocientas páginas e inmediatamente acotada en la frase subsecuente, donde a la comunidad afectada se le pide demostrar que tal oposición debe resultar de “un proceso de toma de decisión bien establecido” y además debe calificar como *comunidad indígena* (IIED 2002, 225).⁵

Los autores son vehementes en afirmar que la comunidad es *actor relevante*, que siempre debe tener el derecho a participar, a ser consultada y a nunca ser excluida de la imaginada mesa de diálogo que debate su destino. Es decir, se trata de una mesa donde el IIED incluye a una multitud de actores relevantes y no tan relevantes que —ellos dicen— tienen derecho legítimo a participar (funcionarios de gobierno, representantes mineros, organizaciones sociales, grupos ambientalistas, agencias internacionales, medios de comunicación); sin embargo, en la jerarquía de grados de legitimidad que establece el IIED, la comunidad local es un actor con méritos insuficientes para estar en la cima, la cual se reserva en exclusiva para dos actores: los Gobiernos (Estados) y la compañía minera, lo que argumentan de la siguiente manera:

En todos los niveles, desde el internacional al local, existen grupos de actores que se consideran voces legítimas dentro del sector de los minerales. A veces sus

⁵ Ciertamente, en la página 157 hay una segunda referencia al derecho de decir no, pero esta mención no aparece como un principio de reconocimiento, sino como una actitud local que puede revertirse mediante técnicas de diálogo.

demandas de legitimidad son difíciles de evaluar. Para el desarrollo sustentable es fundamental la necesidad de entender quiénes son los *actores sociales*, cómo evaluar su legitimidad, cómo garantizar su presentación de cuentas y cómo promover su capacitación (IIED 2002, 74).

Así, el IIED distingue grados de legitimidad de los actores conforme a una jerarquía ordenada en cinco niveles:

- 1.- *Actores con derecho de veto*: Autoridades de Gobiernos correctamente constituidos, facultados para negar permisos; dueños de tierras con derechos de explotación y que no tienen la obligación de vender.
- 2.- *Actores con derecho a recibir compensación*: Dueños de tierras que no poseen derechos de explotación, trabajadores heridos, comunidades que deben ser reasentadas.
- 3.- *Actores con derecho a participar*: Algunos organismos indígenas nacionales, autoridades locales de planificación, personas que reúnen los requisitos para participar en procesos de EIA.
- 4.- *Actores con derecho a consulta*: Personas afectadas cuyas opiniones deben indagarse, comunidades vecinas, organismos de gobierno no involucrados en la toma de decisiones.
- 5.- *Actores que deberían ser informados*: Abastecedores, medios de comunicación (IIED 2002, 74).

Nótese que los actores con derecho de veto son el Estado nacional y los concesionarios mineros, *quienes no tienen la obligación de vender*; en cambio, los propietarios sin concesión minera solo tienen *derecho a ser compensados*, es decir, pagados, por el despojo de sus tierras. De este modo, las comunidades —como organización colectiva o como suma de propietarios— están obligadas a ceder sus tierras y a acatar su posible relocalización.

En el universo de derechos otorgados por estos supremos “legisladores sustentables” del IIED, las comunidades quedan despojadas del derecho de decir *no*, porque no son Estado nacional y porque no compraron o negociaron con las burocracias estatales las concesiones mineras bajo sus tierras. A

los demás actores —vecinos sin propiedad de tierras, recolectores o afectados ambientales— les queda el flaco *derecho a participar* —compartir el dinero *piñata* repartido por la compañía minera o por el Gobierno—. Finalmente, para cerrar la pinza, el IIED abre el derecho de voz a intermediarios políticos, funcionarios gubernamentales y otros actores para entrometer su presencia y opinión sobre el único tema que queda abierto a decidir: la mejor técnica para operar la desposesión territorial de las comunidades locales. Aquí está finalmente la clave que decodifica el discurso de la *minería sustentable*.

El reporte de IIED reconoce todos los derechos que sean convenientes reconocer, menos el derecho de las comunidades a vivir en su territorio, conforme a su forma de vida en su paisaje históricamente construido y a negarse a que su territorio se convierta en lo que Lerner (2010) llama “zona de sacrificio”.

El IIED se abstuvo de cuestionar el modelo de consumo mundial de minerales. Por ejemplo, no discute el sentido del consumo del oro para joyas o seguridad financiera en relación con la dimensión del costo energético de su extracción; tampoco la afectación ambiental que provoca ni el socavamiento de la habitabilidad del paisaje; no cuestiona el enfoque de la corporación privada hacia la ganancia financiera frente a un enfoque de ahorro de producción y consumo de recursos minerales que tienden a la escasez, y no reflexiona sobre por qué el interés privado de las corporaciones mineras se presenta como un interés público global.

El reporte nada dice de la *reciprocidad negativa*, definida como “la intención de tomar todo, si es posible, a cambio de nada”, implicada en la apropiación privada de volúmenes masivos de riqueza que son transferidos de regiones periféricas a lujosos nodos centrales de la economía global. En el IIED parecen vivir una contradicción entre su ideología y las consecuencias de las prescripciones del reporte MMSD. Pero esta contradicción podría ser resuelta si el IIED demostrara que en la agenda de las comunidades más pobres del mundo está el ceder de buen grado —sin coerción, en libertad, con información, con autonomía— sus tierras y formas de vida a emplazamientos mineros en beneficio de desconocidos accionistas corporativos, o cooperar solidariamente con la necesidad mundial de oro y demás metales.

Minería sustentable y técnicas de dominación

La GMI organizó al CMG como *campo social unificado* al ofrecer —mediante el reporte MMSD— una filosofía, un marco conceptual y un nuevo discurso con el cual presentarse como una industria socialmente responsable y comprometida con el ambiente. La IMG también aportó al CMG —mediante la fundación del ICMM— un dispositivo de *inteligencia estratégica* que le constituiría en sujeto político global habilitado para contrarrestar las críticas, legitimar la sustentabilidad de la megaminería y ganar influencia en organismos internacionales clave y en Estados nacionales.

Si bien antes de la GMI la industria ya se agrupaba en asociaciones nacionales e internacionales, y sus miembros se vinculaban a través de congresos mundiales celebrados en diversos países, en realidad no percibían necesidad alguna de responder críticas y promover una política de legitimidad del sector. Su actividad se orientaba a negociar reglas de competencia al interior de la industria y lograr ventajas legales o regulatorias con los Estados nacionales: derechos de acceso al subsuelo, impuestos, incentivos, garantías a la inversión.

La atmósfera positiva hacia la industria cambiaría en la Cumbre de la Tierra de Río en 1992. Allí se encontró vulnerable ante las críticas a sus comportamientos depredadores, insertas en un nuevo entorno mundial donde la preocupación ambiental y los derechos de los pueblos étnicos adquirieron centralidad. Fue entonces que la industria minera se vio impelida a organizarse como clúster y responder con una estrategia legitimadora.

El ICMM asumió el papel organizador de esa estrategia, y en el 2003 publicó su decálogo de principios de la *minería sustentable*, que pronto sería insertado en las páginas web de muchas corporaciones mineras del mundo (ver decálogo en ICMM 2016d). Hacia afuera de la industria, las compañías mineras se publicitarían como organismos éticos preocupados por el desarrollo sustentable, la defensa de los derechos humanos, el respeto de las culturas, el cuidado del ambiente, la salud, la seguridad de los trabajadores y contra la pobreza. Mientras tanto, hacia dentro, el clúster se dedicaría a educar en el nuevo discurso a sus propias corporaciones para hacer creíble su decálogo de minería sustentable.

Una primera línea estratégica fue la edificación de una suerte de mecanismo de autocertificación de sustentabilidad minera. El decálogo de principios se desagregó en criterios de *sustentabilidad* y *responsabilidad social*, y se les asignó un sistema de calificación de cumplimiento. Hoy las corporaciones mineras se autoevalúan mediante la presentación de un *reporte público* conforme a los criterios del decálogo, que es auditado por un panel de “expertos independientes”. Desde el año 2009 hasta la actualidad, el ICMM ha anunciado que sus corporaciones fundadoras cumplen con los principios de la minería sustentable con altas notas (ICMM 2016e). Con estos diplomas autoasignados, las corporaciones buscan, en la esfera pública mundial, acreditarse como sustentables y socialmente responsables. Para prevenir descalificaciones del mecanismo por escándalos y temas difíciles —operaciones mineras en áreas protegidas, ocupación de territorios indígenas sin autorización, desastres ambientales—, publican *declaratorias de posición* donde califican como *temas en controversia* a los mencionados, aunque mantienen sus operaciones y afirman estar abiertos a diálogos futuros (ICMM 2016f).

El ICMM también responde a críticas puntuales. Un ejemplo es su carta de respuesta a la organización indígena First Peoples Worldwide, la cual denuncia que el ICMM niega la calidad política de los pueblos originarios a decir *no* a los emplazamientos mineros en sus territorios (ICMM 2016g). Las baterías también se dirigen hacia los críticos académicos del clúster minero. Ejemplo de ello es el artículo de su intelectual orgánica, Kathryn McPhail (2008; ex directora senior del ICMM), titulado “Sustainable Development in the Mining and Minerals Sector: The Case for Partnership at Local, National and Global Levels”, el cual puede interpretarse como un contrataque académico a la llamada tesis: “La maldición de los recursos extractivos”. Dicho artículo convenientemente concluye en un estudio comparativo de varios países que pretende corregir la famosa tesis, en el sentido de descargar de culpa a las industrias extractivas por la generación de inflación, pobreza, concentración de poder y corrupción institucional en los países receptores. Por el contrario, McPhail concluye que los impactos sociales y económicos observados en muchos casos no son causados por acciones de la industria minera, sino por la debilidad regulatoria de los Gobiernos que la hospedan. Se trata de un curioso giro argumental

que podría ser cierto si las compañías mineras fueran pequeños, humildes y desorganizados emprendimientos gambusinos en tierras lejanas que el Estado hubiera olvidado, y no ricas corporaciones con amplios recursos económicos y políticos para subordinar las acciones gubernamentales a su interés. Algo así como decir: “¡Creamos violencia social, desastres ambientales y desequilibrios económicos y corrupción por culpa del Estado nacional que nos hospeda, porque él no es capaz de controlarnos!”. McPhail fue premiada por el periódico británico *Financial Times* (FT) y por la International Finance Corporation (IFC) porque “proporcionó una visión a la reflexión internacional sobre el desarrollo del sector privado en el sector de la minería” (ICMM 2008). Por cierto, entre los jurados que entregaron el premio a McPhail estaba el director del Yale Center for the Study of Globalization, Ernesto Zedillo, el expresidente mexicano.

Una segunda línea estratégica del ICMM ha sido proveer al CMG de argumentos sólidos, a la vez que políticamente correctos, para colocar el lenguaje y la estrategia del reporte MMSD como política pública de organismos internacionales relevantes. Más aún, una revisión del tema minero en los documentos del Banco Mundial, de la Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE 2015) muestra que se trata de elaboraciones del mismo discurso que pretenden mostrar a la minería como una prioridad mundial y como una práctica sustentable y socialmente responsable. Ejemplos de ello son la “Iniciativa para el desarrollo de la minería responsable”, impulsada por el WEF, que pretende crear “una plataforma neutral verdaderamente multipartita para el debate y desarrollo de ideas capaces de liberar potenciales benéficos socioeconómicos de la minería” (WEF 2013), o los documentos del Mining Task Force de la APEC, avalados por los ministros de los países de esta poderosa organización que, por ejemplo, no ven problema ambiental alguno en la minería subacuática, solo “si se hace de manera responsable” (APEC 2016).

Una tercera línea ha sido proveer a las corporaciones mineras con protocolos y recomendaciones para controlar y gestionar grupos y procesos políticos contrarios al interés minero, entre ellos los protocolos para relacionarse

con grupos indígenas e incidir políticamente en el país huésped, para reubicar poblados o para procesar conflictos comunitarios. Del conjunto de protocolos, destaca un manual elaborado por el ICMM y la División de Políticas sobre Petróleo, Gas y Minería del Banco Mundial, dirigido a los operadores de minas. Allí se ofrecen instrucciones sistemáticas y puntuales para conocer a las comunidades de su entorno e instaurar sobre ellas un régimen de dominación que conjure reacciones adversas al emplazamiento minero. El documento se titula “Un conjunto de 20 herramientas revisadas y actualizadas para su aplicación en el ciclo de los proyectos de minería de desarrollo comunitario. Kit de herramientas” (ICMM 2012; cuadro 1).

Escrito en el modo retórico del *desarrollo sustentable*, el kit recomienda “fomentar las alianzas y relaciones de trabajo constructivas entre comunidades, empresas y gobiernos [...] para mejorar las oportunidades para el desarrollo sostenible de las comunidades en torno a las operaciones y regiones mineras y de metales en todas las fases del ciclo de minería y metales” (ICMM 2012, 5). Este manual es un sofisticado instrumento de *inteligencia estratégica* listo para aplicarse desde las oficinas de *relaciones comunitarias* de los emplazamientos mineros. Un primer conjunto de herramientas sirve para edificar un *panóptico* sobre la comarca; luego enseña cómo identificar y describir la red de actores internos y externos, incluso localiza sus casas en un mapa del poblado; cómo clasificarlos por influencia política, grado de oposición y potencial para afectar al proyecto minero, y cómo seleccionar el trato adecuado para cada grupo, especialmente para líderes y opositores, a fin de ofrecerles *oportunidades de asociación*. Además, da indicaciones para desarrollar estudios sociológicos complementarios sobre la vida cotidiana, la economía e historia locales, valores culturales, divisiones y conflictos internos, entre otros temas. Un segundo conjunto de herramientas detecta necesidades y aspiraciones locales, y pone a la población a “jugar” a la *sustentabilidad* mediante *proyectos participativos*, siempre bajo la mirada atenta de los agentes de la empresa. Un tercer conjunto enseña a administrar reclamos y conflictos, reubicar poblados de forma pacífica y elaborar *acuerdos y planes de desarrollo comunitario*. Sin duda, el kit es un manual sofisticado para organizar una micropolítica de tratos diferenciados a fin de diluir la formación de oposiciones unificadas, y a la vez para facultar a los

CUADRO 1
Kit de veinte herramientas de desarrollo comunitario, ICMM (2012)

I. Herramientas de relaciones
1) Identificación de las partes interesadas
2) Análisis de las partes interesadas
3) Matriz de consulta
4) Evaluación de asociaciones
5) Mecanismo de reclamaciones
II. Herramientas de planeación
6) Marco de planeación estratégica
7) Mapa de la comunidad
8) Análisis institucional
9) Jerarquización de oportunidades de desarrollo
10) Herramienta de valuación financiera
III. Herramientas de evaluación
11) Estudio social de referencia
12) Evaluación de impacto social y oportunidades
13) Evaluación de competencias
IV. Herramientas de gestión
14) Acuerdos de desarrollo comunitario
15) Sistemas de gestión
16) Planes de acción comunitaria
17) Inversión económica local
18) Planeación de reasentamientos
V. Herramientas de seguimiento y evaluación
19) Definición de indicadores
20) Escala de logro de objetivos

Fuente: Elaboración propia.

agentes mineros respecto a dirigir y administrar la acción colectiva de la población local hacia objetivos que no afecten los intereses de la mina.

El objetivo subyacente del *kit de desarrollo comunitario* es instaurar un régimen de dominación mediante una suerte de *gobierno indirecto* operado por la gerencia de la mina. El carácter indirecto —a modo de *outsourcing*— es crucial para disimular su intervención, evadir responsabilidad y ahorrar costos monetarios. Los planes de acción y las microempresas locales se publicitarán como iniciativas legítimas de la comunidad, y la presencia de consultoras, ONG,

universidades y agencias gubernamentales —leales a la minera— se justificará como petición local atendida. Finalmente, el dominio de la minera se ocultará como una desinteresada colaboración filantrópica con sus *vecinos* pobres, acorde con la retórica de la *responsabilidad social corporativa*.

La elaboración de manuales y recomendaciones sobre múltiples aspectos para la implantación exitosa de corporaciones en todo el mundo es abundante; por ejemplo, para lograr la desposesión exitosa de tierras publicaron *Land Acquisition and Resettlement: Lessons Learned* (ICMM 2015a); para lidiar con pueblos y derechos indígenas, *Indigenous Peoples and Mining: Good Practice Guide*; para identificar y medir el apoyo o rechazo de personas y grupos contra un emplazamiento minero, *Stakeholder Research Toolkit* (ICMM 2015c); para incidir y dominar sobre actores en espacios subnacionales y nacionales, *Mining: Partnerships for Development Toolkit* (ICMM 2011); para mejorar la imagen pública de las empresas mineras, *Changing the Game, Communications and Sustainability in the Mining Industry* (ICMM 2013), entre muchos otros.

La producción directa del ICMM supera los diez mil documentos, los cuales se pueden calificar como la postura oficial del CMG; aunque en realidad fueron elaborados por una amplia red de académicos organizados en múltiples *think tanks* ubicados en universidades, asociaciones civiles, consultoras, asociaciones mineras y organismos internacionales. Entre ellos destacan el ya citado IIED, con sede en Londres; la Simon Fraser University en Canadá, y el Sustainable Minerals Institute at the University of Queensland, en Australia.

En realidad, con la GMI, presentada en Johannesburgo en 2002, se abrió una suerte de *campo académico* orientado a reflexionar y teorizar los problemas y dilemas del clúster para desarrollar aplicaciones orientadas a resolverlos. De allí derivó un extenso corpus de artículos y libros de formato “científico”, al tiempo que evolucionó un amplio campo de negocios de consultoría que ofrecen servicios de diseño e implementación de los manuales y recomendaciones de la minería sustentable; de manera que ya no es extraño encontrar grupos académicos teorizando, a la vez que operando, procesos políticos a favor del CMG en todo el mundo.

Un concepto clave de este “campo académico” es el de *licencia social para operar*, acuñado por Jim Cooney, un politólogo canadiense que participó en el

proyecto MMSD (CBSR 2014) y actualmente es consultor, conferencista y líder del importante programa Responsible Minerals Sector Initiative, hospedado en la Simon Fraser University Beedie School of Business. Armado con este concepto, postula que la compañía minera necesita —además de los permisos formales— la *licencia* de los habitantes del lugar; de lo contrario, la operación minera corre el riesgo de generar oposición y ser detenida. El concepto tuvo gran aceptación entre el CMG, pues le dotó de un aparato teórico capaz de analizar experiencias exitosas y fracasadas de desposesión territorial, y de reflexionar en la complejidad de las comunidades locales, en sus respuestas, así como en encontrar la mejor forma de capturar pacíficamente a la comunidad y tomar su territorio suavemente, sin oposición.

Aunque no acuñó el término *licencia social para operar*, el líder teórico del concepto quizá sea Robert Boutilier —también de la Simon Fraser University—, quien argumenta que hay cuatro niveles de licencia social: el primero y más bajo es la *retención* de licencia, donde la comunidad activamente rechaza el proyecto minero; el segundo nivel es la *aceptación*, donde la comunidad se resigna a la presencia formalmente *legítima* de la mina, pero se niega a ofrecer una actitud amistosa hacia ella; el tercer nivel es la *aprobación*, donde la población confía en la mina y cree en ella porque cumple los compromisos e informa de sus acciones, y el cuarto nivel es la *identificación psicológica*, donde la población defiende a la mina porque es *copropietaria* psicológica del proyecto. De este modo, un mayor nivel de licencia significa un menor riesgo para la inversión minera. Boutilier recomienda invertir *capital social* para lograr que la población se convierta en copropietaria psicológica de la empresa; aclara que el carácter ficticio de esa copropiedad no es un obstáculo mientras la población sea creyente de ello. Para cerrar la ergástula de su dispositivo conceptual, realiza una tipología de organización política en sociedades locales, útil para interpretar las características y tensiones de la arena política local, que facilita la intervención en el escenario y disminuye el error al momento de manipular los liderazgos locales hacia el interés minero (Thompson y Boutilier 2011). Las herramientas del ICMM arriba mencionadas son precisamente los productos prácticos derivados de este “campo académico”.

Es importante señalar que el ICMM fue el primer instrumento político global que el clúster generó para sí, pero no ha sido el único y tampoco es excluyente de otros mecanismos de organización. En realidad, el espacio de construcción de consensos políticos del conjunto del CMG no ocurre en las oficinas del ICMM en Londres, sino en los encuentros del calendario anual de los congresos mineros mundiales.

Recientemente, el CMG se fortaleció con una nueva iniciativa global, iniciada en 2013: el Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development (IFMMMSD), cuyo objetivo es promover “la aportación del sector minero al desarrollo sustentable” al ofrecer a los Gobiernos una “plataforma de diálogo entre múltiples partes interesadas para discutir oportunidades y desafíos que enfrenta la minería”. Conforme a sus documentos, 47 Gobiernos nacionales de países en los cinco continentes se han adherido a esta iniciativa (IFMMMSD 2013). Además, el clúster ha generado iniciativas regionales específicas. Por ejemplo, el caso de la Responsible Minerals Sector Initiative (RMSI), alojada en la Beedie School of Business de la universidad canadiense, orientada a establecer *un diálogo* entre corporaciones mineras y líderes indígenas, académicos, ambientalistas, actores influyentes y funcionarios gubernamentales —especialmente de países de América Latina— sobre las formas de implantación del evangelio de la minería sustentable (SFU 2012; SFU 2016).

El clúster minero en el escenario minero mexicano

México se encuentra plenamente vinculado, en condición subalterna, a la economía global a partir de la reorganización neoliberal iniciada en la década de los ochenta del siglo pasado. En el ámbito minero, la consecuencia fue la privatización de minas, siderúrgicas y ferrocarriles estatales, hoy bajo el control de corporaciones globales; además, la desincorporación de las reservas mineras estratégicas nacionales —áreas ricas en minerales— y su posterior cesión en concesión a ciudadanos, quienes típicamente, en transacción, las han cedido a empresas privadas y corporaciones mineras globales. La nueva legislación

minera de 1992 se ajustó para dar el máximo posible de incentivos a la inversión privada nacional y global. Los títulos de concesión se otorgan a personas físicas y morales sin restricción de extensión territorial. Tampoco se limita el número de concesiones que puede adquirir una sola persona física o moral. No se obliga a informar, previa y oportunamente, a los propietarios superficiales potencialmente afectables de dichas concesiones; de modo que cualquier propietario del país puede enterarse de que el subsuelo de su casa ya está concesionado el mismo día en que algún actuario judicial le notifica su desalojo.

Las concesiones otorgan derecho sobre todos los minerales salvo el petróleo y minerales radioactivos, que se manejan en otra legislación. Las concesiones tienen vigencia de cien años, mediados por un trámite de prórroga al año cincuenta. El pago al Estado es un canon de entre uno y seis dólares anuales por hectárea, monto insignificante para grandes corporaciones pero muy alto para campesinos ejidales o comuneros indígenas, si pretendieran adelantarse y evitar que el subsuelo de sus tierras quede en manos mineras. En una suerte de libre mercado del subsuelo, se pueden comprar y vender concesiones sin restricción; el único requisito gubernamental es informar del cambio de titular ante el Registro Público de Minería y Derechos Mineros. Si bien la Constitución dice que dichas concesiones solo se otorgan a personas mexicanas, la Ley de Inversión Extranjera de 1992, en su título segundo, habilita como mexicana a cualquier persona física o moral extranjera que realice actividades mineras si establece un domicilio fiscal en el país. De especial relevancia es el artículo 6 de la ley minera, que declara que:

La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades (Ley Minera 1992).

En suma, se trata de la privatización del subsuelo, que parece haber generado una suerte de latifundismo de aquel, pues en esta ley se declara a la actividad minera de interés público y preferente por sobre cualquier otro

uso del suelo, y para hacer valer tal *interés público*, los concesionarios disponen de mecanismos cuasi inapelables para consumir actos de apropiación de las tierras por sobre los propietarios superficiarios, ya con el recurso de la expropiación, ya con la llamada *ocupación temporal de tierras*.

En el orden informal, las corporaciones mineras obtienen ventajas para lograr concesiones de agua por sobre otros usuarios, también permisos de afectación ambiental incluso en áreas protegidas, o permisos municipales para cambio de uso del suelo hacia la actividad minera, a pesar de la eventual oposición manifiesta de la población local. Como veremos adelante, también gozan de ventajas informales para conseguir el apoyo de Gobiernos estatales, municipales y poderes fácticos para lograr la captura y control de las comunidades locales en la comarca donde operan. México es rico en reservas minerales, por ello, oficialmente ya hay 1 122 proyectos mineros activos en el país, de los cuales, 880 están en fase de exploración, 45 en construcción y 197 en explotación; además de 67 temporalmente suspendidos por razones técnicas, financieras o por dificultades sociales locales (MMC 2014). Entre los años 2000 y 2013, 250 corporaciones mineras extranjeras han invertido un total de 39 842 millones de dólares (SE 2014).

En México, el negocio minero es muy lucrativo. En ese sentido, tenemos el caso ejemplar de la mina a cielo abierto Peñasquito, en Zacatecas. Un emplazamiento de 7 800 hectáreas con 22 años de vida útil, propiedad de la canadiense Goldcorp. De acuerdo con datos de la compañía y a precios de 2012, nuestras estimaciones arrojan 84 053 millones de dólares en ingresos por ventas, 15 430 millones de dólares por costos de producción y 68 622 millones de dólares de ganancia operativa (Garibay et al. 2014).⁶ Si escalamos las cifras de este emplazamiento a las 1 122 iniciativas mineras actualmente en despliegue, resulta evidente el tamaño del interés involucrado en el negocio minero en México. Esta

⁶ El caso de Peñasquito, que se usó en extenso para este capítulo, se puede consultar en la web con la referencia Garibay et al. 2014. “Corporación minera, colusión gubernamental y desposesión campesina. El caso de Goldcorp, Inc. en Mazapil, Zacatecas”. *Desacatos* 44 (1): 115-142.

es una poderosa motivación del CMG para generar una atmósfera de minería amigable en las esferas gubernamentales.

En el ámbito internacional, el clúster trabaja en ampliar su influencia en organismos internacionales, en proveer inteligencia estratégica y en difundir el evangelio de la minería sustentable; en cambio, en el nivel de Estados nacionales sus objetivos son de orden más operativo: generar condiciones legales favorables; acordar con el Gobierno federal apoyos formales e informales para garantizar las inversiones, obtener incentivos, permisos y licencias; procesar la apropiación minera de tierras y recursos, y en su caso, desactivar opositores. En este mismo sentido, el clúster se ocupa de establecer vínculos con gobernadores estatales, legisladores y medios de comunicación.

En México, las instituciones federales relevantes para el interés minero son, además de la Presidencia de la República, la Secretaría de Economía (SE), que otorga las concesiones mineras; la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que autoriza las concesiones de agua; la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que autoriza *permisos de impacto ambiental*; la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (Profepa), que sanciona violaciones a la ley ambiental, y la Procuraduría Agraria (PA), creada para la defensa de derechos agrarios en ejidos y comunidades, pero que en temas mineros manipula asambleas ejidatarias y de comunidades agrarias para lograr la transferencia legal de sus tierras a empresas mineras. También es relevante el papel del Ayuntamiento municipal, pues esta autoridad local tiene la facultad de conceder el *permiso de uso del suelo* para cualquier actividad que se realice en su jurisdicción.

En la trama de influencias del clúster minero, la Coordinación General de Minería (CGM) de la SE juega un papel central, pues si bien su función formal es *regular* y *fomentar* la actividad minera, en la práctica sus funcionarios operan como gestores del clúster para alinear las decisiones de las agencias federales en favor de las peticiones específicas de las corporaciones mineras; por ejemplo, operaciones mineras en áreas protegidas, dotación de concesiones de agua, legalización de apropiaciones forzadas de tierras o ausencia de sanciones por daños ambientales.

Una prueba de ello es la “Guía de ocupación superficial”, un documento oficial de la SE que tiene por objetivo “Que las compañías lleven cabo todas las acciones necesarias para lograr la aceptación por parte de las comunidades [...] a fin de asegurar el acceso a la superficie del área concesionada”. Ahí se explican los procedimientos para acceder legalmente a las tierras de ejidos y comunidades —despectivamente referidos como: “La gente de los ejidos suele considerarse históricamente como víctimas” o bien, que utilizan la opinión pública y toman medidas de facto como instrumentos de presión—, en los que se proponen estrategias de mala fe para lograr ese despojo. Así, se recomienda a las compañías firmar estos “convenios de ocupación temporal de tierras” con ejidos al tiempo que se tramita —a espaldas de estos— la expropiación de esas tierras ante el propio Gobierno federal, representado por la SE. En dicha guía también se recomienda la aplicación de técnicas para el desarrollo comunitario, ilustradas con *casos exitosos* —como la canadiense Goldcorp o la mexicana Peñoles— que, según dice, se apropiaron de tierras campesinas en paz social. La SE no ve ningún conflicto de interés en la publicación de esta guía, por ello no oculta compartir su coautoría con las empresas mineras y asociaciones miembros del ICMM (SE 2015); de ahí que no resulte extraño que organizaciones campesinas y grupos opositores impugnen esa guía y califiquen de servil al comportamiento del Gobierno federal ante las corporaciones privadas (Rincón 2015).

El clúster organiza su influencia mediante los autodenominados *mining task force* y la Cámara Minera Mexicana (Camimex). Estos organismos amplían su capacidad operativa mediante la contratación de consultores especializados para gestionar aspectos específicos de su agenda (cabildeo político, estudios de coyuntura, manejo de medios); también suelen vincularse con ONG y centros de investigación para desarrollar agendas de intervención en comunidades locales (cfr. *México Mining Review 2013*).⁷

⁷ Durante la Convención Internacional Minera, realizada en México en 2013, se distribuyó el libro *Mexico Mining Review 2013*. Esta obra se compone de 417 pequeños artículos escritos por dirigentes y, sobre todo, consultores vinculados al clúster. Dichos textos son elementales pero francos en su intención y en el servicio que ofrecen. Las tareas

Los *mining task force* son coaliciones de corporaciones que operan discretos grupos de trabajo de alto nivel para influir en altas esferas gubernamentales y están agrupados por país de origen. Formalmente, son dirigidos por los directores de las corporaciones en el país huésped, pero operados por equipos de consultores especializados. Conforme lo indica su metáfora militar, son *grupos de tarea* creados para lograr objetivos específicos en escenarios específicos.

Rosalind Wilson, actual presidenta del *mining task force* de la Cámara Canadiense de Comercio, lo explica así:

Esencialmente, el *mining task force* es una plataforma de las compañías canadienses para compartir el éxito y las áreas comunes de mejora. Nos encontramos cada par de meses para compartir experiencias, encontrar soluciones y estrategias para abordar los temas particulares con las autoridades locales. Actualmente, hay 208 empresas mineras con capital canadiense registradas en México, que gestionan 585 proyectos. Básicamente, 75 % de las empresas extranjeras financiadas en el sector minero en México son canadienses (Wilson 2011).

Los *mining task force* monitorean el escenario nacional y elaboran las agendas sobre los asuntos que les involucran. Establecen además relaciones con políticos y con el círculo de altos funcionarios gubernamentales. Lo singular de estos *mining task force* es el vínculo con su embajada, que hace de una dificultad particular un asunto de orden diplomático (Moore y Colgrove 2014).

principales del CMG que enuncio se ven indirectamente avaladas en ellos. Para ilustrar el punto, aquí refiero —por número y título— algunos de ellos: 11. “Investment in mexican mining”; 18. “Impact of the fiscal reform”; 34. “Evolution of the mining law and industry governance”; 39. “Lobbying mexican authorities on behalf of the industry”; 41. “Envisioning a better mining framework”; 42. “Preventive approach to land ownership disputes”; 44. “Agrarian law and the mining industry”; 46. “Community relationships and effective negotiation”; 48. “Legal framework for obtaining mining concessions”; 48. “Operating within Mexico’s framework for a foreign investment”. 324. “Dissuasive strategies in reducing security threats”; 350. “Community relations make or break a mining project”; 393. “Mexico’s security issue: not a barrier for investment” (*Mexico Mining Review* 2013).

El *mining task force* canadiense es el más notorio. Su fortaleza se refleja en la realización anual del Mexican Mining Day, un evento anual que se realiza desde 2010 en Toronto, Canadá, dentro de la convención mundial minera Prospects and Developers Association of Canada (PDAC 2014). El Mexican Mining Day es un banquete donde los gerentes corporativos canadienses agasajan a altos funcionarios federales mexicanos, gobernadores y personajes influyentes vinculados a los círculos de poder político. En esta suerte de ritual social de seducción mutua, los invitados mexicanos exaltan *la tradición minera de México* y prometen remover obstáculos que preocupan al clúster.

En México, los cambios legales e institucionales, gestiones típicas del CMG para cualquier país, se cumplen desde los años noventa. Los temas así tratados son ajustes legales menores y *seguridad* para los emplazamientos mineros. Por ejemplo, en la reunión de abril de 2014, el secretario de Economía del Gobierno mexicano, Ildefonso Guajardo, prometió ajustes a la Ley Agraria para brindar *mayor seguridad jurídica* en la adquisición de tierras ejidales; también ofreció operativos para proteger a las minas de la delincuencia organizada, y respecto a la fricción surgida entre Gobierno y clúster, debida al nuevo impuesto de 7.5 % a las ganancias, dijo que *trabajaría* para dirigir ese ingreso fiscal al financiamiento del *desarrollo sustentable* de municipios y comunidades donde estén establecidas las compañías mineras (Guajardo 2014), petición que dos años después se ha cumplido de modo tal que este impuesto ya se usa para financiar, a nombre del Gobierno mexicano, la *licencia social para operar*.

La Camimex es una segunda organización clave en la estructura del CMG. Reúne a las 150 compañías más grandes, que concentran 93 % del valor de la producción minera en México (Almanza 2013). De acuerdo con la legislación mexicana, es la representación formal de los intereses mineros mexicanos ante el Estado; sin embargo, con la adquisición extranjera de compañías mexicanas, ahora representa los intereses de las corporaciones globales pero con el protagonismo de las tres poderosas corporaciones con capital mexicano: Grupo México, Grupo Peñoles y Grupo Frisco, cuyos dueños son magnantes mundiales con influencia directa en la clase política nacional (Sariego 2010).

La Camimex funciona con objetivos y prácticas similares a los del *mining task force*, pues sostiene una amplia agenda de asuntos del sector en temas de

energía, impuestos, aduanas, legislación, agua e imagen pública. Una simple revisión de la agenda de trabajo de la Camimex durante el año 2013 ilustra su capacidad de influencia (Camimex 2013): decenas de reuniones con gobernadores y funcionarios de alto nivel, legisladores, periodistas y consultores; todas orientadas a influir en las instituciones gubernamentales y en la opinión pública. Además de ser la voz pública del sector minero, la Camimex promueve un sentido de *comunidad minera*, en especial en la celebración bienal de la Convención Internacional de Minería, un espacio donde, además de hacer negocios, intercambiar experiencias y renovar arreglos políticos, reafirman vínculos interpersonales, ideologías grupales y un sentido de comunidad de gremio.

La Camimex presenta a México como un país de tradición minera por herencia colonial, y a sus empresas mineras como promotoras del México moderno. Identifica el *ser minero* con personas trabajadoras y valientes por adentrarse y extraer los minerales del fondo de la tierra, pero dada la composición gerencial de la organización, no exalta la imagen del obrero minero, sino la del ingeniero geólogo, una imagen que lo presenta como científico, a la vez aventurero, que explora tierras lejanas en busca de riquezas minerales escondidas. En realidad, se trata de una idea tomada de ingenieros universitarios que aspiraron a descubrir alguna veta rica y fundar una empresa propia; que laboraron como técnicos y gerentes de empresas mineras públicas y privadas mexicanas, y que hoy muchos son empleados o consultores de corporaciones mineras globales. Son fuertes críticos de los modos de vida campesinos y enemigos de la propiedad colectiva ejidal y comunal, porque creen que retrasa el progreso del país. Se trata, pues, de una autorrepresentación sublimada de esta *tradición minera mexicana*.

La *gerencia del campo minero* es la tercera figura organizacional de influencia del clúster minero. El gerente de campo tiene la responsabilidad de mantener en funcionamiento operativo el aparato minero, en lo técnico y lo político a nivel local. Para el control de las *relaciones comunitarias* se forma un equipo especializado cuyo objetivo en este nivel es instaurar y gestionar un *horizonte de coerción* específico sobre las comunidades locales y la comarca afectada, de preferencia usando las herramientas del *kit de desarrollo comunitario*, pero

también, si lo consideran necesario, con el recurso de la amenaza y la violencia ejemplar.

La tarea de la gerencia de campo se orienta a la captura de las instituciones comunitarias mediante el soborno de los líderes locales y la intervención de sus agentes en el espacio local a través de *iniciativas de desarrollo* que inhiban toda oposición. También se orientará a lograr una alianza o incluso —según el contexto— el control del Gobierno municipal. Finalmente, la gerencia de campo se encargará de establecer buenas relaciones con el gobernador y el secretario de Gobierno estatales, con los funcionarios de mandos medios federales o estatales que operen en el lugar y con políticos influyentes de la región, a fin de desarrollar un cerco político eficaz sobre las comunidades capturadas. Por supuesto, el internet permite que la gerencia de campo esté comunicada en tiempo real con el gerente corporativo nacional y con la presidencia de la corporación global del país que fuere, de modo tal que ante las eventuales rupturas del *horizonte de coerción*, se movilizan las influencias que los *mining task forces* y la Camimex han cultivado cuidadosamente.

Horizontes de coerción

En México, la evidencia etnográfica muestra que las corporaciones mineras —en su necesidad de acceder al control excluyente del territorio y sus recursos— se ven impelidas a desposeer a la población local, a desplazar los usos culturales precedentes y a reorganizar el paisaje de la comarca conforme al imperativo del negocio minero; sin embargo, en virtud de que el despojo simple, abierto y violento no es públicamente conveniente en el intercomunicado mundo global, les resulta adecuado y necesario instaurar un régimen de dominación sobre la comarca, que gestione el control sobre la población y la anulación de su resistencia mediante el recurso de la coerción.

Siguiendo a Lomnitz (2005), denominamos *horizonte de coerción* a la realidad local así construida. Se trata de un dispositivo de dominación establecido sobre una red de relaciones sociales donde los intercambios se tratan como si fueran positivos (relación entre individuos libres, vínculos contractuales

por consenso, derechos civiles y políticos vigentes), a la vez que se minimiza y silencia el papel de la *reciprocidad negativa* —entendida como la intención de tomar todo a cambio de nada— (Sahlins 1977), que de manera subyacente, a través de la coerción, define el carácter amenazante de los términos de intercambio entre dominador y dominado.

De este modo, el horizonte de coerción subyugará familias, comunidades y comarcas en un escenario que asegura, mediante la dominación, la transferencia de trabajo, bienes o territorios al perpetrador a cambio de *casi nada* —o bien, a cambio del permiso de seguir vivo—, simulando una transacción positiva. Desde la mirada de la víctima, el horizonte de coerción aparece como un *cercos* establecido donde no se encuentra nadie *en el horizonte* a quién recurrir por ayuda efectiva para hacer valer la causa propia y liberarse de la influencia amenazante del *captor*. Desde la mirada del *captor*, se trata del mismo cerco, pero dispuesto para aislar a su víctima del exterior y sostener en la vida social interna una atmósfera de amenaza subyacente. El miedo continuo provocado se orienta a lograr el efecto de sumisión de los individuos ante la captura de las instituciones locales y su *cooperación* con los fines del *captor*. En este sentido, el horizonte de coerción es un orden fundado en la violencia, definida como “cualquier acción u omisión intencional que daña o puede dañar a un individuo y que, en último extremo, perturba o restringe su capacidad para diseñar la vida en libertad” (Sanmartín 2008, 7).

En México, el debilitamiento del estado de derecho ciudadano, la subordinación gubernamental al interés minero y la invisibilidad de las prácticas mineras en la esfera pública han facilitado que, en amplias regiones del país, los emplazamientos mineros corporativos ya hayan instaurado, o intenten instaurar, centenas de horizontes de coerción. Estos regímenes de dominación de microrregiones (comarcas), informales y metajurídicos, han terminado por organizar una geografía nacional fragmentada en un archipiélago de áreas autonómicas, gobernadas indirectamente desde las oficinas de las respectivas corporaciones mineras. Por sí solas o en entendida vecindad territorial con grupos de poder fáctico —mafias del crimen organizado— que, también bajo coerción, dominan a los Gobiernos municipales de extensas regiones rurales

del país, las empresas mineras negocian la protección de sectores de la clase política estatal y federal.

Este argumento se hizo evidente con el escándalo de Rob McEwen, fundador de Goldcorp Inc. y hoy dueño de McEwen Mining. Durante una entrevista en la televisora canadiense Business News Network, McEwen se mostró extrañado por el robo de 198 kilos de concentrado de oro (material previo a su fundición) de su mina el Gallo II, con valor de ocho millones de dólares, ocurrido en abril de 2015 en el estado de Sinaloa, territorio bajo la hegemonía del cártel del famoso Chapo Guzmán. McEwen declaró que hasta antes del robo había llevado una “buena relación” con los grupos del narcotráfico: “Los cárteles están ahí. Generalmente, tenemos una buena relación con ellos. Si queremos ir a explorar a algún lado, les preguntamos, y te dicen: ‘No, pero regresen en un par de semanas, cuando terminemos lo que estamos haciendo’”, y agregó que la zona está tomada para operaciones temporales de transporte y cosecha de droga (McEwen 2015).

La declaración de McEwen abrió una grieta en la postura pública del clúster en México. Manuel Reyes Cortés, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), reconoció que las mineras negocian con el crimen organizado, pero justifica la razón en que son sometidas a extorsión (Reyes 2015). En contraste, Rosalind Wilson, líder del *task force* canadiense, negó cualquier relación entre el sector minero canadiense y el crimen organizado del país:

Tenemos buena gobernanza corporativa y eso no significa que estemos negociando con grupos criminales. Es un comentario muy desafortunado —el de McEwen— y es necesario aclarar que al menos las empresas canadienses que están registradas en la bolsa de Toronto, Nueva York y Londres tienen una serie de reglas muy estrictas, por lo que están obligadas a reportar todas sus operaciones (Wilson 2015).

En general, el CMG niega vínculos de conveniencia recíproca con el crimen organizado, y más bien, a partir del escándalo McEwen, solo reconoció vivir el papel de víctima.

El hecho es que los emplazamientos mineros corporativos continúan con sus actividades de exploración y explotación en la geografía del país, sin mayor noticia de dificultad, incluidas las muy extensas áreas rurales “gobernadas” en la vida cotidiana por el crimen organizado. Entre tanto, las comunidades de centenas de comarcas del país viven sometidas a los rigurosos horizontes de coerción que han sido instaurados sobre ellas, o en conflicto por evitar su instauración.

Resistencia y desposesión: Goldcorp y su mina Peñasquito

La minera canadiense Goldcorp, miembro activo del ICMM y practicante de la minería sustentable, es un caso ejemplar del establecimiento de horizontes de coerción en México. Es propietaria de la mina Peñasquito, ubicada en la cuenca del valle de Mazapil en el altiplano desértico del estado de Zacatecas, al norte del país. Se trata de una mina a cielo abierto que explota yacimientos de oro, plata, plomo y zinc, con veintidós años de vida útil. La mina fue inaugurada en 2010 por el entonces presidente de México, Felipe Calderón, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), y la gobernadora estatal Amalia García, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD). La mina Peñasquito ocupa casi ocho mil hectáreas de cuatro ejidos: Cedros, Mazapil, El Vergel y Cerro Gordo.

Para lograr el control legal de la tierra, Goldcorp obtuvo *contratos de ocupación temporal* de esas tierras con duración de veinte a treinta años, en apariencia legítimamente firmados por los cuatro ejidos. Estos convenios fueron avalados por funcionarios de la PA y notarios públicos de la región, pero a partir de las entrevistas de campo realizadas y tras sentencias judiciales posteriores, se concluye que esos convenios se firmaron sin las formalidades legales necesarias o falsificando firmas (Garibay et al. 2014). El precio pagado a las comunidades por la apropiación de esa amplia superficie fue de solo 15.5 millones de dólares norteamericanos, un monto irrisorio frente a los 84 000 millones de dólares que, según cálculos propios, la empresa obtendrá por las ventas totales, o los 68 000 millones de dólares que obtendrá como ganancias (Garibay et al. 2014).

En el año 2009, los ejidatarios de Cedros y El Vergel bloquearon las puertas de la mina. Esperanzados con la idea de que las agencias federales actuarían con justicia, pidieron a la PA y a la SE la revisión de los contratos que, afirmaron, debían cancelarse por fraudulentos. Sin embargo, ambas agencias respondieron que los contratos eran válidos, y posteriormente los ejidatarios fueron llamados ante el secretario de Gobierno de Zacatecas para negociar el retiro del bloqueo.

Durante esas negociaciones, los ejidatarios fueron asesorados por políticos tradicionales de la izquierda mexicana, quienes centraron la negociación en el tema del monto de una nueva compensación monetaria, y dejaron de lado temas como la legitimidad de los convenios, el abastecimiento de agua, los contratos que les negaban y resultan vitales para irrigar los cultivos en esa área desértica, los desplazamientos de las poblaciones o las afectaciones territoriales y ambientales, todos fueron relegados.

Después de varios encuentros, Goldcorp recuperó el ejido Cedros para su causa. Acordó con esta comunidad el pago de tres millones de dólares anuales durante la vida de la mina, por 4 800 hectáreas afectadas. La asamblea del ejido acordó repartirse el dinero anual en partes iguales entre sus 434 miembros, de modo que cada ejidatario aseguró un ingreso mensual de 576 dólares, cantidad modesta pero suficiente para solventar los gastos básicos de sus familias. En cambio, el ejido El Vergel se negó a recibir dinero, pues su objetivo era la anulación del convenio y la clausura de cincuenta pozos ilegalmente perforados por la minera, que agotaron el agua del sistema de riego de la comunidad. El bloqueo terminó sin acuerdo con el ejido El Vergel, que demandaría judicialmente por despojo a Goldcorp.

De acuerdo con la información recabada, la primera estrategia fue el amedrentamiento de los líderes resistentes y su desplazamiento de la dirección ejidal; de manera que un día de finales del 2009, en el contexto de las negociaciones mencionadas, el aguerrido representante del ejido Cedros, quien encabezó la revuelta contra la minera, no quiso recibirnos más. Temeroso y atento a que no nos vieran con él, relató que semanas antes unos mafiosos lo secuestraron durante ocho días y lo mantuvieron encerrado, amarrado, vendado y tirado en el suelo de una casa solitaria en el desierto. Pidieron un rescate de 20 000 pesos

mexicanos, unos 1 100 dólares. La familia vendió su camioneta y él regresó a su casa sin daños físicos. Confesó que nunca supo quién fue y que en adelante solo se dedicaría a su trabajo en el campo. Me prohibió buscarlo más.

En lo sucesivo, Goldcorp ha sostenido una política preventiva de futuros conflictos. Sus agentes intervendrían en la vida cotidiana local equipados con las herramientas de la minería sustentable, y pronto lograrían la captura política de la asamblea ejidal. Por ejemplo, la minera respaldó a once jefes de familia del ejido para financiar la compra a crédito de sendos tráileres destinados a mover materiales entre Peñasquito y el puerto de Manzanillo (Newmont Goldcorp 2015a), y financió un taller de confección de chalecos de seguridad que la minera les compra (Newmont Goldcorp 2016). Con el título “Empoderando comunidades”, llevó a los niños del ejido en su primer vuelo de aviación a un campamento educativo infantil en el Tecnológico de Monterrey, con el fin de hacerlos a futuro “agentes de cambio” de sus comunidades (Newmont Goldcorp 2015b); también financió un programa de atención odontológica en acuerdo con la Fundación UNAM y la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México para tratar afecciones dentales de pobladores locales, evento publicitado en un video (Newmont Goldcorp 2014a); más aún, ofreció becas a estudiantes, remozó la clínica de salud y ha realizado eventos y festejos con juegos mecánicos, incluso presentaciones de la orquesta sinfónica de la universidad estatal de Zacatecas, a quienes ha financiado con instrumentos y viajes internacionales (Newmont Goldcorp 2014b, 2014c). El resultado ha sido eficaz: la mayoría de la población apoya a la mina e incluso se ha movilizó en defensa de la empresa frente a los reclamos de despojo de otros ejidos.

Finalmente, los ejidatarios de Cedros parecen ser “copropietarios psicológicos” de Goldcorp, al estilo Boutilier, pero no solamente por abducción psicológica, sino por el cálculo obligado ante la coerción. Ellos optaron por tomar la oferta de la poderosa corporación y dar la espalda a la alianza con ejidos vecinos, pues sopesaron el costo de negarse ante una amenaza de sufrir daños, lo que les pareció creíble tras el secuestro de su líder, más aún en un poblado pequeño y vinculado por redes densas de parentesco. Luego, acciones como las diseñadas en el *kit de herramientas* han hecho su trabajo para diluir la resistencia.

Por su parte, la demanda judicial de El Vergel, interpuesta en el año 2009, prosperó en 2013 con una sentencia favorable al ejido. El juez falló en contra de Goldcorp y anuló el convenio de tierras por contener firmas falsas y realizarse sin conocimiento de la asamblea ejidal. Además, ordenó a Goldcorp indemnizar al ejido por los cuatro años transcurridos de ocupación ilegal.

En julio de 2013, El Vergel renunció a la idea de la clausurar los pozos de Peñasquito a cambio de la rehabilitación de los propios a cargo de la compañía. Se firmó un nuevo acuerdo con la empresa, testificado por un alto funcionario de la propia PA, donde el ejido aceptó 19 millones de dólares por treinta años de ocupación de 1 320 hectáreas. Una cantidad de dinero que, distribuida entre los 87 ejidatarios, proporciona un ingreso mensual de 607 dólares. Además, les ofreció cuarenta empleos en la mina, mejoras en la infraestructura del poblado, becas escolares y rehabilitar los pozos del ejido para el riego de sus tierras, ahora parcialmente improductivas.

Al igual que Cedros, los ejidatarios de El Vergel optaron por no subir la apuesta y tomar la renta y beneficios ofrecidos después de un desgaste de cinco años. La minera ganó a pesar de haber perdido el juicio. El ejido finalmente aceptó reponer la transacción *dinero por agua* con un nuevo acuerdo legal que garantiza a la empresa su acceso al agua a largo plazo. Un excelente resultado para la minera sin necesidad de usar la violencia como acción, sino solo como omisión.

En otro escenario, el ejido Cerro Gordo llevó a juicio a Goldcorp por el despojo de 599 hectáreas ubicadas en el mismo tajo de Peñasquito. Los ejidatarios mostraron que el contrato vigente tenía firmas falsas e irregularidades. Después de cinco años, en abril de 2013, un magistrado agrario sentenció a Goldcorp a devolver la superficie despojada. La ejecución de la sentencia se programó para el 20 de junio. Sin otro recurso judicial para evitar la devolución de las tierras y cerrar la mina, los abogados de Goldcorp recurrieron a su nuevo amigo, el ejido Cedros, para operar una artimaña de emergencia. El comisariado de Cedros pidió a un juez federal (no agrario) su protección para impedir la ejecución de la sentencia. El argumento fue que Cedros era “parte interesada”, pues si se ejecutaba la devolución de tierras al ejido Cerro Gordo, ellos serían afectados porque la mina cerraría y perderían los empleos y beneficios

que la empresa les daba. Para hacer pública su posición, más de trescientos vecinos de Cedros se desplazaron a la ciudad de Zacatecas e hicieron una manifestación en la plaza mayor en favor de Goldcorp. Este juez concedió la suspensión temporal de la sentencia el mismo 20 de junio de 2013.

El poderoso consejo directivo de Goldcorp —alarmado por los eventos en Peñasquito— se desplazó en pleno desde Canadá a la Ciudad de México para hablar con las altas autoridades del Gobierno federal. El 24 de julio de 2013, los once miembros se entrevistaron en reunión privada con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. De esa reunión trascendió que “el alto funcionario les confirmó los planes que tiene el actual gobierno en pro de los negocios y la minería”. Por su parte, el consejo de Goldcorp “espera que la resolución del juez federal permita suspender la acción [de devolución de tierras] y confían en que el dictamen final se dará con equidad jurídica” (Aguilar 2013). La mina siguió en operación hasta que finalmente, en marzo de 2015, los ejidatarios de Cerro Gordo terminaron renunciando a la querrela judicial y cediendo sus tierras a Goldcorp a cambio de una suma de dinero no divulgada. En este caso también se encuentra, subyacente y silencioso, el carácter amenazante del horizonte de coerción, que restringe la capacidad de estas comunidades para decidir en libertad sobre su vida. Asesores del ejido Cerro Gordo en su momento informaron a los medios de comunicación ser amenazados para que aceptaran una negociación extrajudicial que terminara el litigio (Valdez 2013).

En el contexto de la publicación de nuestro extenso relato del caso Peñasquito en la revista *Desacatos* (Garibay et al. 2014), dos asesores del ejido Cerro Gordo, a quienes yo no conocía personalmente, se comunicaron conmigo para ofrecerme información nueva. Ante mi oferta de confidencialidad en una futura publicación, uno de ellos me respondió en un segundo y último mensaje de correo electrónico: “La confidencialidad es muy importante por las represiones sufridas y las amenazas de muerte que están al día, este es un asunto que impacta muy fuerte a esa compañía. Gracias por la sensibilidad”. El segundo asesor me declaró en su primer mensaje de correo electrónico sus temores en los siguientes términos: “Estoy recibiendo llamadas de distintos números de teléfono; me da un poco de pendiente...”. Después de mi respuesta donde les pedía que me enviaran el expediente del caso, no hubo más

comunicación. Por supuesto, aunque estas comunicaciones son pruebas endebles para acusar a Goldcorp de amenazas, son indicativas de una atmósfera de temor de los opositores, si se observa el escenario en su conjunto. Finalmente, Goldcorp logró restablecer el horizonte de coerción, pues controla el territorio y sus recursos de manera exitosa y barata. Después de la segunda negociación —y hasta finales de 2013—, la suma total que Goldcorp ha pagado a las cuatro comunidades es de aproximadamente 96 millones de dólares a través de convenios de ocupación temporal de tierras.

Entre la reubicación de poblados, las indemnizaciones y la infraestructura para los poblados, la cifra final bien podría elevarse con veracidad a 106 millones de dólares pagados efectivamente a las comunidades. La *reciprocidad negativa* se ilustra en el contraste: por cada mil dólares de ventas de metal en el mercado global, solo menos de 1.30 dólares se destinan al pago por el territorio; o bien, por cada mil dólares de ganancia de los accionistas en la Bolsa de Valores de Toronto, las comunidades reciben por sus tierras la cantidad de 1.60 dólares. Es probable que el mantenimiento del control social local y los gastos de negociación con actores clave les requiera multiplicar por dos o tres veces esa cantidad. De cualquier forma, ello no es significativo para el tamaño de este negocio. A cambio, y después de la efímera presencia histórica de Goldcorp, el valle de Mazapil quedará radicalmente destruido y cancelada la habitabilidad del lugar.

Resistencias locales

La disputa por el territorio es un eje principal en los conflictos del mundo rural mexicano. Hoy, en el país, 25 millones de personas viven en áreas rurales distribuidas en 170 000 localidades menores a 2 500 habitantes (INEGI 2010). Es decir, 51 % del territorio nacional, equivalente a la superficie de España, está distribuido entre 31 789 unidades de *propiedad colectiva* con 3.5 millones de campesinos titulares (Apendini 2010; Sedatu 2012). Estas unidades se dividen en dos tipos: ejidos y comunidades agrarias. El primero tiene origen en la Reforma Agraria, que repartió la tierra de extensas haciendas después de

la llamada Revolución mexicana de 1910; el segundo, como resultado de la reorganización colonial posterior a la caída de los Estados prehispánicos y el control de las sociedades tribales de Aridoamérica.

Formalmente, ambos tipos de propiedad son gobernados por una asamblea compuesta por el total de los titulares de tierras y administradas por un grupo de representantes llamados comisariado ejidal o comisariado de bienes comunales. Otro 35 % del territorio nacional se distribuye entre 1.5 millones de propietarios privados con granjas de cincuenta hectáreas en promedio, en su mayoría agricultores o ganaderos mestizos de cultura ranchera. Al igual que los ejidatarios y comuneros indígenas, los propietarios privados típicamente representan su propiedad como un *patrimonio*, donde lo moralmente correcto no es venderla, sino heredarla a la siguiente generación. Esta actitud significa que la población rural tiende al arraigo y se resiste a deshacerse de sus tierras conforme a cálculos de beneficio monetario exclusivamente. Las corporaciones que buscan tierras pronto se encuentran con rechazos a sus ofertas y con el imperativo de forzar la voluntad de los propietarios para lograr su apropiación. Abundan los conflictos en las comunidades rurales, que se niegan a ceder sus posesiones a empresas mineras, hidroeléctricas, eólicas, turísticas o agroindustriales, o bien a ser compensadas por expropiación para la construcción de infraestructuras carreteras, aeroportuarias o industriales. En adición, muchos conflictos se desatan por negarse a ceder sus derechos de agua o por sufrir afectaciones ambientales (Delgado 2010; Blázquez 2011; Almanza 2013; Preciado 2013).

Este escenario de disputa se agudiza debido a la proliferación de centenas de pequeñas bandas delincuenciales que operan en cientos de comarcas del país, que a su vez se agregan en cárteles del crimen organizado con alcance regional y nacional. Estos se dedican a delitos combinados de tráfico de drogas, trata de personas, armas, secuestro, extorsión y cobro de “derecho de piso”. Estos cárteles dominan amplias regiones rurales y pueblos mediante el control informal de los Gobiernos municipales y ejercen influencia sobre Gobiernos estatales y sobre políticos, autoridades y funcionarios federales. Algunos estudios estiman que 80 % de los Gobiernos municipales del país están bajo influencia de algún cártel, y cabe mencionar que entre 2005 y 2012, 116 100 personas murieron en eventos vinculados al tráfico de drogas (México por la

Paz 2013); más aún, en el mundo rural, algunos estudios calculan cifras del orden de 280 000 personas obligadas a salir de sus pueblos de manera forzada entre los años 2011 y 2015 (CMPDH 2015).

Entre 1990 y 2014 hemos registrado un total de 82 conflictos territoriales entre corporaciones mineras y comunidades, de los cuales siete salieron a la luz pública entre 1990 y 2000; ocho, entre 2001 y 2007, y setenta, de 2008 a 2014, lo que implica un crecimiento notorio; sin embargo, el balance es malo para las comunidades, pues salvo en menos de una decena de casos, los conflictos han sido conjurados en favor de las corporaciones mineras mediante negociaciones similares a las relatadas en el caso Peñasquito, y finalmente han permitido el control minero sobre la población local. Solo algunos casos de resistencia se han sostenido; de ellos, el principal y más notorio es el litigio entre el pueblo huichol en defensa de su sitio sagrado Wirikuta. Otro relevante fue el caso de organizaciones civiles de habitantes de la ciudad de La Paz en defensa del abasto de agua de la ciudad, que en 2012, cuando la Secretaría del Ambiente desechara la solicitud de cambio de uso de suelo para el proyecto a cielo abierto Los Cardones, en Baja California Sur. En la sierra Sur de Oaxaca las asambleas de las comunidades de Zaniza y Tejomulco “advirtieron” a sus cabildos obedecer la prohibición a la minería. Lo mismo en el caso de Zautla, Puebla, donde la comunidad exigió al presidente municipal negar a la minera el permiso de uso del suelo. Casos similares se dieron en las comunidades oaxaqueñas de Teitipac, Silacayopilla y Calpulalpan, todas de ascendencia indígena con fuertes autogobiernos comunales. Un caso especialmente relevante es el de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en la llamada Montaña de Guerrero, que desde hace más de diez años —con un alto costo en vidas— ha logrado levantar una sólida resistencia contra cárteles del narcotráfico que dominan de manera ominosa el resto del estado de Guerrero, y desde esa base organizativa, también han frenado las ambiciones territoriales de las corporaciones del CMG en esa región rica en minerales. No obstante los pocos casos de triunfo, la resistencia rural crece y nacen coaliciones de comunidades en defensa de territorios no solo dentro de México, sino incluso más allá de las fronteras nacionales, como ocurre con comunidades mayas de Guatemala y el sur de México (Paz 2014; Walter 2014).

Conclusión

El CMG ha logrado constituirse en una poderosa red de intereses que actúa como sujeto político global. La GMI creó el dispositivo ideológico de la minería sustentable, que le ha permitido simular una filantrópica preocupación por el ambiente y el bienestar de las comunidades locales a la vez que oculta la violencia implicada en su control social, el despojo territorial y la destrucción de su paisaje. La GMI le enseñó que la desposesión puede realizarse de manera inteligente y en silencio, y que la investigación social puede usarse para conocer, clasificar, monitorear, manipular, despojar y dominar a grupos sociales locales con mayor astucia y menor violencia explícita. Con estas lecciones aprendidas, el CMG ha financiado un “campo académico” ubicado en prestigias universidades y empresas consultoras que elaboran, aplican, prueban y mejoran los protocolos de intervención.

El ICMM ha sido el núcleo operativo de su inteligencia estratégica. Del universo de saberes producido por su red académica, destila retóricas para influir en la esfera pública mundial y aplica herramientas de precisión para mejorar su control ascendiente en espacios nacionales y dominar espacios locales. En el nivel nacional y de carácter pragmático, los *mining task force* tejen redes de apoyo en círculos políticos, empresariales, mediáticos y académicos, pues su cortejo logra el acceso privilegiado a las esferas gubernamentales y civiles, necesarias para desactivar las resistencias a sus intereses, y su eficacia radica en la gestión simultánea de sus intereses en los ámbitos local, regional, nacional e internacional.

Por otra parte, la gerencia minera opera la desposesión de territorios e instauro el horizonte de coerción *in situ*. Su eficacia se debe tanto a la red de apoyo como a las cada vez más sofisticadas técnicas utilizadas para conocer y manipular la vida social; aunque también mediante la amenaza pura y dura cuando las técnicas de la “minería sustentable” no son suficientes para subordinar grupos resistentes en la sociedad local.

El caso de la mina Peñasquito muestra cómo el CMG ha perfeccionado su capacidad de manipular comunidades para lograr la desposesión de territorios y recursos de las sociedades locales e instaurar pragmáticos horizontes

de coerción. Estos son de tal modo exitosos, que la reciprocidad negativa es silenciada por una representación de la relación entre comunidad y corporación donde los intercambios son representados como positivos, entre sujetos libres, con vínculos contractuales e interpersonales por consenso, con derechos civiles y políticos vigentes.

En México existen 1 122 iniciativas mineras. Podemos aventurar la tesis —a probar etnográficamente— de que en paralelo al desarrollo de cada una de ellas se han instaurado, o están por instaurarse, los correspondientes horizontes de coerción gobernados indirectamente desde las gerencias corporativas. Podemos también aventurar para México la tesis de Ferguson (2005), que ilustra con casos de algunos países africanos. Él señala una evolución de la industria extractiva en el sentido de una actualización del sistema colonial liberal de enclave del siglo XIX hacia nuestro neoliberalismo global del siglo XXI. En este proceso, las compañías extractivas aterrizan en puntos ricos de recursos, amurallan sus instalaciones y extraen los recursos en dirección a la casa matriz metropolitana, sin vinculación ni distribución de ganancias y beneficios con la sociedad local y la red nacional. Para tal efecto, la práctica corporativa asume *de facto* funciones de gobierno mínimo, con fuerzas armadas particulares, a la par que debilita políticamente las exigencias de la sociedad local y la capacidad del Estado huésped para imponer regulaciones.

Lo que es un hecho en México —al igual que en algunos países africanos con radicales escenarios de violencia y catástrofes humanitarias— es que las corporaciones mineras operan —sin problemas mayores— en territorios controlados por el crimen organizado; incluso en áreas donde las fuerzas militares y policíacas del Estado mexicano temen entrar. Para efectos de desposesión territorial y ganancias adicionales por afectaciones sociales y ambientales no pagadas, los escenarios locales y regionales de violencia vigentes en México resultan ventajosos para estas corporaciones: inhiben a las poblaciones locales para hacer valer su derecho al territorio y a vivir su modo de vida en libertad.

Referencias bibliográficas

- Almanza, H. 2013. "Lands Dispossession and Juridical Land Disputes of Indigenous Peoples in Northern Mexico: A Structural Domination Approach". Tesis de doctorado. Universidad de East Anglia.
- APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). 2016. "Mining Task Force". <http://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Technical-Cooperation/Task-Groups/Mining-Task-Force.aspx>.
- Appendini, K. 2010. "La regularización de la tierra después de 1992: la apropiación campesina del Procede". En *Los grandes problemas de México. XI Economía Rural*, coordinado por A. Yáñez. México: El Colegio de México.
- Beedie School of Business. 2016. "Responsible Mineral Sector Initiative". *Simon Fraser University*. <http://beedie.sfu.ca/rmsi/>.
- Bourdieu, P. 1984. *Questions de sociologie*. París: Les Editions de Minuit.
- Bridge, G. 2004. "Mapping the Bonanza: Geographies of Mining Investment in an Era of Neoliberal Reform". *The Professional Geographer* 56 (3): 406-421.
- . 2009. "Material Worlds: Natural Resources, Resource Geography and the Material Economy". *Geography Compass* 3 (3): 1217-1244.
- Bridge, G. y P. McManus. 2000. "Sticks and Stones: Environmental Narratives and Discursive Regulation in the Forestry and Mining Sectors". *Antipode* 32: 10-47.
- Blázquez, M., E. Cañada e I. Murray. 2011. "Búnker playa-sol. Conflictos derivados de la construcción de enclaves de capital transnacional turístico español en el Caribe y Centroamérica". *Scripta Nova* xv (368). <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-368.htm>.
- Camimex (Cámara Minera de México). 2013. "Informe anual 2013. Reseña de actividades 2013". <https://camimex.org.mx/index.php/secciones1/publicaciones/informe-anual/informe-anual-2013/>.
- CBSR (Canadian Business for Social Responsibility). 2014. "Our Staff". <https://www.cbsr.ca/our-team>.
- CMDPDH (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos). 2015. "En México 281 mil 418 personas son víctimas del

- desplazamiento interno forzado por la violencia”. <http://cmdpdh.org/2015/02/en-mexico-281-mil-418-personas-son-victimas-del-desplazamiento-interno-forzado-por-la-violencia/>.
- Cruz Santiago, C., C. A. Cruz Santiago, S. Fumarulo, P. Ruggiero, G. Poscetti y T. Dell’Olio. 2014. *México, la guerra invisible. Historia, cifras y negocios de los cárteles criminales y la impunidad de las mafias mexicanas*. México: Cauce Ciudadano. http://cauceciudadano.org.mx/wp-content/uploads/2013/11/Dossier_LIBERA_Mexico_La-Guerra_Invisible.pdf.
- Delgado, G. 2010. *Ecología política de la minería en América Latina*. México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM.
- Delos, J. 2014. “Institutional Shareholders, Transnational Corporations and the New Geographies of Gold Mining” (borrador).
- EJOLT (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade). 2014. “Mines and Communities”. <http://www.minesandcommunities.org>.
- Ferguson, J. 2005. “Seeing Like an Oil Company: Space, Security, and Global Capital in Neoliberal Africa”. *American Anthropologist* 107 (3): 377-382.
- Frederiksen, T. 2013. “Seeing the Copperbelt: Science, Mining and Colonial Pose in Northern Rhodesia”. *Geoforum*, núm. 44, 271-281.
- Garibay, C. 2016. “Notas de trabajos. Base de datos Paisajes Sociales Mineros”. México: Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental-UNAM.
- Garibay, C., A. Boni, F. Panico y P. Urquijo. 2014. “Corporación minera, colusión gubernamental y desposesión campesina. El caso de Goldcorp, Inc.”. *Desacatos*, núm. 44, 113-142.
- Guajardo, I. 2014. “Conferencia de Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía”. Videocápsula. *Revista Mundo Minero*. <http://www.mundo-minero.mx/audiovisual.php?pn=4>.
- Harvey, D. 2004. “The ‘New’ Imperialism: Accumulation by Dispossession”. En *Socialist Register 2004: The New Imperial Challenge*, editado por L. Panitch y C. Leys. México: Clacso.
- Halboom, B. 2012. “The Intersection of Corporate Social Responsibility Guidelines and Indigenous Rights: Examining Neoliberal Governance of a Proposed Mining Project in Suriname”. *Geoforum* 43 (5): 969-979.

- ICMM (International Council of Mining and Metals). 2008. “Kathryn McPhail Wins Global Essay Award”. <https://www.icmm.com/resource-endowment>.
- _____. 2011. “Mining: Partnerships for Development. Toolkit”. Londres: ICMM. <http://www.icmm.com/publications>.
- _____. 2012. *Community Development Toolkit*. Londres: ICMM. <http://www.icmm.com/community-development-toolkit>.
- _____. 2013. *Changing the Game, Communications and Sustainability in the Mining Industry*. Londres: ICMM. <http://www.icmm.com/publications>.
- _____. 2015a. *Land Acquisition and Resettlement: Lessons Learned*. Londres: ICMM. <http://www.icmm.com/publications>.
- _____. 2015b. *Indigenous Peoples and Mining Good Practice Guide*. Londres: ICMM. <http://www.icmm.com/publications>.
- _____. 2015c. *Stakeholder Research Toolkit*. Londres: ICMM. <http://www.icmm.com/publications>.
- _____. 2016a. “Our Members”. <http://www.icmm.com/members>.
- _____. 2016b. “Polyus Gold Becomes First Russian Member of ICMM”. <http://www.icmm.com/news-and-events/news/polyus-gold-becomes-first-russian-member-of-icmm>.
- _____. 2016c. “ICMM Hosts Panel at China Mining Congress”. <http://www.icmm.com/page/83436/news-and-events/news/articles/icmm-hosts-panel-at-china-mining-congress>.
- _____. 2016d. “10 Principles”. <http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/10-principles>.
- _____. 2016e. “Member Performance”. <http://www.icmm.com/members/member-performance>.
- _____. 2016f. “Position Statements”. <http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/position-statements>.
- _____. 2016g. “ICMM Responds to First Peoples Worldwide Critique of Indigenous Peoples and Mining Position Statement”. <http://www.icmm.com/page/96314/publications/documents/icmm-responds-to>

- first-peoples-worldwide-critique-of-indigenous-peoples-and-mining-position-statement.
- IGF (Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development). 2013. "Strategic Directions Task Force". IGF Annual Meeting, Geneva. <https://www.igfmining.org/mining-policy-framework/framework/>.
- IIED (International Institute for Environment and Development). 2002. "Abriendo brechas, minería, metales y desarrollo sustentable". Londres: IIED. <http://pubs.iied.org/9287IIED.html>.
- _____. 2014. "About Us". <http://www.iied.org/about-us>.
- INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 2011. *Censo de población y vivienda 2010*. México: INEGI. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/cpv2010/tabulados_localidades.aspx.
- Jackson, T. 2009. "Prosperity without Growth, Economics for a Finite Planet". Sterling: Earthscan.
- Lerner, S. 2010. *Sacrifice Zones: The Front Lines of Toxic Chemical Exposure in the United States*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Lomnitz, C. 2005. "Sobre la reciprocidad negativa". *Revista de Antropología Social* 14: 311-339.
- McEwen, R. 2015. "Mina de oro asaltada en Sinaloa opera con permiso del narco, revela director de la empresa". Video de Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=7LBGwXvh90U>.
- McPhail, K. 2008. "Sustainable Development in the Mining and Minerals Sector: The Case for Partnership at Local, National and Global Level". Londres: ICMM <https://www.icmm.com/document/269>.
- Martinez-Alier, J., I. Anguelovski, P. Bond, D. del Bene, F. Demaria, J. F. Gerber, L. Greyl, W. Haas, H. Healy, V. Marín-Burgos, G. Ojo, M. Porto, L. Rijnhout, B. Rodríguez-Labajos, J. Spangenberg, L. Temper, R. Warlenius, I. Yánez. 2014. "Between Activism and Science: Grassroots Concepts for Sustainability Coined by Environmental Justice Organizations". *Journal of Political Ecology* 21: 19-60.
- Mexico Mining Review 2013*. 2013. México: Mexico Business Publishing. https://issuu.com/mexicobusinesspublishing/docs/mmr_2013_magzter.

- MMC (Mexican Mining Center). 2014. "Mexican Mining Center". <http://www.mexicominingcenter.com/web/index.php>.
- Mudd, G. M. 2007. "Global Trends and Gold Mining: Toward Quantifying Environmental and Resource Sustainability". *Resources Policy* 32: 42-56.
- Muradian, R., M. Walter y J. Martinez-Alier. 2012. "Hegemonic Transitions and Global Shifts in Social Metabolism: Implications for Resource-rich Countries". *Global Environmental Change* 22 (3): 559-567.
- Newmont Goldcorp. 2016. "Sews a Stitch in Time with Confecciones Dely". Video de YouTube, 3:26. 19 de abril de 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=Y3zwrQC8cvc>.
- Newmont Goldcorp. 2015a. "Proyecto productivo Transportes Cemaza/ Cemaza Transport Project". Video de YouTube, 3:18. 10 de marzo de 2015. <https://www.youtube.com/watch?v=9kIWln5jTcc>.
- _____. 2015b. "Empoderando comunidades/Peñasquito Empowering Communities". Video de YouTube, 2:18. 2 de septiembre de 2015. <https://www.youtube.com/watch?v=G-q9L9SRjP8>.
- _____. 2015c. "Suficientemente seguros para nuestras familias/Safe Enough for Our Families". Video de Youtube, 2:47. 10 de abril de 2015. <https://www.youtube.com/watch?v=5dP9GX7mr6L>.
- _____. 2014a. "Peñasquito and UNAM Foundation Dental Brigades". Video de YouTube, 4:06. 22 de julio de 2014. <https://www.youtube.com/watch?v=-s0RhR2fZ80>.
- _____. 2014b. "Comparte El Camino de la Navidad". Video de YouTube, 2:58. 22 de diciembre de 2014. https://www.youtube.com/watch?v=5r4W_XnWVc0.
- OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 2015. "Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-affected and High-risk Areas". <http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm>.
- OCMAL (Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina). 2014. "Base de datos de conflictos mineros en América Latina". <http://www.conflictosmineros.net>.

- Paz, M. 2014. "Paisajes mineros, geografías de resistencia. Territorialidades en disputa en Guatemala y Chiapas, México". *Journal of the Latin American Researchers of Ontario* 2 (2): 15-23. <http://www.latinamericanencounters.com/volume-2.html>.
- PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada's International Convention). 2014. "Mexico Mining Seminar 2014". <http://www.pdac.ca/convention/programming/affiliated-events/sessions/affiliated-events/mexico-mining-seminar-2014>.
- Preciado, N. 2013. "Water Dispossession at the *Llano en Llamas*: A Research Study by a Daughter of Mexican Farmworkers in the Land of Her Consciousness". Tesis de maestría. Universidad de Texas en Austin.
- Quastel, N. 2011. "This is a Montreal Issue: Negotiating Responsibility in Global Production and Investment Networks". *Geoforum* 42 (4): 451-461.
- REMA (Red Mexicana de Afectados por la Minería). 2016. "Red Mexicana de Afectados por la Minería". <http://www.remamx.org>.
- Reyes, C. 2015. "Reconoce también AIMMGM que minas negocian con crimen organizado". Ponencia presentada en el Segundo Congreso Internacional Minero y de Energía, 10-12 de junio. <http://www.congresoime.com.mx/noticias/reconoce-tambien-aimm-gm-minas-negocian-con-crimen-organizado/>.
- Rincón, S. 2015. "Secretaría de Economía apoya, hasta con guía, el 'despojo' en zonas mineras: ONG". *SinEmbargo*, 27 de abril de 2015. <http://www.sinembargo.mx/27-04-2015/1319262>.
- Sahlins, M. 1977. *Economía de la Edad de Piedra*. Madrid: Akal.
- Sanmartín, J. 2008. "¿Hay violencia justa? Reflexiones sobre la violencia y la justicia basada en derechos humanos". *Daimon: Revista de Filosofía* 43: 7-14.
- Sariego, J. 2010. "De minas, mineros, territorios y protestas sociales en México: los nuevos retos de la globalización". *Cahiers des Amériques Latines* 61: 173-192. <http://cal.revues.org/1435>.
- Secretaría de Economía. 2015. *Guía de ocupación superficial. Alianzas estratégicas para la promoción y el desarrollo de la competitividad del sector minero mexicano*. México: Secretaría de Economía. <http://www.economia.gob>

- .mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/minero/guia_de_ocupacion_superficial_0414.pdf.
- Secretaría de Economía. 2014. “Reporte de coyuntura 2014”. http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/minero/reporte_coyuntura_mineria_nacional_0514.pdf.
- Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano). 2012. “Boletín 2012”. <http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/noticias/noticias-2012/abril-2012/12166/>.
- Sethi, S. P. 2005. “The Effectiveness of Industry-Based Codes in Serving Public Interest: The Case of the International Council on Mining and Metals”. *Transnational Corporations* 14 (3): 55-100.
- Simon Fraser University. 2012. “GEMM 20/20: Global Exploration, Mining and Minerals in 2020: Responsibility and Sustainability Challenges and Opportunities”. http://gemm.ca/wp-content/uploads/2015/07/GEMM2020_FinalReport.pdf.
- Thompson I. y R. Boutilier. 2011. “Modelo y medidas de la licencia social para operar: fruto del diálogo entre la teoría y la práctica”. http://sociallicense.com/publications/Boutilier_y_Thomson_2011_Brisbane_exposici%F3n.pdf.
- Tetreault, D. 2013. “Los mecanismos del imperialismo canadiense en el sector minero de América Latina”. *Estudios Críticos del Desarrollo* 3 (4): 191-215.
- Urquidí, L. y M. Walter. 2011. “Dimensions of Environmental Justice in Anti-Gold Mining Movements in Latin America”. *Geoforum* 42 (6): 683-695.
- Valdez, R. 2013. “Ejidatarios de Mazapil denuncian amenazas”. *La Jornada*, 22 de abril de 2013. <http://www.jornada.unam.mx/2013/04/22/estados/034n1est>.
- Valero, D., A. Valero y C. Torres. 2008. “Exergy and the Hubbert Peak. An Extended Analysis for the Assessment of the Scarcity of Minerals on Earth”. *Proceedings of IMECE 2008*. Boston: IMECE. doi: 10.1115/IMECE2008-69283.
- Walter, M. 2014. “Community Consultations: Local Responses to Large-scale Mining in Latin America” (borrador).

- WEF (World Economic Forum). 2013. "Responsible Mineral Development Initiative 2013". <http://www.weforum.org/reports/responsible-mineral-development-initiative-2013>.
- Wilson, R. 1999. "The Mining Industry: In Recuperation or Remission?". Extracto del discurso de sir Robert Wilson en el Securities Institute of Australia. <http://oldwww.wbcsd.org/DocRoot/pmYKIS0p1dw7AdCg8UIX/MNRecuperation.pdf>.
- . 2011. "Interview with Rosalind Wilson, Former President of the Canadian Chamber of Commerce in Mexico". *Engineering and Mining Journal*. <http://www.docstoc.com/docs/130682564/Mexican-Mining-Global-Business-Reports>.
- . 2015. "Delincuencia, el enemigo número uno de la inversión minera". *Forbes*, 14 de mayo de 2015. <http://www.forbes.com.mx/delincuencia-el-enemigo-numero-uno-de-la-inversion-minera/>.

El *boom* del bioetanol y (re)concentración de la tierra en la costa norte peruana: luchas agrarias en un contexto neoliberal*

Laura Tejada

Stephan Rist

Universidad de Berna

Introducción

Numerosos estudios de investigación y una gran atención mediática hacia el fenómeno del acaparamiento de grandes superficies de tierras han, por un lado, demostrado un renovado interés en invertir en los recursos naturales del continente y, por otro, generado un intenso debate sobre la (re)concentración de la tenencia de la tierra y otros recursos naturales, como el agua y los bosques, y su significado para el desarrollo de las zonas rurales en América Latina (Wiener Bravo 2011; Ioris 2012; Cuba et al. 2014). La mayoría de los estudios académicos señalan el acaparamiento de tierras como una nueva ola de “acumulación por expropiación” (Harvey 2003) o como un proceso de “cercamiento de tierras comunales” (White et al. 2012), ambas expresiones de la “crisis general del capitalismo neoliberal” (Borras et al. 2012; McMichael 2012). Este capítulo tiene como objetivo ampliar las discusiones teóricas sobre el acaparamiento de tierras, conectando la teoría de la gran transformación

* Los autores reconocen el apoyo del Swiss Network of International Studies (SNIS) a través del proyecto de investigación “The Effects of Large-Scale Land Acquisitions (LSLA) on Households in Rural Communities of the Global South: Gender Relations, Decision Making and Food Security”.

de Karl Polanyi (1944) con la perspectiva feminista del “movimiento triple” de Nancy Fraser (2013).

Desde el transcurso de 1990 y hasta el día de hoy, Perú ha vivido una fuerte transformación neoliberal que ha reducido la presencia del Estado para ampliar las “fuerzas del mercado” en la economía. El próspero y creciente sector agroindustrial configuró una poderosa alianza con el Estado, articulada alrededor de políticas neoliberales que defienden los intereses de la agroindustria (Famerée 2016). Bajo estas condiciones, se ha incrementado la presión sobre los recursos humanos y naturales del área rural, lo que debilita a las instituciones agrarias¹ del pequeño agricultor y favorece un fuerte repunte en la expansión de la agroindustria. Muchos estudios han investigado el impacto de las políticas neoliberales en los campesinos peruanos a nivel nacional (Eguren 2004, 2015; Burneo 2011; Del Castillo Pinto y Castillo Castañeda 2014), pero son escasos los investigadores que se han dedicado a analizar las consecuencias de la expansión del modelo “inversionista” en poblaciones aledañas a las grandes empresas agroindustriales.

Este trabajo se suma a esta última rama de investigación y examina el cambio agrario a partir de un estudio de caso en el valle del Chira, situado en la costa norte peruana. Demostramos que la idea del *doble movimiento* sugerida por Polanyi permite acercarse a un mejor entendimiento teórico de lo visto en campo, pero al profundizar en las reacciones locales al doble movimiento, observamos que dicha teoría es insuficiente para explicar el actuar de la población afectada por los acaparamientos de tierras. Los campesinos locales prefieren organizarse en asociaciones o cooperativas que les permitan un alto nivel de autodeterminación del trabajo agrario, basado en valores de solidaridad y cooperación, antes que optar por esquemas de competencia individual. Ellos vinculan este movimiento de emancipación con su participación estratégica en los mercados globales de productos orgánicos y comercio justo, y con su rechazo a incorporarse a los mercados agroindustriales promovidos por la alianza entre el Estado y el empresariado nacional, que les arrebató sus tierras,

¹ Los autores se refieren a instituciones que regulan el comercio y las importaciones en el sector agrario, así como al Banco Agrario.

aguas y demerita su soberanía. Lo anterior sugiere que los campesinos persiguen una agenda emancipadora propia y que, en lugar de confiar en el Estado como protector y promotor de sus derechos sociales y económicos, pues cada vez se ocupa menos de ellos, buscan crear nuevas formas más autónomas de organización económica y social. Es decir, la idea de que el doble movimiento (Polanyi 1944) produce un repunte de la mercantilización de la tierra (como parte de la naturaleza), del trabajo humano (como parte de la creatividad humana) y del dinero² (como mediador de relaciones socioeconómicas), y de que genera el contraflujo de la protección social de los marginados por parte del Estado, no aplica para el caso analizado.

No obstante, el caso se relaciona muy bien con una ampliación de la teoría de Polanyi propuesta por Fraser (2013), quien hace énfasis en un *triple movimiento* para complementar la idea de Polanyi. Fraser habla de una tercera dimensión concerniente a la emancipación, lo que implica repensar la relación del campesinado frente al Estado y al mercado. Mostramos entonces que las luchas contra la concentración de tierras en el Perú pueden entenderse mejor como resultado de un *movimiento triple* (Fraser 2013), que busca instrumentalizar estratégicamente el potencial del mercado internacional a través de la formación de empresas solidarias y autogestionadas. Estas operaciones permiten a los campesinos —por lo menos de forma parcial y temporal— asumir deberes incumplidos por el Estado.

Realizamos nuestro trabajo en el valle de Chira, ubicado en la costa norte peruana, en el departamento de Piura. El valle del Chira ha vivido una reorientación hacia la agricultura de exportación en los últimos años con la llegada de grandes empresas bioetanoleras y la difusión de cultivos como banano orgánico, maracuyá y mango, que intentan incorporar a los campesinos a las cadenas glo-

² Un aporte central de Polanyi es que demuestra que el dinero —antes de su mercantilización— fue un medio de intercambio que hoy en día se ha convertido —mediante los procesos de financialización de la tierra y del trabajo— en una mercancía al igual que el trabajo, la tierra o los productos que salen de las parcelas. Se utiliza el dinero no solamente como medio de intercambio, sino que se ha convertido en un objeto central del proceso económico generado por los inversionistas.

bales de valor y transforman las formas de vida locales. Los datos cuantitativos sobre la concentración de la tierra provienen de la base de datos “Land Matrix” y de los censos agropecuarios peruanos de 1994 y 2012. Esta información se complementa con métodos de investigación cualitativos, como: *a)* talleres y entrevistas semiestructuradas con la población afectada; *b)* entrevistas con autoridades locales, y *c)* entrevistas con expertos de organizaciones no gubernamentales (ONG) locales, investigadores y funcionarios estatales. La población afectada fue seleccionada para las entrevistas por un muestreo tipo bola de nieve, asegurándonos de que las diferentes características sociodemográficas de la población estuvieran representadas.³ Se realizaron entrevistas con agricultores bajo contrato con las bioetanoleras, con bananeros, con trabajadores de ambas empresas, con personas que han perdido acceso a tierras y con otros beneficiarios de las empresas agroindustriales (para garantizar el anonimato de estas dos personas no podemos mencionar su profesión). El criterio para la selección de los entrevistados consistió en que fueran personas directamente afectadas por las empresas etanoleras (por contratos con la empresa, por empleo, por perder acceso a tierras, por beneficiarse de una u otra forma) e incorporamos también en la categoría de bananeros a personas que han tratado, por iniciativa propia, de encontrar alguna alternativa al sector agroindustrial. El trabajo de campo fue realizado entre marzo y julio de 2014 (caso Caña Brava), y febrero y mayo de 2015 (caso Maple), con 89 entrevistas en total. Para proteger la identidad de los participantes, sus nombres no aparecen en esta publicación.

La primera sección presenta un panorama sobre el fenómeno de la concentración de la tierra en el Perú, sus causas y sus implicaciones a nivel local. Abordamos las reformas agrarias y económicas más importantes que el país ha vivido durante las últimas décadas, para luego ver cómo el auge de las empresas agroindustriales en la costa norte da lugar a un proceso de separación y mercantilización de los medios de producción (tierra, trabajo y dinero). En la segunda sección describimos las respuestas de la población local hacia las tendencias anteriores a partir la teoría del doble movimiento de Polanyi

³ Los autores se refieren a criterios sociales y económicos como el género, la edad y los ingresos.

(1944) y de la extensión del triple movimiento propuesta por Fraser (2013). Concluimos el capítulo con algunas reflexiones finales sobre la transición agraria en la costa norte peruana y acerca de las implicaciones teóricas de este trabajo para la investigación sobre el acaparamiento de tierras a nivel mundial.

Neoliberalismo y (re)concentración de la tierra: la costa norte en transición

Efecto de las reformas neoliberales y el auge del modelo “inversionista” en la agricultura costeña

En las décadas de 1960 y 1970, diferentes Gobiernos latinoamericanos implementaron iniciativas de reforma agraria presionados por movimientos políticos y comunitarios favorables al cambio. En las décadas siguientes, estos avances se han tratado de revertir mediante la creación de condiciones favorables para un desarrollo agrario basado principalmente en la propiedad privada de la tierra y el libre mercado, buscando transformar a las empresas privadas en agentes del desarrollo rural. Así, los Gobiernos iniciaron una ola de “contrarreformas agrarias” implementando medidas legislativas de “modernización” del agro, para impulsar la creación de un mercado de tierras privadas (Veltmeyer 2005).

En el Perú, lo anterior significó la abolición de la protección legal de territorios de comunidades campesinas,⁴ quienes poseen la mayor parte de las tierras para uso agropecuario en el país⁵ (Eguren 2004). Según el censo nacional

⁴ Según Diez (2006, 116), estas comunidades “suponen la existencia de: *a*) un territorio comunal —usufructuado familiar y comunalmente—; *b*) un grupo de familias que se consideran sus miembros/propietarios; *c*) un cuerpo de dirigentes, encargados de algunas funciones internas —de regulación social— y externas —de representación—; *d*) otras comunidades vecinas que interactúan entre sí, y *e*) un Estado que las reconozca y les otorgue legitimidad y que regule algunas normas y funciones”.

⁵ Mientras que en la sierra gran parte de las tierras comunales son pastos naturales con escaso valor económico, en la costa las comunidades campesinas mantienen grandes extensiones de tierras eriazas, que tienen un alto valor potencial una vez que acceden al agua (Eguren 2004).

agropecuario de 2012, el 42.2% de la superficie agropecuaria del país pertenece a comunidades campesinas (INEI 2013). Con el reglamento del decreto legislativo 653, Ley de Promoción de Inversiones del Sector Agrario, se introdujo la reversión de las tierras eriazas⁶ al Estado, lo que facilitó no solo el acceso del Estado, sino también del sector privado, a estas tierras comunales que los campesinos trabajan a partir de una estrategia de descanso y rotación de áreas de cultivo. Mientras que las constituciones de 1920, 1933 y 1979 protegían las tierras de comunidades campesinas de ser traspasadas, hipotecadas o prescritas, a partir del año 1993, con la nueva Constitución, las comunidades adquieren completa autonomía respecto a la venta o el alquiler de las tierras a terceros (Burneo 2011).

Las tierras de comunidades campesinas de la costa son especialmente interesantes para los inversionistas por su acceso permanente a fuentes hídricas —gracias a grandes proyectos de irrigación realizados en las últimas décadas con fondos públicos—, lo que ha aumentado su valor económico. El Estado peruano también ha aprobado nuevas reglamentaciones para facilitar el mercado de tierras en las comunidades campesinas costeñas. En 1997 fue introducida la Ley de Titulación de las Comunidades Campesinas de la Costa, la cual establece que para las comunidades costeñas es suficiente, para aprobar una adjudicación individual de tierras, la realización de un proceso de consulta previa con solo la mitad de los miembros de una comunidad (Eguren 2004). Además, bajo el gobierno de Fujimori se suspendió la prohibición de la conducción indirecta, el arrendamiento, la venta libre y la hipoteca de tierras, en vigor desde la reforma agraria de 1969. Asimismo, se eliminó el

⁶ La legislación peruana (artículo 24 del decreto legislativo 653) considera las tierras como “eriazas” cuando no pueden ser cultivadas por exceso o escasez de agua, con excepción de lomas y praderas con pastos naturales dedicados a la ganadería, tierras de protección y tierras que forman parte del patrimonio arqueológico de la nación. Muchas veces se necesitan inversiones en la infraestructura hídrica para transformar estas áreas en tierras cultivables. Como las comunidades campesinas —que en la costa muchas veces son las dueñas de estas “tierras eriazas”— no tienen los recursos para realizar estas inversiones, el Estado persigue la estrategia de vender estas tierras a inversionistas privados para que sean aprovechadas.

límite al tamaño de la propiedad de la tierra, y con ello se abrieron las puertas a la concentración de tierras en las manos de grandes inversionistas (Burneo 2011). En 1996, el Gobierno aprobó una ley de formalización de la propiedad y estableció la agencia Comisión de Formalización de la Propiedad Rural (Cofopri), que impulsó la titulación de la propiedad urbana y luego también la de la propiedad rural, con el apoyo del Banco Mundial. El Gobierno y el Banco Mundial estaban convencidos de que ese programa no solo iba a contribuir a la formalización de la propiedad, sino que también ofrecería una solución simple y económica para erradicar la pobreza rural, ya que los títulos de propiedad privada permitirían a los campesinos utilizar sus tierras como garantías para los créditos (Mitchell 2005).

En el Perú, los intentos de crear un mercado de tierras durante la década de 1990 estuvieron acompañados por una oleada de políticas públicas orientadas a liberalizar la economía agraria.⁷ No obstante, a principios del decenio, la eliminación de subvenciones para productores locales, la comercialización de créditos, la reducción de tarifas protegidas y una moneda sobrevaluada provocaron que las medidas implementadas, en lugar de resolver la crisis del sector agrario, crearan un ambiente muy difícil para los productores agrarios, sobre todo para los pequeños.

El aumento de importaciones agrícolas baratas no solo contribuyó a una creciente diferenciación de clases entre productores rurales, sino que también aceleró un cambio fundamental en las modalidades de producción y en el consumo de alimentos. Se abandonó la producción de cultivos tradicionales y el consumo de arroz y pasta creció. El gobierno de Fujimori también eliminó las diferentes instituciones que regulaban el comercio y las importaciones en el sector agrario. Desapareció, por ejemplo, la Empresa Nacional Comercializadora de Arroz (Ecasa) que mantenía la estabilidad de precios a favor de los productores locales.

Estos cambios institucionales tuvieron un efecto especialmente significativo para los productores de la costa, quienes estaban más integrados a los mercados competitivos urbanos. El Gobierno cerró también el Banco Agrario,

⁷ Jiménez (2017) data el comienzo de las reformas neoliberales en los años 1991-1992.

una fuente importante de créditos subsidiados para los productores agrícolas. La esperanza era que los prestamistas comerciales o las cajas rurales otorgaran los créditos necesarios, pero tanto los primeros como los segundos mostraron escaso interés en préstamos agrarios, ya que percibían a los pequeños productores como un sector de alto riesgo y con garantías insuficientes. Los productores agrarios se vieron entonces obligados a dirigirse a intermediarios o empresas agroindustriales para obtener créditos (Crabtree 2003).

Otro aspecto importante en la política agraria peruana es el debilitamiento progresivo del *lobby* agrario en las últimas décadas. El gobierno de Fujimori encontró muy poca oposición organizada al proyecto de liberalización económica, debido al debilitamiento que sufrieron los sindicatos, asociaciones vecinales y organizaciones rurales en el transcurso del periodo de hiperinflación y recesión. Aunado a esto, políticas como la parcelación y fragmentación de la propiedad rural, la retirada del Estado de áreas como provisión de créditos, servicios de extensión y apoyo comercial, y la canalización de grandes sumas de dinero a programas de alivio a la pobreza, crearon relaciones paternalistas y clientelares a nivel local que sirvieron para prevenir la oposición a los proyectos gubernamentales y lograron debilitar aún más a la sociedad civil (Crabtree 2003).

Este periodo de intensa transformación agraria neoliberal estuvo acompañado por un renovado interés de inversionistas nacionales e internacionales en los recursos naturales del país. El mecanismo principal para la concentración de tierras en la zona estudiada fue la expansión de la frontera agrícola. El Estado adquirió grandes superficies de tierras eriazas para realizar proyectos de irrigación y luego venderlas a empresas agroindustriales. Los lugareños fueron expulsados de estas y otras tierras que usaban para diferentes fines (ver capítulo 2). Los principales beneficiarios de los proyectos masivos de irrigación fueron grandes inversionistas, pues, dado que los terrenos fueron vendidos en grandes lotes, fue muy difícil para los medianos y pequeños agricultores adquirir esas tierras (Eguren 2015).

En agosto de 2003 fue aprobada la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles, que introdujo el uso obligatorio de una mezcla de diésel y de gasolina con biodiésel y etanol. Desde entonces, el diésel comercializado

tiene que contener 5 % de biodiésel y la gasolina 7.8 % de etanol (Cepes 2012). Con esta legislación se creó una demanda nacional de biocombustibles y se sentaron las bases para la concentración de tierras en manos de grandes inversionistas bioetanoleros en la costa norte peruana. Poco después de la promulgación de la ley, el Gobierno regional de Piura solicitó la reserva de tierras eriazas en el valle del Chira para desarrollar un proyecto de producción de bioetanol (Urteaga 2013).

Es importante subrayar que el sector del bioetanol recibió un fuerte apoyo estatal con la promulgación de la Ley de Promoción del Sector Agrario en el 2000, que reduce la protección de los derechos laborales relacionados con la jornada laboral, la remuneración, el descanso vacacional, las gratificaciones, la compensación por tiempo de servicio, la protección contra el despido arbitrario y el seguro de salud (Campos Torres 2014). Con la implementación de estas medidas, las condiciones laborales en el sector agrario se han vuelto mucho más inestables, lo que ha conducido a una llamada “flexibilización” de la relación empleador-trabajador. Además, la contribución del empleador al seguro social y de salud de sus empleados se redujo (Eguren 2015).

El fuerte apoyo que los gobiernos peruanos de las últimas décadas han dado a los inversionistas agrarios representa un giro en la política agraria de los años sesenta y setenta. Mientras que el pequeño agricultor era dejado atrás, la empresa privada se designaba como actor principal del desarrollo agrario y era apoyada con la creación de un mercado de tierras, la liberalización de la economía agraria, grandes proyectos de irrigación, la creación de un mercado nacional para biocombustibles y un régimen laboral especial para el sector agrario. La debilitación de las instituciones y del *lobby* agrario no solo explica el poco provecho que los campesinos han podido obtener de programas como la titulación rural, sino que muestra la poca oposición organizada que los gobiernos neoliberales de las últimas décadas han enfrentado.

La presencia creciente de grandes inversionistas en el sector agrario y bioetanolero en Perú ha puesto en marcha un proceso de concentración de la tierra más marcado a lo largo de la costa peruana. Una comparación del censo agrario de 1994 con el de 2012 muestra que el número de grandes unidades de producción agrícola (2 500 ha o más) ha aumentado aceleradamente (630%),

y ha logrado beneficiarse de la expansión de la frontera agrícola y de los proyectos de irrigación. De hecho, en las tierras costeñas actualmente se observa una mayor concentración de la tenencia de la tierra que antes de la reforma agraria de 1969. Bourliaud y Eresue (2015) comparan los datos de los censos agrarios de 1994 y 2012 para los cinco principales distritos del valle de Chira (El Arenal, Colán, La Huaca, Ignacio Escudero y Miguel Checa) y muestran que la superficie de grandes latifundios (>100 ha) se ha incrementado de 26 a 71 %, mientras que las pequeñas parcelas (0-3 ha), aunque también han incrementado su superficie (en términos absolutos), la proporción relativa ha disminuido de 20 a 11 por ciento.

Pocos estudios se han dedicado a explorar los impactos locales de la concentración de la tierra para comunidades rurales en el contexto peruano (Marshall 2008; Burneo 2011, 2013). Nuestro trabajo se suma a esta línea de investigación argumentando que las políticas neoliberales, a través de mecanismos de cercamiento, despojo y agricultura contractual, han generado una situación en la cual se incita a los campesinos a considerar al acceso a la tierra y al agua, a la labor agrícola y al dinero como mercancías. A consecuencia de ello, los campesinos se convierten cada vez más en peones, agricultores contractuales o en trabajadores precarios que dependen de empresas agroindustriales y pierden el control sobre la tierra, el agua, los bienes comunes, su mano de obra y su dinero.

La concentración de la tierra:
¿una nueva frontera de mercantilización?

El acaparamiento de tierras no es un fenómeno nuevo, pero ha resurgido a nivel internacional ante la crisis financiera, alimentaria y energética de 2008. Inversionistas privados y estatales han comenzado a adquirir tierras a una escala sin precedentes, sobre todo en países pobres donde abunda la tierra. Según la base de datos “Land Matrix” (2012), a nivel global y hasta 2016, por lo menos 65.1 millones de hectáreas de tierra han sido vendidas o arrendadas a inversionistas provenientes de fuera de los países donde se realizaron estas

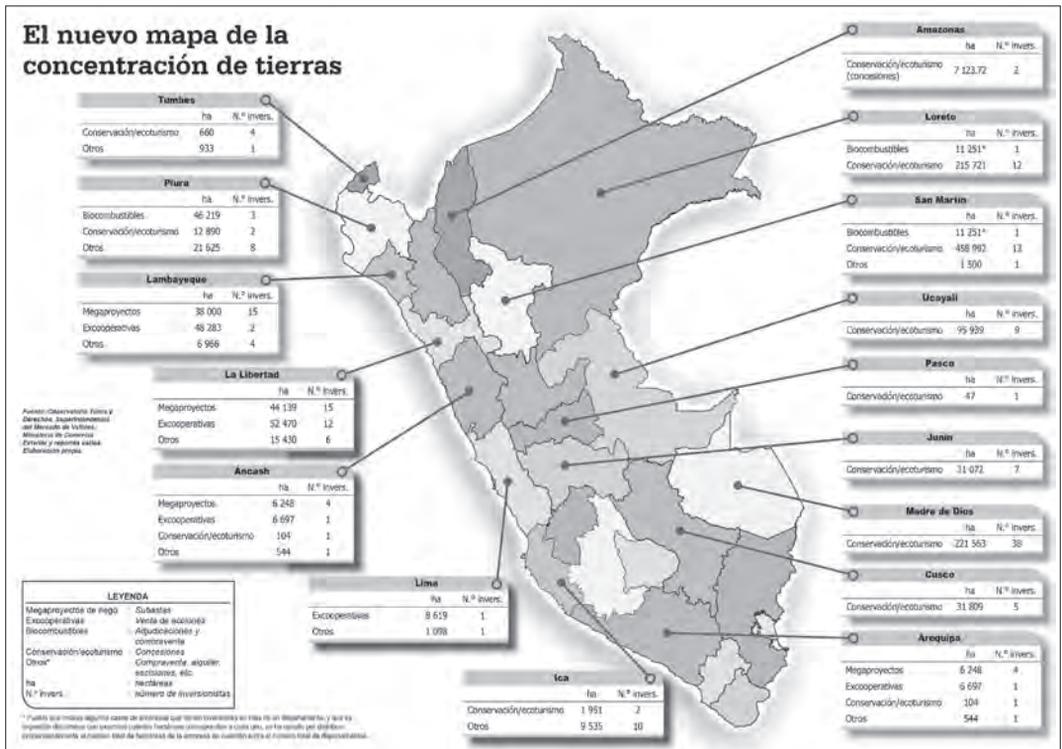
transacciones. Más de la mitad de estos negocios han sido confirmados por fuentes confiables.

El fenómeno global de adquisición de tierras se manifiesta en el Perú en forma de una creciente concentración de tierra en manos de grandes empresas agroindustriales. Entre ellas destacan los consorcios económicos domésticos, como Gloria, Romero, Oviedo y Dyner, pero también se observa un creciente número de empresas de capitales extranjeros como Grupo Manuelita, Danper, Maple y la Sociedad Agrícola Rapel, que controlan grandes extensiones de tierra en la costa. A lo largo de la franja costera existen por lo menos 22 inversionistas que poseen alrededor de 60 000 ha de tierra, especialmente en los departamentos de la costa norte, como Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica y Lima (Escobedo 2015; figura 1).

No existe una definición única del acaparamiento de tierras, al contrario, existen diversas formas de entender lo que se considera *acaparamiento de tierras*, y esto produce desacuerdos entre autores respecto a la relevancia de aspectos como inversión nacional frente a extranjera, extensión, propósito de la inversión, restricción geográfica, actores involucrados y proceso de adquisición de tierras (Hall 2013). En este trabajo entendemos el acaparamiento de tierras (ADT) como un fenómeno amplio, a partir de la definición de Holmes (2014, 550), quien lo entiende como la “transferencia del control sobre la propiedad y los recursos de grandes superficies de tierras del control local a externos más poderosos”. Esta definición permite incluir tanto a los inversionistas nacionales como a los extranjeros, no está dominada por la presencia de efectos nocivos y se centra en el control sobre la tierra y los recursos más que en la propiedad. Además, la definición reconoce que el ADT suele involucrar más que la privatización de recursos e incluye las condiciones creadas por desigualdades de poder (Holmes 2014). El acentuado proceso de concentración de la tenencia de tierra en el Perú es una consecuencia del creciente número de situaciones de ADT en el agro.

La mayor parte de la literatura sobre ADT ha analizado los factores que lo facilitan (Cotula et al. 2009; Zoomers 2010), así como el proceso de acaparamiento (German, Schonevald y Hwangi 2013), la gobernanza (Borras y Franco 2010) y los impactos del fenómeno (FAO 2012a). En relación con los

FIGURA 1
Concentración de la tierra en el Perú



Fuente: Escobedo (2015).

impactos, los estudios se enfocan en las consecuencias positivas y negativas del ADT revelando que, en muchos casos, estas inversiones suelen partir de una sobrestimación de los beneficios y una subestimación de los impactos que tienen en la población local. Sin embargo, pocos análisis se han interesado por investigar de manera más profunda las transformaciones de la relación entre ser humano y naturaleza como resultado de ese fenómeno. Un ejemplo es Cotula (2013), que sugiere entender los ADT como una nueva fase del proceso histórico de mercantilización que Polanyi (1944) ha descrito con relación a la Revolución Industrial en Europa. En su libro *The Great Transformation*, Polanyi analiza cómo la introducción del mercado capitalista en el apogeo del feudalismo Europeo (en Gran Bretaña) fomentó un proceso de transformación

de las sociedades agrarias, en las que tanto la tierra (como expresión clave de la naturaleza) como el trabajo (como expresión clave del saber y de la creatividad humana) y el dinero (como medio de intercambio que articula relaciones sociales) se convirtieron en mercancías que pueden entonces ser libremente compradas y vendidas en los mercados respectivos. Este proceso de mercantilización, que junto con la Revolución Industrial llevó al tránsito del feudalismo al capitalismo liberal, tuvo repercusiones transcendentales para la sociedad en su conjunto. Según Polanyi (1944), todo esto ha sido posible debido a que el ámbito de la vida económica se ha desvinculado del rígido control que parte de la sociedad ejercía sobre ella en los tiempos feudales. Entre los mecanismos fundamentales de este proceso de desincorporación de las economías, figura lo que se denomina como “cercamiento de tierras comunales” por el Estado o por inversionistas privados.

De hecho, existen varios paralelismos entre el proceso de mercantilización que Polanyi describió y el de ADT que ocurre hoy en día. El ADT implica el cercamiento de tierras que antes estaban bajo un sistema de tenencia consuetudinario o colectivo y eran usadas de manera no comercial (Alden Wily 2011). La instalación de monocultivos en tierras antes usadas para diferentes fines simultáneamente —agricultura, ganadería, colección de plantas medicinales y leña, etc.— acelera un proceso de transformación de la relación entre tierra, trabajo y capital. La suplantación de la pequeña agricultura por las grandes empresas agroindustriales impulsa la mercantilización y la separación de los medios de producción (tierra, trabajo y dinero; Cotula 2013). Este proceso es bien ejemplificado por estudios como el de Millar (2016), quien describe cómo las tecnologías empleadas por las empresas para ejercer control sobre un territorio (imágenes de satélite, GPS, SIG) deslegitiman modos tradicionales de autoridad y control, pues estos ya no son compatibles con el ánimo de lucro que tienen las empresas privadas. Muchas veces el proceso de ADT está acompañado por discursos que presentan a las tierras afectadas como marginales, ocultando las complejas relaciones socioecológicas presentes en los contextos locales y convirtiendo la tierra en una mercancía abstracta y vendible (Nalepa y Bauer 2012). En el contexto peruano, Urteaga (2013) demuestra la importancia de los discursos públicos sobre la abundancia del agua antes de

la instalación de grandes monocultivos de caña de azúcar para la legitimación de estas inversiones.

Un informe de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC, por sus siglas en inglés) sobre el proceso de concentración de la tierra en el Perú señala un proceso de transición a nivel local, donde los campesinos están dejando de ser propietarios y se están convirtiendo, cada vez más, en trabajadores en sus mismas tierras (Burneo 2011). La creciente suplantación de la pequeña agricultura también es observada por Marshall (2008) en los contratos firmados entre los agricultores y las empresas agroindustriales, donde quienes se benefician son principalmente los medianos propietarios, mientras que los pequeños agricultores corren el riesgo de ser marginados.

Detrás de este antagonismo entre la agricultura a pequeña y a gran escala se esconden los múltiples significados que la tierra tiene para diferentes grupos de actores. Mientras que en las sociedades agrarias la tierra es una base para la producción de subsistencia e identidad social, y un territorio de valor espiritual, el mundo corporativo opera de manera desincorporada de la esfera social y somete a la tierra a la producción económica, donde es valorada solamente en términos monetarios (Borras y Franco 2013). El Gobierno también puede desempeñar un papel fundamental en la mercantilización de la tierra. La creación de un mercado de tierras en Perú en la década de 1990 fue impulsada en buena medida por reformas legales que retiraron la protección a las comunidades campesinas y promovieron la titulación de la propiedad rural. Los impactos a nivel local van mucho más allá de la transformación de la tierra en una mercancía, y pueden dar lugar a procesos de monetización en el ámbito social y económico: con la transferencia de tierras al sector privado, los residentes locales se involucran más en la economía de mercado, pues pierden sus tierras y deben buscar trabajo en el sector agroindustrial para ganarse la vida (White y White 2012).

El valle del Chira desde el punto de vista de “la gran transformación”

La expansión de la economía de mercado en el valle del Chira se manifiesta en: a) una creciente naturaleza mercantil de la tierra y el agua, el trabajo y el

dinero, y *b*) el debilitamiento de los mecanismos de control societario, como la reforma agraria y los derechos laborales. La lógica del capital somete a la población local a las lógicas de las cadenas de valor globales y deja pocas posibilidades para una economía alternativa definida a partir de los modos de vida locales.

El valle del Chira ha vivido una reorientación hacia la agricultura de exportación en los últimos años con la llegada de grandes empresas bioetanoleras y la difusión de cultivos como el banano orgánico, el maracuyá y el mango. La expansión de la frontera agrícola ha intensificado la competencia por el agua de riego y ha obligado a los campesinos a sustituir sus plantaciones de arroz por cultivos menos intensivos en agua, normalmente cultivos comerciales, como caña de azúcar, banano y mango. Pero esta tendencia hacia la producción de cultivos comerciales en lugar de cultivos de consumo directo no solo ha sido fomentada por el aumento de la presión sobre el recurso hídrico, sino también por la promoción activa de cultivos alternativos por parte del Gobierno. Además, algunos agricultores señalaron que tuvieron que reducir o abandonar la producción de cultivos de consumo directo por falta de recursos financieros (Debrunner 2016).

Con la llegada de grandes empresas bioetanoleras al valle no solo se vio afectado el acceso al agua, sino también el acceso a la tierra. La adquisición de tierras por parte de las empresas agroindustriales ha producido la expulsión de los lugareños de las tierras eriazas que rodean los pueblos del Bajo Chira. Estas tierras, consideradas por los ganaderos y pequeños agricultores como un bien común, se transformaron de un momento a otro en bienes restringidos de propiedad privada (Urteaga 2013). Antes estas tierras —incluyendo también bosques secos— eran usadas para diferentes propósitos, como el pastoreo de ganado, la recolección de leña y algarrobo, así como para cultivos (Tejada y Rist, 2017). Las tierras vendidas a las empresas bioetanoleras incluían también tierras de comunidades campesinas (tierras comunales; Urteaga 2013). En consecuencia, se observa una sustitución de la producción para la subsistencia y de mercados locales por nacionales y hacia la mercantilización. Los usos no comerciales e informales de la tierra —como el pastoreo de animales y la agricultura de secano— están desapareciendo rápidamente, mientras que

los cultivos de exportación y las plantaciones de caña de azúcar para etanol se expanden. Esta lucha por los recursos del valle entre pequeños agricultores y ganaderos y las empresas agroindustriales tiene también un nivel discursivo: la creciente presión sobre el recurso hídrico deslegitima a los pequeños agricultores como usuarios de agua, pues no pueden darse el lujo de usar métodos de irrigación por goteo, mientras tanto, las empresas privadas son presentadas como usuarios “sustentables” que no ponen en peligro la disponibilidad de agua (Tejada y Rist 2017).

Aunque la pequeña agricultura familiar sigue desempeñando un papel importante en la economía de las zonas rurales del Perú, ha tenido lugar una diversificación sustancial de ingresos durante las últimas décadas, no solo en el valle del Chira, sino a nivel nacional. Según Escobal (2001), el 51 % de los ingresos netos de los hogares rurales del país es generado por actividades ajenas a la agricultura familiar. De igual forma, en el valle del Chira, además de la agricultura familiar, la gente se dedica a vender bebidas y comida; a importar productos de las zonas urbanas; a conducir mototaxis; a producir ladrillos y esteras; a trabajar como peones en la agricultura, en la construcción y en la industria pesquera, o a trabajar en las municipalidades, centros de salud y colegios locales.

Con la llegada de las grandes empresas etanoleras al valle comenzaron a desaparecer las actividades más tradicionales, como la recolección y venta de leña y algarrobos, y aparecieron nuevos puestos de trabajo en el sector etanolero, como trabajador de campo, operador de planta, oficinista o personal de limpieza de las empresas. Los trabajadores de campo de la empresa peruana Caña Brava se encuentran dentro del marco del *régimen especial del sector agrario*, con cuestionables condiciones laborales y sueldos bajos. En el caso de la empresa estadounidense Maple Ethanol, el régimen especial del sector agrario no se aplica y la empresa está orientada hacia el régimen laboral común. La remuneración de los trabajadores empleados directamente no desciende por debajo del sueldo mínimo, incluye una compensación por tiempo de servicio, gratificaciones para la fiesta nacional, Navidad y también cuatro semanas de vacaciones al año. En este caso, consideramos que esto tiene que ver con los parámetros establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),

que financió el inicio del proyecto Maple Ethanol, y que son asumidos por la empresa. Es interesante observar que mientras las empresas transnacionales fomentan un régimen laboral más social en el sector agrario, las empresas domésticas contribuyen a la precarización del trabajador agrario, adoptando leyes laborales que recortan los derechos de los trabajadores.

No obstante, una parte de los trabajadores de campo de Maple Ethanol son contratados a través de empresas subcontratistas, según la demanda que exista en cada momento. Los trabajadores “externos” tienen contratos temporales y un sueldo mensual menor que los demás empleados. Así, el neoliberalismo ha producido una transición donde los campesinos que han perdido acceso a tierras eriazas y de cultivo pasan a ser trabajadores en sus tierras, en lugar de ser usuarios o propietarios. También está en curso una precarización del empleo en el sector agrario, con recortes en cuanto a los derechos laborales y la emergencia de contratistas que median las relaciones entre trabajadores rurales y la industria etanolera. Desde la debilitación de los sindicatos para trabajadores en los años noventa, no existe la base social necesaria para defender los derechos del trabajador agrario. Hubo iniciativas a nivel local para crear este tipo de organizaciones; sin embargo, el intento fue en vano. En otro caso, los miembros del sindicato fueron sometidos a presiones de parte de una de las empresas etanoleras y se vieron obligados a abandonar su proyecto.

Aparte del empleo directo, existe la posibilidad de participar en un esquema de agricultura por contrato con la empresa etanolera peruana. En este caso, los agricultores de la zona circundante son contratados para cultivar caña de azúcar en sus propias tierras y la cosecha es comprada por la empresa etanolera para ser procesada posteriormente. Como muchos de los pequeños agricultores en el valle no tienen recursos suficientes para adquirir las semillas de caña de azúcar, solventar la preparación de la tierra, comprar insumos agrícolas ni para la planilla que ayuda durante la cosecha, necesitan un préstamo en Agrobanco para firmar el contrato con el inversionista. No obstante, para la mayoría de los diez cañicultores entrevistados, el cultivo no se desarrolló de la manera prevista debido a la colaboración insatisfactoria de la empresa, a los altos costos de servicio y a los variables precios pagados por la caña de azúcar. El fracaso del cultivo y la consiguiente dificultad de pagar las cuotas del crédito

recibido han dejado a muchos agricultores altamente endeudados. El endeudamiento afecta sobre todo a los agricultores con pequeñas parcelas, en las que los costos de servicio suben y la probabilidad de obtener beneficios baja. Los únicos dos cañicultores cuya inversión fue rentable cultivaban una área más grande que los demás (Debrunner 2016).

Según Debrunner (2016), varios de los agricultores que decidieron entrar en esquemas de agricultura por contrato lo hicieron porque los cultivos alimentarios ya no eran rentables por motivos como un mercado saturado, fuertes fluctuaciones de precio, plagas recurrentes y el frecuente robo de cosechas de sus campos. La participación en el programa de agricultura contractual prometía mejorar los niveles y la estabilidad de su ingreso. Además, en comparación con otros cultivos de exportación prometedores respecto al beneficio, la empresa agroindustrial ofrecía una ayuda inicial para el suministro de semillas, fertilizantes y la preparación de la tierra, e igualmente exigía bajos intereses. De hecho, uno de los principales obstáculos para el éxito de los pequeños agricultores en el valle del Chira es la falta de capital circundante y el acceso a créditos bancarios. A pesar de la riqueza natural que hay en la región, la producción alimentaria local, para ser efectiva y explotar el potencial agrícola, depende de la disponibilidad de capital monetario que ofrecen las grandes y medianas empresas agroindustriales (Van der Ploeg 2008).

El papel de prestamista es desempeñado activamente por una de las empresas etanoleras en el valle. No solo lo practican para la agricultura por contrato, sino que también ofrecen créditos a sus trabajadores. Estos créditos son de fácil acceso, los trabajadores son dispensados del papeleo y los intereses se descuentan directamente del salario mensual; sin embargo, esta situación puede llevar al endeudamiento, ya que muchas veces los contratos laborales son limitados, y una vez despedidos, los trabajadores no pueden pagar las cuotas mensuales. Así, el endeudamiento también está creciendo entre agricultores contractuales. Un mecanismo central por el cual la etanolera peruana adquirió una parte de las tierras en el valle fue justamente el endeudamiento de un pequeño pueblo durante la década de 1990.

La presencia de las empresas agroindustriales también ha ocasionado la extinción de la actividad ganadera, ya que las tierras eriazas donde pastoreaban

los animales ahora son inaccesibles. La desaparición de las actividades pecuarias pone en peligro una forma de ahorro en los hogares campesinos, ya que muchas veces venden el ganado en tiempos difíciles para obtener comida o comprar semillas para el cultivo. Esta situación pone en relieve la necesidad de créditos, que son saciados por nuevos prestamistas y empresas agroindustriales.

Como hemos visto, la mercantilización está ocurriendo a diferentes niveles: *a*) la comodificación de los recursos naturales se produce por la sustitución de la producción de subsistencia y mercados locales/nacionales hacia aquella de uso puramente comercial; *b*) en el caso del trabajo, se da la desaparición de las actividades tradicionales y la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector etanolero, así como la precarización del empleo en el sector agrario, y *c*) la mercantilización del dinero a través del endeudamiento de los cañicultores y los trabajadores crea una dependencia adicional del sector agroindustrial.

La relación entre el ser humano y la naturaleza se transforma de manera tal que tanto los recursos naturales como el trabajo y el dinero se convierten en bienes virtuales o “mercancías virtuales”, en los términos de Polanyi. Son virtuales en el sentido de que tanto la naturaleza (en su expresión de la tierra agrícola), la creatividad humana (en su expresión del trabajo humano) y las relaciones sociales (en su expresión del intercambio entre actores) no son en esencia mercancías, pues forman parte de las condiciones sociales, humanas y materiales básicas de cualquier tipo de sociedad. Por esto, Polanyi sostiene que es lógico que la reacción social frente a la mercantilización de la naturaleza, del ser humano y de las relaciones sociales sea que la sociedad, a través del Estado, se ocupe de proteger los derechos de estos tres pilares fundamentales mediante legislaciones laborales, sociales y ambientales.

No obstante, en el caso peruano la protección social es poco efectiva, ya que los sindicatos se han debilitado como resultado de las políticas neoliberales y las prácticas agobiantes de la empresa etanolera peruana. Existen también grupos eclesiales y la Mesa de Concertación y Lucha contra la Pobreza (MCLCP), que se ocupan de defender los derechos de las familias despojadas y de los trabajadores, pero hasta ahora no han conseguido muchos logros y tampoco son tomados en serio por las empresas etanoleras.

Un ejemplo diferente es el del sector del banano orgánico, el cual surgió paralelamente al auge de la caña de azúcar y ofrece oportunidades reales para los pequeños agricultores que cultivan sus propias parcelas de manera individual. Diferentes ONG locales apoyan a los campesinos en el desarrollo de capacidades y el acceso a semillas, y han logrado organizar a los bananeros orgánicos del valle en siete asociaciones o cooperativas.

Elementos para repensar las luchas agrarias en la costa norte

La teoría del doble movimiento y su aplicabilidad en el contexto peruano

La sobrestimación de los beneficios del acaparamiento de tierras, presente en los discursos optimistas del Estado y de las empresas privadas a inicios del ajuste neoliberal en Perú, pronto dio lugar al reconocimiento de la necesidad de regular las inversiones privadas para evitar las grandes expropiaciones (Cotula 2013). En ese contexto se desarrollaron diferentes documentos políticos sobre el ADT a nivel internacional. Dos de los más conocidos son las “Directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra y otros recursos naturales” (FAO 2012b) y los “Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios” (Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 2014).

Aunque diferentes autores críticos sostienen que si bien los códigos de conducta y los principios para inversiones responsables son problemáticos porque no consideran el análisis de la pobreza rural desde un enfoque de justicia social, ni contribuyen a mejorar el acceso a la tierra y tampoco a la protección de la propiedad territorial de la población rural (Borras y Franco 2010), sí han auxiliado a aportar una visión más crítica del acaparamiento de tierras. Este cambio de visión ha sido fomentado también por las movilizaciones de movimientos campesinos, ONG, investigadores, activistas y periodistas, que registran la creciente crisis de la agricultura industrial y se pronuncian a favor de los derechos de los campesinos, de la seguridad alimentaria local y de

una agricultura ecológica (McMichael 2013). Polanyi describiría la situación actual a nivel global como un “doble movimiento” que oscila entre la facilitación de la mercantilización y la reincorporación de la economía a la sociedad mediante la protección social de los derechos humanos, laborales y ambientales de la población y de la naturaleza afectada.

En el Perú, la resistencia contra la mercantilización, el despojo y la proletarización no se manifiesta en forma de grandes movimientos, sino más bien en niveles informales y espontáneos, de modo sutil a nivel individual o también a través de pequeños grupos que se juntan de forma voluntaria. Estas formas de oposición dan testimonio de lo que Tria Kerkvliet (2009) —citando a Scott (1985)— denomina “políticas cotidianas”, que se refieren a las acciones que “involucran a personas que adoptan, cumplen con, ajustan y resisten ciertas normas y reglas de la autoridad sobre la producción o asignación de recursos, y lo hacen de forma discreta, mundana, sutil, siendo actos raramente organizados y directos” (Tria Kerkvliet 2009, 232).

Los campesinos son escépticos respecto a la protección del Estado, pues en su propia experiencia, las iniciativas gubernamentales pocas veces son exitosas. Por ejemplo, durante el trabajo de campo varias personas indicaron que han denunciado abusos, irregularidades y accidentes laborales ante las autoridades provinciales, pero al final nunca resuelven nada. De igual manera, la vicepresidenta de la nación —de descendencia piurana— visitó durante su campaña electoral a las personas afectadas por los desalojos causados por las empresas etanoleras, y prometió hacer justicia para compensar a buen precio las tierras perdidas; sin embargo, esta promesa también quedó tan solo en palabras y nada ha cambiado desde entonces.

La Defensoría del Pueblo es una institución clave en materia de derechos humanos en el Perú, y ha desempeñado una función importante en las negociaciones con una de las empresas etanoleras, Caña Brava, que causó un accidente de tráfico vinculado a la quema ilegal de caña de azúcar. A consecuencia de ese suceso, la empresa etanolera Caña Brava se vio obligada a dejar de quemar la caña antes de la cosecha. Esta es una de las pocas buenas experiencias con el Estado respecto a la protección de la población y del medio ambiente de abusos por parte de las empresas etanoleras. En otro caso, la población

ha pedido ayuda a la Defensoría del Pueblo debido a la pérdida de acceso a tierras causada por infiltraciones de agua como producto de la irrigación intensiva de la caña de azúcar en los campos vecinos, pero en esa ocasión la Defensoría del Pueblo no contaba con los recursos necesarios para apoyar a las personas afectadas. Además, como hemos visto en los secciones anteriores, la protección social ejercida por el Estado en forma de políticas agrarias es opresiva, ya que excluye a los pequeños agricultores del acceso al crédito, de la titulación rural y de las cadenas de valor.

No nos sorprende entonces el escepticismo de los campesinos y los trabajadores agrarios del valle ante la idea de recurrir al Estado para enfrentar los abusos de las empresas agroindustriales; más bien tratan de defender sus derechos en forma de políticas y resistencias cotidianas. Un ejemplo es el incendio de un camión de la empresa Caña Brava como reacción a la quema ilegal de caña de azúcar mencionada anteriormente. Otras estrategias incluyen el bloqueo de la vía internacional Panamericana y del acceso al agua para las empresas como reacción a accidentes de tráfico y a las infiltraciones de agua en terrenos de ladrilleros locales. Las políticas cotidianas de resistencia también involucran la orientación mutua sobre los riesgos de trabajar en el sector de fumigación de las etanoleras. Esto ha motivado a diferentes trabajadores a emplear estrategias para evitar el trabajo con herbicidas y pesticidas que pueden ser dañinos para la salud.

Luchas agrarias en el valle del Chira: ¿un movimiento triple?

En esta sección analizamos —más allá de las políticas cotidianas y la resistencia informal en el contexto del acaparamiento de tierras— las alternativas a la concentración de la tierra en manos de grandes empresas agroindustriales, sugeridas por las luchas de diversos actores agrarios por la autonomía y sostenibilidad en el contexto neoliberal. Para esto, vamos a analizar con más detenimiento el caso de los bananeros orgánicos en el valle del Chira, quienes están tratando de salir adelante estableciendo sus propias relaciones con el Estado y el mercado.

El Estado peruano brinda poco apoyo mediante políticas de protección social a los pequeños campesinos; en realidad, esas políticas privilegian el bienestar del sector privado. Aunque en Piura el Gobierno regional lanzó un programa de capacitación y asistencia técnica (Procat) a favor de productores agropecuarios, gran parte del apoyo para los campesinos convencionales sigue proviniendo de ONG, como el Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte (Cedepas Norte), el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), la Central Peruana de Servicios (Cepeser) y Plan Internacional (Cabrejos Vásquez 2011). También en el sector no convencional — donde los bananeros orgánicos son los actores más prominentes— el papel de “protector social” es asumido por ONG, como Cedepas Norte y Oikos, que están brindando apoyo para el desarrollo de capacidades y el acceso a semillas.

El sector del banano orgánico —que además de la certificación orgánica también cuenta con la certificación de comercio justo otorgada por la Organización Internacional de Comercio Justo (Fairtrade Labelling Organizations Internacional, FLO)— es un ejemplo particularmente exitoso, ya que reúne los beneficios de ambas certificaciones. Los bananeros están organizados en asociaciones o cooperativas agrarias que se caracterizan por ser empresas solidarias. Así, por ejemplo, cada asociación recibe una ganancia extra por comercio justo de un dólar por cada caja de banano con certificación orgánica y de comercio justo exportada, el cual es directamente transferido a la asociación. Esta invierte el dinero acumulado en el fondo comunitario, en infraestructura vial, hidráulica y en otras iniciativas que mejoran las condiciones sociales de la comunidad. Se trata de un modelo basado en la agricultura familiar y en abonos orgánicos producidos por los propios campesinos a partir del estiércol animal, y constituye claramente un contramodelo a las empresas etanoleras que operan en grandes monocultivos y emplean abonos químicos.

Por medio de la observación participativa hemos evidenciado la existencia de relaciones de solidaridad y procesos organizativos autogestivos. Los bananeros muestran orgullo y gusto por trabajar conjuntamente, relacionándose con redes internacionales de producción orgánica y comercio justo, y resaltan la importancia de “ser sus propios jefes”. Además, dan mucha relevancia al hecho de poder decidir como asociación y de manera autónoma sobre

las inversiones en tecnología y las estrategias para invertir el ingreso extra del comercio justo. Este es un buen ejemplo en cuanto ilustra lo que los campesinos realmente buscan: articularse con un mercado global, orgánico y solidario que les permita mercantilizar la naturaleza (mediante el cultivo orgánico), la creatividad humana y las relaciones sociales (a través de la autogestión y cooperación asociativa que relativiza o supera la propiedad privada de la tierra) en alianzas con otras organizaciones sin fines de lucro, como en este caso, las ONG locales con vínculos transnacionales. Dadas las dificultades financieras que enfrentan los bananeros durante el primer año del cultivo —la instalación es costosa y puede durar hasta un año—, varios de los productores orgánicos declararon haber invertido sus ahorros o saldos obtenidos al ser despedidos por la empresa etanolera Maple, que quebró en marzo 2015, en la instalación de una hectárea de banano orgánico. A través de estas estrategias de diversificación y supervivencia de la población local, se observa la gran dependencia de las iniciativas de “emancipación” del sector de mercantilización. De hecho, las transferencias de un sector al otro no son insignificantes, ya que del sector etanolero no solo fluye el dinero por medio de los salarios, sino también a través de proyectos de responsabilidad social corporativa destinados al asesoramiento en el sector bananero.

En el contexto peruano, donde el Estado se ha vinculado estrechamente al “mercado”, la función de la protección social es asumida cada vez en mayor medida por la iniciativa privada y las ONG. Esto lo observamos en el caso de la empresa transnacional Maple y los parámetros laborales establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo, que claramente superan los esfuerzos hechos por el propio Estado para mejorar las condiciones del ámbito laboral. Este hecho también se percibe en el sector agropecuario, donde el prometedor sector del banano orgánico es apoyado especialmente por ONG, que aprovechando la demanda global de dicho cultivo, fomentan su producción ecológica y de comercio justo. Todo esto evidencia la creciente organización de los productores en asociaciones o cooperativas y el desarrollo del bono de comercio justo para proyectos comunitarios. Por lo tanto, la protección social a favor de los pequeños agricultores no es realizada por agencias del Estado, sino por redes internacionales y transnacionales de empresas agroindustriales

y sus anfitriones, así como por certificaciones de comercio justo. Tanto la falta de apoyo como la desconfianza hacia el Estado orientan a los pequeños agricultores de la costa norte a buscar nuevas alianzas con el mercado y la protección social de las ONG locales, cuyo respaldo les parece muy prometedor.

Nancy Fraser (2013) describiría estas luchas agrarias contra la concentración de la tierra como un *movimiento triple* que busca combinar el potencial de las tendencias de la mercantilización con aquellas que abogan por la protección social, con el fin de emanciparse de la opresión sufrida por el Estado y del mercado global dominante. Según Fraser (2011), los acuerdos sociales y políticos que incorporan a los mercados pueden ser opresivos de formas distintas. Uno de los mecanismos de opresión está relacionado con el hecho de que la protección social puede ser jerárquica o patriarcal, en tanto que niega la condición social necesaria para la participación libre de actores oprimidos en la sociedad. Aunque Fraser se refiere —cuando habla de este mecanismo de opresión— principalmente a las jerarquías de género, esta idea puede ser adaptada a la condición de los agricultores y trabajadores agrarios en el contexto peruano. Como hemos demostrado en nuestro estudio de caso, la protección social por parte del Estado opera de manera opresiva hacia este grupo de actores, pues no les brinda acceso equitativo a los medios de producción (tierra, trabajo y capital). A pesar de que existen iniciativas de protección social con miras a beneficiar a los pequeños agricultores, como la reforma agraria de 1969, estos intentos fueron gestionados de manera tan vertical y con tan poca consideración de las necesidades del pequeño agricultor, que surtieron poco efecto en sus condiciones de vida y trabajo.

El segundo mecanismo de opresión abordado por Fraser es el desencuadre (*misframing*), e incluye lo que llama desajustes de escala (*mismatches of scale*). Con esto se refiere a los desajustes entre la escala en la cual están incorporados los mercados —normalmente nacionales— y la escala transnacional, que expone a la gente a ciertos peligros. Este es exactamente uno de los mayores riesgos al que están expuestos los agricultores que buscan emanciparse del Estado y establecer sus propias alianzas con el sector empresarial y la protección social organizados a nivel transnacional, pues se genera una gran dependencia del mercado global, que funciona a partir de demandas del Norte.

Los intentos de emancipación también implican riesgos, debido a que el Estado, la mercantilización y la protección social no se distinguen claramente. La protección social de los agricultores y trabajadores agrarios en el valle del Chira depende casi totalmente del mercado, esto es, de la demanda de productos de comercio justo y de bioetanol; de manera que existe una alianza peligrosa entre la protección social y el mercado, y es aquí donde un movimiento de emancipación tendría que incidir y formar alianzas con el Estado para recobrar el control de la protección social

Conclusiones

El presente ensayo muestra que la tendencia actual de acaparamiento de grandes superficies de tierras públicas y colectivas por parte de inversionistas privados puede ser entendida, desde el concepto de Polanyi, como un proceso adicional de desincorporación del sector agrario del control societario, anteriormente ejercido mediante la presencia del Estado como regulador, constructor de infraestructura productiva o actor directo en el ámbito económico rural. Las políticas neoliberales promueven este proceso de desincorporación abriendo múltiples vías para que el empresariado nacional e internacional pueda acceder a recursos naturales, financieros y de infraestructura pública, permitiéndole extraer la mayor parte de los beneficios económicos derivados de su uso. Ese hecho exacerba la marginalización y crea nuevos mecanismos de exclusión que afectan a los pequeños y medianos productores agrarios. Ello se evidencia en el cercamiento del acceso a tierras eriazas de propiedad estatal y comunal mediante la venta a inversionistas privados. Mientras que a las empresas agroindustriales se les incentiva a invertir a través de diferentes políticas de promoción de inversión privada, el empleo en el sector agrario se ha precarizado y los sueldos difícilmente se ajustan a las necesidades de las familias.

Respecto a los efectos de la concentración de la tierra en la costa norte peruana, este capítulo demuestra que no solo son impactos positivos y negativos para el sustento de familias campesinas y el medio ambiente, sino que también esos efectos transforman radicalmente la relación entre el ser humano y la

naturaleza. El análisis de los mecanismos de mercantilización, que se evidencia en la actual ola de acaparamiento de grandes superficies de tierras públicas y comunales por parte de inversionistas privados, sobre la base de la *gran transformación* de Polanyi, revela como efecto principal la consolidación de la tierra, del trabajo humano y del dinero como *mercancías virtuales*. Son mercancías virtuales porque tanto la naturaleza (en su expresión de la tierra agrícola) como la creatividad humana (en su expresión del trabajo humano) y las relaciones sociales (en su expresión del intercambio entre actores) no están hechas para ser convertidas en mercancías, ya que representan las condiciones sociales, humanas y materiales básicas de cualquier tipo de sociedad. Otro efecto central es el debilitamiento de los mecanismos de control societario, como la reforma agraria, un régimen laboral favorable al trabajador agrario y el apoyo estatal para pequeños agricultores en esquemas de agricultura por contrato con empresas agroindustriales.

Los ejemplos presentados permiten seguir el argumento de Polanyi mostrando que también en Perú la consecuencia lógica de la consolidación de las mercancías virtuales es una reacción societaria frente a la mercantilización de la naturaleza, del ser humano y de las relaciones sociales, que reclama —sin mucho éxito— la necesidad de que el Estado se ocupe de proteger los derechos de estos tres pilares fundamentales de la sociedad mediante legislaciones laborales, sociales y ambientales. Sin embargo, es en este aspecto donde el análisis de Polanyi no se aplica a la realidad actual, ya que el Estado ha perdido la capacidad y legitimidad para reincorporar el sector económico bajo el control societario. Por este motivo no se produce el doble movimiento, que consistiría en fortalecer —en la medida en que los actores locales reconocen y se resisten a convertirse ellos mismos y a su ambiente natural en mercancías— un movimiento hacia la protección de los derechos sociales y ambientales a través del Estado.

Más bien, los campesinos se dan cuenta de estas transformaciones y buscan alternativas que vayan más allá de obtener la protección de los derechos individuales o colectivos por parte de un Estado incapaz de hacerlos efectivos. Pero tampoco se resignan ni dejan que se les absorba su naturaleza o su creatividad humana, ni tampoco descuidan las relaciones sociales solidarias, a pesar

de la dominante mercantilización. Desde su propia agenda emancipadora, basada en reconocer los límites agroecológicos en su relación con la naturaleza, así como la cooperación y solidaridad colectiva, los campesinos buscan articularse con oportunidades ofrecidas por los emergentes mercados alternativos del cultivo orgánico y del comercio justo, para encontrar salidas distintas a las alianzas con el Estado, más específicamente, con el mercado.

Es ahí donde la actualización de la teoría de Karl Polanyi propuesta por Nancy Fraser permite conceptualizar más claramente lo que sucede. Fraser demuestra que lo que buscan los movimientos de emancipación es un reconocimiento social (no solamente estatal) de su capacidad de crear alternativas —por lo menos parciales y temporales— a la crisis definida por el descontento con el Estado y los partidos políticos tradicionales. Como hemos visto, en el Perú estos movimientos no surgen por una inquietud respecto a la soberanía alimentaria y de la tierra (Kay 2011; Rosset et al. 2011), como mucha de la literatura sobre contramovimientos en el contexto de acaparamientos de tierras sugiere. En cambio, estas alternativas emergentes se basan en las políticas cotidianas que de forma sutil y práctica se dotan de oportunidades en el mercado, ante el Estado y en la sociedad civil para —como en el caso estudiado— formar cooperativas y asociaciones para la producción de cultivos orgánicos que representan recreaciones actualizadas de los principios básicos de su agenda emancipadora histórica. De hecho, se puede constatar en la costa norte del país una “recampesinización” que, según Van der Ploeg (2008), ocurre por diferentes mecanismos: la reforma agraria, la apropiación de tierras por campesinos sin tierra, la expansión de la frontera agrícola y los pueblos jóvenes que surgen en áreas rurales.

Este ejemplo ilustra claramente lo que los campesinos buscan: articularse en un mercado global, orgánico y solidario que les permita mercantilizar la naturaleza mediante el cultivo orgánico. Además, ello les permite fomentar la creatividad humana y las relaciones sociales mediante la autogestión y cooperación asociativa que relativiza o supera la propiedad privada de la tierra, formando alianzas con ONG y otras organizaciones sin fines de lucro a nivel local, nacional y transnacional.

Referencias bibliográficas

- Alden Wily, L. 2011. *The Tragedy of Public Lands: The Fate of the Commons under Global Commercial Pressure*. Roma: International Land Coalition.
- Borras, S. M. y J. Franco. 2010. "From Threat to Opportunity? Problems with the Idea of a 'Code of Conduct' for Land-Grabbing". *Yale Human Rights & Development Law Journal* 13 (2): 507–523.
- . 2013. "Global Land Grabbing and Political Reactions 'From Below'". *Third World Quarterly* 34 (9): 1723–1747.
- Borras, S. M., J. C. Franco, S. Gómez, C. Kay y M. Spoor. 2012. "Land Grabbing in Latin America and the Caribbean". *The Journal of Peasant Studies* 39 (3-4): 845-872.
- Bourliaud, J. y M. Eresue. 2015. "La (re)concentración de las tierras costeñas". *La Revista Agraria* 169: 3-5. http://www.larevistaagraria.org/sites/default/files//revista/LRA169/LRA169_TextoCompleto.pdf.
- Burneo, Z. 2011. *The Process of Land Concentration in Peru*. Roma: International Land Coalition.
- Cabrejos Vásquez, C. 2011. *Actualización del mapa regional del sector agrario en Piura*. Piura: Cipca.
- Campos Torres, S. 2014. *Regímenes laborales especiales 2014*. Lima: Soluciones Laborales.
- Cepes (Centro Peruano de Estudios Sociales). 2012. *Boletín: Tierra y derechos* 2: 5. Consultado el 19 de enero de 2016. <https://cepesrural.lamula.pe/2014/01/21/boletin-tierra-y-derechos-biocombustibles-en-el-peru-amenaza-u-oportunidad-ano-2-numero-5/cepesrural/>.
- Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. 2014. "Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios". Roma: FAO. www.fao.org/3/a-au866s.pdf.
- Cotula, L. 2013. "The New Enclosures? Polanyi, International Investment Law and the Global Land Rush". *Third World Quarterly* 34 (9): 1605-1629.
- Cotula, L., S. Vermeulen, R. Leonard y J. Keeley. 2009. *Land Grab or Development Opportunity? Agricultural Investment and International Land Deals in Africa*. Roma: IIED; FAO; IFAD.

- Crabtree, J. 2003. "The Impact of Neo-Liberal Economics on Peruvian Peasant Agriculture in the 1990s". En *Latin American Peasants*, coordinado por T. Brass, 129-158. Londres: Frank Cass.
- Cuba, N., A. Bebbington, J. Rogan y M. Millones. 2014. "Extractive Industries, Livelihoods and Natural Resource Competition: Mapping Overlapping Claims in Peru and Ghana". *Applied Geography* 54: 250-261.
- Debrunner, E. 2016. "Of Sugar Cane, Bricks and Carob Trees: Impacts of a Large-scale Sugar Cane Investment in Northern Peru on Household Food Security". Tesis de maestría en Geografía, dirigida por Stephan Rist. Universidad de Berna.
- Castillo Pinto, L. del y P. J. Castillo Castañeda. 2014. *Gobernanza responsable de la tenencia de la tierra: aplicabilidad en Bolivia y Perú de las "Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional"*. La Paz: Fundación Tierra; Lima: Cepes.
- Eguren, F. 2004. "Las políticas agrarias en la última década: una evaluación". En *Sepia X. Perú: el problema agrario en debate*, coordinado por F. Eguren, P. Oliart y M. I. Remy, 19-78. Lima: Seminario Permanente de Investigación Agraria.
- . 2015. "El agro en tiempo de Humala". Consultado el 10 de febrero de 2015. <http://de.scribd.com/doc/255208412/El-Agro-en-Tiempos-de-Humala-Fernando-Eguren>.
- Escobal, J. 2001. "The Determinants of Nonfarm Income Diversification in Rural Peru". *World Development* 29 (3): 497-508.
- Escobedo, J. 2015. "La tierra en pocas manos: el proceso continúa con el apoyo del Gobierno". *La Revista Agraria*. Consultado el 24 de mayo de 2016. http://www.larevistaagraria.org/sites/default/files//revista/LRA169/LRA169_TextoCompleto.pdf.
- Famerée, C. 2016. "Political Contestations around Land Deals: Insights from Peru". *Canadian Journal of Development Studies* 37 (4): 541-559.
- FAO (Food and Agriculture Organization). 2012a. *Trends and Impacts of Foreign Investments in Developing Country Agriculture. Evidence from Case Studies*. Roma: FAO.

- FAO (Food and Agriculture Organization). 2012b. *Directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra y otros recursos naturales*. Roma: FAO.
- Fraser, N. 2011. "Marketization, Social Protection, Emancipation: Toward a Neo-Polanyian Conception of Capitalist Crisis". En *Business as Usual, The Roots of the Global Financial Meltdown*, coordinado por C. Calhoun y G. Derluigian, 137-157. Londres: Verso.
- . 2013. "A Triple Movement: Parsing the Politics of Crisis after Polanyi". *New Left Review* 81: 119-132. Consultado el 27 de abril de 2016. <http://bev.berkeley.edu/ipe/Triple%20Movement-NLR31505.pdf>.
- German, L., G. Schoneveld y E. Mwangi. 2013. "Contemporary Processes of Large-Scale Land Acquisition in Sub-Saharan Africa: Legal Deficiency of Elite Capture of the Rule of Law?". *World Development* 48: 1-18.
- Hall, D. 2013. "Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession and the Global Land Grab". *Third World Quarterly* 34 (9): 1582-1604.
- INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática [Perú]). 2013. "Resultados definitivos: IV Censo Nacional Agropecuario - 2012". Consultado el 23 de mayo de 2016. <http://www.agrorural.gob.pe/dmdocuments/resultados.pdf>.
- Ioris, A. y A. Rossotto. 2012. "The Neoliberalization of Water in Lima, Peru". *Political Geography* (31): 266-278.
- Jiménez, F. 2017. *Veinticinco años de modernización neo-colonial: crítica de las políticas neoliberales en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Kay, S. 2012. *Positive Investment Alternatives to Large-Scale Land Acquisitions or Leases*. Ámsterdam: Transnational Institute for Hands off the Land Alliance.
- Land Matrix. 2012. "The Land Matrix DataBase". Beta version 2.0. International Land Coalition (ILC); Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD); Centre for Development and Environment (CDE); German Institute for Global and Area Studies (GIGA); Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Consultado el 9 de febrero de 2016. <http://landportal.info/landmatrix>.

- Marshall, A. 2008. "El proyecto especial Chavimochic. Contratos agrarios establecidos entre agroexportadores y pequeños agricultores en los valles de Virú y Chao". En *Sepia XII*, coordinado por G. Damonte, B. Fulcrand y R. Gómez, 553-584. Lima: Seminario Permanente de Investigación Agraria.
- McMichael, P. 2012. "The Land Grab and Corporate Food Regime Restructuring". *Journal of Peasant Studies* 39 (3-4): 681-701.
- . 2013. *Food Regimes and Agrarian Questions*. Halifax; Winnipeg: Fernwood Publishing.
- Millar, G. 2016. "Knowledge and Control in the Contemporary Land Rush. Making Local Land Legible and Corporate Power Applicable in Rural Sierra Leone". *Journal of Agrarian Change* 16 (2): 206-224.
- Mitchell, T. 2005. "The Work of Economics: How a Discipline Makes its World". *European Journal of Sociology* 46 (2): 297-320.
- Nalepa, R. y D. M. Bauer. 2012. "Marginal Lands: The Role of Remote Sensing in Constructing Landscapes for Agrofuel Development". *The Journal of Peasant Studies* 39 (2): 403-422.
- Polanyi, K. 1944. *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press.
- Rosset, P. M., B. Machín Sosa, A. M. Roque Jaime y D. R. Ávila Lozano. 2011. "The Campesino to-Campesino Agroecology Movement of ANAP in Cuba: Social Process Methodology in the Construction of Sustainable Peasant Agriculture and Food Sovereignty". *Journal of Peasant Studies* 38 (1): 161-91.
- Tejada, L. y S. Rist. 2017. "Seeing Land Deals through the Lens of the 'Land-Water Nexus': The Case of Biofuel Production in Piura, Peru". *The Journal of Peasant Studies* 45 (7): 1247-1271. DOI: 10.1080/03066150.2016.1259220.
- Tria Kerkvliet, B. J. 2009. "Everyday Politics in Peasant Societies, and Ours". *Journal of Peasant Studies* 36 (1): 227-243.
- Urteaga Crovetto, P. 2013. "Entre la abundancia y la escasez de agua: discursos, poder y biocombustibles en Piura, Perú". *Debates en Sociología* 38: 55-80.
- Van der Ploeg, J. D. 2008. *The New Peasantries: Struggles for Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalization*. Londres: Earthscan.

- Veltmeyer, H. 2005. "The Dynamics of Land Occupation in Latin America". En *Reclaiming the Land. The Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia and Latin America*, coordinado por S. Moyo y P. Yeros, 285-316. Londres; Nueva York: Zed Books.
- White, B. y J. White. 2012. "Gendered Experiences of Dispossession: Oil Palm Expansion in a Dayak Hibun Community in West Kalimantan". *The Journal of Peasant Studies* 39 (3-4): 995-1016.
- White, B., S. M. Borras Jr., R. Hall, I. Scoones y W. Wolford. 2012. "The New Enclosures: Critical Perspectives on Corporate Land Deals". *The Journal of Peasant Studies* 39 (3-4): 619-647.
- Wiener Bravo, E. 2011. *La concentración de la propiedad de la tierra en América Latina: una aproximación a la problemática actual*. Roma: ILC.
- Zoomers, A. 2010. "Globalisation and the Foreignisation of Space: Seven Processes driving the Current Global Land Grab". *The Journal of Peasant Studies* 37 (2): 429-447.

Sistemas productivos campesinos y la integración al mercado en un mundo neoliberal: estudios de caso del delta del Mekong (Vietnam) y Veracruz (México)*

Anne Cristina de la Vega-Leinert

Universidad de Greifswald

Beatriz Rodríguez-Labajos

Universidad Autónoma de Barcelona

Peter Clausing

Pesticide Action Network

Introducción

En este capítulo consideramos a la agricultura como una interfaz entre la naturaleza, el campo y la urbe. La agricultura, en efecto, transforma recursos naturales clave en biomasa para satisfacer las necesidades de la población, sea de alimentación, fibras o materias primas para la industria; sin embargo, no se puede hablar de agricultura en singular, pues existe un amplio abanico de modelos de producción distintos. Por un lado, los sistemas agroecológicos tradicionales y la ingeniería ecológica moderna permiten sinergias entre la conservación de la naturaleza, el uso del suelo y la preservación de sistemas socioecológicos

* Agradecemos a nuestros entrevistados, quienes generosamente prestaron su tiempo e información. Anne Cristina de la Vega-Leinert escribió este capítulo gracias a una beca de la German Academic Exchange Service y la German Research Foundation para el Proyecto VE-659/2-1. La participación de Beatriz Rodríguez-Labajos fue posible gracias a una beca del proyecto Legato del German Federal Ministry for Education and Research y el proyecto BiodivERsA Staccato (PCIN-2015-016).

simbióticos que generan agrobiodiversidad (Fischer, Lindenmayer y Manning 2006; Harvey et al. 2008; Perfecto, Vandermeer y Ulright 2009; Fischer et al. 2017). Por el otro, la agroindustria, aunque ha permitido un aumento significativo de la productividad agrícola por trabajador en sistemas altamente especializados con los paquetes tecnológicos de la revolución verde, también produce enormes impactos socioambientales, como incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero, alteraciones en el ciclo del nitrógeno y alteraciones a la salud (Rockström et al. 2009; Mostafalou y Abdollahi 2013).

Fundamentalmente, los sistemas productivos agrícolas han sido transformados en el siglo xx en un proceso que ocurre dentro de un contexto más amplio de reconfiguración del sector agrícola, de las políticas agrícolas y alimentarias y del mercado a nivel mundial, en particular bajo el régimen neoliberal a partir de 1980. Siguiendo a Castree (2008a, 2008b) y a McCarthy y Prudham (2004), definimos el neoliberalismo como un amplio marco político que transforma las interacciones entre la sociedad y la naturaleza, partiendo de la premisa de que el bienestar humano mejora al fomentarse la iniciativa empresarial, y que el mercado es el mejor mecanismo para distribuir los bienes y servicios requeridos para satisfacer las necesidades humanas.

A partir de dos casos de estudio, en este capítulo veremos cómo las transformaciones del sector agrícola y los procesos de integración al mercado mundial en regímenes neoliberales afectan los sistemas productivos campesinos e impactan en el uso de la tierra y en las comunidades locales. Examinamos dos cultivos importantes —arroz y café— en dos contextos muy distintos: la transición del cultivo de arroz hacia el de frutas en el delta del Mekong, en Vietnam, y la integración de productores campesinos al mercado de café de calidad en el sureste mexicano. En ambos casos nos proponemos explorar:

1. cómo se integran los campesinos a los mercados locales y a las cadenas globales de mercancía¹ conforme sus países abren su sector agrícola a los mercados internacionales;

¹ Usamos el término *cadena global de mercancía* (*global commodity chain*), en lugar de *red*, porque nos interesa el origen (*upstream*) del sector; es decir, los productores. Se enfatiza

2. cómo se adaptan las comunidades campesinas y organizaciones de productores locales a estas transformaciones, y
3. cómo sus estrategias de adaptación afectan los medios de subsistencia y el uso del suelo a nivel local.

Tanto en México como en Vietnam, tomamos en cuenta las sinergias y conflictos entre el uso de la tierra y la conservación, así como las vías que podrían alentar una *intensificación sustentable*, un concepto muy debatido que abordaremos en detalle en la siguiente sección. Al identificar diferencias y similitudes entre los casos presentados, queremos contribuir a la evaluación de las consecuencias sociales y ambientales de los procesos de neoliberalización de la naturaleza vinculados a la agricultura. Para ello, primero introducimos el panorama de las transformaciones globales en el uso de la tierra, especialmente en el sector agrícola campesino dentro del neoliberalismo, para contextualizar los cambios ocurridos en las áreas de estudio. A continuación, presentamos los dos estudios de caso para, finalmente, identificar motores de cambio, procesos e implicaciones socioecológicas comunes relacionados con los procesos actuales de neoliberalización agrícola.

el proceso de integración lineal que vincula a los productores con los mercados internacionales de productos agrícolas mediante varios intermediarios, hasta llegar a los minoristas y consumidores abajo (*downstream*). Consideramos que el concepto de *red de mercancía global* (*global commodity network*) es más relevante para analizar cómo los importadores, procesadores, mayoristas, menudistas, agencias certificadoras, entre otros, organizan el sector e interactúan entre sí. Los productores de cultivos orgánicos y de comercio justo también integran redes globales de mercancía; sin embargo, en nuestra experiencia, la comercialización sigue siendo lineal y los productores carecen de voz y voto, tienen poco control sobre la comercialización y reciben pocos beneficios del valor agregado (De la Vega-Leinert et al. 2016, 2019).

Transformaciones globales en el uso de tierras agrícolas en el neoliberalismo

Para Lambin y Meyfroidt (2011), las principales transformaciones en el uso de la tierra a nivel global incluyen la deforestación relacionada con la expansión de la superficie cultivada o bajo pastizales y la urbanización de áreas rurales. En décadas recientes, tales procesos se ven exacerbados por la acelerada explotación de recursos naturales que empuja las fronteras de extracción hacia zonas poco ocupadas (Pacheco et al. 2010; Hecht et al. 2015). Factores complejos e interrelacionados en múltiples escalas generan estos profundos cambios (Lambin et al. 2001). Por ejemplo, la conversión de bosques tropicales en zonas agrícolas se suele asociar a causas próximas —como el crecimiento demográfico o la pobreza—, pero es asimismo impulsada por procesos distantes, como la integración espacial de áreas boscosas periféricas mediante la construcción de carreteras, la creciente demanda de madera y alimentos para animales o de origen animal en mercados internacionales, y el desplazamiento de la deforestación a países con regímenes de protección débiles o ineficaces (Haberl et al. 2009; DeFries et al. 2010; Mills Busa 2013). Así, resulta importante evaluar críticamente las recomendaciones que la literatura propone para combatir la deforestación, como la propuesta de Aide y Grau (2004) de fomentar el éxodo rural en América Latina para propiciar la transición del bosque. De hecho, en su análisis de las transformaciones de paisajes boscosos, Hecht et al. (2015) descartan que la inmigración a la frontera extractiva necesariamente impulse la deforestación, o que la emigración fuera de zonas rurales promueva la regeneración de bosques, con lo que demuestran que la realidad de los procesos locales es mucho más compleja (en ese caso, en el sur y sureste asiático).

Aquí relacionamos explícitamente los cambios en el uso local de la tierra, la estructura de sistemas productivos y sus impactos en comunidades, con cambios en las políticas comerciales y patrones de consumo distantes, siempre en un contexto económico neoliberal. Revisamos primero transformaciones agrícolas clave en el neoliberalismo, para luego explorar cómo estos cambios han afectado a las regiones de estudio.

Conscientes del riesgo de la sobresimplificación, enfatizamos ciertas tendencias emergentes en la literatura sobre el tema. El neoliberalismo propicia importantes cambios en el papel del Estado respecto a la elaboración e instrumentación de políticas agrícolas y alimenticias; a la regulación del comercio, del apoyo y de la protección a campesinos y sus sistemas productivos, así como a la orientación y protección del consumidor (McMichael 2012). Una consecuencia de esto es el desmantelamiento de iniciativas públicas directas, entre ellas las empresas paraestatales, del desarrollo de proyectos de infraestructura, de los subsidios a la producción y al consumo, y del control de precios, especialmente en el Sur global. Además, el Estado tiende a impulsar fuertemente la agricultura intensiva de exportación, por ejemplo, al reformular políticas agrícolas en el marco regulatorio del libre comercio (Kay 2008). En estos procesos emergen otros actores importantes, en particular los órganos supranacionales que articulan políticas y proporcionan financiamiento (Organización Mundial del Comercio [OMC], Banco Mundial [BM], Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación [FAO]), y actores privados corporativos (transnacionales (Bill Gates Foundation; Clausing 2014; Friedmann 2005). Del mismo modo, las organizaciones no gubernamentales (ONG), la sociedad civil, los movimientos sociales y las cooperativas de productores se multiplican a nivel local y nacional para llenar el vacío ocasionado por la retirada de los órganos del Estado (King, Adler y Grievés 2013).

Las formas que adquieren los procesos de rerregulación de las políticas y los mercados tienen mucho que ver con el peso político y económico de los Estados involucrados. Mientras que los países del Sur global encuentran difícil apoyar adecuadamente a sus productores y proteger sus sectores agrícolas de productos importados baratos, los del Norte aprovechan un abanico de medios legales para otorgar subsidios estatales o proteger sus mercados internos con regulaciones fitosanitarias (Wise 2004; González 2011). Otro elemento clave en la neoliberalización de la agricultura es la redefinición y rearticulación de sistemas de tenencia de la tierra (Zoomers y Van der Haar 2000). Aquí confluyen dos procesos: por un lado, se fragmentan las tierras colectivas en micropropiedades privadas; mientras que, por otro, se propicia la (re)concentración de tierras en pocas manos a través de mecanismos legales que permiten adquirir

o rentar tierras de propiedad colectiva o pública (Zoomers 2010; Borrás et al. 2011). Este último proceso queda de manifiesto en la creciente literatura sobre la concentración de la tierra y las tendencias reformistas contragrarias en América Latina (Kay 2002; Roux 2011).

Desde hace siglos, la tierra ha sido un bien valorado económicamente que puede adquirirse mediante transacciones monetarias en mercados más o menos regulados, aunque a menudo coexisten varios regímenes. A pesar de que la mercantilización y la privatización de la tierra no son fenómenos nuevos, la neoliberalización exagera estas tendencias mediante mecanismos como la comodificación y la especulación sobre la tierra y los productos agrícolas, la creciente concentración de cadenas globales de mercancías agrícolas, la expansión de agronegocios, la extensa explotación forestal para la exportación realizada por el gran capital y la continua búsqueda de nuevos nichos de mercado. Esto ha causado profundas transformaciones en sistemas productivos campesinos, especialmente la conversión de su agricultura, antes orientada a la alimentación básica, hacia una enfocada en cultivos comerciales (Carletto et al. 2008) o agrocombustibles (Harvey y Pilgrim 2011). Estos elementos, claves para el financiamiento y mercantilización de la agricultura (Fairbairn 2014), están relacionados con patrones de consumo cambiantes a nivel mundial (Seto et al. 2012; Weis 2013; Clapp 2015) y contribuyen al rápido incremento de la huella ecológica de la población global (Weinzettel et al. 2013).

El reconocimiento del profundo impacto ambiental de la agroindustria ha propiciado el surgimiento del discurso de la intensificación sustentable de la agricultura, que plantea aumentar la productividad de sistemas agrícolas campesinos y, al mismo tiempo, limitar la degradación ambiental que causa la agricultura comercial. Algunos autores sostienen que este concepto, acaloradamente debatido, carece de sustento (Loos et al. 2014) más allá de ser un lema de la política internacional para una supuesta solución “gana-gana” a la problemática de los sistemas agrícolas intensivos (Cook et al. 2015).

Esta idea constituiría un acercamiento superficial a la sustentabilidad, basado en un entendimiento limitado de la economía verde, que articula soluciones teóricamente sinérgicas entre la protección de la biodiversidad y la producción agrícola. Ejemplo de ello sería la llamada agricultura climáticamente

inteligente (*climate-smart agriculture*; De la Vega-Leinert y Clausing 2016). Este acercamiento alienta a comunidades campesinas a adoptar técnicas de cultivo y manejo ecológicamente amigables, que aumentan su productividad y refuerzan la resiliencia de sus sistemas agrícolas (FAO 2013). No obstante, ha sido fuertemente criticada por: *a*) unir indiscriminadamente sistemas agrícolas diversos, ocultando así la contribución de la agricultura intensiva a las emisiones de gases de efecto invernadero; *b*) inducir la participación de comunidades campesinas en iniciativas globales de mitigación del cambio climático, y *c*) no visibilizar el hecho de que dichas comunidades son desproporcionadamente vulnerables al cambio climático a pesar de su limitada contribución al aumento global de emisiones. De tal forma, se induce la incorporación de los sistemas agroecológicos campesinos en cadenas de mercancías de alto valor y actividades comerciales complementarias no agrícolas que supuestamente aumentarán los ingresos sin perjudicar la riqueza ecológica, tales como el ecoturismo y programas de servicios ambientales (Campbell 2002; Epler Wood 2007; Rojas et al. 2009; Schroth et al. 2015; Phalan et al. 2016). Incluso, algunos mercados alternativos (orgánicos o de comercio justo), originalmente concebidos para garantizar los medios de vida de los campesinos al abrir el acceso a nichos comerciales de alto valor, en realidad recrean dependencias y cargas onerosas para los productores, sin asegurar ingresos estables y suficientes para mejorar las condiciones de vida de los productores a largo plazo (Weber 2007; Altieri y Toledo 2011).

Usamos el término *intensificación ecológica o sustentable* para hablar de estrategias para mejorar la productividad de sistemas de bajos insumos mediante prácticas agroecológicas tradicionales que combinan técnicas de manejo agrícola adaptadas a la localidad y que no causan deterioro ambiental (Pretty 1997; The Royal Society 2009; González de Molina 2013). Otros autores, sin embargo, sostienen que la intensificación sustentable debe trascender lo exclusivamente agrotécnico o la orientación al mercado, para buscar equidad en la distribución de los beneficios de la venta de productos, la autodeterminación, el empoderamiento de productores locales y la transparencia en las decisiones que afectan a las comunidades locales (Loos et al. 2014).

Dos casos emblemáticos

Dos estudios de caso, estructurados en forma similar, nos ayudan a ilustrar cómo el neoliberalismo remodela de forma importante los sistemas productivos locales. No se trata de un estudio comparativo, ya que los casos corresponden a contextos muy distintos: dos países —Vietnam y México— en diferentes regiones del mundo y caracterizados por distintas historias de ocupación y uso de la tierra. Se abordan transformaciones en dos sistemas productivos con diferentes cultivos: *a*) el arroz, un alimento básico vendido en mercados domésticos e internacionales, y *b*) el café, un cultivo colonial clásico transformado en una mercancía agrícola global que se combina en sistemas campesinos con cultivos de autoconsumo.

El conocimiento obtenido nos permitió identificar los aspectos semejantes y aquellos diferentes como contribución hacia un análisis comparativo. Tanto Vietnam como México han sufrido grandes transformaciones en el uso de la tierra desde 1980, a raíz de su integración a los mercados internacionales. Hasta entonces, sus respectivos Estados desempeñaban un papel preponderante en la estructuración y regulación del sector agrícola, pero ambos se retiraron, en mayor o menor medida, para orientar sus políticas agrícolas y alimenticias hacia el neoliberalismo. Así, por ejemplo, en su análisis del café, Eakin, Winkels y Sendzimir (2009) muestran lúcidamente que la integración de Vietnam como nuevo país productor del café tipo *robusta* para el mercado global golpeó a los productores campesinos de café arábigo en México, cuando colapsó el sector cafetalero regulado a nivel nacional por el Estado mexicano. Esto se debió en parte a nuevos métodos de procesamiento industrial que impulsaron el cultivo del café *robusta* para la producción masiva de mezclas (Gresser y Tickell 2002).

Tanto el café como el arroz pueden crecer en varios contextos de uso de la tierra, desde sistemas campesinos diversificados, que aún desempeñan un papel clave en la subsistencia local, hasta sistemas agroindustriales de monocultivo altamente intensificados. Ambos tipos de café son mercancías agrícolas importantes para el mundo y se venden en mercados convencionales o certificados. Todos estos elementos forman parte de las discusiones acerca del

impacto del neoliberalismo en el uso de la tierra. Centrando nuestra atención en realidades contrastantes, queremos visibilizar tendencias similares en cuanto a la forma en que las comunidades y sus sistemas productivos locales se ven afectados por las fuerzas del neoliberalismo que impulsan el cambio global.

De tazón de arroz a canasta de fruta: transformaciones de los sistemas de cultivo en el delta del Mekong, Vietnam

Nuestro primer estudio de caso examina el cultivo de arroz, principal fuente de calorías para los humanos (Awika 2011) y alimento básico de la mitad de la población mundial, de la cual 75 % vive en extrema pobreza (Zeigler 2012). La producción arroceras es determinante en el desarrollo de las tendencias agrícolas en todo el mundo, especialmente en Asia, donde se consume más del 90 % de la producción (Mohanty 2013). Las variedades locales, asociadas con prácticas culturales características (Tilliger et al. 2015), sostienen a agricultores y consumidores en todo el planeta (Das et al. 2013). Los efectos de la *revolución verde* en la producción de arroz (en términos de inversión de capital y rendimientos) persisten y siguen aumentando en algunos lugares, impulsados por previsiones que consideran necesario un importante aumento de la producción mundial para satisfacer la demanda futura. En Asia, la agricultura intensiva convencional moviliza flujos de nutrientes mediante fertilizantes comerciales y extensión del riego, esto es, mediante insumos técnicos que requieren combustibles fósiles. Sin embargo, en la literatura se cuestionan los efectos ambientales de dichas tendencias, apuntando a una falla sistémica respecto de la sustentabilidad agrícola del sector del arroz (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development 2009).

Las alternativas agroecológicas existentes, basadas en prácticas tradicionales o de ingeniería ecológica, se consideran opciones razonables para el manejo sustentable de paisajes agrícolas (Noguera et al. 2011); ayudan, por ejemplo, a mantener refugios ecológicos y hábitats para predadores y parasitoides que ayudan a controlar las poblaciones de insectos dañinos (Settele et al. 2015; Thanh Trùng et al. 2016). En un contexto donde predominan sistemas de

producción intensivos, las opciones basadas en el principio de la intensificación ecológica de la agricultura requieren mecanismos de diseño, implementación y monitoreo que fomenten interacciones benéficas entre los sistemas de cultivo, los paisajes donde se aplican y los elementos socioculturales que los rodean.²

Junto con la preocupación por mantener la calidad del arroz y reducir el uso de insumos agroquímicos, la diversificación de los cultivos es otra tendencia de los cambios en los patrones dietéticos de consumidores con mayores ingresos en la región Asia-Pacífico. Al igual que otros procesos de transición alimentaria global, la caída en el consumo de cereales (arroz) va acompañada de un mayor consumo de frutas y productos de origen animal (Asian Development Bank 2012; FAO 2014). Aunque los vietnamitas aún prefieren sus dietas tradicionales a los alimentos occidentales, se notan diferencias significativas entre los consumidores rurales y urbanos (Nur Indrawaty, Lin y Angeles-Agdeppa 2013). Estos últimos participan más en la transición alimentaria y terminan siendo los consumidores finales de los cultivos diversificados.

La investigación empírica ha demostrado que la diversificación beneficia a la intensificación ecológica de la agricultura en sistemas de producción de arroz (Gurr et al. 2016). Estudiamos la tendencia hacia la diversificación y la expansión de la producción de frutas en el caso concreto del delta del Mekong. Con este fin, examinamos las principales transformaciones socioecológicas en los sistemas agrícolas locales y las comunidades de productores surgidas en la región de estudio, así como los impulsores del cambio y sus potenciales implicaciones. Usamos la observación directa, entrevistas semiestructuradas y fuentes secundarias para obtener y analizar información como parte de un proyecto mayor —Legato—³ realizado entre 2011 y 2016. Los resultados detallados

² Aunque estamos conscientes de las sutiles diferencias entre las nociones de la intensificación ecológica de la agricultura y la intensificación sustentable (Tittonell 2014), en esta discusión las usamos como sinónimos.

³ Legato (Land-use Intensity and Ecological Engineering - Assessment Tools for Risks and Opportunities in Irrigated Rice-based Production Systems; <http://legato-project.net/>), financiado por el Ministerio Federal Alemán para la Educación y la Investigación, bajo el marco de investigación “Manejo sustentable de la tierra”.

aparecen en otra publicación (Solé et al. inédito), así que aquí enfatizamos las dinámicas globales/locales de dichos procesos.

El delta del Mekong es una de las zonas agrícolas y de acuacultura más productivas del mundo (Sneddon y Fox 2012). Es clave para la alimentación en Vietnam (produce más de la mitad del arroz consumido a nivel nacional) y en los países vecinos (el delta es un proveedor muy significativo para China, Filipinas, Indonesia y Malasia). En volumen, Vietnam es el tercer mayor exportador de arroz a nivel mundial. Se estima que envió al mercado internacional unas siete millones de toneladas durante 2015-2016, casi un tercio de la producción mundial (GAIN 2016a). Las granjas familiares orientadas a la producción para el mercado son la base del sector arrocero del delta del Mekong. Estas cuentan con parcelas de 1.2 ha en promedio y son más grandes y menos fragmentadas que en el norte del país. Suelen heredarse, pero algunas fueron distribuidas mediante programas de reforma agraria o adquiridas en subastas (Marsh y MacAulay 2006).

La intensificación del sector agrícola en el delta fue profundamente influida por la revolución verde, tal como sucedió en el sur y sureste de Asia en general pero en una época distinta. Interrumpidas por la guerra de Vietnam, las tasas de crecimiento de la producción de arroz alcanzaron niveles significativos en la década de 1980 y se mantuvieron hasta la primera década del siglo XXI, apoyadas por innovaciones biotecnológicas y por la política de liberalización económica conocida como Doi Moi e iniciada en 1986 (Ut y Kajisa 2006).

Algunos métodos de manejo agrícola asociados a la revolución verde, como el uso de agroquímicos y la ampliación de sistemas de riego, fueron claves para incrementar los rendimientos. Hoy el arroz es cosechado típicamente dos o tres veces al año —gracias a variedades de primavera, verano e invierno— con cosechas promedio de seis toneladas por hectárea al año. Varios centros de capacitación regionales ofrecen apoyo tecnológico, como la universidad Cần Thơ —la más grande en la zona—, creada en 1966, y la universidad Tiền Giang, fuertemente influenciados por el International Rice Research Institute (IRRI) con sede en Filipinas.

Aunque el delta es una región fundamentalmente agrícola, la población en zonas rurales se reorienta hacia nuevas actividades productivas más

características de procesos industriales (explotación marisquera, agroindustria, construcción, industrias ligeras y de alta tecnología), apoyadas por formaciones profesionales alentadas por el Estado. Dada la relativa escasez de opciones profesionales, los jóvenes de zonas rurales intentan capacitarse en estos nuevos sectores o migrar para buscar trabajos calificados en las ciudades (Dao y Nguyen 2015).

En realidad, los productores y exportadores de arroz operan en un contexto de cambio socioeconómico cuyas fuerzas motrices son el crecimiento económico, la industrialización y la urbanización; sin embargo, la brecha entre los salarios de las zonas rurales y urbanas no se ha reducido en décadas recientes. Estimaciones para el periodo 1993-2006 indican que el gasto medio per cápita de los hogares urbanos en Vietnam es consistentemente dos veces mayor que el de los rurales (Huong y Booth 2014). Años atrás, esta situación se amortiguaba en parte por una relación favorable entre los ingresos de los campesinos y los precios de los productos de consumo en zonas rurales, y por las remesas de migrantes. Sin embargo, la reducción de la rentabilidad de la venta de arroz es un factor clave que explica las decisiones de productores de convertir sus arrozales en huertas frutales. Como ya mencionamos, la agricultura arroceras en Vietnam se orienta a abastecer mercados nacionales e internacionales, pero los precios internacionales han caído desde mediados de la década de 2010 (FAO 2016), mientras que el costo de los agroquímicos ha crecido. Para muchos productores ya no es rentable aplicar insumos, aunque sus sistemas productivos dependen de ellos desde el proceso de modernización impulsado en el contexto del Doi Moi. Las empresas agroindustriales y de tecnología para el control de plagas tienen un papel importante en este modelo porque proveen los insumos químicos y las semillas, y en ocasiones compran el arroz una vez cosechado. La Asociación Alimentaria de Vietnam (Vietnam Food Association) sigue fijando el precio del arroz, pero esto no ha evitado una pérdida significativa de los ingresos reales (USDA Foreign Agricultural Service 2016).

Otros factores limitantes importantes son la disponibilidad de agua dulce, los estragos del cambio climático y la migración rural-urbana de mano de obra. En este escenario, algunos hogares rurales empezaron a sembrar huertas

frutales para satisfacer sus necesidades y, en algunos casos, producir un excedente que pudieran vender (De Lataillade et al. 2006). La diversificación de las dietas domésticas urbanas y el incremento de los ingresos llevaron poco a poco a cambios visibles en el uso del suelo, que transitaba del arroz a la huerta frutal. En el delta se multiplicaron los monocultivos de frutas comerciales, como plátano, carabao, durián, mango, guayaba, limón y jaca, entre otras. Ciertas políticas también impulsaron este cambio, por ejemplo, el fomento del acceso a mercados internacionales de exportación de frutas después de 1990. Nuestras entrevistas indican, no obstante, que el proceso de cambiar de la producción de arroz a la de frutas (y vegetales) no se debió tanto a decisiones gubernamentales como a decisiones individuales de productores.

Una vez iniciado el proceso de conversión en una comunidad, las condiciones tecnológicas pueden acelerar el cambio en el uso de la tierra. El cultivo de arroz está muy mecanizado, de manera que las tareas de preparar el suelo, sembrar, cosechar y aplicar pesticidas y herbicidas requieren del uso de maquinaria pesada. Ante ello, los productores coordinaban sus trabajos para compartir los equipos, y la maquinaria pasaba fácilmente de un campo a otro en un paisaje dominado por arrozales. Hoy, en contraste, un arrozal puede estar rodeado de huertas frutales, lo que dificulta el acceso de la maquinaria y su uso compartido. Por lo tanto, el cambio no se observa exclusivamente en el paisaje agrícola y tecnológico, sino también en el carácter progresivamente menos colectivo de la organización de las actividades agrícolas en las zonas dominadas por plantaciones frutales. Al mismo tiempo, y pese al rápido crecimiento de las huertas y su aparente éxito, persisten preocupaciones por la calidad de la fruta debido al uso indiscriminado de insumos agroquímicos y su relación con la salud y el medio ambiente.

Adicionalmente, no todas las familias tienen la misma capacidad de diversificar su actividad agrícola. Los hogares rurales sin tierra —claro, los más pobres— obtienen la mayor parte de sus ingresos de actividades no agrícolas fuera del campo (Bosma et al. 2005), lo que implica migrar a las ciudades. Esto exacerba la escasez de mano de obra para producir arroz, fenómeno que propicia una mayor participación de las mujeres en el cultivo de este cereal (FAO 2014). De hecho, algunas iniciativas de intensificación ecológica en el delta

han sido dirigidas por mujeres (Chien y Escalada 2012). Aunque tanto el valor instrumental como la visibilidad del trabajo de la mujer parecen aumentar, faltan estudios que evalúen los beneficios reales para ellas y los hogares que encabezan (Chi et al. 2010). Si bien existe desde hace tiempo una tradición comercial entre las mujeres vietnamitas, las reformas Doi Moi no pudieron transformar el contexto social contemporáneo, caracterizado por relaciones de género desiguales con limitado acceso de la mujer a redes comerciales dominadas por hombres, así como a la tierra, al apoyo técnico y al capital (Van 2008; Chi et al. 2010). Investigaciones de campo en la zona evidencian un desapego cultural de la población rural hacia los tradicionales sistemas de producción de arroz, y la erosión de servicios ambientales culturales vinculados con ellos (como el conocimiento etnobotánico); esto en un contexto de crecientes conflictos socioambientales asociados con actividades extractivas en Vietnam (incluida la acuicultura).

Como resultado de estos procesos, varios cambios en el uso de la tierra en el delta del Mekong tienden a reducir el área de producción del arroz. Primero, desde el año 2000, medio millón de hectáreas han sido convertidas a usos urbanos e industriales (Dao y Nguyen 2015). Una segunda tendencia, persistente y creciente, como vimos anteriormente, es la conversión de arrozales a huertas frutales. Tercero, los estragos ambientales del cambio climático a largo plazo y el aumento del nivel del mar son cada vez más visibles, especialmente a través de la salinización de los recursos hídricos y la inundación estacional de algunas parcelas, lo que afecta la productividad agrícola (tal como sucedió en la cosecha del 2016) y sigue impulsando cambios en el uso de la tierra. Para hacer frente a esta amenaza, además de invertir en los sistemas de riego que se promueven en algunas provincias, se incrementa la conversión —temporal o permanente— de arrozales en zonas de acuicultura. Algunos escenarios proyectan que el arroz desaparecerá totalmente de varias áreas del delta para el año 2030, lo que comprometería la producción requerida para satisfacer el consumo doméstico y la demanda de arroz para exportación (Van Dijk et al. 2012).

La difícil integración al mercado internacional del café de sombra campesino en Los Tuxtlas, México

Nuestro segundo estudio se enfoca en un cultivo *colonial tradicional*: el café, uno de los productos agrícolas más ampliamente comercializados en el mundo (Daviron y Ponte 2005). En la década de los setenta, la rápida expansión y la intensificación de las plantaciones cafeteras en todo el mundo, especialmente en los nuevos países productores de Asia, siguió el modelo de la revolución verde, generando recurrentes desequilibrios entre demanda y oferta (Eakin, Winkels y Sendzimir 2009). Anteriormente regulado por el Acuerdo Internacional del Café (ICA, por sus siglas en inglés), el sector global del café ha sido liberalizado y transformado profundamente desde fines de los años ochenta en un proceso que, para inicios de los noventa, provocó el colapso general del precio, con consecuencias catastróficas para los productores campesinos (Daviron y Ponte 2005). Hoy este sector se caracteriza por frecuentes altibajos, una fuerte volatilidad de precios y la concentración del valor agregado en manos de contadas corporaciones transnacionales (Jha et al. 2011).

Aunque una gran proporción del café mundial se cultiva ahora en monocultivos intensivos a pleno sol y con la aplicación masiva de insumos químicos, grandes cosechas de café de sombra de alta calidad se obtienen también de sistemas productivos campesinos de bajos insumos. Regiones ecológicamente ricas pero económicamente marginadas, especialmente en América Latina, producen algunos de los cafés suaves arábigos más cotizados a nivel mundial (Perfecto, Vandermeer y Wright 2009). Desde los años noventa, el sector *gourmet* ha creado un importante nicho comercial para cafés de alta calidad. Además, se han establecido varias certificaciones (café orgánico, de comercio justo) para alentar la preservación de sistemas agroecológicos de café y mejorar el precio para el productor, aunque se debate si esos mercados alternativos están cumpliendo lo prometido (Jaffee 2007).

Nuestro objetivo en este caso consistió en elaborar un detallado retrato del sector del café local en la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas (RBLT, Veracruz, México) para investigar:

- 1) la diversidad de los sistemas campesinos de cultivo de café;
- 2) cómo acceden los productores a los mercados para vender sus cosechas: ¿organizándose en cooperativas?; ¿mediante empresas privadas?, ¿a través de intermediarios?;
- 3) cómo los productores adaptaron sus sistemas productivos y estrategias de supervivencia a las condiciones cambiantes de la cadena comercial global del café, y finalmente,
- 4) qué estrategias de producción, procesamiento y comercialización (incluidas las certificaciones orgánicas y de comercio justo) escogen los procesadores locales (organizados en cooperativas o empresas privadas) para mejorar su acceso al mercado.

Realizamos un detallado estudio basado en métodos cualitativos para explorar explícitamente hasta qué punto los productores logran mejorar su producción y acceso al mercado. Recogimos datos mediante entrevistas semiestructuradas, observación de campo durante visitas a plantaciones cafetaleras y plantas procesadoras y a través de documentos inéditos (informes internos, evaluaciones técnicas externas, certificados de producción orgánica) e información en línea (páginas web de procesadores y minoristas de café, datos estadísticos oficiales de fuentes gubernamentales). Realizamos 45 entrevistas individuales o en grupo entre agosto y octubre de 2011, seguidas por visitas en 2013 para actualizar la información y comunicación hasta 2015 con actores importantes de la región. En total entrevistamos a 95 personas, entre ellas líderes comunitarios y productores (algunos miembros de cooperativas, otros no), en las 14 principales comunidades productoras de café en la RBLT, así como en las principales empresas que procesan y tuestan el café a nivel local. Procesamos y triangulamos los datos empíricos y documentales siguiendo los procedimientos establecidos para el análisis de contenido. Los resultados detallados se encuentran en otras publicaciones (De la Vega-Leinert et al. 2015, 2016, 2018).

La región de Los Tuxtlas es uno de los cinco sitios más ricos en cuanto a biodiversidad en México por sus variados sustratos geológicos, empinadas laderas (0-1 720 m sobre el nivel del mar) y la influencia marítima del Golfo de

México. La RBLT es una área protegida pequeña (155 122 ha) pero densamente poblada (ca. 32 000 habitantes en 2001; Conanp 2006). Tradicionalmente, sus sistemas productivos combinan varios cultivos de autoconsumo y comerciales (especialmente maíz, frijol, cacahuete, café) con pastizales. Desde la década de 1950, la deforestación ha afectado fuertemente a la región con la pérdida de hasta el 85 % del bosque nativo alrededor del volcán San Martín en su parte oriental (Dirzo y García 1992). Los principales impulsores de este fenómeno fueron programas de reforma agraria (que asignaron zonas boscosas marginales a campesinos sin tierras) e iniciativas nacionales de expansión de la frontera agrícola, que impulsaron la ganadería y la intensificación del cultivo de café (Paré y Fuentes 2007). Algunos esfuerzos de conservación lograron la designación de una área protegida en 1998, que la Unesco formalizó en 2006 como la RBLT. El área tiene un sistema de zonificación conformado por tres zonas núcleo de protección estricta (en las tierras más altas de los principales volcanes de la región), y que regula el uso de la tierra en la zona de amortiguamiento, donde se impulsa la restauración ecológica y la conversión a prácticas agrícolas sustentables (Conanp 2006). En el papel también existe una zona de transición, pero el marco normativo mexicano de conservación no la reconoce (Guevara Sada, Laborde y Sánchez 2000).

Casi no hubo consulta con la población local durante el proceso de creación de la RBLT que, a pesar de esto, está sujeta a las restricciones impuestas sobre el uso de la tierra. Aparte de eso, el Gobierno expropió cerca de 16 000 ha de tierras comunales y privadas para formar una de las zonas núcleo. Estas medidas exacerbaron la escasez de tierra e intensificaron las tensiones entre campesinos marginados que querían explotar la tierra que obtuvieron durante el reparto agrario (Durand Smith y Ruiz Cedillo 2009; Negrete-Yankelevich et al. 2013). Los resultados son el recurrente incumplimiento de los reglamentos de conservación y un permanente proceso de deforestación para abrir pastizales en áreas colindantes o incluso al interior de las zonas núcleo (Conanp 2011). En contraste, las autoridades de conservación alientan el mantenimiento de las plantaciones cafetaleras en las tierras altas porque son en su mayoría sistemas agroforestales extensivos.

Las plantaciones de café de sombra en la RBLT corresponden a tres principales sistemas de cultivo (Moguel y Toledo 1999; Conanp 2006): en las tierras altas la producción refleja el llamado *manejo rústico*, en el que la vegetación baja del bosque natural se reemplaza con matas de café; el *tradicional policultivo de sombra*, que combina varios cultivos básicos y comerciales con sombra seminatural; más abajo, el bosque natural se eliminó hace tiempo y las plantaciones cafetaleras suelen ser de tipo *policultivo comercial*, donde se combina el café con cultivos y árboles comerciales, y adicionalmente, el *monocultivo simplificado* bajo la sombra de árboles *inga* es un cuarto sistema menos común.

Durante años, el cultivo de café contaba con el apoyo sólido del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) mediante subsidios, infraestructura de proceso, servicios de asesoramiento técnico y precios fijos (Potvin et al. 2005). El desmantelamiento de esta paraestatal, acto que coincidió con el colapso del ICA, fue un duro golpe para los pequeños productores de café (Pérez Akaki y Echánove Huacuja 2006). A principios de los noventa, unas 1 700 familias dependían principalmente de los ingresos generados en aproximadamente 6 400 ha de cafetales en la RBLT (Conanp 2006), pero para el 2014 el área cultivada en café apenas alcanzaba las 3 800 ha (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 2016).

El índice de marginación económica en el área de estudio es entre “alto” y “muy alto” (Conanp 2010), y sondeos locales indican que, por lo general, las familias viven en condiciones precarias (muchas de ellas vivían en 2004 debajo de la línea de pobreza de dos dólares al día; Ayuntamiento de Soteapan 2010). Un factor clave es la escasez crónica de tierra que afecta a muchas familias campesinas, las cuales recibieron parcelas en propiedad particular o comunal (el régimen ejidal) durante un largo proceso de Reforma Agraria entre las décadas de 1950 y 1970 (Negrete-Yankelevich et al. 2013). Aunque las parcelas originales varían en extensión de 20 a 26 ha por ejidatario, se han ido dividiendo entre los descendientes, hasta que al día de hoy muchos productores cuentan con menos de 2 ha. Se observa, además, una tendencia a cierta concentración de la tierra en manos de los productores más exitosos, facilitada por la revocación de la protección de la tenencia comunal del sistema ejidal en

1992, que legalizó los títulos de propiedad para parcelas individuales, así como la compraventa y el arrendamiento de tierras colectivas (Paré y Fuentes 2007).

El cultivo de café en la RBLT ha cambiado drásticamente en décadas recientes. En un esfuerzo por adaptarse a los recurrentes colapsos del precio y aprovechar oportunidades, los productores combinan estrategias que incluyen actividades tanto en la parcela como fuera de ella. Sus familias viven de una combinación de actividades agrícolas tradicionales, trabajo asalariado local (agrícola), subsidios públicos y migración temporal o permanente. Aunado a ello, siguen tres estrategias genéricas del uso de la tierra:

- 1) Reactivan plantaciones cafetaleras y mejoran la productividad y calidad aplicando técnicas de manejo agrícola convencionales u orgánicas (renovando o expandiendo las zonas cultivadas). Esto puede impulsar la reforestación de tierras degradadas o marginales, o bien la tala completa o parcial de árboles de sombra nativos.
- 2) Diversifican sus plantaciones de café en sistemas agrosilvopastoriles integrando nuevos cultivos comerciales (palmas de ornato, pimienta verde, plátano), pastizales y árboles maderables comerciales. La diversificación puede, además, aplicarse en otras parcelas al combinar, por ejemplo, huertas frutales comerciales (p. ej., lichi) con pastizales.
- 3) Abandonan las plantaciones e introducen cultivos más rentables o buscan fuentes alternativas de ingreso fuera de la agricultura. Sus parcelas pueden ser transmitidas a campesinos sin tierra, adquiridas o arrendadas por productores más exitosos. Las parcelas con bosque natural pueden entrar en programas de pago por servicios ambientales, aunque esto implica renunciar a la explotación de recursos forestales y puede acentuar la escasez de tierra.⁴

Estas estrategias genéricas de uso de suelo podrían ser compatibles con la intensificación sustentable arriba mencionada. La zona cultivada puede extenderse a costa del bosque natural, mientras que la reactivación de las plantaciones

⁴ Ver Legorreta Díaz et al. (2014) para un análisis de este fenómeno en Chiapas.

cafetaleras o su conversión a otras actividades agrícolas podrían provocar el empobrecimiento de la composición y extensión de la sombra de árboles nativos, e incluso acarrear un mayor uso de insumos químicos. Al mismo tiempo, las plantaciones de café también pueden extenderse sobre tierras degradadas y restaurar la cobertura arbórea, mientras que la conversión orgánica y la diversificación pueden contribuir a proteger importantes servicios y funciones ambientales.

Estos cambios del uso de la tierra están íntimamente relacionados con importantes transformaciones en el procesamiento y comercialización de café a nivel local. Como hemos mencionado, hasta finales de la década de 1980, el Inmecafé estructuraba el sector al canalizar subsidios y brindar servicios de asesoramiento técnico a los productores a través de cooperativas que recibían, procesaban y entregaban el café a la paraestatal para su exportación. Dos cooperativas principales, Cerro Cintepec y la Unión Regional, acaparaban el café de cuencas distintas, aunque parcialmente traslapadas. En ese entonces, ambas cooperativas atraían a una amplia membresía, lo que a principios de los años noventa permitió llenar el vacío dejado por el desmantelamiento del Inmecafé y rescatar algo de la infraestructura de procesamiento que anteriormente pertenecía al Estado. Aunque las dos organizaciones lograron desarrollarse gracias a subsidios y créditos preferenciales, luego tomaron caminos distintos.

Cerro Cintepec se abastece de café de plantaciones en tierras bajas sobre las laderas del volcán Santa Marta (mayormente en la zona de transición de la RBLT), que generalmente producen bajo el sistema tradicional rústico y de policultivo comercial. Cerro Cintepec encabezó la conversión al cultivo orgánico y, a principios de la década de 2000, obtuvo la certificación orgánica para mercados en Estados Unidos y Europa, así como la de comercio justo. Para el 2010 vendía café de exportación certificado mediante redes de cooperativas de café orgánico y de comercio justo nacionales e internacionales. Registró su propia marca (Café Sierra de los Tuxtlas), para la cual tostaba café orgánico (para turistas y ventas extrarregionales) y convencional (mezclado con azúcar para consumo local). También promovió una interesante mezcla de actividades en su sistema de policultivo, que combinaba la reforestación con la producción comercial de frutas, pimienta verde, palmas de ornato y pastizales. En 2013

ya había alcanzado cierta visibilidad, pero seguía sin poder concretar acuerdos contractuales a largo plazo. Su crónica falta de liquidez retrasaba los pagos y afectaba el precio de su café, situación que empeoraba por diversos problemas internos que generaron descontento y deserción de numerosos socios. En 2015, Cerro Cintepec seguía adelante, pues tenía pocos competidores a nivel local, salvo en tiempos de baja producción cafetalera, cuando se veía obligada a aumentar el precio para cumplir con sus compromisos de venta.

En contraste, en 2010, la Unión Regional estaba en un franco proceso de reestructuración, tras serios problemas de administración interna que provocaron la salida de muchos de sus socios. La Unión conseguía su café de plantaciones en tierras altas de la zona de amortiguamiento (algunas de las cuales colindaban con la zona núcleo del volcán Santa Marta), donde los productores aplicaban insumos químicos solo cuando sus ingresos lo permitían. Por esta razón, su uso no era común. Aparte, la Unión nunca emprendió un proceso formal de conversión orgánica, así que vendía su café a un exportador en el mercado convencional. Durante nuestro trabajo de campo, la Unión intentaba reactivar y expandir la zona cultivada para aumentar su producción y conseguir mayores contratos de venta. Nada le impedía, en principio, incrementar el valor de su producto mediante la conversión orgánica y la creación de una marca de “café de altura”, pero enfrentaba una fuerte competencia de parte de varios actores que extraían café de las mismas comunidades, por ejemplo, intermediarios externos, entre ellos la más grande procesadora privada local (Café Sierra S. A. [Casisa]), que exportaba café verde convencional y comercializaba marcas propias de café tostado (Café Junco), cooperativas menores (Cerro del Gallo y Uxuctero) y negocios privados creados por exmiembros de la Unión. Por ejemplo, Café Oro de los Tuxtles —fundada por un antiguo líder de la Unión y un operador turístico local (bien relacionado con importadores alemanes)— es una empresa emergente establecida en 2014 que, para el 2015, exportaba café a Alemania y comercializaba marcas de café tostado a nivel local. Por consiguiente, la constelación de actores en el sector café de la RBLT se fragmenta gradualmente y se vuelve más compleja. Aunque Cerro Cintepec y la Unión Regional tuvieron un papel crucial en mantener el cultivo

de café frente a las secuelas del colapso de precios a principios de los noventa, varios problemas internos y externos las han debilitado progresivamente.

En el área de estudio también resalta un proceso de diferenciación entre productores. Según su base de recursos y grado de organización (colectiva), estos gozan de mayores o menores oportunidades para escoger entre varias estrategias del uso de la tierra, que fomentan o impiden sinergias entre la conservación y mejores medios de vida, así como para negociar alianzas benéficas y aumentar su control sobre el componente local de la cadena de mercancías. Los productores marginales no organizados en una cooperativa normalmente carecen de los recursos necesarios para adquirir sistemáticamente técnicas adecuadas de manejo agrícola, conseguir la mano de obra necesaria durante los periodos de trabajo intensivo en la finca cafetalera (especialmente si sus familiares han emigrado) o para obtener el financiamiento requerido para emprender el costoso proceso de conversión. Su posición rara vez les permite negociar mejores precios. En estos casos, el café solo puede ser una de varias fuentes de ingreso, pero es incapaz de garantizar por sí mismo un ingreso estable y suficiente. Los productores organizados, en contraste, gozan de varios beneficios: precios fijos, apoyo técnico y financiero, propiedad colectiva de la infraestructura de procesamiento y participación en la administración de la cooperativa. Participar en una cooperativa puede, además, traer valiosos conocimientos y contactos que ciertos productores pueden explotar para establecer negocios propios y entrar en competencia directa con las cooperativas y otros intermediarios.

Nuestro estudio de la RBLT muestra que los sistemas agroecológicos de producción de café siguen siendo importantes en la región, y resalta la ingeniosidad de productores que, pese a enormes obstáculos estructurales, siguen buscando nuevas maneras para mejorar su producción contra un trasfondo de creciente competencia internacional y normas de calidad más estrictas. No obstante, pocos productores han logrado encontrar accesos directos al mercado y adquirir más control dentro de la cadena local del café. De esta forma, la mayoría depende de las cooperativas o de intermediarios particulares, y no logra vivir dignamente de sus ingresos provenientes del café.

Nuestro análisis enfatiza a su vez las estrechas interacciones entre las estrategias del uso de la tierra y las de integración al mercado que los cafetaleros adoptan al ajustar sus actividades a las cambiantes condiciones de la cadena internacional de la comercialización del café. En la RBLT, la capacidad de mejorar los sistemas productivos y medios de vida a largo plazo depende en buena medida del acceso que tiene el productor a recursos productivos y financieros, a la capacitación técnica y a redes que facilitan el acceso al mercado. Nuestra investigación sugiere que los nuevos nichos comerciales del café de calidad y las dinámicas del mercado abren oportunidades para algunos productores, pero también acrecentan las asimetrías sociales dentro de las comunidades campesinas cafetaleras y debilitan sus cooperativas, de tal suerte que muestran resultados mixtos en cuanto a su capacidad para conciliar los objetivos de conservación con mejores condiciones de vida.

Discusión

Pese a la disparidad en las transformaciones en el uso de la tierra a nivel local que observamos en los dos estudios de caso presentados y en los procesos que los impulsan, existen también temas en común. Tanto el arroz en Vietnam como el café en México son cultivos clave de los sistemas productivos campesinos que, desde hace varias décadas, han sido integrados a los mercados nacionales e internacionales, aunque con la mediación de políticas e instituciones estatales fuertes. Los vínculos entre comunidades productoras locales, sistemas de gobierno nacionales y cadenas de mercancía globales se ven profundamente afectados por las políticas agrícolas neoliberales. Esto nos lleva a resaltar varios aspectos que deben analizarse con más detalle a fin de entender mejor las transformaciones observadas en los sistemas productivos locales de las comunidades que investigamos.

Ambos estudios indican que estas transformaciones se articulan alrededor de *la conversión o la incorporación de mercancías agrícolas* en la matriz productiva “tradicional”. Las actividades emergentes incluyen la producción de nuevos cultivos alimenticios tanto para el consumo humano urbano como

para mercados internacionales. Esto contrasta con otras regiones del mundo, donde los cambios en el uso de la tierra han sido impulsados por la conversión a las llamadas *flexcrops* —cultivos y plantaciones agroindustriales, por ejemplo, soya y palma aceitera—, que pueden cultivarse con varios propósitos, incluido el consumo humano y animal u obtener materias primas para la industria alimenticia o energética (Borras et al. 2014). En el delta del Mekong, la diversificación del monocultivo de arroz para incorporar huertas frutales tuvo el doble objetivo de enriquecer las dietas locales (originalmente) y obtener ingresos adicionales por ventas en zonas urbanas de la región y mercados de exportación (razón principal en la actualidad). Los productores de café en la RBLT que tradicionalmente complementaban su actividad con cultivos de subsistencia y pastizales, ahora incorporan cultivos comerciales (pimienta verde, lichi, cacahuates)⁵ así como cultivos no alimentarios, como palmas decorativas.

Al modificar su mezcla de cultivos, esos productores pueden diversificar la base alimenticia local, pero también pueden reducirla sustancialmente. La producción de nuevos cultivos comerciales para generar ingresos adicionales puede, en efecto, afectar la capacidad local de producción alimentaria, y con ello, la disponibilidad local de alimentos. Este es un hallazgo importante del estudio en el delta del Mekong. En Vietnam, como en otras regiones de Asia, está disminuyendo la proporción de arroz en las dietas nacionales, puesto que una clase media emergente aumenta su consumo de carne y otros alimentos más sofisticados. La pasión de los vietnamitas por las frutas nutre el proceso de la conversión de arroceras a plantaciones de árboles frutales, pero al afectar la oferta de arroz, se arriesga la seguridad alimentaria. Esto sucede a nivel nacional en Vietnam pero también en países vecinos, particularmente en los sectores más desfavorecidos de la población, ya que Vietnam es un proveedor muy importante de arroz de menor calidad y precio a nivel regional.

Aunque intensamente criticados, los defensores de las políticas agrícolas neoliberales aportan dos argumentos principales. Primero, sostienen que los Estados deben fomentar las ventajas comparativas nacionales y regionales por medio de la especialización en el monocultivo intensivo de productos agrícolas

⁵ En el policultivo de café y en parcelas separadas.

comerciales de alto rendimiento y adquiriendo otros productos a precios bajos en el mercado internacional (González 2011). Segundo, respecto de tierras no aptas para la agricultura intensiva, hay dos recomendaciones en la literatura que apoyan la llamada “teoría de la transición del bosque”; así, para permitir la regeneración del bosque en áreas degradadas es imprescindible concentrar e intensificar la agricultura en tierras aptas para ello (Mather y Needle 1998), mientras que en tierras consideradas como marginales, el uso de suelo extensivo tendría que ser abandonado (Grau y Aide 2008). No obstante, para promover la restauración de suelos degradados y la regeneración de áreas ecológicas frágiles, ciertos autores proponen explotar diversos productos agroforestales de alto valor comercial (Schroth et al. 2015). Los discursos neoliberales sobre la economía verde enfatizan que las estrategias “gana-gana” de este tipo pueden fomentar el desarrollo nacional, por ejemplo, generando oportunidades para mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los campesinos en zonas económicamente marginales pero ecológicamente diversas; sin embargo, lo que esas estrategias buscan esencialmente es vincular a las comunidades campesinas a cadenas internacionales de valor (convencionales o certificadas).⁶

Convencional u orgánica, la agricultura para exportación mantiene la dependencia del productor hacia actores externos (proveedores de insumos, compradores, instituciones de certificación), y lo condena a enfrentarse a la volatilidad de los precios en mercados internacionales. Sin alternativas para asegurar la soberanía alimenticia local, la agricultura para exportación genera, eso sí, enormes externalidades ambientales y sociales, al aumentar las distancias entre la producción y el consumo de alimentos, y empeorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores agrícolas (Altieri y Toledo 2011; Kerssen 2013; Clapp 2015). Aunque estas tendencias caracterizan al comercio internacional en una economía de mercado, un impacto específico del neoliberalismo es la gradual rearticulación de las políticas públicas agrícolas y alimentarias alrededor del mercado de exportación, aunada al desprecio de los mercados domésticos y los circuitos alimentarios cortos. Si hasta la década de 1980 la meta explícita de estas políticas era lograr la autosuficiencia alimentaria

⁶ Ver la propuesta de “la otra frontera” (PNUD 2008).

nacional mediante la sustitución de importaciones, el neoliberalismo condiciona la seguridad alimenticia en países del Sur global a la importación de alimentos básicos baratos —un mercado dominado por varios países del Norte global— y a la exportación de mercancías agrícolas de mayor valor al final de la cadena comercial, como el café o las frutas tropicales.

Ciertamente, la integración al mercado a través de la especialización o diversificación abre ventanas de oportunidad para los campesinos, pero solo en la medida en que estos logren satisfacer las condiciones de calidad y cantidad necesaria para la exportación y vencer varios obstáculos en el camino. En nuestro estudio en la RBLT, los factores que facilitan la integración al mercado son los recursos con que cuentan los productores (principalmente la tierra), el volumen de sus cosechas, sus redes y el acceso al asesoramiento técnico. Al ser socios, los productores con más recursos pueden beneficiarse más de las infraestructuras de las cooperativas, de sus economías de escala y de las inversiones colectivas mientras comparten los riesgos y costos de operación. Conforme las plantaciones más productivas rindan mayores ganancias, aumentará la capacidad de inversión y los productores con más recursos podrían adquirir parcelas adicionales para expandir sus fincas, contratar más mano de obra, obtener asesoramiento técnico y diversificar las actividades que generan ingresos (Ruben y Masset 2003).

No obstante, la diversificación hacia mercados de exportación implica amenazas. Nuestros estudios revelan un proceso de diferenciación que exacerba las asimetrías en las comunidades campesinas, a las cuales debilita, y pone en jaque los valores e iniciativas colectivos. Además, cada rubro tiene sus propios sistemas de cultivo, calendarios de producción, rutas de comercialización, mecanismos de determinación de los precios y características específicas de la cadena comercial. Aunque la diversificación suele buscar el incremento de la capacidad de adaptación de familias a largo plazo, implica también grandes riesgos para los productores campesinos. Por ejemplo, conforme la producción de los cultivos comerciales se vuelve más compleja, disminuyen el tiempo y los recursos disponibles para los cultivos de subsistencia. De igual modo, la falta crónica de capital constriñe la posibilidad de almacenar, procesar y

comercializar adecuadamente los productos, con lo que se deja a los campesinos a merced de intermediarios.

Como indicamos en el caso del delta del Mekong, estos procesos impactan con especial fuerza a los miembros más vulnerables de las comunidades, especialmente a las mujeres, quienes suelen tener menos acceso al capital financiero y social, así como a los procesos de transferencia de conocimiento. No obstante, cuando se les brindan estos recursos, es mucho más probable que ellas participen en programas de capacitación e innoven en sus actividades agrícolas, como muestran los primeros experimentos de ingeniería ecológica en la producción de arroz realizados en Tien Giang y apoyados por el IRRI.

Tanto en Vietnam como en México resalta la capacidad de adaptación de los campesinos: los productores de ambos países han tenido que llenar —individual o colectivamente (en cooperativas)— el vacío que dejó el dismantelamiento de la agricultura (campesina) sostenida por el Estado. Más aún, tuvieron que aprender a competir en mercados globales sin las políticas e instituciones estatales que antes amortiguaban la volatilidad internacional de la demanda y los precios. Para sobrevivir como productores agrícolas, están obligados a buscar nuevas oportunidades y adaptar sus sistemas productivos a fin de responder a las necesidades locales y a las ventanas de oportunidad abiertas por las cadenas globales de mercancías. Se podría argumentar que esto es exactamente lo que los discursos neoliberales de política agrícola resaltan: la capacidad de los productores de convertirse en empresarios responsables de su propio éxito; no obstante, sufren —solos— las consecuencias si no logran ser competitivos. En la práctica, la narrativa neoliberal ignora la difícil situación de los campesinos, los numerosos obstáculos que enfrentan y su reducido campo de maniobra para explotar las estrategias que, sobre el papel, prometen una exitosa integración al mercado en regiones con graves deficiencias de desarrollo estructural. Estos mecanismos fomentan la creciente diferenciación social en las comunidades campesinas. Mientras algunos productores campesinos logran adaptarse y explotar nuevas alternativas económicas, muchos más permanecen en la precariedad, condenados a ocupar el eslabón más bajo de la cadena comercial o a ser expulsados del ámbito rural.

Las decisiones de los campesinos sobre sus medios de vida se traducen directamente en transformaciones en el uso de la tierra que pueden sucederse muy rápidamente y, al acumularse, tener importantes repercusiones. Así, por ejemplo, desde que recolectamos los datos para el estudio de la RBLT, México ha sido azotado por la roya del café. Para combatir esa plaga que daña particularmente las especies de café arábigo, muchos productores han convertido sus campos al café *robusta* (Valencia et al. 2018). La conversión es apoyada con subsidios públicos de la Sagarpa en una alianza con la empresa transnacional Nestlé. Para el año 2016, en Veracruz ya estaban convertidas 2000 ha (GAIN 2016b). Pese a la alta demanda internacional del café arábigo (orgánico), las bajas ganancias, el difícil acceso a los mercados internacionales, la volatilidad de precios y las bajas cosechas recurrentes (por sequías o por la roya) obligan a muchos productores campesinos en México y América Latina a regresar a métodos agrícolas convencionales (Giannessi 2013; Avelino et al. 2015), con ello amenazan décadas de esfuerzo para fomentar la intensificación sustentable y comprometen su futuro acceso a mercados de calidad. Esta tendencia ilustra bien cómo las políticas neoliberales empeoran la base de recursos y las condiciones de vida de muchas comunidades al discontinuar el apoyo para la agricultura campesina.

Otro elemento de ambos estudios que requiere una exploración más detallada es la compleja interacción entre la matriz productiva, el uso de la tierra, los mercados laborales urbanos y rurales, y las dinámicas demográficas. La agricultura campesina, sea de autoconsumo o comercial —suele realizarse por los miembros de una unidad doméstica en parcelas pequeñas, aunque se puede requerir mano de obra adicional en algunos momentos, p. ej., para preparar la tierra y cosechar—. Puesto que estos sistemas operan a menudo en áreas periféricas con altas tasas de marginación económica, los cambios en la productividad, las ganancias y el grado de intensificación del sector agrícola local impulsan —y son impulsados por— los cambios en las oportunidades abiertas a los trabajadores rurales. Cuando sobran trabajadores, la emigración —especialmente de varones jóvenes— puede alterar significativamente las opciones para sostener los sistemas agrícolas locales y desarrollar actividades alternas que tienen los miembros de la familia que se quedan en las comunidades.

Es difícil evaluar los beneficios concretos de las remesas que envían los migrantes a sus comunidades, pero sin duda son importantes para el ingreso familiar. Pueden destinarse a varios propósitos (educación, atención médica, inversiones en sistemas productivos, compra de bienes de consumo), y tienen diferentes implicaciones, directas o indirectas, para el uso de la tierra. Al mismo tiempo, la introducción de nuevos cultivos comerciales de alto valor y el prospecto de mayores ingresos pueden alentar el retorno de los migrantes. Además, la migración suele ser circular, especialmente la migración doméstica de carácter temporal. En este caso, y dependiendo de las fluctuaciones en los mercados de mano de obra externos, algunas familias logran combinar el trabajo en parcelas individuales con periodos de trabajo asalariado afuera. Estas dinámicas de mano de obra locales se relacionan, desde luego, con tendencias más amplias que se deben tomar en consideración, e incluyen la disponibilidad de subsidios agrícolas (que afectan el ingreso familiar), las oportunidades laborales para migrantes y las políticas migratorias (especialmente a nivel internacional).⁷

En la RBLT la migración, tanto nacional como internacional, empezó a cobrar importancia con el desmantelamiento de las empresas agrícolas paraestatales que apoyaban a la producción local con insumos y la compra garantizada de las cosechas locales a un precio fijo mayor al de los mercados internacionales. Esto no solo ocurrió con el café, sino también con el maíz, a través de y con las empresas estatales Conasupo (que, entre otras tareas, apoyaba a la producción, procesamiento y venta de alimentos básicos, especialmente el maíz) y Fertimex (que suministraba insumos químicos; Potvin et al. 2005; Nadal y García Rañó 2009; Groenewald y Van den Berg 2012). Hasta el momento de la liberalización de la agricultura mexicana, el sector cafetalero de la región de Los Tuxtlas daba trabajo a buena parte de la población local, al menos en las etapas de preparación de la finca y cosecha, de manera que, al colapsar los precios internacionales de café en los años noventa, la emigración, especialmente

⁷ Esto es particularmente importante en el contexto del discurso antimigratorio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su plan de construir un muro para detener la inmigración de trabajadores latinoamericanos.

de varones jóvenes, se volvió una estrategia común de supervivencia (Paré y Fuentes 2007). Es importante señalar que tras la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos, muchos migrantes regresaron. Cuando algún miembro de un hogar deja la zona permanentemente, las parcelas que abandona pueden pasar a miembros de la comunidad sin tierras, venderse o rentarse a productores más prósperos, aunque si son distantes y difíciles de cultivar, quizá queden abandonadas (De la Vega-Leinert et al. 2016). Claro está que se requiere un análisis más detallado para entender cómo la migración en esta región podría aliviar la escasez de la tierra o, al contrario, facilitar su concentración y exacerbar con ello las asimetrías entre productores.

Tampoco sorprende que la baja rentabilidad agrícola expulse a la población rural hacia otras actividades, como en el caso de Vietnam. El cambio de la producción de arroz a la de frutas en algunas partes del delta del Mekong acompaña la migración de trabajadores pobres a zonas urbanas. Aunque se podría argumentar que las ciudades también atraen con mejores salarios a los migrantes, es cierto que las escasas alternativas en el campo dejan pocas opciones a la gente sin tierra. Pero nuestro estudio en Vietnam señala otro elemento importante de los mercados laborales locales: la escasez de mano de obra local y las dinámicas migratorias puede tener causas independientes de transformaciones relacionadas directamente con los sistemas productivos locales, debido a cambios en la demanda de mano de obra o a la presencia de mejores salarios en otras regiones, especialmente en sectores industriales y urbanos. Robbins et al. (2015) han observado la importancia —poco estudiada, por cierto— de la disponibilidad de mano de obra barata como factor decisivo en el cultivo de mercancías agrícolas que necesitan una importante fuerza laboral, por ejemplo, el caucho o el café. Este capítulo aporta varios elementos para desarrollar la reflexión sobre este tema.

En el estudio en Vietnam, la principal razón de la baja rentabilidad agrícola no es la caída del precio del arroz (y, por ende, de los ingresos provenientes de su venta/exportación) exclusivamente, sino también los constantes aumentos en los precios de los —ya de por sí onerosos— insumos químicos, especialmente pesticidas. El elemento clave que explica la disminución de la rentabilidad es el aumento desmedido de los gastos fijos en agroquímicos respecto a

los beneficios de la venta de la cosecha. Así, el cambio hacia la producción de frutas podría entenderse como una estrategia que tiende a reducir de cierta manera la gran dependencia hacia estos insumos. Si bien el uso de pesticidas en las plantaciones frutales también es alto, se percibe como menor respecto al que se requiere en el cultivo intensivo de arroz. Esta tendencia puede propiciar una reducción de las externalidades ambientales y mejorar los indicadores de biodiversidad. Empero, esta reorientación de la actividad agrícola hacia plantaciones frutales no necesariamente contribuirá a garantizar ingresos más altos a largo plazo, pues su rentabilidad será afectada por la volatilidad de los precios de la fruta en mercados internacionales.

Un último aspecto que queremos enfatizar es que ambos estudios de caso permiten adentrarnos en una progresiva erosión de los valores colectivos y la transformación de sistemas de gobernanza agrícola en múltiples escalas. Estos son fenómenos complejos que no podemos atribuir únicamente a los impactos del neoliberalismo en comunidades agrícolas, pero, sin duda alguna, han contribuido a redefinir cómo los productores en sus comunidades acceden a, regulan y usan la tierra; desarrollan e implementan estrategias para ganarse la vida, y cómo toman decisiones tanto individual como colectivamente. Es importante señalar asimismo que el vacío dejado por el retiro del Estado ha permitido a las estructuras y organizaciones colectivas tomar formas específicas. Es el caso, por ejemplo, de las cooperativas de café en la RBLT, que al principio tenían un papel de intermediario entre los productores y la paraestatal Inmecafé, pero luego evolucionaron hasta convertirse en entidades colectivas independientes, aunque con muchas limitantes. Dicho esto, la extensa fragmentación y competencia dentro del sector cafetalero en la RBLT, inmerso como se encuentra en el actual mercado internacional desregulado del café, lo han convertido en suelo fértil para el surgimiento de nuevos tipos de empresarios. Estos aprovechan las redes y el conocimiento acumulado con esfuerzo por las cooperativas en décadas pasadas para establecerse como intermediarios o poner negocios propios. Al hacerlo, sin embargo, propician el desmantelamiento de las cooperativas, pues se fomenta la deslealtad y la deserción de sus miembros. Ello incrementa la tendencia hacia la diferenciación entre los productores, proceso que suele dejar a los más marginados como simples productores contratados.

En el delta del Mekong las decisiones de dejar el arroz y de producir frutas afectan el concepto de la orientación comunal hacia la agricultura en al menos dos sentidos clave: primero, reflejan las *elecciones individuales* de productores sobre lo que deben cultivar en sus granjas; segundo, al ser individuales, estas decisiones impiden cada vez más la posibilidad técnica de compartir maquinaria y equipos de manera colectiva, una práctica estándar entre los productores de arroz anteriormente. Además, conforme más productores pasan a cultivar frutas, crece el distanciamiento cultural de los sistemas de producción de arroz.

Conclusiones

Este capítulo ha mostrado cómo los cambios en el uso de la tierra en comunidades campesinas se constituyen como síntomas de transformaciones socioecológicas más profundas en las sociedades rurales. El neoliberalismo ha exacerbado estas transformaciones de varias maneras; por ejemplo, al reformular las políticas agrícolas y alimentarias características de los años setenta, que pretendían asegurar la autosuficiencia alimentaria nacional mediante la sustitución de importaciones, y al dismantelar —al menos parcialmente— los sistemas centralizados de apoyo estatal para la producción comercial de cultivos básicos, como arroz y café. Desde los años ochenta, la liberalización del sector agrícola y de los precios de sus productos ha ido eliminando las medidas públicas desarrolladas para amortiguar la competencia internacional y la volatilidad de precios en mercados globales. Ahora los productores a menudo tienen que buscar nuevos nichos de producción y acceso a mercados. Este proceso está reconfigurando profundamente no solo las condiciones de vida y el uso de la tierra, sino también a las comunidades mismas, sus patrones de organización y sus valores colectivos. La cuestión de si esta tendencia genera mayor degradación del medio ambiente debido a la intensificación de la agricultura convencional o, al contrario, propicia la restauración ecológica mediante procesos de expansión y de sistemas agrícolas ecológicamente amigables dependerá en buena medida de la evolución del consumo global y de los

mercados mundiales, de las ventanas de oportunidad que los nuevos nichos abren a los productores y de las condiciones estructurales locales.

En México, Inmecafé fue un instrumento para fomentar los métodos convencionales de extensión agrícola de la revolución verde, basados en el cultivo de sombra simplificado, cultivares híbridos e insumos químicos. Tras su desmantelamiento y el colapso del precio internacional en los noventa, los cafetales en muchas regiones del sur mexicano fueron abandonados o convertidos a otros usos agrícolas (como la ganadería). Muchos productores, especialmente los más jóvenes, tuvieron que salir a buscar trabajo en zonas de agricultura intensiva en el noreste mexicano, en grandes centros urbanos o cruzando la frontera hacia Estados Unidos, comúnmente en el sector de la construcción. Las cooperativas en los estados del sur del país han permitido mantener el cultivo del café al integrarse en los nichos internacionales del café orgánico y comercio justo, y diversificaron sus sistemas productivos para incluir otros cultivos comerciales. Hoy en día, aun cuando México es apenas el décimo productor de café a nivel mundial, es el primer país productor de café de certificación orgánica, el segundo en términos de doble certificación (orgánica y de comercio justo) y el sexto en términos de certificación de comercio justo (International Coffee Organization 2017; Willer y Lernoud 2017; Fairtrade International 2016). Sin embargo, aun cuando ciertas cooperativas han podido perfilarse a nivel nacional e internacional, como Café la Selva (Equator Initiative 2012), los logros de cooperativas más modestas —como las de la RBLT— parecen verse amenazados cada vez más por varios factores, como deficiencias estructurales crónicas, disensión interna y la búsqueda individual de alianzas más rentables.

En el caso de Vietnam, los cambios en las decisiones de los productores sobre el uso de la tierra han sido fuertemente afectados no solo por las fluctuaciones de los precios de las mercancías agrícolas (arroz o frutas), sino también por el costo de los insumos agroquímicos y de la mano de obra. Conforme se reducen las ganancias del cultivo de arroz, los jóvenes salen a buscar otras fuentes de ingresos, pero los mercados laborales locales también están siendo transformados por procesos de liberalización económica que impactan mayormente otros sectores. En realidad, el trabajo no agrícola aumenta la

posibilidad de obtener mayores ingresos y favorece el éxodo rural, sobre todo de los campesinos jóvenes sin tierra. A largo plazo, es probable que la actividad agrícola sufra una desvalorización cultural, como lo indican, por ejemplo, observaciones realizadas en áreas rurales donde el cultivo de arroz está dando paso al turismo como opción preferida de empleo.

Los cambios en el uso de la tierra a nivel local afectan no solo la producción y disponibilidad de alimentos, sino también las oportunidades de trabajo y, por consiguiente, los ingresos. Cambios en los cultivos y en el uso de la tierra pueden generar oportunidades a los productores con mayores recursos, mientras que productos de alta calidad destinados a nichos de mercado específicos benefician a consumidores en las áreas urbanas, tanto nacionales como en países industrializados. Pero estos cambios pueden ser perjudiciales para los productores más marginados y en general para las poblaciones pobres. Así, los consumidores de arroz barato en Vietnam y en el mundo pueden verse gravemente afectados a largo plazo por la conversión de arrozales en huertas frutales. De hecho, lo que puede ser una buena estrategia para aumentar los ingresos individuales podría comprometer la seguridad alimenticia a nivel nacional e internacional. En México, los productores que controlan más tierras, producen mayores volúmenes y gozan de buenas conexiones pueden invertir en mejores técnicas de manejo agrícola e infraestructura de procesamiento, expandir sus operaciones y negociar alianzas más rentables, mientras que para los más marginados, los precios más altos de café certificado por su cuenta no les permiten tener una vida decente.

Finalmente, la dimensión de género de estos impactos es un tema que exige más investigación. Las transformaciones en el uso de la tierra están cambiando la naturaleza y distribución del trabajo agrícola, así como los mercados de mano de obra rurales. Nuevas actividades abren nuevas fuentes de trabajo e ingresos para las mujeres, y pueden permitirles ser más visibles, pero conforme los varones, especialmente los jóvenes, migran a buscar mejores empleos en las ciudades, la falta de mano de obra para trabajar la tierra puede obligar a otros miembros de la familia —principalmente a las mujeres— a dedicar más tiempo y esfuerzo a las actividades agrícolas. Además, si el acceso a los cultivos básicos disminuye al cambiar la matriz productiva hacia cultivos comerciales,

la tarea de alimentar a la familia diariamente, que suele recaer en las mujeres, resultará sin duda aún más ardua.

Claro está que para fomentar un sistema del uso de la tierra sustentable, que asegure condiciones de vida dignas para las comunidades campesinas, no basta enfocarse solo en los sistemas productivos actuales y en la transferencia de técnicas agrícolas adecuadas. En cambio, se requiere tomar plenamente en cuenta la diversidad y multidimensionalidad de los sistemas rurales periféricos y reconocer cómo estas son reconfiguradas por los centros de consumo, los mercados laborales, las políticas agrícolas y el mercado en distintas escalas, así como por necesidades y aspiraciones locales.

Referencias bibliográficas

- ADB (Asian Development Bank). 2012. *Food Security and Poverty in Asia and the Pacific: Key Challenges and Policy Issues*. Manila: ADB. Consultado el 12 de octubre de 2018. <http://hdl.handle.net/11540/904>.
- Aide, T. M. y H. R. Grau. 2004. "Globalization, Migration, and Latin American Ecosystems". *Science* 305: 1915-1916. DOI: 10.1126/science.1103179.
- Altieri, M. A. y V. M. Toledo. 2011. "The Agroecological Revolution in Latin America: Rescuing Nature, Ensuring Food Sovereignty and Empowering Peasants". *Journal of Peasant Studies* 38 (3): 587-612. DOI: 10.1080/03066150.2011.582947.
- Avelino, J., M. Cristancho, S. Georgiou, P. Imbach, L. Aguilar, G. Bornemann, P. Läderach, F. Anzueto, A. J. Hruska y C. Morales. 2015. "The Coffee Rust Crises in Colombia and Central America (2008-2013): Impacts, Plausible Causes and Proposed Solutions". *Food Security* 7 (2): 303-321. DOI: 10.1007/s12571-015-0446-9.
- Awika, J. M. 2011. "Major Cereal Grains Production and Use around the World". En *Advances in Cereal Science: Implications to Food Processing and Health Promotion*, editado por J. M. Awika, V. Piironen y S. Bean, 1-13. DOI: 10.1021/bk-2011-1089.ch001.

- Ayuntamiento de Soteapan. 2010. "Diagnóstico Participativo Municipal", documento inédito. Soteapan: Ayuntamiento de Soteapan; Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.
- Borras, S. M., J. C. Franco, R. Isakson, L. Levidow y P. Vervest. 2014. *Towards Understanding the Politics of Flex Crops and Commodities: Implications for Research and Policy Advocacy*. Think Piece Series on Flex Crops & Commodities 1. Ámsterdam: Transnational Institute (TNI); Agrarian Justice Program.
- Borras, S. M., J. C. Franco, C. Kay y M. Spoor. 2011. "Land Grabbing in Latin America and the Caribbean Viewed from Broader International Perspectives". Ensayo presentado en The Latin America and Caribbean Seminar: "Dinámicas en el mercado de la tierra en América Latina y el Caribe", Oficina Regional de la FAO, Santiago de Chile.
- Bosma, R. H., C. Quoc Nam, H. M. J. Udo, J. A. J. Verreth y L. E. Visser. 2005. "Agriculture Diversification in the Mekong Delta: Farmers' Motives and Contributions to Livelihoods". *Journal of Agriculture and Development* 2 (1-2): 49-66. Consultado el 12 de octubre de 2018. ageconsearch.umn.edu/bitstream/165780/2/AJAD_2005_2_1&2_5Bosma.pdf.
- Campbell, L. M. 2002. "Conservation Narratives in Costa Rica: Conflict and Co-existence". *Development and Change* 33 (1): 29-56. DOI: 10.1111/1467-7660.00239.
- Carletto, C., A. Kirk, P. Winters y B. Davis. 2008. "Globalization and Smallholders: The Adoption, Diffusion, and Welfare Impact of Non-traditional Export Crops in Guatemala". *World Development* 38 (6): 814-827.
- Castree, N. 2008a. "Neoliberalising Nature: Processes, Effects, and Evaluations". *Environment and Planning A* 40 (1): 153-173. DOI: 10.1068/a3999.
- . 2008b. "Neoliberalising Nature: The Logics of Deregulation and Reregulation". *Environment and Planning A* 40 (1): 131-152. DOI: 10.1068/a39100.
- Chien, H. V. y M. M. Escalada. 2012. "Women in Ecological Engineering Launched on International Women's Day in My Tho". *Ricehoppers*. Consultado el 12 de octubre de 2018. <https://ricehopper.wordpress.com/tag/women-in-ecological-engineering-launched-in-my-tho/>.

- Clapp, J. 2015. "Distant Agricultural Landscapes". *Sustainability Science* 10 (2): 305-316. DOI: 10.1007/s11625-014-0278-0.
- Clausing, P. 2014. "Bill Gates en África". *Serie MvB Agenda*, núm. 4.
- Conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas). 2006. "Programa de Conservación y Manejo. Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. México: Conanp.
- _____. 2011. "Actualización de la tasa de cambio de uso del suelo en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. Informe final". México: Conanp.
- Cook, S., L. Silici, B. Adolph y S. Walker. 2015. *Sustainable Intensification Revisited*, IIED Debriefing Paper. Londres: International Institute for Environment and Development. Consultado el 12 de octubre de 2018. pubs.iied.org/pdfs/14651IIED.pdf.
- Dao, T. A. y D. M. C. Nguyen. 2015. "Family Farming and Farmland Policy in Vietnam: Current Situation and Perspective". *FFTC Agricultural Policy Articles*. http://ap.fftc.agnet.org/ap_db.php?id=452.
- Das, B., S. Sengupta, S. Parida Kumar, B. Roy, M. Ghosh, M. Prasad y T. Kumar Ghose. 2013. "Genetic Diversity and Population Structure of Rice Landraces from Eastern and North Eastern States of India". *BMC Genetics* 14 (1): 71. Consultado el 12 de octubre de 2018. <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3765237&tool=pmcentrez&rendertype=abstract>.
- Daviron, B. y S. Ponte. 2005. *The Coffee Paradox: Global Markets, Commodity Trade and the Elusive Promise of Development*. Londres: Zed Books.
- DeFries, R., T. Rudel, M. Uriarte y M. Hansen. 2010. "Deforestation Driven by Urban Population Growth and Agricultural Trade in the Twenty-first Century". *Nature Geoscience* 3: 178-181.
- Dirzo, R. y M. C. García. 1992. "Rates of Deforestation in Los Tuxtlas, a Neotropical Area in Southeast Mexico". *Conservation Biology* 6 (1): 84-90. DOI: 10.1046/j.1523-1739.1992.610084.x.
- Durand Smith, L. y J. Ruiz Cedillo. 2009. "Estaciones biológicas y participación social: la experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Tuxtlas, Veracruz, México". *Ambiente & Sociedad* 12 (2): 325-340. DOI: 10.1590/S1414-753X2009000200008.

- Eakin, H., A. Winkels y J. Sendzimir. 2009. "Nested Vulnerability: Exploring Cross-Scale Linkages and Vulnerability Teleconnections in Mexican and Vietnamese Coffee Systems". *Environmental Science and Policy* 12 (4): 398-412. DOI: 10.1016/j.envsci.2008.09.003.
- Epler Wood, M. 2007. "The Role of Sustainable Tourism in International Development: Prospects for Economic Growth, Alleviation of Poverty and Environmental Conservation". En *Critical Issues in Ecotourism: Understanding a Complex Tourism Phenomenon*, editado por J. Higham, 158-184. Oxford: Butterworth Heinemann.
- Equator Initiative. 2012. *Café la Selva, México*. Serie Equator Initiative Case Study. Nueva York: United Nations Development Program. Consultado el 12 de octubre de 2018. www.equatorinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/case_1_1361825164_SP.pdf.
- Fairbairn, Madeleine. 2014. "Like Gold with Yield: Evolving Intersections Between Farmland and Finance". *Journal of Peasant Studies* 41 (5): 777-795. DOI: 10.1080/03066150.2013.873977.
- Fairtrade International. 2016. *Scope and Benefits of Fair Trade. Seventh Edition 2015*. Consultado el 12 de octubre de 2018. <https://www.fairtrade.net/products/coffee.html>.
- Fischer, J., D. J. Abson, A. Bergsten, N. French Collier, I. Dorresteijn, J. Hanspach, K. Hylander, J. Schultner y F. Senbeta. 2017. "Reframing the Food Biodiversity Challenge". *Trends in Ecology and Evolution* 32 (5): 335-345. DOI: 10.1016/j.tree.2017.02.009 1.
- Fischer, J., D. B. Lindenmayer y A. D. Manning. 2006. "Biodiversity, Ecosystem Function, and Resilience: Ten Guiding Principles for Commodity Production Landscapes". *Frontiers in Ecology and the Environment* 4 (2): 80-86.
- FAO (Food and Agricultural Organization). 2013. *Climate Smart Agriculture: Sourcebook*. Roma: Food and Agricultural Organization.
- . 2014. *FAO Statistical Yearbook 2014: Asia and the Pacific Food and Agriculture*. Bangkok: FAO. Consultado el 12 de octubre de 2018. <http://www.fao.org/3/a-i3590e.pdf>.

- FAO (Food and Agricultural Organization). 2016. *FAO Rice Price Update. Trade and Markets*. Roma: FAO. Consultado el 12 de octubre de 2018. <http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice-price-update/en/>.
- Friedmann, H. 2005. "Feeding the Empire: The Pathologies of Globalized Agriculture". *Socialist Register* 41: 124-143.
- Giannesi, L. 2013. *Organic Coffee: Why Latin America's Farmers are Abandoning It*. Case Study 95. Washington, D. C.: Crop Life Foundation. Consultado el 12 de octubre de 2018. <http://www.csmonitor.com/World/Americas/2010/0103/Organic-coffee-Why-Latin-America-s-farmers-are-abandoning-it>.
- GAIN (Global Agricultural Information Network). 2016a. "Vietnam: Grain and Feed Annual 2016". GAIN Report VM6024. Washington, D. C.: United States Department of Agriculture - Foreign Agricultural Service. Consultado el 12 de octubre de 2018. [http://gain.fas.usda.gov/Recent GAIN Publications/GRAIN AND FEED ANNUAL_Hanoi_Vietnam_4-21-2016.pdf](http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/GRAIN%20AND%20FEED%20ANNUAL_Hanoi_Vietnam_4-21-2016.pdf).
- . 2016b. "Mexico: Coffee Annual. Mexico Launches New Policies as Rust Continues to Impact Production". GAIN Report MX6019. Washington, D. C.: United States Department of Agriculture - Foreign Agricultural Service. Consultado el 12 de octubre de 2018. [gain.fas.usda.gov/Recent GAIN Publications/Coffee Annual_Mexico City_Mexico_5-13-2016.pdf](http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Coffee%20Annual_Mexico%20City_Mexico_5-13-2016.pdf).
- González, C. G. 2011. "An Environmental Justice Critique of Comparative Advantage: Indigenous Peoples, Trade Policy, and the Mexican Neoliberal Economic Reforms". *Journal of International Law* 32 (3): 723-803.
- González de Molina, M. 2013. "Agroecology and Politics. How to Get Sustainability? About the Necessity for a Political Agroecology". *Agroecology and Sustainable Food Systems* 37 (1): 45-59. DOI: 10.1080/10440046.2012.705810.
- Grau, H. R. y M. Aide. 2008. "Globalization and Land Use Transitions in Latin America". *Ecology and Society* 13 (2): 12.

- Gresser, C. y S. Tickell. 2002. *Mugged: Poverty in your Coffee Cup*. Amsterdam: Oxfam International.
- Groenewald, S. F. y M. van den Berg. 2012. "Smallholder Livelihood Adaptation in the Context of Neoliberal Policy Reforms: A Case of Maize Farmers in Southern Veracruz, Mexico". *Journal of Development Studies* 48 (3): 429-444. DOI: 10.1080/00220388.2011.615923.
- Guevara Sada, S., J. Laborde Dovalí y G. Sánchez Ríos. 2000. "La Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas, México". Documento de trabajo núm. 29. Programa de Cooperación Sur-Sur sobre Desarrollo Socioeconómico Ambientalmente Adecuado en los Trópicos Húmedos. París: Unesco.
- Gurr, G. M., Z. Lu, X. Zheng, H. Xu, P. Zhu, G. Chen, X. Yao, J. Cheng, Z. Zhu, J. L. Catindig, S. Villareal, H. Van Chien, L. Q. Cuong, C. Channoo, N. Chengwattana, L. P. Lan, L. H. Hai, J. Chaiwong, H. I. Nicol, D. J. Perovic, S. D. Wratten y K. L. Heong. 2016. "Multi-Country Evidence that Crop Diversification Promotes Ecological Intensification of Agriculture". *Nature Plants* 2: 1-4. DOI: 10.1038/nplants.2016.14.
- Haberl, H., K. H. Erb, F. Krausmann, S. Berez, N. Ludwiczek, J. Martinez-Alier, A. Musel y A. Schaffartzik. 2009. "Using Embodied HANPP to Analyze Teleconnections in the Global Land System: Conceptual Considerations". *Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography* 109 (2): 119-130. DOI: 10.1080/00167223.2009.10649602.
- Harvey, C. A., O. Komar, R. Chazdon, B. G. Ferguson, B. Finegan, D. M. Griffith, M. Martínez-Ramos, H. Morales, R. Nigh, L. Soto-Pinto, M. van Breugel y M. Wishnie. 2008. "Integrating Agricultural Landscapes with Biodiversity Conservation in the Mesoamerican Hotspot". *Conservation Biology* 22 (1): 8-15. DOI: 10.1111/j.1523-1739.2007.00863.x.
- Harvey, M. y S. Pilgrim. 2011. "The New Competition for Land: Food, Energy, and Climate Change". *Food Policy* 36 (S1): S40-S51. DOI: 10.1016/j.foodpol.2010.11.009.
- Hecht, S., A. L. Yang, B. S. Basnett, C. Padoch y N. L. Peluso. 2015. "People in Motion, Forests in Transition: Trends in Migration, Urbanization, and Remittances and their Effects on Tropical Forests". Ocasional Paper 142. Bongor: Centre for International Forestry Research.

- Huong, T. L. y A. L. Booth. 2014. "Inequality in Vietnamese Urban-Rural Living Standards 1993-2006". *Review of Income and Wealth Series* 60 (4): 862-886.
- International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development. 2009. "Agriculture at a Crossroads: Executive Summary of the Synthesis Report". Washington, D. C.: Island Press.
- ICO (International Coffee Organization). 2017. "Total Production by All Exporting Countries". Consultado el 12 de octubre de 2018. www.ico.org/prices/po-production.pdf.
- Jaffee, D. 2007. *Brewing Justice: Fairtrade Coffee, Sustainability, and Survival*. Berkeley: University of California Press.
- Jha, S., C. Bacon, S. M. Philpott, R. A. Rice, V. E. Méndez y P. Läderach. 2011. "A Review of Ecosystem Services, Farmer Livelihoods, and Value Chains in Shade Coffee Agroecosystems". En *Integrating Agriculture, Conservation and Ecotourism: Examples from the Field*, editado por W. B. Campbell y S. López Ortiz. Dordrecht: Springer.
- Kay, C. 2002. "Agrarian Reform and the Neoliberal Counter-Reform in Latin America". En *The Spaces of Neoliberalism: Land, Place and Family in Latin America*, editado por J. Chase, 25-52. Bloomfield: Kumarian Press.
- . 2008. "Reflections on Latin American Rural Studies in the Neoliberal Globalization Period: A New Rurality?". *Development and Change* 39 (6): 915-943.
- Kerssen, T. 2013. "Food Sovereignty and the Quinoa Boom in Bolivia". Conferencia presentada en el congreso internacional Food Sovereignty: A Critical Dialogue, Program in Agrarian Studies, Yale University, 14-15 de septiembre.
- King, R., M. A. Adler y M. Grieves. 2013. "Cooperatives as Sustainable Livelihood Strategies in Rural Mexico". *Bulletin of Latin American Research* 32 (2): 163-177.
- Lambin, E. F., B. L. Turner, H. J. Geist, S. B. Agbola, A. Angelsen, J. W. Bruce, O. T. Coomes, R. Dirzo, G. Fischer, C. Folke, P. S. George, K. Homewood, J. Imbernon, R. Leemans, X. Li, E. F. Moran, M. Mortimore, P. S. Ramakrishnan, J. F. Richards, H. Skånes, W. Steffen, G. D. Stone, U. Svedin, T. A.

- Veldkamp, C. Vogel y J. Xu. 2001. "The Causes of Land-use and Land-cover Change: Moving beyond the Myths". *Global Environmental Change* 11: 261-269.
- Lambin, E. F. y P. Meyfroidt. 2011. "Global Land Use Change, Economic Globalization, and the Looming Land Scarcity". *Proceedings of the National Academy of Sciences* 108 (9): 3465-3472. DOI: 10.1073/pnas.1100480108.
- Lataillade, C. de, A. Dumontier, N. Grondard y M. Dufumier. 2006. "Farming Intensification and Diversification in the Philippines: The Case of the Pampanga Estuary". *Moussons* 9-10: 281-297. Consultado el 12 de octubre de 2018. <https://moussons.revues.org/2048>.
- Legorreta Díaz, C., C. Márquez Rosano y T. Trench, eds. 2014. *Paradojas de las tierras protegidas: democracia y política ambiental en reservas de biosfera en Chiapas*. México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM.
- Loos, J., D. J. Abson, M. J. Chappell, J. Hanspach, F. Mikulcak, M. Tichit y J. Fischer. 2014. "Putting Meaning Back into 'Sustainable Intensification'". *Frontiers in Ecology and the Environment* 12 (6): 356-361. DOI: 10.1890/130157.
- Marsh, S. P. y T. G. MacAulay. 2006. "Farm Size and Land Use Changes in Vietnam Following Land Reforms, Sydney, NSW". Ponencia presentada en 47th Annual Conference of the Australian Agricultural and Resource Economics Society, Fremantle, 13-15 de febrero. Consultado el 12 de octubre de 2018. ageconsearch.umn.edu/bitstream/57919/2/2003_marshallmacaulay.pdf.
- Mather, A. S. y C. L. Needle. 1998. "The Forest Transition: A Theoretical Basis". *Area* 30, núm. 2, 117-124. DOI: 10.1111/j.1475-4762.1998.tb00055.x.
- McCarthy, J. y S. Prudham. 2004. "Neoliberal Nature and the Nature of Neoliberalism". *Geoforum* 35 (3): 275-283. doi:10.1016/j.geoforum.2003.07.003.
- McMichael, P. 2012. "The Land Grab and Corporate Food Regime Restructuring". *Journal of Peasant Studies* 39 (3-4): 681-701. DOI: 10.1080/03066150.2012.661369.

- Mills Busa, J. H. 2013. "Deforestation Beyond Borders: Addressing the Disparity Between Production and Consumption of Global Resources". *Conservation Letters* 6 (3): 192-199. DOI: 10.1111/j.1755-263X.2012.00304.x.
- Moguel, P. y V. Toledo. 1999. "Biodiversity Conservation in Traditional Coffee Systems of Mexico". *Conservation Biology* 131 (1): 11-21. DOI: 10.1046/j.1523-1739.1999.97153.x.
- Mohanty, S. 2013. "Trends in Global Rice Consumption". *Rice Today* 12 (1): 44-45. Consultado el 12 de octubre de 2018. <https://es.scribd.com/document/119860372/RT-Vol-12-No-1-Rice-facts#fullscreen=1>.
- Mostafalou, S. y M. Abdollahi. 2013. "Pesticides and Human Chronic Diseases: Evidences, Mechanisms, and Perspectives". *Toxicology and Applied Pharmacology* 268: 157-177.
- Nadal, A. y H. García Rañó. 2009. *Trade, Poverty and the Environment: A Case Study in the Sierra de Santa Marta Biosphere Reserve*. México: Science, Technology and Development Program; El Colegio de México.
- Negrete-Yankelevich, S., L. Porter-Bolland, J. L. Blanco-Rosas e I. Barois. 2013. "Historical Roots of the Spatial, Temporal, and Diversity Scales of Agricultural Decision-making in Sierra de Santa Marta, Los Tuxtlas". *Environmental Management* 52 (1): 45-60. DOI: 10.1007/s00267-013-0095-8.
- Noguera, D., K.-R. Laossi, P. Lavelle, M.-H. Cruz de Carvalho, N. Asakawa, C. Botero y S. Barot. 2011. "Amplifying the Benefits of Agroecology by Using the Right Cultivars". *Ecological Applications* 21 (7): 2349-2356.
- Nur Indrawaty, L., K. G. Lin e I. Angeles-Agdeppa. 2012. "Food Consumption Patterns and Nutrition Transition in South-East Asia". *Public Health Nutrition* 16 (9): 1637-1643. Consultado el 12 de octubre de 2018. http://journals.cambridge.org/download.php?file=/PHN/PHN16_09/S1368980012004569a.pdf&code=78df322b1942485ad563057d88374391.
- Pacheco, P., M. Aguilar-Støen, J. Börner, A. Etter, L. Putzel y M. C. Vera Díaz. 2010. "Landscape Transformation in Tropical Latin America: Assessing Trends and Policy Implications for REDD+". *Forests* 2 (1): 29. DOI: 10.3390/f2010001.

- Paré, L. y T. Fuentes. 2007. *Gobernanza ambiental y políticas públicas en áreas naturales protegidas: lecciones desde Los Tuxtlas*. México: Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM.
- Pérez Akaki, P. y F. Echánove Huacuja. 2006. "Cadenas globales y café en México". *Cuadernos Geográficos* 38: 69-86.
- Perfecto, I., J. H. Vandermeer y A. L. Wright. 2009. *Nature's Matrix: Linking Agriculture, Conservation and Food Sovereignty*. Londres: Earthscan.
- Phalan, B., R. E. Green, L. V. Dicks, G. Dotta, C. Feniuk, A. Lamb, B. N. Strassburg, D. R. Williams, E. K. H. J. Zu Ermgassen y A. Balmford. 2016. "How Can Higher-Yield Farming Help to Spare Nature?". *Science* 351 (6272): 450-451.
- PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2008. *La otra frontera: usos alternativos de recursos naturales en Bolivia*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Consultado el 12 de octubre de 2018. <http://hdr.undp.org/en/content/la-otra-frontera>.
- Potvin, C., C. Owen, S. Melzi y P. Beaucage. 2005. "Biodiversity and Modernization in Four Coffee Producing Villages of Mexico". *Ecology and Society* 10 (1) 18. <http://www.ecologyandsociety.org/vol10/iss1/art18/>.
- Pretty, J. 1997. "The Sustainable Intensification of Agriculture". *Natural Resources Forum* 21 (4): 247-256.
- Robbins, P., A. Chhatre y K. Karanth. 2015. "Political Ecology of Commodity Agroforests and Tropical Biodiversity". *Conservation Letters* 8 (2): 77-85. doi: 10.1111/conl.12169.
- Rockström, J., W. Steffen, K. Noone, A. Persson, F. S. Chapin III, E. Lambin, T. M. Lenton, M. Scheffer, C. Folke, H. J. Schellnhuber, B. Nykvist, C. A. de Wit, T. Hughes, S. van der Leeuw, H. Rodhe, S. Sörlin, P. K. Snyder, R. Costanza, U. Svedin, M. Falkenmark, L. Karlberg, R. W. Corell, V. J. Fabry, J. Hansen, B. Walker, D. Liverman, K. Richardson, P. Crutzen y J. Foley. 2009. "Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity". *Ecology and Society* 14 (2): 32. <http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/>.
- Rojas, W., R. Valdivia, S. Padulosi, M. Pinto, J. L. Soto, E. Alcócer, L. Guzmán, R. Estrada, V. Apaza y R. Bravo. 2009. "From Neglect to Limelight: Issues,

- Methods and Approaches in Enhancing Sustainable Conservation and Use of Andean Grains in Bolivia and Peru”. *Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics*, núm. 92, 87-117.
- Roux, H. 2011. “Au Nicaragua, la terre a ‘changé de mains’!”. *Problèmes d’Amérique Latine* 79 (1): 71-88. Consultado el 12 de octubre de 2018. <http://www.cairn.info/revue-problemes-d-amerique-latine-2011-1-page-71.htm>.
- Ruben, R. y E. Masset. 2003. “Land Markets, Risk and Distress Sales in Nicaragua: The Impact of Income Shocks on Rural Differentiation”. *Journal of Agrarian Change* 3 (4): 481-499. DOI: 10.1111/1471-0366.00063.
- Schroth, G., E. Garcia, B. W. Griscom, W. Geraldtes Teixeira y L. Pereira Barros. 2015. “Commodity Production as Restoration Driver in the Brazilian Amazon? Pasture Re-agro-forestation with Cocoa (*Theobroma cacao*) in Southern Pará”. *Sustainability Science* 11 (2): 277-293. DOI: 10.1007/s11625-015-0330-8pp.277-293.
- SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). 2016. “Cierre de la producción agrícola 2014: café cereza”. Consultado el 12 de diciembre de 2016. <http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-por-cultivo>.
- Seto, K. C., A. Reenberg, C. G. Boone, M. Fragkias, D. Haase, T. Langanke, P. Marcotullio, D. K. Munroe, B. Olah y D. Simon. 2012. “Urban Land Teleconnections and Sustainability”. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 109 (20): 7687-7692. DOI: 10.1073/pnas.1117622109.
- Settele, J., J. H. Spangenberg, K. L. Heong, B. Burkhard, J. V. Bustamante, J. Cabbigat, H. V. Chien, M. Escalada, V. Grescho, L. H. Hai, A. Harpke, F. G. Horgan, S. Hotes, R. Jahn, I. Kühn, L. Marquez, M. Schädler, V. Tekken, D. Vetterlein, S. Villareal, C. Westphal y M. Wiemers. 2015. “Agricultural Landscapes and Ecosystem Services in South-East Asia: The LEGATO-Project”. *Basic and Applied Ecology* 16 (8): 661-664. DOI: 10.1016/j.baae.2015.10.003.
- Sneddon, C. y C. Fox. 2012. “Inland Capture Fisheries and Large River Systems: A Political Economy of Mekong Fisheries”. *Journal of Agrarian Change* 12 (2-3): 279-299. DOI: 10.1111/j.1471-0366.2011.00350.x.

- Solé, C., B. Rodríguez-Labajos, L. H. Hai, Le Huu, T. M. H. Nguyen, D. T. N. Thanh, J. Settele. Inédito. “Assessing Ecosystem Services Provided by Agricultural Areas to Poor and Non-Poor Households in the Tieng Giang Province (Mekong Delta), Vietnam”.
- The Royal Society. 2009. “Reaping the Benefits: Science and the Sustainable Intensification of Global Agriculture”. RS Policy Document 11/09. Londres: The Royal Society.
- Tilliger, B., B. Rodríguez-Labajos, J. V. Bustamante y J. Settele. 2015. “Disentangling Values in the Interrelations between Cultural Ecosystem Services and Landscape Conservation: A Case Study of the Ifugao Rice Terraces in the Philippines”. *Land* 4 (3): 888-913. DOI: 10.3390/land4030888.
- Tittonell, P. 2014. “Ecological Intensification of Agriculture: Sustainable by Nature”. *Current Opinion in Environmental Sustainability* 8: 53-61. DOI: 10.1016/j.cosust.2014.08.006.
- Thanh Trường, D., T. Q. A. Nguyễn, T. N. A. Nguyễn, D. K. Ly, J. Spangenberg, J. Settele, T. Vera y B. Rodríguez-Labajos. 2016. “Policy Analysis Approaches in Implementing the Ecological Engineering in Vietnam: Experiences from LEGATO— An Interdisciplinary Project”. *NU Journal of Science: Policy and Management Studies* 32 (1): 49-67.
- USDA Foreign Agricultural Service. 2016. “Vietnam: Grain and Feed Annual 2016”. GAIN Report VM6024. https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/GRAIN%20AND%20FEED%20ANNUAL_Hanoi_Vietnam_4-21-2016.pdf.
- Ut, T. T. y K. Kajisa. 2006. “The Impact of the Green Revolution on Rice Production in Vietnam”. *The Developing Economies* XLIV (2): 167-189.
- Valencia, V., L. García-Barrios, P. West, E. J. Sterling y S. Naeem. 2018. “Smallholder Response to Environmental Change: Impacts of Coffee Leaf Rust in a Forest Frontier in Mexico”. *Land Use Policy* 79: 463-474.
- Van, H. L. T. 2008. “Gender, *Doi Moi* and Coastal Resource Management in the Red River Delta, Vietnam”. En *Gender and Natural Resource Management: Livelihoods, Mobility and Interventions*, editado por B. P. Resurreccion y R. Elmhirst, 23-42. Londres; Sterling: Earthscan.

- Van Dijk, M., H. Hilderink, W. van Rooij, M. Rutten, R. Ashton, K. Kartikasari y V. C. Lan. 2012. "A Global-to-Local Modelling Approach. Land Use, Food Security, and Climate Change in Vietnam". Consultado el 12 de octubre de 2018. <http://cdkn.org/wp-content/uploads/2012/01/Land-Use-Food-Security-Climate-in-Vietnam-Policy-Brief.pdf>.
- Vega-Leinert, A. C. de la, L. Brenner y S. Stoll-Kleeman. 2015. "Sinergias y conflictos entre la producción cafetalera y la conservación ambiental: el caso de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, México". En *Geografía de la gobernanza: dinámicas multiescalares de los procesos económicos-ambientales*, editado por R. Rosales Ortega y L. Brenner, 94-127. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa; Siglo XXI.
- . 2016. "Peasant Coffee in the Los Tuxtlas Biosphere Reserve, Mexico: A critical Evaluation of Sustainable Intensification and Market Integration Potential". *Elementa Science of the Anthropocene* 4. DOI: 10.12952/journal.elementa.000139.
- Vega-Leinert, A. C. de la y P. Clausing. 2016. "Extractive Conservation: Peasant Agroecological Systems as New Frontiers of Exploitation?". *Environment and Society* 7 (1): 50-70. DOI: 10.3167/ares.2016.070104.
- Vega-Leinert, A. C. de la, L. Brenner y S. Stoll-Kleeman. 2018. "El café de sombra: ¿una alternativa viable para campesinos en regiones marginadas? El caso de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, México". *Conocimiento, ambiente y poder. Perspectivas desde la Ecología Política*, 257-308. México: El Colegio de San Luis; UNAM; Ciesas; UAM.
- Weber, J. G. 2007. "Fair Trade Coffee Enthusiasts Should Confront Reality". *Cato Journal* 27 (1): 109-117.
- Weinzettel, J., E. G. Hertwich, G. P. Peters, K. Steen-Olsen y A. Galli. 2013. "Affluence Drives the Global Displacement of Land Use". *Global Environmental Change* 23 (2): 433-438. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2012.12.010.
- Weis, T. 2013. "The Meat of the Global Food Crisis". *Journal Of Peasant Studies* 40 (1): 65-85. DOI: 1080/03066150.2012.75235.
- Willer, H. and J. Lernoud, eds. 2017. *The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2017* (versión 1.3). Bonn: Research Institute of Organic Agriculture; Frick; IFOAM.

- Wise, T. A. 2004. "The Paradox of Agricultural Subsidies: Measurement Issues, Agricultural Dumping, and Policy Reform". Global Development and Environment Institute Working Paper.
- Zeigler, R. S. 2012. "Advancing Cutting-Edge Science to Boost Rice Production, Increase Farmers' Incomes, and Conserve the Environment". Consultado el 12 de diciembre de 2016. <https://hdl.handle.net/10947/3735>.
- Zoomers, A. 2010. "Globalisation and the Foreignisation of Space: Seven Processes Driving the Current Global Land Grab". *Journal of Peasant Studies* 37 (2): 429-447. DOI: 10.1080/03066151003595325.
- Zoomers, A. y G. van der Haar. 2000. *Current Land Policy in Latin America: Regulating Land Tenure Under Neo-liberalism*. Ámsterdam: KIT & Vervuert Verlag.

Neoliberalismo y el sesgo antiagropecuario en El Salvador: el caso de la cadena de marañón orgánico

Karla Melissa Guzmán
Universidad de El Salvador

Introducción

En este capítulo se expone la manera en que el conjunto de reformas económicas de corte neoliberal ejecutadas en El Salvador a partir de los programas de ajuste estructural (PAE) y los programas de estabilización económica (PEE), desde finales de los años ochenta, conllevaron, entre otras cosas, a un sesgo antiagropecuario. Todas las actividades provenientes del sector agropecuario intensivas en el uso de recursos naturales y trabajo se vieron fuertemente afectadas, pues las prioridades del nuevo modelo económico, centradas en promover actividades del sector comercio y de servicios, impactaron las ramas agropecuarias, incluida la producción de marañón, árbol del género *Anacardium*, cuyo fruto y nuez (nuez de la india) son muy apreciados en el mercado internacional.

El modelo económico implementado en el país estuvo basado en el Consenso de Washington y condujo a una estrategia de crecimiento económico asentada en la industrialización orientada a las exportaciones (IOE). En el contexto de dicha estrategia surgieron cooperativas posteriores a la reforma agraria acontecida en la década de los ochenta, las cuales promovieron la producción de marañón y el desarrollo de iniciativas de economía solidaria, y transformaron

la visión de las comunidades de la región oriental del país en aspectos tanto sociales como ecológicos. Hoy en día las comunidades asumen un compromiso con el medio ambiente al producir bajo criterios de producción orgánica; sin embargo, este compromiso se debilita frente a las políticas neoliberales que excluyen a sectores pertenecientes al agro.

En este capítulo se analiza el caso particular de la cadena de marañón orgánico desde el enfoque de *cadena globales de mercancías*, a fin de buscar alternativas de mejora para los campesinos afectados por el sesgo antiagropecuario vigente. El trabajo contribuye a la discusión sobre la producción orgánica del marañón y a observar las dificultades que enfrentan sus productores en términos de la gobernanza y comercialización del marañón orgánico en una cadena de producción liderada por el gran capital de las economías desarrolladas.

La primera sección del capítulo presenta una revisión de las medidas neoliberales implementadas en El Salvador desde 1990 hasta la actualidad, para posteriormente explicar quiénes son los actores y cooperativas que participan en la producción y procesamiento de marañón orgánico en el país. Más adelante, se describe el funcionamiento de la cadena de marañón utilizando el enfoque de cadenas globales de mercancía, según Gereffi y Korzeniewicz (1994), para finalmente proponer alternativas de producción a los actores locales ante un contexto tan adverso. Las preguntas que guían este trabajo son *a)* ¿cuál es el papel del Estado —en el marco de este modelo económico de carácter neoliberal— dentro de la organización de las cadenas globales de mercancías?, y *b)* ¿cuáles son los factores que favorecen o desestimulan avances en la cadena de producción, considerando el uso de los recursos naturales en un contexto donde el mercado es el que determina su uso?

Una mirada a las reformas neoliberales en El Salvador con sesgo antiagropecuario

De acuerdo con Díaz y López (s. f.), el neoliberalismo, además de ser un modelo económico, es una visión amplia de la vida en sociedad. El neoliberalismo postula al mercado como el escenario social perfecto, donde los individuos

priorizan sus intereses individuales sin atender a los fines colectivos. Las interacciones sociales quedan reducidas, en buena medida, a las relaciones de mercado. El centro es el individuo y la sociedad deja de ser una categoría con características propias y refleja, en cambio, un mero agregado de personas distintas, cada una atendiendo sus propios fines (Díaz y López s. f.).

Sabbatella (2014) reconoce que, en relación con los recursos naturales, el neoliberalismo puede ser definido como un programa, un cuerpo de ideas o una doctrina. Una apreciación más global sugiere que se trata de una fase histórica del capitalismo caracterizada por una ofensiva sin precedentes del capital sobre el trabajo, el estado de bienestar y la naturaleza.

El Salvador no escapó a las medidas de corte neoliberal implementadas en toda América Latina durante las últimas décadas del siglo xx. A partir de 1990, se adoptan reformas estructurales promovidas por organismos financieros internacionales, y se establecen políticas económicas favorables a grupos económicamente dominantes que buscaron un nuevo patrón de acumulación de capital¹ lejos de las actividades de agroexportación (Guzmán y Salinas 2008).

En 1985, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) presentó el proyecto de un nuevo modelo económico que recogía los planteamientos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) sobre la transformación de la economía salvadoreña a través de un modelo basado en la exportación de productos no tradicionales, la liberalización de la economía, la disminución del papel del Estado y el fortalecimiento del sector privado, lo cual implicaba revertir reformas que se habían realizado a inicios de la década (Segovia 2002).

En la década de los noventa se aplicaron medidas neoliberales tales como la eliminación del control del Estado en el comercio exterior, la privatización de la banca y reformas en el sistema financiero con una política cambiaria que

¹ Valenzuela Feijoo (1990) define un patrón de acumulación como la forma particular que reviste la reproducción a escala ampliada, es decir, la modalidad de acumulación capitalista históricamente determinada o la forma que asume los procesos de valorización y de acumulación capitalista, por medio de los cuales el sistema elabora sus contradicciones e impulsa el crecimiento y desarrollo.

establecía un tipo de cambio fijo, hasta concluir con dolarizar la economía en el año 2001. La política fiscal se orientó hacia una economía con estructura tributaria más regresiva, y fue así como se creó el impuesto al valor agregado (IVA), se eliminaron los impuestos al patrimonio y se estableció como principal tasa directa la del impuesto sobre la renta.

En un segundo grupo de reformas se produjo la privatización de la distribución de energía eléctrica y la venta de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel). Además, se realizó una reforma en el sistema de pensiones y los servicios públicos pasaron de manos estatales a manos privadas, creando así nuevas mercancías. Todas estas reformas fueron acompañadas por la firma de tratados de libre comercio (TLC) que revelaron el interés de promover a toda costa la liberalización comercial.

Moreno (2004) subraya que el proyecto neoliberal no terminó con el traslado de las empresas públicas hacia corporaciones transnacionales; era preciso avanzar en la supresión de cualquier regulación estatal que afectara al óptimo funcionamiento del capital privado. Los PAE y PEE abrieron un abanico de medidas como la liberalización de los precios y la desregulación de la economía; mientras que los precios de los bienes de consumo básico fueron manejados por los especuladores, los salarios se flexibilizaron, las tasas de interés escalaron tanto que el crédito productivo se desplomó y los aranceles fueron desapareciendo para configurar un sector externo abierto.

El actual sesgo antiagropecuario fue promovido por políticas que incluyeron el cierre de instituciones de gobierno vinculadas al manejo de productos agropecuarios y una reforma tributaria perjudicial para los productos agropecuarios. Además, la firma de acuerdos comerciales ha desgravado de aranceles a muchos productos agropecuarios, lo que deja sin protección alguna a los productores nacionales. El poco interés del modelo neoliberal por fortalecer el agro fue claro, y puede observarse en la escasa participación de la producción agropecuaria (6%) en el producto interno bruto salvadoreño.

El acceso al financiamiento para la producción agropecuaria, incluida la del marañón, se ha visto fuertemente afectado debido a que el sector financiero ha promovido más el comercio y el consumo, en detrimento de las actividades productivas. De acuerdo con Salinas (2017), el censo agropecuario reportó

que tan solo el 10 % de los productores agropecuarios obtuvieron créditos, de los cuales 91 % fueron destinados hacia actividades de agroexportación.

En 2017 se otorgaron créditos por un total de 6 894.6 millones de dólares, pero solo el 3.58 % fue en créditos para el agro, mientras que 33.62 % fue destinado al consumo y el 21.85 % al comercio, lo cual denota un claro sesgo antiagropecuario. De acuerdo con el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal 2016), el escaso financiamiento al sector agropecuario se agrava con una tendencia al alza en el refinanciamiento al sector en los últimos cinco años, que pasó de representar el 3 % (6.3 millones) en 2011 al 7 % (17.2 millones) en 2015 y 6.9 % (11.6 millones) en junio de 2016.

En síntesis, en El Salvador ocurrió lo mismo que en el resto de las economías latinoamericanas: las medidas neoliberales dismantelaron al Estado regulador, intervencionista y propietario de bienes públicos durante toda la década de los ochenta. Al mismo tiempo, se construyó un contexto económico neoliberal que impulsaba la apertura comercial y la desindustrialización de las economías (Sandoval 2010).

Las cooperativas de la reforma agraria: el caso del marañón

Ante la innegable crisis del sector agropecuario en El Salvador, el apoyo de las agencias de cooperación internacional se orientó hacia algunas ramas de producción agroindustriales, como la del marañón. Así, surgieron las tres cooperativas que se encargan de producir el marañón de forma orgánica en el país. Estas organizaciones tienen su origen en el proceso de reforma agraria de la década de 1980, cuando se formaron muchas cooperativas agropecuarias comprometidas con la actividad del marañón y constituidas por trabajadores de antiguas empresas privadas del sector (Clusa 2006).

La contribución de la cooperación internacional fue determinante para el establecimiento de la producción orgánica en El Salvador, aportando recursos financieros y técnicos. Los beneficiarios principales de estas iniciativas fueron pequeños productores pobres en diversas zonas del país, sin acceso a fuentes de trabajo ni al crédito, con un modelo de producción de bajo a nulo

uso de insumos. La forma de producción de estas familias cambió significativamente con estas iniciativas, que buscaban dotarlas de una fuente sostenible de ingresos y, al mismo tiempo, promover un manejo adecuado de los recursos naturales en la zona oriental del país.

En la zona oriental de El Salvador, el cultivo del marañón se ha convertido en una de las actividades económicas más importantes para la población. Según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (2015), la zona oriental cuenta con 1.3 millones de habitantes, el 40 % de la población económicamente activa (PEA) se dedica a la agricultura, el 33 % de los hogares reciben remesas familiares y cerca del 40 % de los hogares se encuentran en condiciones de pobreza.

Los campesinos comprometidos con la producción orgánica están organizados en tres cooperativas (cuadro 1): la Asociación de Productores Agroindustriales Orgánicos de El Salvador (Aprainores), la Sociedad Cooperativa de Productos de Marañón (SCPM) y la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria y Servicios Múltiples la Marañonera (Acopasma de R. L.).

Aprainores tiene como antecedente al Sistema Agroindustrial de Marañón Orgánico (SAMO), creado con el apoyo de la Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunitario de El Salvador (Cordes). La empresa Agrodesa (Agropecuaria para el Desarrollo) capacitó a 35 familias de la zona en la producción de marañón orgánico. En junio de 2002, los pequeños productores de la zona crearon Aprainores, y la administración de SAMO quedó a cargo de ellos. En 2005, el procesamiento pasó a formar parte de Aprainores y SAMO desapareció (Montoya y Vega 2004).

Aprainores es la única cooperativa que cuenta con la certificación de su producción, a través de los consorcios BCS Oko Garantie GMBH, de Nuremberg, Alemania, y la de comercio justo (*fair trade*) con Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), lo que les permite acceder a mercados de países europeos, como Francia e Inglaterra.

La SCPM es una organización integrada por seis cooperativas y cuenta con aproximadamente el 32 % de las plantaciones de marañón orgánico en El Salvador. Se creó en 1997 con el apoyo de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI), a partir del proyecto Programa Cooperativo para

CUADRO 1
Caracterización de las cooperativas productoras
y procesadoras de marañón orgánico en El Salvador

Características	Cooperativa		
	Aprainores	SCPM	Acopasma de R. L.
Fundación de la cooperativa	En junio de 2002 se creó jurídicamente	Se fundó en 1997 con el proyecto Procopymes	1992
Ubicación geográfica	San Carlos Lempa, municipio de Tecoluca, departamento San Vicente, El Salvador	Cantón Bananera, Conchagua, departamento de la Unión, El Salvador	Cantón Tierra Blanca, jurisdicción de Chirilagua, departamento San Miguel, El Salvador
Hectáreas de terreno	92.25 ha (divididas en tres áreas)	481.69 ha (6 cooperativas asociadas)	915.5 ha (563.38 ha efectivas)
Número de socios	55	452	81
Varietades de marañón que cultiva	Martinica, trinidad y criolla	Martinica, trinidad y criolla	Martinica, trinidad y criolla
Productos que exporta	Almendra de marañón	Almendra de marañón	Nuez de marañón
Países a los que exporta	Francia e Inglaterra	Costa Rica	India

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a miembros de las cooperativas.

el Desarrollo Integral Marañosero del Oriente de El Salvador (Procoopimes). Su objetivo era constituir una organización de segundo nivel que agrupara a las cooperativas productoras de marañón de la zona oriente y que, al mismo tiempo, lograra integrar una cadena productiva.²

En un inicio se pasó de la producción de pequeña escala hacia la comercial, lo cual implicó inversiones importantes para la actividad, que incluyeron un diseño tecnológico acorde con las cooperativas implementado desde 1999. Dentro de este proceso, la producción orgánica desempeñó un papel fundamental para los productores, pues además de ser un requisito para recibir apoyo de la ACDI, se consideraba que otorgaría valor agregado a la producción. Además de ello, existe interés por parte de los cooperativistas en mantener las plantaciones de forma orgánica y recuperar zonas que en décadas pasadas fueron algodonerías con fuerte uso de fertilizantes y plaguicidas químicos.

² Información brindada por Mario Chavarría, gerente general de SCPM, junio de 2011.

Hoy en día, las principales actividades de la SCPM son el procesamiento y exportación de almendra o nuez de la india bajo técnicas de manejo cien por ciento orgánico. También se brinda la asistencia técnica y financiera a los productores, y se gestiona asesoramiento contable y administrativo a las cooperativas asociadas (Acicafoc y FAO 2011).

La tercera cooperativa de producción orgánica de marañón es Acopasma. Sus antecedentes se remontan a 1980, cuando se creó Coralama, que adquirió 1 576 hectáreas como parte de la reforma agraria. Estos terrenos habían sido sembrados con marañón en los años setenta, y durante esos años se construyó una planta procesadora para la nuez, la cáscara y el fruto. En 1988, Coralama compró la fábrica con dinero obtenido de la exportación a la India de su producción en bruto (Cummings et al. 1998). A inicios de los años noventa, después de los acuerdos de paz en el país, Coralama fue registrada con el nombre de Acopasma de R. L. y, a diferencia de las otras dos cooperativas, no procesa la nuez, solamente la cosecha y la exporta en bruto a la India.

Acopasma no cuenta con certificación orgánica debido a que su cliente en la India no lo exige, pues utiliza el marañón para obtener productos derivados, como lubricantes, aceites y nueces, que destinan a nichos de mercado poco interesados en pagar un sobreprecio por productos orgánicos. Sin embargo, Acopasma mantiene sus cultivos como producción orgánica. En realidad, fue la primera asociación del país en certificar, en 1992, el cultivo de marañón orgánico por medio de la Organic Crop Improvement Association (OCIA; Ucroprobex 2000).

Aunque han existido esfuerzos por mantener la producción orgánica, las iniciativas de las cooperativas de marañón no han avanzado mucho, pues el modelo económico actual incentiva ramas económicas que generan mayor ganancia, como las actividades del sector financiero. De acuerdo con Segovia (2002), a inicios de los noventa la disputa sobre los modelos económicos en El Salvador se desarrolló entre el Estado y el sector privado organizado, particularmente entre los sectores económicos tradicionales y los grupos económicos que durante el periodo del conflicto armado de los años ochenta, habían diversificado sus inversiones especialmente en los servicios, el comercio y la industria maquiladora.

Estas iniciativas de economía solidaria requieren constituir organizaciones comunitarias fuertes, con participación de mujeres y hombres de las comunidades; asegurar su formación permanente, y plantear un horizonte de producción a mediano y largo plazo. Sin embargo, hoy en día muchos productores comienzan a perder el interés en la producción orgánica debido a requerimientos y exigencias superiores a los de la producción convencional.

Implicaciones de las medidas neoliberales en el funcionamiento de la cadena global de marañón

Sandoval (2010) expone que la nueva división internacional del trabajo, explicada por cadenas globales de valor, es conducida por empresas globales y modifica, a través del cambio productivo, organizacional e institucional, la conformación de los mercados, antes delimitados por fronteras y hoy por ventajas competitivas heterogéneas. El Estado pasó de tener una fuerte presencia como regulador de la economía a ser subordinado y garantizar la mínima perturbación de los flujos globales de valor. En este contexto, la propiedad cooperativa bajo la que opera la producción de marañón queda fuertemente rezagada.

En el esquema neoliberal se propician los espacios para los grandes agrobiznes, y otro tipo de iniciativas se vuelven de poco interés para el gran capital. Bajo esta lógica de no intromisión en los mercados, el Estado salvadoreño ha dejado al agro desprotegido y sin una estrategia de reactivación. Tal es el caso de la cadena del marañón orgánico y su inserción en el mercado mundial.

Para analizar la cadena global de marañón, parto del enfoque de cadenas globales de mercancías (CGM). Jiménez y Pelupessy (2015) reconocen que este enfoque es un marco apropiado para el estudio de los procesos de producción, transformación y comercialización internacional en los países en vías de desarrollo, pues permite analizar la secuencia de mercados tomando en cuenta la inexistencia de un vínculo directo entre el productor de materias primas y el consumidor final. Gereffi y Korzeniewicz (1994) definieron una cadena global como el rango de actividades que envuelven el diseño, producción y comercialización de un producto, donde la cadena está formada por un conjunto de

redes organizadas en torno a una mercancía o producto, y que vincula entre sí a unidades familiares, empresas y Estados dentro de la economía mundial.

El enfoque de CGM otorga ventajas analíticas al permitir estudiar las interrelaciones entre actores en los procesos productivos, la creación de valor y la distribución de las rentas. También incorpora la perspectiva internacional de la cadena, la forma de organización de los actores, así como los aspectos institucionales que la rigen, y el poder de los agentes particulares para dirigir las actividades con o sin un acuerdo con los demás.

En un análisis de la estructura de la cadena no solo se consideran la secuencia de etapas de la producción que la constituyen, sino también los actores participantes en cada una y las redes horizontales y verticales que la forman (Díaz y Hartwich 2005). La cadena de marañón orgánico está estructurada en cinco etapas: producción, procesamiento, exportación, distribución-comercialización y consumo final. A continuación, expongo cada una de ellas (cuadro 2).

a) Fase de producción

Las tres cooperativas dedicadas a la producción orgánica de marañón tienen cierta coordinación vertical entre los actores de distintos eslabones, pues las cooperativas, además de comprometerse en la producción, participan también en el procesamiento y la exportación del producto. Esto ha permitido a los pequeños productores de las diferentes regiones colocar su producción en la plaza salvadoreña. Por otro lado, para lograr un valor agregado, la cooperación entre las cooperativas podría ser mucho más intensa.

La producción de marañón orgánico es la que predomina en El Salvador debido a la demanda en los mercados internacionales, a los cuales los productores se han orientado a vender el producto.

Un problema serio para la producción es la escasez de terrenos que afecta a muchos productores que no pueden aumentar su cosecha. Por esta razón, Aprainores adoptó estrategias para certificar propiedades de socios ubicados afuera de San Vicente, lo cual le ha permitido tener disponibles hasta 350 toneladas más de nuez certificada. Por otro lado, la cooperativa Acopasma

CUADRO 2
Fases de la producción orgánica de marañón en El Salvador

Etapa	Procedimientos
Establecimiento del cultivo	Esta etapa implica seleccionar métodos de propagación de la planta y semillas, establecimiento de plantaciones, nutrición y manejo o control de plagas y otras enfermedades. Actualmente no existe ningún plan de siembra de cultivos ni planes de renovación en los terrenos de los productores.
Manejo del cultivo	Implica controlar plagas y otras enfermedades. Un desafío en el marañón orgánico es la plaga de la chinche pata de hoja, que ocasiona manchas negras en la semilla y ha llegado a causar daños en hasta 50% de la cosecha de algunas cooperativas (Ucraprobex 2000). Dentro de esta etapa se consideran las podas para facilitar la cosecha.
Renovación del cultivo	Con la renovación del cultivo se espera recuperar su capacidad productiva. El criterio fundamental para renovar es la edad de la planta; sin embargo, si se implementan las técnicas adecuadas al cultivo, la vida útil puede oscilar entre los veinticinco y treinta años. La renovación se puede hacer de forma parcial o total; no obstante, es recomendable la primera por el impacto ecológico que conlleva. La renovación parcial se realiza en un periodo de tres años.
Recolección	Implica labores agrícolas que permitan cosechar el fruto y el falso fruto: ¹ limpieza, pesa, secado, almacenamiento. La cosecha se realiza desde febrero hasta principios de mayo. Después se separa la nuez del falso fruto para el procesamiento.

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a cooperativas.

tiene cultivos en terrenos muy inclinados, lo cual dificulta la recolección del producto.

Convertir la producción convencional en orgánica mediante la certificación fue benéfico para las cooperativas productoras, pues les permitió diferenciar su producto e ingresar a mercados europeos en nichos particulares y de comercio justo, en el caso de Aprainores. Sin embargo, no todos los productores lograron mantener la certificación. Actualmente, solo la producción de Aprainores está certificada.

¹ En la producción de marañón se considera el *fruto* a la nuez del marañón, mientras que el *falso fruto* es entendido como la parte carnosa de la fruta, de la cual se pueden obtener jugos, jaleas y otros derivados distintos de la nuez.

Las estadísticas de producción manifiestan problemas en el rendimiento y la producción durante la última década. En los primeros cinco años de la década de 2000 la situación mejoró; lo que fue atribuido al programa Frutales, que apoyó a la industria de marañón. Sin embargo, el comportamiento cambió entre 2007 y 2010, y en los últimos años la producción ha mostrado una tendencia decreciente. En 2007 se dio una caída de 54 % en la producción y de 9 % en el rendimiento. Este comportamiento se explica por la reducción de 49 % en la superficie sembrada. La disminución del área sembrada se debe a que las cooperativas experimentaron la creación de asentamientos humanos en terrenos donde se cultiva marañón. Además, las fuertes tormentas tropicales ocurridas, Ida en 2009 y Agatha en 2010, afectaron las cosechas de los siguientes años.

Una vez concluida la producción de marañón, se transita a la etapa de procesamiento, en la que los productores venden a las cooperativas procesadoras la nuez en bruto. La producción en el campo es rentable para el productor porque el costo de producir nuez orgánica en finca es de 170 dólares por tonelada, y al venderla a los procesadores orgánicos como Aprainores, el productor obtiene un precio de 220 dólares por tonelada debido a la certificación orgánica y de comercio justo, con lo que pueden recuperar sus costos con un beneficio de aproximadamente 5 dólares.

Las estadísticas reflejan que El Salvador ha perdido posicionamiento en la producción mundial de marañón. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), en 2008 El Salvador se situaba en el lugar 22 de los países que producen este fruto, cuando diez años atrás ocupaba la posición 19, y en 1970, la posición 14.

b) Procesamiento

Las únicas dos cooperativas que procesan la nuez son Aprainores y SCPM, y utilizan un proceso semimecanizado con equipos para descortezar la nuez. Muchos de estos equipos han sido importados desde Brasil, aunque algunos fueron fabricados localmente.

Dos aspectos importantes para el procesamiento de la nuez son el rendimiento obtenido en planta y la calidad de semilla obtenida. Si durante el proceso se ingresan 45.4 kg de nuez a la planta procesadora, al final del proceso se espera obtener 9.53 kg de almendra, lo que significa que el 79 % del producto se pierde en el proceso. Aparte del procesamiento de la nuez, las cooperativas no obtienen otros subproductos del marañón, con excepción de casos muy aislados.

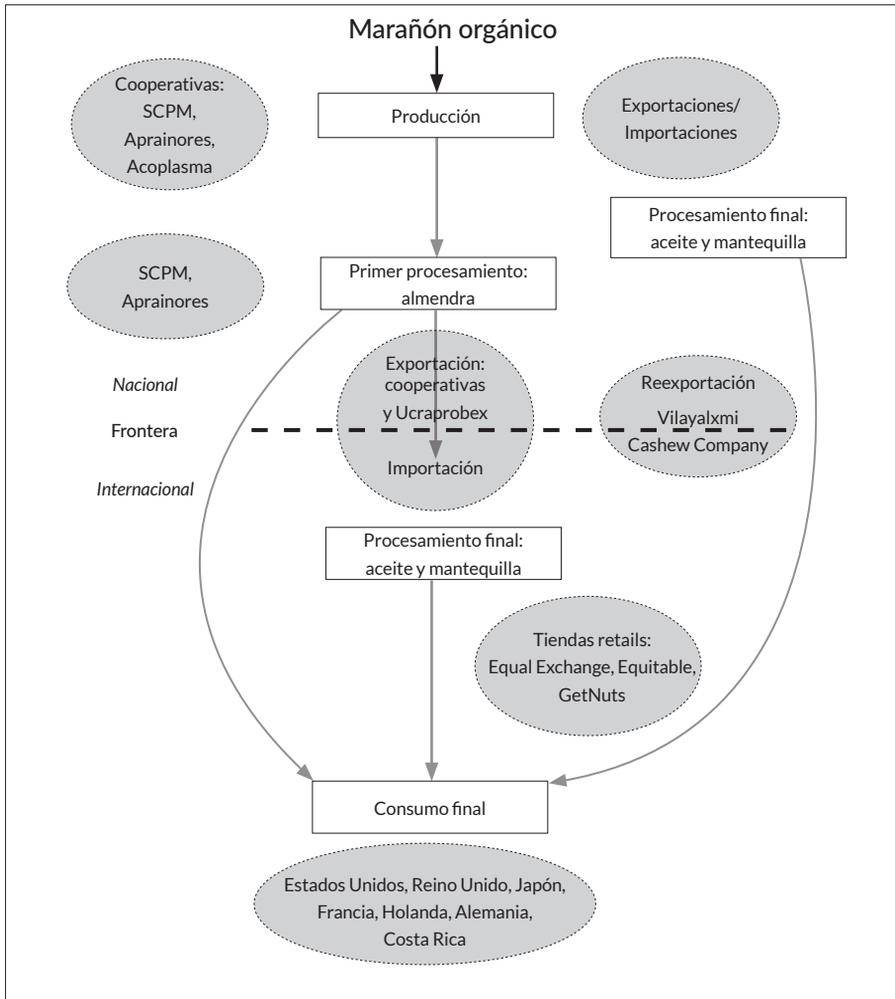
La cadena de marañón orgánico presenta una complejidad intermedia, pues el producto no se consume en el lugar de origen y durante todo el proceso experimenta una o dos formas de transformación (Jiménez 2011). Del marañón se obtienen productos de la nuez y del falso fruto, y ambos derivados experimentan más de un procesamiento. En El Salvador, la complejidad intermedia de la cadena se observa cuando se obtiene la almendra (primer procesamiento) lista para consumirse o para obtener otros productos más elaborados, como la mantequilla y el aceite de la cáscara (procesamiento final). En esta cadena orgánica, estos otros productos se elaboran fuera de las fronteras salvadoreñas. Cerca del 90 % de las exportaciones son de semilla en bruto y solamente 10 % de semilla procesada (Martínez 2006). Las empresas ubicadas en la Unión Europea y la India son las que se encargan de un segundo procesamiento, para después reexportar estos subproductos con mayor valor agregado hacia Estados Unidos, Japón y la propia Unión Europea.

c) Exportación

La almendra es comercializada por las propias cooperativas, que la exportan directamente al distribuidor. Solamente Acopasma, que no procesa la almendra pero sí exporta la nuez, acude a un intermediario para la comercialización de su nuez, en este caso, la Unión de Cooperativas de la Reforma Agraria Productoras, Beneficiadoras y Exportadoras (Ucraprobex).

El principal mercado de destino es la India, que concentra el 82 % de las exportaciones en volumen; sin embargo, en términos de valor, este país solo concentró el 45 %. Otros clientes internacionales son Equitable, de Francia y

FIGURA 1
El Salvador: la cadena del marañón orgánico



Fuente: Elaboración propia con base en Jiménez (2011) y entrevistas a cooperativas.

Equal Exchange, del Reino Unido, quienes venden la almendra o la procesan para mantequilla de marañón, ambos bajo la distinción de comercio orgánico y justo. Un cliente en Costa Rica es la franquicia GetNuts, que vende la almendra confitada a clientes minoristas y también opera en Honduras, Ecuador,

Panamá y Estados Unidos.³ El cliente en la India es la compañía Vijayalaxmi Cashew Company, exportadora de semilla de marañón, aceite y lubricantes obtenidos de la cáscara de la nuez. Esta compañía también adquiere materia prima de Tanzania, Mozambique, Nueva Guinea e Indonesia.⁴

Dentro de esta misma cadena se pueden identificar nichos para comercializar los productos del marañón. Como se muestra en la figura 1, después del procesamiento, la almendra se puede consumir directamente en los países de destino final. La otra opción es aquella donde la almendra se procesa nuevamente para obtener subproductos. Este procesamiento se realiza en el país del consumo final. Una tercera vía consiste en que después del primer procesamiento, que se lleva a cabo en El Salvador, se realiza un procesamiento final para obtener los subproductos de la almendra en otros países en vías de desarrollo, y estos después son reexportados hacia los países desarrollados para su consumo final. En este caso, la nuez se exporta de El Salvador a la India, donde se procesa y se reexporta para consumo final a la Unión Europea.

d) Distribución, comercialización y consumo final

Las nueces producidas y exportadas por países en vías de desarrollo no son productos finales para venta al consumidor, sino que constituyen productos intermedios con mayor o menor grado de procesamiento (con o sin cáscara), los cuales pasan por diversos agentes encargados de la distribución o la transformación y empaque (MAG 2002).

En el mercado europeo existen empacadores con gran capacidad para abastecer directamente a los supermercados, realizar campañas publicitarias, manejar *stock* de productos de toda la gama de nueces y productos complementarios, así como tener contratos de exclusividad.

³ Información brindada por Mario Chavarría, gerente general de SCPM, en junio de 2011, y obtenida en el sitio web www.getnuts.com.

⁴ Información brindada por María Isabel Gutiérrez, gerente de exportación de Ucraprobex, en junio de 2011, y obtenida en el sitio web www.vlccashews.com.

Respecto al consumo de marañón y nuez en El Salvador, no existe mucha demanda de los productos orgánicos, ya que los consumidores no están listos para pagar un precio elevado por un producto orgánico. Por lo tanto, el mercado de exportación es más atractivo y conlleva a que se destinen las nueces de menor calidad para el consumo interno, usualmente a través de los mercados informales (Martínez 2006).

A escala internacional, las plazas más atractivas para el mercado orgánico de marañón son las europeas. Para los exportadores salvadoreños, los países destinos de su producto en Europa son Reino Unido y Francia. El segundo es considerado el cuarto mercado más grande de la Unión Europea para la semilla de marañón, y tiene una ventaja para los países en desarrollo que exportan la almendra, como El Salvador, pues Francia no produce las semillas, lo que lo convierte en dependiente de las importaciones para abastecer al mercado interno.

En Europa la almendra se vende en paquetes de mayor volumen (500 g y 1 kg) en tiendas especializadas, mientras que los supermercados ofrecen las nueces en empaques más pequeños. Solo el 20% del mercado del marañón en Reino Unido se realiza en tiendas que no son supermercados (Eapen et al. 2006).

Forma de la cadena: producción y comercio mundial de la nuez de marañón

En esta sección se muestran las diferentes etapas que conforman la cadena a escala global, con el fin de conocer las fases realizadas tanto en El Salvador como fuera de sus fronteras. Una de las grandes dificultades para el análisis es que en las estadísticas internacionales no se separan los datos respecto a la producción convencional y orgánica.

El cultivo de marañón se distribuye en los países asiáticos, como en el sur de India, Vietnam, Tailandia, Indonesia; en África Occidental y Oriental, y en Brasil. El cultivo requiere regiones húmedas y calientes, por lo tanto, se localiza en países cercanos a la región ecuatorial. Los países asiáticos contribuyen con

alrededor del 65 % de la producción mundial, seguidos por los africanos, con el 30 % de la producción total.⁵

A escala mundial hay un grupo de países que concentra la producción de marañón y a la vez importa el fruto. Los datos de la FAO muestran que Vietnam es muy importante en la producción mundial de marañón, pues en 2008 produjo 1 190 000 toneladas, seguido por la India, con 665 000 toneladas. En el caso particular del marañón orgánico, los principales países productores de nueces son Brasil, Madagascar y Sri Lanka. En México y Honduras, el cultivo de nuez de marañón orgánico sigue siendo relativamente desconocido (Augstburger et al. 2000).

Mientras que la India, Brasil y Vietnam contribuyen con alrededor del 70 % del total del marañón producido en el mundo, América del Norte por sí sola representa el 50 % del consumo mundial de marañón. Otro 29 % del consumo mundial se destina a la Unión Europea, y el 21 % a los países asiáticos, principalmente India y China.⁶

Aunque los países africanos están produciendo más semillas de marañón, debido al atraso que tienen en cuanto al procesamiento exportan más del 80 % de su producción a la India y otros países del sudeste de Asia para su procesamiento.

India exporta entre 100 000 y 125 000 toneladas de semilla de marañón por año, seguido por Vietnam y Brasil. Mientras tanto, Estados Unidos, Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Japón son los principales compradores de almendra de marañón de India. Los principales importadores de la almendra en el mundo son Estados Unidos, la Unión Europea, China, Emiratos Árabes Unidos, Japón y Arabia Saudita.⁷

En El Salvador se ubican 588 productores de marañón orgánico, distribuidos en dos regiones del país. El 94.7 % se ubica en la región oriental, principalmente en los departamentos de San Miguel y La Unión, donde se encuentran cerca del 98.3 % de las tierras cultivadas de marañón orgánico

⁵ http://cashewinfo.com/home.asp?file_id=geographic_distribution.

⁶ http://cashewinfo.com/home.asp?file_id=demand_supply.

⁷ http://cashewinfo.com/home.asp?file_id=demand_supply.

en el país. Mientras tanto, el 5.3 % de los productores orgánicos se ubican en la región paracentral, principalmente en el departamento de San Vicente, y poseen cerca de 24.65 ha cultivadas de marañón (1.65 % del total de marañón orgánico).

Política e instituciones en la cadena de comercialización del marañón

La cadena de marañón orgánico está determinada por la demanda mundial, pues los comercializadores y distribuidores fijan los precios para los pequeños países productores del Sur global, como El Salvador, y establecen los requisitos de la almendra en cuanto a calidad y peso. Las grandes compañías comercializadoras y distribuidoras se encuentran en países del Norte; con sedes en Estados Unidos y Europa, controlan el procesamiento y la comercialización desde arriba, así como las últimas fases de procesamiento antes de que el producto llegue al consumidor final (Jiménez 2011). Estudios realizados sobre el comercio de almendra de marañón en el mercado europeo (Eapen et al. 2006) advierten que este es dominado por las grandes cadenas de venta al menudeo (integrada por distribuidores-minoristas: los supermercados), mediante el establecimiento e implementación de nuevas prácticas y normas para las transacciones entre los nodos y los actores de la cadena.

Además de los grandes comercializadores, existen otros actores con una presencia importante en la cadena y capacidad para definir parámetros de productos y procesos. Estas cuantificaciones son definidas no solo para proteger a los consumidores, sino también para crear transparencia en el mercado al determinar normas técnicas que definen peso, medidas y otros requisitos (Humphrey y Schmitz 2002). En la cadena de marañón las organizaciones certificadoras precisan precios justos y requerimientos de calidad.

En el caso de Aprainores, la certificación orgánica se lleva bajo los requerimientos tanto de la certificación orgánica como de la del comercio justo. Fairtrade Labelling Organization (FLO), que certifica comercio justo, realiza investigaciones de costos y establece precios mínimos de venta. Igualmente,

define los parámetros bajo los cuales se debe producir el marañón justo (abonos, condiciones laborales, entre otros).

En la cadena se establecen parámetros de proceso para evitar o reducir el riesgo. Los compradores los hacen cumplir ante posibles pérdidas derivadas de falta de cumplimiento de compromisos o porque no se asegure que el producto se ajusta a las normas necesarias (Humphrey y Schmitz 2002). Esto último es muy importante, pues en la cadena del marañón a escala internacional, las cooperativas compiten con países con amplia experiencia y capacidad para producir y procesar cantidades significativas de semilla de marañón a precios más bajos; sin embargo, la calidad de la almendra y la diferenciación que le imprimen las certificaciones de las cooperativas salvadoreñas las ayuda a ingresar a los mercados internacionales especiales.

En Europa, las cadenas de supermercados son las que especifican la calidad, tipo de producto, envasado, variedades y procesos que verifican mediante auditorías e inspección. Las cooperativas productoras están supervisadas con visitas por parte de las organizaciones de certificación, agentes subcontratados por los clientes o por el mismo comprador. Acopasma recibe inspecciones continuas de parte de la empresa Sumitomo Corporation, que representa al cliente hindú realizando cortes de calidad de la nuez, revisión de la planta y el almacenaje, entre otros aspectos.

Los parámetros se hacen cumplir también a través de las instituciones gubernamentales. Por ejemplo, la iniciativa para producir y vender el jugo clarificado de marañón por parte de la Juventud Rural del Bajo Lempa no puede concretarse porque antes de vender el producto, el Ministerio de Salud (Minisal) les debe otorgar los permisos correspondientes.

A pesar de que los importadores y comercializadores son los que controlan la cadena, las cooperativas salvadoreñas guardan relaciones verticales importantes con sus clientes, las cuales han establecido durante casi diez años. Este vínculo se da principalmente en los eslabones nacionales, puesto que más allá las relaciones se vuelven complejas, con nuevos competidores y clientes que ejercen su influencia a escala internacional.

Un punto importante en la cadena de producción es la diferencia en el precio de venta que se puede obtener según el eslabón del que se trate y el grado de

FIGURA 2
El Salvador: precio por kilogramo de nuez orgánica
según los principales eslabones de la cadena (2011)

Productor de nuez orgánica	Producción Transporte	0.48 USD por kg de nuez orgánica sin procesar
Procesador de nuez orgánica	Procesamiento Transporte	10.8 USD por kg de nuez orgánica procesada
Importador de nuez orgánica	Mercado de exportación	26 USD por kg de almendra orgánica lista para consumir

Fuente: Elaboración propia con base en Martínez (2006) e información de las cooperativas.

procesamiento que se realice de la nuez. El precio por kilogramo de nuez al que se puede vender en el mercado interno respecto al mercado internacional varía significativamente (figura 2).

Por ejemplo, en el mercado internacional el kilogramo de nuez procesada lista para el consumo final se vende a 26 dólares. Si la nuez es procesada en El Salvador y se vende internamente (10.8 dólares por kg), esto representa el 41.53 % del precio al que se vende en el mercado de exportación. Mientras que si la nuez es vendida en El Salvador sin procesar, el precio de venta será aproximadamente de 2.49 dólares por kilogramo, lo cual equivale a un 9.6 % del precio en el mercado de exportación. Por lo tanto, conviene llevar a cabo un procesamiento en El Salvador y vender en el extranjero para que los beneficios y los costos se distribuyan más justamente entre diferentes actores y a un mejor precio para productores y procesadores locales.

En cuanto a la institucionalidad, son relevantes las políticas públicas e intervenciones no públicas que afectan el funcionamiento de los mercados en la cadena. Estrategias de desarrollo como la liberalización, regulaciones internacionales, organizaciones de productores y comercializadores, ONG y otros, desempeñan un papel importante en cuanto a la distribución de ingresos y de externalidades en las cadenas (Díaz, Pelupessy y Sáenz 2009). Aquí se consideran los aspectos institucionales que gobiernan la cadena en el ámbito nacional

y los que rigen la cadena en el ámbito internacional, incluido el marco jurídico que respalda a las políticas de corte neoliberal implementadas en el país y que, desde luego, han perjudicado al sector agropecuario. En El Salvador, los aspectos institucionales importantes vinculados a las cadenas son el marco legal de la administración sanitaria, como la Ley de Sanidad Vegetal y Animal de 1995, y el Reglamento para la Producción, Procesamiento y Certificación de Productos Orgánicos de 2004. También son importantes los acuerdos comerciales que El Salvador ha firmado con México, Estados Unidos, Chile, Taiwán y, más recientemente, el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, el cual permite que muchos productos gocen de libertad de aranceles, incluido el marañón.

En el ámbito nacional también hay políticas sectoriales con influencia en la cadena del marañón. En las últimas décadas el papel del Estado ha sido crear un marco institucional apropiado para la empresa privada, fomentando mercados desregulados y el libre comercio, por lo que las cooperativas de producción de marañón quedan fuertemente rezagadas. En el esquema neoliberal se propician los grandes agronegocios, mientras que otro tipo de iniciativas, como las de corte colectivo, son de poco interés. Como consecuencia, el apoyo hacia el sector del marañón orgánico es muy escaso, y los esfuerzos, de corto plazo. La iniciativa privada se orienta a la producción convencional, en la cual se utilizan pesticidas y otros agroquímicos, impulsada a través de compañías transnacionales como Monsanto. No obstante, la participación de las ONG y de las agencias de cooperación internacional complementa la escasa presencia del sector público, aun cuando su capacidad de ofrecer la asistencia técnica para la producción y procesamiento de productos orgánicos en el país es limitada (Ángel 2004).

Las medidas no arancelarias afectan el ingreso a los mercados externos, y dentro de estas, las más comunes son las regulaciones para la protección de la salud humana, animal y vegetal, los estándares de calidad y de etiquetado y las normas para proteger el medio ambiente, donde la Organización Mundial del Comercio (OMC) es un actor importante. A escala internacional, los países compradores de productos derivados del marañón exigen ciertos requisitos formales para los exportadores, además de los establecidos entre cliente y proveedor. La Unión Europea y Estados Unidos son dos de los mercados más exigentes en cuanto a estas normas. Según los criterios de las certificaciones,

el marañón orgánico debe cultivarse y fabricarse de manera que cumpla los estándares establecidos por los países en los que se vende. Así, por ejemplo, un aspecto importante para el acceso al mercado europeo es el nivel de aflatoxina⁸ en las semillas y nueces comestibles, pues cantidades excesivas de esta sustancia pueden traer graves consecuencias para la salud humana y animal (Barrera 2008).

Los estándares de producción orgánica son parecidos en todo el mundo. Algunos de estos son National Organic Program (NOP, Estados Unidos), Eco-regulation (Estados Unidos, Unión Europea), National Program for Organic Production (NPOP, India) y JAS Standards (Japón) (Minec 2010). La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM, por sus siglas en inglés) difunde un estándar de agricultura orgánica, así como un marco que regula la certificación orgánica. Esta organización también apoya al movimiento orgánico y algunos miembros de la junta directiva de Aprainores son parte de esta federación.

Una vez conocido el funcionamiento de la cadena global, es posible establecer un conjunto de factores que favorecen o limitan la capacidad de los participantes para lograr mejores condiciones y realizar innovaciones (cuadro 3). Aunque existe la capacidad de las cooperativas para innovar y mejorar su posición en la cadena, es necesario superar los obstáculos que conciernen al manejo técnico y agronómico de la producción, así como a aspectos económicos y financieros. No obstante, mientras exista un sesgo antiagropecuario en la política pública de El Salvador, los obstáculos serán difíciles de sortear.

Reflexiones finales

La producción orgánica de marañón surge en El Salvador de forma paralela a la implementación de las reformas neoliberales, por lo que el Estado tiene un

⁸ Sustancia nociva producida por ciertos tipos de moho que se encuentran en cereales y nueces conservados en malas condiciones, lo que causa intoxicaciones en animales y seres humanos.

CUADRO 3
Factores que favorecen y limitan las innovaciones
en la cadena de marañón orgánico en El Salvador

	Factores que favorecen la innovación	Factores que limitan la innovación
Al interior de las empresas	<ul style="list-style-type: none"> • Productores comprometidos con las cooperativas • Proveedores de nuez cercanos a las plantas procesadoras • Cooperativas organizadas con registros y planes de producción y procesamiento • Comunicación entre miembros directivos de las cooperativas 	<ul style="list-style-type: none"> • Poca coordinación horizontal y vertical en la cadena • Escaso personal técnico capacitado • Mal manejo de la deuda • Actores heterogéneos en la forma de realizar las actividades del marañón orgánico • Falta de visión de mediano y largo plazo de los directivos
Fuera de las empresas	<ul style="list-style-type: none"> • Condiciones climáticas y suelos favorables para la producción • Demanda mundial creciente • Clientes extranjeros exigentes en cuanto a la calidad de almendra y nuez que incentivan a mejorar • Competidores con mayores volúmenes de producción, exportación y experiencia que incentivan a innovar • Grupos que apoyan la agricultura orgánica a escala mundial • Potencial de las remesas familiares que reciben los productores 	<ul style="list-style-type: none"> • No hay proveedores especializados de servicios financieros • Proveedores de maquinaria se encuentran en el extranjero • Escasez de industrias relacionadas que aprovechen el falso fruto • No existen políticas de innovación y desarrollo a nivel sectorial y al interior de las cooperativas • Demanda interna escasa • La gobernanza de la cadena en el extranjero • Poco apoyo de entidades públicas y privadas • Remesas familiares conllevan deserción laboral en las zonas de producción

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del estudio de campo.

papel limitado en la fiscalización, seguimiento y control de la actividad y su certificación, que no siempre puede ser compensado por el movimiento orgánico y sus cooperativas, pues no siempre logra estar bien organizado y vigilar sus intereses. Así, se observan experiencias negativas, como la pérdida de áreas certificadas por la fumigación aérea en zonas aledañas a campos orgánicos, evidencia de la falta de acciones concretas por parte del Estado y de una actitud proactiva del movimiento orgánico organizado.

Aunado a lo anterior, solamente el 0.5 % del comercio mundial corresponde a productos orgánicos, lo cual incrementa el desinterés de las autoridades por esta actividad, por lo que su promoción y apoyo son muy bajos. No se considera la importancia que el cultivo de marañón orgánico tiene para determinados sectores sociales y económicos en el país, especialmente por su capacidad de generar empleos e ingresos.

Toda esa situación denota la preponderancia que tienen el mercado y la iniciativa privada sobre el interés colectivo. El mercado responde a intereses económicos de élites y grupos poderosos que se han orientado, desde los años noventa, al sector de comercio y servicios; sin embargo, el papel del sector privado podría ser muy relevante, pues contar con instituciones privadas, como las empresas certificadoras, podría incentivar innovaciones en la cadena al ofrecer apoyo técnico y financiero a los productores locales, como ya lo están haciendo con Aprainores, vinculada con las certificadoras.

El encadenamiento productivo del marañón orgánico es una condición para insertarse y posicionarse de forma exitosa en el mercado internacional. Para lograr esto, es necesario que la cadena alcance un mayor grado de coordinación entre los actores comprometidos, incluido el Estado, desde la producción hasta el desarrollo de redes de comercialización.

Referencias bibliográficas

- Acicafoc (Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana) y FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). 2011. "Fortaleza crediticia y organizativa: un medio de subsistencia comunitaria y forestal". Rep. Téc. del proyecto Mecanismos Financieros Prácticos Aplicables y Sostenibles. San Salvador: Acicafoc; FAO.
- Ángel, A. 2004. "Los productos orgánicos en El Salvador: marco regulatorio, apoyos institucionales y acceso a mercados". Rep. Téc. del Proyecto INT/OT/2AQ. San Salvador: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

- Augstburger, F., J. Berger, U. Censkowsky, P. Heid, J. Milz y C. Streit. 2000. *Agricultura orgánica en el trópico y subtrópico: guía de 18 cultivos*. Gräfelfing: GTZ; Asociación Naturland.
- Bandesal (Banco de Desarrollo de El Salvador). 2016. “Informe Sectorial Agropecuario 2012-2016”. <http://www.bandesal.gob.sv/wp-content/uploads/2017/03/Final-Informe-Sector-Agropecuario.pdf>.
- Barrera, M. 2008. “Ficha de Productos de El Salvador hacia el mercado de la Unión Europea: semillas y nueces”. Consultado el 6 de abril de 2011. <https://docplayer.es/5236967-Ficha-de-producto-de-el-salvador-hacia-el-mercado-de-la-union-europea-12-2008.html>.
- Clusa El Salvador. 2006. “Diagnóstico de situación de la producción orgánica en El Salvador y una propuesta para su fomento”. Consultado el 8 de mayo de 2016. <http://www.iica.ac.cr/Esp/Programas/Innovacion/Documentos%20de%20Tecnologia%20e%20Innovacin/Situaci%C3%B3n%20de%20la%20Producci%C3%B3n%20Org%C3%A1nica%20en%20El%20Salvador%20y%20Propuesta%20para%20su%20Fomento.pdf>.
- Cummings, A., M. López y O. Segura. 1998. “Innovación en el sector forestal: estudios de casos para El Salvador, Nicaragua y Costa Rica”. Consultado el 21 de marzo de 2011. <http://www.bio-nica.info/biblioteca/Cummings1998InnovacionForestal.pdf>.
- Díaz, K. y Z. López. s. f. “La globalización neoliberal y los problemas medioambientales”. Cienfuegos: Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”.
- Díaz, R. y F. Hartwich. 2005. “Cadenas de valor: un paso innovador para la agricultura centroamericana”. *Revista Alternativa para el Desarrollo*, núm. 96, 34-45.
- Díaz, R., W. Pelupessy y F. Sáenz, eds. 2009. *Cadenas globales: enfoque y aplicaciones para agroindustrias de países en desarrollo*. Heredia: EUNA.
- Eapen, M., K. Harilal, J. Jeyaranjan, N. Kanji y P. Swaminathan. 2006. “Power in Global Value Chains: Implications for Employment and Livelihoods in the Cashew Nut Industry in India”. Consultado el 7 de agosto de 2011. <http://pubs.iied.org/pdfs/14514IIED.pdf>.

- Gereffi, G. y M. Korzeniewicz, eds. 1994. *Commodity Chains and Global Capitalism*. Eastport: Greenwood.
- Guzmán, K. y J. Salinas. 2008. “El patrón de acumulación de capital a partir de la implementación de los PAE y PEE en El Salvador”. Tesis de licenciatura en Economía. Universidad de El Salvador.
- Humphrey, J. y H. Schmitz. 2002. *Las empresas de los países en vías de desarrollo en la economía mundial: poder y mejora de las cadenas globales de valor*. Buenos Aires: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
- Jiménez, G. 2011. “Sustainable Upgrading of Smallholders in Global Agri-food Chains”. Tesis de doctorado. Tilburg University.
- Jiménez, G. y W. Pelupessy. 2015. “Estrategias de mejorar el medio ambiente en cadenas agroalimentarias”. En *Ideas latinoamericanas sobre el enfoque de cadenas globales de mercancías*, coordinado por R. Díaz Porras, W. Pelupessy y P. Pérez Akaki, 143-176. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería). 2002. “Mercado de la nuez de marañón”, boletín. San Salvador: MAG.
- Martínez, A. I. 2006. *El Salvador: la cadena global de marañón*. San Salvador: Fundación Nacional para el Desarrollo.
- Minec (Ministerio de Economía). 2010. “El reto del futuro para la industria alimenticia: los alimentos orgánicos”. Consultado el 27 de mayo de 2011. <http://www.exporta.gob.sv/docDetalle.ashx?tipo=2&ext=6&codigo=905>.
- Montoya, A. y A. L. Vega. 2004. *Anacardo orgánico: una experiencia de economía social y comercio internacional que favorece el desarrollo humano sostenible*. San Salvador: Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”.
- Moreno, R. 2004. *Globalización neoliberal en El Salvador*. Barcelona: Fundación Món-3.
- Salinas, J. 2017. *Desarrollo rural en El Salvador: una propuesta transdisciplinaria desde un enfoque territorial*. San Salvador: Editorial Universitaria.
- Sabbatella, I. 2014. “Neoliberalismo y naturaleza: la ‘comoditización’ de los hidrocarburos en Argentina (1989-2001)”. *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica* 22: 101-116.

- Sandoval, S. 2010. "Cadena global de hortalizas: la estrategia de ascenso de los productores del noroeste de México". Tesis de doctorado en Economía. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Segovia, A. 2002. *Transformación estructural y reforma económica en El Salvador*. Guatemala: F&G Editores.
- Ucraprobex (Unión de Cooperativas de la Reforma Agraria Productoras, Beneficiadoras y Exportadoras). 2000. *Manual de marañón orgánico*. San Salvador: Ucraprobex.
- Valenzuela Feijoo, J. 1990. *¿Qué es un patrón de acumulación?* México: Universidad Nacional Autónoma de México.

La *finis terrae* en la economía mundo Un análisis de los imaginarios territoriales y sus tensiones en la Patagonia chilena*

Juan Carlos Rodríguez Torrent
Universidad de Valparaíso

El tiempo no espera a nadie
ENRIQUE VILA-MATAS

Introducción

Nos interesa reflexionar sobre algunas de las transformaciones que están ocurriendo en la Patagonia chilena, la región más austral del planeta. Esta corresponde a una superficie de 265 275.8 km², equivalente a 34.2% del territorio nacional de Chile, contiene el 80% de áreas protegidas del país y un 50% de su territorio está bajo este régimen, lo que da un total de 12 millones de hectáreas. Está habitada por 275 218 personas (INE 2012), y solo encontramos dos ciudades significativas como centros administrativos, separadas por más de mil kilómetros lineales y divididas por los campos de hielo Sur y Norte, que corresponden a una de las tres reservas de agua dulce más importantes del planeta: por un lado, Coyhaique, que cuenta con menos de 60 000 habitantes, y por otro, Punta Arenas, con unos 160 000. En relación con Coyhaique, sus interconexiones son con la ciudad de Aysén —en la costa— y pequeños

* Este trabajo es producto del proyecto Fondecyt 1161013, “De los ensamblajes locales, regionales y nacionales a los ensamblajes globales. Etnografía y política de las relaciones de sujeción local en el área de influencia de la carretera Austral, la provincia de Palena y la región de Aysén”.

poblados distantes unos de otros, donde los de mayor tamaño no superan los dos mil a tres mil habitantes, y en el caso de Punta Arenas la figura no varía, con excepción de Puerto Natales, a 247 kilómetros al norte, con menos de veinte mil. Poblados y centros de mayor tamaño solo se encuentran en Argentina.

La lejanía del centro político, radicado en la capital, Santiago, a más de dos mil kilómetros, así como la particular y accidentada geografía demoraron su ocupación, y la ausencia de caminos y vías férreas han sido factores clave para que este territorio se mantenga aislado y se le defina como una “frontera interior”. Debido a esta condición —la ignorancia del centralismo—, su administración y colonización han sido un problema no resuelto para el Estado y los gobiernos, por lo que se puede hablar de falta de determinación de objetivos para estos territorios, ya que se colonizó con el avance de ovejas como frente pionero más que por iniciativas políticas y urbanas para el poblamiento. Así, con una baja presencia estatal, en Aysén se entregaron cientos de miles de hectáreas para la explotación ganadera a sociedades que no fundaron y poblaron, sino que administraron sus negocios a distancia, a pesar de compromisos para radicar a “cien familias de origen sajón”, como había ocurrido con la colonización alemana en el centro sur, en la zona étnica mapuche.

Por cuestiones geográficas asumidas como deterministas (altitud de la cordillera y topografía), otras económicas (pobreza de las arcas fiscales) y políticas (lejanía y escasos votantes), la Patagonia constituye un límite de procesos de integración, y están pendientes la conectividad eficiente, la distribución de los bienes sociales (como salud, educación y vivienda) y la cobertura de los servicios públicos. Ser la última región en integrarse a la geografía económica del país (Corfo 1950, 1960) representa para sus habitantes una exclusión respecto de la distribución de bienes y servicios colectivos, ya que el territorio es considerado por la población local un espacio periférico o territorio al margen, lo que les impide ver y vivir la consolidación de un relato de país unitario e integrado en lo simbólico y lo emocional. Sin embargo, desde otra óptica, esta misma falta de integración (ya que el avión es el único medio de transporte directo) es, por una parte, lo que ha puesto a la Patagonia a salvaguarda de ser controlada en absoluto por intereses depredatorios y extractivistas propios del capitalismo, como ha acontecido en gran parte del país, a propósito de su

matriz exportadora primaria, y por otra, ha abierto la posibilidad de comprar tierras baratas con diversos fines.

Conforme a estas ideas marco, postulamos que a partir de la facilidad de pronunciación del vocablo *Patagonia* en diversas lenguas, de las comunicaciones e imágenes circulantes y de su asociación con el bajo poblamiento (0.8 habitantes por km²), la naturaleza, la lejanía y el fin del mundo, se singulariza un imaginario que refiere al espacio, al paisaje y la territorialización en el siglo XX y comienzos del XXI. Esto posibilita el desarrollo de distintas conceptualizaciones que promueven producciones de significado colectivo, de tipo material y simbólico, que crecientemente valorizan el territorio dentro de concepciones posmaterialistas. Operan como representaciones sociales que sostienen *verosímiles*, es decir, enunciados de verdad utilizados y compartidos por miembros de grupos para dirigir conductas respecto de un objeto social; así, se establece un orden que funciona como orientación y facilita la comunicación de quienes suscriben los códigos para nombrar y clasificar sin ambigüedad cuestiones propias de su interés.

Sostenemos que el imaginario que se consolida no corresponde a un despliegue de ficciones que posee una comunidad, sino a un abanico de sentidos que se encuentran en la base misma de los comportamientos concebidos como apropiados, en diálogo con una lectura crítica de lo que acontece en términos ambientales en el mundo y la vida nacional. Su característica esencial es su capacidad retórica organizativa y socialmente utilizada, que permite sostener una homogeneidad fáctica y virtual de la representación de la naturaleza y los ecosistemas, los cuales tienen por función significar, orientar, enlazar, informar y comunicar atributos, para convertirse en un marco de una representación social y de acciones deseables frente a un objeto social como la naturaleza. En este sentido, por una parte, el imaginario establece un orden cosmológico y telúrico que antecede la propia temporalidad de la vida; por otra, facilita la comunicación al proveer un código para las conductas de quienes visitan, le aprecian y se comprometen con las vidas. Así, el imaginario se traduce también en actitudes, informaciones, opiniones, creencias, ideas y percepciones (Castoriadis 1981; Jodelet 2003).

En la argumentación, a partir del valor simbólico y la representación social extendida en distintos formatos, destacamos tres modelos de apropiación, uso y reconfiguración del territorio, sustentados sobre la conceptualización de la naturaleza como un *commodity*: a) migración por cambio de estilo de vida; b) parques de conservación, mediante la venta de bonos de carbono y el despliegue de una filosofía biocéntrica, y c) economía de la experiencia y turismo. Postulamos que algunas de las formas de protección *verdes* erosionan radicalmente las formas de vida local, ya que generan una discontinuidad territorial que limita las posibilidades de movimiento para la reproducción de las comunidades ganaderas y madereras, y bajo sus consideraciones filosóficas o modelos de negocios no existe consideración para la figura del pionero o el colono, con su territorialidad y ontología.

Sostenemos que estos territorios australes ahora han entrado en la economía mundo bajo consideraciones de la *deep ecology* y la *next economy*, y no pueden ser entendidos como abstracciones, sino que hay tanto un proceso de implicación material como otro de carácter simbólico que los redescubre y reposiciona en el mapa de la geografía económica y simbólica del mundo; que obliga a resituarlos en la redefinición capital-naturaleza en el marco del capitalismo extractivista y sus versiones verdes en lo que “aún queda de Chile” (Rodríguez, Gissi y Medina 2015; Rodríguez, Medina y Reyes 2014), así como frente a las ontologías lugarizadas propias de las culturas del trabajo ganaderas que operaron como frente pionero.

Así, observamos que se crean los marcos para un ingente mercado de tierras como un proceso que no solo está asociado a transacciones económicas entre particulares (inversión, especulación, preservación), sino también entre “Estados soberanos”. Esto implica procesos de compra inducida con orientaciones hacia el turismo, la posible producción de alimentos a partir del cambio climático o el control de recursos específicos como el agua y la energía. Cada una de estas variantes genera limitaciones de uso y oportunidades, expulsiones o movimientos intra y extrarregionales de población local, de manera que se conforma como rescritura territorial, pérdida y disolución de memoria de culturas del trabajo, lo que puede apreciarse como un fenómeno que pone sobre

un mismo territorio dominios como el económico y el de la protección ambiental, y valores de un capitalismo clásico y también posmaterialista.

Metodológicamente, el trabajo de campo se realizó entre 2012 y 2016, en el sur de la región de Los Lagos y la región de Aysén. Es de tipo cualitativo y consistió en registros etnográficos con base en un conjunto de observaciones y entrevistas semiestructuradas realizadas en diferentes poblados a lugareños, administradores de predios y funcionarios públicos. Además, se incluyó a ganaderos, madereros, pescadores, emprendedores turísticos, transportistas y pequeños comerciantes. El objetivo de las entrevistas y observaciones era tomar notas sobre las tensiones entre la antigua y la nueva ruralidad, a partir de diversos avcindamientos, visualizando el carácter multifuncional que adquiere el territorio a partir de la presencia de nuevos actores y fuerzas nacionales y globales de corte proteccionista y extractivista, que reconfiguran las posibilidades locales de reproducción. El esquema, asociado también a información secundaria generada en bibliotecas y bases de datos, permitió una triangulación de información sustentada en un modelo multilocalizado, ya que muchas de las explicaciones de lo que está aconteciendo a nivel local se encontraban más allá de los puntos donde se realizaban los registros. Esto permitió observar procesos de desplazamiento y despoblamiento, así como las amenazas a la matriz de actividades económicas tradicionales que cuestionan los arraigos y modifican las características de la frontera interior.

De este modo, los diferentes registros de campo indican como hegemonía predicativa que la Patagonia ofrece un conjunto de atributos especiales y sorprendentes capaces de cambiar la experiencia de vida de un visitante. Su diversidad de ecosistemas, la amplitud del espacio, los animales libres, la activación de los sentidos y una forma nueva de experimentar el tiempo operan como catalizadores de una transformación de sí. Esto significa que la majestuosidad de los *grown forest* y la letanía del aislamiento, los caminos ripiados, las chimeneas humeantes de los hogares, los bosques y los ríos permiten la configuración de una imagen que en gran parte del territorio retrotrae a un tiempo preindustrial; uno que quedó fuera de procesos urbanos, del desarrollo clásico experimentado en gran parte del Chile central y en las zonas mineras del desierto de Atacama desde fines del siglo XIX.

Sin embargo, como ocurre en muchos países, se producen asimetrías interiores por cuestiones de integración geográfica, productiva e infraestructural; inclusiones u omisiones de regiones y localidades, que indistintamente de su tamaño, pueden ser ponderadas dentro de la lógica económica como ganadoras, perdedoras o de sacrificio, en función de sus recursos disponibles (mineros, energéticos, acuíferos, de biodiversidad y paisajísticos), criterios de rentabilidad, estabilidad política y económica, reglas para la inversión extranjera y capital nacional, entre otras. Respecto a este proceso, no se trata del reposicionamiento de países completos ni de regiones en toda su extensión. A veces, existe una selectividad de pequeñas localidades que alcanzan centralidad porque ofrecen algún atributo de interés donde puede posicionarse alguna de las versiones del capitalismo, como ocurre con definiciones y elaboraciones —a veces de cuestiones tan subjetivas y polémicas pero producidas— de los llamados pueblos “mágicos” o “con encanto”, dentro de la expansión del turismo.

Con esta entrada, en la Patagonia se produce una encrucijada clave: cómo hacer compatibles, en un proceso de integración global, nacional y subnacional, los territorios institucionales (políticos), los funcionales (económicos) y los patrimoniales (vividos; Watcher 2000), especialmente cuando se verifica una diseminación de conflictos socioambientales que configuran zonas de sacrificio producto de la “maldición de la abundancia” (Acosta 2009), como acontece a lo largo de todo el territorio chileno en el marco del modelo extractivista. Es decir, lo que significa el interés por un recurso específico en el territorio, la intensidad de las explotaciones y los derechos de propiedad de las poblaciones residentes, en sentido ontológico.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) define los conflictos como:

[...] disputas entre diversos actores —personas naturales, organizaciones, empresas privadas y/o el Estado—, manifestadas públicamente y que expresan divergencias de opiniones, posiciones, intereses y planteamientos de demandas por la afectación (o potencial afectación) de derechos humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las actividades económicas (INDH 2012, 5).

Y agrega el documento oficial: “solo entre enero de 2010 y 2012, se catastra un número de 97, lo que significa un aumento del metabolismo social como crecimiento de los flujos de energía y materiales, así como de los pasivos ambientales”. En este caso, también por la fractura que va sufriendo el territorio a partir de compras de tierra, que es fácilmente verificable a través de internet al digitar, entre otras, la página www.mirrrancgroup.com/ranches-for-sale/patagonia.

Bien conocemos de algunas cuestiones similares en lo que acontece con la ruralidad actual en Latinoamérica o “nueva ruralidad”, de la que han escrito innumerables investigadores con diversas perspectivas disciplinarias: antropólogos, sociólogos, geógrafos, economistas, extensionistas y educadores. Sus rasgos más distintivos cuando se trata de exponerla como territorio, es decir, no como determinante geográfica, sino como una práctica histórica y cultural que es un soporte en el espacio para la diseminación de las infraestructuras y las actividades humanas (Santos 2000), es que estamos enfrentando un proceso radical de transformaciones sociales, económicas, laborales, productivas, territoriales, simbólicas y materiales, y simultáneamente, a partir de sus entrecruzamientos, una dificultad para nombrar lo que contiene. Ello, en el caso de Chile, está cruzado por una opinión pública cada vez más intolerante a las vulneraciones de los espacios vividos por parte de empresas, que todo lo expresan en valor monetario.

De acuerdo con estos supuestos, desarrollamos un conjunto de apartados teóricos y etnográficos que permiten poner en contexto algunos aspectos de lo que está ocurriendo en la Patagonia chilena, en el marco de una investigación sobre los procesos de territorialización. Estos incluyen *a)* territorio y nuevas territorializaciones; *b)* la prefiguración reciente de la Patagonia chilena; *c)* migración y cambio de estilo de vida; *d)* parques de conservación privados; *e)* filosofía biocéntrica: el modelo Pumalín y de la estancia Valle Chabuco; *f)* modelo Patagonia Sur: “disminuyendo la huella de carbono”; *g)* experiencia y “economía de la experiencia”, y *h)* consideraciones finales.

Territorio y nuevas territorializaciones

El territorio, en una primera aproximación, es esencialmente —en términos de Bourdieu— lo sujeto a gestión por las fuerzas contenidas en el campo; por lo tanto, es lo funcionalizado a partir de la valorización y control de sus recursos geofísicos, la recomendación de su uso y la puesta en producción de aquello identificado como importante para el crecimiento del producto interno bruto (PIB). Esta fórmula de medición, en el caso de Chile, se potencia *in extremo* porque el único interés durante los últimos 35 años ha sido producir, exportar y crecer. Muy distinta a la fórmula del producto interno genuino (PIG), propuesta por McElwee y Daly (2014) y Daly y Posner (2012), asociada a indicadores más diversos que los tradicionalmente considerados por el PIB, y que incluye al empeoramiento de condiciones socioambientales, o el producto interno bruto verde (PIB verde), relacionado con los costos ambientales del crecimiento del PIB. Ahí, sin entrar en la discusión conceptual, se nos abre una importante brecha sobre el llamado *antropoceno* (Zalasiewicz, Crutzen y Steffen 2012; Crutzen 2002; Crutzen y Stoermer 2000), el *capitaloceno* (Moore 2015) y el *hiperimperio* (Attali 2007), como fórmulas comprensivas de lo que significa una economía de mundo lleno o superación de la biocapacidad del planeta.

Si la complejidad territorial aumenta, es porque en esta disputa y gestión aparecen diversos agentes coproduciéndola a través de “lenguajes de valoración” (Martinez Alier 2014): propietarios del suelo, especuladores, productores, filántropos, trabajadores que venden su fuerza de trabajo; distintos niveles de poder político que yuxtaponen intereses e imaginan potencialidades de uso, definen y negocian la aceleración de los procesos. La valorización diversa del territorio como proceso de construcción de hegemonía significa siempre un proceso de desterritorialización, tensión o vaciamiento de las memorias contenidas, lo que da paso a nuevas territorialidades, impulsadas por el Estado y las empresas privadas extractivistas y no extractivistas en el marco del régimen neoliberal y el posfordismo, asociadas a un conjunto de operaciones que implican presión sobre los recursos productivos y simbólicos de quienes lo habitan, lo construyen y lo reproducen en términos políticos, económicos y de vida cotidiana.

Conforme a esto, la pregunta por el lugar de la naturaleza y la huella territorial se redimensiona y pasa a ser formalizada en los siguientes términos: ¿por quiénes son gestionados los recursos y los territorios rurales?, ¿de qué modo son gestionados y modelados?, ¿qué parte puede ser gestionada o merece atención?

Así, la tradicional y dicotómica oposición urbano-rural, como primacía de la primera por la confrontación entre modernidad y tradición, cede su valor y pierde capacidad explicativa. Ya no se sostiene por cuestiones de límites; hay una interpenetración bidireccional de fuerzas y poderes, de interrelaciones, de variada composición social y laboral en el espacio-territorio disputado, tanto en su presente como en los imaginarios puestos en él, que son sujeciones económicas, de clase y de género.

Asistimos, producto de los nuevos metabolismos y axiologías, a la consagración de la irreductibilidad de los casos de transformación territorial a tipos ideales. Cuando se aborda el espacio rural bajo esta lógica, y el patagónico dentro de este canon, aparece una constelación inimaginable de formas, combinaciones y fenómenos únicos que hablan de modos de acontecer y de acoplamiento escalar a la economía mundo. Se impone una combinación de variables administrativas, legales, de conectividad e infraestructuras, condiciones ambientales y morfológicas, productivas, de mercado y tradiciones laborales, que expresan y fundan las relaciones de sujeción y ensamblajes específicos de lo global-local, lo nacional-local, lo regional-local.

Entonces, lo rural, conforme a los procesos generalizados de mercantilización de la tierra y los nuevos usos, la interpenetración de la urbe con su modelo industrial en el mundo agrícola y campesino, y las nuevas lógicas de empleabilidad, es lo que ha dado paso a la consideración de la llamada *nueva ruralidad latinoamericana*. Una conceptualización que apunta a redescubrir la relación entre los sujetos y la actividad económica directa, al modo de vida asociado al trabajo agrícola, ganadero, forestal y pesquero artesanal como fuentes de recursos para la reproducción social y biológica de las unidades domésticas.

En algunos casos, la nueva ruralidad queda definida por el tránsito de lo agrícola hacia lo agroindustrial y urbano, lo que significa, en sus rasgos más generales, una alteración de las prácticas de la cotidianeidad y sus rituales, del trabajo como fuente de recursos para procurar la reproducción cotidiana y

generacional, de la sociabilidad laboral y comunitaria, y de la forma de concebir y habitar el espacio. Por ello, el arco de expresión de estas nuevas formas de ordenamiento y disposición constitutivas de las relaciones de trabajo y la sociabilidad tradicionales operan desde un desanclaje total del tejido social a formas de rearticulación comunitarias (Salas, Rivermar y Velasco 2011; Salas y Rivermar 2014). En este sentido, autores como Barkin (2001), Bonnal et al. (2004), Carton de Grammont (1999), Carton de Grammont y Martínez (2009), Llambí (1996), Llambí y Pérez (2007), entre otros, establecen que se trata de un escenario de modificación de las fronteras productivas, disputa de recursos, cambio de uso del suelo, especulación inmobiliaria, inversiones diversas, pluriactividad, diversificación, reconversión, descampesinización, articulación a cadenas productivas y de servicios globales, alteraciones demográficas, participación de nuevos actores, nueva construcción social del espacio, trabajo extrapredial y venta de fuerza de trabajo para completar ingresos, valorización y desvalorización del espacio: colonizaciones y neocolonizaciones.

Lo señalado reivindica la apreciación de la geografía crítica sobre las transformaciones espaciales acontecidas durante las últimas tres décadas, y realiza paralelamente la perspectiva socioantropológica para la caracterización de los actores y sujetos, las nuevas estratificaciones en términos localizados y las formas de negociación, control y poder que se enfrentan en los territorios. Con esta mirada, que subvierte el arquetipo de lo rural, se puede y debe responder ¿quiénes son los actores y cuál es su capacidad de agencia?, ¿qué hacen?, y ¿cuánto pueden controlar los sujetos tradicionales y locales de su propia vida en el marco de esta “nueva ruralidad”? Entonces, el territorio rural es un problema complejo y multivariable que debe ser apreciado bajo consideraciones etnográficas y etnológicas sobre la amplitud espacial de las prácticas y poderes que configuran las formaciones sociales, así como el lugar de los objetos de trabajo tradicionales y la definición de la propia vida. Inclusive, en muchos casos se trata de prácticas necesariamente deslocalizadas, con migraciones nacionales e internacionales de miembros de las unidades productivas.

Si aplicáramos un *zoom*, el territorio debería ser entendido como un “lugar estructurado y organizado en su espacialidad por medio de relaciones entre seres humanos y los demás elementos que contiene” (Sosa 2012, 10),

como un proceso productivo de relaciones sociales (Deleuze y Guattari 2010), jerarquías y poderes a partir del espacio (Raffestin 1980, 130); mientras que la región sería la unidad territorial mayor donde se encuentran especializaciones y concentraciones de atributos en lo laboral, lo productivo y la innovación (Krugman 1991), un sistema abierto solo comprensible en las relaciones *de* y *con* la totalidad. En el territorio coexisten y se desenvuelven distintas rutas, lógicas, estructuras, funciones y velocidades que le configuran. Por ello, más allá de campos del saber que han tratado de circunscribir territorialmente a las poblaciones con fines descriptivos y analíticos, las tradiciones rurales demuestran de manera persistente que la actividad implica siempre, y hoy más que nunca, una importante vinculación con los procesos de intercambio simple o de mercado para la reproducción; una condición que está más allá de las escalas locales por la versatilidad y capacidad adaptativa del capital, el cual no necesita producir para ser productivo, como veremos más adelante.

Entonces, con la nueva ruralidad que visualizamos en la Patagonia, enfrentamos simultáneamente procesos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización. La primera, entendida como la estrategia utilizada y el efecto que causa un actor geográfico para delimitar el territorio o el espacio, lo que siempre está asociado a una cierta proyección de sí o a un control que se manifiesta en términos políticos, económicos y culturales; reterritorialización, que implica un proceso de reconstrucción del territorio preexistente, generador de una reestructuración y resignificación material y simbólica de los atributos contenidos, y desterritorialización, en referencia a que las comunidades, por efecto del neoextractivismo, son despojadas de sus recursos materiales o simbólicos, y se les obliga a desplazarse de aquello que otorga sentido a su ontología, ritualidad y tradiciones, y por tanto, pierden la capacidad para decidir sobre el destino futuro de su territorio (Haesbaert 2010).

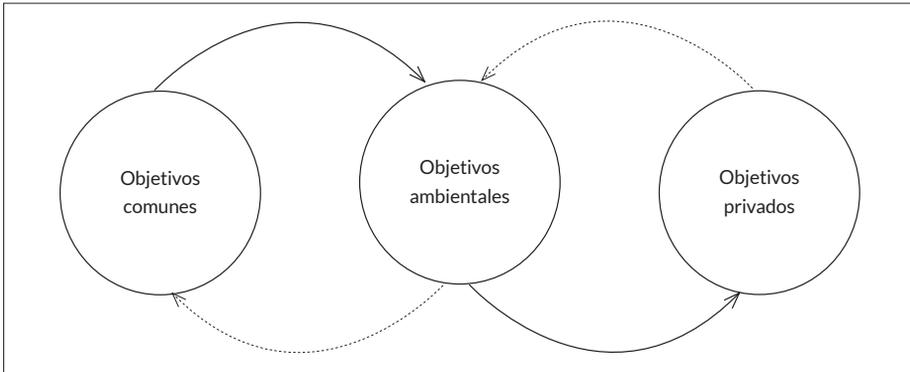
Una territorialización hegemónica favorece la desterritorialización de las poblaciones al controlar la accesibilidad a los objetos de trabajo a través de una disminución de los recursos que permiten su reproducción biológica y cultural, comprendida como habitar, usar y desplazarse en los marcos de sus prácticas cotidianas articuladas como territorialidad reticular. De modo que la territorialización puede integrar a poblaciones y comunidades a sus propios

objetivos, o construir, a partir de una condición de poder, una otredad interior marginal y dependiente en la región y la localidad. Como proceso dialéctico, corresponde esencialmente a una trama formalizada de comportamientos institucionalizados y localizados espacialmente, referida a ensamblajes específicos entre las escalas territoriales de poder, con una amplitud y velocidad establecida por actores y organizaciones con diferente poder político y económico, y vinculados por actividades productivas o por el mercado bajo una modalidad contradictoria, regular y continuada (Manzanal 2007, 482). En sentido estricto, se convierte también en un problema de gobernanza sobre la naturaleza transformada en recurso plural, ubicado en el ámbito regional del territorio y en el plano político, donde los actores institucionalizan la hegemonía en dicho régimen. De manera extrema pero no infrecuente, no es difícil encontrar territorios rurales sin agricultores, paisajes más que trabajo, más servicios logísticos que producción de alimentos, porque la cuestión es cómo a partir de los nuevos imaginarios se concilian y ajustan cuestiones económicas, laborales, ambientales y sociales en esta dialéctica del espacio y los territorios, o si se quiere, entre la producción y los objetivos estratégicos de corto y mediano plazo, las actividades, las condiciones biofísicas y el mejoramiento de las condiciones de vida para contener los procesos de expulsión y los fenómenos migratorios, especialmente de jóvenes.

Parte de esta discusión la encontramos en la Cumbre de Río, en 1992. Ahí se introduce la idea de *multifuncionalidad del espacio rural* como una nueva constelación de contenidos que diagramáticamente plantea cuestiones funcionales de tipo social, ambiental y privada (figura 1). Con ello se instala un nuevo paradigma o el tránsito desde un enfoque productivista a uno ruralista multifuncional (Wilson 2001), que no hace más que abrir la posibilidad para identificar, valorizar y describir analíticamente los distintos fenómenos emergentes, pues se da una reasignación de posiciones a recursos no valorizados hasta entonces.

Ahora se asigna reconocimiento a recursos que se encontraban fuera de la esfera de la producción que definía la complementariedad jerarquizada respecto de la urbe. Se trata de formas nuevas de presencia en lo que denota y connota lo rural; fórmulas no productivas en el sentido tradicional de generación

FIGURA 1
Multifuncionalidad del espacio rural



Fuente: Elaboración propia.

de rentas, con el trabajo directo para la producción de alimentos, sino cuestiones ambientales, estéticas, culturales, patrimoniales, de materias primas y energéticas. Por una parte, aparecen aquellas asociadas al ocio, la recreación, la autoexpresión, las segundas viviendas y el turismo rural; por otra, a productos y sellos con denominación de origen y de tipo agroecológico y orgánico de circuitos restringidos para el mundo *gourmet*, o la redefinición del suelo para la producción de biocombustibles.

Como se aprecia, la condición de multifuncionalidad del territorio no se vincula necesariamente a la producción de alimentos, aunque puede estarlo, lo que ha significado la pérdida de miles de hectáreas para estos diversos fines, como indican distintos estudios y autores (FAO 2007; Silva Gómez y Castañeda 2008; Berdegú y Schejtman 2008).¹ En la figura 1 podemos apreciar

¹ La agricultura en los próximos años deberá, por cuestiones de crecimiento demográfico y exigencias de algunos sectores que tendrán mayor poder adquisitivo, producir más calorías que las que se han consumido en diez mil años desde la Revolución neolítica. Esto significa que el rendimiento por hectárea tendrá necesariamente que aumentar, lo mismo que la superficie cultivable, así como la apropiación producirá diferentes rentas, y la ocupación territorial será nuevamente seleccionada y jerarquizada. Pero ¿en qué lugares?, ¿con qué intensidad?, ¿con qué disponibilidad de tierras?, y especialmente: ¿con qué fines?

una primera aproximación al concepto de multifuncionalidad, donde un objetivo presentado como común puede ser particular.

Analíticamente, el concepto de multifuncionalidad aparece muy consistente si miramos el enlace de las esferas. Con su plasticidad, lo verde y sustentable como objetivo tiende a ser naturalizado, evocativo, e inclusive puede llegar a ser bucólico, seductor e inducir al síndrome de Estocolmo. Mas esto no es ingenuo o nimio, sino de máxima trascendencia, ya que implica asignar un lugar a los procesos de gobernanza que atiendan el paisaje, la población y los intereses sectoriales públicos y los privados, porque estos últimos pueden tener orientaciones muy diversas, contradictorias o sospechosas. Y aun cuando en la Cumbre de Río, en el capítulo de la “Tierra del Programa 21”, se la defina de una manera laxa y con múltiples alcances, se vuelve casi inasible por la imprecisión de atributos, ya que refiere a cuestiones loables e imperiosas, como la lucha contra la erosión, la desertificación y la sequía, la diversidad biológica, la ordenación del territorio y el desarrollo rural, entre otras.

No obstante lo señalado, detrás del concepto existe algo que se ubica más allá de la agricultura y de lo que se pone en el territorio rural, porque implica un importante cuestionamiento al “derecho a permanecer” en el territorio, a las tradiciones laborales ligadas a la producción directa, a los tipos de cultivo y a las cuestiones que tienen que ver con la relación entre producción de alimentos y el hambre en grandes regiones del planeta. Es decir, dice más sobre cuestiones económicas y productivas, sociales y culturales, paisajísticas y de autoexpresión, y menos de sus contradicciones, control y fines de la transformación, que son las que generan rentas en función de no producir para alimentar en sentido clásico.

Bajo este prisma, la Patagonia chilena asiste a este tránsito, porque como territorio es también contradictorio y de uso múltiple. Es imaginado de diversas formas, lo que significa que los imaginarios puestos sobre él son muy disímiles desde el propio capitalismo (conservacionista y extractivista), el Estado, los grupos ambientalistas y sus corrientes filosóficas, así como por sus habitantes. Convergen una Patagonia de naturaleza y ecosistemas con otra energética, hídrica, minera, turística, maderera, conservacionista, restaurativa, acuícola, ganadera, geopolítica, refugio de desencantados de la modernidad,

FIGURA 2



Escala 1: 5 000 000.

Fuente: Elaboración propia con base en el mapa general de la Patagonia del Instituto Geográfico Militar (IGM-Chile).

cosmopolita, escénica, estética, recreativa, tierra prometida, lugar binacional, de vida libre. Pero es menos retención de población o incentivos para permanecer y vivir desde la memoria, el saber y el hacer, por lo que también es un territorio de incertidumbre.

Como caja de resonancia, la multifuncionalidad refuerza la idea del despliegue de un *lenguaje verde* (Williams 2011, 171), o al menos le da un lugar preponderante con un flujo de doble entrada:

La separación entre el control de una tierra y sus panoramas. Pero, también [porque] hay una separación espiritual: un reconocimiento de las fuerzas de las cuáles formamos parte, pero que siempre podemos olvidar, de las cuales podemos aprender, en lugar de tratar de controlar. En estos dos tipos de separación se sostiene y transforma la idea de naturaleza.

Simultáneamente, hay una nueva oferta y construcción de exigencia y demanda territorial, una sustitución de prioridades de la población arraigada y de creación de nuevos paisajes agrarios que configuran la aparición de una galaxia distinta, con respuestas socioinstitucionales flexibles, en la que entran producciones de alimentos, mercados, materias primas, energías, lugares de ocio y paisajes, que redefinen un horizonte diverso de posibilidades para el territorio y su población.

Esto sin duda permite hablar de una importante desagrarización del espacio rural patagónico, por lo que su redefinición, en función de los emergentes atributos valorizados, conecta de manera clara lo local con lo global. En el Chile de la Patagonia se crean parques privados con el fin de salvar ecosistemas a través de la formación de grandes corredores para la reproducción de flora y fauna endémica, lo que resta posibilidades de reproducción social y biológica de unidades de agricultura y ganadería de subsistencia; mientras tanto, en Argentina y Chile, se desarrolla una industria aparentemente de bajo impacto para el turismo anónimo y de clase mundial, que frena y litiga con la velocidad del extractivismo, imponiendo ante todo la figura de la naturaleza.² Por cierto, nada

² Otro ejemplo es destinar deliberadamente tierras agrícolas para la producción de

de esto permite desconocer —como sostiene Harvey (2007)— que el capitalismo logra persistir a través de ajustes espaciotemporales, con descensos de tasas de ganancias y con excedentes de capital y trabajo, por lo que se presenta un capitalismo agrario asimétrico, desigual y multifuncional.

La prefiguración reciente en la Patagonia chilena

La investigación etnográfica en los territorios de la Patagonia, sumada a información secundaria, como la discusión en distintos seminarios y eventos académicos, ha permitido identificar como marco general que en el caso de Chile no ha habido un eje desarrollista asociado a la creación de ciudades, caminos, vías férreas, puertos de importancia e industrias *ad hoc* que permitan la continuidad territorial en esta zona austral. Esto refuerza la idea de un país geográficamente fracturado y de que la Patagonia ha sido un gran reservorio de tierras y recursos diversos administrados a distancia, que constituye una “frontera interior”, sin núcleos de desarrollo endógeno, con rasgos sociales y culturales muy autónomos, con una presencia débil del Estado, en forma de una insuficiente institucionalidad territorializada y la generación de puestos de trabajo subsidiados y bonificados en los distintos servicios públicos para “hacer soberanía”.

Podemos decir que esta misma condición de estar en el margen es la que promueve una especial tensión entre: *a*) un capitalismo extractivista direccionado longitudinalmente (Norte-Sur) y que representa la centralidad de la capital, en el que participan tanto fuerzas nacionales como globales desterritorializadas en busca de recursos mineros, madereros, acuíferos, energéticos y

biocombustibles obtenidos a partir de biomasa no fosilizada, que permite —como en Argentina— la “pampeanización” de regiones periféricas, inyectando recursos energéticos a la economía mundo y restando alimentos a la estructura social malformada de los países latinoamericanos. De igual forma, como en Venezuela, frente a la declinación del petro-Estado, presiona sobre tierras nuevas y vírgenes para solventar la propia crisis, abandonando los principios ambientales y ecosocialistas del Estado bolivariano.

estuarios para el desarrollo de la industria acuícola,³ y *b*) uno de corte verde, desterritorializado también, del tipo “Patagonia producto”, asociado a una “oferta verde” y una “demanda verde”, cuyos objetivos pueden ser diversos y con distintos énfasis —filantrópicos, restaurativos de ecosistemas, de turismo anónimo e invisibilizado para personas “de clase mundial”, es decir, para aquellos ricos en cualquier parte del mundo—, y también manifestado en fórmulas de corte proteccionista y de generación de buenos negocios de *ecocorretaje*, con la creación de parques privados, venta de parcelas agroecológicas y comercio de bonos de carbono, que requieren, para ser seductores, del aislamiento y lugares escénicamente extraordinarios.

En particular, los *ecocorretajes* son una figura de administración predial a través de fondos de inversión, que enlaza los objetivos particulares (recreacionales y patrimoniales) con los colectivos (preservación ambiental), ya que el interés privado muta hacia uno de tipo general (figura 1). El prefijo *eco* da cuenta no solo del reconocimiento de un ecosistema único y particular que ha sido adquirido a través de exclusivas membresías, susceptible de ser administrado bajo un reglamento —que indica las actividades posibles de realizar por un comunero y las magnitudes de tamaños de vivienda— por una empresa o fondo de inversión para proteger el patrimonio natural, sino que incorpora como atractor de inversión el atributo de excepcionalidad del paisaje (bosques, ríos, hielos milenarios, animales endémicos y aves) y la exclusividad de su uso como concepto comunitario cerrado. Trata esencialmente de “hacer rentable el paisaje” sin producir deterioros, porque los predios parecen exuberantes, pero sus ecosistemas son frágiles, ya que son tierras no fértiles para la producción agrícola. De modo que la figura económica debe ser ubicada en un proceso de sobreacumulación —en términos de Harvey—; ya que, por una parte, adquirir una membresía significa invertir, proteger y potenciar la

³ Chile presenta una distribución desigual de recursos estratégicos. En la zona norte, en el desierto de Atacama, caracterizado por la ausencia de agua, se ubican los grandes yacimientos mineros demandantes de recursos hídricos y energéticos; en el sur se ubican las principales fuentes de agua dulce para consumo humano, la agricultura y la generación de hidroelectricidad.

recuperación ecosistémica, y por otra, hacer frente a la depredación de los recursos por parte del extractivismo.

Con la reorganización geoeconómica y esta nueva forma de tenencia, acontece una tensión nueva a través de la constitución de un territorio multifuncional simultáneamente local y global; menos agrario, porque se clausura toda actividad agropecuaria en las tierras administradas; más privado, exclusivo, turístico y sujeto a mayor especulación, en el país más neoliberal del continente,⁴ donde el Estado ha tenido dificultades para disciplinar las subjetividades locales en relación con lo nacional.

El paisaje entra como territorio valuado al ser percibido como un nuevo El Dorado, articulado a la complejidad psicológica y social que implica la percepción; así, se recupera en términos de naturaleza y paisaje como un elemento de identidad territorial y como expresión singular del espacio geográfico, donde se movilizan su materialidad y sus representaciones sociales a través de una gestión creativa de los ecosistemas y las formaciones sociales y culturales. Así, la Patagonia es transada y adquirida a nivel mundial como *natural wilderness* (naturaleza salvaje, últimos lugares naturales y salvajes), y se convierte en el proceso de reterritorialización como una prefiguración u operación historiográfica sustraída de su base material de existencia y convertida en un producto escénico comercializable.

Al sur del mundo aparece como un mundo nuevo, distinto, no repetido y opuesto a la banalidad de una sociedad sin rumbo. Con su baja antropización, es primario, un tanto ajeno, no familiar, distante y lejano, ubicado en los confines de la tierra, de gran peso ontológico, al ser “reserva de vida”, cuya impronta

⁴ Nos referimos a que, por una parte, Chile aplicó con mayor severidad los mandatos de lo que se ha llamado el Consenso de Washington, con los acuerdos del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de Estados Unidos, en lo que se refiere a la jibarización del sector público y a la política de privatizaciones de todas las empresas donde el Estado tenía participación (transporte aéreo, terrestre, marino, minería, energía, comunicaciones, agua potable, educación y salud); por otra, a que el país en su legislación no tiene ningún resguardo en el volumen de tierra que puede comprar un particular, nacional o extranjero, aun en zonas como la Patagonia, donde el Estado de Chile ha tenido hipótesis de guerra con la vecina Argentina.

o clave axiológica se vuelve elitista y tan potente y perenne como hablar de Amazonas, Isla de Pascua, Ártico, Galápagos, Antártica, Kalahari, Himalayas y desierto de Atacama. Es decir, aparece un territorio valorizado como una *geomarca* que se universaliza, que descansa en los *geosímbolos* propios del paisaje *sui generis* de los confines, los que se imponen como enunciados de realidad para profundizar nuevas configuraciones territoriales distintas a las de las ocupaciones iniciales precolombinas, o las republicanas, asociadas a la ganadería como frente pionero.

Como territorio expuesto al mundo por su valor escénico, ya sea con fines filantrópicos proteccionistas o con clara orientación de clase, se instala la idea de lo superlativo e ilimitado de la belleza, de la naturaleza agreste, de la rudeza de la vida de pionero con sus ovejas y de la configuración infinita y radical del tiempo y del espacio. La geomarca y los geosímbolos (el árbol, el río, el hielo, las aves y los animales endémicos) se sintetizan en un neologismo referencial y de aplicación diversa: *Patagonland*, “la calidad desde el origen”. Por una parte, en la urbe consumidora de elementos de distinción, *Patagonland* tiene aplicaciones inmobiliarias que definen la belleza y elegancia originaria de lo orgánico, la madera y lo rústico, y otras de tipo gastronómicas, en términos de refinamiento y de carnes de animales no sujetos a estrés; también con vehículos capaces de cruzar ríos y caminos insufribles; centros estéticos naturales del tipo *SPA*, hoteles inimaginables en su elegante simpleza, o estancias ovejeras reacondicionadas como alojamientos *plus ultra*, que esconden entre el fogón, la comida *gourmet*, el diseño de los espacios, el anonimato y la tranquilidad, la vida y la muerte de ovejeros solitarios. Por otra, en este punto es necesario resaltar, como proceso ideológico de nuevo consumo de suelo, dos cuestiones complementarias que se conjugan y permiten ficcionalizar el espacio patagónico: 1) el *merchandaising* dentro de la esfera del turismo y la industria del ocio, y 2) la decepción de las modernidades clásicas (ser, razón y fe) como fuentes inspiradoras de sentido para construir los proyectos personales y colectivos.

Mediados por el mercado, los canales de televisión por cable han desarrollado una impresionante promoción y mercadotecnia de lugares que se convierten en “buenos para vivir”, ecosistemas que hay que visitar y se deben proteger;

así estimulan la sensibilidad, el deseo y la imaginación conforme a la elaboración de un nuevo mapa mental y económico dentro del tardocapitalismo, en el que se unifican y multiplican modernidad y espacio (tecnología y distancia), y se adicionan también las culturas de la marginalidad espacial como las de la Patagonia. Esta gestión creativa la encontramos también en las revistas de viajes de los periódicos dominicales y en las de las líneas aéreas, que apoyadas por imágenes sorprendentes, paradisiacas y llenas de colores que resaltan la biodiversidad y la exuberancia, han fortalecido y diseminado su imagen en el exterior a partir del fomento de macro y microespacios que se deben conocer. Las estanterías de los kioscos de los aeropuertos tienen un amplio abanico de libros y revistas con impresionantes fotografías de destinos únicos e inolvidables que ofrece la Patagonia.⁵

Conforme a estas estrategias, se despliega un aparato retórico de producción de sentidos y encuadre de imágenes que conducen al *voyeurismo* y consumo de lo natural y cultural “autóctono” de la Patagonia, en un contexto de mercantilización neoliberal de productos verdes ligado a la exclusividad, el buen gusto, la belleza y la nostalgia de aquello que escapa a la vulgarización de la ciudad y del turismo masivo. A ello se suman tres cuestiones de máxima importancia para la promoción y venta para visitantes exigentes: no hay problemas sanitarios con enfermedades contagiosas, no existen animales peligrosos y no hay violencia ni secuestros como en otras regiones del mundo.

Todos los elementos descritos ofrecen un encuadre de la multifuncionalidad territorial y permiten que el paisaje se imponga sobre aspectos productivos y humanos que fundaron el territorio, quedando la Patagonia atrapada en un carácter meramente representacional, carente de toda provisión sociológica en términos de condición de vida de las poblaciones respecto a los exterminios masivos de indígenas, con fines civilizatorios, y las agresiones a los ecosistemas de estancieros, que llegaron a tener 950 000 ovejas en algunos predios.

⁵ El diario *New York Times* ubica los parques de la Patagonia en el lugar número 6 de 52 sitios recomendados para visitar en el año. La ruta de la Patagonia incluye unos 2 800 kilómetros entre Puerto Montt y Cabo de Hornos, en los que se ubican diecisiete parques nacionales y más de sesenta comunidades.

La experiencia de compra de predios exclusivos se configura a través de una unidad territorial abstracta que se presenta en la secuencia simbólica del itinerario y el destino, se une a través de la experiencia verde y separa simultáneamente de la base material porque es una carta topográfica de la segregación y la selectividad deseable para que funcione la estructura de oferta y demanda exclusiva, como ocurre con centros de interés del tipo El Chaltén, en Argentina, o las Torres del Paine, en Chile. Si bien a través de la publicidad se procuran contenidos verdes, la singular narrativa se sostiene autónomamente en un conjunto de significados que no dan lugar a los de orden sociológico, ya que la vida local forma parte del decorado o entra como elemento subsidiador a la trama de internacionalización.

La Patagonia, atrapada por imágenes visuales, literarias y significados atribuidos al territorio, es destacada como objeto-contemplación, objeto-deseo y por la imagen del “fin del mundo”, la que corresponde a la marca registrada de la Secretaría de Turismo de Tierra del Fuego, Argentina, y tiene su correspondencia en el municipio de Porvenir, en Chile, el cual extiende el límite para afirmar que está “más allá del fin del mundo”.

La imagen del “fin del mundo”, de “la tierra de los confines” y de la *terra australis*,⁶ es una idea que carece de existencia por sí misma. Antes que nada, es una figura producida que crea “quimeras, utopías e ilusiones” (Eco 2013, 7), devenida de una conciencia relacional, de distancia, de búsqueda de semejanzas, arquetípica, de establecimiento de los límites de la humanidad, de una otredad física y humana que arranca de un régimen de representación occidental del nuevo El Dorado, que finalmente revela la propia culpa contenida en su matriz socioideológica y socioeconómica. La Patagonia es presentada como frontera de la civilización, límite del adentro y el afuera, del área marginal, de pertenencias y oposiciones entre nosotros y los otros; sin embargo, por una parte, también señala una idea poética y desafiante del viaje y de la aventura, es decir, la activación de la imaginación y los sentidos, y por otra, la visita seductora al origen (pérdida de señal del celular, caminos intransitables),

⁶ Umberto Eco atribuye a Magallanes la idea de una “tierra recientemente hallada, pero no conocida del todo” (2013, 326), cuestión que pareciera mantenerse.

representado por el mundo pionero y colonizador donde nada está a la mano y todo puede estar por hacer, y que contiene el juego entre “la búsqueda de la felicidad y la felicidad de la búsqueda” como confiesa un ciclista solitario (en Mañiguales 2015).

Estos fenómenos son profundamente productivos como figura antropológica, ya que se trata de la posibilidad de construcción de un mundo nuevo. El carácter desafiante se impone día tras día, ya que todo está por hacer. Se trata de la confrontación con la alteridad otra, representada por la población originaria que sucumbió al reto colonizador; la tensión con la propia alteridad interior, la del yo, y la gran alteridad, la naturaleza. Por tanto, en el paisaje se cimenta el germen de la reinención de una vida dura pero amena.

El efecto de estas apropiaciones entre paisaje percibido, promocionado, vendido y potencialmente asimilado se consuma en lo que ponemos sobre las huellas de la memoria social y ambiental, que le ha configurado en su ocupación al desplazar o redefinir la posición y los ejes económicos de la población ganadera local para desarrollar ofertas y proyectos inmobiliarios y turísticos, u otras formas de apreciación, control y promoción del espacio. Ahí, en todo el territorio patagónico, están las “mejores” carnes a la leña, la posibilidad de pescar con mosca la trucha o el salmón más grande, balsear un río, recorrer en kayak el río o un lago con la perplejidad del primer hombre, correr la maratón del fin del mundo, recorrer en bicicleta los caminos pedregosos, practicar *trekking*, ingresar en motocicleta a la aventura o simplemente caminar en un silencio ritual, avistar aves y árboles centenarios y milenarios, o apreciar los refugios de las ballenas. Por ello, lo promocionado y lo leído se presentan como un despliegue retórico del deseo y se convierten simultáneamente en lo anhelado, lo vivido y lo soñado.

Otra cuestión importante observada en los registros de campo es la asociación entre decepción de la modernidad y búsqueda de una segunda oportunidad de vida, que se ofrece o es posible imaginar y proyectar en el lejano territorio de la Patagonia como tierra que nos puede dejar fuera de las tentaciones irracionales. Los registros de campo indican que quien llega a sus lindes está a un paso de construir un recuerdo indeleble, de enlace sustantivo con lo prístino y esencial, con el sentimiento básico de una desnudez originaria frente

a alerces y glaciares milenarios, que imponen la reflexión sobre qué y cuánto se necesita para vivir. En este sentido, la experiencia detiene el tiempo.

La idea se ampara en varios derroteros. En primer lugar, está reforzada con lo que acertadamente ha acuñado Eric Hobsbawm (2007, 13) en *Historia del siglo xx*, refiriéndose a la dificultad de saber de dónde se viene. Señala el historiador:

La destrucción del pasado o más bien los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con la de generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo xx. En su mayor parte, los jóvenes, hombres y mujeres, de este final de siglo creen en una suerte de presente permanente sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven.

En segundo, corresponde a la Patagonia que se alza como camino interior, porque muchos huyen del tránsito de lo que Byung-Chul Han llama el paso de la “sociedad disciplinaria” a la “sociedad del rendimiento”; es decir, una sociedad que ya no produce locos y criminales, sino depresivos y fracasados (2012, 26-27), y que más allá de la falta de vínculos, como consecuencia de la fragmentación del yo y las relaciones y la autoexigencia, institucionaliza la autoagresión que conduce a los “infartos psíquicos” (Han 2012, 29). La tercera forma tiene que ver con la idea de que la Patagonia de nuestros días entra al escenario por la crisis ambiental planetaria: la expansión de los límites de la economía más allá de los límites biofísicos del planeta, lo que cuestiona la axiología y las prioridades de nuestra formación social y económica. Diríamos que en las últimas décadas se configura un espacio único que tiene los límites de la esfera, pero que se expresa en territorios múltiples, la mayor parte de sacrificio, con sujeciones externas y otras provenientes del interior del país, que hacen dudar de la sostenibilidad de la propia vida.

Migración y cambio de estilo de vida

La idea del proceso migratorio por cambio de estilo de vida o “amenidad” corresponde a la “migración de personas desde grandes metrópolis a ciudades pequeñas o pueblos en el interior” (González 2011, 1102), quienes pueden ser nacionales o extranjeros. Esto parece estar muy bien reflejado por Jon Krakauer en *Hacia rutas salvajes* (2013, 87), en términos de su incitación a transgredir los límites de la propia vida: “Sólo tenemos que ser valientes, rebelarnos contra nuestro estilo de vida habitual y empezar a vivir al margen de las convenciones”. Es decir, un acto soberano de decisiones y renunciaciones que obliga a pasar el umbral de la comodidad, umbral arcaico donde comienzan a deformarse los usos y costumbres de la quietud de la existencia dócil.

Ir, encontrar y quedarse en la Patagonia es búsqueda y elección de una posición donde alcanzar cierta plenitud: ubicarse en el infinito para encontrar aquello que desborda el pensamiento ordinario y rebasar cualquier experiencia objetiva que se pueda tener *ex ante*. La búsqueda es la de un código de vida más corporal, más sensitivo, de perplejidad positiva y operativa que desemboca en un utopismo práctico y movilizador de sentido. Lo sagrado se presenta como un sentimiento profundo de sentirse parte de la naturaleza, de aquello que puede ser tan dulce como bárbaro. Se trata de poner la vida frente a uno mismo: juntar los elementos. Instalados en la Patagonia, las interrogantes son múltiples, tal como la necesidad de nombrar. ¿Cuántas son las palabras que caben en la mirada de la estepa infinita? ¿Cuántas trae a presencia el río? ¿Dónde nos sumergen las abluciones del remanso? Como cierre de un paisaje, como tránsito a otra puerta, la montaña, el agua, la pampa y la selva *son Uno*. Es el paso a la aventura, como en el bestiario de Lewis Carroll (2014), de asombro en asombro, de secreto en secreto, de revelación en revelación, de descubrimiento en descubrimiento, de insinuación en insinuación, de epifanía en epifanía; de encuentro de caminos transitados por otros hombres, de otros tiempos, con otras urgencias.

Bruce Chatwin, en un diálogo de personajes de su novela *En la Patagonia*, describe así el territorio: “Es una amante exigente. Te embruja. ¡Es una hechicera! Te atrapa en sus brazos y nunca te suelta” (2004, 40). El novelista

fija una condición telúrica del paisaje y se sumerge en la experiencia sensorial: “El viento transportaba el olor de la lluvia por el valle adelantándose a la lluvia misma. Era el olor de la tierra y las hierbas aromáticas, mojadas las unas y las otras” (79). Más adelante, agrega:

Las riberas eran de un blanco enceguecedor, y los acantilados también eran blancos, o con franjas horizontales blancas y de color terracota. A lo largo de la orilla septentrional se veían lagunas de agua clara y de color azul zafiro, separadas del agua opalina por una franja de cisnes de cuello negro. Las zonas poco profundas estaban teñidas de rosa por los flamencos (Chatwin 2004, 103).

Los migrantes por amenidad se deslumbran con lo esencial de la Patagonia. Pueden caracterizarse como aventureros en el sentido que describe Paul Bowles⁷ (2001) en *El cielo protector*, o neorrurales; muchos extranjeros, provistos de capitales económicos, sociales y culturales ciudadanos (idiomas, experiencias de vida en otros países, títulos), habiendo sido turistas, regresan ya no de visita a un lugar que provee de alta calidad ambiental, sino “para constituirse en habitantes del mismo” (González 2011, 1104), ya que están en busca de una nueva escala de relaciones sociales con los otros seres y con el paisaje. Si en la tradición moderna la ruralidad representó principalmente el atraso, tanto desde el punto de vista del pensamiento como de las comunicaciones y la dotación y oferta de servicios, en la Patagonia reciente, la oposición rural/urbano fija el contraste entre la tradición y el vértigo urbano, entre la lentitud y la aceleración para controlar la propia vida, por lo que se trata de un proceso migratorio inverso.⁸

⁷ En su novela establece la diferencia “entre el turista y el viajero”, la cual radica esencialmente en el tiempo. El primero sería el que regresa porque tiene un itinerario que cumplir; el segundo, que no pertenece a ningún lugar, se desplaza con lentitud entre un punto y otro. De modo que el turista no logra salir de su propia civilización y no puede cuestionarla; el viajero vive comparándolas.

⁸ No desconocemos que esto constituye una paradoja en la medida en que la tendencia local es al desdoblamiento de las zonas rurales, tal como lo hemos constatado en el

Esta idea se refleja en los siguientes testimonios recogidos en el trabajo de campo en la provincia de Palena:

Estuve mucho tiempo buscando una posibilidad en el Ministerio de Obras Públicas. Yo conocía Futaleufú desde hace tiempo. Vivíamos con la familia en Temuco, que inicialmente era un buen lugar. Después vinieron dos cuestiones que se hicieron insostenibles: la congestión y la contaminación. De aquí esperamos no movernos. Llegamos para quedarnos (Hombre, 40 años, en Futaleufú).

Yo soy de Santiago. Mi primera escala fue en Puerto Montt, donde trabajé profesionalmente. Soy trabajadora social. Pero Puerto Montt estaba muy loco. Futaleufú es pequeño, la gente te saluda, te da las buenas tardes y las gracias; te piden las cosas por favor. Lo que se perdió en Puerto Montt es el sentido de comunidad. Aquí la persona más rica y la más pobre van a la misma escuela; aquí se vive con poco... uno tiene la sensación de seguridad. Aquí uno puede tener un proyecto con hijos. Mientras tengas leña, todo funciona, especialmente cuando estás construyendo un proyecto de vida. Yo espero con ansia el invierno; puedes pensar y leer. Mi marido es norteamericano y se dedica a enseñar inglés, que es una necesidad acá, y es una ventaja (Mujer, 32 años, en Futaleufú, 2015).

En la comuna de Palena, en la frontera con Argentina, otro testimonio se ubica en la misma dirección:

Soy profesora. Llegué a mi primer trabajo y sin conocer a nadie. No fue fácil al principio, reconozco. Todo estaba lejos. Era una complicación para una mujer que era urbana. Pero descubrí el valor de las relaciones cercanas; vivo en el campo, tengo hijos y soy feliz. Ya no puedo volver (Mujer, en Alto Palena, 2015).

trabajo de campo y en el manejo de información secundaria provista por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Se suma a estas percepciones la de una funcionaria pública en la localidad de Chaitén, en la costa:

A pesar de la destrucción de Chaitén por la erupción del volcán, se presentó una oportunidad de trabajo que no pude desechar. Tengo trabajo estable, seguridad y un hijo feliz. Todo se alineó para la familia. Mi esposo es mecánico, empezó de cero y ahora tiene su propio taller. Nada nos falta. No pensamos volver. Todo es tranquilidad y confianza (Mujer, en Chaitén, 2015).

Un extranjero con quince años de avecindamiento en una parcela rural, considerado como un emprendedor por sus vecinos, señala:

Yo supervisaba el funcionamiento de chimeneas para evitar incendios y contaminación en Alemania. Era un trabajo bastante simple y rutinario porque tenía que ir mirando todas las casas. Me vine a este rincón después de buscar más de un año un terreno. Aquí estoy con mi mujer. Tengo un auto viejo, unas pocas ovejas, produzco cerveza de manera muy artesanal y hago un poco de turismo rural. De eso vivo. Todo es trabajo, todos los días; no es fácil moverse a otros lugares. Pero aunque no tenga dinero, me alimento, duermo la siesta, veo alguna película en el computador, y ya no puedo volver a mi país ni a la ciudad. Soy libre (Hombre, en Río Ibáñez, 2015).

Una mujer de 31 años señala:

Estudiaba Derecho; me cansé, me pregunté muchas veces para qué. Decidimos con mi pareja que podíamos jugárnosla. Tomamos la decisión de venirnos de cara al mar. Ambos estudiamos en la ciudad [...] Pero también está el bosque, el río, el lago, que es lo que nos gusta. Tenemos tiempo. Estamos entretenidos; tenemos un vehículo todo terreno y llevamos turistas a pescar, a avistar aves y a apreciar el bosque. De eso vivimos. No tenemos mucho, pero estamos en algo que estamos construyendo (en Chaitén, 2015).

Los testimonios recogidos apuntan a cuestiones que se repiten: cansancio, hastío, superficialidad de las relaciones al interior de la ciudad y búsqueda de nuevas oportunidades y sentidos. Por ello, la cuestión de la escala de relaciones sociales y con la naturaleza se vuelve vital, ya que se trata de forasteros que buscan ser aceptados dentro de esta nueva orientación cultural y cohesionarse con la comunidad, y eso implica una inversión en primera o segunda vivienda, lo que por sí mismo constituye un proceso de encantamiento al inaugurar un nuevo espacio propio y de intimidad. La decisión compromete cierta osadía, en cuanto es tremendamente abierta desde la perspectiva de la conquista de un nuevo espacio social en donde se juegan habilidades para la supervivencia básica, diferente a la de los riesgos urbanos, donde casi todo se encuentra resuelto.

Un médico joven, con pocos años de ejercicio profesional y avecindado en Futaleufú, confiesa lo que significa integración local: *Para ser de Futaleufú, hay que tomar mate, bailar chamamé y bajar el río en balsa. ¿Qué más se puede pedir?* (Hombre, en Futaleufú, 2014).

En estos testimonios e ideas existe una reconceptualización de valores e intereses personales asociados a un renunciamiento del estilo de vida urbano y sus riesgos, según la perspectiva de Beck (1998). El esfuerzo se concentra en la búsqueda de una reconexión con el sentido de comunidad, de integración, de sentir que se tiene un nombre propio, de una vida más auténtica, más pausada, y de la posibilidad de un cambio existencial con un nuevo espectro de valores con los cuales vivir, sin perder de vista la importancia que tiene internet como parte de la vida cotidiana. En este sentido, cuando se valoran el río, el sendero, la tranquilidad, el reconocimiento de las fortalezas de cada una de las estaciones con sus paletas de colores y letanías, hay un giro de prioridades y un avance hacia una axiología de orden posmaterialista, en la idea desarrollada por Ronald Inglehart (1977), sin renunciar a los estándares de la sociedad de la información y globalización; ello se relaciona con la búsqueda de más autoexpresión, de privilegiar la salud en sentido amplio, volcando la mirada hacia un bienestar psicológico y existencial.

Se trata de una escala más humana de vida, de una mutación simbólica y de apreciación de detalles solo posible dentro de esta multifuncionalidad

territorial que ofrece la Patagonia; donde la cercanía a la naturaleza se convierte en un nuevo referente que refleja un alejamiento del énfasis en la eficiencia económica, en la autoridad burocrática y en la racionalidad científica. Una tríada dentro del proceso de territorialización reformula el sentido del ser y el hacer: estar frente a uno mismo, cultivar la intimidad familiar y la armónica convivencia y sociabilidad, aunque en los lugares más aislados y desprovistos *se ha vivido y resistido simultáneamente* (Hombre, 70 años, en Futaleufú, 2014).

Si siguiéramos la tesis de Gaston Bachelard (2000, 28), ello ocurriría porque “todo espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa [...] [se] vive la casa en su realidad y en su virtualidad, con el pensamiento y en los sueños”, y desde la lejanía, a muchos esta ecúmene da razones o ilusiones de estabilidad para vivir. En este sentido, como señalan Hidalgo y Zunino (2012, 10), se trata de “prácticas que podrían estar en la frontera de los movimientos contestatarios al sistema capitalista imperante en la actualidad, anclado en manifestaciones posmodernas inmersas en la globalización neoliberal”.

En los migrantes por amenidad hacia la Patagonia existe un cambio significativo en la percepción, ya que hay una representación social de la naturaleza que condensa una reconceptualización deseable del tipo de relaciones sociales y con la naturaleza, y una organización de respuestas y conductas hacia ellas. Así, hay una disminución del consumo, se avanza hacia una apreciación de los ciclos, los colores, los ríos de flujo libre, los lagos, las montañas, y una alta valoración de la flora y la fauna, elementos integrados e irrenunciables como extensión de sí; también se descubre que son importantes el paso de las estaciones, el paso de nubes negras y cargadas a cielos límpidos, ya que el fuego y la intimidad de los largos inviernos dan paso al tiempo existencial, el que se impone sobre el tiempo cronológico.

Nos señala un habitante que renunció a la ciudad: *Para mí, ojalá esta zona permaneciera siempre así, con la conectividad [vial] que tenemos ahora* (Hombre, en Futaleufú, 2014). Mientras tanto, un microempresario y operador turístico señala:

Muchas veces se ha hablado de la conectividad como dificultad, pero para los microempresarios turísticos, la conectividad, más que un problema, es un plus para

su negocio, enfocado a turistas de intereses especiales. Trabajamos con quienes buscan esta clase de destinos, que podemos llamar inalterados y desconectados de la modernidad [...] por eso nos abrimos a las hidroeléctricas (Hombre, 75 años, en Futaleufú, 2014).

Parques de conservación privados

Los parques de conservación privados corresponden a un cambio tardío en las formas de protección de la naturaleza o de espacios en los cuales existen amenazas o ecosistemas vulnerables por la acción antrópica o de otras especies introducidas. Corresponde al control y aislamiento de determinados lugares con el fin de proteger las vidas. Se trata también de áreas protegidas que impiden el avance de especies exóticas. Ello implica, siguiendo a Rodríguez y Requena (2014), un verdadero oxímoron, es decir, una figura contradictoria entre aquello a lo que siendo natural se le impone un límite y una artificialidad, ya que, por definición, un parque es algo cerrado y acotado. Todos los seres vivos usan los ecosistemas extensivamente, por lo que el límite es un contrasentido conceptual.

El concepto de *parque natural o de conservación* tiene como objetivo central promover la figura de la inmunidad frente a una amenaza a su perímetro, lo que en términos políticos, ambientales, simbólicos y filosóficos implica una limitación reglamentada de prácticas posibles y usos de lo que el lugar contiene. De este modo, por una parte, el parque genérico concentra un interés específico que puede ser estatal o privado, y por otra, tiene efectos locales inmediatos sobre las comunidades o las poblaciones aledañas, vinculadas a través de alguna actividad económica productiva, las que por limitaciones de uso ven amenazadas sus estrategias de subsistencia, por ejemplo, la actividad forestal o ganadera, como ocurre en la Patagonia. Así, según Rodríguez y Requena (2014, 169), “la declaración de un área protegida supone no solo una nueva organización y apropiación de recursos, sino también una definición del espacio” como proceso de territorialización y reterritorialización, lo que afecta

a poblaciones rurales que tienen sistemas de internadas y veranadas, o que necesitan rotar en el espacio a sus animales.

En Chile, este concepto de parque privado se introduce en los años noventa, cuando algunos millonarios y conservacionistas norteamericanos, como Douglas Tompkins (socio de Esprit), Yvon Chouinard (dueño de Patagonia Inc.) y Alan Weeden (dueño de la corredora de seguros Weeden & Co.) compran las primeras 500 ha de bosque de araucarias en las cercanías de Pucón, con el predio Cañi. Luego siguieron 17 000 ha y sumaron 230 000 que costaron unos siete millones de dólares. Las iniciativas privadas de conservación llegarían a 308 unidades en la actualidad (Langman 2014), y se trataría de iniciativas particulares de millonarios que caerían en la calificación de *ecobarrones*, por parte del premio Pulitzer Edward Humes (2010), quienes en los noventa orientaron parte de sus ganancias a la genérica *next economy* o economía verde. Condición filantrópica no sujeta a modas y que invierte en el desarrollo de nuevas tecnologías (autos eléctricos, turbinas eólicas) y el activismo ambiental (preservación de áreas silvestres).

Lo importante es que lo que se compra no es terreno (suelo), sino esencialmente ecosistemas sensibles, y lo que se implementa es un modelo: un parque privado-público de conservación. Este modelo es de protección, para la conservación de especies vulnerables y endémicas (huemules, guanacos, bosques templados y aves); de reforestación, en los casos en que ha existido algún incendio en el pasado, y de contención de iniciativas forestales y empresas extractivistas. Para ser coherentes, en la Patagonia, las obras interiores y perimetrales se implementan con maderas de árboles muertos que generan rutas direccionadas, lo que produce un ordenamiento restrictivo del modo de moverse de los habitantes aledaños y visitantes, y evita los daños producidos por pisadas a la cubierta vegetal (ganado y turistas), como si hubiese un gran panorámico a las espaldas.

Bajo esta figura, entre otras, existen las siguientes fundaciones: Pumalín, para el parque del mismo nombre, del recientemente fallecido Douglas Tompkins; Futuro, para el parque Tantauco, del presidente Sebastián Piñera; Huilo Huilo, con el parque del mismo nombre, del empresario de ecoturismo Víctor Petermann; Karukinka, de Henry Paulson. Hablamos de territorio chileno de

cientos de miles de hectáreas, con una extensión que va desde Pucón —a 800 kilómetros al sur de la capital— hasta Tierra del Fuego, desde la isla de Chiloé hasta el límite con Argentina.

En la práctica, esta territorialización proteccionista da cuenta de problemas de Estado y Gobierno sobre la presencia histórica en estas tierras; enfrenta a las políticas de colonización y de agenciamiento; el centralismo y los actores políticos, privados y locales sostienen miradas de ordenamiento territorial diversas y proyecciones disímiles para estos lugares, porque no es fácil distinguir entre protección filantrópica e interferencia en actividades tradicionales. Así, la creación de parques privados surge porque, por una parte, los sistemas de protección del Estado no funcionan de manera tan efectiva, lo que se encuentra dado esencialmente por la falta de recursos en las instituciones como la Corporación Nacional Forestal (Conaf) —de personal especializado para desarrollar investigación, de coordinación interinstitucional y de una comprensión más holística sobre la diversidad ecosistémica—; por otra, surge porque dentro del modelo económico y político neoliberal no hay restricciones de compra de tierras para ningún nacional o extranjero; de tal suerte, lo que ahí se haga en términos de actividad solo está condicionado por limitaciones legales y por las declaraciones de impacto ambiental o estudios de impacto ambiental.

Por ejemplo, en la provincia Capitán Prat, la Reserva Nacional Jeinimeini (del Estado) colinda con la estancia Valle Chacabuco (privada) del ecologista Douglas Tompkins; ahí su fundación pretende desarrollar un corredor ambiental al unir ambos predios bajo una donación al Estado, pero la institución estatal tiene un presupuesto anual de menos de diez mil dólares y no cuenta con un programa de manejo, por lo que no se puede estimar la capacidad de carga posible de visitantes (registro de campo en Jeinimenei y en oficinas Conaf, Chile Chico, 2014). Y en un trabajo reciente, Fabien Bourlon y Pascal Mao (2016, 50) señalan que en el año 2006, “solo seis guardaparques estaban a cargo de la administración y conservación del Parque Nacional Bernardo O’Higgins, cuya superficie es superior a la de Bélgica”.

La filosofía biocéntrica: el modelo Pumalín y el de la estancia Valle Chabuco

Con Douglas Tompkins, heredero de la crítica al pensamiento unidireccional y la revolución de los años sesenta, se fortalece en la Patagonia un análisis territorial cuyo centro es una preocupación social, política y científica, ubicada en una ruptura paradigmática respecto de los valores dominantes asociados al consumo y al estilo de vida destructivo y opulento de las sociedades industrializadas modernas. Sustenta una crítica al antropocentrismo en sus privilegios y reubica a los seres humanos en una posición equivalente en términos de valor ante otros seres como las plantas y los animales. En este sentido, existe una afirmación del derecho de los otros a existir, lo que constituye una ampliación de los límites de la concepción de comunidad, la que es llevada a todos los sistemas naturales. Así como en el campo de la antropología el reconocimiento a la pluralidad de opciones y respuestas culturales constituye el núcleo de la aceptación de los límites de la propia vida, el reconocimiento de la infinita diversidad ecosistémica constituye una ampliación radical del propio campo de comprensión de la vida.

El fundamento de esta consideración se encuentra en la visión de Leopold (2007, 24-29), quien en la década de 1940 plantea que es necesario allanarse a una concepción más amplia de la ética, que supere la relación entre humanos y aquella entre humanos e instituciones. En este sentido, el filósofo señala que debe haber una preocupación por una “ética de la tierra”, porque una ética “en términos ecológicos, es una limitación a la libertad de acción en la lucha por la existencia”. Esta limitación y cambio de giro en el privilegio antropocéntrico, complementaria a la crítica del *homo economicus* de Georgescu-Roegen (1971, 1975, 1983), constituye una posibilidad evolutiva en términos humanos y una necesidad ecológica; también una interrogación personal que distingue las necesidades vitales de los deseos y un activismo espiritual a favor del bienestar de otras especies, ya que el proceso expansivo de la conciencia implica la comprensión de las vidas en plural.

En este sentido, lo posible de ser pensado, es decir, el ecocentrismo o biocentrismo, se puede transformar en el espacio vivido tal como es pensado,

y para Tompkins, se trata de alcanzar una coherencia que debe favorecer la existencia y permitir vivir como realmente se es o se quiera ser. Para ello, la Patagonia constituye el lugar elegido, ya que cuenta con ecosistemas únicos y un aislamiento que favorece su concepción (1998).

La iniciativa más clara en esta dirección en el territorio chileno corresponde al proyecto Parque Pumalín (puma verde en lengua mapuche), de 290 000 hectáreas en la provincia de Palena.

El Proyecto Pumalín incluye campos orgánicos restaurados de una fuerte degradación ecológica, iniciativas sociales que promueven una vida sana y valores de conservación en las comunidades vecinas, y campañas de activismo que abarcan los temas de conservación más grandes de la región. Por más de dos décadas, este método de conservación ha permitido que el proyecto extienda su impacto mucho más allá de los límites del parque (Parque Pumalín).

El parque limita, demarca y condiciona, estableciendo proximidades y distancias frente a las necesidades de la territorialidad reticular que definen las prácticas cotidianas de la cultura y la ontología relacional ganadera y maderera, y expresa fundamentalmente una contención de los avances del mundo forestal, lo que queda retratado en la publicación del libro *La tragedia del bosque chileno*, en el que su promotor, Douglas Tompkins (1998), escribe el prólogo: “El futuro y la esperanza”. Ahí señala sus preocupaciones por la protección de los grandes bosques y sus acciones a favor de la conservación; comparte sus relaciones internacionales con pensadores, activistas y científicos; instala su crítica a los intereses creados, pero también su esperanza y optimismo respecto de la reversibilidad de la lógica industrial hacia una sustentable, que incluya la conservación de la biodiversidad. Pregunta el ambientalista recientemente fallecido: ¿por qué llegar hasta el borde mismo si existen soluciones desarrolladas en los propios países que cometieron profundos errores?

En este prólogo, manifestación de su imaginario, es muy explícito respecto a dos temas: 1) el reconocimiento de que él fue un empresario y que conoce la economía por dentro, por lo que hace una crítica a esta, y 2) una categórica sentencia: “Uno debiera recordar siempre que los bosques antiguos o primarios

[*old growth forest*] no son un recurso renovable dentro del marco convencional del ciclo de los tiempos económicos” (Tompkins 1998, 40). Ahí, sin mencionarlo, se deja entrever su concepción filosófica de la *ecología profunda*, que en su primer postulado señala: “el bienestar y florecimiento de la vida humana y la vida no-humana tienen valor intrínseco. Estos valores no son dependientes de la utilidad o los propósitos humanos” (Naess 1995, 1990). De modo que la sabiduría está en acercar a los seres humanos a la naturaleza y que puedan entenderse dentro de ella. A partir de este imaginario, se antepone el valor de la existencia de los otros seres al uso potencial que podamos hacer los humanos de sus vidas. Por ello, el Parque Pumalín contiene una limitación de uso: no cortar, no pescar, no alterar, no introducir, no encender fuego. Se trata de un modelo conservacionista duro, restaurador de los ecosistemas originales y de eliminación de lo exógeno (ovejas, caballos y vacunos); descreído de recetas políticas ubicadas dentro de los modelos de desarrollo, ya que las considera incapaces de satisfacer las necesidades básicas de aquellas poblaciones que disponen de pocos recursos, y que mantiene un escepticismo respecto a que la tecnología pueda mejorar las condiciones ambientales.

Una extensión de este concepto se encuentra en el proyecto Estancia Valle Chacabuco (78 000 ha), comprada en el año 2004, en la provincia Capitán Prat. Este predio, ubicado en una de las exclusivas zonas estepáricas del sur austral, se reconstituye hacia la fórmula de parque de conservación después del fracaso de las iniciativas más importantes ligadas a la ganadería extensiva en el siglo XX, la cual es considerada esencialmente un “modelo de exportación de suelos”. Esto significa que el sobrepastoreo ovejero y vacuno dejó un pasivo ambiental *in situ*,⁹ donde las potenciales ganancias abandonan el ámbito local y transforman lo ganadero en una economía de subsistencia, ya que no hay mercados, no hay praderas y no hay vías que faciliten la conectividad para sacar los productos y hacer “negocios rentables”.

De este modo, la Fundación Conservación Patagonia reconsidera los términos de la ecuación costo-beneficio, y la lleva a los de una oposición entre

⁹ Su estado la ubica en el Libro Rojo de los sitios prioritarios para la conservación de Conaf y como una prioridad, por existir en ella la mayor biodiversidad de la región de Aysén.

un parque o una economía de subsistencia, ya que el fracaso de los grandes productores reduce a la población ligada al trabajo ganadero a una condición muy precaria, de supervivencia, de profundización del daño del ecosistema y de víctima y victimario. Su administrador indica sobre este punto:

En Chile, me atrevería a decir que prácticamente casi la totalidad de las áreas silvestres protegidas son reconversión de espacios productivos o áreas descarte o de desecho [...] Con este proyecto aspiramos a la creación de un gran parque de 250 000 hectáreas, como sería el futuro parque nacional Patagonia, suma de la estancia Valle Chacabuco y las reservas nacionales Jeinimeni y Tamango; se podría construir un gran corredor [de protección y restauración]. Para el Estado, el turismo es retorno e inversión para la región a bajo costo, y para el proyecto conceptual de la Fundación Conservación Patagónica, el activo es el retorno ambiental, porque todos cuidamos. Nosotros no lucrarnos con las donaciones, hacemos filantropía. Los tiempos son lentos, pero avanzamos en el proyecto (Hombre, en Chacabuco, 2015).

Conforme a la filosofía descrita, lo importante de este proyecto es alcanzar el mayor umbral de “disclimax”; es decir, como no es posible recuperar el estado de máxima estabilidad y eficiencia en la sucesión ecológica, se trata de generar un modelo de recuperación limitando los usos históricos de ocupación ganadera, controlando ordenadamente el ingreso de visitantes, eliminando las especies introducidas y favoreciendo la recuperación de la pradera estepárica y los animales endémicos. Con ello, señala el administrador, en este esquema interesan dos tipos de retorno: *a)* social, y *b)* ambiental. Esto porque: 1) no existen áreas estepáricas protegidas en Chile y este proyecto en curso iría en esa dirección; 2) como objetivo están los huemules, el ciervo heráldico y endémico más austral y en peligro de extinción, por la competencia con las vacas y las ovejas, y las enfermedades que les transmiten; 3) la pretensión es visibilizar la región en el mundo y aumentar el ingreso a esta a través del parque, y 4) se busca la apropiación territorial del lugar por parte de la opinión pública, como ocurre con el parque nacional Torres de Paine, donde hubo inicialmente

rechazo, pero ahora está en el imaginario de todos los chilenos y las rutas del mundo de quienes valoran la diversidad ecosistémica y el paisaje.

Estratégicamente, se espera que la elevación de la condición de reservas a parques nacionales desencadene una defensa mediática de la naturaleza ante cualquier amenaza de afectación de las áreas silvestres involucradas por parte del Estado o bienes de uso público, como ocurrió con el fracasado proyecto extractivista Hidroaysén, consistente en la intervención del río Pascua, el más caudaloso de Chile, para la construcción de tres represas productoras de electricidad. Sin embargo, la propuesta deja entrever la capacidad para tensionar la memoria territorial, así como la disminución de las condiciones para establecer relaciones de producción e intercambio, lo que indica que la *deep ecology* y la *next economy* son proyectos políticos, territoriales, económicos, ideológicos y filosóficos.

En lo económico, el proyecto significaba una inversión inicial de cinco mil millones de dólares en la construcción de las presas, y unos tres mil más en el levantamiento de unas seis mil torres de alta tensión de entre sesenta y setenta metros. En lo territorial, afectaría a la región más prístina del país, sin que prácticamente una gota de energía se quedara en la región, pues su producción estaba destinada a satisfacer principalmente la demanda de la gran minería del cobre en el norte del país, a más de tres mil kilómetros. En lo ambiental, pasaría por paisajes lacustres y bosques, por dieciséis áreas protegidas por el Estado y por 32 de particulares. En lo político, constituía una decisión que tres Gobiernos fueron incapaces de tomar por lo antipopular de una medida en su favor. En lo comunicacional, la iniciativa superó el espacio local, regional y nacional, se posicionó a nivel mundial y fue transformada en bandera de lucha de movimientos ambientalistas de carácter mundial, como Greenpeace. Además, fue definido como un acto predatorio e irracional en la revista *Nature*: “Se aprueban gigantes represas en Chile” (2011), y en una editorial del *New York Times* titulada “Keep Chilean Patagonia Wild” (2011 en Reyes y Rodríguez 2015).

No existe discurso técnico ni político-económico que pudiera contradecir el empoderamiento que provocaría la defensa de la naturaleza a través del proyecto Parque Nacional Patagonia. Incluso, lo más extraño es que un privado y extranjero pueda instalar un concepto nacionalista que asegure la

lealtad respecto de una parte del territorio que el Estado de Chile nunca ha logrado en más de doscientos años de vida republicana.

Modelo Patagonia Sur: “disminuyendo la huella de carbono”

Este modelo corresponde al establecido por la empresa Patagonia Sur, orientado al desarrollo inmobiliario y a la venta de bonos de carbono, lo que se delinea como una estrategia en una publicación del área de los negocios. El encabezado de la entrevista al empresario Francisco Valdés en *Magazine Business* (2010) señala que Patagonia Sur es “Una empresa de riesgo compartido chileno-estadounidense que ofrece a los inversionistas preocupados por el medio ambiente una oportunidad única en la Patagonia para comprar prístinas áreas silvestres, mientras que al mismo tiempo las protegen y desarrollan de una manera sustentable”. Esto, debemos decir, se ubica en un ámbito específico de consideración simultánea de “la estabilidad política y económica, y las leyes claras sobre la posesión de propiedades” en Chile, y de la Patagonia como mercancía y como marca, lo que constituye, según Dimitriu (2002), un econegocio, pues incorpora los campos, ríos, lagos, bosques, glaciares, mallines y estepas a una fórmula de ecocorretaje.

Es un buen negocio, como se señala en la misma entrevista: “Creo que lo que hemos creado aquí es un concepto muy innovador y vanguardista para la conservación [...] nuestros clientes pueden decir ‘estoy haciendo lo correcto’, pero al mismo tiempo esto es bueno para mi cartera” (Dimitriu 2002). En lo importante, el rentismo se produce a través de un modelo de negocios donde los inversionistas no deben realizar aportes permanentes, sino que se encuentran de forma continua capturando recursos, ya que un bono de carbono al año 2010 valía 15 dólares, y un árbol capturará entre 0.25 y 0.4 toneladas de carbono en el futuro.

La compañía propone la creación de un fondo de 30 millones de dólares, con cuya estrategia se produce simultáneamente la conversión de la tierra en suelo y en objeto de especulación y control inmobiliario, en ajuste a un rentismo sin trabajadores y sin organización, y al igual que en el modelo de parque

privado: sin actividades tradicionales que alteren el paisaje y la privacidad. Los inversionistas, quienes pagan 350 000 dólares por acción, poseen los activos y la totalidad de los flujos provistos por el negocio, en el que se plantarán unos 500 000 árboles y se estipula que, si invierten un millón, al cabo de diez años recibirán dos.

Con oficinas en Chile y Estados Unidos, y con presencia en las regiones x y xi, Patagonia Sur cuenta con cuatro organizaciones con distintos ejes programáticos que complementan su estrategia de negocios: Centro MERI, Fundación Patagonia Sur, Reforestemos Patagonia y Fundación Tierra Austral. La compañía Patagonia Sur cuenta con siete extensos predios: en Palena (río Palena, 55 ha), Valle de California (3 200 ha), Futaleufú (lago Espolón, 244 ha), Melimoyu (16 059 ha), Los Leones (522 ha), Jeinimeni (1 289 ha), Caleta Tortel (1 435 ha). Se trata de una compañía dedicada al negocio inmobiliario y a las compensaciones de CO₂ para mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero (GEI), por lo que pone sus ejes narrativos en la conservación vía ampliación de las superficies de bosque nativo y el desarrollo sustentable (*Patagonia Sur*; Langman 2014, 21), lo que significa una estrategia simultánea de protección y de explotación económica que incluye la venta de propiedades a inversionistas mundiales, a los que se les ofrecen “servidumbres voluntarias” y la posibilidad de realizar usos agrícolas no intrusivos, ecoturismo y la construcción de su vivienda y hoteles *boutique*. Una servidumbre de conservación consiste en que un vecino acuerda el libre paso de otro por su propiedad hacia un río, un lago o un bosque, generando un proceso de confianza, protección y acceso de bienes comunes.

El principal atractor de este modelo es que el negocio se desarrolla en “propiedades escénicamente extraordinarias y ecológicamente valiosas”, donde lo privado es una pequeña porción y el 85 % son tierras comunes y de reserva (*Patagonia Sur*). La promoción internacional del proyecto indica que en menos de un día “se puede estar fuera del mundo”. El propietario se sube en un avión en Estados Unidos, en trece o catorce horas se baja en el Aeropuerto Internacional de Santiago; toma un avión pequeño en dirección al sur, sumando tres horas más hasta el aeropuerto de Balmaceda, en Coyhaique, o hasta un

aeródromo local, y coordinadamente se embarca en un transporte terrestre, todo en menos de un día.

La oferta para los potenciales compradores se asocia a la posibilidad de construcción de una casa nueva y al acceso como socio a miles de hectáreas disponibles, protegidas, conservadas y otras replantadas, que pasan a ser parte de los predios. Los inversionistas están habilitados para desarrollar sus propios emprendimientos a través de la construcción de hoteles de baja ocupación para desarrollar ecoturismo e incursionar en el kayak de río y lago, cabalgatas, promocionar el avistamiento de aves y fauna marina y terrestre, y practicar *trekking*, senderismo, ciclismo de montaña y pesca deportiva. Las limitaciones para los propietarios y comuneros son no producir alteraciones del paisaje ni desarrollar actividades industriales, tampoco intervenir en ríos ni lagos; asimismo, las propiedades deben ser bioclimáticas y construirse en armonía con el entorno, ser de bajo consumo energético o con sistemas alternativos, y construidas con materiales de mínimo impacto. El aseguramiento de que las condiciones se mantendrán en el futuro en cuanto a sus bienes comunes está dado por la formación de la Fundación de Conservación Tierra Austral (Tierra Austral Land Trust), que “sin fines de lucro” y signataria del territorio bajo protección, administra el 85 % de las tierras comunes.

El modelo tiene como enganche, dentro de la multifuncionalidad rural que indicábamos al principio, el vincular los intereses común y privado, al apostar por la “disminución de la huella de carbono”, compensando procesos industriales contaminantes con la plantación de árboles y protección de los bosques. La iniciativa se enlaza con los GEI como consecuencia de la deforestación, los monocultivos y la ampliación de las fronteras agrícolas, que en Chile ha aumentado 166 % durante los últimos catorce años, al considerar que un ciudadano produce entre cuatro y cinco toneladas al año de CO₂ (*Patagonia Sur*). Como es sabido internacionalmente, esta estrategia privilegia la recuperación de las tierras en cualquier parte del mundo a través del fomento de la plantación de bosque nativo, en este caso, coigües, ñirres y lengas; en el valle de California, en Palena, y en lugares donde algún incendio o intervención antrópica ha dañado un bosque, este es reforestado con la misma especie.

El objetivo de conservación en la Patagonia chilena es porque “en ella existe la más importante reserva de bosques templados del planeta”, lo que hace factible revertir la producción de CO₂ que se encuentra en la atmósfera, y la ampliación del hábitat para las especies nativas. En este modelo desarrollado por Patagonia Sur, al 8 de junio de 2014 se indica el plante de 90 402 árboles nativos, con una captura de 45 201 toneladas de CO₂, y la creación de siete bosques (*Patagonia Sur*). Indican los gestores del proyecto que:

Además de absorber dióxido de carbono, el programa de reforestación de Valle California, que es el piloto, beneficia a la ecología y economía rural, ya que controla la erosión de la tierra, fortalece las comunidades de plantas nativas, reduce el número de especies no nativas e invasivas, mejora el hábitat para la fauna de la región y crea nuevas fuentes de trabajo sustentable para los residentes locales.

Entre sus clientes se encuentra la afamada marca de vehículos Land Rover, que plantea así su estrategia de mitigación:

Todos los autos emiten dióxido de carbono, pero como Land Rover estamos compensando todas las emisiones durante su primer año de uso [...] Para ello, compramos Bonos de Carbono a una empresa que se llama Patagonia Sur. Ellos plantan bosque nativo en la Patagonia chilena como parte del Proyecto de Reforestación y Biodiversidad (Ulloa 2012).

Como se aprecia, el formato seduce por la preservación y los efectos compensatorios, sin por ello cuestionar la matriz productiva que genera la contaminación y disminución de la capa de ozono; sin embargo, como territorialización reciente, en el plano local limita las posibilidades de uso consuetudinario que existen sobre los recursos por parte de las poblaciones ganaderas, ya que fragmenta la territorialización preexistente. En este sentido, el paisaje se impone como modo de ocupación en ausencia por la intermitente residencia, frente a la necesidad de la reproducción cotidiana y generacional de las poblaciones especializadas. Además, esta multifuncionalidad abre la puerta

para que el trabajador autónomo se vuelva apatronado en labores de cuidado y mantenimiento de la exclusiva privacidad.

Experiencia y economía de la experiencia

La economía de la experiencia, propuesta por Pine y Gilmore (1999), corresponde en este caso a un modelo de negocios verde y sin chimenea, ligado al mundo del “entretenimiento” y que solo puede ser experimentado *in situ*, donde el viaje es un componente central en una doble acepción: *a*) como desplazamiento físico a lugares únicos, y *b*) como un viaje a mirar el propio interior y a evaluar la propia vida a través de experiencias “inolvidables”. Esto se ubica en la ruta exclusiva del ocio para personas de altos ingresos, en su despliegue de experiencias, distracción, espectáculos, diversión, deportes, turismo, juegos y aprendizajes. Es una burbuja de “ocio productivo” que apunta dentro de sus decorados a activar una comunicación efectiva con la historia a través de letanías, desplazamientos epocales y el paisaje, para quienes hayan desarrollado la cualidad subjetiva y estructurante del “buen gusto y prácticas de buen vivir”. Los que lo tienen todo pueden encontrar aquí en la Patagonia *algo más*, por lo que este ocio tiene un fuerte componente de clase.

El viaje es tiempo y espacio de aprendizaje para tomar la posesión de la propia vida reclamada a la modernidad; ulisíaco, como “deseo”, no consumación del mismo, activación de sensaciones y emociones; de expresión de empeño y energía para abrirse a mirar desde otro lado, y de asignación soberana de prioridades de existencia. La Patagonia ofrece un orden que habla de todo lo posible bajo un régimen de sueño imperfecto, de nuevas emociones y exigencias. En la Patagonia, el viaje “no pasa por el discurso, sino por el cuerpo” (Sarlo 2014, 13), constituye “el instante fuera de la biografía” (Sarlo 2014, 22). “Vivir es ser otro. Y sentir no es posible si hoy se siente como ayer se sintió: sentir hoy lo mismo que ayer no es sentir —es recordar hoy lo que ayer se sintió, ser hoy el cadáver vivo de lo que ayer fue vida perdida” (Pessoa 2010, 114). Se trata de mover el aspecto trémulo y pesado de la vida urbana, porque no solo se pertenece a una sociedad insuflada en el magma de la masificación,

sino también a aquella que deja los espacios laterales para ser leídos o llenados con otras historias, distinciones, capacidades que no conocemos y otros dominios disponibles como discontinuidad.

El viaje a la Patagonia es único, tan único que es elitista por costo, distancia e indumentaria. Se asocia a experimentar emociones que puedan ser propicias para el aprendizaje, para transmitir evocaciones y asociaciones míticas y místicas, sacralizando —en este caso— la naturaleza y llevándola a lo más íntimo del *yo*. Como señala Heidegger:

Hacer una experiencia con algo —sea una cosa, un ser humano, un dios— significa que algo nos acaece, nos alcanza; que se apodera de nosotros, que nos tumba y nos transforma. Cuando hablamos de *hacer* una experiencia, esto no significa precisamente que nosotros la hagamos acaecer; hacer significa aquí: sufrir, padecer, tomar lo que nos alcanza receptivamente, aceptar, en la medida que nos sometemos a ello. Algo se hace, adviene, tiene lugar (1990, 143).

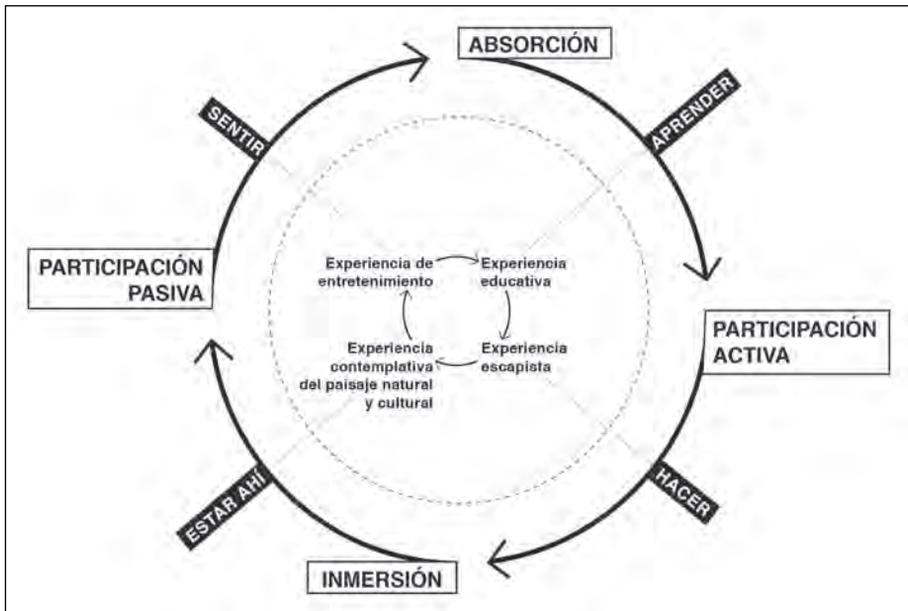
En esta modalidad de aprendizaje, la Patagonia reconecta, solo para los elegidos, la vida con la naturaleza; condensa un lugar donde comienza la aventura y la posibilidad de acceder a rincones y parajes únicos que se alojarán en la memoria para toda la vida, ya que los alerces de miles de años, los ríos de flujo libre, las montañas reflejadas en los lagos, las cuatro estaciones que se pueden experimentar en un día, los animales silvestres deambulando con todo el espacio para sí, las capillas de mármol y los glaciares son un conjunto de cuestiones y fenómenos únicos que escapan a lo ordinario y permiten repensar el binarismo cartesiano. Pensada desde la “economía de la experiencia” y como “forma de conocimiento” en los términos de Pine y Gilmore (1999), para quienes recorren su territorio, se trata antes que nada de descubrir, despertar sensaciones y emociones provistas por el paisaje, por la inmersión en la vida local y por la ausencia de tentaciones modernas. Todo conduce a vivir una experiencia superlativa de “estar donde aún no ha llegado nadie”,¹⁰ por lo que

¹⁰ Registro de campo realizado en Futaleufú, octubre de 2012.

la presencia ante la naturaleza se convierte en la posibilidad de la transformación de sí mismo, en el límite de la conversión hacia una nueva vida.

Siguiendo este esquema (figura 3) propuesto por Pine y Gilmore (1999), asumimos que la experiencia patagónica se enmarca dentro de una nueva oferta de la economía de mercado en el mundo posfordista y en la tardomodernidad, compatible con la idea de multifunción expresada en las páginas precedentes. La economía de la experiencia constituye un dispositivo económico orientado a la persuasión y al desarrollo de un involucramiento que se encuentra más cerca del teatro, es decir, del sentir por los juegos de roles y los decorados existentes, ligados a una anatomía de lo verde y lo rústico que implica distintas experiencias: *escapistas*, al entrar en un espacio anónimo; *educativas*, al exponer y presentar guiones, rutas y materialidades históricas y de memoria; *contemplativas*, dirigidas a la apreciación de la naturaleza, y de *entretenimiento*, a través de los distintos deportes. En esta propuesta incorporada a

FIGURA 3
Esquema adaptado de Pine y Gilmore (1999)



Fuente: Elaboración propia.

la multifuncionalidad, Joan Buades sostiene que “la globalización crea una casta unificada y estandarizada de consumidores a los cuales hay que ofrecer productos locales diferenciados y competitivos” (2014, 55), y en la Patagonia están dadas todas las condiciones para que ello sea posible, pero bajo un formato de exclusividad y anonimato al que se han adherido personajes del dinero, el *jet set* y la farándula internacional (Dicaprio, Stallone, Soros, Bennett, Turner, Lewis, entre muchos). De este modo, el destino Patagonia es un lugar en el que convergen múltiples movi­lidades para escenificar una complejidad en la que participan en la mercantilización objetos, paisajes, animales, plantas, personas y comunidades, a fin de generar la experiencia única e íntima de los sentidos.

Sin embargo, analíticamente implica una observación compleja, ya que la población local se transforma en un decorado dentro del control de la tierra, y se produce, como proceso de territorialización, una transformación en el uso de los recursos, reflejada en el siguiente testimonio recogido en Futaleufú: *El turista aquí viene por la naturaleza y el río. Antes el bosque era un recurso para subsistir y para hacer madera, la leña. Ahora tiene otro plus*, señala un ganadero (2014). El testimonio deja entrever la dificultad de la propia posición como actor laboral especializado y de la conciliación de la memoria del trabajo ritual con aquello que se pone sobre el territorio. La multifuncionalidad del territorio está fuera de control, es el mundo globalizado el que transita en bicicleta, aprecia el bosque, pesca en la correntada o baja en una balsa por el río, ya que el poblado de Futaleufú también pertenece a agencias internacionales de turismo.

En sentido simbólico, Futaleufú existe esencialmente porque hay una socialización del río homónimo a nivel internacional, pues opera una cadena significativa que lo transporta. Es un lugar reterritorializado por deportistas que habían practicado kayak en los ríos más importantes del mundo. Brad Lord, Peter Fox, Steve Currey y Dan Bolster, y luego Chris Spelius, el kayakista olímpico de Estados Unidos, pusieron a la pequeña Futaleufú en el mapa del mundo al promocionar su río como uno de los más importantes de su tipo, resaltando la zona como uno de los parajes más extraordinarios. Ellos ya habían experimentado en el río Bio Bio, más al norte, pero debieron abandonar las blancas

aguas del río de excepción porque fueron apresadas por embalses para producir electricidad.

Estos hombres, vestidos con indumentaria “exótica” para esos años, que para la población local “parecían hombres provenientes de Marte”, nunca previeron, en 1985, transformar al río Futaleufú —con su ruta de agua cristalina y encajonada de 45 kilómetros— en uno de los cinco ríos más importantes del mundo para practicar *kayak* y *rafting*. Una actividad desconocida entre pequeños ganaderos y funcionarios del Estado destinados a hacer soberanía en la frontera con Argentina. Todos los que lo han recorrido coinciden al definirlo: el río que puede arrebatarse la vida; un río del cual nadie se desconecta porque “te cambia”, señala un migrante (en Futaleufú, 2015).

Peter Fox señala que en 1985, en Futaleufú era como estar en otro tiempo (por la soledad), “retroceder unos cincuenta años” (2016, 41). “Hoy en día, una persona proveniente de cualquier rincón del mundo puede conectarse a internet y reservar un viaje para descender por el Futaleufú. Treinta años atrás, la única manera de ser parte del primer viaje por el Futa era ser amigo de Steve Currey y Dan Bolster” (Fox 2016, 37). Estos guías son los que crearon una nomenclatura para definir a los nuevos actores que construyen territorio: “clientes aventureros” (Fox 2016, 39).

Lo señalado también significa que se incorporan guías expertos de clase mundial, y en la población local se da una ampliación del mundo y la modificación de sus expectativas, de los propios modos de experimentar el tiempo. Actualmente, el poblado de Futaleufú tiene en la agenda todos los años un festival en febrero: el Futa Fest,¹¹ actividad anhelada, que en el año 2014 contó con kayakistas de Chile, Argentina, Gran Bretaña, México, Estados Unidos, Canadá, Austria, Ecuador, Alemania, Suiza, Brasil, Francia, Perú y España. Los adolescentes también hacen su propia experiencia y se entrenan en un ojo de agua para la práctica del *kayak*; mientras que los más avezados son contratados por empresas internacionales que los proveen de buenos ingresos por atender

¹¹ Las autoridades encargadas del turismo local y regional coinciden en que esta actividad es una marca posicionada a nivel internacional que otorga un sello característico e identidad a la zona.

la demanda de turistas extranjeros entre diciembre y marzo, y luego en un circuito europeo. Con ello, podríamos señalar que se trata de una actividad de alto impacto localizada sobre un bien exclusivo, ya que el poblado cuenta con menos de dos mil habitantes en forma permanente. Planteada como economía de la experiencia, esta condición, aunque estacional y cosmopolita, también altera la estructura social de la localidad, ya que se requieren 1) instructores; 2) servicios de logística; 3) alimentación; 4) dominio de otras lenguas, y 5) aprender a convivir con dólares, euros, pesos chilenos y pesos argentinos.

Como se aprecia, el río Futaleufú ya le pertenece a otros, y si Futaleufú y su río están integrados como mercancías a la economía desterritorializada, opacan a través de esta multifuncionalidad de la ruralidad toda la vida de los pioneros y colonos. Paralelamente, un muy atractivo título de un reportaje de la revista *Rumbo Aysén* ilustra la misma situación negando cien años de historia: “Cómo la pesca con mosca descubrió Aysén para el mundo” (Meier 2015, 22). Entonces, es claro que con esta nueva territorialización quedó atrás la memoria de la muerte de los inviernos blancos, de todos aquellos que intentaron cruzar el río montados sobre un caballo y con sus animales, base de la actividad económica local. Igualmente, la pesca con mosca es parte del ocio, pues los peces son devueltos al río por el pescador deportivo; mientras tanto, para la población local, un pez es un recurso alimenticio. En este modelo de apropiación territorial, cargado de seducciones del mundo remoto, se trata de oponer la propia vida con un nuevo deseo. Se enfrentan las ventajas y desventajas de una vida sedentaria, se activa el deseo de cambiar a menudo de lugar, fijar la mirada en distintos detalles, avanzar hacia una vida más nómada —orientada hacia experiencias nuevas, no repetitivas— y renovar cada día las expectativas.

Cuando se contrasta la propuesta realizada por Pine y Gilmore con los testimonios, lo que aparece es el espacio devenido en territorio, que se ofrece para ser nombrado con palabras incontaminadas y diferentes, como si la emoción permitiera encontrar una nueva piel del mundo, huyendo de la opaca fugacidad del tiempo urbano para recuperar uno primordial, intimista. Este esquema de generación de rentas sobre la base de recursos locales y de invisibilidad de la población local, por una parte, en términos estructurales es un modelo verde que contiene y limita el avance del extractivismo, ya que necesita, para ser tal,

del paisaje, del glaciar, del bosque y del río de flujo libre; por otra, en términos de subjetividad, abre la posibilidad de reinstitucionalizar un pacto sagrado: cuidar y proteger, cuidarse y protegerse. Es decir, renacer en respuestas y sabiduría; no al modo de un imaginario religioso, sino de una poderosa imaginación. Con ello, que el río, que siempre estuvo ahí, ahora sea en el imaginario de los deportistas uno de los cinco más importantes del mundo también ayuda a limitar y excluir otras intromisiones dentro del territorio multifuncional.

Consideraciones finales sobre el destino Patagonia

La Patagonia, como nombre utilizado para nombrar un espacio que nos atrevemos a llamar telúrico, se asocia inevitablemente con lejanía, aventura, aislamiento, desesperación y aborígenes exterminados en tierras donde el grito hace poco más de un siglo atropelló al silencio. Es un campo semántico primariamente organizado en torno a una figura ambiental violenta, extrema y hostil, que hizo difícil su ocupación por inmigrantes e invasores, representantes de la civilización frente a la barbarie paleolítica de los naturales selknam, o mapuches y tehuelches en el lado argentino. Además, espacialmente fue condición elevada temprano a una categoría superlativa por viajeros que sufrieron infortunios, adjetivada como Puerto Hambre, Bahía Desolación, Última Esperanza, para connotar un esfuerzo máximo y sacrificio en el habitar.

Su figura contemporánea deviene en la idea de “un sur excéntrico que se construyó a partir de un conjunto de calificaciones de contigüidad semántica relacionadas con el fin del mundo, la vastedad, la desolación, el vacío y la presencia de habitantes extraños” (Casini 2007, 13). Es aquella parte del planeta —porque lo que hemos indicado conduce a pensar que no le pertenece a Chile— donde todo está abierto y, por antonomasia, es permanentemente desafiante. Es invitación, lugar refugio y destino para aquellos que se sienten náufragos de la modernidad, aquellos que han decidido partir después de un trabajo interior, de mirarse, y que buscan los caminos de agua, la soledad de los desiertos esteparios o el frío glacial de las montañas para responder las incógnitas de sentido. En estos pagos, la Patagonia se constituye como la *finis*

terrae de la experiencia humana, en donde cobra nueva orientación la idea de proyecto de vida, con menos ataduras y un equipaje más liviano. Un dejar atrás la sensación de vacío y de amargura, lo frágil, lo efímero y lo ingravido, un viaje en busca de una nueva imagen del mundo.

Lo importante es que la voz *Patagonia*, por sí misma y por los soportes en los que se ha difundido (cine, documentales, diarios de viaje, novelas, folletería), define una condición que activa un imaginario formado por un conjunto de potentes imágenes, signos y símbolos relativos al paisaje y la libertad. La exacerbación de los sentidos despliega una narrativa de ocupación pasada y presente con atributos ambientales positivos y características únicas que llevan a la exploración del espacio abierto al viento, a las montañas, a los ríos y a los océanos; sin desconocer que, al mismo tiempo, indica una orientación económica dirigida a un tipo de consumidor verde, que busca este diferencial de vivir experiencias y sentir distinto, que está dispuesto a pagar por ello, de ser anónimo y desconocido, como ocurre con grandes estrellas del cine o la televisión y políticos que disfrutaban de un mundo fuera del mundo, el cual solo puede ser encontrado en lugares alejados.

La Patagonia, con sus atributos, condensa un lugar donde está a la mano la renovación y la posibilidad de acceder a rincones y parajes singulares que se alojarán en la memoria para toda la vida, ya que los bosques de alerces, que han estado antes del hombre —hace de miles de años—, las capillas de mármol o los glaciares son incomparables y superan la propia imaginación. En este rincón del planeta el punto es ubicarse donde aún pocos se aventuran; algunos para sentirse pioneros, otros para ser colonos o también para simplemente ser viajeros o turistas. Todo conduce a vivir una experiencia superlativa, quizá, en su sentido extremo, de estar donde aún no ha llegado nadie. La presencia ante la indómita naturaleza se convierte en la posibilidad de la transformación de sí mismo, en el límite de la conversión hacia una nueva vida, en la sacralización de los elementos, en la que se puede soñar y vivir con el espacio, el color, la luz, el silencio; de sacar toda inclinación indolente de la existencia.

El excedente buscado en el viaje es el tiempo para pensar en sí mismo. También se trata de fijar la atención en otras cosas, ordenarlas y priorizar de manera diferente; abrir azarosamente el libro en una página cualquiera, escuchar

la letanía del CD, borrar sin aprehensiones el mensaje que se escribe o, sin temor a repetir o equivocarse, reiniciar en cualquier punto la conversación del día anterior, de hace dos días o quizá una semana.

La territorialidad del proyecto de búsqueda y reencuentro de sí mismo de estos argonautas corresponde a la articulación específica entre naturaleza y sociedad presente, y está cruzada por una matriz axiológica intimista, no depredadora, que define al territorio como la forma de habitar, marcar, cualificar y ocupar el espacio, conciliando aspectos filosóficos y sus intangibles como la libertad, el respeto, la decencia, el límite de la propia ambición, con aspectos figurativos asociados a la imagen del paisaje con su pristinidad, colores, contrastes y seres endémicos. Son muchos los transeúntes que con sus escritos estimularon el espacio de la imaginación. Se trata siempre de discursos territoriales diferentes, con una connotación que se desmarca de lo conocido; de frescura antigua y de condición crepuscular, donde son los ciclos de la naturaleza los que determinan el modo de vida. Se pasa del nacimiento de los corderos a los fríos y lluvias invernales, de las que poco conocen los turistas. El paisaje es la escenificación contemporánea de una ausencia o falta en la experiencia cotidiana sobre la vida en cuanto comunidad extendida; alguien lo identifica, lo produce y lo contempla como modo de desconexión sensorial, para convertirlo en geografía imaginaria y narración visual, donde es posible encontrarse como *primer hombre*. Estos encuadres son de tierra virgen y arcaica, e incorporan, como hojas de ruta, nuevos activos, valores y sentidos que proyecta la marca territorial Patagonia.

La vida toda no está determinada por las acciones pasadas, sino por la voluntad de abrirse a una nueva constelación de registros que permitan la construcción de un universo alternativo: uno de recuperación del autocontrol, del orgullo sobre sí mismo, de arrepentimiento, de coherencia de los juicios con la propia vida. Entrar al abra de la Patagonia es convertirse en un caminante lírico que trata de encontrar la huella de la construcción de la propia subjetividad, una subjetividad con objetivos. La Patagonia se presenta como un camino en la búsqueda de opciones; ayuda a la creación de universos alternativos, que permiten configurar una nueva representación del universo y una nueva comunicación.

Etnológicamente, más que recurrir a fórmulas empleadas por otros para resolver problemas, lo que se sanciona es la evitación de utilizar las propias costumbres y representaciones probadas como modo de resolución de las agresiones del cotidiano al *oikos*.

La Patagonia gatilla la tentación de seguir viviendo, de reinstalarse en la naturaleza redescubriendo la mutua *ecodependencia*. *Estar* significa pensar simultáneamente en el caos y en el orden. Cuando se apodera la quietud, la vida se escinde necesariamente entre la experiencia anterior y la actual, cargada de la magia profunda de los elementos sacudidos por el contrapunto entre la vida querida y la no deseada. Para algunos de estos argonautas o neocolonos todo es transitorio, menos la trascendencia; la tranquilidad, más cerca de la vida o de la muerte, contiene una nueva humanidad. El presente de estos hombres y mujeres se configura como una aventura hiperbólica; ya no es la quimera del conquistador, es una conquista más rilqueana, más espiritual y sensual. Si el silencio se ubica en el ámbito de la materia, es la palabra la que moviliza un imaginario de todos los caminos posibles por hacer.

El contrapunto es entre el antes y el ahora, entre el aquí y el allá, como si la modernidad nos hiciera una víctima anticipada de la desgracia. Por ello, si en la Patagonia se cree que se puede corregir, la apuesta debe ir por lo que Attalli (2015) llama la “altermodernidad”, contraria al mundo que en algún momento, en virtud de la libertad, evitó la repetición contenida. Al descubrir y enfrentar desde la pequeñez al Gran Otro, se configura un andén de despedidas, un viaje sin retorno, una apertura a partir de la “multifuncionalidad” y las grietas de los modelos del capitalismo extractivista y del verde. La afirmación recogida: “la naturaleza nos cambia”, se convierte en un umbral de descubrimientos como en Lewis Carroll (2014). *La ciudad estaba muy loca* [...] *aquí tengo control sobre mi propio tiempo, puedo leer frente al fuego y espero criar a mis hijos*, se nos dice en el poblado de Futaleufú. O como sostiene un extranjero avecindado en Puerto Ibáñez, en el lago General Carrera, de menos de ochocientos habitantes: *Aquí están las cosas que yo buscaba hace tanto tiempo. Me sentía incompleto*.

La decisión de irse a la Patagonia constituye —o quisiéramos pensarla como— una epifanía desalienada, un resultado valorizado y asociado a la ampliación fraterna del concepto de comunidad. ¿Cómo se debe y puede vivir en esta

tierra? ¿Cuál es la lección histórica? Se trata, al final, de encontrar una razón para ver aquello arrancado por la modernidad y el capitalismo neoliberal, en el que se ha naturalizado la barbarie, la destrucción, la violencia, el saqueo y el sacrificio ecosistémico. Hay una evocación intuitiva de lo perdido, de lo que permite encontrar una razón para vivir. A ello concurren sinfonías verbales, encadenamientos de los sentidos, asombrosos colores, olores y sonidos para enhebrar múltiples espacios y tiempos cotidianos y trascendentales que inauguran un modo nuevo de relacionarse con el Gran Otro, la naturaleza, y con el otro interior.

Es importante consignar, para cualquier análisis, que el proceso de desarrollo o mutación territorial no puede quedar circunscrito a un espacio geográficamente determinado, sino que este debe trascender las fronteras locales. Es decir, como lo hemos presentado, las estrategias se deben definir en el marco de la región, la nación y en el de la globalización. Asimismo, que debemos avanzar hacia un proceso de construcción de una mirada transdisciplinar y multiescalar que sea soporte de la preservación del paisaje, de todos los paisajes, superando lo puramente esteticista subjetivo, como una cuestión de derecho y compromiso político que permita la confluencia de la apreciación y el ser que esconde, es decir, una consideración que esté más allá de la moda y la frivolidad de un menú exclusivo.

Referencias bibliográficas

- Acosta, A. 2009. *La maldición de la abundancia*. Quito: Swissaid; Abya Yala; CEP.
- Acosta, A. y E. Martínez. 2011. "Prólogo". En *Maldesarrollo y mal vivir. Pobreza y violencia a escala mundial*, compilado por José María Tortosa, 9-26. Quito: Abya Yala.
- Attali, J. 2007. *Breve historia del futuro*. Barcelona: Paidós.
- . 2015. *Historia de la modernidad. Cómo piensa su futuro la humanidad*. Buenos Aires: Nueva Visión.

- Bachelard, G. 2000. *La poética del espacio*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Barkin, D. 2001. "La nueva ruralidad y la globalización". En *La nueva ruralidad en América Latina*, t. II, compilado por E. Pérez, A. Farah y H. Carton de Grammont, 21-40. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Beck, U. 1998. *La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad*. Barcelona: Paidós.
- Berdegú, J. A. y A. Schejtman. 2008. "La desigualdad y la pobreza como desafíos para el desarrollo territorial". *Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros*, núm 218, 99-121.
- Bonnal, P., P. Bosc, M. Díaz y B. Losch. 2004. "Multifuncionalidad de la agricultura y nueva ruralidad: ¿reestructuración de las políticas públicas a la hora de la globalización?". En *Desarrollo rural y nueva ruralidad en América Latina y la Unión Europea*, compilado por E. Pérez y A. Farah, 19-41. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Bourlon, F. y P. Mao. 2016. *La Patagonia chilena: un nuevo El Dorado para el turismo científico*. Aysén: CIEP Chile; Banco Interamericano de Desarrollo; Ñire Negro.
- Bowles, P. 2001. *El cielo protector*. Madrid: Alfaguara.
- Buades, J. 2014. *Exportando paraísos: la colonización turística del planeta*. Barcelona: Alba Sud.
- Carroll, L. 2014. *Alicia en el país de las maravillas*. México: Porrúa.
- Carton de Grammont, H. 1999. *Agricultura de exportación en tiempos de globalización*. México: Juan Pablos.
- Carton de Grammont, H. y L. Martínez. 2009. *La pluriactividad en el campo latinoamericano*. Quito: Facultad de Ciencias Sociales.
- Casini, Silvia. 2007. *Ficciones de Patagonia. La construcción del Sur en la narrativa argentina y chilena*. Chubut: Fondo Editorial Provincial; Secretaría de Cultura del Chubut.
- Castoriadis, C. 1981. *L'Institution imaginaires de la société*. París: Editions du Seuil.
- Chatwin, B. 2004. *En la Patagonia*. Barcelona: Quinteto.

- Corfo (Corporación de Fomento de la Producción). 1950. *Geografía Económica de Chile*, t. I-II. Santiago de Chile: Fundación Pedro Aguirre Cerda.
- Corfo (Corporación de Fomento de la Producción). 1960. *Geografía Económica de Chile*, t. III-IV. Santiago de Chile: Fundación Pedro Aguirre Cerda.
- Crutzen, P. J. 2002. "Geology of Mankind: The Anthropocene". *Nature* 415: 23.
- Crutzen, P. J. y E. F. Stoermer. 2000. "The Anthropocene". *Global Change Newsletter* 41: 17-18.
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 1992. "Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo". <https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm>.
- Daly, L. y S. Posner. 2012. "Beyond GDP: New Measures for a New Economy". Nueva York: Demos. <http://www.demos.org/publication/beyond-gdp-new-measures-new-economy>.
- Deleuze, G. y F. Guattari. 2010. *Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-textos.
- Dimitriu, A. 2002. "Producir y consumir lugares: reflexiones sobre la Patagonia como mercancía". *Eptic. Revista de Economía Política de las Tecnologías de la Información y Comunicación* IV (3): 68-99.
- Eco, U. 2013. *Historia de las tierras y los lugares legendarios*. Barcelona: Lumen.
- FAO (Food and Agriculture Organization of the UN). 2007. "El estado de la agricultura y la alimentación. Pagando a los agricultores por los servicios ambientales". Roma: FAO.
- Fox, P. 2015. "La historia de la primera expedición de Rafting". *Patagon Journal*, núm. 9, 36-45.
- Georgescu-Roegen, N. 1971. *Entropy Law and the Economic Process*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- . 1975. "Energía y mitos económicos". *El Trimestre Económico* XLII (168) octubre-diciembre.
- . 1983. "La teoría energética del valor económico: un sofisma económico particular". *El Trimestre Económico* L (198) abril-junio.

- González, R. 2011. “Los procesos de migración de amenidad y la competitividad de destinos turísticos de montaña del oeste canadiense y de la norpatagonia argentina”. *Estudios y Perspectivas en Turismo* 20: 1102-1122.
- Graciano da Silva, J., S. Gómez y R. Castañeda. 2008. “Boom agrícola y persistencia de la pobreza rural en América Latina”. *Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros* 218: 17-44.
- Haesbaert, R. 2010. *O mito da desterritorialização. Do “fim dos territórios” à multiterritorialidade*. Río de Janeiro: Bertrand.
- Harvey, D. 2007. *El nuevo imperialismo*. Madrid: Akal.
- Han, B. C. 2012. *La sociedad el cansancio*. Barcelona: Herder.
- Heidegger, M. 1990. *De camino al habla*. Barcelona: Ediciones del Serbal-Guitard.
- Hidalgo, R. y H. Zunino. 2012. “Negocio inmobiliario y migración por estilos de vida en la araucanía lacustre: la transformación del espacio habitado en Villarrica y Pucón”. *Revista AUS*, núm. 11, 10-13.
- Hobsbawm, E. 2007. *Historia del siglo xx*. Buenos Aires: Crítica.
- Humes, E. 2010. *Eco Barons: The New Heroes of Environmental Activism*. Nueva York: Ecco; Harper Collins.
- INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos). 2012a. *Mapa de conflictos socioambientales en Chile*. Santiago de Chile: INDH.
- . 2012b. *Resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda 2012*. Santiago de Chile: INDH.
- Inglehart, R. 1997. *Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies*. Princeton: Princeton University Press.
- . 1998. *Modernización y posmodernización. El cambio cultural, económico y político en 43 sociedades*. Madrid: Siglo XXI.
- Jodelet, D. 2003. “Représentations sociales: un domaine en expansion”. En *Les représentations sociales*, editado por D. Jodelet, 45-78. París: PUF.
- Krakauer, J. 2013. *Hacia rutas salvajes*. Santiago de Chile: Zeta.
- Krugman, P. 1991. *Geography and Trade*. Cambridge: MIT Press.
- Langman, J. 2014. “Los parques privados en aumento”. *Patagon Journal*, núm. 5, 11-23.

- Llambí, L. 1996. "Globalización y nueva ruralidad en América Latina". En *La sociedad rural mexicana frente al nuevo milenio*, vol. I, compilado por H. Carton de Grammont y H. Tejera Gaona. México: Plaza y Valdés.
- Llambí, L. y E. Pérez. 2007. "Nuevas ruralidades y viejos campesinismos. Agenda para una nueva sociología rural latinoamericana". *Cuadernos de Desarrollo Rural* 59: 37-61.
- Leopold, A. 2007. "La ética de la tierra". *Revista Ambiente y Desarrollo* 23 (1): 29-40.
- Magazine Business Chile. 2010. "Donde los negocios se juntan con la conservación", 14 de julio de 2010. <http://businesschile.cl/es/noticia/patagonia-sur/donde-los-negocios-sejuntan-conla-conservacion>.
- Manzanal, M. 2007. "Actores rurales y negociaciones en el norte de Argentina". En *Territorios rurales: movimientos sociales y desarrollo territorial en América Latina*, editado por J. Bengoa, 482-496. Santiago de Chile: Catalonia.
- Martínez, J. 2014. *El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración*. Santiago de Chile: Quimantú.
- McElwee, S. y L. Daly. 2014. "Why we Should Abolish the GDP". *The Washington Post*, 5 de junio de 2014. <https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2014/06/05/why-we-should-abolish-the-gdp/>.
- Meier, J. 2015. "Cómo la pesca con mosca descubrió Aysén para el mundo". *Rumbo Aysén*, núm. 3, 23-25.
- Moore, J. W. 2015. *Capitalism in the Web of Life. Ecology and the Accumulation of Capital*. Londres, Nueva York: Verso.
- Naess, A. 1990. *Ecology, Community and Lifestile: Outline of an Ecosophy*. Cambridge, Massachusetts: Cambridge Universe Press.
- . 1995. "Deepness of Questions and the Deep Ecology Movement". En *Deep Ecology for the 21st Century*, Editado por George Sessions, 204-221. Boston: Shambala.
- Parque Pumalín. Consultado el 13 de septiembre de 2016. <http://www.parquepumalin.cl/>.
- Patagonia Sur. Consultado el 15 de septiembre de 2016. <http://www.patagoniasur.com/>.
- Pessoa, F. 2010. *Libro del desasosiego*. Barcelona: Acantilado.

- Pine, J. y J. Gilmore. 1999. *The Experience Economy*. Boston: Harvard Business School Press.
- Raffestin, C. 1980. *Por une géographie du pouvoir*. París: Litec.
- Reyes, S. y J. Rodríguez. 2015. "Proyecto Hidroaysén: capitalismo extractivista, regulación estatal y acción colectiva en la Patagonia". *Polis* 40. <http://polis.revues.org/10819>. DOI: 10.4000/polis.10819.
- Rodríguez, J. C., N. Gissi y P. Medina. 2015. "Lo que queda de Chile: la Patagonia, el nuevo espacio sacrificable". *Andamios* 12 (27): 335-356.
- Rodríguez, J. C., P. Medina y S. Reyes. 2014. "Territorio, paisaje y marketing global. Imaginarios en la construcción de la Patagonia como marca". *Magallania* 42 (2): 109-123.
- Rodríguez, J. C. y M. Requena. 2014. "La reinención de la autenticidad en el contexto de la mercantilización neoliberal". *Sociologías* 16 (35): 166-201.
- Salas, H. y L. Rivermar, eds. 2014. *Nativitas, Tlaxcala: la construcción en el tiempo de un territorio rural*. México: Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM.
- Salas, H., L. Rivermar y P. Velasco. 2011. *Nuevas ruralidades. Expresiones de la transformación rural en México*. México: Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM; Juan Pablos Editor.
- Santos, M. 2000. *La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción*. Madrid: Ariel Geografía.
- Sarlo, B. 2014. *Viajes. De la Amazonía a las Malvinas*. Buenos Aires: Seix Barral.
- Sosa, M. 2012. ¿Cómo entender el territorio? Guatemala: Cara Parens.
- Steffen, W., P. J. Crutzen y J. R. McNeill. 2007. "The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature?". *AMBIO: A Journal of the Human Environment* 36 (8): 614-621.
- Tompkins, D. 1998. "La tragedia del bosque chileno". Prólogo de *El futuro y la esperanza*. Santiago de Chile: Defensores del Bosque Chileno.
- Ulloa, E. 2012. "El plan de Land Rover para reforestar la Patagonia y compensar sus emisiones de CO₂". *El Mercurio*, 1.º de abril de 2012. <http://www.emol.com/noticias/economia/2012/03/20/531834/el-plan-de-land-rover-parareforestar-la-patagonia-y-compensar-las-emisiones-de-co2.html>.

- Watcher, S. 2000. *Repenser le territoire. Un dictionnaire critique*. París: Datar; Editions de l'Aube.
- Williams, F. 2011. "Colonización, espacio público y paisaje en el valle del Chubut. La gestión del territorio entre la política y la poética". Tesis de doctorado. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- Wilson, G. 2001. "From Productivism to Postproductivism... And Back Again? Exploring the (Un)changed Natural and Mental Landscapes of European Agriculture". *Transactions of the Institute of British Geographers* 26: 77-102.
- Yuan, J. 2018. "Un viaje fantástico, lluvioso y algo solitario por Chile". *New York Times*, 8 de mayo de 2018. https://www.nytimes.com/es/2018/05/08/chile-patagonia-52-lugares/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es&action=click&contentCollection=jada-yuan®ion=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=2&pgtype=undefined.
- Zalasiewicz, J., P. J. Crutzen y W. Steffen. 2012. "Anthropocene". En *The Geologic Time Scale*, editado por F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz y G. M. Ogg, 1033-1040. Ámsterdam: Elsevier.

Residentes de las favelas: entre represión, violencia y política

Saila-Maria Saaristo
Universidad de Helsinki

Só porque moro no morro
A minha miséria a vocês despertou
A verdade é que vivo com fome
Nunca roubei ninguém, sou um trabalhador
Se há um assalto ao banco
Como não podem prender o poderoso chefeão
Aí os jornais vêm logo dizendo que aqui no morro só mora ladrão
Se vocês estão a fim de prender o ladrão
Podem voltar pelo mesmo caminho
O ladrão está escondido lá embaixo
Atrás da gravata e do colarinho.^{1,2}

BEZERRA DA SILVA, *Vítimas da sociedade*³

- ¹ Solo porque vivo en el cerro
Mi miseria a ustedes despertó
La verdad es que vivo con hambre
Nunca robé a nadie, soy un trabajador
Si hay un asalto a un banco
Como no pueden detener al jefeazo
Enseguida los periódicos vienen diciendo que aquí en el cerro solo viven ladrones
Si ustedes quieren detener al ladrón
Pueden regresar por el mismo camino
El ladrón se esconde detrás de la corbata y el cuello blanco.
- ² En este capítulo, las traducciones al español son de la autora.
- ³ Fragmento de una canción de samba, *Víctimas de la sociedad*, de un famoso músico brasileño.

Introducción

Este capítulo presenta un análisis sobre las dinámicas y las estructuras de marginalización de los residentes de dos *favelas* (asentamientos irregulares) de Río de Janeiro, Brasil, así como las respuestas que en distintas épocas elaboran los miembros de las asociaciones de residentes frente a la opresión. Explora, además, cómo se ha creado un límite entre *o morro* y *o asfalto*, las favelas y el resto de la ciudad de Río de Janeiro, y cómo se usa este límite para definir tanto al espacio como a la gente que en él habita. En el discurso dominante ha existido, y todavía existe, una tendencia de definir a las favelas como espacios “anormales” y excluir a los residentes, tanto espacial como socialmente.

Analizo la forma en que se reproduce este orden socioespacial y también cómo es desafiado, a fin de demostrar que la represión hacia los residentes de las favelas está institucionalizada en varias prácticas legales, políticas y sociales, y se reproduce a través de mecanismos sociales y políticos que contribuyen a mantener intactas las relaciones de poder y dificultan la ascensión social.

En el análisis de los procesos de producción del espacio urbano es fundamental preguntarse quién tiene el “derecho a la ciudad” (Lefebvre [1968] 2009), es decir, el acceso a la vida urbana y a la posibilidad de transformarla. Como plantea Harvey (2008, 23), “la libertad de producir y reproducir nuestras ciudades y a nosotros mismos es uno de los derechos humanos más preciosos, pero también más ignorados”. En el contexto neoliberal, en muchas ciudades, las estrategias de crecimiento y desarrollo se enfocan en la comercialización de las ciudades y la atracción de inversiones y de turistas. Durante la última década, la ciudad de Río de Janeiro ha sido sometida a intensas políticas de desarrollo relacionadas también con la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, que resultaron en la creciente marginalización de los residentes de las favelas. El modelo de desarrollo urbano en la ciudad se ha descrito últimamente como la “máquina de crecimiento urbano”, e incluye la conceptualización de la tierra como un bien financiero y el desarrollo de la ciudad basado en un modo de vida desigual que profundiza la mercantilización de la vida social (Logan y Molotch 1987; Cardoso 2013; Cunha et al. 2016). En otras palabras, existe un conflicto social entre la búsqueda del

interés propio de las élites sociales (tanto económicas como políticas) y el de los ciudadanos en las zonas urbanas pobres. Como escribe Harvey (2008, 38), “el derecho a la ciudad, el constituido actualmente, está confinado demasiado estrechamente, restringido en la mayoría de los casos a la pequeña élite política y económica que está en la posición de moldear las ciudades cada vez más según sus propios deseos”. Me parece crucial analizar cómo las actuales políticas urbanas afectan a los residentes más pobres y socialmente más marginados de la ciudad.

En fuerte contraste con las políticas públicas urbanas, está la realidad del desarrollo urbano en Brasil: la producción del espacio urbano se ha promovido esencialmente a través de procesos informales de acceso al terreno urbano y a la habitación.

Resultado de la combinación de mercados especulativos de tierra, sistemas políticos clientelares, prácticas elitistas de planificación urbana y regímenes legales excluyentes —los cuales afirman, desde hace mucho, los derechos de los propietarios individuales sobre el principio constitucional de función social de la propiedad—, hace ya algún tiempo que el proceso informal de desarrollo urbano en Brasil no es la excepción, sino la forma principal socioeconómica de producir el espacio urbano en la ciudad (Fernandes 2007a, 203).

No obstante, aunque son los propios residentes de las favelas quienes han construido el espacio urbano con su infraestructura, no han recibido reconocimiento por eso. Al contrario, el resultado de su trabajo es considerado ilegal y a veces es destruido.

En lo que sigue presento una descripción del origen y evolución de las favelas de Río de Janeiro, incluyendo las diferentes políticas que intentaron atender a estos asentamientos. Analizo los componentes estructurales y sociopolíticos que producen la marginalización y la estigmatización de los residentes de las favelas, a partir del concepto de ciudadanía considerado desde sus diferentes componentes. Describo cómo los residentes de las favelas han tratado de afirmar su derecho a la ciudad; aunque para tener realmente derecho a la ciudad, los ciudadanos deberían poder controlar el proceso urbano por completo, y

para lograrlo, Harvey (2008, 40) sugiere que sería necesario democratizar el proceso de producción y uso del excedente y la urbanización. Como se demostrará a lo largo del capítulo, en Río de Janeiro el derecho de los residentes de las favelas a la ciudad ha permanecido casi siempre incompleto.

Las comunidades: Babilônia y Chapéu Mangueira

Este texto está basado en el trabajo de campo etnográfico realizado durante un año, entre 2007-2008, y en una estadía anterior, también de un año, en 2005. Durante esos periodos viví en la favela de Babilônia, situada en la zona sur de Río de Janeiro. Los materiales recopilados provienen de la observación participante,⁴ así como de detalladas entrevistas con activistas de las asociaciones de residentes. La investigación se realizó con la asociación de residentes de Babilônia AMB (Associação dos Moradores da Babilônia) y con la asociación de residentes de Chapéu Mangueira AACM (Associação dos Amigos do Chapéu Mangueira). Babilônia y Chapéu Mangueira están situadas una a lado de la otra, en el mismo cerro en la zona de Leme. En el censo de 2000 se contaron 381 hogares en Babilônia y 311 en Chapéu Mangueira. No obstante, las asociaciones de residentes afirman que ese censo se hizo sin visitar la mayoría de las casas de ambos barrios, que además han crecido significativamente, por lo que estiman que para el año 2008 cada uno tendría al menos mil hogares.⁵ Los barrios cuentan con muchos lugares públicos, tales como las sedes de las asociaciones de residentes, guarderías, centros deportivos y culturales, centros de artes y artesanías, muchas tiendas y bares, así como puestos de policía y albergues.

⁴ Entiendo la *observación participante* como una recopilación de materiales de investigación en entornos naturales, observando y tomando parte en actividades que los participantes de la investigación realizan (DeWalt y DeWalt 2011).

⁵ Según el censo de 2010, Babilônia tendría 777 hogares y Chapéu Mangueira 402 (IBGE 2010).

Llegué a Babilônia por primera vez en 2005 gracias a mi profesor de capoeira,⁶ quien vivía en el barrio, y a las asociaciones de residentes las conocí a través de un trabajo voluntario. En 2007 alquilé un apartamento de un exvicepresidente de la AMB, amigo mío, que vivía en la casa contigua. Él y su hijo prácticamente constituyeron mi familia durante el año de investigación. Opté por centrar mi investigación en las asociaciones de residentes porque durante décadas han sido actores políticos significativos, con un papel fundamental en el desarrollo de ambas favelas. Durante diferentes situaciones sociales, económicas y políticas, han adoptado distintos papeles y su agencia ha contribuido de manera significativa a desafiar, reproducir, debilitar o fortalecer las estructuras de poder. No obstante, ninguna de las asociaciones de residentes ha sido la única forma de organización política en estas favelas: muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) también trabajaron en Babilônia y en Chapéu Mangueira promoviendo la formación profesional, impartiendo clases de informática y de costura, en clubes deportivos o en programas de educación para la salud.

El derecho a la ciudad en el contexto neoliberal

El trabajo de campo se realizó durante el segundo mandato del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva. La victoria de Lula en las elecciones generales con su Partido dos Trabalhadores (PT, Partido de los Trabajadores) fue considerada por muchos brasileños histórica y fue recibida con entusiasmo y alegría, ya que ofrecía la esperanza de poner fin al régimen opresivo de las élites, y de extender la ciudadanía a los pobres. Entre 2003 y 2013, Brasil vivió una época nunca vista en su historia: el producto interno bruto (PIB) se cuadruplicó, se crearon 21 millones de puestos de empleo formales, salieron de la pobreza 36 millones de personas, los ingresos familiares aumentaron 35 % y se construyeron 1.5 millones de hogares (Ribeiro 2016). Brasil llegó a ser una referencia para las

⁶ La *capoeira* es un arte marcial que combina elementos de danza, lucha, acrobacia y música.

políticas de urbanización, salubridad y democracia participativa, con su ejemplo más conocido en el presupuesto participativo, iniciado en Porto Alegre en 1989 y luego difundido a centenas de otras ciudades en Brasil y otras partes del mundo.

Varios autores han sugerido que en Brasil la sociedad está dividida en dos niveles de ciudadanía; los ciudadanos de “segunda clase” no logran alcanzar la plena ciudadanía ni son completamente reconocidos como titulares de los derechos ciudadanos, incluso si este es formalmente el caso (Caldeira 2000; Holston 2007; Vieira 2007). Esto puede ser conceptualizado a través de las nociones de partes formales y sustantivas de la ciudadanía, considerando la diferencia entre la ciudadanía formal (la pertenencia al Estado-nación) y la ciudadanía sustantiva, es decir, el acceso a una serie de derechos civiles, políticos y sociales (Holston 1995, 50-53). Holston también usa el término “ciudadanía diferenciada”, ya que, “en términos de sus principios formales y sustantivos de organización, utiliza las diferencias sociales que no son la base para la pertenencia nacional —principalmente las diferencias en la educación, la propiedad, la raza, el género y la ocupación— para distribuir un trato distinto a las diferentes categorías de ciudadanos” (Holston 2011, 341).

Dagnino (2007) nota que, en el contexto latinoamericano, el surgimiento del concepto de ciudadanía está relacionado con las experiencias de los movimientos sociales durante las décadas de 1970 y 1980, y que rápidamente comenzó a utilizarse para construir puentes entre las luchas de varios movimientos sociales. No obstante, a partir de la década de 1990, las élites y el Estado inician la apropiación de este útil concepto. Desde la perspectiva neoliberal, la ciudadanía es comprendida como la integración de los individuos al mercado, mientras que los derechos previamente adquiridos se desmoronan progresivamente (Dagnino 2007, 549-550). Esta interpretación del concepto confunde su significado. Lo mismo ocurre con otros términos compartidos por los movimientos sociales y los proyectos neoliberales, como *participación* y *sociedad civil*. Tal como nota Harvey, el neoliberalismo también creó nuevos sistemas de gobernanza que integran los intereses del Estado con los de las corporaciones. A través del uso del poder del dinero, el neoliberalismo ha asegurado que la

inversión del excedente favorezca al capital corporativo y a las clases altas en la formación del proceso urbano (Harvey 2008, 37).

En Brasil, el contexto político que hizo posible la incorporación del concepto de *participación*, entendido como poderes de decisión compartidos en la Constitución de 1988, pronto comenzó a cambiar. La participación, en el contexto neoliberal, se concibió como la posibilidad de asumir la responsabilidad de las políticas sociales a través del trabajo voluntario o mediante la colaboración de ONG con el Estado en el desarrollo de proyectos sociales (Dagnino y Teixeira 2014, 42-43). Dagnino y Teixeira afirman que estas dos concepciones radicalmente diferentes de participación siguen coexistiendo en la escena política brasileña y contribuyen a generar las tensiones y contradicciones asociadas a la implementación de la participación. A nivel nacional, bajo los gobiernos del PT hubo una fuerte tendencia a configurar nuevamente el papel proactivo del Estado. A nivel municipal y estatal, el predominio de cada uno de estos conceptos depende mucho de la orientación política del Gobierno en turno (Dagnino y Teixeira 2014).

Aquí argumento que en la política del Estado en relación con las favelas existe una tendencia a privar a sus residentes de agencia y de ciudadanía, a tratarlos simplemente como grupos de población sujetos de diferentes políticas.⁷ El límite entre un residente de una favela y un *carioca*⁸ de clase media o alta es una de las categorías que se utilizan en Brasil para construir jerarquías. Las agrupaciones sociales tienen su propia lógica espacial e introducen mecanismos de separación para diferenciarse de otras agrupaciones (Migdal 2004). En mi opinión, el estado selectivo de la ciudadanía es también un reflejo de la naturaleza jerárquica más amplia de la sociedad brasileña, la cual se combina perfectamente con la lógica neoliberal, como lo ha descrito Harvey: “la restructuración urbana casi siempre tiene una dimensión de clase, siendo que son los pobres, los desfavorecidos y los que han sido marginados del poder

⁷ Veo el poder del Estado, sin embargo, no como un único sujeto que actúa, sino como un proceso de relaciones entre una multiplicidad de fuerzas que, a través de luchas y enfrentamientos, transforma, fortalece o revierte tales relaciones (Foucault [1976] 1990).

⁸ Residente de la ciudad de Río de Janeiro.

político los que, en primer lugar, sufren en este proceso” (Harvey 2008, 33). Siguiendo los ideales neoliberales de participación, los residentes de las favelas son invitados y obligados a participar concretamente en la construcción de sus barrios y su infraestructura, pero sin obtener poder de decisión. Cuando la superficie de una favela se vuelve interesante financieramente, se utilizan distintos mecanismos para expulsar a los pobres de su territorio.

Estrategias de resistencia en las favelas

El proceso urbano no es solamente un subproducto de la operación del capital: las ciudades son sitios de intensas luchas entre varios actores interesados, cuyas ideas, influencias y acciones conforman las actuales realidades urbanas (Bayat y Biekaart 2009, 823). El habitante de la favela no puede ser visto como un mero sujeto de diversas influencias. Los residentes y, más específicamente, las asociaciones de residentes en las que se enfoca este trabajo, han desafiado las estructuras hegemónicas (y más tarde, el proyecto neoliberal) del mismo modo en que han contribuido a su preservación. Las diferentes estrategias utilizadas por los residentes de las favelas para influir y cambiar las condiciones en sus barrios son de fundamental importancia. Siguiendo las categorías establecidas por McAdam, Tarrow y Tilly (2001), es posible hacer una distinción entre la contención contenida y la contención transgresiva.⁹

Los residentes de las favelas han utilizado tanto las estrategias contenidas como las transgresivas para influir en sus condiciones de vida. Diferentes

⁹ “La contención contenida se refiere a los casos de contención en los cuales todas las partes son agentes pre-establecidos que utilizan medios de reclamación bien establecidos [...] La contención transgresiva consiste en una interacción episódica, pública y colectiva entre los demandantes y sus objetos cuando: (a) por lo menos un gobierno es el demandante, el objeto de la demanda o el interesado en la demanda, (b) las demandas afectarían, si se realizan, a los intereses de por lo menos uno de los demandantes, (c) por lo menos algunas de las partes interesadas en el conflicto son agentes políticos, como recientemente se ha identificado, o (d) por lo menos algunas de las partes utilizan una acción colectiva innovadora” (McAdam, Tarrow y Tilly 2001, 7-8).

autores tienden a enfatizar distintas estrategias de contención. Por ejemplo, James Holston (2011) basa su análisis en el concepto de *ciudadanía insurgente* (*insurgent citizenship*). Este autor estudia diversas tácticas surgidas en la década de 1970, a través de las cuales los residentes de barrios pobres urbanos han desafiado la noción de la ciudadanía diferenciada. Para Holston, la base de esta insurgencia puede encontrarse en las condiciones de la vida urbana de las periferias, especialmente en la adversidad de la residencia ilegal, la construcción de viviendas y el conflicto por la tierra. Por lo tanto, enfatiza los derechos de colaborador (*contributor rights*): los residentes exigen derechos ciudadanos a partir de su contribución a la ciudad “a través de la construcción de las casas y barrios, con el gobierno municipal por medio del pago de impuestos de consumo y de trabajo, y con la economía de la ciudad mediante el consumo. Son derechos de colaborador porque los residentes basan su legitimidad en la construcción y la apropiación de la ciudad a través de estos medios” (Holston 2011, 347).

El hecho de invocar derechos del colaborador puede verse como un acto de contención, pues a través de ellos los residentes intentan modificar las relaciones y categorías de espacio existentes. No obstante, el énfasis en los derechos de colaborador refleja ideas neoliberales de participación: los residentes pueden afirmar sus derechos solamente a través de su participación en la provisión de viviendas y de servicios sociales. De manera opuesta a Holston, Lucy Earle (2012), en su análisis sobre la União de Movimentos de Moradia (Unión de Movimientos de Alojamiento) en São Paulo, sostiene que los derechos basados en la ley (*text-based rights*) han adquirido una función fundamental en la demanda de igualdad en el Brasil contemporáneo. Desde su perspectiva, Holston no considera cabalmente el impacto del carácter inclusivo de la Constitución de Brasil de 1988, que para ella es esencial a fin de comprender los movimientos de ciudadanía en las periferias (Earle 2012, 102). Earle argumenta que a pesar de que varios análisis dirigen su atención hacia la naturaleza diferenciada del sistema judicial brasileño, en el país también existe una sólida fe en la capacidad de la ley: “La comprensión sobre la Constitución se ha traducido en ‘políticas de derechos’, y la ley es usada por el movimiento para interactuar con el Estado a través de actos de ‘ciudadanía transgresiva’” (Earle 2012, 103). No obstante, la fe en el poder transformador

de la legislación no parece tener un soporte fuerte; aunque puede ser usada como base de las demandas y a pesar de su avanzada Constitución, en Brasil no faltan ejemplos de desigualdades.

En lo que sigue voy a utilizar los conceptos de *contención contenida* y *contención transgresiva*, así como la idea de *derechos de colaborador* y *derechos basados en la ley*. Los conceptos me parecen útiles para diferenciar las estrategias que buscan activamente desafiar y cambiar las estructuras del neoliberalismo, el orden socioeconómico actual. De la misma forma, a pesar de mis críticas, los conceptos de *derechos de colaborador* y *derechos basados en la ley* ayudan a profundizar el análisis sobre las estrategias utilizadas por los residentes de las favelas para transformar sus condiciones de vida, así como las estructuras socioespaciales establecidas.

Nacimiento de las favelas

La noción de *favela* surgió en Río de Janeiro a finales del siglo XIX, cuando los soldados y los exesclavos que lucharon en el levantamiento Revolta dos Canudos comenzaron a residir en el cerro de la Providencia. Uno de los primeros cerros ocupados fue nombrado Morro da Favela (Xavier y Magalhães 2003, 4). La topografía de la ciudad es variable, con cerros que surgen en la costa o en el interior. La construcción de la ciudad comenzó en las tierras bajas y en tierras ganadas al mar para aumentar el área adecuada para la construcción. Los cerros quedaron desocupados en gran medida. En parte, porque se pensaba que eran inadecuados para la construcción de viviendas por sus fuertes pendientes y porque estaban expuestos a deslizamientos de tierra. No obstante, cuando la ciudad de Río de Janeiro comenzó a crecer, muchos de los inmigrantes que llegaron de otros estados del país construyeron sus viviendas en los cerros, debido a su proximidad al centro de la ciudad y a otros barrios importantes. El resultado es una situación inusual en comparación con muchas otras grandes ciudades del mundo: en la zona sur se ubican algunas de las áreas más ricas y las más pobres de la ciudad, una al lado de la otra, produciendo diferencias sociales monumentales.

El término *favela* permaneció y constituyó la palabra más común para nombrar los asentamientos irregulares. Oficialmente, las favelas se clasifican como “aglomerados subnormales”, definidos como un grupo de al menos 51 viviendas precarias que cuentan con algunos servicios públicos esenciales, ocupan o han ocupado hasta hace poco la tierra cuya titularidad corresponde a otras entidades (públicas o privadas) y generalmente se organizan de una manera desordenada o densa (IBGE 2010). Actualmente, el estado de Río de Janeiro posee el mayor número de habitantes en aglomerados subnormales: 1.4 millones, lo que representa 22 % de la población del estado (IBGE 2010). En 2010, la alcaldía de Río de Janeiro empezó a utilizar una nueva clasificación para estos asentamientos, compuesta por dos grandes subgrupos: las favelas no urbanizables, por localizarse en áreas de riesgo o en lugares inadecuados para el uso residencial, y las favelas urbanizables. También se adoptó la categoría de “comunidad urbanizada”, que corresponde a un tipo de asentamiento habitacional que, aunque se origina como una favela, logra mejoras significativas con los procesos de urbanización y reurbanización, aunque “continúa manteniendo especificidades en su estructuración socioespacial, en los patrones constructivos de sus edificaciones y en las formas de organización de la vida cotidiana, que justifican mantenerlos en una clasificación propia” (Cavallieri y Vial 2012, 4). La población de las comunidades urbanizadas representa 20 % de la población total de las aglomeraciones subnormales (Cavallieri y Vial 2012).

En el lenguaje popular, el término *morro* (cerro) también comenzó a ser utilizado para denotar un barrio pobre, siempre que este se encuentre en un cerro. Mientras que el término *asfalto* surgió luego como su contraparte, para designar los sectores legales de la ciudad que generalmente tienen las calles pavimentadas.¹⁰ Otros términos que se utilizan para nombrar el espacio de la favela, así como a sus residentes, son *comunidade* (comunidad), *favelado* y

¹⁰ Es importante tener en cuenta que la desigualdad social geográfica en Río de Janeiro no solo se manifiesta en la división “el *asfalto* frente al *morro*”, sino también entre las zonas norte, oeste y sur. Dependiendo de la zona, vivir en el *asfalto* puede presentar condiciones mucho más difíciles que vivir en algunas favelas de la zona sur, en términos de tráfico de drogas, violencia o en la ausencia del Estado.

morador de favela (ambos significan residente de una favela). Estos términos sugieren significados distintos dependiendo de la situación social y la visión del mundo de cada persona particular. Los residentes de Babilônia y de Chapéu Mangueira por lo general se referían a sus barrios por sus nombres, sus apodos (Babi, Chapéu) o con los términos *morro* o *comunidade*.¹¹ También utilizaban la palabra *morro* para describirse a sí mismos, a su cultura y al orgullo que esta les provoca, tanto en su lenguaje cotidiano como en la música popular. En este sentido, residir en un *morro* significa vivir en una comunidad, lo que sugiere que existe una experiencia compartida y solidaridad entre las personas que habitan las favelas. Los residentes consideraban la palabra *favela* más abstracta y hasta cierto punto peyorativa, pues es la que usan cuando se habla de las diferentes políticas del Gobierno municipal o central dirigidas hacia sus asentamientos irregulares, pero rara vez la usan cuando hacen referencia a su “comunidad”. La palabra *favelado* es todavía más ambigua, y los residentes de Babilônia y Chapéu Mangueira no la utilizaban por considerarla ofensiva. Ellos preferían referirse a sí mismos como *moradores de favela*.

Dinámicas de marginalización–desalojos y resistencia

A partir de la década de 1940, Río de Janeiro creció y se urbanizó velozmente debido a la industrialización y a la disminución del trabajo agrícola.¹² La ciudad se llenó rápidamente de personas, y muchas viviendas fueron construidas en los cerros del centro de la ciudad. El gobierno del presidente Getúlio Vargas (1930-1934 y 1937-1945) respondió con una política de aislamiento y segregación de los inmigrantes, lo que culminó en el desalojo de los residentes de las favelas. Vargas inició un experimento llamado *parques proletários*, lo que significaba mover a los residentes de las favelas hacia los suburbios en las afueras de la

¹¹ En este artículo voy a utilizar estos diferentes nombres dependiendo del contexto. De esta manera, trato de arrojar luz sobre sus distintas aplicaciones.

¹² En 1940, 31.4% de los brasileños vivían en las ciudades, mientras que en 2000 el porcentaje había aumentado a 81.3% (PNUD 2006).

ciudad. La teoría que guiaba dicha política consideraba que los individuos eran pobres y marginados debido a ciertas circunstancias, lo cual justificaba a su vez diferentes tipos de medidas sociopolíticas (Valladares 2005, 126-127). De esta manera, las masas urbanas pobres, anteriormente vistas como peligrosas por la élite, pasaron a ser una población susceptible de ser manipulada.

No obstante, el experimento de los parques proletarios también estimuló a los residentes de las favelas a organizarse, dado el temor de que el experimento se convirtiera en una práctica generalizada. Los primeros comités de residentes se formaron en 1945 en Pavão-Pavãozinho, a continuación, en los cerros de Babilônia y Cantagalo, con el objetivo de oponerse al plan atribuido al Gobierno de la ciudad de mover a todos los residentes de las favelas hacia nuevas áreas. Un poco más tarde, los comités presentaron una lista de los derechos sociales que reivindicaban, ligados a los problemas de infraestructura que sufrían en sus barrios (Burgos 2006, 28). La primera asociación de residentes de las favelas, Coligação dos Trabalhadores Favelados do Distrito Federal, fue registrada en 1957 para promover la cooperación interna y mejorar las condiciones de vida (Burgos 2006, 31). El nombre de la asociación es interesante porque incluye el término *favelado*, que como expliqué, normalmente es visto como peyorativo. Su uso sugiere que en ese momento los residentes de las favelas habían comenzado a crear una identidad colectiva positiva para defenderse.

No toda la élite de la ciudad era favorable a la posición afirmativa más fuerte de los residentes de las favelas. Había preocupación por el crecimiento de la organización en las favelas y, de este modo, se crearon mecanismos más estrictos para controlarlas políticamente. En el ámbito académico se desarrolló la teoría de la marginalidad para conceptualizar a las poblaciones de las favelas, se abandonó el punto de vista puramente económico sobre la exclusión y se incorporaron otros dos criterios: el espacial y el sociocultural. En lugar de justificar la opresión sobre la base de la pobreza de los residentes, se les llama ahora “marginales”, lo que les otorga una forma de vida propia, definida por valores y comportamientos divergentes a la cultura de otros ciudadanos. Eran “analfabetos, promiscuos, alcohólicos, descalzos, supersticiosos, propensos a la criminalidad e infectados por parásitos” (Perlman 1979, 200), cualquier cosa que pudiera parecer aberrante para la gente de la clase alta de Río de Janeiro.

A continuación, se utilizó la teoría de la marginalidad como una justificación para implementar políticas opresivas y paternalistas: “esa gente” no estaba obviamente en control de sí misma y, por lo tanto, tenía que ser educada y controlada. Esto dio lugar a una operación considerable contra las favelas entre 1960 y 1975. Después del golpe militar de 1964, el nuevo Gobierno centralizado tenía los recursos suficientes para llevar a cabo la erradicación de las favelas a gran escala. La interpretación de las favelas como un problema social se combinaba perfectamente con la planificación urbana que pretendía realizar el Gobierno autoritario y, en Río, se estableció un límite entre los residentes de las favelas “marginales” y el resto de la ciudad. Los cariocas de clase alta y media interpretaban las favelas como un territorio extraño, un espacio de delincuentes peligrosos y no educados. La residencia en una favela, de este modo, comenzó a ser utilizada para definir el estatus social de la persona, vinculada a otros atributos tales como la riqueza, la raza y el género; vivir en la favela se transformó en una señal automática de clase. El límite entre el *morro* y el *asfalto* se convirtió en una justificación para el sometimiento de los residentes de las favelas a diferentes tipos de políticas, a menudo represivas, paternalistas y violentas.

Frente a las políticas de desalojo, los residentes utilizaban estrategias que se asemejaban a las “armas de los débiles” (*weapons of the weak*) de James Scott (1985), como no pagar la renta en las nuevas viviendas o salir de ellas para volver al antiguo barrio. Además, había estrategias más activas por parte de las asociaciones de residentes, que exigían un cambio general en las políticas. Formando asociaciones, los residentes lograron crear una representación de sus intereses comunes e institucionalizar sus actividades. De esta forma, consiguieron reivindicarse como ciudadanos, aunque las demandas presentadas aún quedaron lejos de la exigencia de la ciudadanía completa. La federación de residentes de las favelas, FAFEG (Federação da Associação de Favelas do Estado da Guanabara), incrementó su fuerza durante la década de 1960, incorporó eventualmente a decenas de asociaciones de residentes de las favelas y articuló fuertemente las demandas de los residentes.

En la década de 1960 también hubo muchos desalojos forzados en Babilônia y en Chapéu Mangueira. Las personas fueron reubicadas lejos, en el norte

y en el oeste de Río de Janeiro, y sus hogares fueron destruidos. En algunos casos se les ofrecían casas, en otros, simplemente se les asignaba un pedazo de tierra donde pudieran construir sus barracas. Las asociaciones de residentes de Babilônia y de Chapéu Mangueira ocasionalmente lograron impedir los desalojos demostrando que la gente había residido en esas casas durante varios años; sin embargo, la estrategia más poderosa nada tenía que ver con los residentes de las favelas. El señor Lúcio describe cómo algunas casas corrían el riesgo de ser eliminadas debido a que en el cerro, por encima de las casas, había una enorme roca que podía caer y aplastar cualquier cosa en su camino:

Fui a hablar con los residentes del barrio de Leme en el asfalto [Leme se sitúa por debajo de Chapéu Mangueira, bajando la cuesta]. Les dije que los residentes de las pequeñas casas de Chapéu Mangueira podrían salir corriendo si la piedra empezara a rodar, pero la situación era diferente para los residentes de los edificios de apartamentos de Leme. Los ricos de Leme hicieron un gran alboroto con esto y la piedra fue removida, en lugar de nuestra comunidad.

Por lo tanto, fue solamente a raíz del miedo de los residentes del *asfalto* que el municipio tomó medidas. Si el problema hubiese involucrado solo a los residentes de las favelas, la solución habría sido el desalojo de la gente, en lugar de quitar la piedra.

La FAFEG a veces tenía éxito en la movilización contra los desalojos: 52 favelas lograron permanecer en las zonas de clase media y alta (Burgos 2006, 37). No obstante, a principios de 1970 se habían destruido 62 favelas y fueron desalojadas por la fuerza 175 000 personas (Perlman 1979, 202). Así, aunque los residentes de las favelas eran, en cierta medida, capaces de cuestionar las políticas de desalojos a las que estaban sujetos, su posición de jerarquía social tuvo mayor influencia en la orientación de las políticas urbanas brasileñas. La respuesta del Estado a la situación de las favelas —la exclusión y los intentos de civilizar y educar a la gente— se justificaba como apropiada al suponer que el grupo social en cuestión no era capaz de tomar sus propias decisiones o de controlar a sus miembros. De esta forma, el proceso de urbanización y construcción de la ciudad se logró desalojando a los pobres hacia sus afueras.

Construyendo las favelas

Las favelas de Chapéu Mangueira y Babilônia recibieron a la mayor parte de sus residentes provenientes de los estados de Minas Gerais y Bahía. Ellos vinieron a trabajar en las obras de construcción de la ciudad en crecimiento. El señor Lúcio, el primer presidente del comité de residentes de Chapéu Mangueira, además de uno de sus fundadores en 1957, me contó sobre los primeros momentos de la movilización de los residentes:

La infraestructura era casi inexistente. Los caminos de tierra se convertían en ríos de barro cuando llovía; no había electricidad ni abastecimiento de agua o gestión de las aguas residuales. Las casas eran barracas construidas con palos de bambú y barro, con techos de latas. Las comunidades estaban bajo el estricto control del ejército: el tamaño de las casas no podía exceder de diez metros cuadrados. Quisimos cuestionar estas terribles condiciones de vida y comenzamos a organizarnos para fortalecernos.

A inicios de la década de 1970, las asociaciones de residentes de las favelas fueron reconocidas como entidades independientes, con sus representantes elegidos por los propios habitantes (McCann 2006, 152). Para ese momento, en Chapéu Mangueira la asociación de residentes ya era muy activa: mejorando las condiciones de vida, construyendo el primer centro de salud y una sencilla red de saneamiento. Babilônia, al contrario, estaba todavía bajo el estricto control del ejército, por lo que ni siquiera podían arreglar una ventana sin pedirles permiso. Las diferencias en los derechos de los residentes de las dos favelas fueron atribuidas a los distintos papeles que los presidentes de la AACM y de la AMB tenían frente a los Gobiernos del estado y de la ciudad: el presidente de la AACM hacía, más activa y críticamente, campaña para la mejora de la infraestructura, mientras que el presidente de la AMB favorecía y concordaba con el estricto control militar. Durante la década de 1980, los residentes de Babilônia consiguieron un poco de libertad con la democratización del Estado, que trajo consigo el ideal de la ciudadanía universal de los derechos de los ciudadanos en la ciudad (Carvalho et al. 1998, 17). Cuando la dictadura

llegó a su fin, se les permitió construir casas con ladrillos en lugar de bambú y barro, repararlas y también comprarlas, alquilarlas o venderlas.

Hacia el final de la década de 1970, la teoría de la marginalidad comenzó a ser impugnada y surgieron nuevas perspectivas. Las políticas de la ciudad empezaron a considerar la urbanización de las favelas en lugar promover traslados forzosos, pues notaron que el desplazamiento por la fuerza de todos los residentes de las favelas sería difícil (IBAM 2002, 7). El gobierno de Leonel Brizola (1983-1987 y 1991-1995) creó políticas sociales especiales para las favelas, con el objetivo de mejorar su infraestructura. Mutirão 1985 fue un proyecto de infraestructura financiado por el municipio, enfocado al drenaje y la electricidad. Sin embargo, desde el punto de vista de las asociaciones de residentes, el proyecto no fue de mucha utilidad:

Todo lo que hay de importante aquí en la comunidad, nosotros mismos lo hemos construido. Si hubiéramos esperado a que los políticos vinieran, la comunidad no tendría ni siquiera la mitad de la infraestructura que tiene ahora. Mutirão 1985 solo se apoyó en las mismas estructuras que ya habíamos construido con nuestros propios esfuerzos: ellos pusieron tubos de agua donde ya existían anteriormente (Expresidente de la AACM).¹³

En 1994, Río de Janeiro promovió un programa de urbanización antes que otras ciudades brasileñas, Favela-Bairro, basado en la idea innovadora de “reconocer la importancia social, cultural y política de las favelas de la ciudad, considerando estas aglomeraciones como parte de la estructura urbana y tratando de integrarlas a las partes oficiales de la ciudad” (Lara 2014, 251). La primera fase de Favela-Bairro (1994-1997) tuvo un énfasis multisectorial e integrado, centrado en la accesibilidad, la construcción de calles y espacios públicos, la reubicación de un número menor de familias y la construcción

¹³ Para proteger la identidad de los participantes de la investigación, en este artículo no revelo sus nombres y géneros, con la excepción de Seu Lúcio, quien es una persona pública y ya ha sido entrevistado en documentales sobre el desarrollo de Chapéu Mangueira y Babilônia.

de nuevas viviendas dentro de la misma comunidad (Lara 2014, 254). Favela-Bairro llegó en 2001 a Chapéu Mangueira y en 2003 a Babilônia. Nuevamente, en AMB y en AACM fueron muy críticos de su significado:

Era una broma: ponían cemento sobre el cemento, pero no hacían nada por las calles que no tenían pavimentación. Las obras nunca fueron concluidas y los residentes tuvieron que finalizar el sistema de drenaje (Expresidente de la AACM).

La construcción del depósito de agua se dejó a medias. Ahora el depósito sirve como un lugar de reproducción para los mosquitos —como pudimos ver con la epidemia de dengue del año pasado— (Expresidente de la AMB).

La construcción de nuevos edificios se inició, pero nunca los acabaron. Solo terminaron los primeros pisos de edificios de cuatro pisos. Debido a esto, las personas que estaban destinadas a ocupar los edificios, porque sus viviendas estaban en los precipicios peligrosos, nunca llegaron a mudarse allí. Además, los edificios fueron invadidos rápidamente por personas ajenas a la comunidad. Las obras tuvieron un presupuesto de siete millones de reales, pero solo 1.5 millones de reales fueron utilizados. Todavía no se sabe a dónde fue a parar el dinero y por qué las obras no se concluyeron (Exvicepresidente de la AMB).

Dado lo anterior, entre las asociaciones de residentes se observa un sentimiento general de que su propia iniciativa es vital para conseguir cualquier servicio para las favelas, incluidos los servicios sociales básicos y las obras de infraestructura. Los procesos informales han sido esenciales para construir el espacio urbano de la favela. Los residentes participan activamente en la construcción de su barrio, de una manera muy diferente a la de los residentes de las partes formales de la ciudad. Babilônia y Chapéu Mangueira fueron construidas esencialmente por sus residentes, y las asociaciones de vecinos tuvieron un papel destacado en este proceso. Por lo tanto, los derechos de colaborador son centrales en sus demandas.

En 2001, los movimientos sociales obtuvieron un gran triunfo cuando el Estatuto de la Ciudad se insertó en la Constitución de Brasil. La ley estipula que la política urbana tiene, entre otros objetivos, garantizar el derecho a la tierra urbana, a la habitación y a la infraestructura urbana, y define que los planes, programas y proyectos de desarrollo urbano tienen que ser administrados democráticamente, a través de la participación de la población y las asociaciones representativas (Ley núm. 10.257 de 2011, capítulo I, artículo 2.º). Las alcaldías fueron las responsables de controlar el proceso de desarrollo urbano por medio de la formulación de políticas territoriales y de uso del suelo. Todas las municipalidades brasileñas con más de veinte mil residentes tenían que aprobar sus planes rectores a finales de 2006 (Fernandes 2007a, 213). El diseño participativo de los planes rectores está basado en la ratificación pública (y no en la deliberación con enfoque ascendente o en la distribución del poder). De este modo, es menos deliberativo, pero su cumplimiento es un requisito obligatorio (Avritzer 2009, 141). No obstante, como argumentan Santos et al. (2013), frecuentemente la visión de planificación urbana predominante en el momento consigue distorsionar las alternativas legales deformándolas para ajustarlas a su visión. En el caso de Río de Janeiro, el enfoque predominante es la planificación emprendedora, orientada a promover los intereses propios del capital privado (Santos et al. 2013, 18).

El siguiente programa significativo, esta vez a escala nacional, fue el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), iniciado por el Gobierno federal durante el segundo mandato del presidente Lula. En junio de 2008 hubo discusiones sobre la posibilidad de que el PAC también se aplicara en Babilônia y Chapéu Mangueira. Benedita da Silva¹⁴ llegó a las comunidades para ver las posibilidades reales de intervención, y aseguraba a los residentes que esta sería una nueva era, una “era de sociedades”, haciendo referencia sobre todo a las consultas más exhaustivas con las asociaciones de residentes. Un expresidente de la AACM que la acompañaba fue rápido para responder con un argumento contrario:

¹⁴ Política del PT, nacida en Chapéu Mangueira. Ella fue la primera mujer negra en ser elegida para el senado y también fue gobernadora de Río de Janeiro entre 2002 y 2003.

No queremos ser más “socios”. Queremos que el Estado cumpla con su responsabilidad aquí. No quiero tener garis comunitarios [una barredora proporcionada por la comunidad]; queremos que la Comlurb [Companhia Municipal de Limpeza Urbana, la empresa de saneamiento de Río de Janeiro] venga aquí. Queremos que todos los ciudadanos tengan los mismos servicios. Ahora la asociación de residentes está trabajando siempre como mediador, y si trabajamos con socios, otras partes siempre tendrán una porción de los fondos. En las asociaciones de vecinos estamos trabajando duro y sin ningún tipo de compensación.

Este expresidente había sido una figura central para la movilización de los residentes en muchas de las iniciativas de construcción en Chapéu Mangueira, y también representaba a la favela frente al Gobierno de la ciudad. Para él, la oferta del Estado para mejorar la favela trabajando junto con la asociación de residentes ya no era suficiente. Ahora estaba haciendo campaña para obtener la plena ciudadanía de los residentes de las favelas, cuestionando la división espacial entre las favelas y el asfalto. ¿Por qué las personas del *morro* tienen derecho únicamente a “sociedades”, mientras que, a la gente del asfalto el Estado les ofrece múltiples servicios? Su discurso se enfocaba más en los derechos basados en la ley, argumentando que los residentes, como ciudadanos de la República del Brasil, tenían el derecho de recibir lo que estaba estipulado en la Constitución. También cuestionó la idea neoliberal que sostiene que los residentes de las favelas, por su condición espacial, tendrían que participar en la provisión de los servicios en su comunidad.

Desde que concluí mi trabajo de campo, se han producido novedades en cuanto a la participación del Estado en Babilônia y Chapéu Mangueira. Desde 2011, las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) se han instalado en las favelas. La UPP se presenta con una lógica supuestamente contraria a las medidas anteriores, que se centraban en la fuerza y la opresión; UPP es un “concepto que va más allá del enfoque de policía comunitaria y tiene su estrategia basada en la asociación entre los residentes locales y las fuerzas del orden” (UPP 2014). No obstante, la aplicación de este nuevo diseño de policía ha sido bastante

controversial, y las UPP perdieron buena parte de su credibilidad frente a los residentes de las favelas debido a sus prácticas violentas (Ashcroft 2014).

Al mismo tiempo, los preparativos para los grandes eventos de la ciudad (la Copa Mundial de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016) se tradujeron en el incremento de la marginación de los residentes de las favelas. Durante la administración del alcalde Eduardo Paes (2009-2016), 65 000 personas fueron desalojadas (Azevedo y Faulhaber 2015). Cada vez más, el patrón de desarrollo urbano es descrito como una “máquina de crecimiento urbano”. Por ejemplo, en su discusión sobre el proyecto del puerto de Río de Janeiro, llamado Puerto Maravilla, Cardoso (2013, 95) sostiene que para los residentes de Morro da Providencia, el legado social de los Juegos Olímpicos se ha manifestado en la violación de sus derechos y en la expropiación de suelo urbano.

Independientemente de cómo y quién construye las favelas, queda la duda sobre quién va a beneficiarse en último término de las obras. Los efectos más graves de la visión emprendedora son el aumento del costo de vida y la segregación de la población más pobre en la periferia, sea debido a la gentrificación o por desalojos directos. Los residentes de las áreas que se tornan en objetivos de los planificadores emprendedores sufren violaciones directas contra su derecho a la habitación y a la ciudad, lo cual transgrede los principios de la función social y de la gestión democrática de la ciudad, tal y como están estipulados en el Estatuto de la Ciudad (Santos et al. 2013, 15).

Comprando a los favelados

El pesimismo con respecto al clientelismo político del país era muy común en Babilônia y en Chapéu Mangueira: *Durante el año electoral, los políticos vienen a las favelas para dar sus promesas, y después de las elecciones, todo sigue igual* (Presidente de la AACM). El pesimismo no es sorprendente, dado que el sistema político brasileño se ha descrito como *estadania*¹⁵ (Carvalho 2001), una

¹⁵ De las palabras *Estado* y *ciudadanía*.

situación donde el Estado funciona como un elemento paternalista que protege a los grupos económicos, distribuyendo los derechos de la población y el empleo en forma desequilibrada y parcial con el fin de mantener la jerarquía en la estructura socioeconómica, política y administrativa. El Estado no es un poder público para garantizar los derechos de todos, sino una red paternalista donde los bienes públicos se comparten de forma privada.

Muchos residentes de las favelas veían en las pequeñas donaciones privadas de algunos políticos (por ejemplo, la compra de una silla de ruedas para un residente discapacitado o el suministro de bocado para el jardín de niños) la razón de ser de los políticos. Por ejemplo, según un profesor del jardín de niños en Babilônia, los buenos políticos son los que dan dinero y se comprometen personalmente a apoyar a Babilônia o a Chapéu Mangueira. Un expresidente de la AMB coincidió: *Teresa Bergher¹⁶ era una buena política porque dio fondos para construir el jardín de niños y pagó los salarios de los maestros y el almuerzo para los niños durante cinco meses.*

Ellos explicaron que el partido de un político no es importante, sino más bien la persona en sí misma. El expresidente de la AMB señaló que el apoyo a un partido específico era casi como ser fanático del fútbol: *Si usted se convierte en un fanático, al igual que algunos aficionados al fútbol, usted no puede ver los errores en ese partido. Eso es peligroso. Yo nunca he visto partidos, solo las personas.*

En el sistema político del municipio, las asociaciones de residentes representan formalmente a los habitantes de las favelas. A través de esta función, se convierten en una pieza clave en el rompecabezas político: como representantes, son el enlace entre el poder público y las favelas, lo que también las convierte potencialmente en beneficiarias de los favores de los políticos a cambio de apoyo. No hay una regla clara en torno a cómo este papel debería interpretarse al interior de las asociaciones de residentes. Muchos miembros trataron de trabajar dentro del sistema paternalista y utilizar su agencia para, de acuerdo con su lógica interna, obtener bienes para sus comunidades en lugar de cuestionar de manera más general al sistema político. Por ejemplo, un miembro de

¹⁶ Una política del Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) y miembro del consejo de la ciudad de Río de Janeiro.

la AMB sencillamente interpretó las campañas electorales como oportunidades para obtener de los candidatos todos los beneficios posibles para las favelas: *Durante la próxima campaña podría haber una oportunidad de concluir la construcción del tanque de agua. AMB recibió una carta del alcalde diciendo que continuarían la obra, y que los costos no importarían.*

Bayat y Biekaart argumentan que a menudo los residentes de los barrios desfavorecidos tienden a buscar la asistencia de oficiales, líderes locales u otras personas consideradas de confianza a cambio de sus votos. Esto debido a que en ocasiones la movilización es percibida como inútil o como un proceso largo y difícil. Además, la operación simultánea de las ONG, los partidos políticos, los líderes locales y otros grupos de interés en las comunidades puede complicar la creación de cohesión en la comunidad y la formación de redes horizontales (Bayat y Biekaart 2009, 820-821). Por su parte, Roberto DaMatta (2004, 1997) afirma que esta es una forma común de actuar en la sociedad brasileña, basada en las relaciones y las jerarquías, no en individuos con derechos. Debido al enfoque relacional de la sociedad brasileña, muchos podrían ver al sistema paternalista como el más natural y apropiado, por lo que se espera que los políticos y los funcionarios públicos favorezcan a sus familias y a sus amigos.

No obstante, no todos en Babilônia y en Chapéu Mangueira están de acuerdo con las prácticas paternalistas. Muchos miembros prominentes de las asociaciones de residentes rechazaron el clientelismo, apuntando que es un error intentar depender de “ganancias rápidas” del sistema, ya que eso implica que los verdaderos cambios rara vez se materialicen. Así lo expresó un exvicepresidente de la AMB y lo sugirió un expresidente de la AACM:

La gente piensa que están siendo inteligentes sacando provecho durante el año electoral, pero en última instancia eso nunca funciona. Durante sus mandatos, los políticos roban todo lo que pueden, y durante el año electoral invierten una pequeña parte en la campaña y en proyectos en las favelas, contratando gente para trabajar para ellos. De esta manera, los políticos reciben mucha visibilidad, pero los beneficios para los residentes de las favelas son muy insignificantes y, sobre todo, la estructura del poder no cambia y el favelado permanece en su papel marginado (Exvicepresidente de la AMB).

Nosotros, nuestra generación, nos consideramos los románticos del movimiento comunitario, porque nunca aceptamos las propinas [sobornos] de los políticos, ningún tipo de limosna. Mi gestión y yo nunca lo aceptamos, porque desde el momento en que se aceptan, la comunidad está vendida (Expresidente de la AACM).

Estos exmiembros de la AMB y de la AACM, radicales en sus puntos de vista, ofrecieron un análisis alternativo de la estructura de la política brasileña. Ellos deseaban cambiar el papel de los residentes de las favelas en la sociedad y, sobre todo, la forma en la que el habitante de la favela es visto por la sociedad, transformarlos en ciudadanos verdaderos, con derecho a la ciudadanía sustantiva. Sin embargo, a pesar de tener una considerable influencia en las favelas, no tuvieron éxito en convencer a los actuales dirigentes de las asociaciones de la necesidad de adoptar una visión más radical frente al sistema político brasileño. Por lo tanto, en el caso de la AMB y de la AACM, los miembros de las asociaciones de residentes no compartían la misma visión sobre la importancia de alcanzar una transformación política más general. Sus posiciones con respecto a esta cuestión permanecían internamente incoherentes, con unos favorables a la búsqueda de asistencia, y otros partidarios de la movilización más transgresiva.

Guerra en la favela

En la década de 1980 se presentó un fenómeno que afectó profundamente a las favelas de Río de Janeiro: el crimen organizado y el tráfico de drogas poco a poco se hicieron más presentes. Debido a sus características territoriales, las favelas se convirtieron en lugares propicios para el embalaje y distribución de cocaína. El tráfico de drogas en las favelas no era un fenómeno nuevo, pero a medida que se intensificaba, las organizaciones criminales comenzaron a disputarse el control de ciertas áreas, y su presencia se hizo más visible para aquellos que no participaban en dicha actividad. Como lo expresó un expresidente de la AMB:

El tráfico de drogas existía previamente en la comunidad, pero era muy diferente cuando lo organizaban los jóvenes de nuestra comunidad. Ellos nos respetaban porque eran nuestros hijos y no quisieron apuntar sus armas hacia nosotros. A mediados de los años noventa mataron al líder del cv [Comando Vermelho]¹⁷ en Babilônia, y trajeron aquí a un nuevo jefe de fuera de la Babilônia. Todo cambió.

En muchos aspectos, y en cierto grado, las organizaciones de traficantes de drogas se han convertido en Estados paralelos en las favelas, donde el Estado formal está en buena medida ausente, pues su prestación de servicios sociales es limitada, y los servicios de seguridad, inexistentes. En Babilônia y en Chapéu Mangueira las bandas de drogas cobran impuestos a los comerciantes, organizan el servicio de taxi en moto y resuelven las disputas entre los residentes. Es imposible iniciar cualquier negocio, trabajo de construcción o un proyecto social sin antes obtener el permiso de los narcotraficantes. Paradójicamente, dichas bandas también aportan seguridad en las favelas. Puede ser que no vacilen en matar a sus rivales pero, por otro lado, no aceptan cualquier otro tipo de delitos, pues no quieren que la policía entre a la favela. Por lo tanto, los robos, las violaciones y otras actividades criminales están estrictamente prohibidas, y si ocurren, los traficantes de drogas castigan duramente a los perpetradores —algunos residentes incluso me dijeron que ahora pueden dormir tranquilamente con sus ventanas y sus puertas abiertas—. Las pandillas también resuelven conflictos entre los residentes, por lo que era común intimidar a un vecino con la amenaza de quejarse con la *boca de fumo* (el lugar donde se venden las drogas en la favela) en caso de desacuerdo. Incluso, algu-

¹⁷ Comando Vermelho (Comando Rojo) es una de las organizaciones criminales más antiguas de Río de Janeiro. Tiene su origen en la década de 1970, cuando metían a los presos políticos en las mismas prisiones con otros delincuentes. Durante mucho tiempo, especialmente en la década de 1990, fue la organización criminal más fuerte de Río de Janeiro, la que controlaba el tráfico de drogas en la ciudad; sin embargo, en la década de 2000 se debilitó considerablemente cuando muchos de sus líderes fueron asesinados o encarcelados, entonces otras organizaciones criminales se hicieron más fuertes.

nos residentes alabaron a los traficantes de droga por su “trabajo social”, pues en algunos casos financiaban la guardería o construían mejores viviendas para la gente de la favela. Un jefe local de la droga fue especialmente apreciado, pues otorgó nuevos departamentos para las personas que vivían en los precipicios más peligrosos.

De manera que, las bandas de drogas podían ofrecer cierta seguridad, pero también creaban una mayor incertidumbre y marginalización para todos los residentes de las favelas; así, en Río de Janeiro, la violencia en las favelas se convirtió en una excusa más para reprimir a los que allí viven. Los ciudadanos de clase alta y media en Río comenzaron a exigir que la policía tomara medidas contra lo que ellos interpretaban como una creciente amenaza para su seguridad. La vieja yuxtaposición de *morro* y *asfalto* resurgió rápidamente pero en una nueva forma, pues ahora las favelas se veían como espacios para el tráfico de drogas y sus residentes eran vistos como violentos traficantes de drogas. Así comenzó a desarrollarse la idea de un verdadero *apartheid* socioespacial entre las favelas y el resto de la ciudad (Souza 2000; Valladares 2005, 143; Fernandes 2007b).

En Babilônia y en Chapéu Mangueira la violencia empeoró durante mi trabajo de campo, cuando la organización criminal rival ADA (Amigos dos Amigos)¹⁸ estaba tratando de conseguir apoyo en las favelas. A principios de 2008, la situación culminó en enfrentamientos violentos entre las dos bandas de narcotraficantes y la policía, lo cual perturbó profundamente a los residentes de las favelas. La policía hacía entradas mediáticas a las comunidades, atacándolas con perros y vehículos blindados o apareciendo a las 7:30 de la mañana, cuando las calles estaban llenas de niños que iban a la escuela, apuntando sus ametralladoras a todo el mundo. También solían volar en helicóptero sobre las favelas, descendiendo tan cerca que los techos de las casas casi volaban. Los residentes de las comunidades comentaban que la policía se empeñó en esas acciones solamente para alardear:

¹⁸ Amigos dos Amigos (Amigos de los Amigos) nació en la década de 1990 en las cárceles de Río de Janeiro, cuando su fundador fue expulsado del Comando Vermelho después de haber matado al líder de la banda en ese momento.

La policía solo quiere hacer bonitos titulares en los periódicos, para mostrar a la élite cómo castigan a los residentes de las favelas. Si quisieran hacer algo por la violencia, que vengan por la noche, cuando el tiroteo entre ADA y CV está pasando. En vez de eso, vienen por la mañana para asustar a los niños y a los residentes que respetan las leyes (Residente, 22 años, Babilônia).

La AMB tuvo una reunión de emergencia, durante la cual muchos residentes se quejaron por el saqueo de sus casas mientras estaban ausentes:

La policía rompió las cerraduras de la puerta y buscaron por toda la casa, tirando todo al suelo y dejándola hecha un desastre. Tenía algo de dinero en mi armario y desapareció (Exmiembro de la AMB).

Acción del Estado: produciendo aún más violencia

Las medidas tomadas por el Estado en respuesta a la violencia han ignorado por completo a las propias víctimas de la violencia. Río de Janeiro, a juzgar por su estadística de homicidios,¹⁹ es una ciudad extremadamente violenta y diariamente aparecen referencias a homicidios en los periódicos. Lo que a menudo no se menciona es que los que mueren son en su mayoría jóvenes pobres, negros y sin educación, de las favelas o de la periferia de la ciudad. Este segmento de la población no se beneficia de la protección policiaca, al contrario. De hecho, una significativa proporción de los homicidios es cometida por la propia policía. Por ejemplo, en 2008, la policía mató a 604 personas en Río de Janeiro, de un total de 2 630 muertes violentas (ISP 2008), lo que significa que la policía fue responsable del 23 % de los homicidios en la ciudad. Teresa Caldeira (2000, 110-111, 160) cita una serie de informes que muestran que la Policía Militar que patrulla en las calles es responsable de muchas ejecuciones inmediatas; y la Policía Civil, responsable de las investigaciones, emplea con

¹⁹ Disponible en la página de internet del Instituto de Segurança Pública (<http://www.isp.rj.gov.br/>).

frecuencia la tortura contra los presuntos delincuentes. De acuerdo con Leeds (1996, 65), los oficiales de policía y funcionarios judiciales de alto rango comentan que “rara vez hay delitos cometidos sin el permiso de la policía [...] cuando hablamos sobre el crimen organizado, en realidad estamos hablando de la policía [y de que] el mayor problema en Brasil es la impunidad”. No es de extrañar que Silva y Leite (2007, 39) expliquen que, en su investigación, de 150 residentes de favelas, solamente uno había tenido experiencias positivas con la policía.

Por su parte, Goldstein (2003, 188) describe cómo sus informantes utilizaban los términos “criminales”, “policía” y “policía-criminales” indiscriminadamente y de manera intercambiable.²⁰ Ella sugiere que esto demuestra cuan plenamente los residentes de las favelas reconocen la disfuncionalidad del sistema de justicia: nadie sabe ya quién es criminal, quién es policía y quiénes son ambos a la vez. En Babilônia y Chapéu Mangueira era del conocimiento de todos los habitantes que las bandas de narcotraficantes sobornaban a la policía, y que esta se ponía del lado de quien pagaba más. Por lo tanto, de nada servía la policía para los moradores, al contrario, solo contribuía a aumentar aún más la sensación de inseguridad y la marginación de los residentes de las favelas.

Muchas personas de la clase media y alta apoyan firmemente las medidas opresivas contra las favelas, como se demostró en las reacciones que provocó la película *Tropa de elite* (Padilha 2007), una narración semificcional del actuar de la Escuadra Especial de la Operación Policial de la Policía Militar de Río de Janeiro. La película muestra la extrema brutalidad policiaca y la enorme impunidad que priva en las favelas y, a pesar de que sus escenas sorprendieron a muchos, numerosos cariocas de clases acomodadas aplaudieron esas acciones: *Esta es la manera de tratar a esa gente*. Una de las participantes de la investigación, que vivía en el área de *asfalto* de la zona sur, me preguntó: ¿Por

²⁰ Además, hay otros grupos violentos que controlan los barrios de la ciudad; por ejemplo, “las milicias” en la zona oeste. Se componen principalmente de agentes de policía o de hombres expulsados de la policía y del ejército, dedicados a la extorsión de los residentes, a quienes obligan a comprar sus supuestos servicios de seguridad.

qué estas personas viven en favelas si no quieren que las maten? Cuando las organizaciones de derechos humanos hicieron una campaña por el respeto de los derechos de los residentes de las favelas, las personas con una mejor situación social reclamaron que eso era “mimar a los criminales”. Setha M. Low (2001) ha notado que los discursos sobre la violencia parecen esconder con frecuencia otras preocupaciones, a fin de mantener las distinciones de clase, raza, etnia o género, y precisamente este parece ser el caso en Río de Janeiro: las clases medias y altas utilizan el discurso sobre la violencia para proteger sus propias posiciones y reproducir el orden social y las jerarquías. Low (2001) describe cómo las estrategias de exclusión basadas en la posición social y la exclusión espacial en Estados Unidos, entre ellas la colocación de muros, puertas y guardias de seguridad, producen un paisaje que codifica las relaciones de clase y la segregación residencial (raza/clase/etnia/género) de manera más permanente en el entorno construido. Este paisaje está, a su vez, legitimado por un discurso sobre el miedo a la delincuencia y la violencia. En el caso de la zona sur, las favelas y los barrios de clase alta todavía coexisten lado a lado, lo que impide la exclusión física completa; no obstante, la separación se logra a través de la exclusión social, política y económica de los espacios de las favelas.

Un proyecto de investigación coordinado por Maria Rezende de Carvalho et al. (1998) llegó a la conclusión de que la mayor parte de los residentes de las favelas de Río de Janeiro no se veían a sí mismos como diferentes de los otros grupos de la población de la ciudad. Por otro lado, reconocen que, no obstante, su lugar de residencia es utilizado para justificar políticas discriminatorias, como las redadas policíacas en las favelas, las violaciones de los derechos humanos, la ausencia de derechos sociales y la discriminación en las solicitudes de trabajo. Mientras tanto, está ampliamente reconocido que las favelas de Río de Janeiro son muy diversas tanto geográfica como social, cultural y económicamente, pero a menudo el mundo plural de las diferentes favelas es reducido a una sola categoría (Valladares 2005, 151; Zaluar y Alvito 2006): el mundo de los favelados y su cultura supuestamente marginal. Para los políticos, el “Fin a la violencia y al tráfico de drogas” y la “Guerra contra las drogas” han sido lemas eficientes para ganar votos, y constituye una práctica común implementar redadas policíacas mediatizadas en las favelas poco antes de las elecciones.

Agencia en la zona de guerra

La legitimidad de las bandas de narcotraficantes en las favelas se ha analizado en términos de la ausencia del Estado en las comunidades (Leeds 1996; Burgos 2006; McCann 2006), pero yo observé que la mayoría de los habitantes de las favelas ni siquiera consideró la posibilidad de que la policía pudiera protegerlos. Casi por definición, la policía es calificada como ajena y hostil a los residentes de las favelas, lo cual es comprensible en el contexto actual. Por lo tanto, otros sistemas de control parecían perfectamente naturales. Toda la gente busca una sensación de seguridad en las agrupaciones sociales —ya sean establecidas por el Estado o por algún grupo social con una lógica espacial diferente— (Migdal 2004, 14-15). En las favelas, las bandas cuestionan al Estado con la presentación de un código alternativo, con mapas mentales y sus propios puntos de control para las personas que viven en el área. Para los residentes de las favelas, la situación es muy desafiante, y como nota Migdal, a la gente le gusta definir sus mapas mentales como permanentes, cuando en realidad son muy propensos a cambios. Los residentes de las favelas tienen que estar preparados para rehacer el mapa del terreno social en cualquier momento a fin de encontrar seguridad en situaciones difíciles.

En el contexto de la discriminación estructural, unirse a las bandas de narcotraficantes puede considerarse como una forma de resistencia a las estructuras de poder existentes en la sociedad. A pesar de que son conscientes de los peligros que esto implica, para muchos jóvenes, las bandas de drogas ofrecen una manera más factible de lograr la riqueza y el poder que los medios legales, ya que estos significarían largas horas de trabajo mal pagado. A este rechazo de la estructura dominante, Castells (2000, 8-9) lo ha llamado la “identidad de resistencia” o “la exclusión de los excluidores de los excluidos”. En ciertas ciudades, como en Chicago, Ciudad del Cabo y Río de Janeiro, las bandas de drogas institucionalizadas han nacido de la urbanización y la pobreza, así como de los Estados debilitados, de la discriminación racial y étnica y de la marginación social. Estas son ciudades que se han convertido en pasarelas importantes para el tráfico de drogas y en las que estas pueden venderse en espacios fácilmente defendibles por las bandas, como las favelas. En todas

estas ciudades, las bandas también ofrecen una oportunidad para la juventud local de encontrar en ellas una familia, un trabajo y una identidad, así como nuevas emociones (Hagedorn 2008, 3-6; Misse 2010). Por lo tanto, esta estrategia puede considerarse como de contención altamente transgresiva, ya que se opone plenamente a la trayectoria ortodoxa y aceptada del desarrollo promovida por los actores más poderosos.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que esta estrategia produce con frecuencia resultados adversos para los residentes de las favelas, puesto que las medidas represivas por parte del Estado aumentan y los habitantes son aún más marginalizados. Como notan Bayat y Biekaart (2009, 821), aunque es usual que las bandas también luchen contra la exclusión, al final permanecen en un ciclo de violencia, porque es violencia lo que resulta: contra las élites, los políticos o la policía, pero sobre todo contra ellos mismos. Además, considerar al tráfico de drogas y a las pandillas como una forma efectiva de resistencia difícilmente puede hacer justicia a los sentimientos de muchos otros habitantes de las favelas. La agencia de los residentes de las favelas está fuertemente limitada en un territorio que se ha convertido en espacio de conflicto, con diferentes grupos que luchan por su control. Los residentes no sabían si serían capaces de vivir en sus hogares en los próximos años o si la comunidad se convertiría en una zona de guerra total. Como lo expresó un exvicepresidente de la AMB:

Aquí ha sido tranquilo durante tanto tiempo. Hemos incluso tenido mucho orgullo de ser una comunidad tranquila. Me pregunto si todo va a cambiar de pronto, y nuestras comunidades van a seguir el camino de tantas otras, cada vez más y más violentas. Amo a mi comunidad, pero al mismo tiempo estoy considerando la opción de mudarme.

En esta situación, el papel de la asociación de residentes se complica mucho. Cuando un presidente de la AACM llamó a la policía para quejarse de una incursión frente al jardín de niños, la respuesta fue que estaba *protegiendo a las bandas de narcotraficantes. Si uno habla con un criminal, la gente pensará que estás aliado con los criminales. Si uno habla con la policía, la gente pensará que estás aliado con la policía*, se quejó. Un presidente de la AMB me dijo que regular-

mente recibe llamadas telefónicas, tanto de CV como de ADA, conminándolo a ponerse de su lado. Tampoco cooperaría con la policía, porque la considera corrupta: si alguien les da información, sin duda que algunos oficiales proporcionarían a las bandas de narcotraficantes el nombre del informante.

Los presidentes de las asociaciones estaban preocupados y por una buena razón: durante la década de 1990, ser presidente de una asociación de residentes de las favelas se convirtió en uno de los cargos más peligrosos de Río de Janeiro. McCann (2006, 157) cita una investigación según la cual, entre 1992 y 2001, alrededor de cien presidentes de las asociaciones de residentes de las favelas fueron asesinados, y otros cien expulsados de sus comunidades. De acuerdo con un expresidente de la AACM: *El presidente no tiene ninguna otra opción que tener un montón de jogo de cintura [astucia/inteligencia] y la esperanza de que ninguna de las personas involucradas lo mate. Llevarse bien con todo el mundo es de vital importancia.*

Acercarse demasiado a cualquier banda de narcotraficantes también era peligroso, porque en el caso de que una banda rival realice una invasión exitosa, el nuevo “dueño” de la comunidad no sería favorable a una persona que se hubiera aliado con sus enemigos. La estrecha cooperación con cualquiera de las bandas de drogas también expondría al presidente a las críticas por parte del Estado y de la policía. Esta situación hace el trabajo de las asociaciones de residentes cada vez más difícil. Por un lado, como representantes de la favela, necesitan consultar y hablar con todos los actores relevantes en la comunidad, pero, por el otro, los diferentes actores con presencia en la comunidad (policía, milicias, bandas de narcotraficantes) no se consideran legítimos entre sí y prohíben cualquier interacción con la oposición.

Conclusión

En este capítulo he mostrado cómo las dos clases de ciudadanía y la marginalización de los residentes de las favelas surgen del profundo sistema de jerarquía estructural y de la visión urbana neoliberal que incluye la mercantilización de la ciudad. Varios mecanismos estructurales contribuyen a mantener la separación

de clases y prevenir el ascenso social de las clases más bajas de la zona sur de Río de Janeiro. Las medidas represivas y humillantes a las que son sometidos los residentes de las favelas se han legitimado a través de discursos sobre la violencia y la marginalidad de quienes viven en las favelas. Aunque se supone que la violencia es simplemente una consecuencia del tráfico de drogas y que las favelas están consideradas como lugares donde ocurre dicho tráfico, sus residentes son vistos como traficantes y criminales, o al menos como cómplices o protectores de los criminales. Estos discursos construyen a las favelas a manera de espacios de violencia y ocio, lo que contribuye a aumentar aún más la precariedad de sus residentes. También son discursos utilizados para justificar los desalojos que liberan los terrenos para fines más rentables. A pesar de que quienes realmente sufren la violencia son los segmentos más pobres de la sociedad, muy pocas veces sus voces son escuchadas en la planeación de las soluciones. El Estado no considera a los residentes de las favelas como sujetos capaces de analizar su propia situación y de sugerir respuestas adecuadas en términos de prácticas y políticas que pudieran aumentar la seguridad y el acceso de los ciudadanos a la ciudad. En lugar de ello, la respuesta del Estado ha sido paternalista y violenta, lo que incrementa la escalada de la violencia y arrincona aún más a los jóvenes de las favelas, quienes sucesivamente son empujados a utilizar estrategias de contención altamente transgresivas, que rechazan completamente la estructura dominante de la sociedad.

Las acciones de las asociaciones de residentes de las favelas han contribuido tanto a reproducir como a desafiar las estructuras de poder en la sociedad. La percepción sobre cuál es la mejor forma de contribuir al desarrollo de las favelas varía mucho dependiendo de la persona y su visión del mundo. Las diferentes estrategias de movilización utilizadas por los miembros de las asociaciones de residentes no conforman un frente unido de resistencia ni concuerdan con el sistema actual, sino que trabajan desarticuladamente en diferentes direcciones. En el pasado, los residentes simplemente intentaban contribuir a las mejoras de su comunidad con su trabajo, mediante la construcción de la zona por sí mismos y luego reivindicando sus derechos a partir de la idea de los derechos de colaborador. Actualmente, la administración de las asociaciones de residentes parece en gran medida adherirse a las reglas del

paternalismo político buscando asistencia, pero, al mismo tiempo, contribuyendo a mantener el sistema en su lugar. No obstante, otros activistas de las asociaciones hacen un análisis más detallado de la situación estructural en la que viven, y tratan de contribuir activamente para cambiar la noción de ciudadanos de segunda clase y desafiar la noción neoliberal de participación.

Las asociaciones de residentes de las favelas han contribuido a cambiar la imagen de sus habitantes, desde la de un grupo de población sujeto al paternalismo y a la represión política, hacia un perfil de agentes activos en la política, que demandan la ciudadanía de primera clase y el derecho a la ciudad. Entre algunos de los residentes, los ejemplos positivos del actuar de las asociaciones, de su propio poder y de su capacidad han producido una fuerte identidad local, estimulando el orgullo, la autoestima y también la fe en su propia agencia y en la posibilidad de lograr cambios en las estructuras actuales. Sin embargo, este progreso está lejos de consolidarse, y constantemente se ve amenazado por la política clientelista y neoliberal. La respuesta del Estado a la violencia ha regresado repentinamente los derechos civiles de los residentes de las favelas treinta años atrás. En los momentos de crisis, el Estado ha mostrado la tendencia de volver a las viejas estructuras de poder y privar a los residentes de las favelas de los avances que habían logrado.

Referencias bibliográficas

- Alvito, M. 2006 (1998). “Um bicho-de-sete-cabeças”. En *Um século de favela*, coordinado por A. Zaluary M. Alvito. Río de Janeiro: Fundação Getulio Vargas.
- Ashcroft, P. 2014. “History of Rio de Janeiro’s Military Police. Part 4: Pacifying Police Units”. Consultado el 7 de noviembre de 2014. <http://www.rioonwatch.org/?p=14728>.
- Avritzer, L. 2009. *Participatory Institutions in Democratic Brazil*. Washington, D. C.: Washington Wilson Center.
- Azevedo, L. y L. Faulhaber. 2015. *SMH 2016: Remoções no Rio de Janeiro olímpico*. Río de Janeiro: Morula.

- Bayat, A. y K. Biekaart. 2009. "Cities of Extremes". *Development and Change* 40 (5): 815-825.
- Burgos, M. B. 2006. "Dos parques proletários ao Favela-Bairro. As políticas públicas nas favelas do Rio de Janeiro". En *Un século de favela*, coordinado por A. Zaluar y M. Alvito. Río de Janeiro: Fundação Getulio Vargas.
- Caldeira, Teresa P. R. 2000. *City of Walls. Crime, Segregation, and Citizenship in São Paulo*. Berkeley: University of California.
- Cardoso, I. C. 2013. "O papel da operação urbana consorciada do porto do Rio de Janeiro na estruturação do espaço urbano: uma 'máquina de crescimento urbano'?" *O Social em Questão* XVI (29): 69-100.
- Carvalho, J. M. de. 2001. "Cidadania, estadania, apatia". *Jornal do Brasil*, 24 de junio de 2001. Consultado en 15 de noviembre de 2008. http://www.ifcs.ufrj.br/~ppghis/pdf/carvalho_cidadania_estadania.pdf.
- Carvalho, M. R. de, Z. Borges Cheibub, M. Baumann Burgos y M. Simas. 1998. *Cultura política e cidadania: uma proposta de metodologia de avaliação do programa Favela-Bairro*. Río de Janeiro: IUPERJ.
- Castells, M. 2000 (1998). *End of Millennium*. Oxford: Blackwell.
- Cavallieri, F. y A. Vial. 2012. "Favelas na cidade do Rio de Janeiro: o quadro populacional com base no Censo 2010". *Coleção Estudos Carioca*, núm. 20120501. Consultado el 26 de enero de 2017. http://portalgeo.rio.rj.gov.br/estudoscariocas/download%5C3190_FavelasnacidadedoRiodeJaneiro_Censo_2010.PDF.
- Cunha, N., L. Freire, M. Machado-Martins y F. Berocan Veiga, orgs. 2016. *Antropologia do Conflito Urbano. Conexões Rio-Barcelona*. Río de Janeiro: Lamparina.
- Dagnino, E. 2007. "Citizenship: A Perverse Confluence". *Development in Practice* 17 (4-5): 549-556.
- Dagnino, E. y A. C. Chaves Teixeira. 2014. "The Participation of Civil Society in Lula's Government". *Journal of Politics in Latin America* 6 (3): 39-66.
- DaMatta, R. 1997. *A casa & a rua. Espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil*. Río de Janeiro: Rocco.
- _____. 2004. *O que é o Brasil?* Río de Janeiro: Rocco.

- DeWalt, K. M. y B. R. DeWalt. 2011. *Participant Observation: A Guide for Fieldworkers*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Earle, L. 2012. "From Insurgent to Transgressive Citizenship: Housing, Social Movements and the Politics of Rights in São Paulo". *Journal of Latin American Studies* 44: 97-126.
- Fernandes, E. 2007a. "Constructing the 'Right to the City' in Brazil". *Social and Legal Studies* 16 (2): 201-219.
- Fernandes, F. L. 2007b. "A representação das favelas no imaginário social e a 'atualização' do 'mito da marginalidade'". *Observatório de favelas*. <http://observatoriodefavelas.org.br/>.
- Foucault, M. (1976) 1990. *The History of Sexuality. Volume I. An Introduction*. Londres: Penguin Books.
- Goldstein, D. M. 2003. *Laughter Out of Place. Race, Class, Violence, and Sexuality in a Rio Shantytown*. Berkeley: University of California.
- Hagedorn, J. M. 2008. *A World of Gangs: Armed Young Men and Gangsta Culture*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Harvey, D. 2008. "The Right to the City". *New Left Review* 53: 23-40.
- Holston, J. 1995. "Spaces of Insurgent Citizenship". *Planning Theory* 13: 35-51.
- _____. 2007. *Insurgent Citizenship*. Princeton: Princeton University Press.
- _____. 2011. "Contesting Privilege with Right: The Transformation of Differentiated Citizenship in Brazil". *Citizenship Studies* 15 (3-4): 335-352.
- IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal). 2002. "Assessoria internacional". *Estudo de avaliação da experiência brasileira sobre urbanização de favelas e regularização fundiária*. Projeto 17.408, produto 6: Relatório final. Vol. I: *Resultados das Análises*. Rio de Janeiro: IBAM.
- IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 2010. *Censo Demográfico 2010. Aglomerados subnormais. Informações territoriais*. Consultado el 10 de noviembre de 2014. www.censo2010.ibge.gov.br.
- ISP (Instituto de Segurança Pública). 2008. "Instituto de Segurança Pública". Consultado en 20 de enero de 2010. <http://www.isp.rj.gov.br/#>.

- Lara, F. L. 2014. "Cidades na era Lula. O lento abandono dos processos participativos". *Revista do Instituto dos Estudos Brasileiros* 58: 245-262.
- Leeds, E. 1996. "Cocaine and Parallel Politics in the Brazilian Urban Periphery: Constraints on Local-level Democratization". *Latin American Research Review* 31 (3): 47-83.
- Lefebvre, H. 2009 (1968). *Le droit à la ville*. París: Economica.
- Logan, J. R. y H. L. Molotch. 1987. *Urban Fortunes. The Political Economy of Place*. Berkeley: University of California.
- Low, S. M. 2001. "The Edge and the Center: Gated Communities and Discourse of Urban Fear". *American Anthropologist, New Series* 103 (1): 45-58.
- McAdam, D., S. Tarrow y C. Tilly. 2001. *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McCann, B. 2006. "The Political Evolution of Rio de Janeiro's Favelas". *Latin American Research Review* 41 (3): 149-163.
- Migdal, J. S. 2004. "Mental Maps and Virtual Checkpoints: Struggle to Construct and Maintain State and Social Boundaries". En *Boundaries and Belongings. States and Societies in the Struggle to Shape Identities and Local Practices*, coordinado por J. S. Migdal, 3-24. Cambridge: Cambridge University Press.
- Misse, M. 2010. "Crime, sujeito e sujeição criminal: aspetos de uma contribuição analítica sobre a categoria 'bandido'". *Lua Nova* 79: 15-38.
- Perlman, J. E. 1979. *The Myth of Marginality. Urban Poverty and Politics in Rio de Janeiro*. Berkeley: University of California Press.
- PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2006. "Relatório de Desenvolvimento Humano". Consultado el 11 de abril de 2008. http://www.pnud.org.br/HDR/arquivos/RDHglobais/hdr2006_portuguese_summary.pdf.
- Ribeiro, L. C. Q. 2016. "A cidade na longa década perdida". Consultado el 19 de marzo de 2016. http://www.observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1499%3a-cidade-na-%E2%80%99Clonga-d%C3%A9cada-perdida%E2%80%9D&catid=14%3Aartigos-semanais&Itemid=180&lang=pt.

- Santos, A., M. S. Penalva, M. Gomes Peixoto Medeiros y P. H. Ramos Prado Vasques. 2013. "Política urbana no Rio de Janeiro: entre a cidade do plano e a cidade real". *Cadernos do Desenvolvimento Fluminense*, núm. 2 (julio).
- Scott, J. C. 1985. *Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven; Londres: Yale University Press.
- Silva, L. A. M. da y M. Pereira Leite. 2007. "Violência, crime e polícia: o que dizem os favelados quando falam desses temas? En *Rompendo o cerceamento da palavra: a voz dos favelados em busca do reconhecimento*, coordinado por L. A. Silva. Río de Janeiro: IUPERJ.
- Souza, M. L. de. 2000. *O desafio metropolitano. Um estudo sobre a problemática sócio-espacial nas metrópoles brasileiras*. Río de Janeiro: Bertrand.
- UPP (Unidade de Polícia Pacificadora). 2014. *Governo do Rio de Janeiro*. Consultado el 11 de noviembre de 2014. http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp_us.
- Valladares, L. do P. 2005. *A invenção da favela. Do mito de origem á favela.com*. Río de Janeiro: Fundação Getulio Vargas.
- Vieira, O. V. 2007. "Inequality and the Subversion of the Rule of Law in Brazil", documento de trabajo, Center for Brazilian Studies, University of Oxford.
- Xavier, H. N. y F. Magalhães. 2003. "The Case of Rio de Janeiro". En *The Challenge of the Slums: Global Report on Human Settlements 2003*, 225. Ginebra: UN-Habitat.
- Zaluar, A. y M. Alvito, coords. 2006 (1998). *Un século de favela*. Río de Janeiro: Fundação Getulio Vargas.

Gobernanza neoliberal de riesgos y vulnerabilidades en *acuajes* urbanos en México*

Anja Nygren

Universidad de Helsinki

Introducción

Los desastres asociados con huracanes, tormentas e inundaciones están causando un sufrimiento abrumador a las poblaciones y enormes daños a la infraestructura en ciudades densamente pobladas. En particular, las inundaciones catastróficas son una causa frecuente de devastación masiva. Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC 2014), la pérdida de vidas humanas y bienes económicos debida a inundaciones representa uno de los

* Este artículo es una versión revisada del artículo de Anja Nygren (2016), “Socially Differentiated Urban Flood Governance in Mexico”, *Journal of Latin American Studies* 48 (2): 335-365. El estudio fue financiado por la Academia de Finlandia (131739). Agradezco a los habitantes de Villahermosa y a las instituciones gubernamentales, compañías privadas y organizaciones no gubernamentales (ONG) que cooperaron con las entrevistas. La contribución de Elina Isomarkku y Raúl Teno fue muy valiosa en cuanto al trabajo de campo. Además, agradezco a Javier Auyero, Eeva Berglund, Leticia Durand, Arturo Escobar, Fernanda Figueroa, Elena Lazos, Turo-Kimmo Lehtonen, Christina Linsenmeyer, Adrián Monge Monge, José Filipe Pereira da Silva, Björn Sletto, Anne Cristina de la Vega-Leinert y a los árbitros anónimos, quienes ofrecieron comentarios constructivos sobre diferentes versiones del manuscrito.

principales riesgos relacionados con el cambio climático en países con rápida urbanización, como lo es México. Para mitigar estos riesgos, se han establecido programas intensivos de gobernanza de inundaciones en zonas urbanas en diferentes partes del mundo.

Este capítulo se enfoca en las inundaciones catastróficas ocurridas en la ciudad de Villahermosa, en el sureste de México, para analizar cómo la gobernanza socialmente diferenciada del agua afecta a diferentes sectores y grupos sociales en la ciudad. En particular, el texto aborda las siguientes preguntas de investigación: ¿de qué manera los discursos institucionales y las políticas de gobernanza determinan la distribución socioespacial de los riesgos y las vulnerabilidades ambientales en las ciudades frágiles? ¿Cómo se forjan en la gestión ambiental las posiciones categóricas de diferentes grupos de residentes? ¿Cómo perciben los residentes de diferentes clases sociales los cambios en sus relaciones con el agua y en su *acuaje*? ¿Cuáles son las oportunidades de los ciudadanos para negociar y rebatir los discursos y formas de gobernanza o para desafiar las posiciones sociales que las políticas institucionales les atribuyen? El término *acuaje* (en inglés *waterscape*) significa aquí un paisaje acuático, donde lo natural y lo social, así como lo hidrológico-ecológico y lo político *interactúan* intrínsecamente.

Las estrategias de gobernanza de las inundaciones, tanto en México como en muchos otros países, se han dirigido convencionalmente a proteger a las poblaciones urbanas de desastres mediante la construcción de represas, muros de contención y el desvío del agua con canales y diques. Recientemente, se percibe un cambio de estas medidas tecnocéntricas hacia estrategias integrales que promueven la adaptación humana a las inundaciones en lugar de resistirse a ellas (Pahl-Wostl et al. 2007; Ashley et al. 2014). Este artículo demuestra que las estrategias predominantes de gobernanza de las inundaciones están basadas en formas híbridas de gobernanza neoliberal, donde la prevención tecnológica de riesgos está vinculada a programas que promueven la autorresponsabilización social y la adaptación cultural.

Las formas híbridas de gobernanza neoliberal se refieren a un tipo de racionalidad política y formas de gobernar donde diversos actores públicos, privados y de la sociedad civil, junto con la ciudadanía, participan con múltiples

mecanismos y formas de conocimiento (Ferguson 2010). De manera que en este estudio se concibe al neoliberalismo como un “arte de gobernar”, en el sentido propuesto por Michel Foucault. Según el marco conceptual foucaultiano, las racionalidades dominantes de gobernanza determinan los mecanismos de control y las formas de “disciplinar” tanto a la gente como al medio ambiente. Una característica de la forma neoliberal de gobernar es el énfasis en la cogobernanza pública-privada y la autogestión ciudadana (Himley 2008; Fraser 2009; Brenner, Peck y Theodore 2010; Ferguson 2010; Rinne y Nygren 2016).

En contraste con la expectativa de que las estrategias de gobernanza con carácter integral y social mejorarían la calidad de los programas de gobernanza y facilitarían su exitosa aplicación, este estudio sugiere un análisis más a fondo del papel de la participación ciudadana en las nuevas formas de gobernanza. Esto es importante, puesto que sin una cuidadosa revisión de las condiciones de participación y las relaciones de poder involucradas, es difícil entender cómo la “conducción de la conducta” (Foucault 2007, 193) implicada en la gestión neoliberal se implementa en la práctica. Con base en el trabajo de campo etnográfico realizado entre 2011 y 2016, en tres barrios socialmente diferenciados de la ciudad de Villahermosa, esta investigación se centra en los papeles y las responsabilidades que los procedimientos neoliberales de gobernanza asignan a los diferentes grupos de residentes, y en las implicaciones que tienen estas estrategias en sus percepciones sobre el acuaje, las inundaciones y las causas y consecuencias de las vulnerabilidades socialmente diferenciadas.

En comparación con la proliferación de estudios sobre la desigualdad y la segregación social en América Latina (Caldeira 2008; Roberts 2010; Wiggle 2010; Centner 2012), la gobernanza ambiental urbana ha recibido poca atención. Además, los estudios que existen se concentran en asentamientos marginales (Aguilar 2008). Este trabajo se enfoca en tres áreas socioeconómicamente diferentes en Villahermosa: 1) Tabasco 2000, una zona residencial de clase alta; 2) El Guayabal, un barrio de clase media, y 3) Gaviotas Sur, un asentamiento informal de bajos ingresos y zona de comercio ambulante. Villahermosa se caracteriza por una notable segregación social, propia de muchas ciudades en América Latina. Este estudio demuestra cómo las diversas formas de gobernanza de las inundaciones se vinculan con la posición socioeconómica

de los residentes, con la desigual exposición a los riesgos y vulnerabilidades, así como con las distintas oportunidades para recuperarse de las inundaciones catastróficas.

Las cambiantes condiciones ambientales y sociopolíticas en muchas ciudades de América Latina proporcionan un escenario fecundo para analizar los procedimientos de gobernanza neoliberal y sus resultados socialmente diferenciados. Como lo señala Pelling (2003, 77), la tecnología para mapear los riesgos ambientales, construir casas seguras y diseñar ciudades sostenibles existe. El problema más bien es que las formas de gobernanza y las relaciones de poder a menudo socavan los esfuerzos orientados hacia procedimientos justos. Esto es especialmente cierto en muchas ciudades de América Latina, donde un gran número de personas marginadas viven en asentamientos precarios con altos niveles de pobreza, mientras las élites se aíslan en fraccionamientos cerrados, con servicios privados de saneamiento, salud y seguridad (Aguilar 2008; Watson 2009; Caldeira 2015). A través de un análisis etnográfico de las estrategias institucionales de gobernanza y de las tácticas de los residentes para reconfigurar y resistir los mecanismos institucionales que cambian sus acuares y sus formas de vivir, el siguiente análisis muestra cómo las formas dominantes de gobernanza tienen el objetivo de hacer gobernables a ciertos grupos de la población, a sus entornos y a sus relaciones con el acuar, aunque son incapaces de erradicar los esfuerzos dispersos de resistencia.

Enfoques teóricos: la gobernabilidad híbrida y la gobernanza inversa

Este estudio se basa en un enfoque teórico de la gobernabilidad posfoucaultiano, con el fin de analizar cómo las estrategias institucionales de gobernanza se diferencian socialmente en la ciudad y cómo la producción de riesgos de inundación está vinculada a la diferenciada producción del espacio urbano. De acuerdo con Foucault (2003), todas las formas de gobernabilidad acarrear, implícita o explícitamente, las aspiraciones de dirigir la conducta humana hacia ciertos fines. A través de relaciones multifacéticas de poder-conocimiento,

las estrategias de gobernanza son aplicadas, interpretadas y resistidas de manera selectiva dentro de las fluctuantes arenas de la política y el poder. Las perspectivas posfoucaultianas sobre la gobernanza enfatizan no solo en los discursos políticos, sino también en las prácticas políticas y sus interconexiones (Fraser 2009; Nygren 2016), y ofrecen ángulos interesantes para analizar qué es lo que varios tipos de autoridades quieren que suceda, qué objetivos persiguen y a través de cuáles estrategias y mecanismos (Rose 1999, 20). Se pueden obtener detalles importantes sobre los impactos socialmente diferenciados de la gobernanza neoliberal mediante el análisis de las posiciones sociales que las formas de gobernanza asignan a los diferentes grupos de residentes de una ciudad socialmente segregada; de igual forma, sobre cómo las posiciones sociales de dichos residentes determinan sus oportunidades de actuar frente a la gobernabilidad neoliberal (McCarthy y Prudham 2004; Brenner, Peek y Theodore 2010; Collier 2012). Este enfoque proporciona estrategias analíticas que trascienden los supuestos normativos de *buena* y *mala* gobernanza, típicos en muchos estudios de política pública, así como supera la visión dicotómica de las estrategias de tipo “liberadora versus represiva” que caracteriza a varios enfoques convencionales utilizados en los estudios sobre los movimientos sociales (Auyero y Swistun 2009; Mckee 2009).

Basado en las ideas posfoucaultianas de la gubernamentalidad, Bogaert (2011) ofrece un análisis inspirador de cómo el Estado aumenta su control sobre el territorio urbano en Marruecos mediante la implementación de formas autoritarias de gobernanza neoliberal, ello con el fin de regular los asentamientos informales y a sus poblaciones. Igualmente interesante es el estudio de Nielsen (2011) sobre las tácticas locales de “gubernamentalidad inversa” en Mozambique, donde analiza los esfuerzos de los residentes informales para imitar y reconfigurar las normas definidas por el Estado sobre la planificación urbana. Inspirado en dichos análisis, este estudio se enfoca en la gobernanza de inundaciones en la ciudad de Villahermosa como un conjunto de formas híbridas de la gobernabilidad neoliberal, implementado por diversos actores de los sectores gubernamental, privado y de la sociedad civil. El estudio contribuye a la discusión teórica sobre la gobernanza neoliberal arrojando luz sobre la complejidad de la gobernanza en situaciones donde los legados del control

estatal y las relaciones de clientelismo se mezclan con las ideas neoliberales de gestión pública-privada y autogestión ciudadana (Collier 2009).

Este estudio explora la implementación de mecanismos de gobernanza neoliberal en tres sectores socioeconómicos diferentes de Villahermosa. Mediante el análisis de las formas ambiguas de gobernar en una ciudad socialmente segregada, se muestra cómo se produce, negocia y resiste la diferenciación socioespacial de exposición a riesgos de inundación y a vulnerabilidades cotidianas por medio de las relaciones políticas y de poder.

Además del control del territorio urbano, las formas de la gobernanza neoliberal se enfocan a orientar la conducta de la población (Jessop 2007). A través de la regulación indirecta, las instituciones gubernamentales, las empresas privadas y los grupos de la sociedad civil tratan de “dirigir” a los ciudadanos para que internalicen las formas emergentes de la gobernanza neoliberal, las cuales implican supervisión gubernamental, cogobernanza pública-privada y participación ciudadana guiada (Swyngedouw 2005; Fraser 2009, 125-126). En el centro de estas estrategias está el intento de vincular los programas educativos que tienen como objetivo aumentar la adaptación sociocultural de la gente para convivir con el agua con los procedimientos tecnocéntricos de control de las inundaciones para crear un orden socioespacial. Lo que está en juego no es simplemente la ampliación de la gobernanza neoliberal bajo la fachada de la participación local, sino también el cambio hacia técnicas de control indirecto en los dominios socioespaciales (Weszkalys 2008, 255).

Cuando se examinan a través de nociones posfoucaultianas, las medidas de control de inundaciones y los programas de adaptación social aparecen como proyectos íntimamente entrelazados. El objetivo implícito de estos programas es facilitar el ajuste de los residentes a las ideas neoliberales que promueven un incremento de la autorresponsabilidad. Al mismo tiempo, la distribución desigual de las vulnerabilidades ambientales y sociales se deja de lado: se pone poca atención en cómo la planificación y la política socialmente segregada empuja a ciertos grupos sociales a ocupar espacios de por sí inhabitables, mientras que otros grupos controlan los espacios menos vulnerables.

Aquí, el enfoque posfoucaultiano para la gobernanza se combina con teorizaciones recientes de posiciones dispersas y redes sociales flexibles, con el

fin de comprender las negociaciones y reacciones ambiguas de diferentes residentes frente a las estrategias de gobernanza imperantes. Estos debates sobre las posiciones dispersas y las redes flexibles han diversificado el enfoque posfoucaultiano para la gobernanza, aportando nuevas ideas sobre las ciudades e interpretándolas como conglomerados de identidades heterogéneas e intersecciones multifacéticas (Simone 2010a; Roy 2011). En lugar de considerar a las diferentes secciones de una ciudad como esferas separadas, el enfoque empleado en este estudio examina cómo las personas de diferentes partes de la ciudad interactúan entre sí, y cómo los diferentes barrios forman un mosaico en la geografía social urbana. Solo a través de este tipo de análisis relacional es posible entender cómo la producción socialmente diferenciada del espacio urbano contribuye a una distribución desigual de los riesgos ambientales y de las vulnerabilidades sociales entre la población. Así, a través de una investigación sobre la forma en que los diferentes residentes conceptualizan la distribución de riesgos y vulnerabilidades, y sobre cómo observan sus oportunidades para reconfigurar las formas predominantes de gobernanza, este estudio muestra la heterogeneidad de los esfuerzos de resistencia en el quehacer cotidiano de la vida urbana.

La conceptualización de la gobernabilidad como una arena de reconfiguración y disputa ofrece oportunidades para cuestionar los supuestos que dan por sentado el poder hegemónico de los regímenes de gobernanza. Como lo señala Nielsen (2011, 352), en lugar de “leer la ciudad de alguna manera a través de esquemas particulares de poder, la ciudad se lee a sí misma constantemente”. En vista de que las autoridades gubernamentales con frecuencia no cumplen lo que prometen, los residentes de diferentes partes de la ciudad reformulan las normas oficiales con reglas improvisadas (Sletto 2012). A través de tácticas inversas, cuestionan los discursos y actos de gobernanza dominantes, aunque con diferentes grados de poder. Estos procesos requieren un análisis detallado de las prácticas políticas y las experiencias cotidianas de gobernanza, sobre todo en contextos sociopolíticos donde una variedad de estrategias políticas formales se mezcla con una diversidad de maniobras informales, y crean una situación de pluralismo legal (Goldstein 2003; Nygren 2004; Mathews 2009; Auyero 2010).

Diversos estudios sobre los movimientos sociales han demostrado la enorme variedad de formas de las luchas de resistencia (Carruthers 2008; Bayat y Biekart 2009; Nygren 2014), entre ellos una rica literatura sobre movimientos de oposición en barrios pobres y otros márgenes urbanos; sin embargo, como indican Auyero y Swistun (2009, 8-12), muchos de estos trabajos son de poca ayuda cuando se trata de analizar y comprender situaciones donde no existe un movimiento social organizado y no hay consenso sobre cuáles son los riesgos más urgentes, donde más bien los ciudadanos se sienten confundidos sobre los riesgos y divididos en torno a cómo manejarlos. Como mostrará el análisis siguiente, aunque los residentes de Villahermosa se involucran en diversas tácticas inversas, sus relaciones con los riesgos y las vulnerabilidades están enmarañadas en los entornos institucionales y las relaciones de poder, lo que en conjunto da lugar a ideas ambiguas sobre las formas dominantes de la gobernanza, así como sobre la fragmentación de los esfuerzos para impugnarlas.

Villahermosa como un panorama de riesgo y vulnerabilidad

Villahermosa, capital del estado mexicano de Tabasco, tiene cerca de un millón de habitantes. El auge petrolero en la década de 1980 provocó un rápido crecimiento de la población, cuando las oportunidades de trabajo ofrecidas por la industria petrolera y el sector de servicios trajeron a la región grandes cantidades de inmigrantes (García Meza 1993, 2). Esta ciudad se encuentra en una zona húmeda tropical, la mayor parte a menos de diez metros por encima del nivel del mar. La atraviesan dos grandes ríos —el Grijalva y el Carrizal— y hay docenas de lagunas, muchas ya rellenas para extender la construcción del espacio urbano. Debido a su ubicación, Villahermosa está expuesta a eventos hidrometeorológicos extremos. Si consideramos que 31 % de las fuentes de agua dulce de México se encuentran en el estado de Tabasco, y que la región también es uno de los principales campos de extracción de petróleo y gas natural en el país, los desafíos relacionados con la gobernanza de diferentes riesgos y vulnerabilidades ambientales son extraordinariamente altos (GET 2010, 14).

En Villahermosa se han registrado inundaciones desde principios de 1800; sin embargo, una excepcionalmente devastadora ocurrió en 2007, y desde entonces, la ciudad ha sufrido inundaciones graves anualmente. La de 2007 afectó a 1.5 millones de personas, y los daños se calcularon en tres mil millones de dólares, equivalentes al 30% del producto interno bruto (PIB) del Estado (Cepal 2008). Alrededor del 62% de la ciudad estuvo inundado, y el nivel de agua llegó hasta cuatro metros sobre el nivel de la calle en varios puntos.

La inundación de 2007 fue el resultado de una compleja interacción de procesos biofísicos y sociopolíticos. En octubre de ese año, una tormenta tropical provocó lluvias torrenciales extremas en la cuenca alta del río Grijalva: entre el 28 y el 30 de octubre, la precipitación (996 mm) fue cinco veces mayor que la media histórica. El nivel del agua en el embalse de la presa Peñitas alcanzó cuatro metros por encima del nivel máximo de operación, hasta que se abrieron los aliviaderos (Aparicio et al. 2009). Hubo fuertes debates en los medios de comunicación y discusiones públicas sugiriendo que la inundación sucedió porque las compañías eléctricas liberaron el agua desde el depósito de la presa solo después de la declaración de emergencia, con el fin de maximizar los beneficios de la generación de electricidad (Rinne y Nygren 2016). Esta acción retardada provocó un aumento excepcional en el nivel de agua río abajo, por lo que en los siguientes días un volumen de agua equivalente a 2 055 metros cúbicos por segundo fluyó desde el río Grijalva hacia Villahermosa (Perevochtchikova y Lezama de la Torre 2010).

La inadecuada planificación urbana y la expansión de asentamientos en zonas de alto riesgo empeoraron aún más los impactos de la inundación de 2007. Al examinar esta inundación desde una perspectiva socioespacial, resulta evidente que las causas biofísicas no pueden separarse de los procesos sociopolíticos multiescalares, incluida la gobernanza urbana socialmente diferenciada. Desde esta perspectiva, los diferentes impactos de la inundación en distintas partes de la ciudad no pueden entenderse sin tener en cuenta las estructuras políticas que producen disparidades en la exposición de los habitantes a los riesgos ambientales y a las vulnerabilidades sociales.

La opulencia de la zona residencial Tabasco 2000 se manifiesta en fraccionamientos cerrados que ofrecen alojamiento a los gerentes de negocios de

alto nivel, al personal directivo de la industria petrolera y a la élite política regional con gran influencia en el diseño e implementación de la política pública. Junto a residencias cerradas en las que se prohíben las actividades comerciales, la zona incluye distinguidos complejos de negocios, centros comerciales, hoteles y restaurantes de lujo, así como un club de golf privado. Algunas partes de Tabasco 2000 se construyeron en una zona de riesgo, rellenando el humedal y edificando infraestructura de protección contra inundaciones.

El Guayabal es un barrio de clase media situado cerca del centro histórico de la ciudad, con muchas oficinas gubernamentales y empresas de tamaño mediano. La mayoría de los residentes son empleados de ingresos medios, por ejemplo, maestros de escuela, funcionarios públicos y técnicos de la industria petrolera. Aunque las inundaciones temporales se producen durante la época lluviosa, la magnitud de la ocurrida en 2007 causó gran alarma entre los residentes de El Guayabal.

Gaviotas Sur es un asentamiento informal y una zona de comercio ambulante situada en el área pantanosa que bordea el río Grijalva. Muchos de sus residentes viven en chozas de lámina corrugada a lo largo de estrechas calles o callejones lodosos, aunque también existen casas de concreto de una o dos plantas. La mayoría de los residentes de Gaviotas Sur subsisten con trabajos manuales, labores domésticas de tiempo parcial o en el comercio informal. El área sufre inundaciones todos los años, pero durante la de 2007 el Gobierno la declaró una zona especial de catástrofe.

Estas divisiones dentro de la ciudad no son meramente espaciales; constituyen también un principio de organización en la vida cotidiana de los residentes. Los habitantes de Tabasco 2000 tienen muchas oportunidades para mitigar el impacto de las inundaciones, estas incluyen muros de contención, sistemas de alerta temprana y amplios servicios de agua y saneamiento. Al contrario, los residentes de Gaviotas Sur viven en condiciones precarias, con derechos de propiedad poco claros, empleos irregulares y escasos recursos para gestionar los riesgos. Las políticas recientes que conceden a proveedores privados la provisión de los servicios de agua, saneamiento, salud y seguridad han acelerado la diferenciación socioespacial en la ciudad. En Tabasco 2000 la prestación de servicios es en gran medida privada, en El Guayabal la gente

usa una mezcla de servicios públicos y privados, mientras que en Gaviotas Sur los servicios informales complementan los escasos servicios prestados por la municipalidad (Nygren 2018).

Estos asuntos muestran cómo la distribución socioespacial de la exposición de los pobladores al riesgo de inundación está vinculada con el reparto desigual de las vulnerabilidades diarias. A pesar de que todos los barrios —de clase alta, media o baja— comparten el riesgo de inundaciones, las precarias condiciones de vivienda de los residentes informales y el limitado acceso a los servicios intensifican el impacto de esos fenómenos sobre ellos. Las formas dominantes de planificación urbana tienden a proteger la calidad ambiental de los barrios ricos por medio de infraestructura preventiva. Al mismo tiempo, destinan áreas para industrias peligrosas y depósitos para residuos en los asentamientos informales.

Entre 2011 y 2014 realicé cincuenta entrevistas en las cercanías de Tabasco 2000, El Guayabal y Gaviotas Sur, con el fin de comprender los puntos de vista de los residentes sobre la gobernanza de las inundaciones. Las conversaciones informales y la observación participativa fueron cruciales para tener una comprensión más detallada de sus experiencias en relación con las inundaciones y sus percepciones sobre la política urbana. Además, entre 2011 y 2012, nuestro equipo de investigación realizó una encuesta en los mismos sitios. Aplicado a 300 hogares, el cuestionario se enfocó en las condiciones de vida, la dotación de servicios y la exposición de los residentes a los riesgos ambientales y las vulnerabilidades sociales.

En los estudios sobre riesgos y vulnerabilidades rara vez se incluye a los grupos de clase alta, en parte porque es difícil tener acceso a los lugares y personas privilegiadas. Esto fue evidente cuando hice el trabajo de campo en los fraccionamientos de clase alta de Tabasco 2000. Ahí tuve que recurrir a varios ajustes metodológicos para tener acceso y ganar la confianza de los residentes. La observación participativa fue crucial para la recopilación de datos, especialmente en Tabasco 2000, ya que muchos de los residentes tenían sospechas sobre el propósito de mi investigación y se mostraron recelosos de las notas que hacía durante las entrevistas. Al ser empresarios, oficiales y políticos de alto rango, procuraron proteger su privacidad.

Además, realicé 55 entrevistas con autoridades gubernamentales de los niveles federal, estatal y municipal; con consultores privados de planificación urbana y gobernanza de agua, y con miembros de ONG. Estos datos fueron complementados con el análisis de varios informes de políticas relacionadas con las inundaciones, los planes de desarrollo urbano y documentos sobre el ordenamiento territorial. La investigación de archivos y el análisis de los periódicos regionales ayudaron a contextualizar los discursos sobre la gobernanza surgidos durante la investigación etnográfica.

El trabajo etnográfico es particularmente adecuado para el análisis detallado de los argumentos sobre las relaciones de poder, las redes sociales y los significados culturales relacionados con los discursos y prácticas de la gobernanza. La etnografía interpretativa, con su interés en conceptualizaciones alternativas, ofrece un punto de vista crítico desde el cual desafiar la generalización de comentarios sobre la gobernanza y la desigualdad (Cerwonka y Malkki 2007, 14). Las experiencias de las personas sobre los riesgos y las vulnerabilidades y sus conexiones con la política cotidiana son difíciles de captar a través de grandes encuestas. El análisis etnográfico que presento a continuación pretende ilustrar el carácter socialmente diferenciado de la gobernanza de las inundaciones y las maneras en que los residentes forjan, hacen frente y resisten las formas dominantes de gobernanza. También busca mostrar cómo los riesgos están sometidos a múltiples interpretaciones, dependiendo de quién hace la racionalización de los riesgos y con qué fines.

Agendas multifacéticas de control y autorregulación

Discursos sobre la adaptación cultural y la participación ciudadana

En 2003, el proyecto para el control de inundaciones denominado Proyecto Integral Contra Inundaciones (PICI), dirigido por el Gobierno federal, se estableció en Tabasco para proporcionar seguridad ambiental a Villahermosa a través de la construcción de infraestructura para prevenir inundaciones, como presas, canales y muros de contención. La inundación de 2007 brindó el

impulso para transformar estas medidas de control técnico en estrategias integrales de resiliencia, con un programa revisado de gobernanza de las inundaciones: el Programa Hídrico Integral de Tabasco (PHIT), establecido en 2008 (Conagua 2012). Este nuevo programa parte de la idea de que los proyectos de infraestructura no previenen por sí mismos los desastres provocados por las inundaciones, y que el control tecnológico debe vincularse a la adaptación cultural y a la resiliencia social. Estas estrategias plantean cuestionamientos importantes relacionados con las nociones posfoucaultianas sobre la gobernabilidad: ¿cómo el poder opera dentro de las nuevas formas de gobernabilidad y cuáles estrategias se utilizan para gobernar? Una pregunta especialmente interesante es ¿cómo los residentes se constituyen en sujetos? En 2011, esta última pregunta comenzó a alterar mi investigación, sobre todo después de haber entrevistado a un funcionario del Instituto de Protección Civil (IPC), quien me explicó las nuevas estrategias de gobernanza de tal manera que invirtió mis supuestos preliminares de trabajo. Él decía:

Ningún desastre es natural; más bien, los desastres son socialmente contruidos [...] La gente tiene que tomar consciencia de los riesgos y saber cómo manejarlos. Se necesitan campañas de educación y capacitación para promover la cultura de autogestión. Para que la gente entienda que, en caso de una inundación, nadie me va a proteger, sino que tengo que protegerme yo mismo. Todos los problemas ambientales son socialmente contruidos, o sea, un asunto de cultura. Desafortunadamente, mucha gente piensa que si tienen un problema, el Gobierno tiene que resolverlo. La gente no toma iniciativa por sí misma (Funcionario del IPC 2011).

Opiniones similares fueron expuestas en varias entrevistas con funcionarios del Gobierno y con consultores de planificación urbana y de manejo del agua. De acuerdo con estas autoridades y expertos, la gobernanza de las inundaciones no puede reducirse a un problema técnico, sino que el riesgo de inundación es más bien un fenómeno sociocultural. Particularmente, los ingenieros civiles responsables de la gestión de las inundaciones fueron los que recalcaron que el control tecnológico de esos fenómenos no es suficiente para

prevenir consecuencias devastadoras, y consideraron que la creación de capacidades sociales y la autorresponsabilidad ciudadana son clave para una gobernanza exitosa.

Este “giro social” en la gobernanza pone énfasis en la adaptación cultural al riesgo. Curiosamente, las autoridades gubernamentales y los consultores privados entendieron la idea de la construcción social del riesgo al constatar que distintos grupos sociales tienen diferentes capacidades culturales para adaptarse a las inundaciones. Así, los residentes de asentamientos informales fueron considerados como individuos indiferentes a la construcción de un entorno seguro de vida porque, según las autoridades, carecen de un conocimiento profundo de los riesgos. Después de la inundación de 2007, el gobernador de Tabasco apareció en los medios de comunicación exhortando a la población “a calmarse y dejar de difundir rumores” (*Tabasco Hoy* 2007). Esta *rumorología* se consideró un fenómeno especialmente relacionado con los pobres, quienes fueron vistos por los funcionarios oficiales como reacios a adaptarse para convivir con el agua. En general, la vulnerabilidad se relacionó con una actitud cultural de indiferencia, sin prestar atención a las condiciones socioeconómicas que hacen que algunos grupos sean más vulnerables que otros. Este énfasis en la adaptación cultural despolitizó las intervenciones del Gobierno en el manejo socialmente diferenciado de los riesgos.

Mientras que en décadas anteriores la gobernanza de las inundaciones se centró en el control del territorio urbano a través de grandes obras de infraestructura, la política actual se orienta hacia la gobernanza de las poblaciones urbanas. Las estrategias que se desarrollan tienen que ver no solo con la legislación y la regulación pública, sino también con la cogobernanza pública-privada y con incentivos basados en el mercado, que incluyen la privatización de los servicios de agua, saneamiento y gestión de residuos. A fin de disminuir los gastos públicos, el Gobierno subcontrata a prestadores privados y grupos de la sociedad civil para realizar diferentes tareas de manejo de agua y provisión de servicios. Estas medidas desafían la visión del Estado como promotor de políticas públicas y proveedor de servicios, ya que sustituyen la noción de servicios públicos por la de sistemas privados.

A diferencia de las políticas anteriores, basadas en el control gubernamental de las inundaciones, las estrategias actuales asignan un papel clave a la autorresponsabilización cívica. Varios funcionarios me explicaron que, en la década de 2000, las directrices de política ambiental se redactaron como normas rigurosas para ser obedecidas, mientras que ahora la prioridad está en la autorresponsabilización ciudadana.¹ Como lo destaca el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial de Tabasco, el papel del Gobierno es facilitar que los ciudadanos desarrollen iniciativas propias para cuidar de sus condiciones de vida y mitigar su vulnerabilidad (GET 2008).

Para incorporar eficientemente a los residentes en la gobernanza, las autoridades han contratado consultores privados y facilitadores de ONG con experiencia en métodos participativos, para promover programas de gobernanza con orientación social. Muchas autoridades también hacen hincapié en incorporar en la gobernanza de las inundaciones a líderes políticos locales, los llamados *caciques*, y a sus asistentes o *achichincles*, con el argumento de que estas personas saben cómo controlar las confrontaciones. Como mediadores entre los funcionarios públicos y residentes, se asume que los líderes tienen un conocimiento íntimo de la política cotidiana y el carisma suficiente para comunicarse de una manera socialmente eficiente, habilidades que se consideran cruciales en la promoción de la autorresponsabilidad, tal y como lo señaló un coordinador de los programas participativos:

Es importante incorporar a los líderes comunales en nuestras acciones, ya que ellos saben cómo manejar a la gente. Queremos que el asunto sobre el riesgo de la inundación no se convierta en un problema político, y por eso promovemos la participación civil. Es una forma de controlar que la gente no empiece a movilizarse (Coordinador de Participación Cívica 2011).

Algo interesante sobre estas opiniones fue que, mediante este tipo de comentarios calculados, las autoridades y los facilitadores confirieron a la

¹ Entrevistas realizadas el 15 de febrero de 2011 y el 21 de febrero de 2011; discusión grupal, el 17 de octubre de 2011.

participación ciudadana un carácter apolítico, al mismo tiempo que identificaban a los líderes como un medio políticamente eficaz para controlar la movilización social. De este modo, afirmaron que los riesgos de inundación son construcciones sociales pero sin relación con la distribución desigual de vulnerabilidades.

En línea con el pensamiento neoliberal, las autoridades responsables de la gobernanza de las inundaciones hicieron hincapié en que es importante que la gente vuelva a adoptar la forma tradicional de “convivir con el agua” y que desarrolle una “cultura del agua”. Explicaron que las personas en Tabasco tradicionalmente se movían en *cayucos* o botes cavados en un tronco de árbol de madera blanda y construían casas de dos pisos, donde el piso superior (tapanco) sirve para almacenar suministros cuando el nivel del agua sube. En las nuevas propuestas de gobernanza, el conocimiento local se presenta como un capital social valioso para promover una “cultura de resiliencia al agua”. Como me explicó un funcionario de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat):

No podemos conquistar a la Naturaleza, necesitamos estrategias de adaptación y de autorregulación. Ahora utilizamos esquemas integrales de la gobernanza, donde involucramos a actores de diferentes niveles del Gobierno, del sector privado y de ONG para trabajar con los habitantes. Antes la gente se adaptó a las condiciones de una zona de agua; pasaba la inundación y la gente regresaba, limpiaba su casa y seguía viviendo normalmente. Ahora, con cualquier creciente la gente se siente damnificada. Es importante aprender a convivir con el agua nuevamente (Funcionario de Semarnat 2011).

Al presentar las formas participativas de gobernanza de las inundaciones como un medio para volver a la acción colectiva tradicional, las autoridades construyeron el pasado como un modelo para la responsabilidad cívica y la adaptación cultural, el cual desplazaba la responsabilidad de la gestión de inundaciones hacia los residentes. Al mismo tiempo, ofrecieron pocas reflexiones sobre la desigualdad en el acceso a la infraestructura de protección y a los servicios públicos. La información derivada de las entrevistas y encuestas de este

estudio indica que hubo grandes diferencias entre las personas que vivían en zonas inundables en torno a quiénes fueron evacuados durante la contingencia, por cuáles medios y a dónde, en cómo los barrios dañados fueron reconstruidos, y sobre quién estuvo representado en la toma de decisiones sobre la reconstrucción; todos temas sumamente relevantes para la justicia ambiental (Bullard y Wright 2009; Wayessa y Nygren 2016).

Técnicas de gobernanza: la conducción indirecta de la conducta

Las nuevas estrategias de gobernanza de las inundaciones han generado distintos mecanismos para gobernar en los diferentes sectores socioeconómicos de la ciudad. En los barrios ricos, instituciones gubernamentales y empresas privadas están construyendo canales y muros de contención, e instalando modernas estaciones de bombeo que eliminan rápidamente el exceso de agua durante las inundaciones. Mientras tanto, a los habitantes de los asentamientos informales se les pide amontonar sacos de arena, aunque todos saben que en caso de una inundación catastrófica, es un esfuerzo meramente cosmético. El Gobierno también realiza programas intensivos de sensibilización, partiendo de que una de las principales causas de las inundaciones en los asentamientos informales es la falta de una cultura del orden, que hace que la gente tire basura a las calles y obstruya así los desagües. La idea implícita aquí es que los residentes de estos asentamientos deben ser conscientes de que son ellos mismos los responsables del elevado riesgo de inundaciones, y que deben transformarse en ciudadanos responsables.

Al mismo tiempo, las autoridades prestan escasa atención a cómo la provisión desigual de los servicios distingue a los barrios en términos de vulnerabilidad, y cómo la gobernanza urbana sostiene las diferencias entre la ciudadanía, pues los servicios públicos se convierten en privilegios que se otorgan según la situación socioeconómica de los habitantes (Holston 2011; Earle 2012). La falta de voluntad política para aplicar estrategias de prevención de riesgos en los barrios pobres, considerados como lugares de desorden social y peligro ambiental, crea un círculo vicioso de crecientes riesgos y vulnerabilidades. Al

enfatar que las causas de los desastres por inundaciones son culturales, las autoridades ignoran las causas políticas de la vulnerabilidad, incluida la marginación socioeconómica, que obliga a los pobres a buscar vivienda en ambientes propensos a las inundaciones (Murray 2009, 185).

Esta condición de vivir en entornos expuestos a riesgos y al margen de la legalidad es lo que mantiene la vulnerabilidad cotidiana de los residentes de Gaviotas Sur. Muchos hogares no tienen acceso a agua potable y los servicios de saneamiento y salud son limitados; al respecto, las autoridades argumentan que no tienen la responsabilidad de proporcionar servicios públicos a los asentamientos ilegales. La imagen institucional de esos asentamientos informales como zonas donde priva la ignorancia y una economía basada en el comercio ambulante construye estas áreas como espacios que deben ser gobernados de manera distinta al resto de la ciudad, mientras oculta las formas multifacéticas en que los fraccionamientos ricos, las comunidades de clase media y los asentamientos informales están vinculados a través de relaciones laborales y de la prestación de servicios (informales).

En concordancia con las nuevas técnicas de gobernanza, Villahermosa se ha convertido en una arena de grandes proyectos de zonificación y codificación. El objetivo de estos proyectos es identificar las zonas críticas de riesgo de inundaciones y las poblaciones que las habitan. La mayoría de estas áreas están situadas a orillas de los ríos y son ocupadas por los pobres. El Gobierno está invirtiendo fuertemente en la regulación de la circulación del agua y de las personas en estas áreas. Hay proyectos para prevenir la construcción clandestina de viviendas, mejorar la conciencia ambiental de los residentes y reubicar a los vendedores ambulantes en mercados certificados con normas modernas para la gestión de residuos. A las calles de Gaviotas Sur les han dado nombres oficiales, y las parcelas en los callejones fueron numeradas para identificar exactamente quién está viviendo en las zonas de riesgo.

En mis entrevistas, las autoridades gubernamentales y los consultores privados enfatizaron que el propio comportamiento de los residentes es un factor importante que explica por qué las inundaciones tienen diferentes efectos en los distintos barrios. Indicaron que los propios residentes de Gaviotas Sur decidieron instalarse en una zona de riesgo y por eso son responsables de

las drásticas consecuencias de las inundaciones. Hubo poco reconocimiento de que muchas de estas personas estaban obligadas a ocupar terrenos baldíos por razones de supervivencia. En mis entrevistas con los residentes de Gaviotas Sur, muchos señalaron que, de hecho, los líderes políticos los habían convencido de establecerse allí con el fin de obtener sus votos. Por su parte, las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) afirmaron que el hábito de construir chozas en zonas de alto riesgo se basa en una “cultura de daños-beneficiarios” que incita a la gente pobre a establecerse en áreas de riesgo para luego exigir compensaciones.² *Paracaidistas* es el término peyorativo utilizado para nombrar a los residentes informales, y hace referencia a gente que aparece de repente para invadir zonas no ocupadas. Este término deslegitima el punto de vista de los residentes informales, quienes sostienen que es responsabilidad del Gobierno facilitar condiciones de vida seguras para todos los ciudadanos, independientemente de su posición socioeconómica.

Las actuales estrategias de gobernanza de las inundaciones se esfuerzan en reubicar a los residentes informales que viven en zonas de alto riesgo. Desde 2009, el Gobierno ha reubicado a miles de personas del centro de la ciudad hacia la periferia suburbana. La renuencia de estas personas a abandonar sus hogares se ha interpretado como un signo de indiferencia, como lo expresó un funcionario de Conagua a *El Herald* el 5 de mayo de 2011: “Es una lástima que estos ciudadanos no entienden que la remoción es por su propia seguridad, ya que estas zonas no son aptas para vivir y, por lo tanto, no tienen ningún servicio”. De acuerdo con datos de archivo, los planes para reubicar a estas personas han existido desde la década de 1990; sin embargo, la sensibilidad política obligó a los funcionarios a posponer estos esfuerzos (Nygren y Wayessa 2018). La inundación de 2007 proporcionó un pretexto para “limpiar” el centro de residentes informales, con la excusa de salvar a la ciudad de un desastre futuro. Las casas de los moradores fueron arrasadas para crear “un territorio urbano con orden y equilibrio”, como lo estipula el Plan de Desarrollo de Tabasco (GET 2010, 156). Este es un claro ejemplo de la segregación social que distingue entre aquellos que pueden permitirse el lujo de habitar

² Entrevista realizada el 15 de febrero de 2011.

en zonas económica y socialmente valoradas, y los que son empujados a vivir en los márgenes.

Un ejemplo del vínculo entre la producción de riesgos ambientales y la producción socialmente diferenciada del espacio urbano es el hecho de que en zonas de alto riesgo también se han construido varios barrios ricos e instalaciones comerciales. Algunos funcionarios públicos han concedido permisos de construcción clandestinos para ciudadanos acomodados y empresas de construcción poderosas, mientras que la ocupación informal de tierras por parte de los pobres la clasifican como ilegal. Esto demuestra cómo se negocian las reglas de gobernanza en redes clientelares, donde las autoridades tienen la facultad de definir cómo se aplican los derechos y las responsabilidades. Las redes clientelares son comunes entre los sectores público, privado y de la sociedad civil, y su naturaleza informal las coloca fuera del escrutinio público.

Pese a los argumentos oficiales de que la gobernanza de las inundaciones es una responsabilidad de todos, la sociedad civil es frágil y las élites dominan la toma de decisiones. Por su parte, las autoridades controlan la protesta social con el argumento de que la cogobernanza requiere cooperación en lugar de escándalo, y mediante la promoción de la subcontratación y la gestión público-privada tratan de despoltizar el asunto de las inundaciones. Mientras tanto, los defensores de la justicia ambiental y de los derechos humanos pugnan por volver a politizar el tema, afirmando que la gobernanza de las inundaciones no puede ser subcontratada a actores privados o a la sociedad civil, sino que es responsabilidad del Estado proteger a los ciudadanos de desastres relacionados con las inundaciones.³

Las actuales estrategias de gobernanza de las inundaciones también tienen como objetivo transformar las incertidumbres medioambientales en riesgos manejables. Los funcionarios del IPC con frecuencia me recordaron que es importante dar la impresión de que el riesgo de inundación está bajo el control institucional. Sin embargo, debido a la creciente duda sobre la posibilidad de controlar tecnológicamente tales riesgos, los consultores y las autoridades

³ Entrevistas realizadas el 17 de octubre de 2011 y el 19 de octubre de 2011. Ver también Comisión Nacional de Derechos Humanos-Tabasco (2011).

gubernamentales hicieron hincapié en que la gobernanza de las inundaciones debe enfatizar el aspecto sociocultural. Señalaron que “si la gente no respeta el agua, esta tomará venganza y recuperará lo que le pertenece, lo que obliga a desarrollar estrategias para aliarse con agua”.⁴ En su opinión, el conocimiento de los especialistas en gestión de inundaciones, expresado en escenarios de riesgo, debe integrarse al conocimiento de los líderes locales, quienes saben cómo “manejar” a la gente. Sugieren que con la integración de estos conocimientos sería posible desarrollar planes detallados para el ordenamiento territorial y social. Este conocimiento, que según las autoridades es útil al bien común en la gestión de riesgos, contiene directrices politizadas para gobernar a determinados grupos de la población. Algunos procedimientos especiales se han planeado para corregir el comportamiento de los considerados *causantes del riesgo*.

Simultáneamente, se han promovido diversas formas de regulación privada con la intención de estimular la innovación tecnológica y la economía verde, así como de facilitar una gestión rentable de las inundaciones. En estas estrategias, la regulación pública se mezcla con la privatización de los servicios de agua y saneamiento, así como con programas de la sociedad civil para el bienestar colectivo y la protección civil. Estos procedimientos generan ámbitos de gobernanza en los que las empresas privadas y los grupos de la sociedad civil están autorizados para asumir varias obligaciones del Estado (Swyngedouw 2005; Ferguson 2010). En muchas ocasiones, el Gobierno promueve deliberadamente asociaciones público-privadas con el fin de legitimar intervenciones que de otra manera encontrarían resistencia.

En esta hibridación de la gobernanza, los ciudadanos tienen dificultades para saber quién se responsabiliza de qué. Por otra parte, la concentración de la toma de decisiones en las instituciones gubernamentales socava el concepto de gobernanza mediante redes horizontales. El resultado es un montaje de varias capas de gobernanza donde diversos esquemas de regulación, medidas administrativas y proposiciones morales se mezclan en una lógica que favorece una gobernabilidad institucional indirecta, una regulación basada en el mercado y

⁴ Entrevistas realizadas el 16 de febrero de 2011 y el 21 de octubre de 2011. Ver también *Presente*, 26 de abril de 2008 y 10 de abril de 2010.

la atribución de autorresponsabilidad ciudadana. Tales formas neoliberales de gobernanza tienen como objetivo crear ciudadanos aptos para asumir responsabilidades (Rose, O'Malley y Valderde 2006).

Un examen cuidadoso de las políticas de gobernanza ayuda a entender quién controla a quién, con qué técnicas y para qué fines (Dean 2010, 30-37). Lo que aún queda por explicar es cómo el entendimiento de los residentes concuerda u objeta las medidas con las cuales las autoridades tratan de crear espacios y sujetos gobernables. Para complementar los enfoques foucaultianos de la gobernabilidad, los cuales, según algunos críticos, se centran en los esfuerzos de los planificadores y los programadores para gobernar a la población (Mckee 2009, 479), la siguiente sección explora la forma en que los residentes de diferentes partes de la ciudad interpretan los regímenes diseñados para gobernar sus subjetividades. También examina cómo los residentes reconfiguran y disputan las formas prevaletentes de gobernar.

Contingencias y disputas cotidianas

Posiciones dispersas y tácticas inversas

La intención de las autoridades gubernamentales y los consultores de crear en Villahermosa zonas segregadas de "sostenibilidad" chocó con la heterogeneidad de la vida cotidiana. Los residentes de diferentes partes de la ciudad desafiaron las formas disciplinarias de la gobernanza neoliberal a través de tácticas de gobernabilidad inversa (Nielsen 2011). En Gaviotas Sur, los residentes regularizaron sus ocupaciones de tierras por medio de proyectos intermitentes de renovación de viviendas. Rellenaron sus parcelas con arena y material para demostrar a las autoridades que vivían dentro de los límites aceptables en cuanto al riesgo de inundación. Además, renovaron sus chozas con hormigón y acero corrugado, a fin de mostrar que sus casas estaban construidas con materiales duraderos y, por lo tanto, en concordancia con los estándares requeridos por las normas para mitigar los efectos de las inundaciones. También construyeron banquetas frente a sus casas y colocaron lámparas rústicas en los callejones

oscuros para indicar que sus casas están ordenadas y ocupadas de forma permanente. Incluso reinterpretaron el significado de los nombres de las calles establecidos en los registros la ciudad. “Calle de los Ingenieros” y “Calle de los Antropólogos” fueron una fuente de orgullo, ya que, según los vecinos, “ahora todo suena más oficial”.⁵

Fue con este tipo de tácticas inversas que los residentes informales trataron de desafiar los esfuerzos de las autoridades para legitimar la producción segregada de espacios urbanos, basada en el argumento de que los distintos grupos sociales tienen diferentes capacidades para prevenir el riesgo de inundaciones. Dichas tácticas inversas eran una forma de exhibir mejoras en la seguridad ambiental de su barrio para disminuir así la probabilidad de ser desplazados por la fuerza. Los residentes informales sostenían que tenían derecho a un espacio urbano porque construyeron sus hogares y su vida cotidiana allí, y ya se habían recuperado de las terribles inundaciones y las turbulencias políticas. Los residentes de Gaviotas Sur cuestionaron las estrategias institucionales según las cuales los asentamientos informales deberían ser gobernados por separado para que la prevención de inundaciones sea eficiente. En su opinión, este tipo de procedimientos ocultaban las estructuras jerárquicas de la gobernanza y aumentaban la segregación social.

Durante las visitas a los asentamientos informales, los funcionarios del Gobierno juzgaron que las mejoras en las viviendas eran tácticas hábilmente calculadas por los residentes. Al mismo tiempo, se sintieron obligados a reconocer estos actos informales, pues en la política cotidiana, las mejoras en la vivienda proporcionan una justificación social para la ocupación del suelo. Por lo tanto, estas tácticas inversas no carecieron de importancia en la resistencia cotidiana. Los habitantes que sean capaces de hacer mejoras significativas en sus viviendas ubicadas en tierras baldías tienen más posibilidades de ganar, poco a poco, el reconocimiento oficial de sus lugares de residencia.

Del mismo modo, los residentes de los barrios ricos y de la clase media utilizaron varias tácticas inversas para apropiarse del espacio urbano mediante actos que demuestran sus aportes a la construcción de un ambiente seguro. Los

⁵ Entrevista realizada el 12 de agosto de 2011.

residentes de clase media en El Guayabal ampliaron gradualmente sus viviendas de un nivel a casas de dos o tres pisos con balcones; justificaron sus acciones no autorizadas con el argumento de que los pisos superiores sirven como alojamiento y como almacenamiento de contingencia durante las inundaciones. Estas renovaciones incrementaron el valor de las propiedades en los vecindarios y fortalecieron las peticiones de los residentes para obtener mejoras en los servicios.

En los fraccionamientos ricos de Tabasco 2000, varias familias extendieron su patio trasero hacia terrenos federales adyacentes mediante la construcción de un espacio para parrilla al aire libre o un estacionamiento cubierto para sus automóviles. Justificaron estas acciones con el argumento de que al construir un terraplén y pavimentar el terreno, estaban controlando el flujo de agua del arroyo fangoso que cruza el terreno federal, e incrementaban así la seguridad ambiental del vecindario. Con estas explicaciones, los residentes de Tabasco 2000 confirmaron el concepto de ciudadanía diferenciada, el cual justifica los privilegios sobre la base de su situación social distinguida. Orgullosos de lo que habían alcanzado a través de logros personales, los residentes de los fraccionamientos ricos argumentaron que, dado que pagan enormes impuestos y contribuyen significativamente a la economía nacional, merecen una protección de las inundaciones más eficaz que la de los residentes informales. Julio, un exitoso hombre de negocios con alto nivel socioeconómico, presentó la situación de la siguiente manera:

Los oficiales tienen que servirnos porque nosotros somos los que levantamos la ciudad, los que pagamos una cantidad de impuestos. Aquí en Tabasco 2000, la gente no siente las inundaciones en la misma forma que en Gaviotas Sur. Es porque hay una diferencia de cultura. Aquí no tiramos basura a la calle porque provoca inundaciones [...] En Gaviotas Sur [...] ahí no hay drenaje ni agua potable, y no pagan impuestos (Julio 2011).

Justificando sus posiciones, los residentes acomodados y los de clase media exigieron que las autoridades proporcionaran a sus comunidades sistemas eficientes de almacenamiento de agua y generadores de respaldo para eliminar

trastornos innecesarios en sus vidas cotidianas. Al mismo tiempo, hicieron hincapié en que los pobres deberían dejar de pedir ayuda gubernamental para todo, porque para ser un ciudadano exitoso se requiere capacidad de progreso personal.⁶

Por su parte, los residentes de Gaviotas Sur cuestionaron los puntos de vista de los residentes acomodados sobre sus posiciones privilegiadas, enfatizando el derecho de todos los ciudadanos a un medio ambiente seguro. Cuestionaron la privatización de los servicios, alegando que el Gobierno tiene la responsabilidad de proporcionar los servicios básicos y la prevención de desastres en cada barrio. Al mismo tiempo, lucharon por el reconocimiento oficial de sus modos alternativos de vida. En los asentamientos precarios, donde la infraestructura básica rara vez es producto de la política pública, la gente elaboró diversas tácticas para hacer frente a las deficiencias: conectaron sus tuberías de agua y sus cables de electricidad informales a las redes oficiales; en ausencia de servicios de seguridad pública y de sistemas de alerta temprana de inundaciones, practicaron una gestión de seguridad informal, convirtiéndose en vigilantes e informándose mutuamente sobre cualquier signo de aumento en los niveles de agua de los ríos, lo que podría indicar la proximidad de una inundación.⁷

El análisis de las experiencias sobre riesgos y vulnerabilidades de diferentes residentes reveló una geografía social compleja, donde la gente navega por la ciudad de acuerdo con su propia evaluación de la distinción entre lugares seguros versus riesgosos. En las raras ocasiones en que personas acomodadas visitaron asentamientos informales, se sintieron sumamente inseguros. En su opinión, los barrios pobres eran lugares abrumadores que requieren una atención extrema; lugares subdesarrollados y sobreutilizados, donde *las calles y callejones se dividen como un plato roto* y cuya *ineficiencia provoca un peligro*

⁶ Entrevistas realizadas los días 8, 11 y 17 de agosto de 2011, y el 19 de octubre de 2011.

⁷ Para análisis interesantes de cómo las ideas sobre la basura cambian según el tiempo y el contexto, y de cómo el arte y la planificación radical pueden transformar la imaginación de los asentamientos informales, ver Jones (2011) y Miraftab (2009).

*ambiental y un desorden social para toda la ciudad.*⁸ Las personas acomodadas se horrorizaron ante los riesgos que quienes viven en chozas en las orillas del río estaban dispuestos a enfrentar; mientras tanto, los residentes de esas zonas destacaron su profundo conocimiento del río y expresaron que sus vidas no eran simplemente miserables, sino vidas que también vale la pena vivir. Como me explicó Josefina, de Gaviotas Sur: *A pesar de que mi barrio puede ser feo, para mí es bonito.*⁹

Los residentes de clase media que viven cerca del centro de la ciudad se distinguieron por su fuerte apego hacia su barrio. Cuando les mostré fotografías de la vieja Villahermosa, se entusiasmaron y comenzaron a contarme historias en las que recordaban qué tiendas habían operado en qué calles y hasta qué nivel habían subido las aguas en diferentes ocasiones. Mientras que los residentes acomodados de Tabasco 2000 aprobaban el uso de espacios verdes cerrados, donde podían organizar fiestas privadas, los residentes de clase media valoraban los eventos al aire libre organizados en el centro, donde cualquiera puede ir a bailar en las calles. Por su parte, a los residentes de Gaviotas Sur les gustaban las calles bulliciosas, donde las animadas actividades promueven la sensación de que son lugares acogedores. Para ellos, los pocos espacios verdes de sus vecindarios eran una fuente de temor porque ahí están en riesgo de tropezar con una inundación repentina o de sufrir un asalto. Por razones de seguridad, los padres prefieren que sus hijos jueguen en una calle transitada en lugar de hacerlo en un parque aislado.

Mientras que las autoridades gubernamentales trataban de convencer a la población de que las contingencias ambientales son manejables, para los residentes de cualquier nivel socioeconómico, los riesgos de inundación son incertidumbres rodeadas de mucha confusión. Cada año, durante la temporada alta de lluvias, el temor por las inundaciones aumenta en toda la ciudad. Tales percepciones son difíciles de transformar con campañas oficiales de buena gobernanza, sobre todo porque los residentes son muy sensibles a los

⁸ Entrevista realizada el 11 de febrero de 2011.

⁹ Entrevista realizada el 12 de agosto de 2011.

rumores relacionados con las tensiones y negociaciones en torno a la gobernanza de las inundaciones.¹⁰

Sin embargo, los riesgos y las vulnerabilidades ambientales afectan a los diferentes residentes de distintas maneras. Los funcionarios públicos y los consultores, que hacen hincapié en la autorresponsabilidad para la recuperación después de los desastres, ignoran el hecho de que la normalización de la vida cotidiana después de una catástrofe depende mucho de la situación socioeconómica de los residentes y, por lo tanto, no es una simple cuestión de determinación individual (Walker 2009). De acuerdo con los resultados de nuestro cuestionario, 30 % de los hogares de Tabasco 2000 y 15 % en El Guayabal tenían un seguro de vivienda,¹¹ mientras que ni uno solo de los residentes informales de Gaviotas Sur siquiera era elegible para asegurarse. Después de las inundaciones, alrededor del 88 % de los residentes de Gaviotas Sur pasaron semanas o meses en albergues de emergencia o viviendo con parientes hasta que pudieron regresar a sus hogares o encontrar otro lugar donde vivir. Por su parte, ninguno de los residentes de Tabasco 2000 consideró siquiera ir a un albergue. Muchos fueron a un hotel o a una casa secundaria en otras partes de México; como lo contó José Manuel con cierto alivio: *Gracias a Dios, tengo otra casa en Cancún, donde me quedé durante la inundación.*¹² Por lo tanto, la capacidad de recuperarse después de la catástrofe está muy ligada a la situación socioeconómica; además, las diferencias de género fueron significativas. Las mujeres, responsables por el bienestar doméstico, a menudo sufrieron fuertes traumas. Tania, una madre de dos niños en Gaviotas Sur que trabajaba como empleada doméstica en Tabasco 2000, explicó su estado de fragilidad de la siguiente manera:

¹⁰ La mitad de la población tabasqueña reclamó que gran parte de los fondos para la prevención de las inundaciones acabó en las bolsas de los oficiales gubernamentales y de las compañías de construcción (*Tabasco Hoy* 2008, 2010; *Presente* 2010).

¹¹ Estos porcentajes son relativamente altos, tomando en cuenta que tener un seguro de vivienda no es una práctica común en México.

¹² Entrevista realizada el 11 de agosto de 2011.

El agua vino como una culebra que está atacando. No hubo tiempo para salvar nada. Allá corrían colchones, refrigeradores, mesas, armarios, en el río. Ellos empezaron a anunciar que "¡Desalojen, desalojen!" Es fácil dar este tipo de orden, pero: ¿cómo lo haces si tienes que dejar tu casa? (Tania 2011).

La regulación de la vida cotidiana a través de la gobernanza institucional también fue difícil porque la gente creó un tejido urbano fluctuante mediante redes móviles, que ignoraba los territorios fijos de pertenencia.¹³ Los residentes de bajos ingresos de Gaviotas Sur están vinculados a los barrios de clase alta y de clase media por medio de trabajos temporales como servidores domésticos o vigilantes, así como a través de los servicios informales de herrería, carpintería, reparación de neumáticos y medicina alternativa. En correspondencia, los residentes de Tabasco 2000 organizan actividades de beneficencia en favor de los pobres, con intención de que se recuperen de las contingencias causadas por la inundación.

En este ajetreo de interacciones sociales, los residentes informales tomaron nota de las estructuras institucionales que proporcionan privilegios a las personas acomodadas, en forma de infraestructuras y de la prevención del riesgo de inundaciones. Al mismo tiempo, la falta de estas infraestructuras limita las oportunidades de los pobres para vivir con dignidad, especialmente con la reducción de las políticas sociales producto de las reformas neoliberales. Sin embargo, aunque estaban conscientes de las desiguales consecuencias de la política socialmente diferenciada, a menudo los propios pobres convalidaban este enfoque en la práctica. En muchas entrevistas, los residentes de Gaviotas Sur ratificaron el mensaje del gobernador, al afirmar que la inundación de 2007 alcanzó tal magnitud en su barrio porque no obedecieron las instrucciones de las autoridades, sino que difundieron rumores falsos. Así lo explicó Adriana:

¹³ Para notas similares sobre otras ciudades, ver Gandy (2006, 2008), Simone (2010b) y Sletto y Nygren (2015).

Perdimos mucho cuando la inundación porque no hicimos caso. El gobernador anunció: “¡Váyanse, porque va a venir una inundación!”. Pero la gente dijo: “¿Cómo va a saber el gobernador si no es nada, como Dios?”. Fue culpa de nosotros, ya que no obedecimos las instrucciones (Adriana 2011).

Independientemente de su posición social, muchas personas afirmaron que el Gobierno los había abandonado; simultáneamente, criticaban el control sumamente estricto. Para muchos residentes, las nuevas técnicas de vigilancia, basadas en escenarios de riesgo, preparaban el camino para una gobernanza de las inundaciones que ignora las necesidades locales. La multiplicidad de actores involucrados en la política pública aumentó el sentimiento de desconfianza entre los residentes, que se preguntaban quién se beneficia con los programas de manejo del agua y quién asume los costos.

Sin embargo, había diferencias considerables respecto a cómo los residentes se posicionaban en relación con la toma de decisiones. Muchos habitantes de Tabasco 2000 eran miembros de cámaras de comercio o de otras asociaciones profesionales vinculadas estrechamente con los políticos. Ellos tenían una visión clara de cómo mejorar la prevención de riesgos en sus propios barrios, pero menos interés en la planificación urbana integral.¹⁴ Hicieron hincapié en la calidad de los servicios en su localidad y en la eficiente mitigación de riesgos. Los residentes de Gaviotas Sur formularon irritados comentarios acerca de la forma en que los canales que desvían agua de la inundación de los barrios ricos transfieren el riesgo a las comunidades pobres.¹⁵ Por su parte, los residentes de clase media pidieron al Gobierno políticas públicas que mejoren su vida cotidiana, en lugar de la renovación superficial de edificios históricos. Santiago, residente de El Guayabal, presentó la situación de la siguiente manera:

¹⁴ Para posturas similares, pero correspondientes a las ciudades de Querétaro y San Luis Potosí, México, ver Guarneros-Meza (2009, 474–475).

¹⁵ Similares argumentos fueron presentados por los activistas en los periódicos tabasqueños. Según ellos, los esfuerzos por controlar el flujo de agua de los canales protegen a algunas personas mientras sacrifican a otras (*Tabasco Hoy* 2011).

En los proyectos de restauración solamente están pintando las fachadas. Eso no es lo que más se necesita. Aquí se necesita un buen sistema de alcantarillas para manejar aguas negras. Cuando la inundación de 2007, entró agua sucia en nuestras casas [...] Pero a nadie le importa el saneamiento, ya que estos asuntos son invisibles. Los políticos prefieren pintar edificios para su campaña publicitaria (2011).

Curiosamente, mientras el Gobierno trató de disminuir el gasto público con la subcontratación de empresas privadas y ONG, los residentes percibían la participación activa del Estado en la gestión de inundaciones y en la planificación urbana como un signo de legitimidad. Era parte de su visión de cómo se llevan a cabo los proyectos socialmente adecuados, aunque muchas veces de forma lenta y excesivamente burocrática. Los residentes de Gaviotas Sur también carecían de acceso a los proyectos tecnológicos de control de inundaciones. Especialmente, observaron que los muros de contención y las estaciones de bombeo de agua se instalaron en las regiones prósperas de la ciudad. Contrariamente a la opinión de las autoridades y de los consultores, quienes querían que los residentes fueran más autogobernados, los habitantes esperaban que el Estado se preocupara por la seguridad ambiental y el bienestar social de los ciudadanos. Al mismo tiempo, cuestionaron los esfuerzos gubernamentales de control paternalista, como se muestra en la siguiente sección.

Redes de resistencia

Las estrategias de gobernanza institucional no determinan la posición social de la gente y tampoco deciden su comportamiento; más bien, en la vida cotidiana los actos de gobernanza se reformulan muchas veces a través de “las invasiones silenciosas de lo ordinario”, que se producen *fuera, a pesar de y en articulación con* las estrategias formales de gobernanza (Bayat y Biekart 2009, 823). Esto torna complicado afirmar que unas estrategias caen dentro del orden de la “opresión” y otras son tácticas de “liberación” (Foucault 1991, 245). Al tratar de evitar las dicotomías entre intervenciones impuestas

y luchas de emancipación, este estudio conceptualiza las resistencias como formaciones sociales dispersas y fragmentadas en un constante proceso de creación (Zeiderman 2010; Sletto 2012). Esto es particularmente cierto en Villahermosa, donde las demandas de justicia ambiental rara vez se articulan en un movimiento de protesta organizado.

Muchos estudios sobre las luchas por justicia ambiental se centran en movimientos altamente progresivos y que logran una atención significativa en los medios de comunicación (Nygren 2014); sin embargo, como lo mencionan Auyero y Swistun (2009, 4-8), las demandas de justicia no tienen necesariamente una agenda unificada. Independientemente de su condición social, los habitantes de Villahermosa estaban confundidos acerca de las formas de gobernanza neoliberal. Esta confusión se produjo en parte por la hibridación de la gobernanza, donde la multiplicidad de actores y estrategias difuminaron las responsabilidades. Las estrategias de las autoridades para retardar las decisiones reforzaron aún más dicha confusión. Fui testigo en varias ocasiones de cómo las demandas de personas marginadas, por condiciones de vida más justas y mayor seguridad ambiental, fueron postpuestas por los políticos, mientras las autoridades indicaron a los demandantes que estos asuntos no pertenecían a su ámbito de responsabilidad. Tales estrategias agotaron rápidamente a los ciudadanos que luchaban por una mayor igualdad en la gestión de las inundaciones.

En tales circunstancias, varios residentes prefirieron recurrir a las relaciones clientelares convencionales, cuyos repertorios de alguna manera conocen. Los mecanismos de mercado, donde la gobernanza de los riesgos de inundaciones y los servicios son transferidos a empresas privadas con sus propios esquemas de monitoreo, hicieron más difícil para la gente saber quién está detrás de cada operación. Para enfrentar esta situación, los habitantes de Villahermosa invirtieron en relaciones personales con las autoridades, asumiendo que tales lazos servirían como vías importantes para la negociación. Tal era la opinión de Claudio, un oficial de alto rango que vivía en Tabasco 2000:

Cada quien arregla las cosas como puede: a través de amistades, recomendaciones o por debajo de la mesa. Algunos políticos que viven en Tabasco 2000

tienen mucha influencia. Nosotros [...] presionamos a las autoridades a través de nuestras redes personales (2011).

En este contexto, aunque los pobres criticaron las relaciones clientelares que favorecieron la protección contra inundaciones en los barrios ricos, ellos también utilizaron ese tipo de relaciones para negociar pequeños favores en beneficio propio. Como me dijo Candelario, un líder de Gaviotas Sur: *A veces hay que ordeñar a las autoridades para obtener pequeños beneficios y concesiones minúsculas (2011).*

Dentro de condiciones socialmente segregadas, existen diferencias considerables en la disposición y la capacidad de los residentes para organizarse en torno a las cuestiones de seguridad ambiental. Las personas de las clases acomodadas de Villahermosa defendieron la idea de una ciudadanía diferenciada que les concede privilegios y, por ende, eran reacios a unirse a los movimientos que reclamaban justicia. Mientras tanto, los residentes informales se negaban a organizarse en movimientos visibles, debido al carácter ilegal de sus asentamientos. A menudo, las conmovedoras narrativas de los residentes de Gaviotas Sur giraban en torno a cómo se recuperan de las catástrofes y de las dificultades cotidianas a través de tácticas informales. Josefina, de Gaviotas Sur, contó la siguiente historia acerca de su intento por seguir adelante a pesar de todo:

Cuando la inundación, pensé que tengo que ser fuerte, pase lo que pase. No me importaba si se echó a perder todo, mientras que no le pase nada a mi gente [...] Trabajo en un puesto de tortas en Pino Suárez. Hay días que se vende y días que no [...] Aquí muchos son albañiles, carpinteros, herreros, zapateros, matapuercos, [tienen] pollerías, vendedores de fruta, costureras, tortilleros de profesión [...] Somos pobres, pero tenemos el derecho de hacer cosas para salir adelante (Josefina 2011).

Estas narrativas constituyen ejemplos ilustrativos de las impresionantes capacidades de las personas para recuperarse mentalmente, y en ellas demuestran su gran dignidad. En su comentario, Josefina subraya que los que hacen

tortillas o venden pollo son *gente profesional*, y que los pobres *tienen derecho* de avanzar. Al mismo tiempo, estas narrativas plantean serias preocupaciones de muchos residentes informales, a quienes después de la catástrofe, las autoridades les informaron que “la inundación fue simplemente un evento natural [...] o pasó porque ustedes no obedecieron las reglas. Por lo tanto, el Gobierno no es culpable, y por eso ustedes necesitan cuidarse a sí mismos y recuperarse”.¹⁶ A través de este tipo de declaraciones, las causas de la inundación son desvinculadas de los procedimientos institucionales de la gobernanza y de la planificación urbana. Aunque inmediatamente después de la catástrofe se proporcionó mucha ayuda internacional y nacional para aliviar a las víctimas, posteriormente la gente fue invitada a utilizar sus propias capacidades para normalizar sus vidas.

A pesar de que las demandas de los residentes informales por mejores condiciones de vida en ocasiones derivaron en manifestaciones politizadas, la lucha a través de estrategias invisibles fue mucho más común. En el centro de estas resistencias estaba la aseveración de que el riesgo de inundación no puede ser separado de las deficiencias institucionales en torno al manejo del agua. Como una forma diaria de resistencia, los vecinos de Gaviotas Sur se negaron a pagar por los servicios de electricidad, y frente a las acusaciones de las compañías eléctricas que afirmaban que estaban robando descaradamente la electricidad, los habitantes de Gaviotas Sur interpretaban sus instalaciones eléctricas ilegales —llamadas “diablitos”— como una forma justa de actuar en una situación donde el servicio eléctrico era intermitente y donde la operación de las presas para maximizar la producción eléctrica provocó los riesgos de inundación. Como murmuró Tomás en octubre de 2011, al ver a la gente caminar con el agua hasta la cintura cuando Gaviotas Sur se inundó una vez más:

Esta inundación fue provocada por el Gobierno. Huele a agua de las represas. Las autoridades aceptan inundaciones aquí porque quieren producir electricidad para otras partes del país (2011).

¹⁶ Entrevistas realizadas el 12 y el 23 de agosto de 2011, y el 18 de octubre de 2011.

Estas tácticas me recordaron las experiencias de Nancy Scheper-Hughes (2004, 45) durante su investigación etnográfica en las favelas brasileñas, donde los residentes informales mencionaban en repetidas ocasiones: “aquí nadie es inocente”. Aunque no se les permitió expresar una crítica abierta, los residentes de Gaviotas Sur eran conscientes de muchas injusticias en la gestión de inundaciones.

Así, los movimientos sociales en Villahermosa crearon redes flexibles de resistencia, las cuales integran movimientos invisibles no pueden ser capturados fácilmente. Schlosberg (1999, 92, 120) utiliza la metáfora deleuziana de rizomas para explicar estos movimientos de base que se extienden y se conectan en formas imperceptibles. En México, los defensores de la justicia han aprendido a trabajar con redes móviles y tácticas efímeras, y a enfrentar las medidas de intimidación que el Gobierno utiliza para reprimir manifestaciones abiertas (Risdehl 2012). Esto es especialmente cierto en Tabasco, donde la importancia de la producción de petróleo incita al Gobierno a diluir las movilizaciones políticas, ya sea mediante la persuasión o a través de la fuerza. Las luchas fragmentadas por la justicia aparecen y desaparecen dependiendo de las condiciones, ya que, como me explicó Ronaldo, un defensor de la justicia que criticó el traslado forzoso de los residentes informales, *tal irregularidad hace que sea difícil para las autoridades saber quién ejerce resistencia social y cómo*.¹⁷

Otro factor que forma parte de las redes dispersas de resistencia cotidiana en Villahermosa son las estructuras de la política urbana segregada. Estas estructuras mantienen demandas socioeconómicas diferenciadas, lo que dificulta alianzas multiclases o multisector en los movimientos de resistencia. Frente a tal variedad de impugnaciones, en las autoridades se da un “continuo intento de gobernar a los que evaden ser gobernados utilizando redes rizomáticas” (Weszkalnys 2008, 258). Lo anterior nos indica que los esfuerzos móviles para cuestionar la gobernanza que incorpora de manera desigual a los residentes en la política y economía neoliberales son estratégicos, aunque rara vez se manifiestan en forma de movimientos organizados.

¹⁷ Entrevista realizada el 2 de agosto de 2011.

Conclusiones

La gobernanza ambiental urbana es un campo de estudio de gran relevancia tanto para la investigación académica como para la política pública. Las complejas relaciones entre el Estado y la población marginada en zonas urbanas han sido objeto de fecundos análisis académicos (Auyero 2010; Bogaert 2011; Nielsen 2011). Este estudio amplía este campo mediante el análisis de las posiciones forjadas por la gobernanza neoliberal de las inundaciones por residentes diferenciados socioeconómicamente en una ciudad muy estratificada socialmente, como Villahermosa, en México. La distribución socioespacial de los riesgos y las vulnerabilidades, las percepciones de diferentes residentes sobre un acuaje cambiante, con inundaciones cada vez más severas, así como las complejas interacciones entre los residentes de la élite, de la clase media y aquellos de ingresos bajos, rara vez se han incluido en el estudio de la gobernanza urbana.

Este estudio demostró cómo los discursos y las prácticas políticas dominantes constituyen categorías estrictas de espacios y de sujetos gobernables. Esto ha producido estrategias socialmente diferenciadas sobre la gobernanza de inundaciones dentro de la ciudad. Los mecanismos neoliberales de gobernanza se mezclan con legados de control autoritario y con relaciones clientelares produciendo estructuras complejas. El Gobierno mantiene un papel crucial, si bien reconfigurado, como un tomador de decisiones estratégico en la gobernanza. Al mismo tiempo, la hibridación de la gobernanza oscurece las distinciones entre el Estado y el mercado, mientras fomenta la participación ciudadana en términos estrictamente definidos y limitados.

Como lo señala Swyngedouw (2005, 1193), la participación es una de las áreas clave en los debates sobre gobernanza. A través del entrelazamiento del control tecnológico de las inundaciones con los programas de participación ciudadana, la gobernanza de las inundaciones se ha convertido en un tema de adaptación cultural y resiliencia social. Parece que el objetivo del Gobierno, con este tipo de mecanismos de aprendizaje social, es guiar a los residentes hacia una gobernabilidad neoliberal, donde la supervisión gubernamental indirecta, la regulación basada en el mercado y la autorresponsabilidad ciudadana

promuevan un cierto tipo de orden socioespacial y una visión particular sobre el acuaje. La vulnerabilidad ambiental es vista como algo arraigado en la actitud cultural de los residentes informales, quienes, según las autoridades, deberían adoptar nuevas modalidades de autoabastecimiento y una relación distinta con el agua. Este énfasis en la *automejora* desplaza la responsabilidad de la gestión del riesgo de inundaciones desde el Gobierno hacia los ciudadanos, mientras que las formas híbridas de regulación protegen las acciones gubernamentales del escrutinio público.

Este estudio complementa las perspectivas posfoucaultianas de gobernabilidad al combinar el análisis de las estrategias y las prácticas de la gobernanza con una investigación etnográfica sobre las negociaciones y la resistencia diaria en torno a la gobernabilidad y la subjetividad. El cuidadoso análisis de los distintos sectores de la ciudad permite explorar cómo los diferentes grupos de residentes interpretan y reconfiguran los discursos y las prácticas relacionadas con la gobernanza neoliberal, así como con sus percepciones sobre el acuaje. Se demostró que los residentes no fueron víctimas pasivas de las intervenciones institucionales. Aunque los significados que ellos atribuyen a los riesgos y las vulnerabilidades relacionados con las inundaciones están fuertemente determinados por los discursos prevalecientes, se evidenciaron diversas tácticas inversas e interpretaciones modificadas en los diferentes barrios. Las interacciones dentro de la ciudad simultáneamente rompen y mantienen la segregación socioespacial existente.

Al centrarse en las diferencias sociales y en la brecha entre lo que se intenta y lo que se realiza, este estudio ha demostrado cómo las racionalidades de la gobernanza de las inundaciones son constantemente modificadas (Li 2007, 1-6). A través de la atención a las múltiples perspectivas de residentes socialmente dispersos, el estudio pone de manifiesto la diversidad de estrategias que usan los residentes para oponerse a los esfuerzos institucionales y gobernar su forma de pensar y actuar. Al mismo tiempo, se demostró la existencia de un acceso desigual a las redes de influencia y la naturaleza fragmentada de las estrategias subversivas, en un escenario donde las protestas organizadas son desalentadas institucionalmente. A pesar de los grandes esfuerzos para hacer gobernables ciertos actores y formas de vida, los discursos y las prácticas

dominantes de la gobernanza fueron incapaces de erradicar los esfuerzos dispersos de resistencia.

Considerando los riesgos, incertidumbres y vulnerabilidades que afectan a una creciente porción de la población en las ciudades de América Latina, el escrutinio profundo de las formas diferenciadas de gobernanza neoliberal y de las disputas en diversas circunstancias se vuelve crucial. Estos análisis pueden proporcionar un conocimiento importante sobre la gobernanza socialmente diferenciada y sobre la subjetividad que implican las luchas y disputas. Al mismo tiempo, pueden contribuir a ampliar la discusión sobre las relaciones multifacéticas entre gobernanza y justicia, vulnerabilidad material y dominación simbólica, así como sobre la responsabilidad institucional y la resistencia ciudadana.

Referencias bibliográficas

- Aparicio, J., P. F. Martínez-Austria, A. Güiton y A. I. Ramírez. 2009. "Floods in Tabasco, Mexico: A Diagnosis and Proposal for Courses of Action". *Journal of Flood Risk Management* 2 (2): 132-138.
- Aquilar, A. 2008. "Peri-Urbanization, Illegal Settlements and Environmental Impact in Mexico City". *Cities* 25 (3): 133-145.
- Ashley, R. M, J. Blaskby, R. Newman, B. Gersonius, A. Poole, G. Lindley, S. Smith, S. Ogden y R. Nowell. 2014. "Learning and Action Alliances to Build Capacity for Flood Resilience". *Journal of Flood Risk Management* 5 (1): 14-22.
- Auyero, J. 2010. "Visible Fists, Clandestine Kick, and Invisible Elbows: Three Forms of Regulating Neoliberal Poverty". *European Review of Latin American and Caribbean Studies* 89: 5-26.
- Auyero, J. y D. A Swistun. 2009. *Flammable: Environmental Suffering in an Argentine Shantytown*. Oxford: Oxford University Press.
- Bayat, A. y K. Biekart. 2009. "Cities of Extremes". *Development and Change* 40 (5): 815-825.

- Bogaert, K. 2011. "The Problem of Slums: Shifting Methods of Neoliberal Urban Government in Morocco". *Development and Change* 42 (3): 709-731.
- Brenner, N., J. Peck y N. Theodore. 2010. "Variegated Neoliberalization: Geographies, Modalities, Pathways". *Global Networks* 10 (2): 182-222.
- Bullard, R. D. y B. Wright, eds. 2009. *Race, Place, and Environmental Justice After the Hurricane Katrina: Struggles to Reclaim, Rebuild, and Revitalize New Orleans and the Gulf Coast*. Boulder: Westview Press.
- Caldeira, T. P. R. 2008. "From Modernism to Neoliberalism in São Paulo: Reconfiguring the City and its Citizens". En *Other Cities, Other Worlds: Urban Imaginaries in a Globalizing Age*, editado por A. Huyssen, 51-77. Durham: Duke University Press.
- _____. 2015. "Social Movements, Cultural Production, and Protests: São Paulo's Shifting Political Landscape". *Current Anthropology* 56 (S11): 126-136.
- Carruthers, D. V., ed. 2008. *Environmental Justice in Latin America: Problems, Promise, and Practice*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Centner, R. 2012. "Microcitizenships: Fractious Forms of Urban Belonging after Argentine Neoliberalism". *International Journal of Urban and Regional Research* 36 (2): 336-362.
- Cepal (Comisión Económica para América Latina). 2008. "Tabasco: características e impacto socioeconómico de las inundaciones provocadas a finales de octubre y a comienzos de noviembre de 2007 por el frente frío número 4". México: Cepal.
- Cerwonka, A. y L. H. Malkki. 2007. *Improvising Theory: Process and Temporality in Ethnographic Fieldwork*. Chicago: University of Chicago Press.
- Collier, S. J. 2009. "Topologies of Power: Foucault's Analysis of Political Government beyond Governmentality". *Theory, Culture, Society* 26 (6): 78-108.
- _____. 2012. "Neoliberalism as Big Leviathan, or...? A Response to Was-quant and Hilgers". *Social Anthropology* 20 (2): 186-195.

- Comisión Nacional de Derechos Humanos-Tabasco. 2011. "Recomendaciones". Consultado el 7 de mayo de 2011. https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2011/Rec_2011_061.pdf.
- Conagua (Comisión Nacional del Agua). 2012. "Plan hídrico integral de Tabasco". Consultado el 5 de mayo 2012. <https://www.gob.mx/conagua/documentos/plan-hidrico-integral-de-tabasco-phit-45023>.
- Dean, M. 2010. *Governmentality: Power and Rule in Modern Society*. Londres: Sage.
- Earle, L. 2012. "From Insurgent to Transgressive Citizenship: Housing, Social Movements and the Politics of Rights in São Paulo". *Journal of Latin American Studies* 44 (1): 97-126.
- Ferguson, J. 2010. "The Uses of Neoliberalism". *Antipode* 41 (S1): 166-184.
- Foucault, M. 1991. "Space, Knowledge and Power". En *The Foucault Reader*, editado por P. Rabinow, 239-256. Londres: Penguin Books.
- _____. 2003. "Governmentality". En *The Essential Foucault: Selections from Essential Works of Foucault 1954-1984*, editado por P. Rabinow y N. Rose, 229-245. Londres: New Press.
- _____. 2007. *Security, Territory, Population*. Londres: Palgrave.
- Fraser, N. 2009. *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*. Nueva York: Columbia University Press.
- Gandy, M. 2006. "Planning, Anti-Planning and the Infrastructure Crisis Facing Metropolitan Lagos". *Urban Studies* 43 (2): 271-296.
- _____. 2008. "Landscapes of Disaster: Water, Modernity, and Urban Fragmentation in Mumbai". *Environment and Planning A* 4 (1): 108-130.
- García Meza, N. E. 1993. *Vida urbana y cambio social: el caso de Villahermosa, 1970-1990*. Villahermosa: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
- GET (Gobierno del Estado de Tabasco). 2008. "Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco 2007-2012". Gobierno del Estado de Tabasco. <https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DA/53/27376.pdf>.
- _____. 2010. *Evaluación y actualización: Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012*. Villahermosa: Gobierno del Estado de Tabasco.

- Goldstein, D. M. 2003. "In Our Own Hands: Lynching, Justice and the Law in Bolivia". *American Ethnologist* 30 (1): 22-43.
- Guarneros-Meza, V. 2009. "Mexican Urban Governance: How Old and New Institutions Coexist and Interact". *International Journal of Urban and Regional Research* 33 (2): 463-482.
- Himley, M. 2008. "Geographies of Environmental Governance: The Nexus of Nature and Neoliberalism". *Geography Compass* 2 (2): 433-451.
- Holston, J. 2011. "Contesting Privilege with Right: The Transformation of Differentiated Citizenship in Brazil". *Citizenship Studies* 15 (3-4): 335-352.
- IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2014. "Summary for Policymakers". En *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability*, editado por C. B. Field, V. R. Barros, D. J. Dokken, K. J. Mach, M. D. Mastrandrea, T. E. Bilir, M. Chatterjee, K. L. Ebi, Y. O. Estrada, R. C. Genova, B. Girma, E. S. Kissel, A. N. Levy, S. MacCracken, P. R. Mastrandrea y L. L. White, 1-32. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jessop, B. 2007. "From Micro-Powers to Governmentality: Foucault's Work on Statehood, State Formation, Statecraft and State Power". *Political Geography* 26 (1): 34-40.
- Jones, G. A. 2011. "Slumming About: Aesthetics, Art and Politics". *City* 15 (6): 696-708.
- Li, T. M. 2007. *The Will to Improve: Governmentality, Development and the Practice of Politics*. Durham: Duke University Press.
- Mathews, A. S. 2009. "Unlikely Alliances: Encounters between State Science, Nature Spirits, and Indigenous Industrial Forestry in Mexico, 1926-2008". *Current Anthropology* 50 (1): 75-101.
- McCarthy, J. y S. Prudham. 2004. "Neoliberal Nature and the Nature of Neoliberalism". *Geoforum* 35 (2): 275-283.
- Mckee, K. 2009. "Post-Foucaultian Governmentality: What Does it Offer Critical Social Policy Analysis?". *Critical Social Policy* 29 (3): 465-486.
- Miraftab, F. 2009. "Insurgent Planning: Situating Radical Planning in the Global South". *Planning Theory* 8 (1): 32-50.

- Murray, M. J. 2009. "Fire and Ice: Unnatural Disasters and the Disposable Urban Poor in Post-Apartheid Johannesburg". *International Journal of Urban and Regional Research* 33 (1): 165-192.
- Nielsen, M. 2011. "Inverse Governmentality: The Paradoxical Production of Peri-Urban Planning in Maputo, Mozambique". *Critique of Anthropology* 31 (4): 329-358.
- Nygren, A. 2004. "Competing Claims on Disputed Lands: The Complexity of Resource Tenure in the Nicaraguan Interior". *Latin American Research Review* 39 (1): 123-153.
- _____. 2014. "Eco-Imperialism and Environmental Justice". En *Routledge International Handbook of Social and Environmental Change*, editado por S. Lockie, D. A. Sonnenfeld y D. R. Fisher, 58-69. Londres: Routledge.
- _____. 2018. "Inequality and Interconnectivity: Urban Spaces of Justice in Mexico". *Geoforum* 89: 145-154. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.06.015>.
- Nygren, A. y G. Wayessa. 2018. "At the Intersections of Multiple Marginalizations: Displacements and Environmental Justice in Mexico and Ethiopia". *Environmental Sociology* 4 (1): 148-161
- Pahl-Wostl, C., M. Caps, A. Dewulf, E. Mostert, D. Tabora y T. Taillieu. 2007. "Social Learning and Water Resources Management". *Ecology and Society* 12 (2): 5 (en línea). <http://www.ecologyandsociety.org/vol12/iss2/art5/>.
- Pelling, M. 2003. "Toward a Political Ecology of Urban Environmental Risk: The Case of Guyana". En *Political Ecology: An Integrative Approach to Geography and Environment-Development Studies*, editado por K. S. Zimmerer y T. J. Bassett, 73-93. Nueva York: Guilford.
- Perevochtchikova, M. y J. L. Lezama de la Torre. 2010. "Causas de un desastre: inundaciones del 2007 en Tabasco, México". *Journal of Latin American Geography* 9 (2): 73-98.
- Rinne, P. y A. Nygren. 2016. "From Resistance to Resilience: Media Discourses on Urban Flood Governance in Mexico". *Journal of Environmental Policy and Planning* 18 (1): 4-26.

- Risdell, N. M. 2012. "Un crimen a la tierra de Morelos: agravio, conflicto y justicia ambiental 2006-2011". Tesis de doctorado. Escuela Nacional de Antropología e Historia.
- Roberts, B. R. 2010. "Moving On and Moving Back: Rethinking Inequality and Migration in the Latin American City". *Journal of Latin American Studies* 42 (3): 587-614.
- Rose, N. 1999. *Powers of Freedom: Reframing Political Thought*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rose, N., P. O'Malley y M. Valverde. 2006. "Governmentality". *Annual Review of Law and Social Science* (2): 83-103.
- Roy, Ananya. 2011. "Slumdog Cities: Rethinking Subaltern Urbanism". *International Journal of Urban and Regional Research* 35 (2): 223-238.
- Scheper-Hughes, N. 2004. "Parts Unknown: Undercover Ethnography of the Organs-Trafficking Underworld". *Ethnography* 5 (1): 29-73.
- Schlosberg, D. 1999. *Environmental Justice and the New Pluralism: The Challenge of Difference for Environmentalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Simone, A. 2010a. "2009 Urban Geography Plenary Lecture on Intersections, Anticipations, and Provisional Publics: Remaking District Life in Jakarta". *Urban Geography* 31 (3): 285-308.
- _____. 2010b. *City Life from Jakarta to Dakar: Movements at the Crossroads*. Nueva York: Routledge.
- Sletto, B. 2012. "Insurgent Planning and Its Interlocutors: Studio Pedagogy as Unsanctioned Practice in Santo Domingo, Dominican Republic". *Journal of Planning Education and Research* 33 (2): 228-240.
- Sletto, B. y A. Nygren. 2015. "Unsettling Neoliberal Rationalities: Engaged Ethnography and the Meanings of Responsibility in the Dominican Republic and Mexico". *International Journal of Urban and Regional Research* 39 (5): 965-983.
- Swyngedouw, E. 2005. "Governance Innovation and the Citizen: The Janus Face of Governance-Beyond-the-State". *Urban Studies* 42 (11): 1191-2006.
- Walker, G. 2009. "Beyond Distribution and Proximity: Exploring the Multiple Spatialities of Environmental Justice". *Antipode* 41 (4): 614-636.

- Watson, V. 2009. "Seen from the South: Refocusing Urban Planning on the Globe's Central Urban Issues". *Urban Studies* 46 (11): 2259-2275.
- Wayessa, G. y A. Nygren. 2016. "Whose Decisions, Whose Livelihoods? Resettlement and Environmental Justice in Ethiopia". *Society & Natural Resources* 29 (4): 387-402.
- Weszkalnys, G. 2008. "A Robust Square: Planning, Youth Work, and the Making of Public Space in Post-Unification Berlin". *City & Society* 20 (2): 251-274.
- Wiggle, J. 2010. "The 'Graying' of 'Green' Zones: Spatial Governance and Irregular Settlement in Xochimilco, Mexico City". *International Journal of Urban and Regional Research* 38 (2): 573-589.
- Zeiderman, A. 2010. "On Shaky Ground: The Making of Risk in Bogotá". *Environment and Planning A* 44 (7): 1570-1588.

Consumir y resistir Los mercados alternativos de alimentos en la Ciudad de México*

Joaliné Pardo Núñez

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco

Leticia Durand

Universidad Nacional Autónoma de México

Introducción

Actualmente, existe un gran interés en las ciencias sociales por entender la interacción del neoliberalismo con la naturaleza. Desde la teoría, el neoliberalismo es una vertiente de la economía política que supone que el bienestar humano puede incrementarse mediante el impulso de la capacidad emprendedora de los individuos, y observa al mercado como el mejor mecanismo para la distribución de los bienes y servicios requeridos para cumplir las necesidades de las personas (Haynen y Robbins 2005; Perreault y Martin 2005). En términos prácticos, el neoliberalismo implica la privatización de los espacios y recursos, la reducción de los costos de producción, la eliminación de regulaciones que dificulten los negocios y el desplazamiento de las responsabilidades de Gobierno hacia fuera del Estado (Castree 2008).

La comodificación, o creación de nuevos mercados y mercancías en ámbitos donde antes no existían, es un fenómeno característico de los procesos de

* Una versión preliminar de este trabajo fue publicada en el volumen coordinado por Cervantes, Márquez y Molina (2018) de las memorias del Congreso Nacional de Ciencias Sociales 2018, San Luis Potosí, México.

neoliberalización de la naturaleza. Así, recursos que hasta hoy eran considerados bienes públicos, como el agua o la energía, se entregan a actores privados para su administración y comercialización, lo que da lugar con frecuencia a procesos de desposesión, privatización y acaparamiento (Castree 2008). No obstante, sorprende observar que la creación de ciertas mercancías es, al mismo tiempo, una acción importante en los proyectos de resistencia contra el neoliberalismo (Guthman 2007).

El consumo de mercancías que incluyen —ya sea por sus rasgos materiales o en la forma en que son producidas— algún tipo de valor ecológico, social, ético o territorial, de acuerdo con algunos, se ha transformado en una importante forma de resistencia a la globalización, debido a que atiende a otras lógicas, tanto productivas como comerciales, y prioriza la protección al medio ambiente, los recursos naturales o las condiciones de trabajo de quienes los producen (Guthman 2007). Estas mercancías son particularmente comunes en el ámbito de la alimentación, donde destacan los productos orgánicos¹ y agroecológicos.² Estos alimentos provienen de sistemas de manejo integral o en transición hacia él, que tienden a ser diversificados y optan por la sustitución de insumos sintéticos por aquellos producidos dentro de la finca o en la región, y procuran emular las condiciones de los ecosistemas poco transformados para fomentar las interacciones entre los distintos elementos del agroecosistema (Altieri y Toledo 2011).

La producción de alimentos orgánicos y agroecológicos por grupos campesinos suele estar vinculada a la construcción de espacios de venta indepen-

¹ Nos referiremos a *productos orgánicos* como aquellos que persiguen una certificación por haber sido cultivados sin agroquímicos, a partir de una serie de especificaciones definidas por normas gubernamentales o comerciales para lograr el etiquetado de orgánico.

² Nos referiremos a *productos agroecológicos* como aquellos que se producen sin agroquímicos y buscando integrar elementos del entorno para generar un agroecosistema; sin embargo, pueden ser parte de sistemas de cultivo en transición y contener trazas de químicos de momentos anteriores del cultivo, por lo que desde el punto de vista técnico no conseguirían una certificación; o bien sistemas sin aplicación de insumos químicos que no persiguen una certificación, pero que de manera libre incorporan prácticas que forman parte de la normatividad certificadora con insumos locales.

dientes, los llamados mercados alternativos, que facilitan el acceso e impulsan la producción y consumo de este tipo de alimentos en las ciudades. Los mercados y redes³ alternativos de alimentos orgánicos, locales y de comercio justo emergieron en Estados Unidos y Europa como una respuesta y forma de resistencia al régimen alimentario global-industrial impulsado por el modelo económico neoliberal, que conlleva la tecnificación de todas las etapas de producción de alimentos y una desvinculación de los consumidores con el origen de los alimentos, con los productores y con las consecuencias ambientales y sociales de los modos de producción (Qazi y Selfa 2005; Allen 2010; Goodman y DuPuis 2013). Desde mediados de 1990, este tipo de mercados surgió en países del Sur, y México no es la excepción. Hace poco más de una década, han aparecido en todo el país iniciativas —todas desde la sociedad civil— que pugnan por revitalizar el papel de los pequeños campesinos, de la agricultura orgánica y de la agroecología en la alimentación. Acompañando las tendencias mundiales, se han abierto espacios para hacer llegar a los consumidores alimentos libres o reducidos en agroquímicos, normalmente con precios más elevados que los alimentos de corte “convencional”. Una modalidad creciente en México son los mercados o tianguis semanales, donde los productores interactúan directamente con los consumidores, eliminan intermediarios y ofrecen productos orgánicos, agroecológicos o artesanales que, se supone, brindan mayores beneficios a nivel nutricional y de salud a los consumidores (Gasca y Torres 2014).

Las redes alternativas de alimentación suelen ser caracterizadas como parte de un movimiento social de resistencia ante los circuitos globalizados e industrializados de provisión de alimentos (Qazi y Salfa 2005; Allen 2010). Sin embargo, existen variaciones entre las propuestas que sostienen para modificar la relación de las personas con la alimentación y con el ambiente. Holt-Giménez y Shattuck (2011) y Holt-Giménez et al. (2012) reconocen, por ejemplo,

³ Entendemos por *red* a una serie de actores entrelazados que, consciente o inconscientemente, realizan acciones para promover el consumo de estos alimentos con esquemas de tiendas o de canastas semanales, fomentando talleres, escribiendo artículos o realizando otras actividades que complementan a las del espacio del mercado.

que las iniciativas que pugnan por cambiar el sistema alimentario o algunos de sus elementos pueden ser, en función de la orientación de sus discursos y acciones, reformistas, progresistas o radicales. Mientras los reformistas se adscriben a un modelo de desarrollo sustentable neoliberal y ponen énfasis en la incorporación de los pequeños productores a los mercados y en los beneficios a la salud de los productos alternativos, los progresistas se insertan en el discurso de la justicia alimentaria y ambiental, promoviendo esquemas de participación ciudadana en la toma de decisiones. Los radicales, por su parte, procuran transformar de fondo el sistema alimentario, adoptan el discurso de la soberanía alimentaria y trabajan en la construcción de proyectos comunitarios más amplios que den lugar a la formación de comunidades solidarias en múltiples aspectos (Holt-Giménez 2010; Holt-Giménez y Shattuck 2011).

Las formas que adoptan los mercados y redes de alimentación alternativa varían y, en este sentido, la literatura especializada da cuenta de una intensa discusión sobre si estas redes constituyen espacios de resistencia o de reproducción de las prácticas neoliberales, y existe evidencia en ambos sentidos. Una parte de estos estudios muestra que los mercados están reforzando los procesos de comodificación de los alimentos al asignarles una etiqueta que promueve predominantemente los beneficios generales a la salud o el ambiente, y un sobreprecio que excluye a una parte importante de la población, al dejarla sin posibilidades de abastecerse de los alimentos considerados de mejor calidad (Allen y Guthman 2006; Alkon y Mares 2012). No obstante, otra serie de trabajos destaca la importancia que tienen los mercados alternativos como espacios de resistencia y de construcción de alternativas al régimen alimentario global, ya que difunden valores alejados de la acumulación individual y nuevas prácticas de intercambio y comercialización (Nigh y González 2005; Renting, Schermer y Rossi 2012; Carvalho de Rezende 2014).

En la Ciudad de México son cada vez más frecuentes los mercados alternativos que promueven la venta directa de alimentos orgánicos o agroecológicos y que buscan remunerar de forma justa a los productores que ofrecen directamente sus cosechas y productos; sin embargo, al día de hoy es poco lo que se sabe sobre los proyectos sociales y políticos que dan sustento a estos mercados, las causas que enarbolan y las estrategias que utilizan para avanzar en

sus objetivos más allá de ser un espacio comercial; trabajos como los de Kirwan (2004), Alkon (2008) y Goodman y DuPuis (2013), todos ellos en el Reino Unido o en Estados Unidos, son abordajes similares al que proponemos, aunque no encontramos literatura para México que permita visibilizar los aspectos sociopolíticos que subyacen a los mercados. En este trabajo nos ocupamos de cinco iniciativas de tianguis alternativos en la Ciudad de México para explorar su origen, propuestas y prácticas, analizando si estas tienden más a cooperar con o a resistir los procesos de neoliberalización de la naturaleza.

La información fue recabada durante 2016 a partir de visitas reiteradas a los mercados y de entrevistas semiestructuradas con sus actuales coordinadores, sus fundadores y, en algunos casos, con los productores que venden en ellos (ocho entrevistas). Utilizamos también la información recabada durante conversaciones informales con asistentes y productores en los diversos mercados. Durante las entrevistas intentamos obtener información sobre *a*) el origen del mercado; *b*) sus objetivos a mediano y largo plazo; *c*) las narrativas en las que enmarcan su quehacer, y *d*) las propuestas que tienen para trascender el espacio del mercado y ampliar los impactos de su causa. Procuramos también indagar sobre las alianzas que cada mercado establece con otros actores y las tensiones que pueden existir entre ellos.

El sistema agroalimentario corporativo y la dieta global

El sistema agroalimentario dominante se caracteriza por el dominio de empresas transnacionales, que tienen base en un país y oficinas subsidiarias en otros múltiples sitios, donde absorben marcas locales para ampliar su línea de productos con aquellos culturalmente arraigados en cada territorio. Estas empresas o corporativos están integradas en complejos que incluyen las cadenas agroalimentarias y de valor de los ingredientes que utilizan para sus múltiples productos; así conforman un oligopolio y una serie de clústeres industriales (Heffernan en Vázquez 2015). De esta forma, casi todos los sectores de la industria agroalimentaria están dominados por dos o tres grandes empresas

que monopolizan la producción y comercialización de alimentos en muchos países, entre ellos México.

Actualmente, seis corporaciones transnacionales (Monsanto, Dow, Dupont, Syngenta, Bayer y Basf) son propietarias del mercado global de semillas y de 75 % del mercado de agroquímicos (Howard 2015; Ribeiro 2015). Estas empresas elaboran y ofrecen los paquetes tecnológicos de siembra de mayor venta en el mundo, que incluyen fertilizantes, herbicidas e insecticidas para controlar el éxito y la homogeneidad de la cosecha. Estos corporativos, ahora transnacionales, fueron creciendo mediante la compra de las pequeñas compañías químicas y semilleras en distintos países hasta formar, durante las últimas décadas, enormes emporios. Basta decir que para 1981 existían más de siete mil empresas a nivel mundial, y ninguna de ellas controlaba siquiera el 1 % del mercado mundial (Schimmelpfenning, Pray y Brennan 2004; Howard 2009; Ribeiro 2015). Actualmente, la mayor parte de las semillas, con frecuencia modificadas para tener rendimientos óptimos cuando son sembradas con el paquete tecnológico correspondiente, se comercializa por los seis grandes corporativos mencionados, ya sea directamente o mediante subsidiarias. Los Gobiernos firman acuerdos de reforzamiento legal para certificar que las cosechas de cada ciclo se hagan con semilla recientemente adquirida, lo que les implica comprar año con año los paquetes de las transnacionales para respaldar sus subsidios (Bautista, Díaz y Lastiri 2015; Howard 2015).

En el terreno de los alimentos procesados, diez corporativos transnacionales son dueños de más de trescientas marcas internacionales de comidas rápidas, lácteos, galletas, refrescos, botanas, embutidos y helados: Nestlé, Pepsico, General Mills, Kellogg's, AB Foods, Mondelez (antes Kraft), Mars, Danone, Unilever y Coca-Cola son las principales empresas globales que gradualmente han adquirido marcas nacionales o locales de éxito para incluirlas en sus filas, estandarizando ingredientes y procesos productivos (Alexander, Yach y Mensah 2011; Oxfam 2013). Estas corporaciones representan el 10 % de la economía mundial y conforman una industria valorada en siete billones de dólares, que controla el 70 % de la oferta de alimentos en el mundo (Nestlé 2012; Oxfam 2013).

En el ámbito de lo orgánico se reproducen estos mismos procesos de concentración de la producción: un puñado de las grandes corporaciones alimentarias, como Kraft, Heinz, Kellogg's, Coca-Cola y Pepsico han iniciado sus marcas orgánicas o bien han comprado firmas locales para masificar la producción orgánica —el mundo de lo orgánico corporativo— en un esquema no muy distante al de la producción industrializada de alimentos convencionales (Johnston 2014). Este tipo de producción orgánica, si bien prescinde del uso de químicos agresivos, continúa manteniendo un esquema intenso de monocultivo en sistemas que carecen de diversidad y de funciones ecológicas básicas, y que dependen de combustibles fósiles para el traslado de los productos alrededor del mundo (Rosset y Altieri 1997). La situación de los trabajadores en el campo tampoco mejora, pues se han convertido en jornaleros para los corporativos agroalimentarios orgánicos, pese a estar menos expuestos a químicos nocivos para su salud.

En el área de la venta final al consumidor se encuentra Walmart, una cadena de supermercados que se ha transformado en la empresa de mayor poderío e influencia económica del mundo, con un volumen de ventas mayor al producto interno bruto (PIB) de países como Noruega, Arabia Saudita y Austria (Delgado 2010). Walmart es la vigésima economía del planeta y ha logrado imponer sus propias políticas de funcionamiento interno en los precios de compra-venta y en las prestaciones y obligaciones laborales que da a sus empleados (Alvarado 2006). Al presionar los precios de compra a la baja a fin de mantener sus ofertas, obliga a sus proveedores a disminuir los pagos que se hacen al resto de los eslabones de la cadena de producción (Alvarado 2006; Gasca y Torres 2014).

La alimentación, como negocio global, deja importantes ganancias a las corporaciones agroalimentarias, pero ofrece al consumidor opciones limitadas de alimentos industrializados y constituidos en su mayoría por un puñado de ingredientes (Sethi 2015). Además, la consolidación de los mercados en pequeñas empresas subsidiarias —que dan la idea de ser locales— dificulta que el consumidor pueda distinguir quién produce qué, cómo y en dónde, por lo que guía su elección de compra principalmente a través de la imagen del producto y su mercadotecnia (Peake, Detre y Carlson 2014).

En México, seis empresas acaparan el 80 % de la oferta alimenticia: Unilever, Grupo Bimbo, Maseca (Gruma), Hérdez y Minsa. Bimbo adquirió entre 2009 y 2014 nueve marcas menores, con lo que se convirtió en la panificadora más grande del mundo, con 1 600 centros de distribución y 144 plantas en 19 países (Vázquez 2015). Bimbo y Gruma controlan el 87 % de las ventas de pan, tortilla y harina de maíz, y 86 % de las unidades derivadas de ello (Bautista, Díaz y Lastiri 2015). Las corporaciones de procesamiento de maíz, harinas y alimentos son las principales acaparadoras de granos en México.

Cargill, Minsa y Maseca controlan la producción nacional de maíz para sus productos, fijan el precio a pagar a los productores de manera independiente y, en ocasiones, por debajo del mercado internacional (Bautista, Díaz y Lastiri 2015). Esta situación se vincula con el abandono del campo por parte de los campesinos de pequeña escala, para quienes no es rentable la actividad al no poder siquiera obtener una producción de autoconsumo suficiente para la alimentación familiar anual. Desde 1994, 1.3 millones de campesinos mexicanos han dejado de trabajar sus tierras, pues las han vendido o rentado para convertirse en mano de obra asalariada en los mismos terrenos, con sueldos ínfimos que irónicamente no les permiten adquirir la canasta básica para garantizarse una buena alimentación (Delgado 2010). Los trabajadores asalariados y los pequeños agricultores constituyen el 80 % de la población que padece hambre crónica en el mundo, el 65 % de los pobres extremos en México están en el campo y la gran mayoría de ellos son indígenas (Coneval 2011; Oxfam 2013). Buena parte de los jornaleros agrícolas trabajan en condiciones nulas de seguridad y salud, y reciben pagos injustos, como bien lo han denunciado en múltiples ocasiones los empleados de la industria agrícola en Baja California, México, como ejemplo reciente.⁴

Los supermercados son importantes puntos de abastecimiento de alimentos para los mexicanos debido a su cercanía, a la amplitud de horarios en los que trabajan y a los precios económicos que ofrecen, resultado de grandes volúmenes de compra y de la imposición de condiciones de pago específicas que establecen a los productores. El abasto en supermercados aleja a los

⁴ Para mayor información al respecto, sugerimos *Milenio* (2018).

consumidores de los productores y del entorno natural en el que se producen los alimentos, transformando los criterios de elección de compra y el significado mismo de los alimentos seleccionados. Así, se prioriza el aspecto y se tiende a elegir aquellos alimentos que parecen más perfectos en su apariencia y color, con lo que se vincula el aspecto limpio y sin imperfecciones con la calidad y el sabor. Los alimentos, vistos a través de estándares particulares de limpieza y homogeneidad, dejan de ser productos de la tierra y del trabajo de personas concretas para transformarse en un artículo de consumo más (Dowler et al. 2011, 404).

La estandarización de los alimentos y su consumo da lugar a lo que Khoury et al. (2013) llaman “la dieta estandarizada global”, constituida por gran cantidad pero poca variedad de alimentos procesados, con alto gramaje de azúcares, carbohidratos y grasas, energéticamente densos pero carentes de micronutrientes asimilables para el metabolismo y el desarrollo físico. Este tipo de alimentos, si bien llenan el estómago y proveen al cuerpo de reservas, provocan problemas alimentarios y personas con desbalances nutricionales que están, al mismo tiempo, “llenas y muertas de hambre” (Patel 2008). Así, mientras 795 millones de personas en el mundo están en estado agudo y crónico de desnutrición, otros dos billones padecen sobrepeso y malnutrición (Patel 2008; Sethi 2015).

Además de los problemas para la salud, el régimen alimentario corporativo actual tiene impactos importantes en los ecosistemas y los recursos naturales, como la deforestación que se produce para el establecimiento de grandes plantaciones, el uso de grandes cantidades de agua (70 % del agua potable se destina al riego), el desgaste de suelos y la eutroficación de aguas por lixiviados de agroquímicos (Gomiero, Paoletti y Pimentel 2008; Thiele-Bruhn et al. 2012; Reganold y Wachter 2016). El alto uso de agroquímicos explica la pérdida de un tercio de la tierra arable a nivel mundial, pues los procesos de erosión y contaminación que produce son difícilmente reversibles (FAO 2006; Cameron et al. 2015).

Los tianguis alternativos como espacios contestatarios

El régimen alimentario corporativo no ha estado exento de críticas y opositores. Tanto la sociedad civil como los trabajadores del campo han protestado y promovido iniciativas para contrarrestar los efectos adversos de la producción y el consumo de los alimentos corporativos. En esta búsqueda por resignificar el consumo y acceder a alimentos cultivados a través de condiciones justas de trabajo y sin una alta carga de agroquímicos, ha cobrado relevancia la idea de “localizar” el consumo y hacerlo orgánico (DuPuis y Goodman 2005). Pese a que existen diferentes modalidades para llevar a cabo estas iniciativas, una de las más importantes son los tianguis o mercados de comercio directo, de productor a consumidor, llamados también mercados *alternativos* u *orgánicos*. En estos sitios se promueve la venta o intercambio de alimentos y productos artesanales de manera directa entre los productores y los consumidores.

Los mercados alternativos, orgánicos o agroecológicos son espacios que buscan recuperar el valor cultural del alimento, del territorio en el que fue producido y de la producción a pequeña escala, dando rostro y voz a los productores y dotando a los alimentos de un sentido cultural que ha sido opacado por la industria alimentaria global. Los tianguis alternativos colocan al productor y su producto frente al consumidor, y resaltan elementos éticos, estéticos y culturales de la alimentación para revalorar nuestra relación con el alimento, con quien lo produce y con el sistema natural que sustenta su producción.

Una pieza fundamental para la venta de alimentos en los mercados alternativos es la intención de eliminar mediante la venta directa a los intermediarios o coyotes. Los intermediarios, que en los territorios rurales cuentan con el capital y la infraestructura para el transporte y el acopio de productos agrícolas a escala mediana y grande, compran la producción a precios mínimos e incrementan el precio final de los alimentos hasta en 300 % (Cervantes en Debayle 2014). Entre estos intermediarios se incluyen las grandes empresas y sus marcas, que procesan o simplemente etiquetan los alimentos para comercializar. En los espacios de venta directa es posible conservar los precios del alimento, pero toda la ganancia se dirige a quienes lo cultivaron, apoyando con precios justos el trabajo de los campesinos y agricultores.

Otro elemento promovido por los mercados alternativos es la salud. Al ofrecer alimentos producidos —generalmente— en sistemas agrícolas sin uso de agroquímicos, se infiere que los productos serán más saludables, tanto para los consumidores como para el ambiente, pues se fomentan prácticas agrícolas que intentan preservar los rasgos de los ecosistemas, sin generar lixiviados en los acuíferos derivados de la aplicación de químicos, ni desgastar los suelos o afectar a la fauna edáfica ni a las interacciones naturales en el agroecosistema y el ecosistema circundante.

En tanto que se trata de fomentar que los productores convivan con los consumidores, se establecen límites variables de distancia entre los sitios de producción y los puntos de venta, lo cual asegura también la frescura de los alimentos. Además, permitir que los alimentos viajen largas distancias desde su punto de origen implicaría reproducir cadenas de distribución similares a las de corporativos globales, que requieren del uso de grandes cantidades de energía y combustibles para abarcar mercados amplios y lejanos. Los productores que acuden a los tianguis para ofrecer sus productos son todos de pequeña escala, por lo que una ventaja más de estos mercados es la posibilidad de beneficiar a productores que, por carecer de grandes volúmenes de cosecha o producción, no tienen acceso a los mercados convencionales, que compran al mayoreo para revender a precios bajos. De esta manera, existe un componente de justicia social en los mercados alternativos, que pugnan por abrir posibilidades de comercialización a productores que estarían normalmente marginados del mercado convencional.

Los mercados alternativos son cada vez más comunes en México. El primero de ellos fue el Tianguis del Círculo de Producción y Consumo Responsable, fundado en la ciudad de Guadalajara en 1996. Algunos años más tarde, surge en la Universidad de Chapingo, en Texcoco, el Tianguis Orgánico Chapingo, como un esfuerzo de la comunidad universitaria para vincularse con los productores locales (Nelson et al. 2008). En 2004 se crea la Red de Tianguis y Mercados Orgánicos de México (RTMO), que ha ido sumando colectivos y estimulado la creación de nuevos mercados en el país junto con los procesos de certificación social para garantizar la producción orgánica de sus miembros. Los productores de la RTMO son de pequeña escala y comercializan la

mayor parte de su producción en los espacios del tianguis semanal, con pocos excedentes para tiendas o restaurantes (Nelson et al. 2008). Actualmente, la red cuenta con más de cincuenta mercados asociados en la República Mexicana, que agrupan a más de mil productores (Rosina 2014; RTMO 2014); sin embargo, fuera de la red también existen muchos espacios independientes en distintas ciudades del país.

El número de mercados alternativos en México varía constantemente, pues algunos proyectos encuentran problemas y dejan de funcionar, ya sea temporal o permanentemente, mientras que otros se inician o logran persistir. Estos mercados se encuentran sobre todo en las ciudades más grandes del país, pero gradualmente adquieren presencia en zonas urbanas más pequeñas. En marzo de 2016 realizamos una serie de búsquedas en internet⁵ con los criterios “mercado/tianguis orgánico” y “mercado/tianguis alternativo”. Encontramos difundidos, entre páginas específicas y reportes de periódicos estatales en línea, 101 espacios de venta de alimentos orgánicos o agroecológicos en México, todos pertenecientes a la RTMO. En promedio, cada mercado ofrece cerca de 35 productos diferentes, por lo que estimamos que cerca de 3 500 colectivos, personas o familias utilizan este tipo de espacios como opción para ofrecer sus productos.

La ventaja más promovida por estos tianguis en México es el supuesto beneficio que tiene en la salud el consumo de productos orgánicos o al menos con un uso moderado de químicos en relación con el consumo de alimentos agroindustriales. De hecho, algunos estudios realizados para entender las motivaciones de los consumidores en tianguis orgánicos o alternativos reportan que la mayoría de las personas acuden a comprar por motivos de salud, bajo el supuesto de que los productos, ya sea frescos o procesados, con menor carga de químicos tienen efectos positivos sobre el cuerpo. En estos estudios, la

⁵ En esta búsqueda de información no solo consideramos la venta de productos orgánicos, sino de productos —orgánicos o no— de agricultores locales, ya fuera en bruto o procesados. Se incluyeron los esquemas de entrega de canastas con cosechas locales, pero se excluyeron, debido a falta de información, aquellos restaurantes y tiendas que compran y revenden los productos de agricultores locales.

preocupación por las condiciones del entorno ambiental es el segundo motivo de compra mencionado, y pocas personas hacen referencia al interés de apoyar la actividad de pequeños productores o de los campesinos como un factor para acudir a los mercados alternativos (Gutiérrez et al. 2012; Juárez 2014; Roldán 2014; Roldán et al. 2016).

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Autores como DuPuis y Goodman (2005) y Guthman (2007) argumentan que los mercados alternativos favorecen la formación de nichos de compra para sectores de alta capacidad adquisitiva, y construyen una visión local que esconde las inequidades sociales que también se reproducen en esta escala. Del mismo modo, este tipo de mercados constituye espacios de comercialización accesibles únicamente para algunos productores, aquellos que tienen los conocimientos, los recursos y las alianzas adecuadas para ocuparlos y beneficiarse de la venta de productos exclusivos en espacios también exclusivos. Debido a esto, los mercados alternativos no tienen, por ahora, un potencial importante para reactivar la actividad agropecuaria de los pequeños productores en un país tan extenso y diverso como México. No obstante, la emergencia de los tianguis alternativos y de otros esquemas para acceder a este tipo de alimentos y productos debe verse como un movimiento paralelo a otros que demandan mejores condiciones de vida y salud para la población, y mayor justicia en los ingresos de las familias, de tal forma que tanto consumidores como productores puedan resultar beneficiados.

El sistema alimentario de la Ciudad de México

La Ciudad de México es la capital del país, ubicada en la parte central del territorio mexicano. Tiene una área de 1 485 km² y una población cercana a los 9 millones de habitantes (INEGI 2010). La ciudad está dividida en 16 delegaciones, pero el área conurbada abarca también 59 municipios del Estado de México y 29 de Hidalgo (Fernández Álvarez 2012). Esta zona conurbada conforma la zona metropolitana de la Ciudad de México, cuyo número de habitantes supera los 20 millones, y constituye la cuarta ciudad más poblada

del planeta (Álvarez Enríquez 2009). A pesar de su alta densidad poblacional, mayor a 5 900 hab/km², la ciudad aún alberga importantes espacios rurales donde prácticas agropecuarias y formas de vida tradicionales se entremezclan con la vida urbana.

La Ciudad de México tiene una composición demográfica muy heterogénea, con grupos sociales diversos culturalmente y diferenciados económicamente, lo que produce fuertes desigualdades y una marcada fragmentación social (Álvarez Enríquez 2009; Fernández Álvarez 2012). Aunque existen extensas zonas claramente pobres (oriente) y otras donde prácticamente solo habitan las élites (norponiente y centro), la Ciudad de México no es una ciudad polarizada. Las clases medias y bajas están dispersas por toda la ciudad, y entre ellas encontramos islotes de asentamientos de clases altas (Saravia 2008). Más del 90 % de la población cuenta con acceso a los servicios básicos, pero la calidad y distribución es diferenciada, y los grupos más pobres carecen de agua potable, drenaje y acceso a servicios médicos. La enorme dimensión de la Ciudad de México genera muchos problemas urbanos, entre los que destacan el déficit de agua, la mala calidad e insuficiencia del transporte público, la falta de viviendas, el manejo deficiente de la basura, la contaminación atmosférica y la inseguridad (Álvarez Enríquez 2009). La demanda de alimentos es también un reto importante para la ciudad.

La producción de alimentos en la ciudad es marginal. El abasto de alimentos a la ciudad desde otras partes del país y del extranjero se realiza a través de un complejo sistema de centros de distribución y puntos de venta, que incluyen la Central de Abastos de la Ciudad de México,⁶ mercados públicos, tianguis y mercados sobre ruedas, como opciones administradas por el Gobierno local (Ávila Curiel 2010). El sector privado ofrece acceso a los alimentos a través de pequeños comercios conocidos como tiendas de abarrotes, que se encuentran en todas las colonias de la ciudad; de grandes supermercados, como Walmart, Comercial Mexicana, Soriana y Chedraui, y de cadenas

⁶ La Central de Abastos de la Ciudad de México es considerada como el complejo comercial mayorista más grande del mundo. Tiene una superficie de 327 ha y en ella se manejan diariamente 30 000 toneladas de alimentos (Ávila Curiel 2010).

de tiendas de conveniencia, como Oxxo, 7 Eleven y Extra, que se localizan por casi toda la ciudad en sitios de alta afluencia y ofrecen alimentos preparados para consumo inmediato.

La compra es la forma más frecuente a través de la cual los habitantes de la ciudad se aprovisionan de alimentos. A pesar de que el abasto es suficiente y bien distribuido, esto no asegura el acceso para toda la población. Se calcula que al menos 5.3 % de los habitantes de la ciudad padece pobreza alimentaria (Ávila Curiel 2010).

Hacia la década de 1970, los cereales y las leguminosas aportaban más del 50 % del consumo energético de la población urbana, pero en los últimos años buena parte de la población ha adoptado un patrón de alimentación alto en calorías, con un bajo consumo de cereales integrales, leguminosas, frutas, verduras y pescado, y un exceso de alimentos de origen animal, grasas saturadas y de alta densidad calórica y abundantes carbohidratos saturados (Ávila Curiel 2010). Este tipo de dieta ha producido graves consecuencias para la población, especialmente para los sectores más pobres, que hoy sufren de sobrepeso, obesidad y dolencias asociadas al llamado síndrome metabólico, como diabetes e hipertensión (Ávila Curiel 2010).

Resultados

Mercado el 100: local, sano, rico, justo y limpio

Todos los domingos en la plaza del Lanzador, ubicada en la colonia Roma Sur, una de las colonias de moda en la Ciudad de México, uno puede acudir al Mercado el 100. Aquí, pequeños productores rurales de los alrededores de la Ciudad de México ofrecen hortalizas, frutas, miel, granos y carne producidos de forma orgánica o agroecológica, así como pan, quesos, chocolate, tortillas y otros alimentos procesados libres de agroquímicos, hormonas o transgénicos. Los puestos, bien ordenados y arreglados, con toldos negros y el logotipo del Mercado el 100, se distribuyen a lo largo de una amplia acera en una esquina de la plaza. Desde las 9:30 de la mañana, los clientes acuden al mercado; algunos

llegan solos, caminando o en bicicleta, muchos llevan a sus perros, y también hay familias que acuden con sus hijos al mercado para desayunar y hacer sus compras. La plaza es bonita, el mercado también, y aunque constituye un espacio de compra y venta, para muchas personas el mercado parece ser también un paseo.

El Mercado el 100 surge en 2010 como un proyecto de la organización no gubernamental Lu'um A. C., interesada en promover el desarrollo rural comunitario a través de prácticas de comercio justo. Este interés por apoyar a los productores rurales se sumó a la preocupación “de un grupo de amigos” por promover oportunidades para una buena alimentación y acceso a productos locales en la ciudad, lo que dio origen al Mercado el 100. Este fue el primer mercado alternativo de la Ciudad de México y comenzó con doce productores en la plaza Río de Janeiro, también en la colonia Roma. Hoy no solo el número de productores ha crecido a 45, que ofrecen más de 350 productos diferentes, sino que el mercado funciona en dos nuevas sedes: Coyoacán, un barrio intelectual al sur de la ciudad, y Tlatelolco, una zona de clase media cercana al centro. De acuerdo con los organizadores, *desde el principio, el mercado fue un éxito, pues había mucha gente interesada en la buena alimentación.*

Existen ciertos requisitos para que los productores puedan ofrecer sus productos en el 100. Entre ellos se cuenta, por ejemplo, que empleen prácticas artesanales y ecológicas de producción, que el 80 % de los insumos utilizados en los alimentos procesados sea orgánico y que los productores sean propietarios de sus medios de producción. El mercado verifica una vez al año estas condiciones y la calidad de los productos mediante visitas por parte de los coordinadores —a veces abiertas al público—. Se cobra una cuota semanal a los productores con la que se cubren los gastos de la infraestructura del mercado (lonas, mesas, sillas, etc.) y la publicidad.

De acuerdo con sus promotores, el Mercado el 100 tiene como objetivo principal ofrecer un espacio para que los habitantes de la Ciudad de México accedan a alimentos sanos que, consideran, son aquellos producidos de forma orgánica o agroecológica, no industrializados y con una huella de carbono mínima, por lo que no son transportados desde más de cien millas⁷ a la

⁷ Se habla de millas y no de kilómetros porque el diseño del Mercado el 100 está inspirado

redonda (según indican sus lineamientos). Uno de los fundadores del mercado, y también dueño del llamado “primer *bed and breakfast* ecológico” de la ciudad (El Patio 77), explica en un video⁸ que antes del 100 no existían en la Ciudad de México opciones de alimentos sanos y responsables con el ambiente. Aunque había algunos supermercados que ofrecían productos orgánicos, estos no solo eran caros, sino que no eran productos frescos ni locales. La producción y consumo de alimentos orgánicos y agroecológicos es importante, desde la perspectiva de los organizadores y promotores del Mercado el 100, por sus beneficios a la salud de las personas. Consideran que la cantidad de hormonas y agroquímicos que consumimos en los alimentos resultan en enfermedades como el cáncer o las alergias.⁹ Los productos orgánicos y locales son también una solución a algunos problemas ambientales, como la contaminación de la tierra y aguas por agroquímicos, o al gasto energético excesivo que supone el transporte distante de alimentos.

Además de promover una alimentación sana, los organizadores del 100 pretenden acercar a consumidores y productores ofreciendo una experiencia de compra distinta en la que el consumidor sabe de dónde proviene el alimento, quién lo produce y cómo lo hace. Una relación que, dicen, se había perdido con el dominio de los supermercados como sitio principal de abasto en la ciudad. Esperan también que el mercado constituya una plataforma para que los pequeños productores puedan comercializar sus productos y expandir sus negocios. De hecho, explican que *a largo plazo, la meta sería que los productores abandonaran el mercado porque tienen ya otros sitios dónde vender y pueden ser independientes [de el 100]*. Sin embargo, los productores que ofertan sus productos en el mercado no participan en la toma de decisiones sobre él, pues, como explica uno de sus coordinadores, la toma de decisiones colectiva es muy difícil; por

en la experiencia de los *farmers' markets* norteamericanos, que establecen el límite de cien millas como origen de sus productos para asegurar la venta únicamente de productos locales.

⁸ Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=BGJUHjBMo1E>.

⁹ Información tomada de <https://www.youtube.com/watch?v=D4wOqfBuOhg> y <https://www.youtube.com/watch?v=BGJUHjBMo1E>.

lo tanto, aunque se consulta a los miembros, las decisiones finales en torno a aspectos como el ingreso de nuevos productos, los eventos a realizar, la evaluación de nuevas sedes o la relación con las autoridades de la ciudad *las toma la dirección*.

Hasta ahora, el Mercado el 100 no se ha preocupado por establecer redes de cooperación o de comunicación con otros tianguis alternativos u organizaciones de productores orgánicos, pues consideran más relevante para su operación la relación que construyen con las autoridades encargadas del espacio público o con actores privados que apoyan sus actividades.

El Mercado el 100 ha sido nombrado como “el primer mercado de la tierra” en la Ciudad de México, categoría que el movimiento Slow Food otorga a los espacios que certifica como iniciativas para salvaguardar las tradiciones y la diversidad culinaria de un país. En el espacio del 100 se ofrecen talleres abiertos al público, principalmente sobre ecotecnias, para promover prácticas ecológicas, desde siembra de plantas útiles hasta opciones de reciclaje y reúso de materiales, con intención de aportar opciones para una vida más integrada con el medio ambiente.

El Mercado el 100 es el único tianguis alternativo que ha conseguido gestionar el uso de espacios públicos ante autoridades delegacionales, quienes consideran a este tipo de iniciativas iguales que los mercados convencionales, y por lo tanto, no ven pertinente abrir espacios para distinguir las características de los productos. Hasta el momento, no han comenzado a pagar cuotas por el uso del espacio público, pero explican que esto no sería un problema, siempre y cuando las cuotas sean transparentes y permitan generar antigüedad. La tarifa que cobra el 100 a sus productores (450 pesos) es elevada, algunos también ofrecen sus productos en otros mercados alternativos, y comentan que ahí sus precios son menores porque pagan una cuota más moderada.

Como algunos de sus principales logros, los organizadores del 100 incluyen haber ampliado la base de productores, lo cual se relaciona directamente con la posibilidad de abrir nuevas sedes para alcanzar a una mayor población en la ciudad, así como para fortalecer su relación con las autoridades y asegurar el uso de calles y plazas, lo que les permite dar mayor visibilidad a los mercados de venta directa de productos orgánicos.

Mercado Alternativo de Tlalpan: la crisis no es ecológica, es política

El Mercado Alternativo de Tlalpan (MAT) funciona desde 2013 en el centro de Tlalpan, un asentamiento de origen indígena al sur de la ciudad, que durante la Colonia constituyó una importante villa en el valle de México. Actualmente, el centro de Tlalpan, con sus calles empedradas y edificios coloniales, es una zona donde lujosas casas y fraccionamientos comparten espacio con antiguas vecindades y viviendas de clase media y baja. Cada sábado, en la calle Triunfo de la Libertad, se establece el MAT dentro de la Casa de Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX).

Al igual que el Mercado el 100, el MAT fue fundado por un grupo de tres amigos universitarios que trabajaban en la venta de productos artesanales, como queso de cabra y aceite de oliva, y que participaban en colectivos de alimentos tradicionales y proyectos de agricultura urbana en la Ciudad de México. El proyecto del mercado fue apoyado por la Casa de Cultura de la UAEMEX, que prestó sus instalaciones como sede del MAT. Iniciaron con tres productores directos y otras personas que ofrecían productos procesados, a quienes contactaron través de una convocatoria en Facebook. Al principio, el MAT funcionaba un domingo al mes, pero como cuenta uno de sus fundadores, *nos fue muy bien y decidimos meter más productores y hacerlo cada quince días*. Para 2015, el MAT se establecía todos los sábados y contaba ya con 33 productores, todos ellos de zonas aledañas a la Ciudad de México. En 2016, el mercado abre una nueva sede, los domingos en el Bosque de Tlalpan, un importante parque del sur de la ciudad.

Los organizadores del MAT querían trascender la idea de los alimentos orgánicos como herramienta para producir nuevos nichos de mercado, y deciden llamar al mercado *alternativo* en lugar de *orgánico*, pues este último les parece un término que ha adquirido un matiz elitista y no logra transmitir la idea o la intención del MAT, que pretende cuestionar el modelo dominante de producción, comercialización y consumo de alimentos. La propuesta amplia del mercado es promover la articulación de redes para el abastecimiento de las necesidades básicas de alimentación, y no únicamente el consumo de orgánicos ni la salud individual que podrían perseguir quienes buscan este tipo de

productos. A diferencia de otros mercados visitados, el MAT cuenta con un documento en línea¹⁰ donde se expone la problemática que sus organizadores observan en el sistema alimentario actual y las vías alternas que promueve el mercado. En el texto explican que:

La gran industria agroalimentaria es responsable del acaparamiento de tierras y recursos, del desperdicio de alimentos y energía, de la pérdida de biodiversidad, la simplificación, degradación y destrucción de los ecosistemas, la crisis sanitaria de alimentos, la desaparición de formas tradicionales de conocimiento, la desaparición de alimentos tradicionales y un cúmulo de afectaciones más [...] Consideramos que el modo de producción debe de reformularse sobre una base agroecológica, con la participación activa de diferentes actores promoviendo la conservación y uso responsable de la biodiversidad (MAT s. f.).

De esta forma, el proyecto del MAT muestra una vertiente política importante, pues considera a la alimentación alternativa no solo como vía para acceder de manera individual a una mejor salud o para colaborar con la protección del ambiente, sino como una forma de resistencia a las reglas que establecen los consorcios agroalimentarios y las grandes cadenas de supermercados (Álvarez Icaza 2015). Uno de sus organizadores explica:

La diferencia principal de este mercado [con otros de la ciudad] es cómo conceptualizamos el problema alimentario, creemos que hay una reflexión muy superficial del problema alimentario, se queda en que lo orgánico es bueno para la salud y ya. Nosotros consideramos que el problema alimentario es producto de una crisis civilizatoria y tiene causas políticas y sociales.

Para el MAT y sus organizadores, no basta que los alimentos sean producidos sin agroquímicos o que se rieguen con agua recuperada de lluvia, pues esto “no garantiza que sea un producto sustentable [...] los productores

¹⁰ El documento titulado “Directrices del Mercado Alternativo de Tlalpan” puede consultarse en <http://www.mercadoalternativodetlalpan.com>.

orgánicos tienen que contemplar el bienestar del productor, tienen que vincular al campesino con el ciudadano y crear distintos canales de comercialización [...] Solo reivindicando la naturaleza democrática de los alimentos, es como podemos hacerle frente a un sistema que ha precarizado las condiciones de vida” (Saltijeral 2014). Una parte importante del trabajo del MAT es resaltar la idea de que la crisis ambiental actual es una crisis política y no ecológica, lo que hace necesario resignificar el derecho a una vida digna (Álvarez Icaza 2015). En este sentido, los organizadores de este mercado argumentan que el consumo de alimentos orgánicos por sí solo no permite crear *nuevas posibilidades de transformación gradual en dirección contraria al capitalismo*, pues los alimentos orgánicos son hoy un nuevo tipo de mercancía, cooptados por las grandes empresas que los ofrecen a precios accesibles solo para algunos.

El MAT ofrece cada semana productos como hortalizas, huevo, pan, miel, quesos, mermeladas, salsas, bebidas prebióticas y otros productos, siguiendo determinadas reglas que, de acuerdo con sus organizadores, definen el proyecto: priorizar los productos ambientalmente amigables sobre los que no lo son, lo local sobre lo lejano, a los productores sobre los intermediarios y lo artesanal sobre lo industrial. Cada productor participante paga una cuota de 150 pesos semanales para sostener la gestión del mercado, aunque hay descuentos para aquellos productores que no alcanzan una buena venta en días particulares. La cuota se utiliza para cubrir los gastos de la sede, así como mesas, toldos, difusión, entre otros. Según los entrevistados, al principio intentaron que todas las decisiones se tomaran de forma colectiva en asambleas; sin embargo, esto no fue sencillo. Muchos de los participantes no asistían o las tareas encargadas a las comisiones no se cumplían a cabalidad. Así, los organizadores decidieron encargarse de las decisiones más cotidianas para dar continuidad al MAT, y ahora solo se reúnen colectivamente para acordar su participación en ferias a las que son invitados, la incorporación de nuevos productores o los presupuestos para renovar la infraestructura o la imagen del mercado, así como para establecer cuotas y sanciones por impuntualidad o inasistencia, lo que constituye un problema recurrente.

Una parte importante del quehacer del MAT es la promoción de la organización comunitaria. Para lograrlo, el mercado ha abierto un espacio en el

que semanalmente se presentan artistas plásticos, músicos, conferencistas y talleristas, quienes ofrecen charlas y actividades sobre temas de alimentación y ecología. También han invitado a colectivos y movimientos sociales que apoyan causas como la oposición al cultivo de maíz transgénico en México, u otras de carácter político. Así, por ejemplo, durante el mes de noviembre de 2016, en el MAT se vendió la flor de cempasúchil, utilizada para adornar las ofrendas de Día de Muertos en México, cultivada por los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (Guerrero), cuyos compañeros fueron asesinados en 2014 en situaciones aún no esclarecidas por el Gobierno. Dicho evento fue una forma de expresar la solidaridad del MAT con el reclamo de los padres de los 43 alumnos desaparecidos, que se mantiene hasta el día de hoy. Con estas acciones, el MAT busca sensibilizar a las personas sobre la problemática alimentaria y crear consciencia de que *no basta comprar orgánico, es necesaria una participación política comunitaria*.

El MAT ha establecido vínculos con instituciones académicas, como la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), La Esmeralda (escuela de pintura) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), para ofrecer talleres; han participado en espacios de difusión en emisoras de radio no comerciales, como Radio UNAM y Radio Educación, y también han buscado establecer alianzas con otros mercados alternativos para conformar una red de mercados en la Ciudad de México, iniciativa que no ha tenido éxito. No obstante, sus organizadores consideran que el MAT tiene ya una identidad propia en el universo de los mercados alternativos en la Ciudad de México. Entre los mayores logros del MAT, mencionan las redes de relaciones que se han construido a partir del mercado. Explican que la experiencia del mercado va más allá del consumo: *Hay señoras que se quedan todo el día platicando aquí, hay gente que no compra, pero que participa en las actividades. Hemos logrado otra relación con los productores y se han abierto otros espacios a partir de este*. En el futuro, el MAT planea conformar una asociación civil donde el mercado funja como un proyecto central alrededor del cual se articulen otras iniciativas, como cooperativas de consumidores y proyectos de agroecoturismo.

Foro Tianguis Alternativo de la Ciudad de México Comercio justo, solidario y sustentable para la sociedad

El Foro Tianguis Alternativo de la Ciudad de México se lleva a cabo todos los domingos de 10 a 17 horas, en la avenida Álvaro Obregón número 185, en la colonia Roma, cerca de la ubicación sabatina del Mercado el 100. En este emplazamiento de puestos heterogéneos en colores y decorado, se ofrecen lácteos, granos, huevo, café, verduras, mezcales, fruta y miel, entre otros productos. Aunque comenzó sus actividades en 2009, desde 2011 ocupan la sede actual. La iniciativa para la creación de este tianguis surgió de un grupo de productores y colectivos de agricultores que colaboraban en proyectos de extensión comunitaria y en escuelas campesinas en la Ciudad de México y en los estados de Morelos, Tlaxcala, Guerrero y el Estado de México. Aunque en un principio intentaron acceder a un espacio público, como el camellón de la avenida o un parque en Coyoacán, nunca lograron obtener los permisos de la autoridad encargada, por lo que finalmente se instalaron en la casa del Partido Popular Socialista (PPS), que cada fin de semana les presta su patio.

De acuerdo con sus organizadores, el Foro es un espacio de resistencia, pues su trabajo confronta de manera directa la producción de alimentos industrializados y a los corporativos de alimentos que se encargan de promoverlos como opciones buenas y económicas de alimentación. Como productores, resisten también las iniciativas gubernamentales orientadas a desarrollar una agricultura cargada de insumos químicos y enfocada en la producción masiva de pocos cultivos y variedades. De esta forma, la iniciativa del Foro no responde únicamente a promover un espacio de venta, sino a generar redes de apoyo para ampliar la producción y el consumo de productos agroecológicos. La asistencia conjunta a eventos, la asesoría técnica compartida, la implementación de nuevas iniciativas, la colaboración en espacios fuera del tianguis, el apoyo de los consumidores y las relaciones de amistad que se generan entre los participantes son elementos que disminuyen la dependencia de instancias externas, como el Gobierno o las agroindustrias. Los organizadores explican que ellos apuestan por una política de autosuficiencia y soberanía alimentaria para México y

que *aunque es difícil, estamos en ese camino*. Ser un espacio de resistencia es, de acuerdo con los testimonios, lo que diferencia al Foro de otros mercados.

Cada uno de los productores paga una cuota semanal de 125 pesos por mesa, con lo que se cubre la renta del local y los gastos de luz y agua. El Foro se rige bajo un esquema colectivo de toma de decisiones, con asambleas mensuales para rendir cuentas de los ingresos y gastos, o bien para discutir los precios y la incorporación de nuevos productos, distribuir tareas y acordar la participación en eventos, entre otros asuntos. En estas asambleas participan los miembros del colectivo, conformado por los fundadores del proyecto, productores de participación constante e incluso por consumidores que deseen asistir.

El proceso de selección para el ingreso de nuevos productores al tianguis inicia con un cuestionario muy detallado para los aspirantes. En este cuestionario se establecen todos los parámetros que requiere el tianguis para garantizar que la producción sea orgánica. De acuerdo con los entrevistados, rara vez los interesados cumplen con los requisitos necesarios, pues se requiere saber el origen de los insumos, que incluye a las semillas; los métodos agroecológicos empleados; las técnicas de cultivo, cosecha y abonado, así como aspectos sobre el mejoramiento de suelos, de la fauna edáfica y de la convivencia del grupo productivo, entre otros. Con esta información, los organizadores del Foro pueden identificar quiénes cumplen con los parámetros de producción agroecológica, aunque además pueden realizar una visita a las zonas de producción para certificar los procedimientos. El tipo de certificación que promueve el Foro Tianguis es participativa, y actualmente uno de sus objetivos es que sean organizaciones de la sociedad civil las que otorguen la certificación y no instancias de gobierno. Consideran que el pago por los sellos orgánicos es caro y altamente restrictivo, pues cada productor tiene que certificar cada uno de sus productos y renovar la vigencia anualmente. Esto excluye de la producción orgánica a los pequeños productores y da lugar a una agricultura orgánica cooptada que tampoco, desde su perspectiva, resuelve los problemas sociales del campo mexicano.

Los precios de los productos que se ofertan en el Foro se deciden por consenso entre los productores, quienes procuran establecer un comercio con justicia, que no se rija por la oferta y la demanda o por la especulación, sino por

lo que el productor necesita y lo que el consumidor puede o quiere pagar. Es por esto, afirman, que los precios del Foro son más bajos que en otros mercados similares. Cada domingo, el tianguis realiza talleres y pláticas sobre biodiversidad y agroecología, y una vez al mes se realiza un intercambio de semillas abierto al público para difundir su diversidad. De acuerdo con las entrevistas, el Foro ha logrado construir una relación solidaria con sus clientes y consumidores, quienes apoyan la labor del mercado ofreciendo talleres, haciendo difusión en las redes sociales y otros medios, y en labores de limpieza y de mejoramiento del espacio, entre otras cosas. Explican que se ha formado una comunidad de apoyo entre los participantes, productores y consumidores, dando lugar a redes de amistad y solidaridad que van más allá del intercambio comercial y refuerzan el sentido de comunidad de las personas.

Hacia el futuro, pretenden seguir pugnando por conseguir un espacio en la vía pública para que el Foro Tianguis tenga mayor visibilidad y, de esta manera, difunda la idea de que las unidades campesinas agrícolas son la mejor forma de conseguir la soberanía alimentaria en el país, en lugar de la agricultura orgánica industrializada que poco beneficia a los campesinos mexicanos.

El Bonito Tianguis: cambia a México desde tu refrigerador

El Bonito Tianguis tiene como sede fija la colonia San Pedro de los Pinos, donde se establece los martes cada quince días. Además, dos sábados al mes, el mercado se instala en diferentes colonias de otros puntos de la ciudad, pero todas ellas de clase media alta. En un ambiente festivo, con puestos adornados con papel de colores y carteles llamativos con frases como “¡Pásele, pásele!”, que evocan la antigua convivencia en los mercados tradicionales mexicanos, el Bonito Tianguis ofrece vegetales, frutas, leches veganas, mezcal, chocolate, lácteos, mermeladas, cosméticos, pan y otros productos, muchos de ellos de tipo *gourmet*, elaborados y producidos por más de ochenta pequeños productores de diversos estados de la república, como Oaxaca, Estado de México, Yucatán y Chiapas (Santibáñez 2016). El lema del mercado, “Cambia a México desde tu refrigerador”, pretende reflejar la idea de que el consumo local aporta

múltiples beneficios para el país, los cuales inician con espacios de contacto entre vecinos, generación de economías locales, conversaciones y convivencias que impulsan la solidaridad y además capitalizan a los productores. Para Enrique Cervantes, fundador del Bonito Tianguis, las economías locales además tienen el potencial de reducir el tráfico y las emisiones contaminantes al no obligar a la gente a desplazarse para encontrar su canasta básica.

El fundador de Bonito Tianguis es un bailarín y agrónomo que vivió durante varios años en Alemania. A su regreso a México, e inspirado por la experiencia de Green Corner, el primer supermercado orgánico de México, y por los *farmers' markets* alemanes, decidió emprender el proyecto de establecer un mercado alternativo. El Bonito Tianguis inició como un bazar navideño alojado en una escuela de yoga, que ofreció productos artesanales y locales de veinte productores. El tianguis fue un éxito, y se pensó que sería un buen negocio hacerlo con más frecuencia. En una segunda ocasión se contó con el doble de productores y una asistencia de 800 personas.

Actualmente, el Bonito Tianguis ofrece más productos locales y artesanales no industrializados que orgánicos, puesto que no cuentan con recursos para hacer un monitoreo cercano de todos los productores. Un rasgo importante es que el Bonito Tianguis se concibe como una empresa y no como una iniciativa de corte social. El tianguis impulsa la consolidación de proyectos personales para que logren constituirse en pequeñas y medianas empresas. Para ello, ofrece de manera gratuita a los productores, y a otros interesados a bajo costo, cursos de capacitación en manejo de redes sociales, administración y mercadotecnia, dirigidos a facilitar el desarrollo y la rentabilidad de cada negocio. Para el fundador del Bonito Tianguis, la idea central del mercado es que *la gente de zonas rurales dignifique su labor y se empodere, [ellos] tienen que saberse dignos y merecedores, con una mentalidad empresarial.*

El Bonito Tianguis es básicamente una marca y un negocio que constituye una empresa formalmente establecida. Esto, de acuerdo con su fundador, aporta varias ventajas, pues *podemos rentar espacios y no usamos espacios públicos, si fuéramos una asociación civil, dependemos de las autoridades y tengo que hacer política. Nosotros no necesitamos el espacio público, aunque eso implica otros*

costos. Al ser un negocio, la toma de decisiones es, según explica, mucho más sencilla, pues las cooperativas son un desastre, hay mucho egoísmo y mala voluntad. Mi equipo y yo tomamos las decisiones acordes con nuestra visión. Los productores que participan en el Bonito Tianguis son avisados de los eventos con dos semanas de antelación y deben confirmar su asistencia, lo cual los compromete a asistir. Cada productor paga 2 000 pesos por dos días de mercado, lo que incluye la publicidad, el diseño de la imagen del mercado, el montaje, los fletes, carpas, mesas, sillas, decoración, etcétera. Todos los años se realiza una reunión o asamblea en la que se exponen los planes y eventos futuros del mercado, se presenta el catálogo de cursos de capacitación y se discuten problemas específicos del tianguis. Actualmente, el Bonito Tianguis cuenta con una cartera de sesenta productores, de los cuales treinta asisten de forma regular.

Aunque el Bonito Tianguis se interesa por establecer vínculos con otros mercados de su tipo para intercambiar experiencias, consideran que cada uno tiene un proyecto diferente y que la competencia entre ellos es básica para avanzar.

A diferencia de otros mercados, como el 100, el Bonito Tianguis no se restringe a colonias de moda, pero el público al que se orienta es también un sector preocupado principalmente por la salud y el aspecto individual. Su público es, como dice su fundador, *la chava de 28 a 45 años que le encanta estar bien y comer bien.* Para el Bonito Tianguis, la baja rentabilidad del trabajo agrícola y el distanciamiento que hay entre el campo y las personas en la ciudad pueden encontrar soluciones en espacios participativos como los tianguis alternativos. Es necesario buscar nuevos caminos entre la ciudadanía y en los vínculos que pueden dar lugar a formas más activas de participación, pues las instancias de gobierno difícilmente pueden ofrecer soluciones.

En el futuro, el organizador de Bonito Tianguis espera expandir su negocio y crear Bonito Corporation, un conjunto de marcas y eventos que incluirán un tianguis de ecoturismo, un mercado de bebidas destiladas artesanales y uno de moda y diseño, así como un canal de *YouTube* con contenidos sobre alimentos orgánicos, comercio local y otros temas relacionados.

Feria Multittrueke. Caminando al buen vivir Otra economía es posible y la estamos construyendo

La Feria Multittrueke fue establecida en 2010 por vecinos del barrio Magdalena Mixhuca, una colonia tradicional de clase media al oriente de la Ciudad de México. La feria se inspiró en las ideas de la economía solidaria, que busca formar comunidades de intercambio y redes de apoyo y solidaridad entre personas y familias, en lo social, lo económico y lo emocional, por lo que la convivencia no se limita al espacio del tianguis, sino que se da en la vida cotidiana de los participantes. Además de practicar el trueque de productos y servicios entre los asistentes, la comunidad ha implementado su propia moneda, llamada *mixhuca*, que se obtiene al hacerse socio comprometido del colectivo, lo que implica participar de forma constante y ser activo en las diferentes comisiones del proyecto, entre ellas: vivienda, ahorro, producción y economía solidaria. Los mixhucas son firmados por la persona que paga al momento de hacer una transacción, a fin de guardar un registro de las veces que cada moneda ha sido usada, lo que refuerza la importancia que los miembros están dando al colectivo y reitera la fuerza social que adquiere cada moneda. Los miembros de la comunidad se conocen como *prosumidores*, una unión de las palabras *productor* y *consumidor*, que pretende dar a entender que todos somos ambas cosas y que todos tenemos algo que producir y, por tanto, algo que intercambiar. Las personas que asisten a la Feria y que no son miembros del colectivo no usan la moneda local, pero pueden intercambiar productos o emplear otra moneda, llamada *cacao*, especial para asistentes externos. En la Feria Multittrueke nadie acepta el pago total de la mercancía o servicio en moneda nacional, aunque sí un porcentaje del consumo. La idea del colectivo es ser autogestivos, se organizan siempre de manera cooperativa, se toman decisiones en asamblea y se busca ampliar la base de productos y servicios para que la comunidad encuentre todo al interior de su propio núcleo y se generen lazos de confianza y apoyo mutuo.

A diferencia de otros mercados estudiados, en la Feria Multittrueke el objetivo principal no es ofrecer alimentos orgánicos o locales; en este caso, el interés se centra en la formación de redes solidarias para el intercambio de

productos y servicios. No obstante, se promueven alimentos frescos y procesados que son cultivados sin agroquímicos y elaborados de forma artesanal. De acuerdo con su página de internet, para la Feria Multittrueke, la preservación del medio ambiente, así como la generación y utilización de alimentos y materiales orgánicos, libres de la explotación de la naturaleza y del ser humano, es un aspecto de vital importancia.¹¹ La Feria se lleva a cabo el primer domingo de cada mes en diferentes sitios de la ciudad, pero los miembros del colectivo realizan intercambios y compras con la moneda local de forma permanente, para lo que existe un catálogo, disponible en internet, de los productos y servicios a los que se puede recurrir durante todo el año.

La Feria no realiza ningún pago por la renta de los espacios en los que se realiza la venta mensual. El uso de estos espacios es posible gracias a alianzas o tratos que la Feria establece con colectivos o instancias que observan la presencia del tianguis en sus instalaciones como un evento que enriquecerá a su propia comunidad. Cada mes se pide a los asistentes que lleven bolsas de tela o de papel, así como contenedores, para no depender de empaques nocivos para el ambiente. La Feria termina con una comida comunitaria, para lo cual cada persona, tanto de la comunidad como personas externas o “asistentes solidarios”, debe llevar algo para compartir, así como sus cubiertos, vasos y platos, a fin de no generar basura.

Al interior de la comunidad se observa y se siente un ambiente alegre en el que todos están dispuestos a intercambiar información sobre técnicas de producción y preparaciones alternativas a las comerciales, tanto de alimentos como de productos de higiene o de limpieza.

En la Feria Multittrueke es posible encontrar frutas y verduras frescas, miel, alimentos procesados —como mermeladas—, pan, comida vegetariana para llevar, café, té, chocolate, cosméticos naturales, implementos para aromaterapia, entre otros productos. Al igual que en el Tianguis Alternativo, la Feria Multittrueke tiene un espacio para el intercambio de semillas y promueve talleres de huertos urbanos, elaboración de distintos productos y mensualmente ofrecen un taller de economía solidaria. También hay actividades sobre

¹¹ <http://vida-digna.org.mx/multittrueke/laferia/>.

estos mismos temas diseñadas para los niños. Los organizadores consideran a la Feria como un espacio de convivencia mensual y una forma para hacer llegar sus ideas y productos al público en general; sin embargo, su meta a largo plazo es crear una comunidad “interdependiente, sensible ante la injusticia económica, la explotación del planeta y ante la violencia entre los seres humanos, [y] comprometida en transformar su vida cotidiana para hacer[la] más creativa y compartida, para transformarnos hace falta que la práctica y la reflexión vayan de la mano”.¹²

Conclusión

En la Ciudad de México existen mercados alternativos con propuestas muy diferentes. Mientras que el Mercado el 100 y el Bonito Tianguis están enfocados en proveer alimentos orgánicos, considerados más sanos, a consumidores de clases medias y altas, interesados tanto en su salud y aspecto individual como en formas de consumo acordes con el cuidado de la naturaleza; el MAT, el Foro Tianguis Alternativo y la Feria Multitrucke tienen una propuesta mucho más política, centrada en la justicia social y en la búsqueda de alternativas al régimen alimentario global.

Siguiendo la clasificación propuesta por Holt-Giménez y Shattuck (2011), podemos sugerir que el Mercado el 100 y el Bonito Tianguis responden a una orientación reformista y se adscriben a un modelo que pretende ofrecer comida de calidad, fresca y local que se produce y comercializa en condiciones justas para los productores. Muestran también una preocupación por incrementar el bienestar de las comunidades rurales y promover procesos de organización social que las empoderen, sobre todo a partir de su inserción en el mercado con modelos de negocios alternativos. Como bien explica el fundador de Bonito Tianguis, no se trata de resistir, sino de insertarse de forma efectiva en el mercado y de ofrecer mercancías que, con calidad, resalten sus atributos

¹² Convocatoria al taller de iniciación distribuida vía correo electrónico en noviembre de 2015.

más sensibles, desde sus nutrientes hasta los conocimientos tradicionales y la identidad mexicana que resguardan. No obstante, aunque este tipo de mercados ciertamente amplía el acceso de las clases urbanas acomodadas de la Ciudad de México a alimentos de buena calidad, constituyen soluciones de corte individual o local a la crisis alimentaria y ambiental, que no cuestionan las condiciones estructurales que les dan origen.

Por su parte, el MAT, el Foro Tianguis Alternativo y la Feria Multitruেকে constituyen propuestas cercanas a una orientación radical (Holt-Giménez y Shattuck 2011), pues buscan producir cambios más profundos en la agricultura y la alimentación, vinculados a la búsqueda de soberanía alimentaria. Aunque el MAT es el mercado que menciona de manera más explícita y recurrente la importancia de resistir y ofrecer alternativas ante el régimen alimentario global, quizá es el Foro Tianguis Alternativo el mercado que presenta una propuesta más integral y viable en este sentido. El Foro trabaja en proyectos sobre soberanía alimentaria y procura la generación de redes de productores capacitados en agroecología, construyendo proyectos comunitarios más amplios que el propio mercado para la formación de comunidades solidarias. La Feria Multitruেকে tiene también una orientación radical que se manifiesta en su intención de promover una comunidad amplia de economía solidaria que, como vimos, trasciende el tema de la alimentación y aborda otros aspectos de la vida cotidiana de la gente y las familias que participan.

La variación encontrada sugiere que, en el caso de la Ciudad de México, los alimentos alternativos y las redes de comercio que se construyen en torno a ellos funcionan a manera tanto de espacios de resistencia al régimen alimentario global como de ámbitos de reproducción de las prácticas neoliberales. Entre ellas están, por ejemplo, la producción de nuevas mercancías y necesidades, como son los alimentos orgánicos, locales y artesanales, que a su vez dan lugar a la comodificación de los valores y posturas éticas vinculados con ellos. Así, los mercados no solo venden alimentos, sino que comercian con la sensación de comportarse y consumir responsablemente con el entorno social y ambiental. Los mercados alternativos promueven también el establecimiento de nuevos derechos de propiedad, al hacer, por ejemplo, uso exclusivo del espacio público, y reproducen formas de exclusión, como cuando limitan el acceso a

los productores cuyos productos no cumplen con estándares requeridos o no son necesarios en el mercado (Guthman 2007).

Queda claro que, en la Ciudad de México, los tianguis alternativos u orgánicos no constituyen una red o un movimiento que se oponga o resista siempre a los procesos de neoliberalización de la naturaleza, en particular, de los alimentos; no obstante, sí ofrecen opciones reales para el comercio de productos estacionales, para la revaloración y uso de algunos cultivos que de otra forma corren el peligro de caer en el olvido, para evitar la estandarización de los ingredientes en las dietas, para olvidar las marcas y los estándares de perfección de las mercancías que ofrecen los supermercados y, sobre todo, permiten a los consumidores acercarse tanto a quienes producen el alimento como a otros consumidores que comparten sus preocupaciones e intereses, y fomentando relaciones que tal vez no existirían de otro modo. De esta forma, los mercados alternativos, en sus varias expresiones, abren vías para generar sujetos colectivos, políticamente organizados y capaces de socializar y enfrentar los problemas tanto ambientales como sociales de nuevas maneras (Guthman 2007).

Referencias bibliográficas

- Alexander, E., D. Yach y G. Mensah. 2011. "Major Multinational Food and Beverage Companies and Informal Sector Contributions to Global Food Consumption: Implications for Nutrition Policy". *Globalization and Health* 7: 26. <https://dx.doi.org/10.1186%2F1744-8603-7-26>.
- Alkon, A. 2008. "From Value to Values: Sustainable Consumption at Farmers Markets". *Agriculture and Human Values* 25 (4): 487-498.
- Alkon, A. y T. Mares. 2012. "Food Sovereignty in us Food Movements: Radical Visions and Neoliberal Constraints". *Agriculture and Human Values* 29 (3): 347-359.
- Allen, P. 2010. "Realizing Justice in Local Food Systems". *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, núm. 3, 295-308.

- Allen, P. y J. Guthman. 2006. "From 'Old School' to 'Farm-to-School': Neoliberalization from the Ground Up". *Agriculture and Human Values* 23 (4): 401-415.
- Altieri, M. y V. M. Toledo. 2011. "The Agroecological Revolution in Latin America: Rescuing Nature, Ensuring Food Sovereignty and Empowering Peasants". *The Journal of Peasant Studies* 38 (3): 587-612.
- Alvarado García, R. 2006. *México-Wal-Mart: una relación de éxito y mutuo beneficio*. Tesis de licenciatura en Relaciones Internacionales. Universidad de las Américas-Puebla.
- Álvarez Enríquez, L. 2009. *Distrito Federal*. México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM.
- Álvarez Icaza Ramírez, J. 2015. "¿Comer diferente? Mercado Alternativo de Tlalpan". *Nexos*. Consultado el 29 de noviembre de 2016. <https://cultura.nexos.com.mx/?p=8841>.
- Ávila Curiel, A. 2010. *Satisfacción de las necesidades alimentarias en el DF*. México: Evalúa DF. Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal.
- Bautista, F. A., I. Díaz y M. Lastiri. 2015. *El impacto de las corporaciones multinacionales en los sistemas alimentarios (producción, distribución y venta): el caso de México*. México: Oxfam; El Barzón.
- Cameron, D., C. Osborne, P. Horton y M. Sinclair. 2015. "A Sustainable Model for Intensive Agriculture", nota informativa del Centro Grantham, diciembre de 2015. <http://grantham.sheffield.ac.uk/wp-content/uploads/A4-sustainable-model-intensive-agriculture-spread.pdf>.
- Carvalho de Rezende, D. 2014. "Eating Out and Experiential Consumption: A Typology of Experience Providers". *British Food Journal* 116 (1): 91-103.
- Castree, N. 2008. "Neoliberalising Nature: The Logics of Deregulation and Reregulation" *Environment and Planning A* 40: 131-153.
- Cervantes Niño, J., L. Márquez Mireles y D. Molina Rosales, coords. 2018. *Medio ambiente, sustentabilidad y vulnerabilidad social*. Vol. 5 de *Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las ciencias sociales*, coordinado por J. Cadena Roa, M. Aguilar Robledo y D. E. Vázquez Salguero. México: Comeco.

- Debayle, M. 2014. "Alimentos orgánicos... ¿de a cómo?". Entrevista con Enrique Cervantes, director El Bonito Tianguis, marthadebayle.com, 3 de septiembre de 2014. www.marthadebayle.com/v2/radio/alimentos-organicos-de-a-como.
- Delgado M. 2010. "El sistema agroalimentario globalizado: imperios alimentarios y degradación social y ecológica". *Revista de Economía Crítica*, núm. 10, 32-62.
- Dowler E., M. Kneafsey, H. Lambie, A. Inman y R. Collier. 2011. "Thinking About Food Security: Engaging with UK Consumers". *Critical Public Health* 21 (4): 403-416.
- DuPuis, E. M. y D. Goodman. 2005. "Should We Go Home to Eat?: Toward a Reflexive Politics of Localism". *Journal of Rural Studies*, núm. 21, 359-371.
- FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). 2006. "Livestock's Long Shadow", reporte técnico. Consultado 15 de marzo del 2016. <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0701e/a0701e.pdf>.
- Fernández Álvarez, R. 2012. "Neoliberalism and Parks: The Urban Political Ecology of Green Public Space in Mexico City". Tesis de doctorado. Universidad de Arizona.
- Gasca, J. y F. Torres. 2014. "El control corporativo de la distribución de alimentos en México". *Problemas del Desarrollo* 45 (176): 133-156. DOI: 10.1016/S0301-7036(14)70853-3.
- Gomiero, T., M. G. Paoletti y D. Pimentel. 2008. "Energy and Environmental Issues in Organic and Conventional Agriculture". *Critical Reviews in Plant Sciences* 27 (4): 239-254.
- Goodman, D. y E. M. DuPuis. 2013. "Introducción". En *Alternative Food Networks: Knowledge, Practice and Politics*, editado por D. Goodman, E. M. DuPuis y M. K. Goodman, 11-12. Londres: Routledge.
- Guthman, J. 2007. "From the Ground Up: California Organics and the Making of Yuppie Chow". En *Alternative Food Geographies: Representation and Practice*, editado por D. Maye, L. Holloway y M. Kneafsey. Londres: Elsevier.

- Gutiérrez Pérez, C., E. Tuñón Pablos, F. Limón Aguirre, H. Morales y R. Nielsen. 2012. "Representaciones sociales de los alimentos orgánicos entre consumidores de Chiapas". *Estudios Sociales* 20 (39): 101-129.
- Holt Giménez, E. 2010. "Food Security, Food Justice or Food Sovereignty?". *Food First Backgrounder* 16 (4). <https://foodfirst.org/publication/food-security-food-justice-or-food-sovereignty/>.
- Holt Giménez, E. y A. Shattuck. 2011. "Food Crises, Food Regimes and Food Movements: Rumbblings of Reform or Transformation?". *Journal of Peasant Studies* 38 (1): 109-144.
- Holt Giménez, E., A. Shattuck, M. Altieri, H. Herren y S. Gliessman. 2012. "We Already Grow Enough Food for 10 Billion People... And Still Can't End Hunger". *Journal of Sustainable Agriculture* 36 (6): 595-598.
- Howard, P. H. 2009. "Visualizing Consolidation in the Global Seed Industry: 1996-2008". *Sustainability* 1 (4): 1266-1287. DOI: <https://doi.org/10.3390/su1041266>.
- _____. 2015. "Intellectual Property and Consolidation in the Seed Industry". *Crop Science* 55 (6): 1-7.
- Johnston, J. 2014. "The Wal-Mart Effect on Organics: A Defense of Large-Scale Organic Production". *Duke Environmental Law & Policy Forum* 24 (3): 241-279.
- Juárez, H. 2014. "Hacia un perfil del consumidor de productos orgánicos: un estudio de caso". En *Los sistemas agroalimentarios y el consumo local*, coordinado por G. Torres Salcido. México: AMER.
- Khoury, C., A. D. Bjorkman, H. Dempewolf, J. Ramirez-Villegas, L. Guarino, A. Jarvis, L. H. Rieseberg y P. C. Struik. 2013. "Increasing Homogeneity in Global Food Supplies and the Implications for Food Security". *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA* 111 (11): 4001-4006. <https://doi.org/10.1073/pnas.1313490111>.
- Kirwan, J. 2014. "Alternative Strategies in the UK Agro-food System: Interrogating the Alterity of Farmers' Markets". *Sociologia Ruralis* 44 (4): 21-34.
- Nelson, E., R. Schwentesius, L. Gómez y M. A. Gómez. 2008. "Un movimiento orgánico local que crece: la Red Mexicana de Mercados orgáni-

- cos". *Revista Agroecológica* 24 (1): 18-21. <http://www.leisa-al.org/web/images/stories/revistapdf/vol24n1.pdf>.
- Nestle, M. 2012. *Food Politics: How the Food Industry Influences Nutrition and Health*. Berkeley: University of California Press.
- Nigh, R. y A. A. González. 2005. "Smallholder Participation and Certification of Organic Farm Products in Mexico". *Journal of Rural Studies* (21): 449-460.
- Oxfam. 2013. "Tras la marca: el papel de las 10 grandes empresas de alimentación y bebidas en el sistema alimentario", documento de trabajo. https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/bp166-behind-the-brands-260213-es_2.pdf.
- Patel, R. 2008. *Stuffed and Starved: Markets, Power and the Hidden Battle for the World Food System*. Brooklyn: Melville House.
- Peake, W., J. Detre y C. Carlson. 2014. "One Bad Apple Spoils the Bunch? An Exploration of Broad Consumption Changes in Response to Food Recalls". *Food Policy* 49: 13-22.
- Perreault, T. y P. Martin. 2005. "Geographies of Neoliberalism in America Latina". *Environment and Planning A*, núm. 37, 191-201.
- Qazi, J. A. y T. Selfa. 2005. "Place, Taste or Face-to-Face? Understanding Producer-Consumer Networks in 'Local' Food Systems in Washington State". *Agriculture and Human Values* 22 (4): 451-469.
- Renting, H., M. Schermer y A. Rossi. 2012. "Building Food Democracy: Exploring Civic Food Networks and Newly Emerging Forms of Food Citizenship". *International Journal of Sociology of Agriculture and Food* 19 (3): 289-307.
- Reganold, J. y J. Wachter. 2016. "Organic Agriculture in the Twenty-first Century". *Nature Plants* 2: 15221. <https://www.nature.com/articles/nplants2015221>.
- Ribeiro, S. 2015. "Seguir sembrando". *La Jornada*, 7 de febrero de 2015.
- Roldán, N. 2014. "Espacios de intercambio local de productos orgánicos en México. Panorama, tensiones y procesos de aprendizaje". Tesis de maestría en Ciencias en Recursos Naturales. El Colegio de la Frontera Sur.

- Roldán Rueda, H., M. A. García, M. E. Santana y J. E. Horbath. 2016. “Los mercados orgánicos en México como escenarios de construcción de alternativas”. *Polis* 43. <http://journals.openedition.org/polis/11768>.
- Rosset, P. y M. Altieri. 1997. “Agroecology Versus Input Substitution: A Fundamental Contradiction of Sustainable Agriculture”. *Society & Natural Resources* 10 (3): 283-295.
- Saltijeral Giles, J. L. 2014. “Mercados alternativos de alimentos: acción política ante la devastación”. <http://viaorganica.org/mercados-alternativos-de-alimentos-accion-politica-ante-la-devastacion/>.
- Santibañez Santibañez, P. 2016. “Tianguis orgánico: ¿paradigma de consumo?”. *Entrepreneur*. Consultado el 21 de mayo de 2019. <https://www.entrepreneur.com/article/268262>.
- Saravia, G. A. 2008. “Mundos aislados: segregación urbana y desigualdad en la ciudad de México”. *Eure* 34 (103): 93-110.
- Schimmelpfenning, D., C. Pray y M. Brennan. 2004. “The Impact of Seed Industry Concentration on Innovation: A Study of US Biotech Market Leaders”. *Agricultural Economics* 30 (2): 157-167.
- Sethi, S. 2015. *Bread, Wine, Chocolate. The Slow Loss of Foods We Love*. Nueva York: Harper Collins.
- Thiele-Bruhn, S., J. Bloem, F. T. de Vries, K. Kalbitz y C. Wagg. 2012. “Linking Soil Biodiversity and Agricultural Soil Management”. *Current Opinion in Environmental Sustainability* 4 (5): 523-528. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2012.06.004>.
- Vázquez, R. 2015. “Concentración empresarial y cambio estructural: alimentos, bebidas y tabaco en México”. *Problemas del Desarrollo* 46 (180): 51-76.

Entre sueño y pesadilla: salir de la dependencia en un contexto neoliberal. Un paralelo tentativo entre el Bajo Aguán hondureño y la ciudad de Detroit, Michigan

Hélène Roux

Universidad de París 1

Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie;
 que es nadie la muerte si va en tu montura.
 Galopa, caballo cuatralbo,
 jinete del pueblo,
 que la tierra es tuya.
 ¡A galopar,
 a galopar,
 hasta enterrarlos en el mar!”
 ¡A galopar!

RAFAEL ALBERTI (1902-1999)

Introducción

Este texto presenta algunos avances de un estudio acerca de las percepciones y las dinámicas sociales que se generan en torno a la seguridad alimentaria en la ciudad de Detroit (estado de Michigan, Estados Unidos de América) y en el valle del Bajo Aguán (departamento de Colón, Honduras). Antes de entrar en materia, es preciso explicar, en un primer momento, por qué el tema se planteó

de esta manera y en estos dos lugares. Las circunstancias en que este estudio tomó su forma actual —con limitaciones y discontinuidades que casi me llevaron¹ a abandonarlo— tienen que ver más con una serie de casualidades y con un malentendido inicial que con la elaboración de una problemática previamente ideada.

Todo partió de la intención de experimentar en nuevos terrenos los hallazgos obtenidos tras años de estudiar los conflictos agrarios en Nicaragua.² Eso implicó analizar que —en el contexto del auge del pensamiento neoliberal a partir de los años noventa— se produjo un desliz en las percepciones de las funciones de la tierra (y, por tanto, de los que la trabajan): de un carácter meramente productivo a una proveedora de nuevos servicios y utilidades vinculados al medio ambiente, esto es, una nueva forma de gestión de la naturaleza y de sus recursos. Ese salto de la producción de la tierra a la gestión de territorios no es de poca importancia, porque esta tendencia, que se observa en muchas regiones del mundo, supuso reestructuraciones territoriales profundas, la definición de nuevas normas jurídicas, cambios de políticas y, no por último, la incursión de nuevos actores, tanto ejecutantes como tomadores de decisiones, para atender nuevas necesidades económicas. La promoción de nuevas políticas y nuevos actores implicó desechar a los viejos. Paradójicamente, en muchas ocasiones, la interpretación de los discursos elaborados a nivel supranacional sobre la “casa común” y los bienes comunes del planeta desembocaron localmente en el desalojo de campesinos.³ Eso advino, y no por

¹ A falta de haber podido regresar a Detroit desde el 2012.

² Esos trabajos han sido recogidos en una tesis de doctorado.

³ Esta situación se vio reflejada en numerosos conflictos, en diversas regiones del planeta, a raíz de la aplicación estricta de normas de conservación que pretendieron vaciar zonas habitadas por comunidades campesinas decretando áreas nacionales protegidas. Un caso muy sonado se dio a inicios de los 2000 en el sureste mexicano, en torno a la Reserva de la Biosfera de Montes Azules (Rebima), en donde varias comunidades que reclamaban desde hace años su certificación ejidal fueron declaradas ilegales y consideradas como invasoras. Al respecto, aparte de la literatura académica, existen amplios informes, declaraciones y pronunciamientos de organizaciones de la sociedad civil local, y justificaciones de estas políticas en las declaraciones de las autoridades federales y estatales mexicanas,

casualidad, en el mismo periodo durante el cual en muchas partes del mundo fueron implementadas, en un afán privatizador, reformas a las leyes que hasta entonces garantizaban mínimamente el uso social de la tierra⁴ (Roux 2010).

Honduras ofreció un ejemplo emblemático de ese giro neoliberal y de las convulsiones que provocó en el campo, con una particularidad: a la par de las preocupaciones conservacionistas que ganaban importancia a nivel internacional, se produjo otro debate en la región, no contradictorio en sus objetivos, sino rival del anterior en cuanto a ocupación de espacio, el de las plantaciones agroindustriales de palma africana para la producción de energía limpia⁵ (Roux 2011). El problema que ahí surgió no tuvo su origen en el producto, pues la palma ya se cultivaba en el Bajo Aguán desde hacía décadas (para la producción y exportación de aceite vegetal destinado a la industria agroalimentaria y cosmética), sino en su expansión desmedida (en parte para atender la producción en auge de agrocombustibles). Esta se concretó mediante el despojo brutal de empresas campesinas que, a partir de los años setenta, habían sido dotadas por el Estado con un triple objetivo: incentivar la colonización interna hacia el Atlántico para disminuir la presión de los campesinos y jornaleros sin tierra sobre los latifundios de occidente, cooptar y controlar a las organizaciones campesinas e incorporar al campesinado al esfuerzo productivo nacional (Ríos 2014).

La embestida en contra de las empresas campesinas del Aguán, conjugada con la desesperación que suscitó la ausencia de repuesta del Gobierno a miles de campesinos siniestrados a raíz del huracán Mitch, en 1998, produjo ocupaciones masivas de tierra en la región a partir del año 2000 (Macías 2001).

así como los planteamientos de organizaciones transnacionales de la conservación (Conservation International, The Nature Conservancy, The Wild World Fund).

⁴ Se pueden citar la reforma al artículo 27 de la Constitución mexicana en 1992, que antecedió la entrada en vigor, dos años más tarde, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); las reformas de las leyes de propiedad en Nicaragua (1998), y la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA), adoptada en 1992.

⁵ En contraposición a la energía producida por los hidrocarburos (no renovables y contaminantes), se habla frecuentemente de *energía limpia*. No debatiremos aquí la pertinencia o no de esta caracterización en el caso de la palma.

Observar las dinámicas que se generaron a raíz de esa recuperación de tierras, así como de las ocupaciones que se dieron en los meses posteriores al golpe de Estado de 2009, motivaron mis primeras visitas a Honduras en 2011 y 2012. Mi principal interés era entender cómo se articulaban las reivindicaciones socioeconómicas en torno al acceso a la tierra con la lucha política y la construcción de un movimiento social enfocado en el reclamo de seguridad y soberanía alimentaria.⁶

Fue con esa misma motivación que, a la par de mis estancias en el Aguán hondureño, viajé a la ciudad de Detroit, en Estados Unidos. Había leído acerca del fenómeno creciente del *urban gardening* practicado en terrenos reconquistados por la población sobre las ruinas del emporio de la industria automotriz que había caracterizado a la ciudad hasta los años setenta (Sugrue 1996). Mi propósito inicial era no tanto constatar el avance de prácticas alternativas, sino observar los procesos de reapropiación y entender sus finalidades; sin embargo, muy pronto tuve que recapacitar, ya que en Detroit el problema central no radicaba en el acceso a la tierra, sino en el esfuerzo de retomar el control de la cadena de distribución de los alimentos.

Por lo tanto, resultaba evidente que el problema se planteaba de formas distintas: desde la producción, en el Aguán, con prioridad al acceso a la tierra, y desde el consumo y por el acceso a una alimentación de calidad, en Detroit. Sin embargo, un aspecto común era que el tema de la seguridad alimentaria se vinculaba estrechamente con procesos de reapropiación. El objetivo entonces era entender cómo las dinámicas sociales que se construyen en ambos casos contribuyen a que los actores se afirmen frente al Estado como protagonistas

⁶ No abordaré en este espacio la discusión acerca de los términos *seguridad* vs. *soberanía alimentaria*, abierta en 1996 durante la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura entre dicha organización y la Vía Campesina. Ver <https://www.youtube.com/watch?v=aZBst6aMwzQ> y <http://www.fao.org/3/a-ax736s.pdf>, consultados el 13 de enero de 2017. Si bien, por evidentes razones ideológicas, muchas organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales (ONG) prefieren el término *soberanía*, considero que implica condiciones de autonomía que no se reúnen en este contexto particular. Me parece entonces más adecuado hablar de *seguridad alimentaria*.

de políticas (no solamente como beneficiarios de ellas). En este sentido, la decisión de mantener el apartado sobre Detroit, pese a que sea más reducido que el dedicado al Bajo Aguán, no indica que finalmente la comparación no sea pertinente, sino que solamente faltaron elementos actualizados para profundizar el análisis.

Presentamos aquí —no solo como estudio de caso aislado, sino como fenómeno cuyas causas y efectos se pueden identificar como producto de un sistema que se desarrolla en el contexto de la globalización neoliberal— las interrogantes que nos parecen útiles para tratar de entender la construcción de movimientos sociales en torno a sus aspiraciones a la seguridad alimentaria con sus límites. En efecto, una cosa es abogar por la diversificación de cultivos, que goza de un apoyo creciente en el marco de programas internacionales, y otra es plegarse pragmáticamente a las reglas económicas, todavía prevalecientes, de producir lo que sea rentable y se cotice en el mercado internacional.

En realidad, lo que se observó en ambos lugares son los esfuerzos de determinadas categorías sociales (con sus historias y evoluciones que, a veces de manera impuesta, les tocó vivir) de afirmarse política, económica y culturalmente en una coyuntura cambiante que, en un lapso de pocas décadas, salta de crisis en crisis. Desde el modelo capitalista industrial, hoy en declive, hasta un modelo capitalista neoliberal que sortea sus disfuncionalidades incorporando nuevos recursos (materiales e inmateriales) y servicios al proceso mercantil, cada etapa supuso profundas reestructuraciones productivas, territoriales, sociales, entre otras, y por consiguiente, coloca a los actores —a la vez objetos y sujetos de estos cambios— en un proceso perpetuo de transformaciones a las cuales se adaptan, resisten o son marginados de ellas. Cabe resaltar que, a nuestro criterio, estos procesos (adaptación, resistencia, marginación, incorporación) no necesariamente se excluyen entre sí, en cambio, se pueden entrecruzar y generar contradicciones. Desde esta perspectiva, no ha de sorprender que tanto los pobladores de Detroit como los campesinos del Aguán abriguen sus planteamientos respectivos de reconocimiento político y social bajo un mismo rubro que denominan “seguridad alimentaria”. Lo más relevante tampoco es lo que los diferencia profundamente en términos de condiciones de vida, sino el

afán mismo de intentar posicionarse en los intersticios de un sistema que, tras instrumentalizarlos (y explotarlos), hoy los desecha.

Paradójicamente, mientras en el Aguán es el proceso de “industrialización” de la agricultura el que amenaza la seguridad alimentaria, al reducir el espacio de siembra y favorecer la dependencia de los pequeños productores a una cultura de agroexportación, lo que provocó que Detroit se convirtiese en “desierto alimentario” fue el proceso de “desindustrialización” iniciado en la década de 1970, que fue creciendo con la sangría consecuyente de la población del casco urbano (de 2 000 000 a 700 000 habitantes) y la consiguiente desaparición de los comercios alimenticios. Si admitimos que la industrialización fue uno de los marcadores del avènement de la era capitalista, y que este dio lugar a un profundo replanteamiento ideológico de las relaciones que la humanidad mantiene con su entorno, nos parece igualmente pertinente en esta contribución entablar una reflexión acerca de cómo evolucionan las relaciones con la naturaleza en la era neoliberal. Aunque se vinculen de manera aparentemente opuesta con el fenómeno industrial, los dos ejemplos escogidos ilustran el giro que se produce en los sistemas productivos que habían fundamentado históricamente el desarrollo capitalista y los procesos complejos que, en ambos lugares, desencadenó su evolución hacia nuevas formas de acumulación. La observación de las ambigüedades y contradicciones que entrañan las nuevas formas de gestionar los recursos naturales quizás permite vislumbrar si el uso que hoy se pretende dar a los espacios territoriales, a la tierra y a sus recursos constituye de verdad una ruptura con la carrera consumista iniciada en el siglo pasado, o si al contrario, los cambios en la manera de explotar o preservarlos (que presenciamos también en los discursos corporativos e institucionales) se inscriben a modo de continuidad, con el afán de incorporar segmentos de la economía que hasta el momento se habían mantenido al margen del mercado.

Detroit, un declive orquestado

La industrialización de Detroit atrajo, entre 1941 y 1950, cerca de tres millones de afroamericanos hacia las grandes ciudades del noreste (Paddeu 2015).

Esa mano de obra oriunda del campo (pequeños *farmers* llegados de los estados del sur o jornaleros) se incorporó al desarrollo industrial propiciado por el esfuerzo de guerra. Cabe señalar que, en este entonces (al igual que hoy), la pequeña producción agrícola no era considerada como un factor significativo para el desarrollo económico del país. El escritor John Steinbeck describió admirablemente cómo los sueños de aquellos pioneros que habían iniciado la conquista de sus inmensos territorios terminaron aplastados en los años treinta por el gran baile de las cosechadoras mecánicas.⁷ La proletarización que resultó de ese masivo y forzoso éxodo rural alimentó las grandes plantaciones agrícolas del oeste (California) y también los nuevos centros industriales. Detroit, dicho sea de paso, fue precisamente la cuna del modelo fordista, erigido a nivel planetario como emblema de un desarrollo industrial, cuya racionalización llevaría al extremo del bienestar a la clase obrera. Sin embargo, la desindustrialización del casco urbano comenzó muy temprano, en los años setenta. Thomas Sugrue —quien incluso sitúa el inicio del fenómeno en los años cincuenta— sugiere que el afán de contrarrestar las demandas de una fuerza salarial organizada, que se constituyó en torno a los grandes centros industriales, fue la principal razón del traslado de las fábricas, primero al campo cercano —que, por consiguiente, se industrializó, por ejemplo, la ciudad de Flint, Michigan—, y luego hacia el sur del país y fuera de él (1996).

Llegué a Detroit el domingo de Pascua de 2011. El detalle tiene su importancia porque la ciudad lucía aún más desierta de lo que es en días hábiles. Al día siguiente, mi primer intento de conseguir un desayuno me enseñó que la elaboración de una comida requiere recorrer largas distancias para conseguir los ingredientes básicos necesarios. Para quien no tiene vehículo, la pobre oferta de comida preparada y empacada que se consigue en las gasolineras es casi la única opción. Por eso, en las reuniones que sostuve luego con organizaciones sociales, no me causó tanta sorpresa descubrir que el tema de la seguridad alimentaria se planteara desde el punto de vista del consumo, es decir, del acceso a una alimentación de calidad, dejando en segundo plano el acceso a la

⁷ John Steinbeck publicó en 1936 *Los vagabundos de la cosecha*, seguido en 1939 por *Las uvas de la ira* (premio Pulitzer 1940).

tierra. Esta es una observación corroborada por Flaminia Paddeu (2015, 17),⁸ cuando resalta que:

Kevin Morgan (2015) mostró que, dado que el movimiento [por la justicia alimentaria] descansa más en el postulado de la importancia de las condiciones de acceso a la alimentación que en la producción, también se caracteriza por una atención más sostenida a la vulnerabilidad de los consumidores urbanos que a la de los pequeños campesinos rurales o de los agricultores periurbanos.

Mi primer acercamiento no fue fácil. Tuve la impresión de que las organizaciones eran muy difusas y tenían dinámicas muy distintas según el barrio en donde estaban asentadas; sin embargo, identifiqué varios niveles de implicación: el proyecto D-Town Farm del Black Community Security Network tenía un planteamiento claramente político; el proyecto Earthworks–Capuchin Soup Kitchen se enmarcaba más en una lógica humanitaria, y finalmente otros proyectos comunitarios, como el Georgia Street Community Garden,⁹ parecían tener más un papel de restablecimiento de la cohesión en el barrio. En estos casos se trata de terrenos comprados o que han sido arrendados o atribuidos por la municipalidad (o que se poseían anteriormente).¹⁰ También me fueron señaladas iniciativas más individuales, a las cuales, sin embargo, no tuve

⁸ Me ha sido de gran ayuda la tesis de doctorado en geografía “De la crise urbaine à la réappropriation du territoire. Mobilisations civiques pour la justice environnementale et alimentaire dans les quartiers défavorisés de Detroit et du Bronx à New York”, defendida en 2015 por Flaminia Paddeu. Las citas y referencias extraídas de su trabajo aportan un punto de vista pertinente a algunas de las hipótesis que surgieron durante mis propias visitas, además de precisar elementos factuales posteriores a mi última estancia en Detroit.

⁹ <http://www.cskdetroit.org/earthworks/>; <http://www.georgiastreetcc.com/>; East Michigan Environmental Action Council; <http://www.emeac.org/>; Michigan Welfare Rights Organisation, <http://www.mwro.org/>.

¹⁰ La tenencia de la tierra no está muy clara. Muchas pertenecen a la municipalidad, que las atribuye a grupos de pobladores o a empresas (en forma de compra o de gestión), otras son los jardines particulares adscritos a una casa.

acceso debido a la poca disposición de sus protagonistas para hablar conmigo. Además, durante mi segunda visita, en 2012, investigadoras nativoamericanas con quienes sostuve un encuentro me dieron a entender que la problemática indígena, aunque poco visibilizada, también existe en Detroit. En cuanto a la “comunidad latina”, lo que a primera vista llamaba la atención era su falta de protagonismo como entidad organizada, lo que no significa que algunos miembros de ella no estén involucrados a título individual en los proyectos de agricultura urbana.¹¹ Por otra parte, el papel de las iglesias en los procesos organizativos me pareció muy relevante. Algunos observadores incluso ven en su proliferación una consecuencia de la crisis que llevó a las instituciones públicas al abandono de la población.

El derrumbe del tejido industrial de Detroit, que provocó el cierre de las fábricas y la consiguiente huida de casi dos tercios de la población (por tanto, de igual cantidad de contribuyentes) justificaron que, en abril de 2013, el gobernador del estado de Michigan nombrara un administrador financiero (*emergency manager*) para la ciudad. Esta tutela permite renegociar todos los contratos y convenios acordados con las autoridades municipales, y ha constituido un paso decisivo hacia importantes recortes en la gestión de los servicios públicos: disminución de las pensiones, del número de funcionarios, de los ya muy deficientes transportes públicos, reducción del alumbrado público y restricción de los programas escolares y culturales. Entre 2003 y 2013, cerca de 150 escuelas públicas han sido cerradas y se han perdido numerosos empleos (Paddeu 2015, 140-141). Tres meses después, en julio de 2013, la ciudad de Detroit se declaró oficialmente en bancarota. En 2014, la renegociación de la deuda de la ciudad dio lugar a una gran subasta (*grand bargain*), que a cambio de la cancelación de un tercio de la deuda y una inyección de 1 700 millones de dólares en los servicios, prevé la reestructuración de la administración y la supervisión de las finanzas de la ciudad. Varias fundaciones filantrópicas (Kresge, Ford, Knight), así como grandes consorcios financieros privados —Syncora, Financial Guaranty Insurance Co., UBS y Bank of America Merrill Lynch— que aportaron

¹¹ El Mexican Village es uno de los pocos barrios en donde se concentran comercios (grandes y pequeños) en la ciudad.

capitales, obtuvieron el derecho de comprar terrenos a precios irrisorios para desarrollar proyectos inmobiliarios, y controlaron de esta manera el destino de la ciudad y sus habitantes.

Como ya se vislumbra en la denominación de algunos proyectos,¹² la denuncia del racismo destaca como problemática y está presente en todos los debates. El tema del derecho a una alimentación sana es el punto de partida para desembocar en un planteamiento más político que cuestiona comportamientos discriminatorios y hasta racistas. El término de justicia alimentaria (*food justice*) utilizado indica claramente el propósito, que radica en la reparación de desigualdades históricas sufridas por categorías de población identificadas como pobres y racialmente estigmatizadas (en Detroit, la población afroamericana). Sin embargo, cabe preguntarse si el hecho de enarbolar la bandera de la justicia alimentaria contribuye a distender o, al contrario, a estrechar el vínculo con el tema más amplio de la justicia social.

La encuesta realizada por Flaminia Paddeu sugiere que, para algunas organizaciones de base (*grassroots organisations*), las demandas en torno a la alimentación y al medio ambiente (en menor medida) aparecen como una manera desviada de plantear temas económicos, raciales o sociales. Afirma también que, al ser enfocadas principalmente hacia “la comunidad” (que define en los términos territorial, poblacional y de identidad), estas nuevas prácticas llegan a crear convergencias y a trascender las diferencias sociales y raciales existentes en la comunidad poblacional y de identidad, poniendo el acento sobre las reivindicaciones en beneficio de la comunidad territorial (Paddeu 2015, 285). Sin embargo, algunos elementos incitan a matizar esta apreciación, en la medida en que la cohesión construida sobre bases territoriales puede tender a recrear desigualdades espacialmente definidas. Durante mi segunda visita, en 2012, distinguí un cambio notable en algunos barrios céntricos de la ciudad. Las construcciones nuevas, destinadas a atraer un público de clase media (blanca), a la vez promotor y consumidor de la agricultura urbana, no dejaron

¹² Por ejemplo, el Black Community Food Security Network impulsaba la campaña “Undoing racism” a través de la práctica de agricultura urbana; ver <http://detroitblackfoodsecurity.org/>.

de ser señaladas por algunos activistas como un proceso de *gentrificación* de la ciudad. Siniestrado desde hace muchos años, el repoblamiento del centro de la ciudad por una población joven y educada se ha acompañado de la instalación de nuevas empresas y *start ups*, bares, restaurantes, galerías de arte, tiendas y cadenas de venta de alimentos (Paddeu 2015). Al pasar la línea de demarcación entre el espacio administrado por la municipalidad y el de los municipios aledaños,¹³ se observa un contraste enorme. A la vuelta de una calle, el paisaje en ruinas deja lugar a coquetas casas rodeadas de patios bien cuidados, característicos de los suburbios poblados por las clases medias en muchas ciudades estadounidenses. El despoblamiento de la ciudad empezó precisamente con las categorías sociales más pudientes que pudieron irse. La población restante (86 % afroamericanos) quedó atrapada en un círculo vicioso: el abandono de las empresas provocó el éxodo de los comercios y viceversa. A este factor se suman la deslocalización temprana de las fábricas en ciudades más pequeñas de alrededor (Flint, que conoció el mismo declive), así como el desprecio histórico (evocado anteriormente) por la pequeña producción agrícola. Aunque hubiera recursos agrícolas en el *hinterland*, lo que falta son medios (en particular de transporte) para llevarlos a la ciudad.

La “tradición agrícola” de Detroit, que ha resurgido recientemente con el *urban gardening*, hace referencia primero a sus orígenes en la implantación de pioneros franceses en el siglo XIX, y luego a los llamados jardines cultivados por los obreros en los años cincuenta, al margen de su actividad laboral en las fábricas. Las iniciativas relativamente exitosas de los más recién llegados (jóvenes emprendedores blancos) son las que hoy gozan de la mayor visibilidad en los medios: las hortalizas que cultivan en sus terrenos abastecen el Eastern Market, un espacio que, algunos días a la semana, al revitalizar los intercambios comerciales y las relaciones sociales, rehabilita también la imagen de la ciudad.

Ante una administración municipal principalmente preocupada por buscar fuentes de ingresos, la capacidad financiera de las grandes corporaciones para desarrollar proyectos agrícolas y “ambientales” se sobrepone a la de los

¹³ Detroit tiene dos enclaves: Hamtrac y Dearborn. Esta última, próspera, alberga a la “comunidad” libanesa más importante después de Beirut.

planteamientos ideados a escala de los barrios. Iniciativas de gran escala, como el proyecto Hantz Farm, han provocado ya tensiones y movilizaciones ciudadanas. Aunque la instalación del rancho urbano gigante con vocación comercial (principalmente plantación de árboles) no llegó a concretarse, la empresa agrícola Hantz sí adquirió una gran cantidad de terreno, y desde diciembre de 2012, el proyecto Hantz Woodlands ha obtenido oficialmente la autorización de las autoridades municipales de administrar cerca de 1 500 parcelas (0.6 km²) para sembrar árboles. El contrato contempla la obligación de mantener los espacios, lo cual implica que cualquier utilización del espacio por los habitantes requiere del aval previo del grupo empresarial (Paddeu 2015).

Tales transformaciones no son ajenas al fenómeno de las ventas hipotecarias de casas (*foreclosures*) que se iniciaron en Detroit años antes de aquellas provocadas por la crisis de los *subprimes* en el resto del país, pero que aumentaron considerablemente a partir de 2008: 45 000 parcelas incautadas entre 2010 y 2011, y 20 000 tan solo en 2012 (Paddeu 2015).

Renacer de las cenizas: el fénix neoliberal

En ese contexto, cabe interrogarse sobre las condiciones del renacimiento de Detroit, presentado como un laboratorio de la era posindustrial. El modelo escogido es el de las llamadas *smart cities*, que le apuestan sobre todo a la oferta de servicios vinculados a la alta tecnología:

La denominación de *smart city* abarca en realidad frecuentemente dos elementos [...] distintos: la ciudad numérica y la ciudad creativa. Esta última designa la manera en que las ciudades en declive industrial [...] han vendido una nueva imagen fundada en la atracción de las “clases creativas”, mediante reorientaciones económicas hacia las *start up*, reconversiones arquitecturales modernistas y una valorización del *green*. “Sin embargo, cabe interrogarse acerca del alcance de dicha respuesta frente al gran reto mundial consistente en saber qué hacer con las ciudades en declive” estima Charlotte Vorms. “Aún más sabiendo que ese tipo de políticas de revitalización tiene un costo social importante”. Lo más interesante

en las ciudades post crisis, estima Flaminia Paddeu, “probablemente no es el más reciente lugar *design* o la nueva galería, sino la manera en que los habitantes que se quedan en el lugar se reapropian el espacio público, por ejemplo, vía el desarrollo de agricultura urbana, como en Detroit” (Confavreux 2014).

Sin embargo, los espacios reapropiados para la agricultura urbana compiten con los parques públicos, y como la municipalidad de Detroit carece de recursos para mantenerlos, aparentemente le apuesta a la gestión privada bajo distintas modalidades. La primera consiste en confiar la gestión a fundaciones —como Kresge Foundation, Knight Foundation, Ford Foundation— o a actores individuales patrocinados por empresas privadas —como Dan Gilbert, multimillonario fundador de Quicken Loans— (Paddeu 2015), dejándoles la oportunidad de rentabilizar los espacios (por ejemplo, con proyectos inmobiliarios). La segunda —por ejemplo el programa Adopt-a-Park— consiste en movilizar a los habitantes de los barrios para mantener los parques públicos. Lo que puede leerse como una loable intención de involucrar a la sociedad civil, difícilmente oculta la renuncia de los poderes públicos a sus obligaciones de garantizar un entorno sano y seguro para la ciudadanía. Dicho de otra manera, la tradición de lucha de los actores sociales por la defensa de los servicios públicos no solamente está siendo útilmente aprovechada, sino que, bajo el impulso de la crisis, está siendo reorientada hacia el *do it yourself*, principio históricamente erigido en Estados Unidos como fundamento de un poder económico, cuyo éxito depende del voluntarismo y del mérito individual. Las palabras de Grace Lee Boggs, veterana activista¹⁴ notablemente conocida por haber sido cercana al pensamiento comunista, ilustran la adaptación de la movilización social al contexto neoliberal: “hemos llegado a percibir el florecimiento de una finca en medio de una selva urbana de concreto como

¹⁴ Grace Lee Boggs, que cumplió cien años, es fundadora del Boggs Center (en referencia a su fallecido esposo James Boggs, activista de las luchas sociales en Detroit). El centro se dedica a la promoción de la agricultura urbana como motor del cambio social. La cita reproducida no le resta al Boggs Center la producción de un discurso muy crítico del neoliberalismo. Ver <http://boggscenter.org/>, consultado el 25 de mayo de 2016.

una vía hacia la transformación que ni una manifestación de masa es capaz de alcanzar” (en Paddeu 2015, 306).

El modelo de *shrinking city* (ciudad que se encoge), promovido como solución para evitar el naufragio por la actual administración de Detroit, le apuesta a una rentabilización intensiva de un espacio reducido, y deja un margen de maniobra muy estrecho para hacer valer derechos. Más bien, la recuperación del espacio por la ciudadanía organizada aparece condicionada a una lógica neoliberal que, para imponerse, tuvo que hacer trizas las conquistas alcanzadas gracias a la movilización colectiva. Ciertamente, las huellas del pasado se perciben en las actuales formas de organización, pero también es cierto que en no pocos discursos destaca la preocupación por crear empleos como prioridad de la agricultura urbana.¹⁵ En una ciudad abandonada por las industrias (y los empleos que generaban), en donde las autoridades tienen el desarrollo de las actividades de servicio como principal horizonte económico, la decisión de la municipalidad de responder positivamente a la demanda ciudadana de legalización de la agricultura urbana puede ser vista como paliativo para el desempleo masivo, al cual no se ha encontrado remedio. Enmarcados en un proyecto global fundado en una competencia descontrolada, y frente a la codicia de las corporaciones deseosas de reconvertirse en el *green business* (sea como mecenas de áreas verdes o promotores de plantaciones urbanas), los terrenos arrancados por pobladores organizados mediante la gestión de espacios constituyen nichos mínimos de experimentación, en los cuales el objetivo de controlar la cadena de producción parece aún un sueño lejano.

Honduras, un país enfocado a la exportación

En Honduras, como en muchas regiones del subcontinente, la reforma agraria de los años 1960-1970 respaldó la pequeña y mediana producción, con el

¹⁵ Ver el documental de Maxime Combes y Sophie Chapelle (2013): *Détroit : l'agriculture urbaine, antidote à la désindustrialisation?* Consultado el 25 de mayo de 2016. <http://latelelibre.fr/libre-posts/doc-detroit-lagriculture-urbaine-antidote-a-la-desindustrialisation/>.

doble objetivo de controlarla y de canalizar hacia las regiones poco pobladas del Aguán la presión que ejercía el campesinado sobre los latifundios del oeste. Este esquema le apostaba tanto a la transformación del campesino minifundista en fuerza partícipe del desarrollo como a la gran producción agroexportadora. El aporte del campesinado al desarrollo del país y su transformación quedaban enmarcados en su permanencia en el campo. Gilberto Ríos,¹⁶ conocido estudioso de la situación agraria en Honduras, observa que las políticas implementadas durante esa época le apostaban a la incorporación de los campesinos y al manejo de recursos forestales como un factor de incursión en el mercado. Ese enfoque fue promovido principalmente por las fuerzas armadas, las cuales, cuando no gobernaron directamente, tuvieron una influencia determinante sobre las decisiones en materia política y económica.

En aquellos años el concepto de *reforma agraria* no se refería a la agricultura familiar de autosubsistencia, sino que el Estado favoreció más bien el acceso a la tierra¹⁷ y la incorporación del pequeño campesinado a estructuras colectivas (denominadas “empresas campesinas” porque “cooperativa” olía a comunismo), e incentivó en particular el cultivo de la palma. Esta decisión partió de la convicción de que el país no puede sostenerse sin productos de exportación (azúcar, banano, cacao y, en menor medida, cítricos, etc.). Por lo tanto, la producción de granos básicos nunca fue una prioridad, ni ayer ni hoy; sin embargo, no basta con acceder a la tierra, sino que el campesino necesita dedicarse a actividades que le brinden ingresos, y estos los busca en cualquier actividad, no solamente agrícola, también en la migración interna o externa.¹⁸

¹⁶ Entrevista realizada el 2 de mayo de 2016 en Tegucigalpa, Honduras. Hoy consultor independiente, Gilberto Ríos fue, durante años, director ejecutivo de la sección hondureña de Food First Information and Action Network (FIAN), una ONG internacional dedicada a velar por el derecho a la alimentación.

¹⁷ Las tierras de reforma agraria, sin embargo, no fueron regaladas, sino que tenían que ser pagadas a plazos. Esto explica por qué se incentivaron los cultivos de exportación y no la siembra de cultivo para el autoabastecimiento.

¹⁸ Cifras del 2012 registraban 1.2 millones de hondureños en el exterior (14% de la población). Al convertirse las remesas en la principal fuente de divisas, se puede afirmar que la mano de obra es el principal rubro de exportación del país (*El Heraldo* 2014).

Hasta los años ochenta, la mayoría de los granos básicos consumidos eran producidos en el país, y hoy todavía 60 % del maíz y el frijol se producen en tierras de ladera por gente que no tiene otras opciones. Estima Gilberto Ríos: *Es lo que se entiende por economía campesina: no hay cálculos respecto a las posibles ganancias. La preocupación del campesino de ladera¹⁹ es la sobrevivencia, no el aumento de ingresos a través del acceso al mercado.* Esta situación, que aparece como paradójica, en realidad refleja las ambigüedades de las políticas hacia el campo: los granos básicos (maíz, frijol) nunca tuvieron buen precio, lo que explica, por una parte, que fueran cultivados por campesinos de ladera para su autosustento y, por otra, que la venta de los excedentes a precios bajos en el mercado interno no brindara los recursos que les permitieran salir de su condición. Así, los dos factores se alimentan mutuamente: es justamente la permanencia de campesinos de ladera lo que mantiene los precios bajos, y viceversa, el mantenimiento de estos precios bajos permite que abastezcan el mercado interno. *Los que tienen las mejores tierras no siembran granos básicos*, señala Gilberto Ríos. Se puede entonces plantear la hipótesis de que estas políticas de precios agrícolas fueron aprovechadas por los gobernantes de la época, y que ese afán campesino de alcanzar mejores condiciones económicas fue precisamente el más poderoso incentivo para emprender la migración hacia el Aguán, con la esperanza de poder dedicarse a cultivos para los cuales recibirían subsidios y buen pago. El problema, insiste Ríos, es que se trata de volver competitivas a las familias campesinas. Un asunto que, según él, las organizaciones que hoy claman por la reforma agraria (enfocadas exclusivamente en el reclamo de tierra) no están considerando seriamente. Prueba de ello es que las luchas más fuertes por la tierra y las ocupaciones de los últimos años se dieron en el norte del país, donde se producen cultivos rentables como la caña y la palma, que sí tienen acceso a mercados. Esta correlación histórica entre agricultura de ladera y autosubsistencia, por un lado, y acceso a la tierra para cultivos de renta, por el otro, hoy tiene todavía un peso simbólico fuerte en la memoria colectiva

¹⁹ Se refiere al hecho de que muchos campesinos minifundistas han sido orillados hacia las tierras menos fértiles y sujetas a la erosión, situadas en las alturas, al margen de los valles y planicies acaparados por los latifundios y la agricultura agroindustrial.

campesina. Esto ayuda a entender — como veremos más adelante — la posición dual de ciertas organizaciones campesinas respecto a la (re)conversión a cultivos de granos básicos.

Al respecto, cabe abrir un paréntesis para señalar que fue a partir de los años noventa cuando la noción de agricultura familiar, como factor de desarrollo y sustento de la “seguridad alimentaria”, adquirió más relevancia, en paralelo — y no es casual — a la firma de los tratados de libre comercio. Paradójicamente, el entusiasmo suscitado por la capacidad competitiva de la producción minifundista fue contemporáneo de la liberación de los precios de los productos agrícolas. Eso afectó profundamente a los pequeños productores, quienes no pudieron competir con los granos procedentes de Estados Unidos u otros países donde los productores contaban con subsidios. Para rematar, la controvertida Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA), adoptada en 1992, fue la principal herramienta mediante la cual la función de regular las transacciones agrarias fue confiada sobre todo al mercado. En este sentido, al advertir la necesidad de pensar la competitividad campesina, Gilberto Ríos no adopta una postura ideológica en forma de declaración de amor a los mecanismos de mercado, sino que enuncia un lúcido aunque crudo análisis de las distintas etapas que llevaron a las empresas campesinas del Aguán a una situación de dependencia mucho peor que la que experimentaban en el pasado.

La gran huelga bananera de 1954, recuerda Gilberto Ríos, fue impulsada por los obreros bananeros, que tenían las mejores condiciones y aspiraban a mantenerlas. Cuando a raíz de la mecanización de la producción, las compañías bananeras (United Fruit y Standard Fruit Company) empezaron a despedir gente e instauraron un sistema de producción bajo contrato, los bananeros, ahora llamados *independientes*, perdieron las ventajas (casas, escuelas, hospitales) que, pese a las condiciones de explotación, la compañía reservaba a sus empleados. Además de buscar cómo dar al traste con la concientización social — facilitada por la concentración de mano de obra en estas zonas de enclave —, las nuevas reglas permitieron a la compañía desligarse de los problemas vinculados a lo social y a lo económico (los efectos de un decremento de la producción recaían en el productor). A la vez, mantuvo la dependencia brindando los insumos, haciendo las fumigaciones y, por supuesto, fijando los

precios. De eso es fácil deducir que las tierras “cedidas” por las bananeras no eran para sembrar granos básicos, sino exclusivamente bananos. Ese control, que siempre se mantuvo sobre las orientaciones productivas, provocó en Honduras un efecto de doble filo: fortaleció la dependencia de las fuerzas productivas, pero ese mismo funcionamiento, aunado a la herencia de la experiencia de la lucha bananera, permitieron la permanencia en el mundo rural de estructuras organizativas fuertes a las cuales se tuvieron que conceder ciertos derechos.²⁰ Así lo cuenta el padre Ismael Moreno:²¹

Esa explotación bananera, entre muchas otras cosas, dio lugar a un movimiento obrero [...] que, para la mitad del siglo XX, fue dándole forma a una organización y a una protesta obrera que se convirtió en una propuesta antimperialista [...] Seguramente la [...] más clara y notable que se dio en Centroamérica [...] De manera que, en 1954, los obreros organizados, unos en el Partido Comunista, los otros no, pero con una conciencia en contra de la bananera, y por eso una conciencia antimperialista, paralizaron las labores, y como la economía de Honduras estaba organizada alrededor del enclave, esa huelga paralizó prácticamente el país y se convirtió en un conflicto político nacional [...] La huelga duró 79 días [...] Entonces, vino una respuesta enorme del Gobierno de los Estados Unidos para contrarrestar y [...] se inicia el proceso de la contrarrevolución hondureña, que [...] no tuvo solamente el factor represivo [...] sino que [...] significó cooptar todos aquellos elementos que pudieron haber ocasionado en 1954 una transformación revolucionaria en Honduras [...] De manera que, [...] en la década de los 1980 [...] en Honduras [...] la mayor organización campesina que hubo en América Latina tenía tres factores contrarrevolucionarios: primero, la entrega de tierras; segundo, la formación de todos los dirigentes campesinos, y tercero, la represión y eliminación de los que no encajaban con la formación y con el modelo de organización que planteaban los Estados Unidos. Fíjense que, en los años 1970, los principales dirigentes sindicales y los principales dirigentes

²⁰ En la vecina Nicaragua, en la misma época, el Estado recurrió a métodos similares, pero se limitó a ir a botar a los campesinos sin tierra a los límites de la frontera agrícola.

²¹ El sacerdote jesuita Ismael Moreno es el director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), con sede en El Progreso, Yoro.

campesinos ¿saben dónde se iban a formar? A los Estados Unidos, con la [American Federation of Labor–Congress of Industrial Organization] AFL-CIO.²² De manera que [a partir de los años sesenta, cuando se organizan guerrillas en los demás países de la región] en Honduras es cuando más sólida está la contrarrevolución. Tan sólida que aquí, a finales de 1972, los militares dieron un golpe de Estado. ¿Y saben cuál era [su] quehacer fundamental? La reforma agraria. ¿Y quiénes eran los principales aliados de los militares entonces? Los dirigentes del Partido Comunista.²³

El Bajo Aguán, una tierra de conquista

En los conflictos agrarios que hoy afectan al Bajo Aguán, las etapas que Gilberto Ríos define como *proletarización*, seguida por una *tercerización*,²⁴ ya no encuentran salida en una *recampesinización* (mediante la atribución de tierras por el Instituto Nacional Agrario [INA]). A partir de los años noventa, las reglas del juego ya no las pone el Estado, sino el mercado y las instituciones financieras internacionales. Bajo los auspicios del Banco Mundial, las reformas agrarias son ahora “asistidas por el mercado”.

La colonización del Aguán había sido incentivada por el Gobierno y ampliamente supervisada por la institución militar. La mayoría de los colonos fueron traídos del sur (Choluteca) o del occidente del país (Copán, Santa Bárbara y La Paz). Pedro Ulloa, uno de los fundadores del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), cuenta que cuando su padre llegó a Copán, la tierra que en ese entonces concesionaba la municipalidad,²⁵ *solo daba para sembrar pasto (para la ganadería) y muy poco para el cultivo de granos básicos. [...] La idea de la reforma agraria de los años cincuenta, sesenta, de mandar la gente a las tierras*

²² Nacida en 1955 a partir de la fusión de la AFL y el CIO, esta agrupación ha sido apoyada activamente por el Gobierno estadounidense en su lucha contra el comunismo y en su respaldo a los gobiernos dictatoriales en América latina y otras partes del mundo.

²³ Conversación con Ismael Moreno, en El Progreso, Yoro, noviembre de 2013.

²⁴ Se refiere a la transición de la condición de asalariado a la producción bajo contrato.

²⁵ Eso significa que las tierras no son propias, lo cual genera inseguridad para la familia.

fértiles, era la de mejorar la vida de los campesinos. Con tierras fértiles designa las del valle del río Aguán, donde él vino a asentarse en 1989. Pero al aprobarse la LMDSA, se acabaron los subsidios, las dotaciones generosas, las inversiones e incluso la protección a la producción que garantizaba el Estado, y se dio cancha libre al despojo de las tierras previamente otorgadas por el INA (de forma colectiva a empresas campesinas).

Varios factores se conjugaron para acabar con miles de empresas campesinas asentadas en el Bajo Aguán: la imposibilidad de mantener las costosas infraestructuras antes subvencionadas llevó a las empresas al endeudamiento. Por otra parte, no pocos directivos se dejaron corromper y vendieron las tierras en provecho propio. El proceso de reconcentración de tierras fue facilitado por las propias instituciones estatales (en particular el INA) y municipales que avalaron transacciones ilegales o distribuyeron discrecionalmente tierras del sector reformado.²⁶ Eso permitió que unos cuantos industriales, que hasta el momento se dedicaban principalmente a la transformación y comercialización de los productos extraídos de la palma, se adueñaran de las tierras —comprando las hipotecas o simple y llanamente acaparándolas—, y extendieran así su control sobre toda la cadena de producción. Según la fórmula consagrada de que la tierra se concentra “en pocas manos”, tres empresarios se repartieron la mayoría del pastel agrario y lograron así diversificar sus actividades: Miguel Facussé Barjúm, el finado dueño de la Corporación Dinant, junto con una de las mayores fortunas del país, se apoderaron de las tierras en la margen derecha del río Aguán; mientras que los terratenientes René Morales Carazo (de nacionalidad nicaragüense) y Reynaldo Canales (de origen guatemalteco) se asentaron en la margen izquierda.²⁷

²⁶ El sector reformado denomina aquellas tierras asignadas a la reforma agraria y cuya adjudicación está a cargo del INA.

²⁷ La denominación de margen derecha o izquierda se refiere menos a la ubicación geográfica que a la distinción de las organizaciones de ambos lados, que llevaron estrategias distintas en las negociaciones posteriores a las ocupaciones de tierras.

En el año 2000 renace la lucha campesina

El 14 de mayo de 2000 dio la señal para el resurgimiento de la lucha campesina, cuando 700 familias campesinas organizadas en el MCA ocuparon las 5 724 ha del antiguo Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM),²⁸ en el municipio de Trujillo (Colón). Durante la noche habían plantado sus chozas en tierras que, tras una larga batalla jurídica, habían sido reintegradas en 1991 al sector reformado, pero que la municipalidad había despachado ilegalmente a ganaderos y terratenientes de la palma. Pese a tener teóricamente la legislación de su lado, los campesinos se vieron confrontados por la reacción violenta de los potentados locales. Pese al hostigamiento, a las balaceras protagonizadas por los guardias de seguridad de las fincas y plantaciones privadas, y al asedio militar, los campesinos no desistieron de su demanda de legalización de las tierras (MCA 2009) y erigieron sus casas en lo que es hoy la comunidad Guadalupe Carney.²⁹ Agrupados en 45 empresas asociativas, obligaron a los gobiernos sucesivos a sentarse a la mesa de negociación:

En 2001, bajo la presión popular, el Congreso Nacional emitió un decreto con el que se pagaban las mejoras³⁰ a los terratenientes, que estaban instalados en las tierras recuperadas por los agricultores. La lucha campesina logró que se les entregara títulos de propiedad a las empresas [campesinas], pero bajo la presión de los terratenientes el proceso se detuvo. Actualmente quedan todavía 1 300 hectáreas por sanar (Trucchi 2010).

²⁸ Durante los años ochenta, en este lugar, bajo administración estadounidense y situado cerca de Trujillo (Colón), fueron entrenadas fuerzas castrenses de países vecinos, incluso la Resistencia nicaragüense (Contras).

²⁹ En homenaje al padre jesuita estadounidense James F. “Guadalupe” Carney, que en los años setenta abrazó la causa de la lucha revolucionaria campesina y fue desaparecido en 1983, en un enfrentamiento con el ejército hondureño asesorado por militares estadounidenses.

³⁰ Las mejoras designan las instalaciones erigidas en una tierra (construcción, cercos, corrales, etc.). Su precio se calcula aparte del de la tierra.

En 2008, la finca del terrateniente y subcomisionado militar Henry Osorto fue el escenario de un enfrentamiento que provocó la muerte de doce personas (incluidos varios de sus familiares), cuando la casa-hacienda fue incendiada por campesinos enardecidos. Temiendo represalias sangrientas, el presidente de la república (José Manuel Zelaya Rosales) ordenó una presencia militar permanente para resguardar a los habitantes de la comunidad Guadalupe Carney. Según Pedro Ulloa, este acontecimiento agudizó la represión en contra de los dirigentes del MCA. Desde entonces, decenas de ellos (incluso él mismo) han enfrentado acusaciones de todo tipo por parte de los terratenientes: desde el robo de fruta (de palma) o usurpación de tierras, hasta actos de terrorismo. *Eso desanimó mucho a la gente y la lucha perdió fuerza.*

El 28 de junio de 2009, el golpe de Estado puso un abrupto fin a la luz de esperanza que el presidente Zelaya Rosales había encendido con la promesa de mandar a revisar la legalidad de los registros catastrales y remedir los *sobretechos*.³¹ El decreto, que le daba a la medida un carácter oficial, fue uno de los primeros en ser abrogados por el régimen golpista. En el año 2000, la ocupación de un antiguo terreno militar por el MCA constituyó una gesta simbólica (en el espíritu antimperialista mencionado por el padre Ismael Moreno). A finales de 2009, con la ocupación de una veintena de fincas, el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) también envió un mensaje político contundente al gobierno de Porfirio Lobo, recién elegido en la sombra del golpe de Estado.

Posicionado en las márgenes derecha e izquierda del río Aguán, en el municipio de Tocoa (vecino del de Trujillo), el MUCA está conformado en gran parte por campesinos desposeídos de sus propiedades a raíz de la adopción de la Ley de Modernización Agrícola. Nacido en 2003, se da a conocer en 2007 con la llamada “marcha de los machetes” y, más tarde, con la ocupación de la planta procesadora San Isidro, acaparada ilegalmente por la Corporación

³¹ Extensiones de tierras que sobrepasan “el techo autorizado por la Ley y que varía según la región. Por ejemplo, en el Bajo Aguán el techo máximo de posesión por familia es de 300 hectáreas. Esto quiere decir que quien tenga más de lo autorizado será expropiado” (*Distribución de la Tierra en Honduras* 2013).

Dinant³² justo antes del golpe de Estado. Aparte de las tierras, resulta importante recuperar también las infraestructuras procesadoras de la palma porque determinan la autonomía o la dependencia respecto a los industriales que controlan la transformación y la comercialización, por ende, el precio de la fruta.

Esta ola de ocupaciones de tierras de gran magnitud obligó a entablar negociaciones mucho más complejas que las que hasta el momento había llevado el MCA,³³ y también más tensas, ya que al mismo tiempo el Gobierno lanzaba la operación Xatruch, un operativo militar de gran envergadura (que se mantiene hasta la fecha) con el propósito oficial de dismantelar a los grupos armados en el Aguán.³⁴

³² La Corporación Dinant abarca el conjunto de empresas propiedad de Miguel Facussé Barjúm. La que opera en el Aguán es Exportadora del Atlántico S. A.

³³ El MUCA ocupó más de veinte plantaciones sembradas con palma. Uno de los primeros puntos de las negociaciones fue determinar cuáles serían adquiridas por los campesinos y cuáles devueltas a los terratenientes (tabla 1). Cabe señalar que las decisiones tomadas causaron cierto descontento entre los grupos posicionados en propiedades candidatas a ser devueltas, pues fueron “reubicados” pero en terrenos menos productivos y en condiciones más desventajosas que los grupos asentados desde el principio en los terrenos que quedaron en manos de los campesinos.

³⁴ En el Bajo Aguán es un secreto a voces que parte de los campesinos se alzaron en armas. Es cierto también que, cuando les fue posible, los campesinos no repelieron con flores los ataques armados de los guardias privados de los terratenientes e incluso los del ejército. No nos corresponde aquí desarrollar este tema, que además da lugar a rumores difícilmente verificables. Nos limitaremos a mencionar que el refuerzo de la militarización, aunado al incumplimiento de los acuerdos, contribuyó a generar un ambiente de suspicacia generalizada que mina a las organizaciones campesinas. Algunas incluso empiezan a admitir que están siendo infiltradas por individuos procedentes de la inteligencia militar, como una estrategia para desacreditar al movimiento campesino. A ese opaco panorama se suma la presencia en la región de grupos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. Una de nuestras fuentes (que mantendremos anónima) inclusive afirmó que estos manifestaron un cierto interés en que el conflicto agrario mantuviera un perfil de violencia alto, para así evitar que la atención de las autoridades se focalizara en sus actividades ilícitas.

Las negociaciones acrecentaron las condiciones para la dependencia

La dependencia del cultivo de palma está en el centro del proceso de negociaciones que el 13 de abril de 2010 desembocó en la firma de un primer acuerdo entre el MUCA y el Gobierno. Este último indemnizaría a los terratenientes por las propiedades que entregaría al MUCA, a cambio de que este se las pagara a plazos. La ausencia de la Corporación Dinant en esa primera ronda, uno de los principales protagonistas del conflicto, refleja desacuerdos entre la empresa y el Gobierno, los cuales, en un primer momento, fueron aprovechados por los representantes del MUCA.

El MUCA aseguró la posesión de un porcentaje considerable de las tierras en disputa de la margen derecha e izquierda (3 000 ha) y su concentración en seis fincas (La Confianza, Aurora, Concepción, Marañones, islas 1 y 2), y abandonaron en forma voluntaria el resto de fincas no consideradas en el acuerdo, las cuales mantenía tomadas desde diciembre de 2009 (Irías 2011).

Dinant, que desde un principio quiso imponer sus condiciones, se incorporó finalmente a la mesa en junio de 2011, fecha en la que se empiezan a precisar las condiciones de pago de las fincas por los campesinos y sus compromisos en materia de comercialización y rentabilización (tabla 1). Eso incide fuertemente en la capacidad de decisión real sobre el uso de suelo y la capacidad de cumplir con los pagos acordados.

La batalla del Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán (MARCA)

Lo pactado en 2010 reveló discrepancias respecto a la forma de adquisición de las tierras y a la lista de las fincas que quedarían en manos de las organizaciones campesinas. El MARCA se rehusó a firmar el acuerdo porque, habiendo sido beneficiado por la reforma agraria en los años ochenta, pudo documentar que el despojo de sus tierras (entre ellas la finca y la planta procesadora San Isidro evocada previamente) había sido producto de una transacción ilegal. Por eso optó por una estrategia jurídica y no por la propuesta que había aceptado

TABLA 1
Aspectos principales de los acuerdos firmados por el MUCA

Acuerdo del 13 de abril de 2010	Acuerdo del 17 de junio de 2011
<p>Las tierras que los campesinos y campesinas adquieran por este acuerdo no podrán ser vendidas ni ser objeto de garantía en un futuro.</p> <p>El Gobierno central se compromete a desarrollar proyectos sociales en educación y salud, así como a construir cien viviendas en un máximo de dos años.</p> <p>Se organizará una comisión conjunta para establecer un justiprecio de las tierras, <i>el Gobierno de la República proporcionará los recursos que permitan la adquisición de las tierras y los Grupos Campesinos asumirán la deuda que tendrá que ser pagada al Gobierno, con condiciones especiales (bajas tasas de interés a largo plazo).</i></p> <p>En lo referente a los contratos de coinversión, estos quedan sujetos al conocimiento de experiencias exitosas en la región, dejándose abierta la posibilidad de implementar otras modalidades de contrato que respondan a los intereses del MUCA.</p> <p>Proporcionar tierra a los 28 grupos del MUCA de la manera siguiente: <i>a) 3000 hectáreas de tierra cultivadas de palma africana; b) 3000 hectáreas de tierra no cultivada; c) 1000 hectáreas de tierra cultivadas de palma africana en el plazo máximo de un año; d) 4000 hectáreas de tierra no cultivadas y adjudicadas en el plazo máximo de un año.</i></p> <p><i>“El Gobierno de la República se compromete a poner en posesión pacífica al MUCA de las 3000 hectáreas de tierra cultivada de palma africana una vez identificadas las áreas geográficas correspondientes a dicha extensión y el muca se compromete a desalojar en forma voluntaria el resto de la tierra ocupada.”</i></p>	<p><i>Las fincas que la empresa Exportadora del Atlántico S. A. de C. V. vende son: La Aurora, La Confianza, Isla I, Isla II, Marañones, La Concepción y La Lempira estableciéndose un precio de venta inicial de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L. 135 000.00) por hectárea; el precio final por hectárea se fijará como resultado de un avalúo independiente llevado a cabo por una Comisión Especial.</i></p> <p>La Comisión Especial de Avalúo deberá tomar en cuenta, para la valoración correspondiente de las Fincas arriba mencionadas, el precio actual de la fruta y el aceite de palma africana, su ubicación y servicios, la fertilidad del suelo, áreas sembradas, áreas no sembradas, áreas de infraestructura y protección, material genético de las plantaciones, su vida útil, su producción y su productividad como integrante de un negocio en marcha.</p> <p>En caso de que el precio final de la hectárea de tierra sea mayor al monto base establecido, su diferencia tendrá que ser pagada por el MUCA y si es menor, deberá ser devuelto por la Exportadora del Atlántico.</p> <p>El área total que representan las fincas antes mencionadas asciende a 4045.70 hectáreas. El pago de las tierras deberá realizarse a la firma del presente Convenio, mediante pago en efectivo u otros mecanismos de pago aceptados por ambas partes.</p> <p><i>El Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) se obliga de manera irrevocable a vender a precio de mercado la fruta cosechada de las fincas anteriores al mejor pastor y en las mejores condiciones para la empresa asociativa.</i></p>

Nota: Las cursivas son nuestras.

Fuente: Elaboración propia con base en Irías (2011).

el MUCA, pues hubiera significado recomprar las propiedades que considera legalmente como suyas. En julio de 2012, tras dieciocho años de batalla jurídica, el tribunal falló finalmente a favor del MARCA, pero poco después cedió a presiones del terrateniente y anuló la sentencia, lo que desató protestas que fueron duramente reprimidas: varios dirigentes fueron golpeados y detenidos, entre ellos Antonio Trejos, el abogado de la organización, quien semanas después fuera asesinado (su hermano sufrió la misma suerte unos meses más tarde). Desde entonces, por temor, ningún otro abogado ha querido hacerse cargo del caso.

Aquí se formaron 84 cooperativas, que fueron de la zona más desarrollada latinoamericana en lo que es palma africana. Pero luego, el plan [la ley] de modernización agrícola vino a matar todo el plan que tenían las familias para sembrar alimentos para nuestros hijos, que eran el maíz, el frijol. Eso se fue minimizando porque las tierras fueron más cultivadas de palma. En ese momento vino una caída de precios de la palma y sufrimos “afligio” económico, porque las mismas empresas lo permitieron [...] Teníamos el mercado, pero había una corrupción terrible [de los directivos de las empresas]. Nosotros no mirábamos la ganancia [...] Entonces la gente se fue quitando la idea de trabajar [...] sino que empezó a ver de qué manera podía agarrar dinero sin necesidad de estarse fregando en un monte [...] La campaña de modernización agrícola vino a meter la idea en algunos líderes campesinos de que vender la tierra era el factor más apropiado que había en ese momento. Mucha gente se puso en contra [...] pero aquellos que ya habían recibido la propuesta, ellos se pusieron de acuerdo, y si no, los perseguían, y algunos perdieron hasta la vida porque se habían puesto de acuerdo con los empresarios, habían recibido dinero a cambio de convencer a la otra gente que no estaba de acuerdo.

[...] Nosotros descubrimos que la venta de las tierras había sido ilegal y que nosotros éramos los verdaderos dueños, porque teníamos los documentos, y aun todavía los tenemos [...] Porque nos despojaron ilegalmente, violaron más de diecisiete artículos, que no están plasmados en la Constitución como

para haberse apoderado el empresario que tiene la tierra ahora [René Morales Carazo]. En algún momento eso va a salir a flote para que podamos recuperarla nuevamente (Walter E. Cárcamo, MARCA).³⁵

Más allá de las consideraciones legales, aparece en filigrana la dualidad entre el deseo de consolidar la seguridad alimentaria (a través del cultivo de granos básicos) y la búsqueda de rentabilidad a través del cultivo de la palma. Al mismo tiempo, se desprende de las palabras de Walter Cárcamo un vínculo entre el sistema de producción (el monocultivo) y la corrupción. De alguna manera, advierte la dependencia respecto a la fluctuación de los precios. Una amenaza que los otros dirigentes del MUCA no quisieron ver (o no tuvieron posibilidad de contornar) a la hora de las negociaciones, y que finalmente los precipitó en el callejón sin salida en el cual se encuentran ahora.

El *impasse*

A partir de 2012, empieza un nuevo forcejeo entre el MUCA y el Gobierno (y a través de él, en realidad, con las empresas agroexportadoras) respecto a los precios y a las modalidades de pago de las fincas. Gilberto Ríos, quien siguió el proceso de cerca, cuenta que, desde el principio, el trío Facussé-Morales-Canales formó un “oligopolio de demanda” porque al comprar, transformar y exportar aceite de palma, determinan los precios de compra de la fruta a los productores. En el momento de las negociaciones, este subió a 5 000 lempiras³⁶ por tonelada métrica. Esto explica que Miguel Facussé reclamara (y obtuviera) hasta 135 000 lempiras por ha sembrada en palma, por tierras que había adquirido a precio irrisorio (no más de 2 000 L/ha). Los negociadores del MUCA confiaron en que la buena coyuntura les permitiría pagar las fincas al precio y en los plazos establecidos: *Cuando firmaron el acto de compra-venta de las fincas [...] me reuní con hasta treinta dirigentes diciéndoles: “no*

³⁵ Conversación realizada el 9 de mayo 2016, en Tocoa, Colón.

³⁶ Un dólar vale aproximadamente 29 lempiras (L).

firmen, no compren a este precio. No van a poder pagar esta deuda” (Ríos). Pero tan pronto se concretó el trato, los precios se derrumbaron a 3 600 lempiras, hasta caer a 1 600 por tonelada métrica. La quiebra de las organizaciones campesinas, explica Ríos, se aceleró por varios factores externos: el aumento de la producción de soya en Estados Unidos y la baja de los precios del petróleo desplazaron a la palma en el mercado de los combustibles, precisamente en el momento en que se desataba una fiebre de la palma en toda América Latina, lo que a su vez generó una sobreproducción.

A estas circunstancias se sumaron factores internos. Gilberto Ríos ofrece detalles sobre el montaje financiero inicialmente previsto para honrar la deuda de cerca de 600 millones de lempiras que tienen que enfrentar las organizaciones campesinas para terminar de pagar las propiedades:

El banco que les iba a prestar inicialmente era el grupo [privado] Ficohsa. Les iba a prestar —es la peor estafa— con dinero del Estado [...] a 14 % [de intereses, cuando] el Estado le presta al 6 % [...] Ese 8 % [de diferencia] cubre sus gastos y el margen de ganancia. Pero cuando se lee el documento, que está hecho en complicidad con miembros del Ministerio de Finanzas, ahí hay una serie de comisiones [...] tan altas para seguros, supervisión del préstamo, etc. [...] Estos campesinos tenían que pagar más de mil millones de lempiras. Entonces [...] les dijimos: “no vayan a aceptar esto. Pidan que les preste directamente Banhprovi”.³⁷ [...] ¿Cómo es posible que Ficohsa vaya a cobrar seguro sobre el préstamo, cuando este está avalado por el Estado? ¡O sea, el convenio establecía que si los campesinos no pagaban, inmediatamente el Banco Central les pagaba a los terratenientes! ¡Para qué iban a asegurar, el Estado no iba a quebrar! Pero el banco es dueño de la compañía de seguros también. Al final de cuenta, el Gobierno aceptó dar un préstamo directo de Banhprovi al MUCA. Pero cuando los precios de la palma cayeron, tenían dos o tres años de gracia en el pago de intereses y no pudieron pagar. Margen derecha no pudo y no se sabe cuál es la situación de margen izquierda, porque se entregó total-

³⁷ Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), institución financiera pública.

*mente al Gobierno y la condición era que no se relacionaran con nosotros*³⁸ [los asesores] (Ríos).

Al fin y al cabo, todo parece indicar que el poderoso y combativo movimiento campesino del Aguán se está hundiendo bajo el peso de la deuda que le fue impuesta por instituciones del Gobierno coludidas con los grandes industriales de la palma. Para el MUCA, los sueños de diversificar la producción y dedicarle terreno al cultivo de granos básicos quedaron atrás, así como la expectativa de escapar de la tiranía de la palma, pues a pesar de la fluctuación de los precios, es el único cultivo rentable que puede permitir a las empresas campesinas honrar su deuda. El proceso de regularización de la tierra también dejó a los socios del MCA con aproximadamente 101 millones de lempiras de deuda. Parte de esta suma, aclara Pedro Ulloa, se la cobra el Estado en concepto de pago de las mejoras realizadas por veinte o treinta parceleros y ganaderos, ocupantes ilegales las tierras de reforma agraria que por ley les corresponden al MCA. ¡Para colmo, ni siquiera les han sido entregadas en totalidad! En noviembre de 2010, durante uno de los últimos intentos de recuperar la finca El Tumbador, usurpada por Miguel Facussé, cinco campesinos fueron emboscados y ultimados a tiros por los guardias de seguridad del terrateniente. Hasta la fecha, este crimen ha quedado en la impunidad, al igual que los muchos otros de los cuales fueron víctimas los miembros de las demás organizaciones.³⁹

Pedro Ulloa, quien, justamente para escapar a su condición de arrendatario, bajó de las laderas para unirse a la lucha colectiva por la reforma agraria,

³⁸ Las empresas de la margen izquierda aceptaron desde un principio las condiciones impuestas por el Gobierno, mientras que la margen derecha las rechazó, bajo la especulación de que la correlación de fuerza les permitiría negociar tasas más favorables, pero terminó ratificándolas, incluso en condiciones peores respecto a la propuesta inicial.

³⁹ Resulta casi imposible establecer con exactitud el número de muertes directamente imputables al conflicto agrario, porque si bien la lista de los asesinatos pasa de los cien, las responsabilidades, según la fuente que los da a conocer, no apuntan a los mismos actores ni a los mismos motivos. La carencia de investigaciones, que propicia impunidad, contribuye aún más a mantener la opacidad sobre el tema, a la vez que mantiene la zozobra, la suspicacia y la desinformación.

esboza un retrato desolador del gran esfuerzo organizativo que quedó desbaratado por el embate conjugado de las políticas neoliberales, la rapacidad de los terratenientes, la violencia y la represión:

Este es el fracaso que tuvo el movimiento campesino porque la aspiración del campesino es hacer su milpa, su frijolar, su arrozal, sembrar el guineo, la yuca [...] pero aquí es bien poco lo que da, aquí es una sola cosecha al año que se da en algunos lugares; en otros, ni para eso. Entonces, la visión de ser autosostenibles los grupos campesinos se pierde cuando es imposible sobrevivir con una cosecha pequeña al año. Hay que depender de la palma, hay que depender del pasto. El pasto [para ganado] da bastante, pero la gente no aprovechó mucho porque se vio inducida por la palma, porque del 2009 al 2012 tuvo un precio halagador [...] en que todo el mundo dijo: "vale la pena tener" y empezaron a cultivar bastante palma [...] Total de que las mejores tierras [...] hoy tienen palma. La comunidad ya no es autosostenible, depende de los granos de otros lugares: maíz, frijol, arroz y todos los otros productos, todo se hace comprado (Ulloa).

Por otra parte, deplora que las mejores tierras, es decir, las más planas, que podrían ser utilizadas para sembrar granos básicos o para sembrar arroz u hortalizas, siguen en manos de los terratenientes de la palma, mientras que la mayoría de las que finalmente se lograron legalizar son áridas y poco productivas, incluso para el cultivo de la palma:

La visión de hacer reforma agraria en Honduras surge de la necesidad de deshacernos de la propiedad privada para hacer la propiedad colectiva [...] Los vecinos han sido los trabajadores del patrón, los mozos de siempre, que tienen apenas un salario y un pedacito de tierra para cultivar su milpita, su frijolar [...] La idea de organizarse en empresas asociativas es buena. No siempre hay la oportunidad de adquirir tierra que sea productiva. Por ejemplo, las tierras del CREM las concesionaron más fácil para ser de reforma agraria —que fue en el 1991 cuando las traspasaron al INA—, pero porque vieron que el 80 % de estas tierras son áridas. Para la producción es bien difícil. Solo

hay unas pequeñas planizas, que las mejores de ellas son las que dejaron acaparadas los grandes terratenientes, que las concesionaron y no las han soltado. Por ejemplo, las tierras del Tumbador, que son al menos unas 80 manzanas,⁴⁰ son puras tierras planas, se podrían mecanizar. Las tierras de Bolero son 200 manzanas, que las tiene René Morales y están concesionadas. Ya no las ha recuperado el movimiento campesino [...] Están cubiertas de palma.⁴¹

Esta situación, considera Pedro Ulloa, se debe al hecho de que el sistema productivo no está “balanceado”, o sea, que lo que produce el pequeño productor no tiene precio. Solo es rentable lo que produce el agroindustrial. A eso se sumó que durante los dos últimos periodos de gobierno, las inversiones disminuyeron, hubo menos trabajo y los precios de la canasta básica aumentaron considerablemente. Ese conjunto de elementos hizo que la gente se desilusionara:

En los últimos cinco años la organización ha sufrido un decaimiento grandísimo. A tal grado que en la actualidad no se encuentran ni cinco personas que tengan el espíritu de líderes, que luchen por la parte organizativa; hay desinterés [...] Y por otra parte, hay mucha gente que viene pero no con mira de organizarse. Ha comprado derechos, ha comprado a socios, terrenos, y ellos viven ya como particulares en las parcelas.

Las estadísticas establecidas en 2014 arrojan una cifra de 300 familias socias de las 45 empresas campesinas, que tienen un derecho y viven bajo el reglamento de socios. Lo cual significa que más o menos el 50% de personas no socias viven en la comunidad. Compraron terrenos y llevan el nombre de la empresa, pero ya no se apegan al reglamento colectivo. Eso implica que se quedan cultivando como propietarios privados, pero ya no son solidarios de la deuda que pesa sobre los socios iniciales. Entre estos últimos hay quienes ven-

⁴⁰ La manzana (mz) mide un poco menos que una hectárea.

⁴¹ Conversación llevada a cabo el 10 de mayo de 2016 en la comunidad Guadalupe Carney, Trujillo, Colón.

dieron y se fueron, y otros que se quedaron en la comunidad: *En esta situación, la dirigencia del movimiento ya no puede conducir, no puede organizar, no puede promover nada. Aquí lo que se ha perdido es la conducción política*, lamenta Pedro Ulloa. En la actualidad, tanto el debilitamiento del movimiento como el hecho de que muchos aún enfrentan cargos judiciales, obligan a los dirigentes del MCA (y también en cierta medida a los del MUCA) a mantener un bajo perfil en el ámbito de la lucha social.

Defensa de los derechos humanos y del medio ambiente

La alta cantidad de muertes, los brutales desalojos y las múltiples exacciones —perpetradas por las fuerzas del orden público o los agentes de seguridad privada— registradas en el marco del conflicto agrario terminaron por dar a la situación en el Aguán una visibilidad internacional, en particular gracias a la movilización de organizaciones de solidaridad y ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Ante la falta de resultados obtenidos por las autoridades hondureñas en la investigación de los crímenes y demás actos de violencia, amenazas y persecución, se presentaron recursos ante instancias internacionales; en particular, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esa *institucionalización* tuvo efectos que es preciso mencionar, ya que modificaron la naturaleza de la lucha y el estatus de sus protagonistas, quienes se convirtieron de actores en víctimas y de “dirigentes campesinos” en “defensores del derecho a la tierra y el territorio”.

Excepto en el caso de la comunidad Guadalupe Carney, que después del incendio de 2008 obtuvo protección para el conjunto de la población, las medidas cautelares dictadas por la CIDH contribuyeron a personalizar las denuncias y a restarle a los atropellos su carácter colectivo (por lo menos de cara a las instituciones). En otras palabras, ya perdía peso el argumento de las organizaciones sociales respecto a una estrategia del Gobierno consistente en imponer un modelo a través del amedrentamiento de todo un sector combativo y organizado de la sociedad. De esta nueva manera de leer las cosas se desprende que algunos individuos están siendo perseguidos por tomarse más a pecho que

los demás el tema de las injusticias. La situación en el Aguán dio lugar a diversas misiones de observación con sus respectivos informes. Algunas ONG hacen malabarismo retórico para que activistas del movimiento social aparezcan como “defensores de los derechos humanos”, con tal de encajar en las campañas de *defensa de los defensores* que, con más frecuencia, ONG internacionales y organismos de cooperación al desarrollo colocan en el rubro “derechos humanos”⁴² de alguno de sus programas.

Vale la pena detenerse en lo que implica utilizar las palabras *defensa* y *defender* en lugar de otras, como *activista* o *militante*. A diferencia de la segunda, la noción de defensa no es proactiva, sino que, tomada *stricto sensu*, arrincona al sujeto en una posición en la cual tiene poca incidencia sobre lo que le aqueja y por eso necesita protección. Eso tiene más implicaciones de las que a primera vista pudieran aparecer: de cara a las instituciones nacionales (e internacionales), el sujeto defensor (o que se defiende) pide (si es muy atrevido, puede hasta exigir) el respeto de derechos que ya están plasmados pero no tiene opción de transformarlos (ni mucho menos ha sido convidado a elaborar las normas que los rigen). El asesinato, el 2 de marzo de 2016, de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, ilustra de forma emblemática el afán restrictivo del término *defensor*. En efecto, las condenas unánimes que se elevaron a nivel internacional destacaron casi exclusivamente su condición de defensora del territorio lenca, de la naturaleza, de las mujeres... entre otras causas. Lo que trascendió a nivel internacional fue recordarle al Estado hondureño su obligación —a todas luces incumplida— de brindarle protección a una defensora que gozaba de medidas cautelares recomendadas por la CIDH. En cambio, tuvieron menos repercusión las voces (en primer lugar la de sus familiares) que enfatizaron la lucha incansable que, desde la cancha antipatriarcal, anticapitalista y del ecologismo político, la militante libraba por rebatir las contradicciones del sistema. Se elevaba en particular contra aquellas normas ambientales que, con pretexto

⁴² En la abundante literatura dedicada a la formulación de proyectos se encuentran variantes de terminología tales como *eje transversal derechos humanos* o *línea de trabajo derechos humanos*, etcétera.

de conservar el planeta y preservar los recursos naturales, organizan su comercialización al mejor postor. En consecuencia, no escatimaba sus críticas hacia actores privados, y más aún, organismos públicos de cooperación que, como el Finnfund o el Netherlands Development Finance Company (FMO por sus siglas en neerlandés),⁴³ pretendían vender, como un aporte al desarrollo y a la generación de energía limpia, el financiamiento de una represa que tendría como efecto conexo la privatización del río Gualcarque.

Green business en el Aguán

La problemática ambiental también incursionó en el Aguán y marcó un giro respecto a la lucha agraria. Al igual que el tema de los derechos, la preocupación por el ambiente llegó mediante la convergencia entre los campesinos en lucha y los movimientos de solidaridad internacional. En este caso, la denuncia internacional de las violaciones de los derechos humanos sirvió a los propósitos de ambas partes. Todo inició de manera relativamente discreta, con la campaña de la pequeña ONG alemana Salva la Selva para denunciar el crédito de 45 millones de dólares acordado por el Banco de Fomento a la Cooperación Alemana (KfW) a la empresa Exportadora del Atlántico S. A. (propiedad de Miguel Facussé) para un proyecto de reciclaje de biomasa.⁴⁴ El objetivo era, luego, el de negociar lo producido (energía limpia) en forma de bonos de carbono con EDF Trading, filial de la empresa pública de energía francesa Électricité de France en Gran Bretaña, país en donde se ubica la bolsa de valores del mercado de dióxido de carbono. El negocio parecía ir viento en popa cuando la masacre del Tumbador vino a salpicar de manera trágica la reputación de la empresa hondureña y de su propietario. Cabe señalar, sin embargo, que el Gobierno británico —que da su aval para la certificación de

⁴³ Respectivamente, organismos finlandés y holandés de financiamiento de la cooperación al desarrollo.

⁴⁴ Ver <https://www.salvalaselva.org/peticion/691/gobierno-britanico-y-derechos-humanos-comercio-de-carbono-ensangrentado-en-honduras>.

bonos de carbono a las empresas con sede social ubicada en su territorio— no reaccionó a las interpelaciones reiteradas de los ambientalistas alemanes, a los cuales, mientras tanto, se habían sumado varias otras organizaciones. La KfW fue finalmente el eslabón que, en abril de 2011, rompió la cadena y anunció el retiro de su financiamiento a Exportadora del Atlántico S. A., por estar potencialmente involucrada en violaciones de los derechos humanos. Al día siguiente, EDF Trading también anunciaba la cancelación del contrato con la empresa. La respuesta de Miguel Facussé fue a la altura del monto perdido. En un campo pagado publicado en todos los periódicos, amenazaba nominalmente a los activistas de las principales organizaciones nacionales de defensa de los derechos humanos, denunciándolos como enemigos del progreso y principales responsables de la eventual pérdida de empleos que, a causa de la cancelación del contrato, se daría en Honduras. No obstante, tras lo que los activistas calificaron de pequeña victoria, otro golpe más fuerte estaba por venir. En 2012, dando seguimiento a una carta enviada en 2010 por varias ONG al Banco Mundial para denunciar graves atropellos a los derechos humanos, la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO, por sus siglas en inglés) fue comisionada para realizar una auditoría acerca de las condiciones en que la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, había atribuido en 2008 un crédito de quince millones de dólares a Exportadora del Atlántico S. A. En su informe de noventa páginas publicado en 2013,⁴⁵ la CAO (que difícilmente se puede tildar de radicalista) emite conclusiones demoledoras. Fundamentándose en un registro minucioso de los incidentes ocurridos desde el 2000 (o sea, desde el inicio del conflicto con el MCA), el *ombudsman* establece que la IFC faltó a sus obligaciones de cerciorarse de que la empresa beneficiada por el préstamo respetaba las normas éticas en materia social y ambiental. Señalando en particular la actuación de las empresas de seguridad privada contratadas, la CAO recomendó suspender los desembolsos hasta comprobar que Exportadora del Atlántico S. A. se apegara a las reglas establecidas en materia de responsabilidad

⁴⁵ Ver http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/DinantAuditCAORefC-I-R9-Y12-F161_ESP.pdf, consultado el 3 de junio de 2016.

social y ambiental de las empresas. Acto seguido, la IFC se congratuló de que, hecho inaudito en Honduras, las compañías de seguridad se comprometieran a firmar un protocolo respecto al uso de armas; sin embargo, en el ámbito de la justicia no se han registrado avances: la masacre del Tumbador sigue en la impunidad y las viudas de los campesinos asesinados permanecen en un total abandono e indefensión.⁴⁶

En los casos mencionados, la preocupación de las instituciones y organismos financieros parece concentrarse más en cuidar que su imagen no sea manchada por hechos bochornosos que en entablar un examen serio del modelo económico que los provoca. Así, de los dirigentes que participaron en las negociaciones de 2010, los dos únicos que quedan en la región⁴⁷ acogieron con suma desconfianza el nombramiento por la IFC de un supuesto mediador para buscar una solución al conflicto en el Aguán. Según ellos, la hoja de ruta propuesta por el consultor desde 2014 no llena las expectativas de las organizaciones campesinas porque no toma en cuenta el tema, prioritario para ellos, de la reevaluación de su deuda. Por otra parte, denuncian que el plan de acción está siendo utilizado por el Gobierno para imponer, por decreto y sin discusiones, su agenda económica y política en el Aguán. En otras palabras, denuncian el mecanismo como un espaldarazo a un Gobierno que no solamente ha incumplido con los compromisos sociales plasmados en los acuerdos (escuelas, salud, etc.), sino que ha dado una respuesta casi exclusivamente represiva a las demandas campesinas y ha abordado el candente problema de la violencia desde una perspectiva meramente militar y judicial. En efecto, si todos reconocen la necesidad de esclarecer los crímenes en el Aguán, los escasos resultados obte-

⁴⁶ Como lo constató en mayo de 2016 una misión internacional de observación de la situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán.

⁴⁷ De los negociadores campesinos presentes en 2010, dos han sido asesinados: Matías Valle (MUCA margen derecha, asentamiento La Confianza) en 2012 y Juan Galindo (MUCA margen izquierda, asentamiento Marañoses) en 2014. Otros, temiendo por su vida o por miedo a ser enjuiciados, han optado por salir del Aguán o incluso del país. Dos permanecen en la región pese a reiterados intentos de atentar contra sus vidas. El 20 de octubre de 2016 fue asesinado José Ángel Flores, presidente del MUCA.

nidos por el recién creado cuerpo investigativo especial⁴⁸ (proporcionales a los pocos recursos que le fueron asignados) demuestran más la intención de judicializar el conflicto que de atender sus causas estructurales. La sensación de parcialidad de las instituciones se refleja en esa reseña periodística del informe, “El papel de los operadores de justicia en las violaciones de los derechos humanos en el Bajo Aguán”, publicado por FIAN en 2016:

Los órganos administradores de justicia han orientado sus actuaciones oficiales a dirimir asuntos de carácter social que tienen otro espacio de solución en otras instancias administrativas. La Corte Suprema de Justicia ha callado de forma sospechosa la declaración de inconstitucionalidad de leyes secundarias como la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, que por razones de orden fáctico se antepone a la supremacía de la Constitución de la República [...].

El Ministerio Público se ha instrumentalizado para paralizar las reivindicaciones sociales que siendo legítimas se penalizan. La impunidad es generalizada y los mismos órganos encargados de luchar contra ella, la reproducen en sus ejecuciones oficiales.

En el párrafo anterior, el mismo artículo menciona que:

Las políticas públicas e institucionales por parte del Estado han sido orientadas de forma abierta a privilegiar los procesos de concentración de la tierra en manos de las élites empresariales agrarias y han profundizado el latifundio. La reforma agraria en el país es un tema pendiente en cuanto a las perspectivas de su enfoque que debería abordar transversalmente la seguridad y soberanía alimentaria del país, la afectividad generalizada, el cambio de estructura agraria, y privilegiar políticas de equidad y de desarrollo económico y social (FIAN 2016).

⁴⁸ “El acuerdo PGR-004-2014, emitido el 27 de febrero de 2014 creó [...] la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (Umviba) [...]”. Ver <https://honduprensa.wordpress.com/2014/04/08/unidad-especializada-investigara-asesinatos-en-el-aguan/>, consultado el 3 de junio de 2016.

Estas constataciones nos acercan a lo que nuestras propias observaciones nos permiten avanzar; conclusiones que queremos extender al ámbito más amplio de las políticas implementadas a nivel internacional.

Un paralelo tentativo: a manera de conclusión

La mutación de los modos de producción no solo contribuye a reordenar territorios, sino que modifica el estatus social de la población y trastorna las estructuras en torno a las cuales se constituyó como sujeto colectivo. No será fruto de una decisión personal el hecho de que la ascensión de la clase obrera haya sido frenada por la desindustrialización en Detroit; como tampoco habrá sido una estrategia planeada por el campesinado hondureño que la reconcentración latifundista bloqueara su desarrollo como fuerza económica emergente. Eso también nos interroga sobre los impactos que tiene el hecho de pasar de una categoría socialmente definida (y reivindicada) a un estatus (asignado) de víctima individual de las transformaciones del sistema.

Pese a las diferencias entre ambos procesos organizativos, resalta que, tanto en el Aguán como en Detroit, el Estado fue un facilitador y ejecutante activo de las políticas de privatización. A través del nombramiento de un administrador financiero en Detroit y de la militarización en el Aguán, fue posible vencer las resistencias e imponer la gestión privada de los recursos (en el Aguán) y de los servicios públicos (en Detroit). Mirando la historia extensa, el esquema para lograrlo también presenta similitudes. Empezó con un desmantelamiento paulatino de las organizaciones sociales concientizadas (campesinas en el Aguán, industriales en Detroit), siguió con un proceso de abandono (de las empresas campesinas en el Aguán, de las casas y la administración pública en Detroit) para iniciar reestructuraciones profundas en provecho de actores privados (concentración de tierras en el Aguán para culturas de agroexportación; en Detroit apropiación y cercamiento por fundaciones privadas de áreas verdes y parcelas utilizadas por los pobladores). En estos procesos, que trastocan el ámbito territorial y social, destaca el papel desempeñado por los nuevos sectores de actividad comercial vinculados a la llamada economía verde. Lejos

de corresponder al simpático perfil con el que se suele presentar a los defensores del ambiente y, por ende, del planeta, el *green business* presenta, tanto en Detroit como en el Aguán, un rostro predador y geófago. En el segundo caso, en particular, las empresas revelan su orientación meramente comercial al lograr presentar los monocultivos de palma como fuente de energía limpia y obtener además financiamientos para la producción de bonos de carbono (como lo ilustra el caso de Exportadora del Atlántico).

Si bien el punto de partida de este estudio fue la importancia otorgada por los protagonistas al tema de la seguridad alimentaria, al final el discurso no resultó concordante con lo observado; es decir, no se logró establecer que la seguridad alimentaria fuese efectivamente el motor principal de las dinámicas sociales observadas tanto en Detroit como en el Bajo Aguán. Ciertamente, no es habitual concluir una investigación reconociendo la imposibilidad de validar la hipótesis inicial; sin embargo, se asume aquí el riesgo inherente a la labor de investigación —desprendido de las lógicas de expertos que se fijan un rumbo para seguir a cualquier costo—, el de no encontrar lo que se buscaba inicialmente, sino “otra cosa”. Desde esta perspectiva, lo que se debe interrogar y despertar nuevos cuestionamientos es, en primer lugar, por qué en ambos casos estudiados los actores enarbolan la bandera de la seguridad alimentaria para avanzar su lucha en otro terreno: el ámbito mucho más amplio del reconocimiento de los derechos y el afán de recobrar el control colectivo (como categoría social marginada) de sus medios de existencia.

Desprendiéndose de lo anterior, otro aspecto notable —y que parece ser el más aleccionador— es el conjunto de razones por las cuales las reivindicaciones acerca de la seguridad alimentaria resultan problemáticas para los grupos sociales estudiados.

La primera (y más importante) tiene que ver con lo que simbólicamente han significado los cambios de estatus experimentados por muchos de los actores, y que determinan un eventual desfase entre la categoría social de la cual provienen históricamente (pequeños *farmers*/campesinos de ladera), la categoría a la cual han sido asignados posteriormente (obreros industriales/campesinos incorporados a un proyecto agroindustrial) y finalmente aquella categoría a la cual aspiran (una cierta autonomía tanto individual como colectiva),

pero que a la vez les ha sido también impuesta por un cambio relativamente brutal de coyuntura (privatizaciones y gestión neoliberal de la tierra y los recursos). El periodo y el contexto —correspondientes a una cierta visión del desarrollo económico (industrialización, ventajas económicas, subvenciones, relativa protección del Estado)— fueron percibidos por los actores como el origen de las condiciones de posibilidad para vivir mejor. En cambio, resulta mucho más difícil vislumbrar las condiciones para mantenerse a flote en el contexto socioeconómico adverso que prevalece en la actualidad. De ahí el cruel dilema de regresar a una condición anterior a la que generó la percepción de ascensión social. La encrucijada en la cual se encuentran los actores no solo tiene matices económicos, sino también simbólicos. Por un lado, luchan contra la privatización y la confiscación de sus medios de existencia y de los servicios que ellos mismos contribuyeron a construir en tiempos anteriores. En este sentido, reivindicar la seguridad alimentaria no es forzosamente sinónimo de progreso, sino una demanda mínima; casi una medida paliativa ante la defeción del Estado, toda vez que a nivel local no hay señales de querer orientar las políticas públicas hacia una (re)valorización de la producción campesina. En efecto, tanto en Detroit como en el Bajo Aguán las bonanzas económicas vinculadas a los nuevos negocios verdes (sean las plantaciones urbanas, las de palma o el reciclaje de biomasa) están siendo canalizadas hacia grandes grupos y no hacia los campesinos del Aguán ni hacia los exobreros y todavía pobladores de Detroit. Pero, por otro lado, estos entienden que en la promoción de la seguridad alimentaria subyace una dimensión política vinculada con la obtención de derechos. Por eso, la discusión en torno a los “derechos” resulta fundamental para situar en qué terreno y a qué nivel se desarrolla la discusión entre fuerzas sociales e instituciones, así como para medir su grado de intensidad, que puede oscilar entre el conflicto abierto o la negociación, y la búsqueda de consenso, porque resulta que hablar de *derecho a la alimentación* no suena igual que clamar por el acceso a la tierra o el control de los circuitos de producción y distribución, aunque luchar por ellos pueda *in fine* ser percibido por los actores sociales como una condición previa, si no obligada, para alcanzar tal derecho.

De ahí surge otra interrogante: ¿en qué medida el hecho de situar su lucha en el ámbito de los derechos humanos no obedece, por parte de los movimientos sociales, a una estrategia, más o menos asumida, de alcanzar visibilidad y legitimidad ante las instituciones en un contexto donde la protesta social (con enfoque clasista) está siendo vilipendiada —cuando no criminalizada—, o en todo caso, considerada como expresión de tiempos remotos? La investigadora Monica White (2010) señala que para las comunidades afroamericanas de Detroit (86% de la población), invocar el acceso a la alimentación sana como derecho humano tiene por objetivo mejorar la capacidad de acción de los individuos, pero a la vez, el hecho de que el concepto sea definido desde el exterior, o sea, normado por las instituciones, reduce la capacidad de acción que estos mismos derechos suponen proteger (White 2010). Eso nos lleva a plantear la hipótesis de que uno de los efectos colaterales del desplazamiento de las demandas sociales hacia el terreno del reconocimiento (institucional) de derechos ha sido el de despolitizar y, con eso, restarle protagonismo a los actores sociales en las decisiones que les afectan. En este sentido, apoderarse de la noción de *seguridad alimentaria* sirve a una estrategia de alianzas con organizaciones —incluso con sectores institucionales— oportunista (en un sentido de habilidad política, no peyorativo), en la medida en que permite visibilizar “otras” injusticias, no solo económicas sino también históricas, incluso aquellas que antaño los arrancaron, a ellos o sus antepasados, de su condición campesina.

“El modo de producción organiza —produce— al mismo tiempo que ciertas relaciones sociales, su espacio y su tiempo”, nos recuerda Henri Lefebvre (1974). Los experimentos que se quieren llevar a cabo distan mucho de las aspiraciones de los habitantes a decidir sobre el futuro del territorio que habitan. Quizás es en las visiones de futuro donde el paralelo entre Detroit y el Bajo Aguán hondureño se revela pertinente. En estos territorios previamente arrasados por una explotación intensiva se gestan sueños posindustriales de creación de enclaves de alta tecnología e intensa acumulación de capital. En Detroit se apuesta al modelo de *smart city* para renacer después del declive. En el Bajo Aguán, el municipio de Trujillo se perfila para albergar una ciudad

modelo⁴⁹ (o *charter city*). Esta propuesta, inicialmente ideada por el economista neoyorquino Paul Romer, se inspiró en ciudades como Singapur o Shenzhen (China), pretende erigir *ex nihilo* ciudades tuteladas por una potencia extranjera (occidental) y cuya competitividad y excelencia serían garantizadas por leyes y reglas propias (en el ámbito laboral y comercial). Entre las tareas pendientes, quizás tendría sentido cuestionar el alcance simbólico de los territorios escogidos para ensayar el capitalismo del futuro: sobre las ruinas de Detroit, emblema de un otrora triunfante emporio industrial, y cerca del cabo Gracias a Dios, donde Cristóbal Colón pisó por primera vez el continente americano. La desindustrialización de Detroit y la industrialización del Aguán aparecen entonces como las dos caras de una misma moneda, como metáforas de la forma predadora con la cual el giro neoliberal no vacila en sacrificar el viejo capitalismo industrial para perpetuarse y extenderse a otros ámbitos, haciendo coincidir la mercantilización de la naturaleza con un extractivismo desenfrenado.

Referencias bibliográficas

- Cerna, M. 2014. "Honduras, con 1.2 millones de migrantes en el mundo". *El Heraldo* (Honduras), 7 de abril de 2014. <https://www.elheraldo.hn/hondurenosenelmundo/617067-299/honduras-con-12-millones-de-migrantes-en-el-mundo>.
- Confavreux, J. 2014. "Quelle nouvelle condition urbaine ? Lecture pour les futurs maires". *Mediapart*, 28 de marzo de 2014. Consultado el 25 de mayo 2016. <https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/280314/quelle-nouvelle-condition-urbaine-lectures-pour-les-futurs-maires?onglet=full>.

⁴⁹ Un llamado "corredor agrícola" conectaría a la ciudad modelo de Trujillo con la ciudad modelo actualmente en proyecto en Amapala (valle), situada en el sureño golfo de Fonseca, compartido por Honduras, El Salvador y Nicaragua.

- Distribución de la Tierra en Honduras (blog). 2013. “Legalización de las tierras en Honduras”, 1.º de diciembre de 2013. selenia14.blogspot.com.
- Irías, G. 2011. “El MUCA margen derecha y la lucha campesina por la tierra en el Bajo Aguán”. Consultado el 5 de junio 2016. <https://cespad.org.hn/2011/09/21/el-muca-margen-derecha-y-la-lucha-campesina-por-la-tierra-en-el-bajo-aguan/>.
- Lefebvre, H. 1974. *La production de l'espace*. París: Anthropos.
- Macías Martínez, M. A. 2001. *La capital de la Contrarreforma agraria, el Bajo Aguán de Honduras*. Tegucigalpa: Guaymuras.
- Movimiento Campesino del Aguán. 2009. “Historia del Movimiento Campesino del Aguán”. *Movimiento Campesino del Aguán*. Consultado el 4 de junio de 2016. <http://movimientocampesinodelaguan.blogspot.com/2009/01/antecedentes-del-movimiento-campesino.html>.
- Paddeu, F. 2015. “De la crise urbaine à la réappropriation du territoire. Mobilisations civiques pour la justice environnementale et alimentaire dans les quartiers défavorisés de Detroit et du Bronx à New York”. Tesis de doctorado. Universidad de la Sorbona.
- Ríos, G. 2014. “Capitalismo: tierra y poder en Honduras”. En *Capitalismo: tierra y poder en América Latina (1982-2012)*, vol. III de *Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua*, 147-179. México: Clacso; Universidad Autónoma Metropolitana; Ediciones Continente.
- Roux, H. 2010. “Contrarreforma agraria en Nicaragua, instrumento para la reconquista del poder. 1990-2010”. Tesis de doctorado en Sociología. Universidad París 1.
- _____. 2011. “Au Honduras, les magnats de la palme prospèrent, les paysans comptent leurs morts”. *Fonds documentaire dynamique sur la gouvernance des ressources naturelles de la planète*. AGTER. Consultado el 5 de junio de 2016. http://www.agter.asso.fr/article567_fr.html.
- Steinbeck, J. 1936 (2007). *Los vagabundos de la cosecha*. Barcelona: Libros del Asteroide.
- Sugrue, T. 1996. *The Origins of the Urban Crisis: Race and Inequality in Postwar Detroit*. Princeton: Princeton University Press.

- Trucchi, G. 2010. "Honduras-Movimiento Campesino del Aguán: una historia que merece ser contada". Consultado el 2 de junio 2016. <http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2010/07/honduras-movimiento-campesino-del-aguan.html>.
- White, M. 2010. "Shouldering Responsibility for the Delivery of Human Rights: A Case Study of the D-Town Farmers of Detroit". *Race/Ethnicity: Multicultural Global Contexts* 3 (2): 189-212.

Acerca de los autores

ANGELA CARO-BORRERO

Maestra y doctora en Ciencias con énfasis en Limnología, egresada del posgrado en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), bióloga egresada de la Facultad de Ciencias. Su línea de investigación actual está vinculada con la evaluación de la calidad ecológica y su validación a través de bioindicadores acuáticos, y la provisión histórica de servicios ecosistémicos hídricos. Cuenta con una sólida formación académica en el estudio de ríos y el manejo de cuencas, en especial zonas periurbanas con fuerte influencia antropogénica, desde una perspectiva interdisciplinaria que incluye aspectos biológicos, sociales y económicos. Sus logros académicos están relacionados con la evaluación del pago de servicios ecosistémicos hídricos y la aplicación de políticas públicas encaminadas a la conservación de ambientes acuáticos.

ANJA NYGREN

Profesora de Estudios de Desarrollo y profesora afiliada en el Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Helsinki (Finlandia); además, es directora del programa de doctorado Cambios Políticos, Sociales y Regionales en la misma institución, donde también obtuvo el doctorado en Antropología Cultural. Tiene amplia experiencia en la investigación empírica

en Costa Rica, Nicaragua, Honduras y México. Sus líneas de trabajo se enfocan en ecología política; gobernanza urbana, agua y sociedad; riesgos y vulnerabilidades; justicia ambiental, desastres y desplazamientos; socio-naturaleza, y certificación de café y cacao. Ha publicado artículos en varias revistas científicas internacionales, por ejemplo, *Journal of Latin American Studies*; *Journal of Urban and Regional Research*; *Geoforum*; *Development and Change*; *Journal of Peasant Studies*; *World Development*; *Society & Natural Resources*; *Agriculture and Human Values*; *Journal of Hydrology*; *Environmental Policy & Planning*, y *Environmental Values*. Es miembro del comité editorial de las revistas *Society & Natural Resources* y *Environmental Values*. De igual forma, es miembro de la Academia de Maestros de Mérito de la Universidad de Helsinki y ha recibido varios premios relacionados con la enseñanza y supervisión de alta calidad.

ANNE CRISTINA DE LA VEGA-LEINERT

Obtuvo la licenciatura en Geografía en el Instituto de Geografía Alpina (Francia), la maestría en la University College Dublin (Irlanda) y es doctora en Geomorfología Costera Cuaternaria por la Universidad de Coventry (Inglaterra). Desde 1999 ha trabajado como investigadora docente en el Flood Hazard Research Centre (Inglaterra), el Postdam Institute for Climate Impact Research (Alemania) y desde 2008 en el Instituto de Geografía y Geología de la Universidad de Greifswald (Alemania). Es miembro de la Red de Estudios Sociales sobre el Medio Ambiente (Resma), del Grupo Alemán de Investigación sobre Latinoamérica (Adlaf) y de la Asociación de investigadores independientes México vía Berlin. Sus investigaciones, publicadas ampliamente, abarcan temas de vulnerabilidad y adaptación a los impactos del cambio climático, manejo y conservación de recursos naturales y de la biodiversidad, sinergias y conflictos entre desarrollo local y conservación, cambios en el uso del suelo, los sistemas productivos y la seguridad alimentaria. Actualmente, lidera un proyecto de investigación financiado por la Fundación Alemana de Investigación donde aborda las implicaciones socioecológicas de la integración de comunidades campesinas e indígenas a cadenas comerciales en mercados convencionales,

sustentables y de comercio justo en regiones de frontera agrícola en el sur-este boliviano y el sur de México.

ANTOINE LIBERT AMICO

Graduado conjuntamente en Antropología y Estudios de Desarrollo Internacional en la Universidad McGill (Canadá), es maestro en Ciencias de Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma Chapingo y doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco. Es investigador con más de quince años de experiencia en proyectos interdisciplinarios sobre desarrollo rural, cambio climático, territorio y organización comunitaria. Ha participado en una serie de iniciativas de investigación colaborativa, desde el Programa de Desarrollo Humano en Chiapas (UAM) hasta proyectos a escala internacional por parte del Centro para la Investigación Forestal Internacional (Cifor). Tras obtener su doctorado en Desarrollo Rural a finales de 2017, realiza estudios posdoctorales como investigador del Programa Mexicano del Carbono, una red temática del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

BEATRIZ RODRÍGUEZ-LABAJOS

Es investigadora en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB). Actualmente es becaria Marie Curie en la Universidad de California en Berkeley (2018-2020). Se ha desempeñado como profesora en universidades de Barcelona y México. Su formación es de economista, y obtuvo la maestría en Economía Ecológica y Manejo Ambiental, así como el doctorado en Ciencias Ambientales en la UAB. Sus líneas de investigación son las dimensiones socioeconómicas de la biodiversidad, la justicia ambiental y la evaluación de servicios del ecosistema. Su campo de experiencia incluye regiones de Europa, Latinoamérica y el Sudeste de Asia. Sus publicaciones se enfocan en la conservación de la biodiversidad, conflictos ambientales, manejo hídrico y agroecosistemas. Colaboró con la Agencia Catalana del Agua como coordinadora del proyecto Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade.

CLAUDIO GARIBAY OROZCO

Investigador titular en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Realizó estudios de licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM; de maestría en Antropología Social en El Colegio de Michoacán y de doctorado en Ciencias Sociales en el Centro de Investigaciones Superiores en Antropología Social (Ciesas). Se especializa en estudios de sociedades campesinas en México. Actualmente, analiza procesos de desposesión territorial e instauración de regímenes de coerción de corporaciones mineras sobre sociedades rurales.

FERNANDA FIGUEROA

Profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es bióloga por parte de la misma facultad y realizó estudios de maestría y doctorado en el posgrado en Ciencias Biológicas, así como una estancia posdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ha trabajado sobre causas de deforestación en diferentes regiones de México y sobre los procesos sociopolíticos ligados a la conservación de la biodiversidad, a partir de las perspectivas de la geografía ambiental y la ecología política. Cuenta con varios artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, así como un libro coeditado y varios capítulos publicados en libros a nivel nacional. Ha impartido cursos desde 2002 en la licenciatura en Biología y en los posgrados de Ciencias Biológicas, Ciencias de la Sostenibilidad y Antropología en la UNAM. Ha colaborado y coordinado diversos proyectos de investigación para instituciones gubernamentales y asociaciones civiles.

GERT VAN HECKEN

Profesor de Cooperación Internacional y Desarrollo en el Instituto de Políticas del Desarrollo de la Universidad de Amberes (Bélgica). Cuenta con doctorado en Estudios de Desarrollo, maestría en Ciencias Ambientales y

maestría en Ingeniería Empresarial por la misma universidad. Su investigación se enfoca en los vínculos entre la gobernanza ambiental y el desarrollo a diferentes niveles; específicamente, se enfoca en las dinámicas sociopolíticas locales causadas por diferentes instrumentos ambientales globales, tales como los mercados de carbono y de biodiversidad o los pagos por servicios ambientales. Durante los últimos diez años ha vivido y trabajado en Nicaragua como investigador en el Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapan de la Universidad Centroamericana en Managua (Nicaragua), y como representante para la organización no gubernamental belga Broederlijk Denle.

HÉLÈNE ROUX

Socióloga egresada del Instituto de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Universidad de Paris 1 (Francia), es doctora asociada a la Unidad Mixta de Investigación “Desarrollo y sociedades”. Graduada en Fotografía en la Escuela Superior Profesional “Lette Verein” en Alemania. Actualmente desarrolla proyectos de investigación propios y colabora con el proyecto colectivo de investigación “Espacios globales para la acumulación de capital”, en el marco del grupo de trabajo “Fronteras, regionalización y globalización en América” del Clacso. Comprometida con la defensa de los derechos humanos, ha participado en varias misiones independientes de observación: en México, con la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos en 1998, 1999, 2001, 2006 y 2008; en Honduras, con el departamento de Olancho en 2003, durante la campaña electoral en 2013 y en el Bajo Aguán en 2016.

JOALINÉ PARDO NÚÑEZ

Licenciada en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Investigación en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha trabajado por más de diez años en organizaciones de la sociedad civil en temas de agricultura orgánica, comercio justo y política ambiental. Actualmente, forma parte del Laboratorio de Prospección Tecnológica para el Desarrollo Innovador de Alimentos, como catedrática Conacyt asignada al Centro de Investigación y Asistencia en

Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, donde analiza la pertinencia de desarrollos tecnológicos y biotecnológicos sobre las formas productivas y organizativas de productores de pequeña escala en el sur-sureste de México, así como la viabilidad de los mercados orgánicos y alternativos como opción económica y política para la sociedad.

JOHAN BASTIAENSEN

Es profesor de Estudios de Desarrollo en el Instituto de Políticas del Desarrollo (IOB) de la Universidad de Amberes (Bélgica). Obtuvo su doctorado en Ciencias Económicas Aplicadas en 1991 con un estudio sobre el papel de los campesinos en el desarrollo económico de Nicaragua. Su investigación se enfoca en procesos de cambio institucional territorial en el marco del desarrollo rural, específicamente en su relación con el papel de las microfinanzas agrícolas y verdes, los pagos por servicios ambientales, el acceso a la tierra y las cadenas de valor. Ha colaborado por más de treinta años en enseñanza, investigación y divulgación con el Instituto Nitlapan de la Universidad Centroamericana en Nicaragua. En el IOB imparte cursos sobre métodos de investigación, reducción de la pobreza, microfinanzas y acceso a la tierra. También es profesor de Microfinanzas para el Desarrollo Rural en la maestría europea de Microfinanzas de la Solvay Business School de la Universidad Libre de Bruselas.

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ TORRENT

Es licenciado en Filosofía y antropólogo titulado en la Universidad de Chile, posgraduado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como profesor titular e investigador en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso (Chile), en el Centro de Investigaciones en Vulnerabilidades e Informalidades Territoriales. Es investigador responsable y director científico de proyectos del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (Fondecyt). Ha sido presidente alterno del Grupo de Estudios de Antropología y Arqueología de Fondecyt; dictaminador de becas de formación de capital humano avanzado y evaluador

de indización de revistas para la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica; consultor para distintas empresas privadas y públicas; evaluador de proyectos y dictaminador de artículos de revistas de circulación nacional e internacional. También se ha desempeñado como profesor invitado en distintos centros académicos, ha participado con conferencias en congresos nacionales e internacionales en Europa, Asia y Latinoamérica; de igual forma, ha publicado diversos artículos en revistas de corriente principal y capítulos de libros especializados sobre antropología de la memoria y el territorio, ciudades y epistemología.

KARLA MELISSA GUZMÁN

Economista graduada de la Universidad de El Salvador, realizó estudios de posgrado en Costa Rica, en el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA). Durante ese periodo fue becaria del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, por sus siglas en alemán), obtuvo el título de *magister scientiae* en Política Económica con énfasis en Economía Internacional y recibió el reconocimiento como estudiante con el mejor promedio de la maestría en el año 2011. Desde 2013 se desempeña como catedrática de la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Ciencias Económicas, donde imparte las cátedras Economía Internacional, Macroeconomía, Microeconomía e Introducción a la Economía. Es asesora de trabajos de graduación en el pregrado en temas de la economía internacional. Ha participado como ponente en congresos internacionales. También ha publicado artículos en revistas académicas de la UNA y el Cinpe, el más reciente, “Papel y evolución de las instituciones en la dinámica económica salvadoreña 1979-2008: una mirada evolucionista e histórica”. Es miembro de la Red Latinoamericana de Investigadores en Cadenas Globales de Mercancías y de la Red de Exbecarios del DAAD para la Investigación en Centroamérica.

LAURA TEJADA

Obtuvo el grado de máster en Geografía por la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Berna (Suiza). Después de dos años de experiencia laboral en el sector privado, comenzó un doctorado en el Centre for Development and Environment (CDE) de la misma institución. Durante su trabajo como investigadora doctoral ha publicado diferentes artículos científicos en revistas como *The Journal of Peasant Studies* o *Global Environmental Change*, y ha sido investigadora invitada en el Institute of Social Studies en La Haya (Holanda). Tiene experiencia trabajando en proyectos de investigación y asesoría vinculados al desarrollo sostenible, y actualmente se dedica al monitoreo de la Agenda 2030 en Suiza. Se ha dedicado especialmente al análisis del cambio agrario, a la temática del acaparamiento de tierras y el acceso a recursos naturales, así como a la coexistencia del latifundio y del campesinado en Perú.

LETICIA DURAND

Doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizó estudios de licenciatura y maestría en Biología en la Facultad de Ciencias de la misma institución. Actualmente, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Ha desarrollado trabajos de investigación en Los Tuxtlas (Veracruz), en la sierra de Huautla (Morelos) y en la selva Lacandona (Chiapas), donde analiza las visiones locales del ambientalismo y las estrategias de conservación, principalmente en reservas de la biosfera, y la relación entre los diversos actores involucrados. Se ha interesado también por temas que giran en torno a la construcción social de la naturaleza, los discursos ambientales y la ecología política de la conservación. Actualmente, desarrolla un proyecto ligado a las vertientes poshumanistas de la ecología política y al análisis de la agencia en seres no-humanos. En la UNAM ha impartido diversos cursos en la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias, en la de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como en los posgrados en Ciencias Biológicas, en Antropología y en Ciencias de la Sostenibilidad.

MARA LINDTNER

Tiene una maestría internacional (Dinamarca, Francia y Nicaragua) en Desarrollo Agrícola Sostenible y Agronomía, y una licenciatura en Ciencias Ambientales (Austria y España). Su enfoque temático es la protección del medio ambiente y del clima, y el uso sostenible de los recursos naturales. Su experiencia laboral se enfoca en factores orientados a cambios de uso de suelo y posibles soluciones a través del uso sostenible del bosque, un marco legal adecuado y pagos por servicios ambientales. Desde septiembre de 2016 está trabajando en dos proyectos de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ, por sus siglas en alemán) en Bolivia.

PETER CLAUSING

Graduado como agrónomo en la Universidad de Leipzig (Alemania), donde obtuvo el grado de doctor en 1974. Cuenta con estudios de posgrado y es un toxicólogo certificado. Ocupó cargos en diferentes instituciones de investigación de la antigua Alemania Oriental. Trabajó en el Centro Nacional para la Investigación en Toxicología (Estados Unidos) durante el periodo 1994-1996, y posteriormente en la iniciativa privada. De manera paralela a su actividad profesional en dicha área, desarrolló un interés en el campo transversal de la biodiversidad, los derechos humanos y el suministro mundial de alimentos. Los resultados de su labor investigativa se han publicado y compilado en diversas publicaciones a nivel internacional.

PIERRE MERLET

Es investigador en el Instituto de Investigación y Desarrollo Ntlapan de la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua (Nicaragua), y está realizando un doctorado en el Instituto de Políticas del Desarrollo de la Universidad de Amberes (Bélgica). De igual forma, estudió Agronomía con especialización en Agricultura Comparada y Desarrollo Agrícola en el Instituto Nacional de Agronomía de París-Grignon (Francia), y obtuvo una maestría en Globalización y Desarrollo en el Instituto de Políticas del Desarrollo de la Universidad de Amberes (Bélgica). Sus temas de trabajo

conciernen al desarrollo rural, acceso a la tierra, gestión de recursos naturales y pagos por servicios ambientales. Es miembro activo de Agter, asociación internacional para mejorar la gobernanza de la tierra, el agua y los recursos naturales, y del comité científico de la revista *Encuentro* de la UCA.

SAILA-MARIA SAARISTO

Obtuvo su maestría y licenciatura en Antropología Social y Cultural en la Universidad de Helsinki (Finlandia). Su investigación de grado se centró en las políticas socioespaciales de dos favelas en Río de Janeiro, Brasil, así como en las acciones de sus asociaciones de residentes. Actualmente, realiza estudios de doctorado en el programa doctoral Political, Societal and Regional Change de la Universidad de Helsinki. Su proyecto analiza desalojos y políticas de reasentamiento en el área metropolitana de Lisboa, Portugal. Además de trabajos en investigación, se ha enfocado profesionalmente en programas de cooperación Norte-Sur y Sur-Sur en países como Tanzania, Mozambique, Brasil y Bolivia, coordinando y manejando proyectos en distintas áreas, como derechos humanos, igualdad de género, democracia, educación científica y participación para el desarrollo rural.

STEPHAN RIST

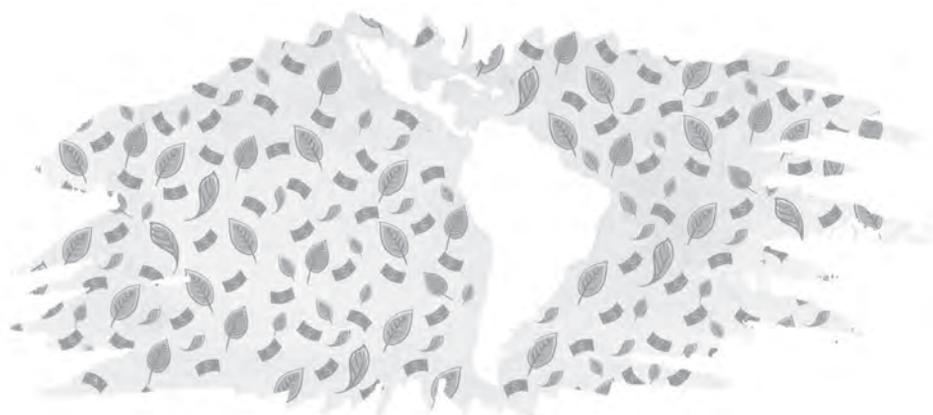
Es profesor de Geografía Humana en el Instituto de Geografía de la Universidad de Berna (Suiza). Como investigador, es parte del Centro para el Desarrollo y Medio Ambiente de la misma institución, donde encabeza el grupo de trabajo Gobernanza Sustentable de la Tierra y los Recursos Naturales. Después de obtener una maestría en Ciencias Agrarias por la Universidad Politécnica Federal de Zurich (Suiza), ha trabajado en el Instituto de Investigación para la Agricultura Orgánica en Suiza. También ha sido codirector del programa Agroecología Universidad de Cochabamba (Agruco) en Bolivia. Con base en su experiencia en Bolivia, ha desarrollado un doctorado en Sociología Rural en el Instituto de Sociología Rural de la Universidad Técnica de Múnich (Alemania).

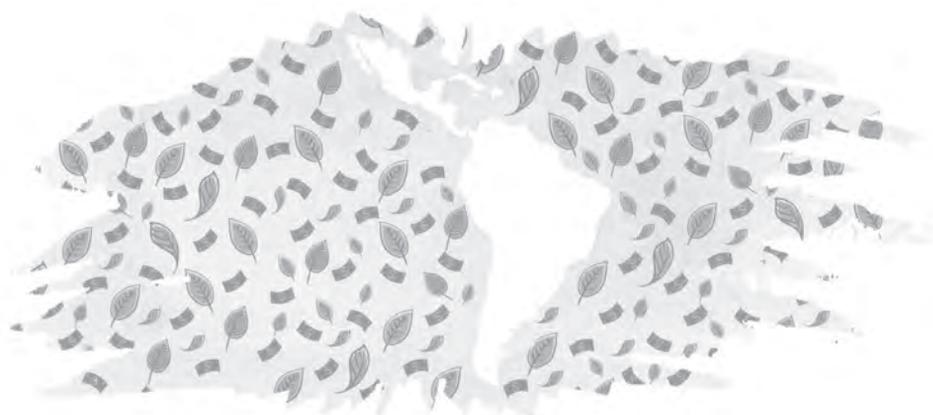
TIM TRENCH

Profesor-investigador en el posgrado en Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma Chapingo, en su sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, es historiador y antropólogo social de formación, con un doctorado por la Universidad de Manchester (Inglaterra). Cuenta con casi veinte años de trabajo de investigación en el sureste mexicano, sobre todo en la selva Lacandona de Chiapas, donde ha estudiado temas relacionados con política de la conservación, historia, conflicto agrario y gobernanza ambiental a diferentes niveles. Actualmente, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha participado como autor o coautor en más de veinte publicaciones académicas y ha coeditado dos libros colectivos. Entre 2014 y 2017 coordinó en México el proyecto de investigación “Gobernanza multinivel y gestión del carbono a nivel de paisaje”, que formó parte del estudio global comparativo sobre REDD+ del Centro para la Investigación Forestal Internacional (con sede en Bogor, Indonesia).

La primera edición de *Naturaleza y neoliberalismo en América Latina*, coordinada por Leticia Durand, Anja Nygren y Anne Cristina de la Vega-Leinert, editada por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, se terminó de imprimir el 20 de abril de 2020 en los talleres de Ultradigital Press, S. A. de C. V., Centeno 195, Colonia Valle del Sur, 09819, Iztapalapa, Ciudad de México. El tiraje consta de 200 ejemplares en papel Holmen de 55 g los interiores y en cartulina sulfatada de 14 puntos los forros; tipo de impresión: digital; encuadernación rústica, cosida y pegada. En la composición se utilizaron las familias tipográficas Arno Pro de 8, 9 y 12 pt y Myriad Pro de 10 y 12 pt. Corrección de originales y lectura de pruebas: Mario Alberto Islas Flores; lectura de pruebas finas: Perla Alicia Martín Laguerenne; diseño tipográfico, diagramación y formación: Irma G. González Béjar. El cuidado de la edición estuvo a cargo de Mario Alberto Islas Flores y el Departamento de Publicaciones del CRIM-UNAM.

✿ Esta obra fue impresa empleando criterios
amigables con el medio ambiente ✿







En los capítulos de esta obra se exploran los vínculos del modelo económico neoliberal con la transformación socioambiental, las racionalidades y las prácticas políticas de la gobernanza neoliberal en torno a asuntos ambientales, así como los conflictos y luchas sociales que surgen alrededor de los recursos naturales y la gobernanza ambiental. Los trabajos que conforman el libro son estudios de caso



realizados por especialistas de distintos países en sitios tan diversos como el sureste de México, la Patagonia chilena, la ciudad de Río de Janeiro o las zonas rurales de El Salvador, Nicaragua y Honduras. En conjunto, estos trabajos nos muestran cómo los procesos de neoliberalización de la naturaleza en América Latina son siempre incompletos, llenos de

contradicciones y producen el surgimiento de nuevos actores y roles inéditos para las personas, los espacios y los componentes del entorno biofísico; de tal suerte, generan dinámicas de resistencia pero también de cooperación e integración.

